

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento de Sociología I (Cambio Social)



TESIS DOCTORAL

La guerra contra el terror y la transformación de los umbrales de violencia tolerada: un estudio de la violencia en el País Vasco (1998-2010)

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Laura Fernández de Mosteyrín

Directora

María Luz Morán Calvo-Sotelo

Madrid, 2013

ISBN: 978-84-617-5203-4

© Laura Fernández de Mosteyrín, 2012

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Departamento de Sociología I (Cambio social)



*La guerra contra el terror y la transformación de los umbrales de violencia
tolerada: un estudio de la violencia en el País Vasco (1998-2010)*

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

Presentada por **Laura FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN**
Directora de tesis **Doctora María Luz MORÁN CALVO-SOTELO**
Madrid, 2012

*A mis hijos
A mis padres
A mi amor*

Agradecimientos

Es costumbre académica reconocer públicamente la ayuda recibida a lo largo del intenso proceso de realizar un trabajo de tesis. Y sólo a la hora de redactar este último ejercicio, que es, además, primer apartado, se comprende la importancia de mostrar agradecimiento con quienes de manera visible o, muchas otras veces de manera menos evidente, han sido cimientos para que este trabajo sea posible.

El trabajo que ahora presento ha sido el resultado de un largo y fascinante proceso de crecimiento personal e intelectual. Si el producto es un texto académico, no es menos cierto que también es una situación vital que no puede comprenderse sin atender al vínculo que este trabajo ha tenido con una particular transición a la vida adulta. Mi familia.

En el ámbito de la financiación y los recursos públicos, la elaboración de este proyecto no habría sido posible sin las ayudas a la investigación provenientes del VI Programa Marco de la UE (2004-2007), el Programa de Intercambio (EAP) de la UCM-Universidad de California (2007) y del Plan Nacional de I+D+I (2008-2011). Tampoco habría sido posible sin contar con la ayuda del personal de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UCM, entre quienes quiero destacar el apoyo incondicional de Camino Fernández, de Amparo Ballesteros y del personal laboral siempre dispuesto a facilitar mi trabajo. A todos ellos agradezco su tarea de hacer la vida más fácil al doctorando.

En el ámbito intelectual los agradecimientos se alargarían en exceso y sin embargo hay una pequeña lista de personas que tiene tanto mérito en este trabajo que no habría sido posible sin ninguno de ellos.

Así, no habría llegado a término sin la inapreciable ayuda de María Luz Morán, quien hace doce años, siendo yo estudiante de licenciatura, despertó en mí la vocación investigadora y con quien he tenido el honor y la suerte de formarme en largas horas de trabajo juntas. Siempre contó conmigo y me ofreció, con el ejemplo de trabajo, rigor y modestia intelectual, la esencia de la profesión académica y el modo de llevarla a cabo con sensibilidad y autenticidad. Un ejemplo que sólo algunas tenemos la fortuna de

encontrar en los inicios de la vida académica, y que se convierte en fuente permanente de inspiración. Maestra, amiga, referente intelectual y moral. Por todo ello, muchas gracias.

A mi amiga Marisa Revilla, quien me introdujo, a través de sus magníficas clases de la Facultad, en muchos de los temas de trabajo que me han ocupado todos estos años. Por su confianza en mi trabajo, su apoyo incondicional y su amistad. Gracias, Marisa, por abrirme el camino y caminarlo conmigo.

A Makis Medina, mi amiga y compañera de investigación PEACE COM. Por su alegría y su energía. Siempre al otro lado de la pantalla y del océano ofreciendo su cariño y su estímulo.

A mis compañeros de doctorado y en particular a Alberto Martín y a Ana Haro por su compañerismo, su entusiasmo en el trabajo en equipo y por todo lo que con ellos he aprendido.

A todos los compañeros del GESP. A los “senior” por su inestimable ayuda y orientación. También por transmitirnos a los jóvenes la ilusión y el anhelo de trabajar en la investigación social. En particular a Jorge Benedicto y a María Jesús Funes por contar conmigo en sus proyectos y enriquecerme con sus experiencias. A José Manuel Robles y a Emilio Luque cuyos inspiradores comentarios metodológicos allanaron el camino de este trabajo y avivaron mi vocación investigadora. Y, finalmente, a Jordi Monferrer por creer en mis cualidades docentes y darme su apoyo incondicional y sus ánimos en la última parte de este proceso.

A los profesores de la Facultad de Políticas y Sociología de la UCM que a lo largo de mi trayectoria académica cimentaron mis capacidades intelectuales. Querría mencionar, entre muchos, a Javier Roiz, a Pedro Trinidad, a Paloma Román, a Esther del Campo a Enrique Gil Calvo y a Cristina Velázquez que siempre me animó a seguir adelante.

A los profesores del departamento de Sociología de la UCSD, Richard Biernacki, Ivan Evans y Carlos Waisman por ofrecerme lo mejor de la cultura académica norteamericana, nuevas perspectivas y otros horizontes.

Finalmente quiero agradecer la inestimable ayuda de Eduardo González Calleja, Imanol Zubero y, de nuevo, a María Jesús Funes y Enrique Gil Calvo, porque su orientación fue fundamental para arrancar el trabajo de campo de esta tesis.

No necesitaría decir que no podría haber abordado este trabajo sin los comentarios, correcciones, conversaciones y discusiones con todos los arriba mencionados. Es una

suerte que cualquier aspecto señalado representase siempre un estímulo más que una decepción.

En el ámbito más personal mis deudas comienzan con las amigas que me han ayudado en el trabajo de campo. Muy especialmente a Ana, que me acogió generosamente en mis numerosos viajes al País Vasco, haciendo gala de la hospitalidad que caracteriza a su pueblo. Y a Sofía, que me dirigió hacia algunas de las mejores entrevistas de esta tesis.

A mis amigas Laura y Macarena, compañeras politólogas, por su paciencia, su incondicionalidad y su amistad. A mi maestra y amiga Cristina, a Cristi, Iván, Paco, Marina, Coral, compañeras y compañeros de caño y de cañas, con quienes he compartido la ansiedad del final que nunca parecía llegar.

A Juan Lorient, por sus postales, por su cariño y por cuidar de Diego en sus viajes. Y a Olimpia porque sin ella no habríamos sobrevivido.

No habría podido acometer esta aventura sin mis hermanos Manolo, Teresa, Santiago, Patrick, Sol, Pablo y Patricia que me han cuidado, acompañado y soportado con apoyo incondicional y siempre, siempre, buen humor. Y, haciéndolo, han cuidado también de los míos por lo cual les estaré eternamente agradecida. Particularmente estoy en deuda con mis hermanos Santiago y Teresa y Pablo quienes han llevado a cabo el trabajo invisible y tedioso de edición final. No habría podido llegar hasta el final sin su energía y su paciencia.

A mis padres, Manolo y Sol, a quienes debo la mejor herencia: el gusto por el conocimiento, la curiosidad, el compromiso, la sensibilidad hacia lo que nos rodea y la ilusión por trabajar por la libertad y la justicia.

A mis otros padres, Mariángeles y Manolo a quienes debo mucha más ayuda y cariño del que nunca habría imaginado.

Finalmente a mis hijos Manuel y Diego, quienes creciendo entre ponencias y capítulos, han llevado la peor parte este proceso y, aún así, han llenado mi vida de fuerza y esperanza.

A Diego, mi amigo, mi referente, mi amor. Por compartir mis ausencias, participar de mis proyectos, hacerlos posibles y creer siempre en mí.

Por último, quiero señalar algo fundamental. Si bien esta tesis fue posible gracias a tantas personas (las que están y las que no cupieron en esta limitada lista de agradecimientos), no por obvio debo dejar de señalarlo: yo soy la única responsable del trabajo aquí presentado. No obstante, como todo estudio, ocupa un espacio y un tiempo. Espero que lo que aquí pueda ser una limitación signifique abrir nuevos horizontes.

PARTE I: EL OBJETO Y EL MÉTODO. HERRAMIENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS.

<u>Capítulo Primero. Un argumento.</u>	15
1.1 Definición de la investigación	16
1.1.1 Planteamiento del problema: delimitación del objeto de estudio y niveles de análisis	23
1.1.2 Objetivos y preguntas de investigación	25
1.2 Metodología	27
1.2.1 El estudio de caso como estrategia de indagación cualitativa: diseño y aplicación	27
1.2.2 Diseño metodológico: triangulación e investigación flexible	31
1.2.3 Sistematización y análisis de la información	34
<u>Capítulo Segundo. Conflicto político y violencia colectiva en el debate sociopolítico contemporáneo.</u>	41
2.1 Un recorrido por la sociología del conflicto: hacia el estudio de la violencia política	44
2.1.1 La tradición funcionalista y las teorías del comportamiento colectivo	45
2.1.2 La tradición marxista y las teorías de la lucha de clases	59
2.1.3 La perspectiva weberiana y la sociología histórica en el estudio del conflicto y la violencia	63
2.2 Marcos teóricos para el análisis de la violencia	67
2.2.1 La sociología de la acción colectiva	67
2.2.1.1 Organización, recursos y proceso político	69
2.2.1.2 Cultura: identidad, sentido y discurso	74
2.2.2 La sociología de la violencia	80
2.3 Repertorios, oportunidades y acontecimientos transformadores: La legitimidad de la violencia entre lo global y lo local	83
2.3.1 La violencia política: entre la acción y el contexto	84
2.3.2 Del “análisis de los episodios políticos” al “análisis de los acontecimientos transformadores”	89

PARTE II. LA GUERRA CONTRA EL TERROR ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL (1998-2010).

<u>Capítulo Tercero. Conflicto político y violencia en el País Vasco.</u>	103
3.1 Notas sobre el conflicto vasco en perspectiva histórica	106
3.2 Las estrategias de los viejos y nuevos actores	113
3.2.1 Estado y gobiernos: políticas de seguridad y estrategias frente al terrorismo	113
3.2.1.1 Dimensiones de la lucha antiterrorista	115
3.2.1.2 Etapas fundamentales en las estrategias y políticas antiterroristas del Estado	120
3.2.2 ETA y el MLNV: Movimiento, organización y estrategias	137

3.2.2.1 Orígenes y evolución en el franquismo: el camino hacia la legitimación de la violencia	138
3.2.2.2 “Nada ha cambiado”: la transición hacia la democracia y la guerra de desgaste	146
3.2.2.3 La ruptura de Argel, la crisis de Bidart y el muro de Berlín	151
3.2.3 La sociedad civil: estrategias en relación a la violencia	155
3.2.3.1 Las dos violencias: demandas pacifistas en Gesto por la Paz y Elkarri	157
3.2.3.2 La reacción contra ETA: las víctimas y el “espíritu de Ermua”	163
3.3 Recapitulando: umbrales de legitimación y deslegitimación de la violencia	167

Capítulo Cuarto. La emergencia de un nuevo contexto global: El 11 de Septiembre de 2001 y “la guerra contra el terror”.

4.1 “La guerra contra el terror” como retórica política: nuevas narrativas para nuevas (y viejas) violencias	174
4.1.1 El discurso de “la guerra contra el terror” en los Estados Unidos y la Unión Europea	179
4.2 “La guerra contra el terror” como expresión institucional: lo nuevo y lo viejo en las políticas de seguridad	185
4.2.1 El tratamiento del terrorismo en el marco de las Naciones Unidas y del derecho internacional	186
4.2.2 El tratamiento del terrorismo en la dinámica europea	194
4.2.3 Medidas antiterroristas de la Unión Europea: aceleración del proceso	199
4.2.4 El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y la Estrategia Europea de Seguridad	201
4.3 Recapitulando: deslegitimación, relegitimación y “spill over”	205

PARTE III. ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO GLOBAL.

Capítulo Quinto. La política antiterrorista en el contexto de “la guerra contra el terror”.

5.1 Dimensión cultural: Justificaciones y consensos	213
5.1.1 Nuevas líneas de consenso en la lucha antiterrorista	216
5.2 Dimensión institucional	224
5.2.1 Transformaciones legales: la vía penal como instrumento de la política antiterrorista	224
5.2.2 Transformaciones en la configuración de la seguridad interior	235
5.2.3 Cooperación Internacional	244
5.3 Efectos de las transformaciones en las estrategias contra ETA	247
5.4 Recapitulando: Reconfiguración global de oportunidades para la violencia en condiciones de <i>guerra contra el terror</i>	251

<u>Capítulo Sexto. Percepciones sobre la violencia en el contexto de “la guerra contra el terror”.</u>	255
6.1 Percepciones de la violencia en la perspectiva independentista	259
6.1.1 Definición del conflicto: Conflicto político, reivindicación histórica	259
6.1.2 La dimensión internacional: entre la libre determinación de los pueblos y la resolución de conflictos	261
6.1.3 El diagnóstico de la violencia: el camino hacia la ausencia de violencias	265
6.1.3.1 El diagnóstico de la violencia desde la perspectiva de la izquierda abertzale oficial (Batasuna)	265
6.1.3.2 El diagnóstico de la violencia desde la perspectiva del independentismo parlamentario (Aralar)	273
6.1.3.3 El diagnóstico de la violencia desde la perspectiva del nacionalismo moderado (PNV)	284
6.1.4 Pronóstico de la violencia: “no aporta y molesta en Europa”	290
6.2 Percepciones de la violencia en la perspectiva constitucionalista	290
6.2.1 Definición del problema: Conflicto vs. Terrorismo	291
6.2.2 La dimensión internacional y “el bien colateral”	293
6.2.3 Diagnóstico de la violencia: “Todo es ETA”	301
6.3 Recapitulando: Umbrales de violencia tolerada en un contexto <i>glocal</i>	316
<u>Capítulo Séptimo. El 11-M: un acontecimiento transformador</u>	321
7.1 Los trenes de Atocha en el universo de las violencias vascas	326
7.2 Efecto sobre el MLNV: un hito en la transformación de la legitimidad y la efectividad de la violencia	341
<u>Capítulo Octavo. Reconfiguración de actores y estrategias (1998-2010)</u>	345
8.1 ETA y el MLNV sin horizonte político: entre la actividad, la tregua y el aislamiento	347
8.2 Movilización del Constitucionalismo y las víctimas: No negociación en mi nombre	354
8.3 Los movimientos por la paz: entre la invisibilización y la mediación	358
8.4 Recapitulando: El camino hacia el final de la violencia	365
<u>Conclusiones</u>	369
9.1 La violencia política bajo el signo de “la guerra contra el terror”	370
9.2 Cuestiones teóricas y metodológicas vinculadas al análisis de la legitimidad de la violencia política	378
9.3 ¿Para qué sirven los casos? Notas para una agenda de investigación sociopolítica	382
<u>Bibliografía</u>	391
Anexo I. Datos Sociopolíticos	429
Anexo II. Trabajo de campo	443

PARTE I: EL OBJETO Y MÉTODO
HERRAMIENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

CAPÍTULO 1
UN ARGUMENTO

"Para que los sentimientos colectivos que protege el derecho penal de un pueblo (...) consigan penetrar en las conciencias que les estaban hasta entonces cerradas (...) es preciso que adquieran una intensidad superior a la que tenían hasta entonces. Es necesario que la comunidad en su conjunto los experimente con mayor fuerza; porque no pueden encontrar en otra fuente el máximo vigor que les permita imponerse a los individuos (...)"
(Emile Durkheim, 2001: 115).

UN ARGUMENTO.

¿Contribuyeron los atentados del 11S en Nueva York al fin de la violencia de ETA en 2011?

Esta investigación pretende juzgar, adoptando una perspectiva innovadora sobre las evidencias, en qué medida la respuesta a esta pregunta ha sido “sí”.

El objetivo de este trabajo es mostrar que, en el proceso de deslegitimación interna y externa de la violencia de ETA en el periodo 1998-2010, ha tenido lugar, entre otros factores, una transformación estructural e ideológica que ocurre en el contexto global y resuena en el ámbito de lo local, produciendo un cierre de oportunidades para la violencia como medio de expresión de demandas políticas por parte de actores no estatales. Bajo este argumento se esconde el mecanismo sobre el que se asienta esta investigación: la transformación de lo legítimo y aceptable del uso de la violencia.

Este estudio examina, por lo tanto, los orígenes globales y locales de un proceso de deslegitimación de la violencia terrorista, la institucionalización de políticas de “tolerancia cero” con dicha violencia en el ámbito internacional y la resonancia de ambos procesos en el caso de la violencia de ETA, generando todo ello una dinámica *glocal*. El terreno de análisis es muy amplio y sin embargo, el foco empírico es mucho más preciso: describe la transformación de la violencia de ETA, a la luz de un nuevo contexto *glocal*, *el contexto de la guerra contra el terror*, para arrojar luz sobre la transformación de umbrales de violencia tolerada.

El 30 de Diciembre de 2006, la organización armada ETA voló parte de la recién estrenada Terminal 4 del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, causando la muerte de dos inmigrantes ecuatorianos y enormes daños materiales. Este episodio puso fin al así llamado “cese permanente de la violencia”, declarado por dicha organización nueve meses antes, y con ello al incipiente proceso abierto para la pacificación del conflicto vasco. En términos de destrucción material, este evento excedió considerablemente los niveles previamente obtenidos. En cuanto al número de víctimas producidas, merece la pena considerar el hecho de que ninguna de ellas podría considerarse “objetivo selectivo” ni eran ciudadanos españoles. En relación al impacto mediático, el acto de la que en ese momento era considerada internacionalmente “organización terrorista” fue ampliamente cubierto por la prensa internacional y extensamente rechazada por las instituciones internacionales. Por otro lado, tal y como ha venido siendo habitual en el contexto de este conflicto desde la década de los noventa, el esfuerzo cívico por rechazar públicamente la violencia, incluso en un ambiente político ciertamente dividido, pudo contrastarse a través del gran número de manifestaciones y reuniones simbólicas contra quienes emplean la violencia, que tuvieron lugar en los días inmediatamente posteriores.

Esta acción reactivó una de las políticas antiterroristas más eficaces, sofisticadas y socialmente respaldadas desde la transición española, poniendo contra las cuerdas a una organización ya bastante disminuida. Finalmente, impulsó un fuerte debate interno en el MLNV (mov) en torno a la efectividad/legitimidad de la violencia, que conduciría en 2010 al documento Zutik Euskal Herria, que planteaba la superación de la estrategia armada.

1.1 Definición de la investigación

Al hacer la narración de este episodio he tratado de señalar al menos tres aspectos que parecen reflejar un conjunto de transformaciones que, aun siendo sumamente complejas, no pueden dejar de pasarse por alto en cualquier análisis sociológico del conflicto y de la violencia política contemporáneos. En primer lugar, el hecho de que las organizaciones que emplean la violencia tratan de adaptar sus medios de acción (calculando sus posibilidades de éxito) a contextos que son cambiantes. Si la muerte de los dos ciudadanos ecuatorianos fue prevista o no, no podemos saberlo. Sin embargo, podemos especular con la idea de que tanto los niveles de destrucción como el

posible impacto mediático de este evento lo fueron. Y este cálculo podría comprenderse mejor considerando el hecho de que, en términos de uso de la violencia, ETA es una organización que a lo largo de la última década ha dejado de actuar en condiciones de exclusividad. Muy al contrario, esta organización no sólo no es la única que ha operado en España sino que compite con organizaciones globales que, a través de sus acciones, han redefinido las “armas y campos de batalla” (Münkler, 2005), constriñendo así el cálculo de cualquier organización que pretenda emplear la violencia al menos en el contexto de las democracias occidentales.

En segundo lugar, he querido señalar el hecho de que, cuando hablamos de violencia política “doméstica”, ya no podemos evitar referirnos al contexto internacional y global pues, tanto en términos de su forma como de sus consecuencias, el impacto de lo global es perceptible. Entre otros factores, los esfuerzos de las organizaciones internacionales y los Estados en el fomento de la cooperación antiterrorista deben ser considerados en nuestro análisis de este episodio concreto.

En tercer lugar, he señalado el amplio rechazo de la violencia en el marco del espacio público, que ha cristalizado como una dimensión central del conflicto vasco en los últimos quince años. Este rechazo muestra algunos rasgos que pueden ser comprendidos atendiendo a un proceso de difusión de ideas y repertorios de acción en virtud del cual, la pérdida de legitimidad del uso de la violencia en el marco de la política, y la saturación del umbral de tolerancia a la misma, conducen a múltiples organizaciones sociales a oponerse activamente a su uso, por la vía de la movilización.

A modo de justificación de este capítulo, habría que comenzar señalando que la violencia es una característica sobresaliente de las sociedades avanzadas contemporáneas. Si consideramos la violencia que tiene lugar en el marco de un conflicto dado, en las últimas décadas han florecido diversos tipos de violencia que han sido considerados “nuevos” (Kaldor, 2001; Münkler, 2005), y cuya gestión supone un auténtico reto para las sociedades democráticas.

Los llamados “terrorismos globales”, “nuevas guerras” y otros fenómenos vinculados se han convertido en una cuestión de interés significativo tanto a nivel social como en lo que respecta a la agenda política en los últimos quince años, pero es especialmente visible tras los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 el 11M en Madrid o el 7J en Londres. Estos episodios inauguraron una década de enorme preocupación social y política por la seguridad, la amenaza terrorista y un proceso de sofisticación de las legislaciones y estrategias para hacer frente a dichas violencias.

La forma y la intensidad de estas “nuevas” formas de violencia en el escenario global, la fuerza retórica (Shudson, 1989) lograda por la categorías de *terrorismo* o *antiterrorismo* o la importancia de su gestión en tanto amenaza y problema que afecta a las sociedades evidencian algunos cambios, que son de interés para el análisis sociopolítico. Surge así un nuevo contexto ideológico y cultural en el que tiene lugar la violencia (Norris *et al*, 2003); o en otras palabras, es posible que el uso de la violencia sea comprendido por públicos, audiencias, actores o expertos de modo distinto en el contexto que llamaré de *guerra contra el terror* de lo que lo era en décadas anteriores. Por otro lado, encontramos junto con estos fenómenos, la persistencia de “viejas” formas de violencia que requieren también atención, especialmente en una coyuntura histórica en la que se observa el impacto sobre procesos locales de fenómenos que se entienden como globales.

Esta investigación parte de la premisa de que, dentro de las dinámicas de transformación social global, la emergencia de nuevas formas de violencia política genera formas también nuevas de enmarcarla, de definirla y de abordarla. En esta doble dinámica, que trasciende el ámbito internacional, afectando a los contextos de muchos Estados, parece alterarse también el umbral de lo que es legítimo o aceptable, para la opinión pública y para un amplio conjunto de actores políticos, como medio de acción. Se trata de un proceso relevante desde el punto de vista sociopolítico en tanto que parece modificar el contexto en el que ocurren “viejos” conflictos que afectan a democracias consolidadas, como es el caso del conflicto nacionalista en el País Vasco y la persistencia de la violencia de ETA.

La investigación que presento apuesta por adoptar un punto de vista global sobre un fenómeno particular y ampliamente entendido como “local”: el conflicto sociopolítico en el País Vasco en el periodo (1998-2010). Una realidad histórica de violencia política que, sin embargo, presenta en la última década características que la hacen susceptible de ser analizada atendiendo a procesos globales. La difusión internacional de la preocupación por la seguridad (tanto a nivel gubernamental como social), la adopción de estrategias institucionales de “tolerancia 0” con la violencia, el fortalecimiento de la cooperación multilateral a nivel policial y judicial, no sólo en el ámbito europeo sino también en el marco de las relaciones transatlánticas, o los altos niveles de rechazo social a la violencia observados en las democracias occidentales en la última década son elementos que también se observan en el caso vasco.

Este capítulo pretende situar la investigación en su contexto. Es decir, establecer claramente el objeto de indagación, sus objetivos y el modo en que se ha conducido. Para ello he creído conveniente recuperar, en primer lugar, el recorrido intelectual que me condujo a la propia pregunta de investigación y subrayar el hecho de que el objeto de estudio fue adoptando su forma a partir de una primera investigación sobre el impacto del proceso de europeización en algunos conflictos existentes en el entorno europeo. Por ello, señalaré el modo en que los resultados de dicho trabajo determinaron, en buena medida, tanto la pregunta de investigación como la propia selección del caso.

En segundo lugar, trataré de justificar el interés del trabajo, sintetizar los objetivos y las hipótesis principales, y establecer de modo claro cuáles son las dimensiones o variables fundamentales del mismo. Hacer estas dimensiones operativas y analizables desde un punto de vista sociopolítico requirió establecer claramente dos niveles de análisis e indicadores o aspectos que permitirían observar y comprobar las hipótesis.

Finalmente se detallará la metodología empleada, el recurso a una estrategia cualitativa basada en el análisis en profundidad de un solo caso, sus potencialidades y limitaciones, así como el propio diseño de la investigación y del trabajo de campo. Además, se abordará el modo en que se ha sistematizado y analizado la información y el argumento principal que ha guiado la propia narración.

A modo de justificación y antes de entrar a detallar más el proyecto, me gustaría subrayar al menos tres razones fundamentales por las cuáles he considerado fundamental abordar el análisis de este objeto de estudio: Ante todo, y desde el punto de vista académico, a pesar de los avances del análisis de la violencia política dentro de los estudios de acción colectiva, y recientemente de los estudios sobre terrorismo, la violencia en el marco de la política continúa siendo un terreno escasamente trabajado, sobre todo en España. La necesidad de recuperar para el análisis sociopolítico los análisis de conflictos “con mayúsculas” -es decir, de todas aquellas situaciones de disputa sobre la distribución de poder que entrañando complejas dinámicas sociales se han convertido en procesos de largo recorrido en contextos concretos- debe ser subrayada, en la medida en que éstos no sólo están presentes y se perpetúan en muchos países de nuestro entorno con distinta forma, sino que son susceptibles de emerger o transformarse en el marco de las dinámicas de cambio global.

Por otro lado, el carácter innovador de la perspectiva que propongo puede contribuir a avanzar en los marcos de análisis para la acción colectiva en general y la

violencia en particular. Las dinámicas de cambio global a las que me he referido generan condiciones para la transformación de discursos, de demandas, de medios y estrategias de acción así como de los propios marcos institucionales en los que dichos conflictos tienen lugar. Por esta razón, observar un “viejo” proceso a la luz de dinámicas globales es relevante en la medida en que permite superar un enfoque que ha sido excesivamente “estatocéntrico”.

En último lugar, la persistencia de la violencia en democracias consolidadas constituye un desafío tanto para estudio de la violencia como para la propia vida política de las mismas. La cuestión del terrorismo es un problema de gran interés para la opinión pública y de enorme importancia en las agendas políticas nacionales como internacionales. Por esta razón y porque, según los enfoques políticos del conflicto, ningún proceso de conflicto está exento de devenir en situaciones de violencia en contextos concretos, es interesante abordar el análisis de dichas condiciones.

Hacer una genealogía de esta pregunta de investigación requiere recuperar en esta sección el proyecto PEACE COM (2004-2007) sobre el impacto del proceso de europeización en un amplio abanico de conflictos comunitarios en el marco europeo¹. Este proyecto cubrió el estudio comparado de viejos y nuevos escenarios de conflicto en el marco europeo, algunos de los cuáles implicaban largas trayectorias de violencia. Los resultados de dicha investigación revelaron algunos aspectos de interés por lo que respecta al uso de la violencia, a la vez que dejaron al descubierto dimensiones interesantes que invitaban a un análisis más pormenorizado. Fue a partir de esta constatación, como se llegaría a las principales preguntas del trabajo que tiene el lector en sus manos. De acuerdo con los resultados del proyecto PEACE COM² el repertorio

¹ “Peace processes in community conflicts: From understanding the roots of conflicts to conflicts resolutions”.

Sixth Framework Program EU: Priority 7 - "Citizens and Governance in a Knowledge based Society". (2004-2007). Contract n° CIT2-CT-2004-50637. [www. http://peacecom.spri.ucl.ac.be/](http://peacecom.spri.ucl.ac.be/). El principal objetivo del proyecto PEACE COM era analizar las causas, desarrollos y el impacto del proceso de europeización en algunos conflictos considerados *comunitarios* que tienen lugar en el entorno europeo y en los países que demandan la entrada a la UE. Una de las dimensiones centrales el proyecto implicaba el análisis en profundidad de los procesos de movilización en los mismos. La investigación cubrió el estudio de los siguientes casos: Ulster-Irlanda del Norte, País Vasco, Chipre, conflicto Valón-Flamenco en Bélgica, las minorías romaníes en centro Europa, las minorías eslovenas en Austria, La minoría rusa en Estonia, o los casos de Kosovo, Sandsak y Vojvodina en la antigua Yugoslavia.

² El equipo de la UCM (departamento de Sociología I) estuvo dirigido por María Luz Morán y compuesto por María Luisa Revilla, María Claudia Medina y por mí misma. Fue el equipo responsable de analizar los procesos de movilización en cada uno de los casos atendiendo a las estrategias de un amplio elenco de actores colectivos. Nuestro trabajo de campo se desarrolló principalmente a través de dos instrumentos metodológicos. En un primer nivel se realizó un extenso cuestionario a elites políticas de los principales casos a estudiar. Incluía una sección completa dedicada a abordar los medios de acción. Esta sección comprendía un total de tres preguntas relativas a la frecuencia, legitimidad y efectividad de un conjunto

prevalente de movilización, o las formas más visibles de reivindicación colectiva de demandas, evaluadas y puestas en práctica por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos implicados en el conflicto vasco, mostraron algunos aspectos que merece la pena comentar.

Para resumir, los aspectos que encontré de interés para este trabajo en la investigación PEACE COM, fueron los siguientes:

1) Los actores implicados seguían una estrategia altamente movilizadora dependiendo de las coyunturas y recurriendo a gran variedad de medios de acción que se consideran legítimos hasta un determinado umbral. Éste se superaba en el punto a partir de cuál una acción entrañaba riesgo de violencia (daño a la propiedad era considerado totalmente rechazable). Además, los procesos de movilización estaban directa o indirectamente relacionados con la violencia: ya en términos de reacción contra episodios de violencia, ya para la reivindicación de una estrategia antiterrorista más efectiva por parte del Estado.

2) Cualquiera que fuere la acción que se considerase ilegítima, aparecía también evaluada como no efectiva. Esto sugiere que es el significado mismo de la acción lo más relevante a la hora de evaluarla. Y, por lo tanto, habrá que tener en cuenta que la dimensión simbólica – lo que representa cada acción – es un elemento central, tanto para los actores, como para sus audiencias. De acuerdo con esta afirmación, recordemos que las “concentraciones silenciosas” se han revelado como uno de los tipos de acción más frecuentes del movimiento cívico de rechazo a la violencia, a través del cual han ganado el apoyo de parte de la sociedad vasca. Por no hablar del propio slogan “basta ya” o “manos blancas”, muy significativos a este respecto. Examinar el binomio legitimidad-efectividad conferida a la violencia reclamaba así un trabajo en mayor profundidad.

3) De acuerdo con los expertos y fuentes secundarias, parecía haber en la organización ETA una tendencia a mayor frecuencia de violencia de baja intensidad y a una disminución de aquella que implicara bajas y destrucción material. Más allá de los factores internos a la organización, la razón principal que se apuntó fue el aumento de la

propuesto de acciones. Los entrevistados, todos ellos representantes de instituciones, organizaciones políticas y sociales contestaron sobre: peticiones, manifestaciones, marchas, huelgas, huelgas de hambre, actos y campañas de desobediencia civil, pintadas y daños a la propiedad. En un segundo nivel del trabajo de campo, se diseñó un cuestionario destinado a expertos en cada conflicto que abordaba, de nuevo, temas relativos a medios de acción y a las dimensiones políticas, sociales, culturales e internacionales de los mismos.

cooperación policial y de los mecanismos para la represión de la violencia (el aumento de la cooperación franco-española y la Ley Orgánica de Partidos 6/2002 pueden ilustrar esta idea). Esta constatación conducía a preguntarse por los umbrales de violencia social y políticamente tolerada; por las exigencias ciudadanas de mayores cotas de seguridad y *punitivismo* con la violencia y, por otro lado, por las respuestas del sistema a dichas demandas.

4) Tanto los expertos como la literatura refirieron la emergencia de movimientos pacifistas y de rechazo a la violencia como actores centrales del conflicto vasco en el periodo 1995-2005. Sus acciones deben ser comprendidas como signos de intolerancia pública a la violencia. Es más, de acuerdo con nuestra investigación, pudimos dar cuenta de procesos similares en los casos de Chipre e Irlanda del Norte a lo largo de los noventa. Esta circunstancia llevó a revalidar el “despertar” de la sociedad civil a lo largo de la pasada década como un proceso común a las sociedades occidentales. Ello permitía sostener la idea de la importancia de los procesos de difusión de ciertas ideas y repertorios para visibilizar demandas, y de los medios de naturaleza pacifista o de rechazo a la violencia en particular.

5) La última conclusión de interés que se pudo extraer para este trabajo tiene que ver con la dimensión internacional en el conflicto vasco. Al indagar en el posible impacto del proceso de europeización en la evolución del conflicto y específicamente de la violencia, surgieron dos tipos de discursos. En primer lugar, el más hegemónico es el discurso de la negación, en virtud del cual nada de lo que ocurre en el País Vasco tenía relación con factores internacionales. En concreto, la UE no debía tener ningún papel puesto que se trataba de un asunto doméstico y sujeto a lógicas absolutamente locales. Este fue el discurso más difundido entre la clase política y los partidos de ámbito parlamentario (con algunas excepciones entre sectores nacionalistas vascos), así como en las organizaciones cívico-constitucionalistas y las víctimas. Por otro lado, apareció un discurso optimista frente a la idea de la internacionalización (de la proyección hacia el exterior de los aspectos políticos del conflicto), e interesado en reclamar la implicación de determinadas instituciones internacionales como la UE o la ONU. Esta narrativa era bastante minoritaria y asociada a los sectores independentistas, algo que, por otro lado, ha formado parte de su estrategia tradicional.

6) Entre las opiniones de los expertos, sin embargo, la dimensión internacional era algo más visible y apuntaba, no tanto al proceso de europeización y al posible impacto que las políticas europeas o la propia intervención de la UE para el fin de la

violencia, como a la influencia de nuevas formas de violencia global materializadas en los episodios de 11S y 11M concretamente, sobre las posibilidades para la violencia de ETA. Asimismo señalaba a un proceso de cambio cultural y estructural que, se constataba, podía afectar a los universos políticos de los actores implicados, pero también a los propios procesos de movilización.

Estos aspectos indicaban algunas transformaciones respecto al uso y al grado de aceptabilidad de la violencia sobre los que convenía profundizar. Pero también un claro endurecimiento de la acción del Estado y finalmente, a una compleja presencia de la dimensión internacional (no muy visible para los actores, pero claramente presente en la visión de los expertos).

1.1.1 Planteamiento del problema: delimitación del objeto de estudio y niveles de análisis

De acuerdo con aquella primera indagación, fui definiendo algunas inquietudes intelectuales que tenían que ver, en primer lugar, con la persistencia de la violencia a pesar del rechazo masivo que encontraba en la esfera pública; en segundo lugar con la escasa presencia que para los actores implicados y los expertos consultados tenía el proceso de europeización (al menos planteado desde un punto de vista institucional); en tercer lugar, con el posible impacto de fenómenos novedosos desde el punto de vista global como las “nuevas” formas de violencia y conflicto y, sobre todo, con los efectos de la securitización del manejo de dichos conflictos.

En concreto se reveló la necesidad de profundizar en las siguientes cuestiones:

- La legitimidad de la violencia y su efectividad.
- El impacto de lógicas “globales” más allá del marco institucional.
- La relación entre fenómenos domésticos (locales) y dinámicas globales.
- Las relaciones entre viejas y nuevas violencias.
- La atención a las percepciones de los actores respecto a las dimensiones internacionales.

Para ello, llevé a cabo una amplia revisión de los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos que podrían permitir abordar estas cuestiones, y que ayudaron a lograr un mejor nivel de concreción sobre aquello que se quería investigar. A partir de este ejercicio, el objeto de esta investigación se centró en analizar las transformaciones en la legitimidad de la violencia en el marco de un viejo conflicto – el conflicto vasco- buscando el impacto o la influencia de lo que aparecía como un nuevo

contexto global, que se caracterizaba por una compleja dinámica de deslegitimación de la violencia no estatal, visible al menos en la configuración institucional de la seguridad y de las políticas antiterroristas después de 11S, pero también de la resonancia de un discurso *securitario* muy concreto.

Debido a la complejidad de esta relación y a las dificultades de convertir estas dimensiones en operativas, se definieron dos variables de una forma más concreta con el fin de poder trabajar con ellas a lo largo de la investigación, lo que me llevó a diferenciar entre:

- Violencia política y umbral de violencia tolerada:

Violencia política: definida como cualquier situación en la que la violencia, el uso o la amenaza de la misma, ocurre en relación con cualquier tipo de demanda vinculada a la distribución de poder.

Legitimidad de la violencia política: entendida como el grado de aceptabilidad social y política de que gozan determinadas prácticas que entrañan violencia en el contexto de un conflicto político.

Efectividad de la violencia política: concebida como la capacidad de un medio/estrategia de acción para lograr los objetivos que pretende.

- El contexto de la *guerra contra el terror*: entendido como el conjunto de prácticas y discursos sobre la violencia, el terrorismo y el antiterrorismo que se ha desarrollado en el marco internacional por la doble vía de la consolidación de un discurso hegemónico (dimensión ideológica) y de un conjunto de mecanismos y prácticas institucionales y jurídicas en el marco de las organizaciones internacionales.

Para hacer operativas estas variables, opté por la estrategia general de buscar instancias de deslegitimación de la violencia e instancias de re-legitimación de la violencia legítima del Estado en las que fueran visibles las dinámicas internacionales.

Si en el proyecto PEACE COM la dimensión internacional se había considerado como una variable exclusivamente institucional (mediación, políticas públicas, políticas de acomodación de conflictos, etc.), en este trabajo se veía la necesidad de construir dicha variable incluyendo la posibilidad de indagar en los aspectos narrativos e ideológicos que estos cambios podían comportar. Por ello, el contexto fue descrito a partir de una segunda dimensión: la ideológica. Así, el contexto de la *guerra contra el terror* aparecía como un contexto institucional e ideológico cuyas influencias podrían ser visibles en el marco del conflicto vasco.

Para poder abordar esta tarea se especificaron además dos niveles de análisis:

Un nivel macro, que examinaría la acción del Estado respecto a la violencia, fundamentalmente a través de las políticas antiterroristas. En el análisis del recorrido de dichas políticas se buscarían las relaciones del Estado con las organizaciones internacionales (la proyección hacia el exterior de dicha política) pero también la “recepción” que se hacía de las transformaciones internacionales-globales.

Un nivel meso-micro, que consideraría el nivel de los actores colectivos implicados en el conflicto vasco, atendiendo a sus estrategias respecto a la violencia, incluyendo las proyecciones internacionales y la “recepción” de lo global, pero también sus percepciones sobre la violencia en relación con el contexto.

También se definió una temporalidad específica que buscaba privilegiar un análisis histórico y diacrónico, pero que centrara el objeto en los años 1998-2010, periodo en el que la investigación exploratoria había mostrado transformaciones perceptibles vinculadas al contexto internacional. Respecto a la temporalidad, y por razones de naturaleza teórica y metodológica que discutiremos en el capítulo 2, se decidió privilegiar, además, episodios concretos que podía arrojar luz sobre la idea de umbrales de tolerancia. Así, el 11S y el 11M se convertirían a lo largo de la investigación en acontecimientos transformadores en el sentido conferido por Sewell (2006). Finalmente, habría que recordar que tanto la configuración de los niveles de análisis, como la delimitación temporal, han estado orientadas a la percepción de continuidades y cambios en el umbral de violencia socialmente tolerada.

1.1.2 Objetivos y preguntas de investigación

Planteado y justificado el fenómeno que se ha analizado señalaré que esta investigación ha estado orientada por determinadas preguntas que se han traducido en sus principales hipótesis así como en objetivos concretos.

El objetivo principal de este trabajo es indagar en un fenómeno complejo: la alteración de los umbrales de violencia política tolerada por la sociedad. Se analizarán las transformaciones en la legitimidad pública atribuida a la violencia política en el conflicto en el País Vasco en la última década, atendiendo a los mecanismos por los cuáles, un cambio en contexto global en el que ocurre la violencia *-el contexto de la guerra contra el terror-* contribuye a modificar aspectos centrales del contexto doméstico.

Dos son las preguntas medulares que han vertebrado la investigación:

-¿En qué medida los nuevos usos y discursos sobre la violencia política que aparecen en el contexto global (nuevos terrorismo, antiterrorismo, agenda de la seguridad), influyen o afectan a prácticas y percepciones sobre “viejas” violencias políticas en los contextos domésticos y, en concreto, en “viejos” procesos de conflicto político caracterizados por el recurso a la violencia?

-¿En qué medida la emergencia y consolidación de lo que denomino el contexto de la *guerra contra el terror* afecta o influye a la transformación de los umbrales de violencia tolerada en caso del conflicto político en el País Vasco en los últimos quince años?

Para lograr dar respuesta a estas complejas cuestiones, el trabajo ha estado centrado en el examen de tres conjuntos de cambios:

1) El papel del Estado en la represión de la violencia mediante cambios en las legislaciones y estrategias policiales y judiciales en el marco de la “lucha antiterrorista” en los últimos quince años.

2) Percepciones que los actores tienen sobre las posibilidades o limitaciones de la violencia a la luz del contexto internacional y, en concreto, ante determinados episodios.

3) Procesos de transformación en la configuración de los actores relevantes en el caso de estudio, de sus estrategias de acción y de sus enfoques sobre las perspectivas de la violencia.

En definitiva, se trató de enfatizar la dimensión de “oportunidad” que supone el contexto de la *guerra contra el terror* para el uso de la violencia. Por lo tanto, el trabajo no implica sólo analizar la represión de la violencia sino las propias evaluaciones que unos y otros actores hacen de dicho contexto.

Los resultados de analizar este caso en profundidad pretenden arrojar luz sobre algunos aspectos que son relevantes para el análisis sociopolítico del conflicto y la violencia:

- La clásica noción de “oportunidad política”, en buena medida superada por lógicas globales/locales pero que se ve también cuestionada por los procesos culturales e ideológicos implícitos que subyacen a la propia acción colectiva.

- Las relaciones entre lo global lo doméstico, argumentando el modo en que los actores buscan la proyección internacional de sus estrategias, pero tomando en consideración también la importancia de las dinámicas de “recepción”, difusión y contagio de cambios estructurales e ideológicos.

La hipótesis principal de esta investigación fue formulada de la siguiente manera:

En el contexto global de guerra contra el terror cabe esperar una pérdida de legitimidad de distintos grados de violencia como medio para avanzar objetivos políticos así como una mayor aprobación social del endurecimiento de las estrategias del Estado para manejar la violencia política. Este proceso, debe ser especialmente perceptible en aquellos contextos en los que existía una larga trayectoria de violencia.

Algunas de las dimensiones que se derivan de esta hipótesis y sobre las que se ha indagado son:

- El endurecimiento y sofisticación de la legislación y las estrategias antiterroristas en la última década junto con la proyección de dichas políticas hacia ámbitos internacionales, y la recepción de las transformaciones internacionales en el contexto de la política doméstica.

- La presencia de un discurso de deslegitimación moral de la violencia en determinados actores.

- La presencia de un discurso de deslegitimación de la violencia por falta de efectividad política en determinados actores.

- El papel transformador del 11S en los enfoques sobre el terrorismo y la violencia de organizaciones no estatales a escala internacional así como el papel transformador del 11M tanto en el ámbito europeo como en la propia dinámica del conflicto vasco.

En definitiva, se ha considerado el caso vasco desde el supuesto teórico de que el contexto de la *guerra contra el terror* (que entraña cambios institucionales y discursivos en relación con el terrorismo y el antiterrorismo) implica una transformación del umbral de violencia tolerada, y que ello podía ser perceptible a través de las estrategias de distintos actores y examinando el modo en que éstos evalúan la violencia y el contexto global.

1.2. Metodología

“Cuanto menos seguros están los investigadores de su respuestas, mejor será la investigación” (Howard S. Becker, 1992:6)

1.2.1. El estudio de caso como estrategia de indagación cualitativa: diseño y aplicación

En este punto, el lector habrá comprobado que esta investigación aborda un fenómeno complejo en un contexto específico. También habrá percibido que se analizará un único caso en profundidad. He optado por la estrategia del estudio de caso en la medida en que es ampliamente reconocido como método para la indagación de fenómenos complejos en su contexto. (Yin, 2003; Ragin, 1992; Coller, 2000). No obstante, así como el objeto de estudio de este trabajo no se logró definir fuera de los parámetros analíticos de la sociología del conflicto y la acción colectiva, la propia aproximación a dicho objeto no puede comprenderse fuera de ciertos referentes teóricos y epistemológicos.

La estrategia del estudio de caso, ya sea por la vía de la comparación histórica o contemporánea (Skocpol, 1985; Moore, 1973; Gurr, 1971; Della Porta, 1995; McAdam et al., 2005) o mediante la exploración de casos únicos (Weber, 1998; Durkheim, 2003; Goldhagen, 1997, Gorski, 2003; Burawoy, 1998), ha sido una de las metodologías más frecuentemente utilizadas en la sociología política, en la sociología histórica y, en concreto, en los análisis de la violencia política. Un estudio de caso es una estrategia de investigación cualitativa que implica la descripción y el análisis intensivo, detallado y holístico de un fenómeno (individuo, proceso, episodio, grupo, organización...) delimitado en el espacio y el tiempo; esto es, en un contexto (Hancock y Algozzine, 2006). Para ello, se centra empíricamente en un objeto o en una instancia singular de un fenómeno, en lugar de hacerlo en muchos ejemplos de éste, con el fin de lograr una elaboración rica y detallada del mismo (Snow y Tron, 2002).

He considerado que el umbral de violencia tolerada en el contexto del conflicto vasco es un fenómeno socialmente relevante, interesante y “nuevo” porque implica relaciones entre lo global y lo local, por lo que en esta investigación se establecerá como un ejemplo de transformación de legitimidad de la violencia sobre un viejo conflicto en el contexto posterior al 11S. El fin último es el de ilustrar una dimensión fundamental en el análisis de la violencia: la legitimidad social conferida a la violencia y el modo en que ésta está contextualmente determinada. Deseo insistir aquí en que al yuxtaponer una dimensión internacional sobre un fenómeno ampliamente estudiado desde lógicas locales, se propone una perspectiva innovadora. Al abordar el análisis del objeto a través de tres instancias de deslegitimación y relegitimación, se ha pretendido llevar a cabo una indagación en profundidad, detallada, multidimensional y holística del fenómeno. En cada una de estas instancias se buscan las relaciones posibles entre lo global y lo local.

Querría también resaltar que haber incorporado estos aspectos lo han convertido en un caso teóricamente relevante e ilustrativo de un proceso que es visible en otros muchos ejemplos (en la securitización de la inmigración o en los procesos de criminalización de la protestas altermundistas, entre otros). Sin embargo, dado que el caso elegido forma parte de un universo de “viejos” conflictos (aquellos que florecieron en la lógica del mundo bipolar), permite hallar trayectorias de cambio y continuidad en lo relativo a los procesos de legitimación y deslegitimación de la violencia.

Por ello, la selección de este caso en concreto se ha hecho atendiendo a la lógica de la sinécdoque, o de la consideración de la parte por el todo, tomando un ejemplo de transformación de umbral de tolerancia social a la violencia y no otro. Al decidir analizar este proceso en el contexto del conflicto vasco se ha afrontado un desafío, en primer lugar, respecto al tipo de conflicto: se trata de un contexto escasamente trabajado atendiendo a la dimensión internacional-global. En segundo lugar, se ha desafiado lo que Howard Becker llama la “jerarquía de credibilidad” (Becker, 1998): todas aquellas consideraciones que los expertos en el “caso vasco” hacen sobre las lógicas exclusivamente “locales” de dicho proceso³. En último lugar, se ha planteado un reto para el análisis de la persistencia o fracaso de la violencia en una de las últimas realidades de “viejas” violencias en la Europa de la UE.

En la construcción y ejecución del caso no se han buscado explicaciones causales sino que se ha tratado de comprender la “influencia relativa” (Becker, 1998) a través de la indagación no del “por qué” sino del “cómo”, o de qué manera un contexto variable es visible en el caso seleccionado (atendiendo, por tanto, a mecanismos y procesos más que a factores o variables). A la vez, se ha asumido que una de las limitaciones más reconocidas de esta estrategia tiene que ver con los aspectos relativos a la generalización⁴. Sin embargo, la capacidad de generalización a partir de una única instancia de análisis es contingente; más bien depende del tipo de estudio de caso que se haga.

Asumiendo que resolver los problemas vinculados a la causalidad y a la capacidad de generalización en la ciencias sociales es una tarea compleja y que excede

³ En este punto espero haber argumentado con éxito que al hablar de “caso” no me estoy refiriendo al “caso vasco” sino al caso de “transformación de umbral de violencia tolerada”, que podría ser analizado atendiendo a la delincuencia común, a la violencia de género o a securitización de la inmigración, como he dicho. Me parece importante aclarar que si bien el caso vasco es el contexto sociopolítico en el que se emprende la investigación, ésta no es una tesis sobre el conflicto vasco, sino más bien un trabajo de indagación sobre un único aspecto de ese proceso complejo que se llama conflicto vasco.

⁴ Sobre las limitaciones y potencialidades del estudio de casos véanse: Coller (2000); Ragin y Becker (1992); Abbott (1992); Flyvbjerg, (2004); Goldhagen (1997); Burawoy (1998).

los objetivos de este trabajo, esta investigación ha estado gobernada por cuatro argumentos metodológicos que considero otorgan el rigor necesario al fin que pretende lograr: en primer lugar, tratar de demostrar que se ha tenido en cuenta toda la evidencia empírica disponible; en segundo lugar, que se han considerado las explicaciones alternativas; en tercer lugar, que los aspectos más significativos del objeto a estudiar se han abordado, y finalmente, que se ha trabajado sobre la base de las aportaciones académicas previas (Yin, 2003).

En último término, este caso se ha desarrollado a partir de la teoría y con el fin de volver a la teoría. Se aborda la variable legitimidad de la violencia y su vinculación con contextos y episodios globales con el fin de discutir y refinar, pero en todo caso, ilustrar presupuestos de los enfoques sociopolíticos del conflicto contemporáneo. Por ello, se ha concebido como plataforma instrumental, en la medida en que debe servir para ilustrar una propuesta teórica.

La delimitación temporal y espacial del caso es un aspecto fundamental en la definición del objeto que se pretende estudiar a través de esta estrategia. En el momento de diseñar este trabajo, y a partir de la constatación de cierta visibilidad de los factores internacionales en el conflicto vasco, determiné limitar el trabajo al periodo 1998-2008. Muchos de los aspectos que se han considerado son perceptibles con anterioridad y, sin embargo, 1998 constituye un referente político del conflicto vasco. Aunque el trabajo se ha construido de manera diacrónica, se asienta en el análisis de acontecimientos que pudieran considerarse en alguna medida “transformadores” (Sewell, 2006).

A partir de las preguntas de investigación que se definieron al inicio de este capítulo, este caso se ha configurado como un supuesto de transformación en la legitimidad de la violencia para lo que se han examinado en profundidad las siguientes dimensiones en tanto “instancias” de deslegitimación y re-legitimación: 1) las estrategias y políticas antiterroristas, 2) las percepciones y evaluaciones de la violencia de los actores implicados en el conflicto, y la evaluación y percepciones sobre el 11M como acontecimiento global transformador. 3) la transformación de las estrategias de los actores en relación con sus evaluaciones y posicionamientos respecto a la violencia. La lógica que subyace en el examen ha sido descriptiva-analítica en la medida en que ha tratado de establecer una relación entre dos fenómenos o variables asumiendo siempre que, en este tipo de trabajos, cabe esperar un asentamiento débil de la causalidad (Coller, 2000).

Aun habiendo descrito la hipótesis de partida, siendo el caso a analizar tan complejo, consideré necesario que de alguna manera los conceptos y las hipótesis secundarias fueran definiéndose a partir de las constataciones empíricas del caso. Y no se trató tanto de decir “el conflicto vasco es un caso de” como de asumir que la realidad analizada en relación con las teorías y las herramientas conceptuales disponibles dirían de qué era el caso sin ser “tiranizado” por los conceptos. Ello me ha llevado a asumir la postura epistemológica de aceptar el carácter azaroso del proceso de investigación (Becker, 1998).

1.2.2. Diseño metodológico: triangulación e investigación flexible

Partir de una lógica de investigación que fuera flexible y abierta así como de la adaptación de la metodología a las exigencias y al desarrollo de la investigación, fue fundamental para ir integrando sin prejuicio técnicas interpretativas con fuentes cuantitativas. Por lo tanto, el razonamiento ha sido siempre el de la triangulación, la comprobación de evidencia a través de múltiples fuentes en función de las necesidades de la indagación (Taylor and Blee, 2002).

Se comenzó con un conjunto de preguntas amplias sobre el fenómeno, que se concretaron con el curso de la investigación. Ello justificó el recurso a distintos tipos de fuentes en función de las dimensiones y los niveles de análisis. Por otro lado, la apertura a los “descubrimientos inesperados” (lo que los anglosajones refieren como *serendipity*) ha estado presente a lo largo de la investigación⁵.

Una vez planteado con claridad el objeto de estudio y su “operacionalización”, la pregunta por el rastro que dejan estos fenómenos fue fundamental. Aunque las técnicas de recogida de datos han sido varias y se han aplicado en distintos momentos, las preguntas subyacentes fueron las mismas: ¿quién tiene esta información?, ¿dónde está?, ¿qué parte de esta información es necesaria?, ¿cómo se puede recoger?

Así, el cuerpo de evidencia de esta investigación proviene fundamentalmente, pero no exclusivamente, de la triangulación de datos cualitativos. Este proceso de confirmación a través de múltiples referencias, hizo que recurriera a al análisis histórico y a tres fuentes privilegiadas de evidencia empírica: la observación directa e indirecta

⁵ La propia definición bidimensional de la transformación de la legitimidad de la violencia, como “deslegitimación” de un tipo de violencia y “relegitimación” de otras formas de violencia, surge a partir de la flexibilidad con la que se han abordado los conceptos y la apertura a la lógica de lo inesperado.

(a través de la técnica de “webservation”⁶), el análisis de datos secundarios y la entrevista a los actores centrales de este proceso.

A continuación se detallan las fases y los métodos de recogida y sistematización de la información:

Fase I: Trabajo de campo exploratorio

2004-2007: La participación en el proyecto de investigación PEACE COM permitió una exploración del proceso político en el País Vasco en tanto conflicto político. En el marco de esta investigación, como hemos visto, se definieron buena parte de las hipótesis de este proyecto. La obtención de información relativa al impacto del proceso de europeización permitió abrir el campo de análisis.

Un cuestionario a expertos (élites de las organizaciones sociales y políticas), que yo misma realicé entre octubre de 2005 y febrero de 2006 entre Madrid y el País Vasco, evidenció las cuestiones expuestas al inicio del capítulo abriendo interesantes líneas de investigación en el marco de las dinámicas internacionales/globales para los conflictos domésticos. Asimismo, me permitió delimitar el marco temporal (1998-2010) y perfilar el interés de un trabajo en profundidad en el marco del conflicto vasco.

Fase II: Protocolo del estudio de caso

1) En el periodo 2007-2010 se llevó a cabo un proceso de recogida de datos a través de fuentes secundarias. Estas fuentes incluyeron archivos electrónicos de instituciones; literatura secundaria sobre el conflicto vasco; trabajos monográficos sobre cambios legislativos, judiciales y policiales en el contexto posterior al 11S; literatura “gris”; revisión de prensa escrita y online: seguimiento de los acontecimientos y debates vinculados a episodios concretos de violencia (nacional e internacional); y principales debates sobre la misma y sobre las estrategias para su manejo.

Los datos relativos a la evolución de la opinión pública se han recogido de manera diacrónica en aquellos de los estudios de opinión que eran relevantes para el objeto de estudio, con el fin de observar las tendencias de las opiniones respecto a los siguientes aspectos: 1) tolerancia/rechazo social al terrorismo 2) legitimidad/aprobación

⁶ Entendida como observación y seguimiento de fenómenos sociales a través de la red. El propio objeto de estudio y el contexto de la investigación han hecho de la red un “entorno privilegiado” de extracción de evidencia. Por poner un ejemplo, diré que una mirada rápida a cualquier página web de organismos nacionales e internacionales contiene alusiones al terrorismo, a la seguridad y a las estrategias para combatirlo (véase: UE, OSCE, Ministerio de Asuntos Exteriores, etc.)

de la política antiterrorista 3) grado de percepción y evaluación de seguridad/inseguridad vinculada al terrorismo (ETA e internacional) en el periodo analizado⁷.

2) En el periodo Marzo-Julio de 2010 se llevaron a cabo un total de 25 entrevistas semi-estructuradas con líderes de organizaciones sociales y políticas centrales en el proceso siguiendo el modelo *Key Actors interview* (Lofland y Lofland, 1995). Las entrevistas se desarrollaron en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Autónoma Vasca.

Se asumió que enfocar las entrevistas en términos de “informantes clave” y, a la vez, como la voz de los actores centrales del proceso era relevante en la medida en que los entrevistados eran fuentes privilegiadas de sentido. Se entrevistó a líderes de organizaciones, activistas e intelectuales, es decir, a los principales creadores de ideologías y marcos, en el sentido atribuido por Goffman (2006). No se buscaron, por tanto, las “micro-motivaciones” individuales (propias de los estudios de acción colectiva) sino más bien las evaluaciones de los “generadores de motivos”, de marcos y de justificaciones. Si de lo que se trataba era de encontrar las interpretaciones oficiales y las justificaciones hegemónicas en un contexto concreto, indagar a través de informantes clave que son, además, cabezas visibles de las principales organizaciones, resultaba fundamental⁸. Por otro lado, con estas entrevistas se buscó lograr la representatividad de las distintas sensibilidades políticas respecto del conflicto; escuchar las voces que son relevantes en el momento presente del conflicto, siempre en relación con la violencia⁹. Finalmente, durante los seis meses que duró el trabajo de campo se

⁷ Además de los trabajos académicos disponibles sobre violencia y opinión pública, las dos principales fuentes de datos de opinión de interés para este trabajo han sido el CIS y el Euskobarómetro. Con respecto al CIS; además de los estudios monográficos sobre seguridad ciudadana (1995/2200; 1998/2284; 1999/2315), sobre terrorismo y percepción de las víctimas (1987/1714; 1988/1729; 2001/2436), sobre los atentados del 11 de Septiembre de 2001; 2004/2565 y 1995/2133 sobre valoración de la justicia, se trabajaron un conjunto de barómetros que contienen información relativa a la lucha antiterrorista, la percepción del problema del terrorismo de ETA e internacional, los procesos de negociación y la modificación de la legislación de partidos y otras en el marco de la lucha antiterrorista: 1996/2220; 1996/2231; 1998/2303; 2000/2400; 2001/2433; 2002/2466; 2003/2477; 2003/ 2528; 2004/ 2570; 2005/ 2730; 2008/ 2754; 2009/ 2812. Con respecto al Euskobarómetro se ha recurrido a diferentes barómetros desde 1999 así como a las series temporales desde 1995 en adelante.

⁸ Este tipo de entrevista es frecuentemente utilizado para la comprensión interna de los movimientos sociales y en general de actores colectivo. Pero su éxito depende del papel de estos informantes en el proceso que se estudia, de la cantidad de información que pueden aportar y de su voluntad de comunicarla al entrevistador (Klandermans y Staggenborg, 2002).

⁹ Véase anexo II

elaboró un *cuaderno de campo* en el que se recogieron impresiones, narraciones y el análisis de la observación atenta de aspectos del proceso que se estudiaba.

Sobre la recogida de datos es importante hacer una última consideración acerca de los aspectos éticos de dicho proceso y de la información. Este extremo es siempre crucial cuando se emprende el uso de entrevistas y otras técnicas personales de recogida de datos. En la medida en que se indaga en las percepciones y observaciones personales, aparece la necesidad de dotar al entrevistado de un marco de confianza que no obstruya la comunicación. En el caso concreto del trabajo de campo en el ámbito del conflicto vasco esta cuestión era además fundamental, en la medida en que las expresiones personales públicas y privadas en relación con la violencia en este contexto pueden entrañar problemas de seguridad tanto para ciudadanos de “a pie”, cuanto más para los líderes de organizaciones sociales y políticas de reconocida visibilidad. Por esta razón se adoptó un protocolo de garantías para los entrevistados, cuyos principales puntos son:

a) Se pidió autorización a los entrevistados para la grabación y se facilitó que pudieran consultar el audio si así lo deseaban.

b) Todas las entrevistas fueron grabadas (excepto dos que por petición expresa de los entrevistados no lo fueron) y transcritas por mí misma e identificadas tanto en audio como en Word a través de un sistema numérico.

c) En los análisis, no se hace referencia a los nombres de los entrevistados pero sí, por necesidades del análisis a las organizaciones que representa.

1.2.3 Sistematización y análisis de la información

Con el fin de organizar la información y la producción y recogida de datos, se consideró pertinente, en primer lugar, elaborar una base de datos “del caso” (Yin, 2003). Así, además de construir una estrictamente bibliográfica con la literatura teórica y metodológica del campo de estudio que se aborda, se decidió generar un “contenedor” de evidencias del caso para la organización cualitativa de la información obtenida a través de fuentes secundarias que fue diseñado y gestionado con el software *Endonote*. Dicha base de datos contiene información del estudio de caso sobre la legitimidad de la violencia y la *guerra contra el terror*. Está constituida por un total de 415 piezas de evidencia del proceso que se ha analizado en este trabajo.

En esta base, se pueden encontrar diferentes tipos de documentos:

a) *Documentos del caso*: Documentos y trabajos académicos que evidencian nuevas formas de hablar de la violencia, nuevas iniciativas políticas, demandas sociales

de mayor punitivismo, etc... Este tipo de documentos se puede clasificar en las siguientes categorías: productos legislativos, protocolos de actuación, actas parlamentarias, resoluciones de organizaciones internacionales, conferencias y notas de prensa, resoluciones de condena, informes de think-tanks y literatura gris.

b) *Notas del caso*: son las notas escritas después de analizar cada documento o entrevista. Están almacenadas para facilitar su posterior utilización en otras investigaciones.

c) *Materiales tabulados*.: todos los cuadros de datos, resultados de otras investigaciones en tabla y demás material. Incluyen análisis electorales, de opinión pública y otros datos de carácter estructural.

d) *Narrativas*: pequeños trozos de análisis preliminar sobre respuestas a preguntas concretas de la investigación. En muchos casos, se trata de ejercicios de “escritura libre” o espontánea en la que se va de la teoría a las evidencias y que permitieron ir redefiniendo el proyecto.

Por su parte, la información obtenida a través de las entrevistas en profundidad se ha organizado, gestionado y analizado a través de un software diferente: el programa para tratamiento cualitativo de información *Atlas ti*. A través de esta base de datos, se pudo hacer una sistematización cualitativa y una depuración de la información verbal de las percepciones y evaluaciones de la violencia y de los factores internacionales. Ésta contiene las transcripciones de todas las entrevistas así como las notas de análisis redactadas en el curso de los seis meses de trabajo de campo a modo de *cuaderno de campo*. Por medio del programa, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

a) Se efectuó una revisión exhaustiva de las transcripciones a fin de determinar, comprobar o afinar información obtenida por fuentes secundarias.

b) Se procedió a organizar y reagrupar la información en virtud de las categorías y subcategorías definidas a través de las preguntas de investigación (i.e. efectividad, legitimidad, etc...), así como a dar cuenta de las cuestiones emergentes y de las invisibles o silenciadas.

Respecto a las garantías de validez de este trabajo de campo que ha supuesto la construcción de evidencia, éstas se han tratado de lograr por medio de:

1) El recurso a múltiples fuentes: los análisis académicos, los datos públicos, la voz de los actores y la voz de los expertos.

2) La creación de una base de datos: que cualquier investigador pudiera consultar estableciendo relaciones analíticas similares.

3) La cadena de evidencia: las conexiones explícitas entre las preguntas, los datos recogidos y las conclusiones en la narración.

A lo largo de todo el trabajo he mantenido la idea de permitir que un observador externo (el lector) fuera capaz de seguir la derivación de cualquier evidencia desde la pregunta de investigación hasta la conclusión final. La lógica que me ha guiado ha sido la de la investigación criminológica en virtud de la cual, el proceso debía estar tan ajustado que la evidencia presentada en el tribunal (en la narración /informe final) fuera, con toda seguridad, la misma que fue recogida en la “escena del crimen” (en el proceso de recogida de datos), buscando así la validez interna y externa de este trabajo.

Finalmente hay aquí un esfuerzo por narrar de manera analítica todo cuanto se ha podido averiguar a lo largo del periodo de investigación. El ser humano es un “animal contador de historias” (MacIntyre, 1984: 214) y es a través de la narración como se consolidará el resultado final de este trabajo. La exposición de los hallazgos consiste, aquí, en un proceso descriptivo que es parte de la lógica explicativa (Sewell, 2006). Un relato a través de la cual habrá que ir demostrando el argumento central de esta tesis: que los actores “miran” y evalúan el contexto internacional y aprovechan las oportunidades o se acomodan a las limitaciones que éste genera.

Sabemos que hay muchos factores que afectan al uso de la violencia, y a las percepciones sociopolíticas sobre la aceptabilidad y la efectividad de la misma. Sin embargo, una explicación histórica requiere comprobar en qué medida la dimensión internacional es uno de esos factores. El examen de distintas instancias de deslegitimación y relegitimación de la violencia atendiendo al contexto internacional será la lógica de la narración que ahora abordo. Atravesando cada uno de los argumentos que se analizan en este trabajo está la idea de que la aceptabilidad o legitimidad de la violencia, y las relaciones complejas que ésta tiene con su efectividad, se ha transformado en los últimos quince años en el marco de un proceso de globalización que ha entrañado cambios en su uso (la aparición de nuevas formas de violencia), pero también transformaciones en los modos de gestionarla desde los Estados y las organizaciones internacionales.

Una visión general de la investigación

La lógica de la organización del trabajo responde a la interconexión entre los contextos global y local y sus efectos sobre los marcos y medios de acción de un conjunto muy concreto de actores.

La primera parte del trabajo (capítulos primero y segundo) estará dedicada a exponer el problema de investigación, sobre el que se ha trabajado y cuya respuesta se desarrollará a lo largo de todo el texto. Además, esta primera parte presentará y reflexionará sobre las herramientas teórico-conceptuales para abordar el análisis de la legitimidad de la violencia desde el punto de vista sociopolítico.

En las partes segunda y tercera se construirá el estudio de caso a partir de dos contextos interrelacionados de una manera ciertamente compleja, mediante la cual podremos percibir, por un lado, la dinámica relación entre lo global y lo local y, por otro lado, un proceso de transformación en la legitimidad de la violencia. Un proceso que, siendo *glocal*, está además atravesado por acontecimientos transformadores.

Los capítulos tercero y cuarto servirán para exponer dos contextos muy concretos. Se presentarán los elementos fundamentales que han caracterizado desde un punto de vista sociopolítico el llamado “conflicto vasco”, examinando las dimensiones fundamentales para abordar los cambios en la legitimidad de la violencia política. Ello nos permitirá señalar instancias de deslegitimación y relegitimación de la violencia, visibles en los últimos quince años, y analizarlas a la luz de cambios globales. Se presentarán algunos factores históricos en relación con las demandas tradicionales del nacionalismo, los orígenes sociopolíticos de la violencia a mediados de los años sesenta, los principales actores que se han visto involucrados en el llamado conflicto vasco, las estrategias puestas en práctica por distintos actores así como las características fundamentales del proceso, en relación con la violencia, en el periodo (1998-2010).

Por otro lado, el capítulo cuarto mostrará el contexto de la *guerra contra el terror*, un artificio teórico construido en este trabajo para comprender cambios ideológicos e institucionales a nivel internacional y global en relación con la violencia y el terrorismo a partir del 11 de Septiembre de 2001. Cambios que se han revelado como el marco renovado en el que debe ser entendida la violencia.

En ambos contextos, que se relacionan según una lógica descendente (lo internacional tiene efectos en el ámbito de los Estados) y ascendente (la acción de los Estados y de los actores no estatales resuena en el ámbito de lo global), es visible un proceso de transformación en la legitimidad o aceptabilidad conferida a la violencia política. Y ambos contextos, entrelazados, como veremos, constituyen un marco de oportunidades: un ambiente, un escenario que posibilita determinadas estrategias, pero transforma en todo caso las posibilidades de la violencia. Se trata de una estructura de oportunidad (institucional y discursiva) que define los parámetros de lo posible para el

uso de la violencia por parte de las organizaciones terroristas, pero también para el uso de la violencia legítima del Estado.

Sin embargo, analizar el caso de la violencia política en el País Vasco a la luz del contexto de la *guerra contra el terror*, requiere establecer un conjunto de “indicadores”, de formas de comprobar no sólo la pérdida de legitimidad de la violencia, sino en qué medida es atribuible a elementos del contexto global.

Para ello, la parte tercera de esta tesis (capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo) estarán dedicados a la presentación y análisis de tres instancias de transformación en la legitimidad de la violencia.

En el capítulo quinto se expondrán cambios fundamentales en la seguridad Interior española y en las políticas antiterroristas en el periodo 1998-2010. Se trata sin duda de un ámbito en el que las transformaciones han sido numerosas y sustanciales y que, en todo caso, evidencian altos grados de intolerancia a la violencia de ETA y signos de incremento y sofisticación del poder punitivo del Estado. Por otro lado, la narración estará jalonada de apreciaciones sobre los ecos que muchos de estos cambios revelan sobre los cambios en el escenario global así como los esfuerzos realizados por el Estado (a través del gobierno principalmente pero también del poder judicial y de los cuerpos de seguridad) por aumentar, sofisticar y hacer más efectiva la cooperación internacional contra ETA, no sólo policial y judicial, sino también política. Finalmente este capítulo evidencia una estructura de oportunidad que siendo parte de la configuración global (señalada como *guerra contra el terror*) tiene elementos específicos que afectan y transforman las posibilidades de la violencia en el caso vasco.

Planteadas la estructura y los parámetros macrosociales de este análisis es fundamental atender a la acción social. Por ello los siguientes capítulos están diseñados para comprender en qué medida el complejo contexto señalado afecta o influye en las dinámicas internas de los actores. Su voz y sus estrategias constituyen pues el mecanismo que permite establecer que, en efecto, el contexto y el marco de oportunidades es evaluado, diagnosticado, entendido, rechazado o calculado por parte de los actores. Los actores, las organizaciones sociopolíticas que operan en el contexto del conflicto vasco, son portadores de universos simbólicos y generadores de estrategias de acción colectiva, de acciones encaminadas al logro de objetivos políticos. En el caso que analizamos- el caso de transformación en la legitimidad de la violencia-el logro de objetivos es la consecución del fin de la violencia y para ello se posicionan y actúan en interacción con ETA y con el Estado.

El capítulo sexto está dedicado a presentar y analizar las percepciones y evaluaciones que un amplio conjunto de actores hace en relación con la violencia, con su aceptabilidad, su efectividad y sus posibilidades futuras. Están atravesadas, entre otros muchos elementos, por la incorporación del contexto internacional a sus diagnósticos y pronósticos así como por reflexiones sobre los cambios acontecidos en dicho contexto.

Profundizando en el ámbito narrativo y de las representaciones, el capítulo séptimo, aborda el análisis de un acontecimiento concreto, el 11M, en relación con el universo de la violencia vasca. Analiza las observaciones y evaluaciones de los actores hechas sobre un acontecimiento “ajeno” al conflicto vasco y a la violencia de ETA y que, sin embargo, evidencia algunas percepciones significativas con respecto a la idea de “umbral”; de acontecimiento que en alguna medida marca un antes y un después.

El capítulo octavo desarrolla el análisis de las estrategias seguidas en los últimos quince años por un amplio conjunto de actores. Bajo el argumento de que tan importante es conocer los marcos, las percepciones o los diagnósticos de los actores como el examen de sus repertorios de acción, de la estrategia de acción que diseñan y el conjunto de medios a los que recurren, este capítulo pretende evidenciar en qué medida los actores, desde el Estado hasta las organizaciones de víctimas, se posicionan y actúan en interacción, a partir de un diagnóstico sobre lo legítimo o inaceptable del uso de la violencia.

Finalmente, el capítulo noveno reflexiona y argumenta sobre la validez metodológica de este trabajo y su aportación al análisis sociopolítico del conflicto. Para ello recuperará los elementos esenciales del análisis, examinará de forma crítica los hallazgos de este trabajo, los obstáculos que ha encontrado, así como, de una manera constructiva, la conversión de sus principales limitaciones en una agenda de indagación para los próximos años.

PARTE I: EL OBJETO Y EL MÉTODO
HERRAMIENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS.

CAPÍTULO 2
CONFLICTO POLÍTICO Y VIOLENCIA COLECTIVA EN EL DEBATE
SOCIOPOLITICO CONTEMPORÁNEO

La violencia que ocurre en el marco de la política, es decir, la violencia política, aquella que tiene que ver con cualquier tipo de disputa o conflicto sobre la distribución del poder, constituye un elemento sobresaliente de las dinámicas contemporáneas de transformación social global. Guerras civiles, conflictos étnicos e ideológicos que se tornan violentos, limpiezas étnicas, guerras preventivas, terrorismos y todo tipo de episodios en los que actores concretos emplean la violencia bajo consideraciones políticas ocurren permanentemente en nuestras sociedades. Uno de los elementos más significativos de este tipo de violencia es el hecho de que, aun cuando aparece en muy diversas regiones y contextos sociopolíticos, sigue produciéndose y afectando a sociedades extremadamente modernizadas. Incluso las regiones con niveles más altos de desarrollo sociopolítico experimentan nuevas erupciones de violencia o la persistencia de “viejas” trayectorias de la misma y, por lo tanto, ésta debe ser entendida como parte esencial de lo que denominamos “sociedades avanzadas”.

Asumiendo que la violencia es un hecho social universal, conviene señalar que el concepto de “violencia política” ha sido extensamente estudiado y debatido en la comunidad académica, incluyendo disciplinas como la sociología, la ciencia política, la historia, la filosofía e, incluso, la criminología. Debido a esta fragmentación teórica, las dificultades asociadas a su definición y a su clasificación constituyen el punto de partida de cualquier aproximación a la misma.

Dentro de los análisis contemporáneos de la violencia política, uno de los debates más comunes se ha centrado en su propia naturaleza racional y relacional. Sin embargo, no existe ninguna perspectiva integrada, ampliamente aceptada en la academia, capaz de dar cuenta de forma satisfactoria de los distintos niveles de análisis que comporta este fenómeno. Entre las teorías de la violencia, es difícil encontrar explicaciones que incorporen el nivel individual, el nivel societal o el nivel estatal; por

no hablar del plano internacional. Muy al contrario, cada paradigma enfatiza un nivel de análisis centrando su explicación en una concepción concreta de la violencia y destacando aspectos particulares, mientras se ignoran otros. En consecuencia, nos encontramos planteamientos y perspectivas parciales, fragmentadas en numerosas áreas e, incluso, definiciones contradictorias de lo que es la violencia política¹⁰.

Por esta razón, este trabajo trata de aproximarse a ella en sentido amplio, entendiendo por violencia política cualquier situación en la que la violencia¹¹, el uso o la amenaza de la misma, ocurre en relación con cualquier tipo de demanda vinculada a la distribución de poder. Así, ubicar la violencia en el espacio del poder y de las demandas es situarla en el centro de las relaciones entre la sociedad y la política, pero a la vez entenderla en el marco del conflicto social y político.

Abordar el análisis de la violencia en los términos sociopolíticos del conflicto es medular para una comprensión de la misma, en la medida en que el binomio conflicto y violencia han aparecido, tanto en la teoría como en la historia, estrechamente unidos. En toda situación de conflicto, la violencia está presente como realidad, como amenaza o como riesgo. Pero este campo tan extenso de lo social y lo político debe ser acotado teóricamente de modo que nos permita desarrollar el espacio conceptual en el que poder abordar el análisis de una realidad que, por otro lado, ha constituido uno de los problemas sociológicos más persistentes, tanto en la sociología clásica como en los debates contemporáneos.

Durante mucho tiempo, el análisis de la violencia política fue un hecho residual, debido en cierto modo a que, como veremos, gran parte de la investigación vinculada sobre todo al enfoque funcionalista, comprendía la violencia como el resultado de un comportamiento irracional, individual o colectivo, convirtiéndolo en un campo de análisis subsidiario. En todo caso, la sociología del conflicto y la sociología política son los campos que más han contribuido a avanzar en el análisis de la violencia y a consolidarla como categoría de análisis en las últimas décadas. La aparición de numerosos y muy fructíferos debates en el marco de los análisis de la acción colectiva y los estudios de movimientos sociales, así como las distintas propuestas del enfoque de la elección racional, son dos buenos ejemplos de la importancia adquirida por la investigación en esta materia. Esto ha favorecido que la protesta y la violencia hayan

¹⁰Zimmermann, 1983:6-9; J. Rule 1988:11-12; Tilly1978:176

¹¹ Una teorización de la violencia entendida como *nuda* violencia (interpersonal, social etc.), excede el objetivo y los límites de este trabajo. Para una extensa compilación crítica de distintos conceptos de violencia véase: González Calleja (2002a); Braud, (2006).

alcanzado su estatuto ontológico y su condición de fenómenos sociales “normales” en la segunda mitad del siglo XX. Más recientemente, la emergencia de nuevas formas de guerra, la creciente amenaza del terrorismo y otras formas de violencia organizada en las sociedades occidentales, explicaría un renovado interés por los estudios de violencia política. Gracias al reconocimiento de estos hechos, la investigación reciente tanto teórica como empírica subraya la diversidad de formas emergentes y consolidadas de violencia.

Todo lo señalado plantea una necesidad teórica: la de ubicar los conceptos de violencia política y de conflicto recuperando, adecuando y redefiniendo algunas de las categorías más difundidas, de modo que permitan abordar el análisis de un objeto particular.

Este capítulo tiene por objeto ofrecer una cartografía conceptual de la violencia política en el campo teórico de la sociología política y, en particular, de la sociología del conflicto. Para ello recorrerá la trayectoria histórico-sociológica de algunos conceptos fundamentales, con el fin de desarrollar una propuesta que se ajuste a los problemas de investigación, empíricos y metodológicos, señalados en el capítulo primero. Es decir, pretende presentar, reflexionar y adecuar las herramientas teóricas para pensar una realidad sociopolítica muy concreta: la transformación de la tolerancia y legitimidad de la violencia en el marco de lo político.

Para ello este capítulo se dividirá en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, se ubicará el análisis del conflicto y de la violencia en el centro de la sociología clásica y de sus grandes paradigmas del conocimiento. Se señalará el modo en que el conflicto social ha sido un tema central de la sociología y ha constituido una clara línea de fractura del pensamiento social. Se apuntará cómo la consolidación de la sociología clásica a través de los tres principales paradigmas (el funcionalismo, el marxismo y la perspectiva weberiana), abrió el terreno de distintos tipos de análisis del conflicto y la violencia, estableciendo las categorías, los conceptos y los límites teóricos del análisis de los fenómenos sociopolíticos.

En segundo lugar, se presentarán algunos marcos teóricos que se han consolidado en la sociología contemporánea para su análisis. Se expondrán sus posibilidades teóricas y discutirán sus limitaciones. Para ello se recuperará una de las corrientes de análisis que, en el marco de la sociología política, más ha contribuido a profundizar en el estudio de la violencia: la sociología de la acción colectiva que, a ambos lados del Atlántico, se ha convertido en verdadera fuente de teoría y método para

el análisis que nos interesa. A partir de ella se expondrán cuestiones teóricas específicas en relación con la violencia, tratando así de desentrañar lo que de útil a nuestros propósitos hay en cada una de las perspectivas. Finalmente, y a partir de lo anterior, se adoptará una postura teórica propia con la que poder abordar el objeto definido en el capítulo primero. Ello se hará a partir de la discusión de algunos conceptos centrales a los marcos teóricos de la acción colectiva como son el concepto de *repertorio* (Tilly, 1978), el concepto de *oportunidades* (McAdam et. al, 2005) y una teorización específica de la temporalidad para el análisis de la acción colectiva: el análisis de los acontecimientos (Sewell, 2006).

2.1 Un recorrido por la sociología del conflicto: hacia el estudio de la violencia política

El estudio del conflicto social ha estado en la base de la producción científica desde los orígenes del pensamiento y la investigación social. Si bien es cierto que éste ha tenido mayor o menor peso dependiendo de la perspectiva de análisis, el conflicto está presente en todo tipo de enfoques. Por esta razón merece la pena recuperar, aunque sea de forma breve, su lugar en el pensamiento sociológico señalando, en todo caso, las dificultades históricas que los tres grandes paradigmas han experimentado para incorporar el análisis del conflicto social, la excepcionalidad con la que se ha entendido el conflicto sociopolítico y, en concreto, el fenómeno de la violencia frente a las asunciones básicas de la normalidad civil (Morán, 2007).

Si tuviéramos que organizar de algún modo razonado la producción sociológica desde sus orígenes en los albores del siglo XIX en relación con el conflicto, podríamos plantear, con Nisbet (1990), que la estabilidad y el cambio, como principios rectores de la sociedad, han estado en la base de la formación del pensamiento sociológico, constituyendo una de sus principales líneas de fractura¹². Y habría también que señalar que, por otro lado, los conceptos de poder y autoridad, cuya reflexión es compartida por las distintas tradiciones de pensamiento, son, asimismo, medulares en la formación del pensamiento sociológico. Estos conceptos, fijados en los desarrollos teóricos de los clásicos a través de preguntas sobre las formas de autoridad que debían presidir

¹² No puede ser comprendida la génesis de la reflexión sobre lo social sin tomar en consideración el contexto político, ideológico y social, que es condición necesaria para su desarrollo. Un contexto revolucionario y de ruptura con el orden antiguo que determina las ideas y conceptos sobre los que fue edificado el pensamiento sociológico.

sociedades en las que los vínculos sociales habían sido súbitamente disueltos, sobre las fuentes sociales de la obediencia, sobre los modos de contrapesar la tiranía o sobre el *locus* del poder político, establecieron los parámetros de los grandes paradigmas de la sociología.

Además, estos conceptos constituyen ejes teóricos de un campo específico de la sociología: la sociología política (aquella que se pregunta por las relaciones entre la política y la sociedad), el ámbito donde puede ser reivindicado, como he señalado, el análisis de la violencia política.

2.1.1 La tradición funcionalista y las teorías del comportamiento colectivo

La pregunta por la violencia y, en particular por los comportamientos de masas en sí mismos, sólo fue objeto de análisis, dentro del paradigma funcionalista, desde finales del siglo XIX, y primer tercio del XX. Los múltiples episodios violentos acontecidos a lo largo de esta época (revoluciones, rebeliones, revueltas, huelgas, motines, etc.) unidos a la impresionante entrada en escena de los movimientos de masas totalitarios, dieron lugar a una serie de doctrinas que trataban de explicar los episodios de violencia colectiva como resultado del comportamiento irracional de las masas, predispuestas a la violencia, así como consecuencia del declive moral de una sociedad en proceso abrupto de cambio social. Así, Gustav Le Bon y Gabriele Tarde son los principales teóricos de la sociedad de masas y sus trabajos pueden ser adscritos al paradigma funcionalista en virtud de la clara influencia que tiene Durkheim su obra. Del mismo modo, constituyen una referencia fundamental para las posteriores teorías del comportamiento colectivo (Rule, 1988)¹³.

Los presupuestos fundamentales que alimentan las explicaciones irracionalistas planean sobre una doble visión de la sociedad, típicamente funcionalista: por un lado, la

¹³ Siguiendo a Rule, estos autores pueden ser incluidos dentro del paradigma funcionalista al compartir con Durkheim ciertos presupuestos básicos de partida. Su vinculación determinista entre el comportamiento individual y el sistema social (a quien correspondería la función esencial es establecer pautas normativas), fundamenta su explicación de la acción de las masas como «saturación» o exceso de influencia de la misma. Por otro lado, explican la acción de masas como resultado de una discontinuidad en las formas racionales de acción social propias de una la sociedad «normal»; en este sentido, se trata de una visión de la ruptura o el cambio como «patología» o enfermedad (desajuste en todo caso) que afecta al equilibrio y orden al que es tendente de forma natural la sociedad. Esta «normalización» de la tendencia al equilibrio y al orden, subyace a la cosmovisión durkheimiana de la sociedad y está presente en el grueso de los trabajos ubicados en dicho paradigma.

idea de la sociedad como metáfora de un organismo vivo atravesada por una tendencia natural al equilibrio, al orden y al consenso. Por otro, el planteamiento de que dicha tendencia al orden determina, en todo caso, las estructuras y las funciones de diversos elementos que componen la sociedad. En esta interpretación la violencia queda entonces reducida al resultado de una falta de control social y al derrumbe moral de la sociedad.

La adaptación de las doctrinas irracionalistas por parte de los sociólogos norteamericanos de la Escuela de Chicago dio forma a la visión que los científicos sociales aplicaron al estudio del comportamiento colectivo y de otros procesos de cambio social. La obra de Robert Park y E. Burgess (1969) sirvió para «depurar» en cierto sentido el irracionalismo decimonónico, centrando el interés teórico en la contraposición de las condiciones sociales para la erupción de la violencia colectiva frente a aquellas que fomentan la cooperación y la cohesión social. Si bien este planteamiento se desvinculaba de la visión patológica irracionalista, su teoría estuvo fundamentada en los términos psicologicistas de la influencia social y el aprendizaje, así como en la centralidad del fracaso del control social¹⁴.

Finalmente, W. Kornhauser lanzaba a través de su obra “Aspectos políticos de la sociedad de masas” (1969), la elaboración más lograda de la teoría de la sociedad de masas, sistematizando las implicaciones de dicha teoría en los orígenes de la violencia colectiva de una forma que puede ser considerada estrictamente sociológica (Rule, 1988). En efecto, al atender a los determinantes sociales y estructurales del surgimiento de fenómenos de masas, su trabajo permite abordar una explicación en términos puramente sociales. Así, la aparición de la violencia colectiva está vinculada a la propia naturaleza de la sociedad de masas. En sociedades complejas y modernas, la política de masas es la causa de aquella y ocurre cuando individuos inadecuadamente insertados en la política institucionalizada persiguen los fines de forma directa.

A lo largo de los años cincuenta del pasado siglo, el paradigma funcionalista queda institucionalizado en la sociología contemporánea a partir de la obra de Talcott Parsons y ha constituido el enfoque «dominante» en los estudios de sociología política.

¹⁴ Según la definición de Park y Burgess, el *comportamiento colectivo* sería «el comportamiento de individuos bajo la influencia de un impulso que es, común y colectivo; un impulso, en otras palabras, que es el resultado de la interacción social» (cit. en Rule, 1988. Traducción propia.) La definición comparte la influencia tanto de las doctrinas irracionalistas como del interaccionismo de Mead, el sociólogo más representativo vinculado a la Escuela de Chicago. La deuda con Mead para esta explicación del comportamiento colectivo estriba fundamentalmente en la necesidad que existe para Park y Burgess de un proceso de interacción intenso previo a todo fenómeno de comportamiento colectivo.

Es por esta razón, que gran parte de los estudios de la acción colectiva se hayan entroncado dentro de esta tradición, si bien con el paso del tiempo se han visto expuestos a otras influencias.

La cosmovisión funcionalista (pluralista, conductual o individualista) pone de manifiesto varias cuestiones que tienen que ver con lo que Alford y Friedland (1991) consideran el dominio propio de una perspectiva y su competencia para resolver ciertas cuestiones. En este enfoque, las unidades de análisis básicas son los individuos. Éstos constituyen las organizaciones, y las instituciones son resultado de la agregación de sus preferencias, normas y valores. Los individuos emprenden acciones, interacciones e intercambios. Se trata de una visión de la sociedad configurada en términos de *roles* y actividades individuales, constituyendo así lo que se ha denominado “individualismo metodológico”.

A partir de esta concepción, las sociedades modernas están integradas por sistemas de valores diferenciados, dentro de los cuales, los individuos son socializados para asumirlos. Por lo tanto, dos serían los mecanismos básicos para el funcionamiento ordenado de la sociedad: por un lado, el proceso de control social que se entiende como garante del orden y de la estabilidad. El análisis de sus determinantes, de sus fuentes y de las instituciones encargadas de generar dicho control es esencial en esta visión de la sociedad. Por otro lado, estaría el proceso de integración social, concebido como el mecanismo a través del cual la conducta de los individuos es adecuada a las necesidades de la sociedad a través de un proceso de imposición autoritaria de valores. En este sentido, la conducta de los individuos será “conforme a valores” o “desviada”.

La obra de Parsons define el ámbito de estudio de esta tradición centrada en el análisis de las bases sociales de las sociedades modernas y del tipo de régimen político que les corresponde. Un terreno fértil de análisis dentro de esta perspectiva es el definido por el interés en el funcionamiento de los sistemas políticos y del papel de los individuos en el mismo. En este ámbito se analizan las características del individuo en tanto actor-político-ciudadano y su vinculación con el sistema político democrático. Además, se indaga permanentemente sobre los factores que tienen que ver con la garantía de estabilidad de dichos sistemas políticos, a menudo relacionados con los procesos de modernización en las sociedades avanzadas. Temas de trabajo que se entienden en esta línea de investigación son los que se interesan por el proceso de

modernización y el desarrollo político¹⁵, los estudios del sistema político en su dimensión democrática, o las indagaciones sobre los mecanismos de implicación y vinculación política de los individuos con el sistema, que se traduce en numerosos estudios sobre participación política¹⁶. Finalmente, una de las líneas de investigación más amplia y trabajada a partir de los postulados pluralistas ha sido la muy prolífica producción de estudios sobre los aspectos de la cultura política¹⁷.

En relación con la dimensión conflictiva de la sociedad y su vínculo con la política, conviene insistir en la idea ya planteada de que se trata de un aspecto difícil de teorizar, por cuanto que la visión pluralista se sitúa en una concepción de la sociedad tendente al orden y a la estabilidad. Esto genera una ausencia de interés en los aspectos conflictivos de la sociedad y, cuando son teorizados, resultan ciertamente problemáticos y se asocian a las disfunciones del sistema.

La obra de Parsons, como la de N. Smelser, constituye la bisagra que permite, recogiendo la tradición funcionalista, abordar los marcos contemporáneos de análisis de la acción colectiva. Parsons (1982) pone de manifiesto su interés por la relación entre la acción social individual y las grandes instituciones sociales en el contexto de una concepción integradora de la sociedad. Por un lado, enfatiza el nivel individual de análisis que subyace a la cosmovisión funcionalista -aquí se encuentran los desarrollos contemporáneos más relevantes en el campo de la ciencia política. En un nivel de análisis secundario, fija su atención en las instituciones sociales como portadoras de

¹⁵ Este tema, clásico de la perspectiva pluralista, ha sido propuesto en multitud de trabajos que han planteado el vínculo modernización y desarrollo sociopolítico bajo la asunción de que existe algún tipo de conexión entre los procesos de modernización socioeconómica y el desarrollo de sistemas democráticos estables. Los trabajos de Lipset (1987), Almond y Verba (1970), Huntington (1990) o Dahl (1989) son ejemplos paradigmáticos dentro de esta línea de investigación sociopolítica.

¹⁶ Los trabajos sobre participación e implicación política de los ciudadanos constituyen una de las más prolíficas líneas de trabajo en el seno de esta perspectiva. Algunos de ellos, verdaderos clásicos de la participación y de la acción política como Milbrath (1982) o Barnes y Kaase (1979), han abierto numerosas líneas de investigación. Por otro lado encontramos también estudios sobre los partidos políticos y los grupos de presión. (Dahl, 1961), (Lindblom, 1963). Para una discusión exhaustiva de estos trabajos véase, Revilla (1995).

¹⁷ El estudio de la cultura política es sin duda uno de los intereses centrales en la producción pluralista. Al considerarse los factores consensuales e integradores de los individuos-ciudadanos como elemento esencial al mantenimiento de los sistemas democráticos, éste ha sido un tema ampliamente trabajado. El clásico estudio de Almond y Verba (1970) sobre la cultura *cívica* como garantía de estabilidad política en los sistemas democráticos o los posteriores desarrollos de este tipo de estudios sobre valores (R. Inglehart (1991), son ejemplos que pueden ilustrar este interés por la cultura política. Por otro lado, este tema de trabajo ni mucho menos se ha agotado en tal tipo de análisis. La renovación «culturalista» de los años noventa del pasado siglo ha puesto de manifiesto a través de numerosos estudios cómo la profundización y el estudio de la cultura política sigue teniendo plena vigencia. El número 77/78 (1996/1997) de la Revista *Zona Abierta* contiene una complicación monográfica sobre las más recientes aportaciones al estudio de la cultura política sobre la base de los nuevos planteamientos importados desde la antropología y la sociología de la cultura.

normas y orientaciones prescriptivas de la acción social de los individuos cuyo fin es la integración. En este sentido, su teoría de la acción supone la respuesta más clara al clásico problema hobbesiano¹⁸ de la violencia; establece como premisa para la estabilidad y el orden la necesidad de un sistema común de valores que se manifiesten en la legitimidad de las normas institucionales, en los fines últimos de la acción (Rule, 1988).

La acción social tiene para Parsons una propiedad básica: la integración de valores comunes. Esta preocupación por el orden vertebró sus trabajos sobre la transmisión de normas y valores (socialización), así como los relativos a los mecanismos de control social. Su extensa y relevante obra, si bien nunca estuvo directamente dedicada al estudio del comportamiento colectivo, sí ha quedado reflejada en los desarrollos posteriores del mismo, como pone de manifiesto el trabajo de Neil Smelser.

En su intento de adaptar el trabajo de Parsons a las anteriores teorías del comportamiento colectivo, la obra de Smelser (1989) supuso un giro fundamental, aunque no una ruptura, en la tradición en que se inserta. Este autor toma el concepto de *comportamiento colectivo* de R. Park y desarrolla un modelo de análisis a partir de las categorías que se utilizan para el estudio del comportamiento convencional. Su explicación se sustenta en la identificación de los componentes fundamentales de la acción social, las normas y valores que son la base última de la conducta social. Así, habría comportamientos colectivos no institucionalizados que responden a tensiones estructurales o a algún tipo de quiebra en el sistema normativo. La conducta colectiva es, pues, un intento de los individuos de alterar su ambiente cuando están en condiciones de amenaza, tensión o incertidumbre.

La teoría de Smelser posee una significación relevante en la medida en que se aleja de las interpretaciones irracionales y psicológicas sobre la conducta social, para

¹⁸ Lo que se ha dado en llamar «problema hobbesiano» o «problema de orden» como cuestión de análisis teórico constituye uno de los grandes temas a los que el pensamiento social y político ha tratado de dar respuesta desde sus más remotos inicios. Formulado de forma resumida, este problema plantea una tensión inherente a toda forma de sociedad, entre la violencia y el orden. Ésta se ha configurado en corrientes enfrentadas; aquellas cuya cosmovisión comprende la sociedad en natural estado de orden y estabilidad y aquellas otras que vislumbran en el conflicto la dinámica fundamental de la sociedad. Las preguntas fundamentales que abre esta reflexión tienen que ver, en último extremo, con las causas de la violencia, los determinantes de la transición de un comportamiento cooperativo (en el contexto de relaciones políticas normales) a un periodo de revueltas, revoluciones o guerras civiles. En todo caso, la cuestión a la que se pretende responder es sobre las condiciones que subyacen a la violencia colectiva en general.

examinar los determinantes sociales de la acción social. En este sentido, su obra supone un giro en los trabajos examinados hasta el momento.

Bajo el paradigma funcionalista, cabe plantear aún dos corrientes teóricas de las que es necesario dar cuenta por su repercusión en el debate sociopolítico para el análisis del conflicto y de la acción colectiva. La primera se encontraría, quizá, más próxima a los planteamientos conductistas y socio-psicológicos de la acción colectiva: se trata del modelo de privación relativa. La segunda lleva al extremo el individualismo metodológico y su aportación al análisis de la acción colectiva. Ha resultado de enorme interés al tiempo que ha mostrado una gran capacidad para dominar el debate en torno a la cuestión; se trata de la escuela de la Elección Racional.

Dentro del llamado modelo de privación relativa podemos encontrar toda una serie de trabajos de investigación que surgieron a lo largo de los años setenta, y que trataban de dar cuenta de las múltiples formas de protesta y violencia política que emergieron a lo largo de los años sesenta en gran parte de las sociedades avanzadas. La proliferación de protestas y movimientos sociales durante la década de los sesenta había puesto de manifiesto la incapacidad de las teorías del comportamiento colectivo para interpretar, en términos de conducta «irracional», los modelos de protesta que acontecían en los contextos democráticos (Cohen y Arato, 2000).

Este modelo, no siendo del todo ajeno a la tradición conductista, supone un importante avance en la “normalización” del análisis de la violencia, generando una propuesta de corte socio-psicológico. Como planteamiento de partida, los modelos de privación relativa consideran que en las sociedades avanzadas existe un vínculo entre la frustración de expectativas de los individuos y la violencia colectiva. Esta idea, aunque así propuesta pueda resultar simplificadora, subyace a la gran mayoría de los estudios del modelo de privación relativa y contiene en sí misma muchas de las grandes cuestiones que constituyen el trabajo de los estudiosos de la acción colectiva¹⁹.

En todo caso, el modelo de privación relativa, junto con las teorías políticas de la confrontación (que revisaremos más adelante), ha centrado el debate contemporáneo en torno a la violencia política. La relevancia de este planteamiento consiste, fundamentalmente, en que sus premisas analíticas le han permitido una explicación de

¹⁹ El paso del nivel individual al de la acción colectiva ha constituido uno de los temas de reflexión clásico en el estudio de la acción colectiva, tanto desde la óptica pluralista y como en las teorías de la elección racional.

mayor alcance que las que daban cuenta de la misma sobre la base de la desintegración moral de la sociedad de masas. En esta propuesta el comportamiento colectivo se entiende como respuesta a algún tipo de descontento social.

La escala de análisis de estas teorías se centra en los individuos y, por lo tanto, la acción se explica en términos de actitudes, percepciones, expectativas y concepciones individuales de la justicia. Su vocabulario específico está vinculado al nivel individual y tiene que ver con la valoración que los individuos hacen de las situaciones sociales. Por esta razón, estas teorías han sido consideradas excesivamente atomistas (Rule, 1988), debido a la relación directa que establecen entre el nivel individual y el colectivo (un atomismo, por otro lado, que es común en el enfoque pluralista). Pero, en todo caso, explican la violencia colectiva en virtud de una relación *causa-efecto* entre la percepción de frustración individual y la militancia política colectiva²⁰. Una última característica común a los distintos trabajos dentro de este modelo de análisis es el establecimiento de un vínculo entre la frustración, la agresión y sus determinantes (Bandura, 1978), (Dollard *et al.*, 1939),²¹ que está en la base de cualquier explicación de la violencia colectiva.

Los temas de trabajo que centran este enfoque tienen que ver, por lo general, con situaciones de violencia política. Bajo esta categoría, sin embargo, se teorizan sin mucha discriminación fenómenos tan diversos como protestas, disturbios, conspiraciones (Gurr, 1971), violencia política de masas (Hibbs, 1973) o “guerra interna” (Eckstein, 1964). Otro conjunto importante de estudios está ligado a los temas clásicos del dominio propio pluralista, como el desarrollo económico y la violencia política o el cambio sociopolítico, y sus implicaciones sobre la violencia. Muchos de estos estudios están vinculados a las diferentes teorías de la modernización (Huntington y Nelson, 1976), o al estudio de las crisis políticas (que se teorizan en referencia al sistema político y a cuestiones de legitimidad)²².

²⁰ Esta insistencia en tratar de explicar lo colectivo en relación directa con el nivel individual es, sin duda, compartida con la escuela de la Elección Racional cuyos presupuestos se comentarán más adelante.

²¹ La Teoría de la *frustración = agresión* de Dollard (1939) y su equipo de la Universidad de Yale estableció, sin duda, un referente para los trabajos que explican la violencia como resultado de la privación. Dicha teoría enfatiza la naturaleza reactiva de los comportamientos agresivos. De forma sucinta, la tesis principal de Dollard era que toda conducta agresiva responde a la existencia previa de una frustración.

²² Uno de los estudios más exhaustivos sobre la violencia política lo constituye la obra de E. Zimmermann (1983) «*Political Violence, Crises and Revolutions: Theories and Research*». El trabajo lleva a cabo una extensa y enjundiosa revisión de los diferentes marcos teóricos para el análisis de la misma. Contiene, además, una aproximación a los diversos modelos de investigación empírica

Quizá la teoría más afortunada dentro de este enfoque sea la propuesta por T. Gurr. El suyo es, sin duda, el trabajo de mayor impacto dentro del esquema de los modelos de la privación relativa. La compleja teoría que construye aborda, a partir de categorías psicológicas, los conflictos colectivos que ocurrieron en el contexto de los años sesenta. En ella aplica su concepto de *privación relativa* a realidades que son comparadas a nivel macro-comparativo, a partir de datos cuantitativos. Dos elementos son centrales en el trabajo de Ted Gurr: en primer lugar, el nexo frustración-agresión al que ya se ha hecho referencia; en segundo lugar, la Teoría de la Privación Relativa²³. Se insiste en la relación de causalidad existente entre la insatisfacción producida por la privación de recursos económicos y sociales y el ejercicio de la violencia política. El esquema teórico planteado por Gurr como base para el análisis de la violencia parte del supuesto de que la frustración se percibe en el nivel individual en todo caso.

En su conocido trabajo *Why men Rebel?* (1971) plantea una teoría sobre cómo los individuos responden a las situaciones de privación relativa. La hipótesis de trabajo argumenta que tienen mayor probabilidad de comprometerse con la violencia política los individuos que están más privados. La probabilidad de que se llegue a la violencia política (que se entiende como «politización del descontento») depende de tres condiciones básicas: 1) la intensidad de las justificaciones normativas del uso de la violencia política, 2) la fuerza de las justificaciones utilitaristas del uso de la violencia política y, 3) el alcance de las justificaciones sobre la violencia política. La relación entre violencia política potencial y violencia política real estará mediada por una serie de variables que tienen que ver, en todo caso, con creencias y tradiciones sobre la justificación del conflicto y con el balance entre los recursos coercitivos e institucionales a disposición de los contendientes contra el Estado. Estas variables “mediadoras” (*potencial coercitivo, institucionalización, facilitación y legitimidad*), disminuirán o aumentarán las condiciones para la violencia.

propuestos en el seno de cada uno de estos enfoques, así como la discusión de las principales formulaciones e implicaciones de los mismos. Las cuestiones relativas al nexo frustración-agresión como variable explicativa del estallido situaciones de violencia política son analizadas con gran detenimiento en los capítulos 2 y 3:6-23.

²³ Esta teoría, centrada en el nivel grupal de análisis, encuentra los motivos que generan la movilización y, por extensión, las situaciones de violencia, en la frustración de expectativas que produce la sociedad. En ella, la *privación relativa* es definida sobre la base de una frustración de expectativas que se produce por la discrepancia entre aquello sobre lo que la sociedad cree que tiene ciertos derechos adquiridos (en términos principalmente materiales) y las capacidades reales con que cuenta para obtenerlos.

Llegado este punto, la principal contradicción que se ha señalado con respecto al modelo de Gurr es que, si bien su presupuesto básico es de carácter psicológico, pues trata de explicar el origen de la violencia colectiva desde un nivel individual fundamentado en las percepciones y valoraciones que sobre una determinada situación social, las tipologías de violencia política que estipula (disturbio, conspiración, guerra interna) no lo son. En consecuencia, esos tipos de violencia son más organizacionales o sociales y no pueden explicarse adecuadamente por medio de variables psicológicas, salvo en el seno de la cosmovisión pluralista (Alford y Friedland, 1991).

El rastro pluralista de la obra de Gurr se manifiesta, por otro lado, desde su misma definición del objeto de estudio. En su trabajo, la violencia política es definida como «*todos los ataques colectivos dentro de una comunidad política dirigida contra el régimen político, sus actores... o sus políticas*» (cit en Alford y Friedland, 1991:78). Bajo la notable ausencia de alusión al papel de la violencia gubernamental (la represión por parte del Estado) en esta definición, subyace una concepción de la estabilidad y del orden social y político que postula como ilegítima y disfuncional la conducta de los disidentes «contra» el régimen. Por otro lado, de esta definición se desprende que la violencia se considera algo anormal, fuera del conjunto de acciones políticamente aceptables y, en todo caso, consecuencia de la desintegración de las vías institucionales para la articulación de demandas en las sociedades democráticas.

En la interpretación pluralista de la violencia política ésta es explicada, en definitiva, como resultado del fracaso de los mecanismos normales de control social. En estas circunstancias, la desorganización social y la frustración individual pueden conducir a la violencia (Alford y Friedland, 1979) aunque en este caso, el disidente o revolucionario es visto como un individuo mucho menos *anómico* que el que plantearan las teorías del comportamiento colectivo.

En el modelo de privación relativa existen obvias conexiones con las interpretaciones psicológicas de la acción del cambio pero, en todo caso, sí supone un salto importante respecto a las teorías del comportamiento político²⁴. Por otro lado, el

²⁴ De hecho, el suyo ha sido concebido como un primer modelo de análisis de la acción colectiva (Rivera, 1995). La propuesta de T. Gurr presenta una teoría del conflicto político más compleja que las anteriores al no hacer depender la violencia de una explicación de causa única. Aunque su análisis podría pecar de un excesivo individualismo metodológico, y deja cuestiones pendientes que son de relevancia para el análisis de la acción colectiva (como es la excesivamente simple inferencia de situaciones de violencia colectiva a partir de estados estrictamente mentales), su trabajo constituye sin duda un esfuerzo por elaborar indicadores múltiples de diversas variables que incluyen tanto factores estructurales y económicos como los propiamente políticos. En consecuencia, permite construir una tipología específica

argumento de la privación relativa puede, y de hecho a menudo ocurre, conducir a la cólera y a la violencia. Sin embargo, *“la cólera por sí misma no es condición suficiente ni necesaria para la protesta política violenta. La cólera debe ser sentida de forma colectiva así como movilizadora para devenir en descontento políticamente relevante”* (Zimmermann, 1983:36)²⁵. Por esta razón, los desarrollos posteriores del análisis de la acción colectiva han prestado mayor atención a la movilización del descontento así como a los resultados de las acciones de confrontación.

Las insuficiencias de este paradigma actitudinal funcionalista han sido resumidas por Aya (1985) con el argumento de que los modelos de la privación relativa, de las expectativas insatisfechas o del conflicto de valores como orígenes de la violencia política son incapaces de medir el alcance de tales fenómenos y no pueden explicar su vínculo con la acción efectiva. En otras palabras, no permiten especificar cuánta privación relativa es necesaria para que estalle una situación de violencia política, como tampoco puede explicar por qué en unos casos ocurre y no en otros²⁶.

Con todo, debemos señalar que la propuesta de Gurr no está orientada a averiguar cómo se pasa de lo individual a lo colectivo sino que se dirige más bien hacia las causas del descontento. No forma parte de su dominio explicativo el tratar de dar cuenta del proceso de movilización porque, para ello, necesitaría recurrir a conceptos y vocabularios que no pertenecen a su universo metodológico. Pero retengamos por el momento la idea de que la privación relativa constituye un argumento ciertamente convincente para explicar parte de la violencia política y, por otro lado, quedémonos con algunos de los factores que Gurr señala como catalizadores de la misma: la intensidad de las justificaciones normativas del uso de la violencia política, la fuerza de las justificaciones utilitaristas del uso de la violencia política y el alcance de las mismas sobre la violencia política. Volveremos sobre estas ideas para definir el marco de análisis de esta investigación sobre la legitimidad de la violencia. Pero para ello, se tratará de superar el énfasis funcionalista en la cultura como una realidad homogénea, integradora e impuesta sobre los individuos por parte del sistema (el “cemento social” de Parsons), atendiendo a una visión de ésta de un modo mucho más

de distintos episodios de violencia política posibles que contribuye a una mejor comprensión de los mismos.

²⁵ La traducción es propia.

²⁶ Barnes y Kaase *et al* (1979), en su clásico estudio *Political Action*, ponen de manifiesto claramente cómo los más desfavorecidos no son siempre los más movilizadores sino más bien al contrario.

fragmentado y autónomo tal y como se ha planteado en los desarrollos recientes de la sociología cultural (Alexander, 2003 Swidler, 2003).

La última corriente de análisis que habría que señalar dentro de la renovación pluralista se conoce bajo el nombre de teorías de la elección racional. Junto con el nuevo institucionalismo y el enfoque neo-corporativo, surgió a lo largo de los años ochenta del siglo XX como un intento de dar respuesta a algunos de los interrogantes no resueltos por los estudios que las habían precedido.

Las teorías de la elección racional llevan al extremo las tesis individualistas del pluralismo y reducen el análisis de la política a la expresión de preferencias individuales. En virtud de esta visión, el actor social es un *homo economicus* que expresa sus preferencias y realiza elecciones sobre la base de un cálculo racional de los costes y beneficios. Se trata de un enfoque que interpreta la acción colectiva como la agregación de decisiones individuales para participar en ella de forma deliberada e intencional y con un objetivo determinado (Rule, 1988).

Antes de avanzar es necesario señalar que esta corriente explicativa de la acción social ha tenido claros precedentes en el pensamiento clásico. Así, la teoría hobbesiana constituye uno de sus precedentes más relevantes. En primer lugar porque plantea como problema fundamental la cuestión del orden frente a la violencia. En segundo, porque dicha teoría se sostiene sobre la premisa básica de que el individuo posee una capacidad racional para el cálculo coste-beneficio de su acción. Además de la influencia hobbesiana, el utilitarismo decimonónico de Bentham y Mill está presente en los postulados básicos del trabajo y la proyección de la escuela de la elección racional.

La corriente de la elección racional aborda el análisis de la interacción entre las decisiones basadas en el propio interés y la formación de acciones colectivas. Su precursor, Mancur Olson (1992) basó su análisis en los principios microeconómicos para definir la acción colectiva como el esfuerzo por producir bienes colectivos. Olson abogaba por una teoría de la conducta racional basada en el cálculo de los costes y beneficios, no sólo orientada a la producción de bienes materiales sino también a la producción de bienes no vinculados estrictamente al mercado y pretende ser una teoría general de la acción colectiva. Su argumento esencial resulta ampliamente conocido:

muchas formas de acción se dirigen a la obtención de bienes colectivos²⁷. Cuando el número de posibles beneficiarios de tal bien aumenta por encima de un determinado umbral, la participación no resulta racional ya que, la probabilidad de que la propia contribución marque una diferencia entre el logro o la pérdida del objetivo, resulta insignificante y, por lo tanto, los no participantes se beneficiarán igualmente se involucren o no en la consecución del mismo²⁸. Olson trata de demostrar que una persona que persigue el logro de su interés particular no cooperará con un gran grupo para obtener un bien público a no ser que se le obligue o se le ofrezca algún tipo de incentivo. La paradoja que plantea el análisis de Olson radica en que, mientras la acción colectiva produce beneficios comunes, la gente implicada persigue, básicamente, beneficios personales y si cree que no puede lograrlos, prefiere no participar (González Calleja, 2002a). Por esta razón, la consecución de bienes públicos sólo puede producirse apelando a la coacción o a un determinado tipo de incentivos a la participación, pero nunca al interés particular. La crítica a las motivaciones individuales a través del dilema del *free rider*²⁹ plantea la posibilidad de que en un grupo extenso crezca también el número de *gorrones*, esto es; el número de individuos que se beneficiarán igualmente y para quienes la participación no resulta racional. Para superar este problema Olson propone la noción de *incentivos selectivos*. Se trata de motivaciones que resultan *divisibles* y cuyo beneficiario es el propio participante.

La producción de conocimiento en el marco de la elección racional ha sido enormemente prolífica ya que esta corriente dominó el análisis sociológico en las últimas décadas, principalmente en los países del ámbito anglosajón³⁰. Importantes contribuciones a partir de las tesis de Olson han sido propuestas por J. Elster, R. Hardin,

²⁷ Un bien público está definido por la imposibilidad de discriminar de su consumo; si los beneficios están disponibles para alguien, deben estarlo para todos. Su disfrute no se puede restringir a quienes se han esforzado por alcanzarlos. «(El consumo individual de tal bien, no resta nada al consumo de otros» (Samuelson, 1982: 175 *cit en.*, Aguiar, 1990: 7)

²⁸ Un resumen claro de sus teorías y de las críticas a las que han sido sometidas se encuentra en (Aguiar, 1990: 1015)

²⁹ El dilema del *free rider* o *problema del gorrón* aparece cuando el interés privado impide la obtención de un bien público (Aguiar 1990: 8) según la lógica «racional» del coste-beneficio. Se ha planteado como el «problema de la acción colectiva», suponiendo una permanente cuestión de análisis y debate en los desarrollos posteriores de la acción colectiva dentro del marco de la elección racional. Véase (Aguiar, 1990), (Elster, 1989).

³⁰ Es notable que dentro de la sociología continental, principalmente la francesa, el paradigma de la elección racional no haya fraguado de la misma forma en que lo hizo en el mundo anglosajón. Quizá la razón estribé en la mayor presencia de que goza la tradición marxista en la primera.

Axelrod, o M. Taylor bajo la forma de *teoría de juegos, dilema del prisionero* o todo tipo de estudios sobre la racionalidad³¹.

En este modelo la acción colectiva es vista a partir de un extremo individualismo metodológico. Este nivel de análisis determina la visión del problema. La acción colectiva, como cuestión de análisis, parte de ciertos presupuestos básicos que podríamos resumir, a riesgo de simplificar en exceso, en dos: en primer lugar, la acción colectiva implica una decisión individual para la producción de bienes públicos. En virtud de este presupuesto, los análisis irán enfocados en términos de motivaciones y preferencias³² en el marco de un concepto minimalista de racionalidad³³. En segundo lugar, implica la agregación racional de preferencias individuales. Por esta razón, la cuestión de la agregación de preferencias está presente de forma casi permanente en sus estudios. Dos temas de análisis son centrales en su enfoque: por un lado, los estudios sobre comportamiento político, fundamentalmente de tipo electoral (Downs (1963), pero también en relación con el movimiento social (Aguiar, 1990) e incluso de la violencia y el terrorismo (Sánchez Cuenca, 2001; 2006; Bueno Mesquita, 2005). Por otro lado, los estudios sobre las funciones e instituciones del sistema político democrático, en particular los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas públicas (*policy making*).

Podemos decir que, una de las más importantes aportaciones de las teorías del marco de la elección racional para el estudio de la acción colectiva estriba en que ha dotado a la acción social de una racionalidad que no le había sido conferida antes (desde luego, no dentro del paradigma funcionalista de la acción). Asimismo, plantea la posibilidad de que exista un conflicto de intereses en virtud del cual los individuos se ven motivados para la acción. Finalmente, abre la posibilidad a un análisis de la acción colectiva en términos intencionales y conflictivos.

Es obvio que la elección racional deja problemas sin resolver que han estado en la base de numerosos estudios posteriores de la acción colectiva. En primer lugar, como la gran mayoría de las teorías dentro del enfoque funcionalista, ésta tiene problemas

³¹ Una excelente compilación de artículos puede encontrarse en el número monográfico dedicado a la Elección Racional de la revista *Zona Abierta* 54/55 (1990).

³² Algunos autores han planteado un tipo de análisis de las motivaciones más distanciado del determinismo económico de las preferencias proponiendo la posibilidad de algún tipo de motivación moral o extra-racional (Hardin, 1995: 14 cit en González Calleja 2002a:171) .

³³ *Racionalidad* entendida en sentido estricto como una maximización del interés privado en la lógica coste-beneficio. Una racionalidad instrumental que determina la conducta egoísta. (Aguiar, 1990: 10).

para dar cuenta del paso del nivel individual al colectivo y, en este sentido, una vez planteadas las motivaciones de un individuo para la acción, deja sin resolver cuestiones que afectan a la permanencia de la acción en el largo plazo (por ejemplo en el caso de los movimientos sociales) o a la posibilidad de dotar de un contenido moral compartido a la acción por todos los miembros del grupo (incluso la posibilidad sostenida por los desarrollos posteriores de que exista un verdadero interés *de grupo*).

En todo caso, González Calleja (2002a:172) ha recopilado algunas de las hipótesis básicas del enfoque de la elección racional que han sido asumidas y desarrolladas por otras corrientes afines en las que entraremos, y que resumimos aquí con el fin de hacer balance de su aportación al estudio de la acción colectiva³⁴: 1) las actuaciones de los movimientos sociales son respuestas deliberadas y racionales; 2) los objetivos de los movimientos sociales se definen por conflictos de intereses que se construyen como formas de poder institucionalizadas.; 3) la acción militante es definida en términos de interés colectivo, no en función de cálculos individuales; 4) la acción violenta muestra una continuidad con las formas «normales» de acción social; 5) los agravios que dichos conflictos generan son lo suficientemente ubicuos como para que la formación y movilización dependan de cambios en los recursos, organización u oportunidades para la acción colectiva; 6) el éxito de los movimientos está determinado de forma importante por factores estratégicos y por procesos políticos en los que tienen lugar, y 7) el análisis político de la violencia, a diferencia de las teorías funcionalistas del «agregado psicológico», es concebido a partir de intereses en conflicto y oportunidades.

Estas hipótesis dan continuidad al modelo de la elección racional con desarrollos contemporáneos que, asumiendo parte de los presupuestos de este enfoque, han ampliado el marco de análisis tratando de hacer de la acción colectiva, la movilización política y la protesta, entre otros, temas de su principal interés.

³⁴ González Calleja (2002a) lleva a cabo una amplia revisión de los marcos teóricos disponibles para el análisis de la violencia en la política. Dado que considera el movimiento social como una forma de acción colectiva y, teniendo en cuenta que los desarrollos posteriores a la teoría de la elección racional están muy centrados desde el punto de vista analítico en el tema de estos movimientos, reproducimos aquí las hipótesis que según él se desprenden del análisis de la elección racional.

2.1.2 La tradición marxista y las teorías de la lucha de clases

La tradición marxista ha sido fundamental dentro de la sociología política a la hora de acometer el estudio del conflicto y de la acción colectiva. Su concepción histórica y propiamente sociológica ha hecho de ella la corriente de análisis que, de una forma más clara, permite abordar el conflicto como un fenómeno habitual y normal dentro de la dinámica social. El conflicto, en los términos propuestos por esta perspectiva, estaría integrado en la dinámica social de tal manera que constituye, incluso, el proceso central de la misma. Por otro lado, el llamado «marxismo sociológico», como escuela de pensamiento, gozó a partir de los años sesenta del siglo XX, de una notable influencia dentro del debate sociopolítico sobre todo como alternativa a las formulaciones hegemónicas de la perspectiva pluralista. Dicha influencia, que ha sido percibida en buena parte de la investigación a propósito del conflicto y de la acción colectiva, ha fundamentado, sin duda, posteriores líneas de investigación dentro de este ámbito de trabajo³⁵.

A pesar de sus posibles limitaciones analíticas y asumiendo la importante fragmentación teórica que históricamente ha sufrido dicha corriente en su seno, es posible tratar de sistematizar los elementos y características comunes que, dentro de este enfoque, han enmarcado las categorías centrales de trabajo.

El paradigma marxista parte de unos presupuesto analíticos básicos que definen su dominio propio. Es importante recordar muy brevemente algunos de los rasgos característicos del materialismo histórico, instrumento analítico a partir del cual Marx y Engels elaboraron su teoría sobre el desarrollo capitalista. La sociedad es comprendida a partir de la argumentación general de que existe una infraestructura material que determina las condiciones tanto de la superestructura ideológica como de la política; por esta razón, la explicación de los fenómenos asociados con el poder político se busca en las características del modo de producción.

Alford y Friedland (1991) recogen los tres presupuestos básicos a partir de los cuales se configura la perspectiva de clase: en esta visión, los individuos venden su

³⁵ Sidney Tarrow ha querido ver, por ejemplo, cómo las más clásicas formulaciones de la obra de Marx, Lenin y Gramsci (cada una de ellas con sus elementos característicos) son precursoras respectivamente de los distintos marcos de análisis de la acción colectiva: enfoque de los «agravios»/frustración, movilización de recursos, teorías de la identidad y movimientos sociales. (Tarrow, 1998).

fuerza de trabajo como mercancía, definiendo así dos grupos diferenciados -clases- y en permanente conflicto, en virtud de su posición en la estructura productiva. Por otro lado, las organizaciones dominantes, que son de naturaleza económica, dependen de la constante acumulación de capital. Finalmente, la base económica de las sociedades se sustenta sobre la producción que está controlada por los mercados. De esta manera, el nivel central de análisis será el nivel sociológico y, en particular, las condiciones que en este nivel se dan para la acumulación y en la lucha de clases. En la cosmovisión de clase, el conflicto es normal y permanente; es decir, está integrado en la propia dinámica social.

Respecto del análisis del poder político, son las estructuras económicas las que definen el carácter de las organizaciones políticas que intervienen en el conflicto y los actores son teorizados teorizan en función de su pertenencia a una determinada clase y de su ubicación en el sistema de producción. En todo caso y sobre cualquier otra, la naturaleza clasista del estado, que deviene mero instrumento de dominación, determina el análisis, convirtiéndose su estudio en uno de los temas de trabajo más prolíficos, sobre todo a partir de la renovación en el seno de este enfoque a lo largo de los años sesenta³⁶.

En la visión marxista, el conflicto es un proceso dialéctico inscrito en la dinámica histórica en virtud de la cual los diferentes modos de producción que se suceden determinan las condiciones de explotación de unas clases sobre otras. Esta dinámica de opresión (derivada de la lógica del beneficio y de la búsqueda permanente de acumulación de capital inherente al propio sistema) está en la base de la necesidad histórica de la revolución y, por lo tanto, desde las formulaciones más clásicas del pensamiento de Marx y Engels hasta las diversas renovaciones en el seno de esta escuela, la pregunta por la revolución, por sus determinantes y por sus condiciones de posibilidad, se ha convertido en un tema central dentro del análisis marxista del conflicto y la acción colectiva.

³⁶ Es importante recordar que el pensamiento marxista es, a la vez, analítico y político, por lo que esta doble intencionalidad del enfoque marxista determina la naturaleza de su análisis. En el mismo momento en que pretende analizar el funcionamiento del capitalismo, lo hace con el fin de establecer las condiciones para su derrocamiento. La importancia que en la teoría marxista se atribuye a la dimensión «práctica» (la *praxis*), es probablemente la razón de que haya mostrado un enorme interés por las condiciones del cambio y del proceso revolucionario, puesto que en ellos radica la esencia y la posibilidad de realización de su proyecto ideológico

Aunque ni el propio Marx ni tampoco Engels elaboraron nunca nada parecido a una teoría de la revolución, la toma violenta del poder político está presente tanto en sus escritos como muchos de los desarrollos marxistas posteriores³⁷. Para Marx la revolución es el mecanismo de cambio social inevitable y necesario, en términos históricos y filosóficos. En su obra es comprendida como un movimiento centrado en las clases en conflicto que surge a partir de las contradicciones estructurales objetivas. La fuente básica de contradicción es el choque entre dicho modo de producción y las relaciones sociales que en él tienen lugar. La revolución aparece como el punto (históricamente necesario) en el que se resuelven tales contradicciones y a través del cual se pasa de un modo de producción a otro. La revolución se logra mediante una acción de clase liderada por una clase emergente. En las sociedades industriales capitalistas, es el producto de la acción de la clase proletaria que ha cobrado conciencia de sí misma a quien se le atribuyen todas las potencialidades revolucionarias.

Lenin y Trotski son quizá, los primeros en plantear la cuestión de la revolución entendida como un proceso político o como competencia entre grupos / clases por el poder político. El interés, más político que analítico, determinado por el contexto histórico en el que viven, les lleva a insistir de una forma más enérgica en las cuestiones de tipo organizacionales o estratégicas. Lenin, a través de su concepto de *vanguardia* (comprendida como elite de revolucionarios profesionales) pone un mayor énfasis en aspectos como el liderazgo o la movilización.

El alcance de estas teorías «clásicas» de la revolución ha sido ciertamente limitado debido, precisamente, a que su principal interés fue en todo momento más político que teórico. Sin embargo, los desarrollos posteriores de la tradición marxista, ya dentro de lo estrictamente sociológico, han sido de enorme profundidad, cubriendo un amplio espectro de temas de análisis. Cabe decir, en todo caso, que dichos estudios han estado doblemente determinados. Por un lado, por las propias limitaciones de su enfoque y, en otro orden de cosas, por las numerosas polémicas en el seno de la propia escuela. Como no es mi intención hacer un exhaustivo estudio de la tradición marxista, señalaré sólo algunas de las principales líneas de trabajo dentro de esta perspectiva³⁸.

³⁷ La obra en la que Marx y Engels elaboran lo más parecido a una teoría de la revolución (o lo que podríamos denominar la versión marxista de la acción colectiva) es el «Manifiesto Comunista».

³⁸ Muchas de las más interesantes contribuciones al análisis de la revolución dentro del enfoque marxista así como de sus planteamientos más renovados, se encuentran recogidas en el número 36/37: 1985 de la revista *Zona Abierta*.

Para la pregunta a la que aquí pretendemos dar respuesta sobre la vinculación entre la acción colectiva y el conflicto, habría al menos dos importantes conjuntos de trabajo cuyas aportaciones no pueden ser pasadas por alto. Por un lado, los que estarían adscritos al ámbito de reflexión de lo que algunos autores han denominado «marxismo hegeliano» (Ritzer, 1993). Dentro de esta vertiente del análisis encontramos la obra de Gramsci (1974) y de Lukács (1969). Por otro lado, mencionaremos algunos desarrollos posteriores que han sido incluidos en la categoría de «neo-marxistas» como consecuencia de los planteamientos alternativos que han propuesto. Las líneas de trabajo iniciadas por el marxismo-hegeliano comparten el rechazo frente a los determinismos económicos y materiales postulados por las teorías del marxismo clásico. Estos autores optan por un regreso a las raíces hegelianas que fundamentaban dicha teoría, en busca de una orientación más subjetiva que complete la importancia prestada por aquella a la dimensión estrictamente material. Este interés se afirma sobre la base de una clara intención por profundizar en el estudio de la *praxis*. Por esta razón, las implicaciones teóricas para el estudio de la acción social han sido enormemente relevantes. Recuperando la dialéctica hegeliana entre lo objetivo y lo subjetivo en la vida social, se otorga a la acción social condicionantes de tipo estructural. Sin embargo, ésta no estaría exclusivamente determinada por la estructura; hay una clara intención de aproximarse a los sistemas de ideas en busca de otros fundamentos posibles de la acción social y política. El análisis de las estructuras del capitalismo es ciertamente relevante pero lo es igualmente el análisis de las ideas y creencias compartidas, que debe ser tenido en cuenta. Los conceptos de *reificación* y *conciencia de clase* desarrollados ampliamente en la obra de Lukács,³⁹ manifiestan este interés no sólo por los condicionantes estructurales de la acción sino por sus condicionantes ideológicos.

En la misma línea se plantea la obra de Gramsci. Su trabajo está vertebrado por una preocupación primordial por el fundamento cultural necesario para el desarrollo de la revolución⁴⁰. Parte pues de una visión de la acción política de masas enormemente vinculada al desarrollo de discursos e ideologías, y concede a la cultura un potencial de dominación altamente relevante. De esta manera, una de sus más destacables

³⁹ «*Historia y Conciencia de clase*» (1969) contribuyó enormemente al esfuerzo por recuperar los aspectos subjetivos implícitos en las primeras formulaciones de Marx. De esta manera, podía ser abordada la vinculación entre el estudio de las estructuras básicas del sistema capitalista y los sistemas de ideas que le son propios (la conciencia de clase en particular) así como al pensamiento y la acción individual.

⁴⁰ Su interés no podría entenderse fuera del contexto político y social en el que vivió. La convulsa Italia de entreguerras y el advenimiento de la dictadura de Mussolini, bajo cuyo mandato murió en prisión, supusieron un importante aliciente para el movimiento obrero italiano que él mismo lideraba.

contribuciones al pensamiento sociológico, y que han resultado de una enorme utilidad en los análisis posteriores, son los conceptos de *hegemonía* o *bloque hegemónico*. Gramsci aboga por la necesidad de generar un *bloque histórico* de fuerzas revolucionarias en torno a la clase obrera quienes, a su vez, aparecerían reforzadas por la labor de un cuadro de «intelectuales orgánicos». Tanto Gramsci como Lukács buscan responder a la pregunta por la violencia política y por la revolución, con teorías de la acción que integran la estructura, pero también el nivel cultural del análisis⁴¹.

A partir de algunos de los replanteamientos de estos autores en relación con los presupuestos «clásicos» de la teoría marxista, las primeras revisiones de finales de los años sesenta abrieron nuevas líneas de investigación. Varios problemas han centrado los temas privilegiados de trabajo dentro de esta renovación neo-marxista, pero en la gran mayoría de ellos subyace un interés por tratar de explicar la naturaleza clasista del Estado y las implicaciones que de ella se derivan en los fenómenos de distribución del poder. Este interés ha animado en gran medida a quienes han abordado las cuestiones relativas a la evolución histórica del Estado (Tilly, 1978; Skocpol, 1985; Anderson, 1974), así como los relacionados con el análisis de la dimensión democrática de la evolución del Estado capitalista y sus problemas de legitimación. Aparece, pues, una renovada corriente de pensamiento neo-marxista cuyo trabajo va a estar ciertamente vinculado al examen de la naturaleza del Estado capitalista. En clara resistencia a la idea de que los Estados eran, en último extremo, meros instrumentos manipulables en manos de las clases dominantes, algunos autores como Miliband (1983), N. Poulantzas (1978), Anderson (1974), Therborn (1977) o Block, (1977) han abordado el debate en torno a la autonomía relativa del Estado.

2.1.3 La perspectiva weberiana y la sociología histórica en el estudio del conflicto y la violencia

Dentro de las perspectivas “clásicas”, nos queda hacer un breve repaso de los trabajos que se han llevado a cabo bajo el prisma de la teoría weberiana en busca del interés para el estudio del conflicto.

⁴¹ Uno de los referentes contemporáneos de la sociología del conflicto y la acción colectiva lo constituye el trabajo del marxista E.P. Thompson sobre la formación histórica y cultural del concepto de clase. (1989). De mucho menor impacto pero, sin duda relevante, es el trabajo de R. Biernacki (1995) sobre la formación histórica del concepto “trabajo” en Inglaterra y Alemania, y el modo en que distintas concepciones de trabajo condujeron a distintas formas de configuración y movilización del movimiento obrero.

Se ha hecho notar, en términos generales, un dominio casi pleno del enfoque pluralista o estructural-funcionalista a lo largo de los años cincuenta para, después, asistir a la contestación que supuso la recepción del marxismo clásico dentro de la sociología a lo largo de los años sesenta y setenta. Sin embargo, en las últimas décadas, parece haber tomado un mayor peso esta perspectiva que se centraba en el nivel de la organización. A lo largo del texto se han presentado las distintas perspectivas como *familias* explicativas con cierta coherencia interna en términos de explicación, cosmovisión, herramientas y temas de trabajo, aun siendo conscientes de las limitaciones y riesgos de esta elección. Sin embargo, hemos de asumir que, lo que denominaremos perspectiva *organizacional, weberiana o dirigencial*, está mucho más fragmentada y, por lo tanto, se intentará sintetizar a partir de algunos elementos comunes.

La principal influencia teórica a la que hay que hacer alusión es la tradición sociológica alemana que acude a la realidad institucional del estado como organización y estructura de dominación política y su impacto permanente en la sociedad civil (Morán, 1995:95). La obra de Weber, a través de la teoría de la burocracia y de su visión del Estado, está en la base de este tipo de estudios. Pero es necesario señalar también la presencia de la tradición de análisis del elitismo clásico, fundamentalmente la obra de Michels. Finalmente, hay que mencionar dentro de esta corriente los planteamientos de autores relevantes de la sociología contemporánea como Bell (1989), Giddens (1985) y Dahrendorf (1990).

En la perspectiva organizacional, la sociedad es entendida como conjunto de organizaciones que poseen recursos para la dominación interna y también para la dominación de otras posibles organizaciones. Su dominio propio es el del análisis de las organizaciones y las redes organizacionales constitutivas del Estado, asumiendo en todo momento que éstas tienen un cierto grado de autonomía respecto de la sociedad y respecto a las relaciones individuales (Alford y Friedland, 1991:153). Su foco empírico está configurado, principalmente, por las estructuras organizacionales (dentro y fuera del Estado) y la dominación de las elites que controlan tales organizaciones. La conducta individual es siempre secundaria a diferencia del pluralismo. Por esta razón, el proceso central al que atienden los estudios adscritos a este enfoque es el que tiene que ver con las estructuras de poder organizado dentro y fuera del estado, siendo siempre éste la organización central.

De esta manera, la naturaleza del poder político es definida por el surgimiento del Estado como organización dominante, y el análisis del control de éste sobre las demás organizaciones está presente en los estudios sobre el poder político que se entienden como procesos de competición entre élites. El conflicto, que se asume como proceso «normal» dentro de esta perspectiva, se establece entre elites de una misma organización o entre organizaciones y se resuelve mediante estrategias de negociación, concesión a través de las normas legales o mediante la represión y la fuerza (Morán, 1995: 96). En último extremo, la naturaleza del poder político y la definición de la organización generan la propia visión de la democracia en términos elitistas e institucionales como método político.

En esta perspectiva, el poder deriva de la organización de la autoridad a través de estructuras en las que tienen lugar los procesos de toma de decisiones. La capacidad para crear organizaciones fuera del propio Estado transforma a los grupos sociales en grupos de interés dominantes, con capacidad para controlar formas de poder dentro de la organización estatal y el acceso a los centros del mismo. La estructura interna del Estado determina también la organización política externa y afecta el nivel y la eficacia de la participación en tanto que define los límites de lo que entra o no en la arena política, así como los canales participativos de dicha organización. Se postula, por tanto, un conflicto entre las imposiciones funcionales y la acción política como bases del poder.

Finalmente, su visión del Estado democrático y las características que se le atribuyen determinan, a su vez, los temas de investigación predilectos para este ámbito. Su visión de la democracia está recogida en la clásica obra de Schumpeter (1968) y en la de Dahrendorf (1962) y se entiende, tanto a nivel social como organizacional, no como un mecanismo de participación popular sino como un método institucional para la selección de las elites. Las estrategias de dominación de elites y la competencia de las mismas son temas fundamentales del análisis dirigencial.

Respecto al campo de estudio propio de las teorías de la organización⁴², el estado ha ocupado siempre una posición central a todos los procesos políticos que se

⁴² Una vez que se ha insistido ya en la referencia constante de este enfoque hacia el Estado como entramado institucional a partir del cual se pueden explicar gran parte de los fenómenos políticos, vamos a priorizar aquí, por no extendernos en exceso, los estudios que claramente suponen una aportación al estudio del conflicto y de la acción colectiva. Para una explicación de los diversos estudios a los que ha dado lugar el enfoque organizacional véase Alford y Friedland, 1991.

pretenden explicar. Uno de los conjuntos clásicos de estudio dentro de esta corriente lo constituyen aquellos que comprenden el Estado burocrático como resultado de un proceso histórico de centralización. En este tipo de análisis, terreno prioritario de trabajo de la llamada sociología histórica, se ha dado cuenta con enorme éxito de los procesos de construcción histórica del Estado a partir de las características definitorias los mismos, que son teorizados como formas de dominación y coerción (Tilly, 1990a; Rokkan, 1970). Por otro lado estarían aquellos estudios que abordan el proceso de centralización como movimiento básico en la construcción del Estado. Entre ellos son muy frecuentes y enormemente relevantes las referencias a categorías vinculadas al conflicto, la revolución en particular, que se entiende en algunos casos como fuentes de transformación social en el seno del Estado. (Skocpol, 1985; Moore, 1973; 1993).

Parte de la obra de Charles Tilly ha tratado de afrontar, a través de un análisis histórico-comparativo, el proceso de formación del Estado-Nación. En él, el Estado es entendido como forma de dominación propia del contexto europeo, insistiendo permanentemente en una visión centrada en su carácter de sistema de coacción organizada en virtud del cual se puede comprender su propio proceso de formación histórica⁴³. A través de sus diversos trabajos ha desarrollado, además, un modelo político que analiza las relaciones conflictivas que se establecen entre las élites y los gobiernos subrayando la autonomía potencial del Estado. Su aportación al estudio de las revoluciones expone una visión del desarrollo político que (frente a los enfoques funcionalistas y actitudinales) está centrado en la pugna o competencia entre grupos y organizaciones por el control y el acceso al poder⁴⁴.

Por otro lado, Th. Skocpol ha indagado en la construcción histórica del Estado desde una visión estructural a partir de la cual éste se sitúa en el centro de su análisis. «*Los Estados y las revoluciones sociales*» (1979) postula como tesis principal la reivindicación de la autonomía del Estado como entramado institucional y organizacional a partir del que se pueden explicar los fenómenos políticos. Su

⁴³ Para contrastar diferentes modelos de explicación de la formación del Estado moderno y del proceso de democratización del mismo véase Ramos,(1995)

⁴⁴ El modelo de análisis desarrollado a partir de la noción de conflicto político, ha sido elaborado a lo largo de toda la extensa obra de Ch. Tilly. La propia organización de las exposiciones ha requerido aludir aquí brevemente a su importante contribución conjuntamente con el trabajo de Skocpol, dentro de los análisis históricos. Sin embargo, será afrontado con mayor detenimiento al final del capítulo ya que, su modelo ha supuesto, sin duda alguna, una importante herramienta conceptual y teórica a la hora de abordar el análisis de la acción colectiva.

explicación sobre la formación histórica del Estado está fundamentada en los procesos de burocratización y centralización que se entienden como movimientos básicos y esencialmente propios del Estado. Es decir, el proceso a través del cual el Estado moderno tomó su forma en el mundo moderno se debió, según la interpretación de Skocpol, a dinámicas que son características primordiales y definitorias del mismo y no, por ejemplo (como sugiere el análisis marxista «clásico»), a lógicas de acumulación capitalista. De esta misma manera, su trabajo ha supuesto una dura y enérgica crítica hacia aquellas versiones más *voluntaristas* de la revolución que habían invocado hasta entonces: “las revoluciones no se hacen, vienen” (1985:17). Este tipo de explicación otorga una nueva superioridad al conflicto político, y a las revoluciones en particular, como determinantes claves en el desarrollo del Estado.

Una de las aportaciones más relevantes de la sociología histórica estriba en haber cuestionado las tesis pluralistas que declaraban el proceso de democratización como el resultado de una evolución uniforme de las culturas políticas; contrariamente han propuesto una visión de éste como el desenlace de una dinámica histórica de conflicto (muy a menudo incluso, violento). Es en este sentido que este paradigma va a posibilitar hacer del estudio de las revoluciones un tema de estudio central para la construcción y desarrollo del Estado contemporáneo. En definitiva, la contribución de la sociología histórica habría sido doble: en primer lugar, ha permitido comprender el origen y el desarrollo histórico del Estado. En segundo lugar, destaca el notable papel que el conflicto político ha jugado en dicho desarrollo. Ambas cuestiones, de gran impacto en el debate sociopolítico contemporáneo y en concreto para los análisis que han hecho del conflicto, serían su tema fundamental de investigación.

2.2 Marcos teóricos para el análisis de la violencia

2.2.2 La Sociología de la Acción colectiva

El recorrido seguido hasta aquí pone de manifiesto una serie de cuestiones que parecen ser clave desde el punto de vista teórico-metodológico si pretendemos establecer el terreno nuestro análisis. Se ha planteado cómo el paradigma pluralista abre el terreno propio del análisis de la acción colectiva al establecer entre sus temas de trabajo la acción política (individual y colectiva) de los ciudadanos y los mecanismos a través de los cuáles éstos pasan a ser actores dentro del sistema político, expresando demandas y preferencias con el fin de influir en la toma de decisiones. La acción

política, en el contexto de las sociedades democráticas, puede ser abordada con las categorías pluralistas. Incluso la acción colectiva puede serlo siempre que quede dentro de los límites de lo institucional. Así, la participación política institucionalizada⁴⁵ ya sea individual o colectiva (a través de los partidos o los grupos de interés), es sin duda uno de los grandes temas de interés del enfoque pluralista. Sin embargo hemos subrayado que, si bien el enfoque pluralista era capaz de ver y teorizar las cuestiones relativas a la participación política de los individuos con cierto éxito, sus categorías de análisis resultan limitadas a la hora de abordar como comportamientos políticos normales aquellos que entraban en la categoría de lo *no institucionalizado*.

Pero entonces, ¿qué pasa con la acción colectiva *no institucionalizada* como los movimientos sociales u otras formas de protesta? ¿Pueden o no ser incluidos en las categorías de la política normal? ¿Se puede comprender la violencia en términos políticos? Esta pregunta constituye uno de los fundamentos de los desarrollos más contemporáneos que vamos a presentar de forma sucinta y que pretenden abordar, precisamente, la acción colectiva no institucionalizada como forma de participación política en los mismo términos en que se analizaba la acción institucionalizada⁴⁶.

Es cierto que el terreno para el análisis de este tipo de fenómenos es el abierto por el enfoque pluralista. Su dominio propio es el ámbito de lo micro social, el amplio campo de los determinantes de la acción política, el estudio de «*la conducta de los individuos y grupos y la influencia que tienen sus interacciones sobre la toma de decisiones por parte del gobierno*» (Alford y Friedland, 1991: 19). Sin embargo, a la hora de abordar como objeto de estudio la acción colectiva, los marcos que expondré a continuación -el paradigma de la movilización de recursos, el modelo de la dinámica de la contienda y el paradigma de la identidad- han trabajado a partir de categorías ancladas tanto en la perspectiva marxista como en la weberiana, lo que en gran medida ha contribuido a enriquecer su análisis.

⁴⁵ La diferenciación de los distintos tipos de participación política en función de la variable *institucionalización* es la que ha fundamentado el trabajo de Barnes y Kaase *et al.*, (1979) y su propuesta de las categorías *convencional / no convencional*. A partir de dichas categorías, es interesante hacer referencia al gran desarrollo de las investigaciones sobre el tema de la «participación política convencional» que han sido teorizadas con enorme éxito a partir de los presupuestos pluralistas.

⁴⁶ Considérese no sólo el «agotamiento» y las limitaciones del enfoque pluralista sin también el cambio en el contexto histórico-político de los años 60 y 70 en el que aparecen de forma permanente movimientos de protesta, movimientos sociales con reivindicaciones de «nueva generación», y todo tipo de fenómenos para cuyo análisis resultan limitadas las categorías hasta ahora propuestas.

En los últimos treinta años, la sociología política ha experimentado la consolidación de un cambio de paradigma en lo que respecta al análisis del conflicto (Pérez Ledesma, 1994) y una nueva visión de la acción colectiva. En particular, el estudio del movimiento social ha logrado normalizar el conflicto en la dinámica social y abrir las categorías conceptuales para una comprensión racional de la violencia.

Cohen (1985:673) recoge algunos de los planteamientos fundamentales de este cambio paradigmático: en primer lugar, estaría la consideración de que los movimientos sociales implican la existencia de un conflicto entre grupos organizados con una estructura autónoma y de sofisticadas formas de comunicación a través de redes. En segundo lugar, se argumenta que la acción colectiva es expresión de un conflicto normal y sus participantes racionales. En tercer lugar, se asume que la acción colectiva implica formas de asociación específicas dentro del contexto de sociedades civiles modernas y plurales. Finalmente se establece una distinción de dos niveles de acción colectiva: el nivel de la acción manifiesta que tiene lugar a través de la movilización a gran escala (huelgas, manifestaciones y otras formas de acción) y el nivel menos visible o latente, la acción que tiene que ver con formas de organización y comunicación de las que se nutren. En todo caso, diremos que son los argumentos de racionalidad y organización los que constituyen auténticos retos para los paradigmas clásicos explicativos de la acción.

Dentro de esta sociología del conflicto podemos señalar tres enfoques que a lo largo de las últimas décadas no han hecho más que tender puentes teóricos y metodológicos entre sí, contribuyendo con gran éxito a una gran proliferación de estudios de la acción colectiva y, en menor medida, de la violencia.

2.2.1.1 Organización, recursos y proceso político

El enfoque de la movilización de recursos parte de un rechazo casi absoluto del énfasis socio-psicológico en los sentimientos y agravios. Postula, por el contrario, la necesidad de ciertas formas de organización y comunicación para la acción colectiva que son previas a la movilización y que van más allá de los mecanismos propuestos por los enfoques «clásicos». Este marco construye su cosmovisión a partir de distintas aportaciones. Por un lado, encontramos una clara referencia al trabajo de los economistas basado en el individualismo metodológico y en el intento de explicar la

vinculación del individuo al grupo (Olson, 1992). Por otro lado, está presente la influencia de las investigaciones de los historiadores clásicos de la protesta como Rudé (1978), Hobsbawm (1974) o EP. Thompson (1989). Algunos autores han visto también un claro precedente de este enfoque dentro del paradigma marxista, principalmente a través de la teoría leninista de la revolución⁴⁷.

Los argumentos centrales de este enfoque subrayan la importancia de variables objetivas tales como la organización interna, la disponibilidad de recursos, el proceso de movilización, las estrategias o las redes de comunicación para explicar la emergencia del movimiento social.

Los trabajos que incluimos en este apartado, si bien comparten ciertos rasgos de su análisis, elaboran desarrollos teóricos diversos, ubicando el foco de su interés en distintos aspectos de la acción colectiva. Algunos autores señalan orientaciones teóricas que van desde el neoutilitarismo estrictamente individual propuesto por Olson, hasta la perspectiva de organización- empresarial (McCarthy y Zald, 1977), o el modelo de proceso político contencioso (Tilly, 1978; Obershall, 1999; Tarrow, 1994; Gamson, 1968). La pregunta por la dinámica de la movilización es el núcleo de sus intereses empíricos. Esta pregunta define su campo de análisis y sus postulados de partida que podemos resumir de la siguiente manera: 1) se entienden los movimientos sociales en términos de un modelo conflictivo de la acción colectiva; 2) se asume que no existe diferencia alguna entre las formas de acción colectiva convencional y no convencional (teorizadas por Barnes y Kaase *et al.*, 1979), porque ambas implican un conflicto de intereses construido sobre relaciones institucionalizadas de poder; 3) la acción colectiva supone la búsqueda racional de intereses de grupo; 4) los objetivos y agravios que conducen a la acción son siempre producto de relaciones de poder; 5) el surgimiento de los movimientos sociales tiene que ver con cambios en los recursos, la organización y las oportunidades para la acción colectiva; 6) su éxito está determinado por el reconocimiento del grupo como actor político o por el incremento de sus recursos materiales y, 7) la movilización implica la existencia de organizaciones formales, burocráticas, orientadas a objetivos a gran escala.

⁴⁷ Tarrow (1997:34) afronta la visión leninista de la revolución como un claro precedente de las teorías de la movilización de recursos por cuanto que aquél otorgaba enorme importancia al liderazgo, élite revolucionaria o *vanguardia* (*empresarios políticos* en McCarthy y Zald, 1995) así como al problema de la organización. En este sentido habría abierto una tradición de análisis centrada en la organización interna del movimiento, la explotación de sus recursos, y la movilización por las élites.

Queda claro que para el enfoque de la movilización de recursos el objeto de análisis no es sólo el movimiento social sino la acción colectiva entre grupos con intereses opuestos⁴⁸. Las ideas de racionalidad y organización son sus términos propios de indagación insistiendo, a la vez, en el fundamento estratégico-instrumental de la acción colectiva y en una orientación de los actores hacia intereses, que quedan dentro del terreno dibujado por Olson⁴⁹. Por otro lado, la organización es teorizada en los términos propuestos por la perspectiva dirigencial; esto es, en función de sus estructuras organizacionales, de los procesos de dominación de las élites o del control de los recursos, etc. (Alford y Friedland, 1991:234). La teoría de la movilización de recursos se plantea para «actores colectivos que luchan por el poder en un determinado contexto institucional» (Jenkins, 1994:69) ignorándose los procesos más «micro»⁵⁰.

Los principales debates que han surgido dentro de este modelo de análisis tienen que ver con diferencias entre la teoría de la movilización de recursos y las aproximaciones tradicionales (en particular la teoría del comportamiento colectivo) respecto a la propia concepción del movimiento social: en este renovado enfoque, dicho movimiento es visto como una prolongación de las acciones institucionalizadas (Gamson, 1968). Otro de los temas más controvertidos tiene que ver con la formación del movimiento social que es concebida no en términos de agravios, sino como resultado de un cambio en los recursos, en la organización o en las oportunidades; Obershall, 1978^a, 1999). La movilización (el control o el tipo de recursos, sus usos) constituye otro de los temas recurrentes en este tipo de estudios así como el estudio de los resultados políticos que se derivan de la misma (Gamson, 1968; Mc Carthy y Zald, 1977; Tilly, 1978). Por último, el análisis de la organización (en su dimensión burocrática -centralizada o informal-descentralizada) es una fuente de debates dentro de este enfoque⁵¹.

⁴⁸ En todo caso, y a pesar de sus diferencias, los estudios incluidos en esta corriente analizan la acción colectiva en términos de interacción estratégica y cálculos coste-beneficio; operan según una visión «clauswitziana» de la política en la que la acción colectiva es la prolongación de la política por otros medios. (Cohen, 1985:675).

⁴⁹ Cuestiones como el problema del *free rider* o la provisión de *incentivos selectivos* inspiran numerosos estudios dentro de este enfoque. Véase, Hirschman, 1970; Brubacker, 1996.

⁵⁰ El marco de la *movilización de recursos* no representa un cuerpo doctrinal homogéneo sino que dentro del mismo han aparecido diversos modelos de trabajo. La distinción planteada por Perrow (*cit* en Pérez Ledesma, 1994) ha querido ver varios modelos de *movilización de recursos* como RM I y RM II en función del énfasis puesto en los recursos y en el tipo de los mismos.

⁵¹ Para un análisis más extenso del enfoque de la movilización de recursos, véase, C. Jenkins (1994). Además, se encuentra un recorrido por los distintos enfoques dentro de esta perspectiva en Casquete, (1998).

«Movilización», «creación de marcos», «estructura de oportunidad política», «estructura de movilización de recursos», «ciclo de protesta» o «repertorio de confrontación» son algunos de los conceptos más relevantes y fructíferos dentro de esta perspectiva, y que han centrado su campo de análisis convirtiéndose en variables explicativas de la mayoría de los fenómenos de la acción colectiva. Bajo el enfoque del proceso político o de la dinámica de la contienda se incluyen todas aquellas llamadas «teorías políticas del conflicto» y constituyen parte fundamental del entramado teórico con el que se abordará el análisis en los próximos capítulos.

Las teorías del conflicto político desarrollan su modelo de estudio a partir de algunas de las ideas ya expuestas, construyendo un modo de indagación enormemente útil para comprender, por un lado, la vinculación entre la política institucionalizada y los movimientos sociales. Por otro lado, el sistema político y su relevancia a la hora de estructurar las oportunidades para la acción colectiva. En definitiva, la propuesta de este modelo subraya el carácter dinámico del proceso y pretende dar cuenta, de forma amplia, de sus muchos y variados determinantes en el contexto de un conflicto político.

Las teorías políticas de la acción colectiva conciben la acción en términos de intereses colectivos, en clara oposición tanto a las teorías que excluían cualquier explicación fundamentada en la racionalidad, como frente a aquellas que la planteaban como resultado del interés individual. En este modelo es el grupo el que define el nivel de análisis. Por otro lado, la acción colectiva (incluso en su dimensión violenta) es considerada como una continuidad en las formas de acción social posible.

Este enfoque no pretende (al estilo de la teoría de la integración de valores o la del comportamiento colectivo) determinar por qué «la gente» actúa de forma colectiva exponiendo, digamos, una teoría «general del comportamiento de las masas». En realidad, lo que trata de clarificar es más bien por qué determinados grupos lo hacen en un momento determinado y la forma en que esto tiene lugar. En las propias palabras de Charles Tilly *«por qué las personas entran en conflicto de distintas maneras y con distintas intensidades»* (Tilly, 1998:54).

Esta visión de la acción colectiva tiene que ver, por tanto, más con intereses enfrentados (con conflictos) y con oportunidades políticas de y para grupos concretos que con explicaciones generales del comportamiento político. Su foco empírico se ubica en la formación y el auge del movimiento social y otras formas de acción colectiva

(huelgas, revueltas, revoluciones, etc.). Estos fenómenos se entienden en el marco de un conflicto, considerando el Estado y el sistema político como el entramado institucional de referencia en la definición de los parámetros del proceso político. De esta manera, la emergencia del movimiento social se puede explicar como consecuencia de cambios en la estructura institucional o en las relaciones de poder informal en un sistema político determinado. Esto último plantea la posibilidad de analizar la relación entre cambio social y cambio político (Tilly, 1998).

Esta forma de trabajo evalúa el papel del Estado y del contexto político en el desarrollo y la dinámica de la acción colectiva. El modelo de movilización vinculado al proceso político (fundamentado principalmente en la obra de Tilly) entiende dicho fenómeno, incluso en su forma violenta, como la prolongación de la política por otros medios, prestando atención a los diversos escenarios de sociabilidad que puedan estructurar la acción.

Uno de los principales argumentos plantea que la gente se implica en la acción colectiva en forma de movimiento social como respuesta al cambio en algunos de los factores que aparecen en el entorno político y que ofrecen incentivos para la movilización. Así, la “estructura de oportunidad política” (EOP), se ha convertido en un concepto central en esta corriente, desarrollado y ampliamente utilizado por los teóricos del conflicto para abordar el fenómeno de la movilización. Volveremos sobre este concepto pero baste retener aquí que la oportunidad política cuenta con una doble configuración. Define por un lado las posibilidades de los actores y su entorno y, en una segunda vertiente, afecta al Estado en tanto que espacio de la competición política (Tarrow, 1994). Otros autores han recurrido también a la idea de «oportunidad política» enfatizando los recursos exteriores al grupo (Oberschall, 1978a) u otro tipo de factores posibles. En definitiva, se ha desarrollado como una herramienta de enorme poder explicativo, fructificando a lo largo de numerosos estudios que dentro de esta corriente analítica han tratado de aproximar sus dimensiones definitorias en el curso de la investigación (Tarrow, 1989; Kriesi, 1992; Klandermans, 1997).

Subyace en esta manera de enfocar la acción colectiva una concepción de la política muy concreta, así como de su institucionalización a través del sistema político: una visión ésta que supone una fuente permanente de conflictos de intereses entre grupos que están vinculados, en último extremo, con la distribución del poder. El sistema político (*polity*) no es sólo el entramado institucional de donde surge el

conflicto de intereses colectivos y que perfila los márgenes para la definición de la acción, sino que determina institucional y estratégicamente el desarrollo de los mismos. Conceptos como «estructura de oportunidad política», «ciclo de protesta» o «repertorio de acción colectiva» definen esta vinculación acción-estructura-proceso político.

2.2.1.2 Cultura: identidad, sentido y discurso

Hasta aquí, la acción colectiva es concebida siempre en términos de racionalidad política. Se opera con un concepto de «actor racional» cuya lógica de acción *medios-fines* determina una visión de la acción colectiva demasiado instrumental y estratégica que puede ser criticada, como algunos autores han hecho, por excesivamente estrecha.

En un planteamiento muy distinto encontramos teorías de carácter más cultural que argumentan a partir de marcos de significación, discursos y, en definitiva, cultura. El conjunto de trabajos que componen, de una forma más o menos homogénea, el así llamado «paradigma de la identidad» (Cohen, 1985) o «paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales»⁵², se define como un intento de establecer las diferencias con el enfoque de la movilización de recursos y proceso político. Es común a todos ellos el hecho de haber tratado de enfatizar el análisis de la dimensión «integradora» de la acción contestataria o de la protesta (Cohen, 1985:691), sin caer en la tesis de «derrumbe moral» que está en la base de las teorías del comportamiento colectivo.

Por otro lado, este enfoque está anclado en una tradición de pensamiento cuyas influencias marxistas y estructuralistas son innegables. Si bien no es fácil, como se ha planteado en este trabajo, encontrar aportaciones específicas al estudio de la acción colectiva en el marxismo más clásico, la renovación permanente en el seno de esa tradición sí ha permitido abordar algunas de las cuestiones relevantes para el análisis de la misma al poner el énfasis en aquéllas cuestiones como *conciencia de clase* (Lukács, 1969), la *ideología* o la *hegemonía cultural* (Gramsci, 1971), que están más vinculadas con el poder de la cultura que con la estructura material en el sistema capitalista. De esta manera el desarrollo de esta corriente centrada en la identidad, adscrita fundamentalmente al ámbito académico europeo, pone su atención permanente en los determinantes estructurales del sistema capitalista a los que pretenden dar respuesta los nuevos movimientos sociales. Por otro lado, se plantea la reflexión sobre

⁵² En adelante se aludirá a los Nuevos Movimientos Sociales con el convencional acrónimo de NMS.

otros tipos de determinantes posibles de la acción que vayan más allá de los propuestos por los modelos neo-utilitaristas y del actor racional. Subyace una búsqueda de diferentes lógicas posibles que puedan motivar dicha acción en su dimensión colectiva. Conviene señalar, en todo caso, que no se trata de una corriente homogénea de análisis sino que, a partir de postulados básicos compartidos, se llevan a cabo desarrollos teórico variados.

El concepto «identidad» alude a los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que mediarían entre la oportunidad, la organización y la acción común (González Calleja, 2002). En el modo de enfocar y analizar la realidad social que propone este tipo de trabajos, el actor social es complejo y su movilización depende, no sólo de variables estructurales, sino de la interpretación que el propio actor construya del proceso de movilización en el curso del mismo. Por esta razón, se destaca el papel de las transformaciones sociales y de su incidencia en los procesos de construcción de identidades colectivas (aquellas definiciones de pertenencia a un grupo, sus límites y su universo propio) que son parte esencial en la formación de los movimientos sociales.

Touraine y Melucci, considerados los representantes más destacados dentro de esta corriente, plantean a través de sus diversos estudios la idea de que la aparición de los NMS tiene lugar como una forma de respuesta cultural a determinados cambios sociales e históricos acontecidos a lo largo de los años sesenta (Touraine, 1978; Melucci, 1985; 1999)⁵³. Para estos autores, los agravios (por volver a las explicaciones más clásicas) alrededor de los cuáles se movilizan los actores colectivos no son «objetivos» sino que forman parte del proceso de construcción del actor colectivo (del «yo» colectivo), interpretándose e incluyéndose en su ideario compartido. Por esta razón, conceptos como «identidad colectiva» y «movilización del consenso» se traducen en verdaderos temas de investigación a la vez que en variables explicativas de los distintos fenómenos colectivos.

El terreno de análisis característico de este enfoque no es, pues, el de la organización formal (en los términos propuestos por el paradigma dirigencial, como plantearan algunos trabajos dentro del modelo de proceso político) sino, más bien al

⁵³ Es de rigor hacer referencia a las diversas influencias que, en este sentido, le han sido atribuidas a este tipo de análisis y que irían desde *la teoría de la acción comunicativa* de Habermas pasando por Barthes o Derrida hasta conceptos bourdianos como el de *habitus*.

contrario, el ámbito de lo informal, de lo espontáneo, del bajo grado de diferenciación y de la falta de estructuración. El tema objetivo es fundamentalmente el del análisis de los NMS⁵⁴ y, de la novedad del fenómeno, surgen las grandes preguntas que van a centrar este tipo de trabajos. Preguntas que, por otro lado, determinan el modo y los términos de la explicación que se ofrece de la acción colectiva. Se trata, en primer lugar, del tipo de actores sociales que se involucran en dichos procesos. Al análisis de los actores otorgan determinantes estructurales que tienen que ver con elementos del sistema capitalista (Offe, 1988; Eder, 1985) a la vez que se analizan valores, lazos de sociabilidad y solidaridad derivados (en este caso) de los cambios en tales estructuras. Otro de los temas propios de trabajo se asocia con las formas de organización, las redes, la vinculación al grupo y la construcción de las identidades colectivas (Melucci, 1999). Finalmente, las formas de acción así como los significados, narrativas y discursos que se le atribuyen a las mismas, constituyen, sin duda, una muy fértil fuente de trabajos de investigación. Desde esta perspectiva interpretativa, conciencia y acción aparecen unidas. Los individuos nunca actuarían en el vacío sino que lo hacen colectivamente y de forma concertada, «construyendo» su acción a la vez que definen y producen el sentido de la misma. La indagación en el concepto de «identidad» y el proceso de construcción social de la movilización como sistema de acción han presidido, con éxito, el trabajo de Melucci⁵⁵.

En gran parte de los trabajos expuestos, subyace una comprensión de los movimientos sociales en la que la naturaleza de las demandas (que irían más allá de lo puramente material para ubicarse en el ámbito del reconocimiento y la inclusión) determina, asimismo, el carácter y el proceso de la acción. De esta manera se establecería una *lógica de la acción colectiva* que es más *expresiva* (Pizzorno 1989), que *estratégica-instrumental*.

En general, los teóricos europeos han visto en la cuestión de la identidad y de la cultura compartida el elemento central de la acción colectiva, en particular, del movimiento social. Así, a pesar de las deficiencias que este modelo pueda plantear en términos analíticos, ayuda enormemente a comprender lo que la teoría de la

⁵⁴ Debemos insistir en la idea de que son los contenidos de las demandas que plantean los NMS y no su clasificación cronológica los que otorgan la cualidad de «nuevos» movimientos sociales. Por esta razón, la naturaleza de las demandas y su articulación son un tema de análisis característico dentro de esta corriente (Kriesi, 1989).

⁵⁵ Una clara exposición del trabajo «constructivista» de Melucci, puede encontrarse en Revilla (1994). Véase también, para completar las distintas aportaciones dentro de este enfoque, el número monográfico de *Zona Abierta* 69 (1994).

movilización de recursos y de proceso político dejaba sin explicar: el hecho de que pudiera ser necesario algo más que una racionalidad instrumental de los actores colectivos para generar la acción. O, lo que es lo mismo, que nuevamente parece necesario preguntarse no sólo por el *cómo* sino también por el *por qué* de la acción; buscando en ese *por qué* una racionalidad que se aleje de las viejas teorías funcionalistas para conocer, a través de la naturaleza de las demandas (y por lo tanto de los conflictos), qué hay en la sociedad que mueva a, ahora sí, la “acción colectiva”.

Por otro lado, los autores adscritos tanto al modelo explicativo del «proceso político» como al de la «identidad», han lanzado durante años duras y numerosas críticas hacia el enfoque opuesto arguyendo las deficiencias de uno y otro, a pesar de lo cual ambos han dominado el análisis sociológico de la acción colectiva en las últimas décadas y han terminado por trabajar con marcos teóricos híbridos en los que el papel de la cultura y el de la estructura acaban por fundirse para una mejor comprensión del movimiento social. El debate central entre ambas corrientes gira en torno al factor que consideran vertebrador de la acción colectiva: la racionalidad colectiva o la identidad cultural. Por esta razón los puentes teóricos tendidos a uno y otro lado del Atlántico no han dejado de estrecharse en las últimas décadas, convirtiéndose en enfoques no sólo compatibles sino complementarios (Klandermans, Kriesi y Tarrow, 1988). Y podemos por tanto hablar de cierta integración de los modelos.

De hecho, a lo largo de los noventa en la sociología norteamericana y superando en buena medida las limitaciones excesivamente estructurales de las teorías del proceso político, comenzaron a tener resonancia los enfoques del *framing* sobre los movimientos sociales. Así, a partir del enfoque dramático de Goffman (2006) se elaboraron las teorías del “enmarque” en virtud de las cuales, la emergencia y el proceso de la acción colectiva está vinculado a la construcción de marcos de comprensión y significado en relación con los agravios y la construcción colectiva de estrategias favorables a la acción (Snow et al 1992; 2000). Los marcos ideológicos-culturales serían para Gamson, por ejemplo, todas las ideas, tradiciones, discursos políticos, valores y lenguajes que permiten, al colectivo *movilizador*, elaborar discursos críticos e interpretar las circunstancias políticas en términos conflictivos (Gamson, 1992a)⁵⁶.

⁵⁶ Para una mejor comprensión del proceso de «construcción de marcos» como actividad colectiva y formación de la identidad colectiva, véase: M. Diandi y R. Eyerman (1992); Benford y Snow (2000).

Han sido muchos autores los que han tratado de integrar perspectivas articulando con éxito los componentes estructurales y culturales de la acción. Así, la noción de “movilización del consenso” (Klandermans, 1997), la conceptualización de las oportunidades culturales o ideológicas (Koopmans, 2005; Della Porta, 2008), la atención a las emociones o los nuevos modos de comprensión de la temporalidad, atendiendo a elementos del cambio cultural (Aminzade y McAdam, 2001; Sewell, 2005), son algunas de las líneas de trabajo más innovadoras en los últimos años.

Llegado este punto y antes de avanzar, podemos extraer alguna conclusión teórica preliminar que nos permita establecer una definición de conflicto desde un punto de vista sociopolítico.

Atendiendo a los marcos propuestos podemos y debemos adoptar una teorización del conflicto político que nos permita ubicar en su seno el estudio de la violencia política. Los planteamientos expuestos a lo largo de esta sección permiten establecer que un conflicto político estaría definido mediante alguna forma de disputa, oposición o pugna entre dos o más partes que, eventualmente, conduce a la violencia. Pero, ¿qué es lo que lo define específicamente un conflicto como “político”? Si pensamos que la mayoría de las definiciones de política aluden a la noción de poder, un conflicto político sería una contienda o disputa que ocurre con la pretensión de alcanzar alguna forma de distribución del poder.

Charles Tilly, quien ha hecho del conflicto político el tema central de su obra, plantea una definición que podría servir como punto de partida. Las implicaciones de esta definición sugieren un tipo de investigación muy particular sobre conflicto que será revisada con posterioridad; sin embargo, puede resultar de enorme utilidad para abordar la cuestión del conflicto y su relación con la movilización como objeto de análisis.

«El conflicto político incluye todas las ocasiones en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen, afectarían a los intereses de estos últimos) y en las que al menos una de las partes, incluyendo terceras partes, es un gobierno. Por lo tanto el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, guerras, conflictos étnicos, movimientos sociales, genocidios, campañas electorales, la mayoría de las huelgas y cierres patronales, parodias públicas, incautaciones colectivas de mercancías y muchas otras formas de interacción», (Tilly 1998:23).

Esta visión del conflicto, por un lado, delimita el terreno de lo político al incluir como una de las partes en confrontación a un gobierno⁵⁷. Según esta definición, será la naturaleza de las reivindicaciones la que determine su dimensión política. Estas son colectivas, públicas y visibles; elementos todos ellos que definen la esfera de lo político. Por otro lado, se trata de reivindicaciones que tienen que ver, en todo caso, con algún tipo de distribución-ejercicio-pretensión de poder político por ser un gobierno parte esencial de la contienda.

De la definición de Tilly se desprende, además, una segunda cuestión que tiene que ver con la dimensión social del conflicto político; se nos ofrece una visión «relacional» de dicho proceso. En el conflicto surgen relaciones e interacciones entre grupos sociales que contribuyen e inciden en su desarrollo y dinámica. Una teorización de la acción colectiva vinculada al conflicto resulta así fundamental y, por ello, toda la corriente señalada ha vinculado la idea de conflicto al análisis de la acción colectiva definiendo ésta (o algunas de las formas que puede adoptar) en relación a la idea de conflicto e incluso como su identificación⁵⁸.

En este terreno del conflicto considero que debe ser entendida la violencia, pues gran parte de los fenómenos que Tilly incluye en su definición son fenómenos violentos, en los que se recurre a la violencia o en algún momento devienen violentos. En el centro de las relaciones entre la política y la sociedad, y como un fenómeno contingente, no necesario y que se debe analizar en relación con contextos sociopolíticos específicos, en relación directa con el cambio social y como una estrategia racional y estratégica puesta en marcha por actores colectivos en el marco de

⁵⁷ Según la definición dada por Weber, la política tiene que ver con la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política; el Estado, que tiene el control efectivo del poder político y se define por el medio específico que posee: la violencia. La política, entonces, supone la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del mismo. En esta lógica, un conflicto político sería, por tanto, una contienda o disputa que ocurre con la pretensión de lograr alguna forma de distribución del poder que, a la sazón, corresponde al Estado. Esta definición que se inserta en una visión organizacional de los fenómenos políticos restringe en exceso el espacio del conflicto y no permite la posibilidad de una teoría de la acción. Sin embargo, es una de las referencias claves para comprender la definición de Tilly de conflicto político en tanto que relación con el Estado.

⁵⁸ 1. La Acción colectiva contenciosa es definida como: «acción colectiva discontinua de enfrentamiento». Lo que la distinguiría de la acción colectiva normal es que: «La gente no sólo se reúne para actuar a favor de sus intereses, sino que además lo hace de forma que afecta de una manera directa, visible y significativa a la realización por otros individuos de sus propios intereses» (Ch. Tilly, 1986:3).

2. El Movimiento Social (como forma de acción colectiva) estaría definido como:

a) «Desafío colectivo planteado por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en su interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades» Ch. Tilly, (1997: 21).

b) «Secuencias de acción política basadas en redes sociales internas y marcos de acción colectiva, que desarrollan la capacidad de mantener desafíos frente a oponentes poderosos». Sidney Tarrow (1998: 23)

lo político. Por esta razón, recuperaremos al final de este capítulo conceptos fundamentales para el análisis de la acción en su contexto, como son el repertorio, las oportunidades y los acontecimientos.

2.2.2 La sociología de la violencia

La noción de violencia presenta más dificultades desde el punto de vista de su análisis como fenómeno social. Por las múltiples dimensiones que se pueden asociar a ella, por sus connotaciones y el gran calado simbólico que implica (puede tener muchas caras y lecturas), ha sido teorizada desde las más diversas visiones de lo social e, incluso, excluida de ellas⁵⁹. Su apariencia a menudo difusa y anárquica y, por otro lado, el carácter trasgresor de buena parte de los hechos violentos, la han ubicado en una cierta marginalidad dentro del análisis social (González Calleja, 2002b), a la vez que ha hecho de ella una cuestión problemática en los casos en los que se ha tratado de teorizar. J. Keane (2000) ha dado cuenta de esta idea insistiendo en la escasa tendencia a teorizar sobre las causas de la violencia política (en un siglo, por otro lado, bien cargado de ella).

Como fenómeno social, el debate más habitual sobre la misma ha estado asociado, como hemos visto, a su carácter racional y relacional frente a consideraciones que tienen que ver con estados psicológicos o con la ausencia de racionalidad alguna. Pero no existe una sociología integrada de la violencia y por lo tanto encontramos explicaciones parciales y, en general, numerosas y contradictorias definiciones de violencia política⁶⁰. Por esta razón, el examen de los distintos marcos que han abordado la cuestión, ya en los paradigmas clásicos, ya en los desarrollos más recientes, ha revelado que ésta se explica de forma normalizada o patológica, desde el nivel

⁵⁹ Ha sido concebida tanto como antítesis de lo social (H. Arendt o J. Freund) como realmente fundadora del orden social y generadora de identidades (Sorel, Fanon o Marcuse).

⁶⁰ Trataré de ilustrar esta contradicción con algunas definiciones claramente opuestas:

1- «*La violencia tiene que ver, no tanto con el poder, como con las formas de su distribución y control*» (Sotelo, 1992: 56)

2- «... *la destrucción deliberada de personas o propiedades por gente que actúa unida (...). presenta variadas formas: ataques contra el gobierno, ataques del gobierno, luchas en torno a instancias no gubernamentales, acciones dirigidas al ejercicio del poder central o sustancialmente desligadas de él, acciones cuidadosamente orquestadas con antelación o surgidas del inmediato flujo de acontecimientos. Implica tanto la lucha sobre alternativas claramente políticas como sobre aquellas situaciones en el lugar de trabajo, el vecindario, la escuela y el lugar de culto*» (Rule 1988:11-12).

3- Rene Girard define la violencia como “desafío radical a lo social, inaccesible a las categorías de análisis e imposible de ser concebida más que negativamente como consecuencia contagiosa, imprevisible e inasignable de venganzas y contra venganzas, que es la negación de lo social como mundo de la regla.” (1972, cit en González Calleja, 2002a).

individual o desde el colectivo o, simplemente, desde otro vocabulario en función de categorías más amplias de análisis que definen su visión.

La sociología del conflicto y la sociología política han sido, como hemos visto, las ramas de la ciencia social que más han contribuido al enriquecimiento y la profundización en el estudio de la violencia⁶¹. A la luz de esta última idea, aquí la violencia no será considerada como una ruptura de la interacción social sino como una de sus formas, bajo la asunción de que no puede ser tratada como un hecho sin sentido, sino como una acción simbólica con significado. Es más, como una manifestación del conflicto. Por esta razón, se ha pretendido problematizar asociados los conceptos de «conflicto» y de «acción colectiva» aludiendo inevitablemente a la idea de violencia. Si conflicto y acción colectiva pueden estar ciertamente unidos, con el fin de un enriquecimiento del análisis de ambos, conflicto y violencia lo están intrínsecamente, aunque conviene que sean teorizadas por separado (González Calleja, 2002). En este trabajo se pretende incluir la violencia política dentro de un campo de análisis de la acción colectiva racional; como un tipo específico de ésta.

Pero la fragmentación descrita en el estudio de la violencia y del conflicto y, por otro lado, la casi permanente presencia de ambos conceptos en la producción de las ciencias sociales (unida a la aparición de todo un elenco de teorías que poco menos que identifican el conflicto con la acción colectiva), han generado una diversidad terminológica que dificulta aún más, si cabe, el análisis.

Todos la utilizan pero nadie la llama por su nombre (Braud, 2006). Y es que, cuando se habla de la violencia política, los marcos del movimiento social también se quedan estrechos. Hablar de violencia política implica referirse a la guerra convencional, a distintas formas de insurgencia, guerrillas, guerras asimétricas, represión policial de la protesta, genocidios, guerras civiles o al terrorismo estatal o insurgente. En consecuencia, más allá de que los planteamientos de la sociología de la acción colectiva fueran suficientes para abordar la violencia en la política como objeto de estudio, habría aún que señalar un amplio conjunto de investigaciones que, no siempre vinculadas a los parámetros analíticos de la sociología política, abordan empíricamente fenómenos de violencia.

⁶¹ Desde los años setenta se produjo una explosión de estudios sobre el conflicto político, pero el trabajo se ha desperdigado en numerosas áreas especializadas de diversas disciplinas (sociología, historia, ciencia política, y economía). Además, los estudios culturales a partir de los años noventa han contribuido a incrementar la fragmentación del estudio de dicho fenómeno.

Podríamos señalar, quizá de una manera aventurada y sin que ello implique corrientes homogéneas en sus intereses, líneas de investigación o terreno empírico de análisis, tres grandes líneas de fractura en relación con el análisis de la violencia⁶².

Por un lado, tenemos aquellos trabajos que abordan la violencia a partir de una definición estructural, ya en el marco de los estudios de paz (Galtung, 1969) ya desde el cuestionamiento del capitalismo avanzado o de la violencia sistémica como resultado de la revolución neoconservadora (Zizek, 2000; Badiou, 1994; Negri y Hardt, 2005).

Por otro lado, atendiendo a la división de los niveles estatal y societal como foco de análisis, podemos establecer una diferencia entre aquellos estudios que abordan la violencia del Estado, ya a través de la represión de la protesta (Della Porta, 1995; Marx, 1998; Jaime y Reinales, 1998; Palacios, 2011) ya en el uso de la violencia a gran escala como el llamado “terrorismo de estado” (Martín Baró, 2003; Chomsky, 2004), pero también aquellos estudios sobre las nuevas formas de guerra (Kaldor, 2002; Münkler, 2005), los conflictos étnicos y comunitarios (Fearon y Laitin, 2002; 2005; Ferón y Hasting, 2003) o las guerras civiles (Kalyvas, 2000; 2003; 2008). Frente a éstos, que consideran la violencia política a partir de la centralidad del Estado, estarían los estudios que abordan exclusivamente la violencia societal. En esta línea debemos señalar la mayoría de los análisis clásicos del terrorismo (Rappoport, 2002; Crenshaw, 1986; Laqueur, 2003) así como los más recientes que han proliferado en la última década en relación con la emergencia de “nuevas” formas de terrorismo⁶³ (Hoffman, 2004; Wilkinson, 2000).

Una tercera línea podría servir para clasificar los análisis de la violencia realizando una división en función de la teorización de la legitimidad de la violencia en tanto liberadora u opresora. Si bien ha perdido resonancia de manera significativa en tanto que, en el contexto sociopolítico presente, nada positivo puede decirse de la violencia, como plantea Wieviorka (2003) y como tendremos la ocasión de comprobar a lo largo de los próximos capítulos, esta corriente estaría compuesta por las teorías revolucionarias de la violencia desde Sorel o Fanon hasta las teorías del foquismo en América latina.

⁶² Una organización alternativa y una exposición más exhaustiva de los desarrollos recientes en relación con la violencia política véase en el número monográfico de la revista Zona Abierta 112/113 de 2005, compilado por Francisco Herreros.

⁶³ Ciertamente que en los últimos años también han proliferado trabajos críticos con el paradigma metodológico dominante en los estudios de terrorismo bajo la etiqueta de “Critical Studies in Terrorism”. Véase: Herring, (2008); Gunning, (2007.)

Con todo, esta clasificación sirve sólo para señalar la fragmentación de los estudios de violencia política y para subrayar que, para abordar su examen de la violencia política desde un punto de vista sociopolítico, es necesario establecer con claridad los niveles de análisis atendiendo a la idea de que, toda aproximación a la violencia debe abstenerse de valoraciones ahistóricas y comprender el contexto social y político en el que se inserta (González Calleja, 2002a). Para ello hay algunas dimensiones que no deben pasarse por alto. En primer lugar, no puede darse una investigación sin atender al proceso ideológico y político de la violencia. En segundo lugar, es necesario considerar el proceso de socialización del descontento, la formación de la identidad y el marco (en términos de pronósticos y diagnósticos) de las demandas de un grupo social. En tercer lugar, habría que atender a las justificaciones intelectuales de la violencia. En cuarto lugar es necesario prestar atención a los elementos organizativos que facilitan o dificultan a las organizaciones el recurso a la violencia y, finalmente, a las propias estrategias del poder constituido en términos de represión/tolerancia a distintos grados de violencia.

Como definición operativa y de partida de violencia política, este trabajo considerará cualquier situación en la que la violencia, el uso o la amenaza de la misma, ocurre en relación con cualquier tipo de demanda vinculada a la distribución de poder. Con ello se ubicará en el espacio del poder y de las demandas, dando centralidad a las relaciones entre la sociedad y la política. Pero esta definición implica, además, entenderla en el marco del conflicto social y político. Se entenderá la violencia en tanto política, ya venga del Estado y sus agencias específicas, ya provenga de organizaciones que disputan al mismo el monopolio sobre dicha violencia en tanto poder político.

2.3 Repertorios, oportunidades y acontecimientos transformadores: la legitimidad de la violencia entre lo global y lo local

Con el fin de establecer un modelo que permita abordar el análisis de umbrales de violencia tolerada, en esta sección abordaré algunos conceptos que ya han sido señalados y trataré de adecuarlos a las necesidades teóricas de mi objeto de estudio.

¿Qué es legítimo hacer para determinados actores en el curso de una protesta?, ¿qué es legítimo para sus audiencias? En buena medida, depende. Depende del momento histórico, depende de las sociedades, de los regímenes, de los actores, de las

culturas políticas, de motivaciones e ideologías, de la naturaleza de las organizaciones, de los recursos disponibles y de un enorme rango de variables.

Dónde empieza la violencia política; hasta qué grado es tolerada por los distintos actores implicados en un proceso de conflicto; qué usos de la violencia son aceptados y cuáles no; en qué medida afectan los procesos de cambio social global a las definiciones oficiales, percepciones públicas y tolerancias a la violencia como medio de expresión política. Algunas de estas cuestiones pueden llevar a pensar que estamos ante un contexto que ha variado significativamente en los últimos veinte años y que no se parece mucho a lo que llamábamos “mundo bipolar” o “contexto de guerra fría”. ¿Qué ha cambiado? y, sobre todo, ¿cómo podemos dar cuenta de ello? ¿Cómo podemos aproximarnos a lo que parecen ser transformaciones en los discursos públicos sobre la violencia política en las sociedades occidentales?

Con el fin de contestar a algunas de estas preguntas, la presente sección pretende trabajar tres conceptos fundamentales: 1) el concepto de repertorio como herramienta analítica para el análisis de la violencia en tanto estrategia puesta en marcha en el marco de un conflicto; 2) el concepto de oportunidades políticas y su relación con la idea de contexto en el que ocurre la violencia y, 3) el concepto de “acontecimiento” como dimensión temporal fundamental para el análisis de la legitimidad de la violencia.

Para ello situaré el análisis de la violencia política dentro de las categorías propuestas por el ya comentado modelo de “proceso político”⁶⁴. Y ello porque, a pesar de las fundamentadas críticas que haya podido recibir (muchas de las cuales han sido consideradas en revisiones posteriores de su agenda clásica) dicho planteamiento es esencial para comprender la violencia dentro del marco de un conflicto: en tanto que la considera como una estrategia políticamente motivada. A continuación presentaré una teoría de los acontecimientos que permita entenderlos como procesos históricos y sociológicos de gran relevancia para el análisis sociopolítico y, en particular, para el análisis de la violencia.

2.3.1 La violencia política: entre la acción y el contexto

Tal y como hemos planteado con anterioridad, una aproximación a la violencia política en cualquiera de sus dimensiones debe atender, al menos, al amplio conjunto de

⁶⁴ Este modelo ha sido redefinido por algunos de sus principales autores como modelo de análisis dinámico de la contienda política. Véase: McAdam, D., *et al.* (2005)

medios y estrategias disponibles para actores concretos y al ambiente o contexto cultural e institucional en el cual determinadas acciones son puestas en práctica.

La primera cuestión conduce a la noción de *repertorio* de acción colectiva, propuesta por Tilly a través de sus numerosos trabajos dedicados a comprender las condiciones, causas y desarrollos de la misma (Tilly, 1993; 1995). El “repertorio” alude al “*conjunto de medios que un grupo tiene para hacer visibles demandas de distinta naturaleza sobre distintos grupos o individuos*” (1993:265). Generalmente, el repertorio cambia en función de la racionalidad estratégica y de la interacción con otros actores. Por tanto, una acción se pone en marcha, y no otra, en virtud de intereses concretos y dependiendo no sólo de lo que se pretende conseguir sino también de lo que es posible hacer, de los recursos disponibles, y de las capacidades y habilidades de los protagonistas.

La violencia, como parte del repertorio, es entendida como procedimiento racional (en tanto que entraña un cálculo de costes- beneficios) por el cual distintos actores emprenden estrategias dinámicas de conflicto para hacer visibles sus demandas ante los oponentes. Así lo plantea Tilly en algunos de sus textos. Y, sin embargo, los costes de la acción también están atravesados por una dimensión simbólica que es una de sus características más distintivas. La violencia es un mecanismo expresivo de visibilizar demandas que genera significados para las comunidades de legitimación de las organizaciones que recurren a ella, así como para audiencias más amplias.

El concepto de *repertorio* posee, entonces, componentes estructurales, históricos y culturales (Tilly, 1995). Tanto si se considera su racionalidad como su lógica expresiva, determinados tipos de acción están expuestos a coerciones estructurales y narrativas que dan forma y afectan al modo en que dichas acciones son puestas en práctica o no, hasta qué punto o con qué límites.

En todo caso, con el fin de poder usar la noción de repertorio para comprender aspectos de la legitimidad atribuida a la violencia, la dimensión cultural debe ser enfatizada. Y por lo tanto, asumiré que toda acción humana y concretamente la acción política es moldeada por, e interpretada a través de, significados culturales. Significados sobre los que se generan conflictos y que son negociados y utilizados por los actores (Swilder, 2003). Los individuos y los grupos operan de manera autónoma con los elementos de la cultura, adecuándola a sus intereses. Así también, el uso de la violencia o cualquier otro medio de expresión del conflicto, será mejor comprendido si consideramos el amplio conjunto de creencias, valores y discursos que se vinculan al

mismo (Sewell, 1996), tanto como el lenguaje hegemónico en cuyo contexto dicha acción tiene lugar. Debemos asumir, en todo caso, que la clave de la violencia política está en su legitimidad y que la gente no comete violencia política sin discurso (Apter, 1997) y sin un universo simbólico o red de significaciones en el que ésta cobra sentido (Geertz, 2003).

Respecto a la dimensión contextual de la acción, dentro de la corriente del llamado “proceso político” se ha subrayado la importancia del sistema político como elemento condicionante de la acción colectiva. El concepto “oportunidad(es) política(s)”, alude a las dimensiones del sistema político que proporcionan incentivos para la acción o disuaden de la misma: busca vincular la política institucional a la acción colectiva⁶⁵. La noción de “estructura del contexto” desarrollada por D. Rucht (1999) ayuda a superar ciertas limitaciones empíricas que entraña la noción de *oportunidades* al ignorar que la acción no está constreñida exclusivamente por las características del sistema político. Partiendo de una idea tridimensional del contexto (factores sociales, culturales y políticos), se puede abordar un entorno más amplio que el meramente político-institucional y, a la vez, le permite comprender el papel central de otros factores como las actitudes, creencias y valores relevantes en cada contexto.

R. Koopmans, por su parte, ha enfatizado la necesidad de un enfoque integrado de las oportunidades que permita dar cuenta de la dimensión cultural y comunicativa del contexto. Partiendo de elementos del análisis de los marcos (Benford y Snow, 2000) y de los presupuestos del proceso político, este autor lanza la idea de “oportunidades discursivas” con el fin de capturar el papel interviniente del discurso público en la movilización. Recurriendo a la producción de significado del discurso público y a su capacidad para dar forma al proceso de reivindicación de demandas, este modelo ayuda a evaluar el universo simbólico en el que la acción tiene lugar (Koopmans, 2005).

Expresadas de forma muy general, las dos dimensiones expuestas (por un lado, la acción a través de la idea de “repertorio” y, por otro, el “contexto” entendido como ambiente más amplio que el puramente político-institucional) sitúan el análisis en un terreno en el que tanto la acción como su contexto pueden ser abordados de un modo sistemático atendiendo a la idea de proceso necesaria para todo análisis del conflicto, central en la obra de Tilly.

⁶⁵ Sobre la noción de *oportunidad política* y algunos de sus principales debates véase Tarrow, S., *et al.* (1997); Goodwin, Jaspers y Polleta (2001).

Con el fin de centrar el análisis de la violencia política en las categorías propuestas por el llamado “modelo político” de análisis de la acción colectiva, querría señalar tres aspectos que resultan problemáticos para pensar en las transformaciones contemporáneas de la legitimidad de la violencia, como medio de acción política:

1. En primer lugar se trata de una perspectiva con un marcado sesgo *estatalista*⁶⁶. Considerar este aspecto, que ha sido señalado recientemente (Della Porta, 2008; Maskaliunaite, 2008), es de interés medular para abordar el análisis de la relación entre dinámicas globales y locales del conflicto o la protesta, tanto en sus aspectos ideológicos o culturales como en aquellos puramente estructurales. A través de la incorporación del “contexto global” en su doble dimensión institucional y cultural como un contexto de oportunidades para modos específicos de hacer política y reivindicar demandas, podríamos avanzar en el análisis de los conflictos políticos domésticos. De acuerdo con D. Della Porta, *“en el análisis de las oportunidades contextuales para la violencia, un nuevo reto surge de la dimensión global de las formas contemporáneas de violencia política y de los discursos que se desarrollan a su alrededor. [...] porque tanto el terrorismo como el antiterrorismo son globales, y las cuestiones geopolíticas de la misma manera que las guerras, las diásporas y similares, adquieren mayor poder explicativo”* (Della Porta, 2008:223).

Para ahondar en esta línea, tres dimensiones son fundamentales: en primer lugar, considerar el papel de los actores internacionales en la represión de la violencia; en segundo, la adopción y el desarrollo generalizados, tanto en el nivel internacional como en el doméstico de medidas legislativas y judiciales para facilitar la represión de dicha violencia y, por último, el proceso de emergencia y la difusión de ideas y discursos sobre el uso de la misma.

2. El segundo factor que resulta problemático para adoptar la perspectiva clásica de la acción colectiva tiene que ver con los aspectos culturales e ideológicos de la acción, o el contexto en el que dicha acción es entendida por actores y audiencias. Si bien es necesario tomar en consideración los postulados del análisis de marcos, podría

⁶⁶ Sobre el “nacionalismo metodológico”, se ha abierto en los últimos años un interesante debate que cuestiona algunas de las categorías centrales del análisis sociológico y su capacidad para aprehender determinados aspectos de una sociedad expuesta a dinámicas de transformación que son tanto globales como locales. En el caso concreto del análisis del conflicto y de la acción colectiva, la necesidad de elaborar nuevas herramientas y redefinir aquellas que tenemos disponibles es más que necesario como han apuntado algunos autores a través de sus observaciones empíricas. (Held, 1995; Iglesias, 2008, Della Porta, 2008)

ser más provechoso a nuestro análisis si esta dimensión fuera entendida como externa al movimiento; como el universo simbólico en el que ideologías y marcos tienen sentido y la acción es concebida, aprendida y puesta en escena (Williams, 2004).

No podemos ignorar el significativo conjunto de transformaciones y procesos de cambio cultural que tienen lugar en el marco de lo que llamamos “globalización”. Entre otros aspectos, estos cambios suponen la emergencia de nuevas formas de percepción social del espacio y del tiempo, que afectan al modo en que lo internacional y global es pensado en los imaginarios de los actores (Castells, 2003; 2009). Por otro lado, se puede constatar la emergencia de nuevos modos de pensar la política vinculados al consumo, a lo cotidiano (*everyday life*) o a la conexión global-local. En este contexto, lo que público y actores consideran necesario, justificado, factible o legítimo con el fin de reivindicar demandas, está atravesado por múltiples factores culturales que están inmersos en un proceso de cambio que bien puede entenderse como “glocal” (Robertson, 1992).

En este sentido, una de las limitaciones más significativas del enfoque de *marcos* para la acción colectiva estribaría, a mi juicio, en el hecho de considerar la dimensión cultural de la acción como algo totalmente maleable por el movimiento. Los marcos son “mapas cognitivos” a través de los cuáles los actores del movimiento social comparten definiciones de diagnóstico y pronóstico (Snow et al., 2000). La resonancia cultural que se espera que tengan para ser efectivos está ligada a la capacidad de los movimientos para llegar a sus audiencias. Sin embargo, existe una cierta falta de atención hacia el papel de las fuerzas y variables contextuales, incluidas las características simbólicas sistémicas de los entornos culturales, el papel de los acontecimientos y episodios históricos y políticos a la hora de dar forma a los resultados de los marcos (Hallgrímsdóttir, 2006). Por consiguiente, conocer el universo simbólico en el que marcos concretos tienen sentido y la acción es entendida, apropiada y movilizadora (Swidler, 1996; 2003) es interesante en la medida en que nos permite ampliar el espectro de análisis. Abre el abanico de actores cuyas acciones simbólicas pueden ser comprendidas. Permite atender a un espacio en el que un variado conjunto de acciones sean evaluadas como legítimas, efectivas, innovadoras, transgresoras o totalmente inaceptables. De acuerdo con Koopmans: “*Gran parte del contexto cultural en el que los movimientos sociales actúan está más allá de su esfera inmediata de influencia y*

puede ser por tanto caracterizado como estructura cultural de oportunidad" (Koopmans, 2005: 19).

3. En último lugar y con el fin de dar cuenta de la vertiente más dinámica de este "contexto", es necesario establecer un punto de vista histórico. La dimensión temporal y contingente de las configuraciones sociopolíticas así como la capacidad creativa de los acontecimientos históricos (Sewell, 2005) son esenciales para este propósito. Sólo si consideramos que el contexto es contingente y sujeto por tanto al cambio, podemos aproximarnos a él como variable susceptible de afectar a los repertorios de acción.

2.3.2 Del "análisis de los episodios políticos" al "análisis de los acontecimientos transformadores"

Los episodios⁶⁷ son piezas clave para analizar la realidad del conflicto y así son considerados en la obra de Tilly. En ellos se llevan a cabo acciones colectivas que pueden ser comparadas con otras en distintas dimensiones y frente a diferentes variables. Por esta razón, hay toda una corriente de "análisis de los episodios" en la familia de la acción colectiva.

En un pequeño artículo publicado en 1993 titulado *"Contentious Repertoires in Great Britain 1758-1834"*, Charles Tilly recoge muchos de sus principales argumentos acerca del cambio social, los cambios estructurales y las transformaciones de la contienda política (Tilly, 1993). En él plantea la noción de repertorio tanto desde el punto de vista teórico como metodológico y reflexiona, a partir de la evidencia generada en su trabajo histórico sobre la Gran Bretaña de finales del XVIII e inicios del XIX, sobre el modo de dar cuenta de dichos repertorios. Tilly apela a las propiedades culturales del concepto "repertorio"; esto es, a su naturaleza más aprendida y simbólica que racional: *"... la gente en un momento y en un lugar aprende a desarrollar un número limitado de rutinas colectivas posibles, adaptándose cada cual a las circunstancias inmediatas, y a las reacciones de sus antagonistas, autoridades, aliados, observadores, objetos de sus acciones u otras personas implicadas en su lucha"* (1993:265).

⁶⁷ Debido a la dificultad que plantea la traducción del término anglosajón "event" y dado que este trabajo versará entre otras cosas sobre dos modos distintos de pensar y por tanto analizar los episodios de acción colectiva, he optado por hacer la siguiente distinción. Me referiré a "evento" o "episodio" cuando haga referencia al tipo de hechos y acciones colectivas que considera la escuela del llamado "proceso político". Hablaré sin embargo de "acontecimiento" cuando me refiera a hechos que tienen una especial significación para las audiencias; momentos efímeros e inesperados pero cuyas consecuencias son de algún modo significativas.

Tilly desarrolla en distintos trabajos reflexiones sobre el modo de abordar el análisis de dichos cambios (Tilly, 2002). En su análisis de 1993, el cuerpo de evidencia empírica proviene de un catálogo de episodios extraídos de prensa y archivos históricos en un periodo de 13 años y contiene 8.000 “reuniones colectivas”⁶⁸. Un catálogo de episodios que es definido en otro lugar como “*un conjunto de descripciones de múltiples interacciones sociales recogidas de un conjunto delimitado de fuentes de acuerdo con procedimientos uniformes*” (Tilly, 2002: 249). Estos catálogos han sido enormemente exitosos dentro de los estudios de acción colectiva de tradición anglosajona.

Aunque el propio autor señala cómo hay determinados episodios que adquieren una significación especial y deben ser analizados en mayor profundidad (Tilly, 2004a; 2005), su trabajo se ha centrado en conceder una relevancia similar a todos y agruparlos bajo criterios uniformes. Esto es así porque se asume que los pequeños eventos se inscriben en un proceso más amplio y, por tanto, deben ser integrados para generar series temporales y espaciales. En último término este método cuantifica y compara cambios de “largo recorrido”, en los cuales un episodio concreto sería anecdótico dentro de la observación de mecanismos causales entre gran cantidad de episodios. Al final de su análisis de los repertorios de conflicto en Gran Bretaña, ofrece una propuesta sobre la variable independiente: ¿qué explica entonces los cambios en los repertorios? A través de la discusión sistemática de su variación, razona cómo los cambios ocurren de forma gradual pero en un breve periodo, y están vinculados a grandes procesos de urbanización, de institucionalización de la política parlamentaria británica, a la expansión del mercado capitalista, al incremento de los gastos bélicos, etc. Poco a poco, el repertorio se irá haciendo más público, menos violento, más enfocado al ámbito nacional y a las instituciones.

En este punto surgen, tres cuestiones fundamentales que merecen una reflexión:

En primer lugar Tilly desarrolla enormemente la idea del repertorio como una noción cultural que implica aprendizaje y modos de acción anclados en las tradiciones históricas y culturales de los distintos países, y trata así de superar parte de las críticas

⁶⁸ “Collective gatherings”: esta noción puede resultar problemática a la hora de aprehender de qué acción se trata en concreto (así como de los matices de las mismas). Tilly defiende la codificación consensuada a partir de distintas nociones que aparecen en los archivos.

recibidas desde lo que se ha dado en llamar “giro cultural”⁶⁹. Así, afirma que *“la historia previa de la protesta, constriñe las opciones de lucha disponibles”* (1993:268) o *“la acción cobra significado y efectividad a partir de una comprensión compartida, memorias, acuerdos entre distintos actores”* (1993:268).

Sin embargo, a la hora de dar cuenta de forma empírica del repertorio, la elaboración de catálogos se limita a una "cuantificación" del mismo. ¿Cómo se aborda entonces el significado de una determinada acción? Si las acciones cobran significado y efectividad a partir de la comprensión compartida, las memorias y las identidades de los actores, como por otra parte se ha puesto de manifiesto en la perspectiva constructivista europea (Melucci, 1999; Touraine, 1987) pero también en los análisis de marcos (Goffman, 2006; Gamson, 1992; Snow et al, 2000) ¿cuál es el papel creativo y constructivo de los actores dentro de los cambios en las formas de protesta en Gran Bretaña? ¿Cómo se evalúa el papel de lo que está socialmente permitido, lo que está "legitimado" desde un punto de vista político, lo que se puede hacer y lo que no (porque es del todo trasgresor)? Considerando concretamente tipos de acción que implican violencia, ¿cómo podría analizarse "qué es tolerado" por la sociedad y el Estado en el curso de una protesta?

A pesar de la complejidad del modelo, éste adolece, a mi modo de ver, de algunas limitaciones para aproximarse de la dimensión cultural en tanto que interpretativa. En definitiva, el significado o la narrativa de los actores aparecen como secundarios a la explicación⁷⁰.

En segundo lugar, las propias fuentes a partir de las cuales se recoge la evidencia empírica, como algunos autores han planteado, no son neutrales frente al contexto. Trabajar a partir de archivos oficiales, policiales o municipales, de índices de periódicos anuales, de narraciones de prensa⁷¹, de listas públicas de eventos compiladas por fuentes de prensa y similares, requiere atender al hecho de que se producen bajo

⁶⁹ Para las críticas al modelo del proceso político véase: Polleta, F. (1997)

⁷⁰ Dentro de los análisis más recientes de Tilly y sus colaboradores (McAdam et al, 2005), se ha tratado de recoger las críticas más relevantes recibidas desde la década de los noventa. En concreto, algunos aspectos del planteamiento que propondré en este texto a partir del trabajo de W. Sewell Jr. para considerar la centralidad de la dimensión cultural en la comprensión de la violencia, han sido rescatados en el programa de investigación planteado en “Dinámica de la Contienda Política”. Pero en este programa, aunque se exploran varios, casos no se aporta evidencia empírica sistemática sobre los mismos ni el modo de recogerla e interpretarla.

⁷¹ Sobre las limitaciones del trabajo en prensa véase: Franzosi, R (2004) Olzak S. (1989) y Oliver, P and D.J. Myers. (1999).

condiciones históricas y culturales determinadas en las que discursos hegemónicos sobre los modos de hacer política influyen en el modo en que determinados episodios son aprehendidos, percibidos y por tanto, narrados.

Una tercera cuestión se refiere al hecho de que, tal y como concibe Tilly los cambios estructurales y de larga duración, la temporalidad es en cierto sentido “rígida”, dejando escaso espacio a la creatividad de los actores para redefinir episodios concretos. Los actores son centrales a la protesta, pero tal y como se plantean los cambios, la coerción de las transformaciones estructurales resulta a mi juicio excesiva. Asumiendo la relevancia de las trayectorias de cambio estructural en la configuración del conjunto de acciones disponibles para los actores, ¿puede haber un espacio para la reconfiguración de los significados que se otorgan a determinadas acciones o de la legitimidad de las mismas en el curso de un proceso de conflicto?

A partir de estas tres consideraciones y asumiendo aún que a) este tipo de análisis de los episodios arroja mucha luz sobre los procesos de conflicto precisamente por establecer dinámicas estructurales de largo recorrido y al aportar una visión de las trayectorias de la violencia sin la cual no se podrá comprender el uso de la misma, y b) que el enfoque del proceso político es enormemente útil para situar el uso de la violencia en el terreno de la estrategia política: ¿cómo podemos entender los acontecimientos de modo que aporten algo acerca de la naturaleza simbólica de lo que se hace?

Pero, ¿qué significa bloquear el tráfico, manifestarse o participar en un boicot?, ¿qué significa el atentado de la T4 Barajas?, ¿y el 11M?, ¿qué significa para quienes lo llevan a cabo y qué significa para los objetivos o las audiencias? Cada una de estas acciones conlleva un conjunto de narrativas y legitimaciones (o deslegitimaciones) que las constriñen y facilitan, tanto como el marco institucional en el que se inscriben.

En su artículo *Collective violence and Collective loyalties in France: Why the French Revolution Made a Difference?* William H. Sewell plantea, a partir de los propios datos de Ch. Tilly, una dura crítica a la incapacidad de éste para comprender el sentido cultural y la capacidad transformadora de los propios procesos de acción colectiva (Sewell, 1990). Toda la obra de W. H. Sewell constituye una progresiva reacción contra la historia social y estructural en la que los cambios de largo recorrido en las estructuras materiales condicionan lo social (Sewell, 2005). Dos son las cuestiones que me interesa rescatar del trabajo de este autor para argumentar algunos aspectos de mi defensa de la necesidad de abordar la dimensión simbólica de la noción

de *repertorio*: 1) su idea acerca la temporalidad de los acontecimientos, y 2) el énfasis en el significado de las acciones.

A través de la narración e interpretación de los acontecimientos conocidos como la toma de la Bastilla en 1789, Sewell teoriza los “acontecimientos” (*events*) como “acontecimientos transformadores de estructuras”. Un episodio se convierte en un “acontecimiento” cuando es, en algún sentido, reseñable. Cuando los historiadores hablan de acontecimientos, se refieren a aquellos que son transformadores; a los que establecen un antes y un después. Sewell parte de una visión estructural de la vida social que entiende que: *"la mayoría de las prácticas sociales, sean diplomacia internacional, insignificantes finanzas o recreación cultural tienden a reproducirse con considerable consistencia a lo largo de periodos relativamente extensos"* (2005: 226)⁷². Mientras que los acontecimientos son culminaciones a veces de tendencias estructurales de largo recorrido, sostiene que *"generalmente hacen más que simplemente generar reajustes necesarios en las prácticas para una cambio social gradual"*. Lo que hace a los acontecimientos históricos tan importantes como para ser teorizados es que "redefinen la historia" alternando los nexos causales en los que las interacciones sociales tienen lugar.

A partir de su estudio de caso-acontecimiento en la Bastilla, reconstruye transformaciones tan significativas en la violencia colectiva como la emergencia de la moderna noción de “revolución” e insurrección popular (el pueblo contra el Estado). El modo en que los sucesos de la toma popular de la Bastilla por medio de la violencia son reconstruidos socialmente en la “esfera pública” (por lo que hoy llamaríamos opinión pública y “publicada”) es relevante en la medida en que, a pesar de no suponer una ruptura en el repertorio de acción colectiva, son dotados de tal significado simbólico que “sobre la marcha” se convierten en acto fundacional de la Revolución Francesa (Sewell, 2005:235).

Esta redefinición es atribuida por Sewell a dos procesos que son centrales a la construcción social del acontecimiento: por un lado, a la emergencia de un lenguaje concreto empleado públicamente en la Asamblea francesa (vinculado con las nociones de soberanía popular, voluntad popular etc.) y, por otro, al recurso a formas específicas

⁷² La teoría dual de la estructura planteada por Sewell a partir de las propuestas de Giddens y Bourdieu, permite reconocer en la estructura tanto un plano material como un conjunto de esquemas cognitivos y pautas sociales. Un desarrollo reciente de la misma está recogido en *Logics of History* (2005). Aunque a lo largo de este capítulo se ha utilizado en varias ocasiones el concepto “estructural” aludiendo a la dimensión material de las estructuras sociales, comparto plenamente la concepción cultural de las mismas.

de violencia (las propias prácticas violentas del pueblo de París). Estos dos procesos confluyen en el momento en que oradores y masas se apoyan en teorías políticas de la soberanía para justificar su propia acción. Entonces, lo que surge como un acto defensivo se convierte en un acto de voluntad popular, generando así la noción contemporánea de “revolución”.

Sewell examina la secuencia para ver el cambio en lo que se concibe como “violento”. Aquí, la narración forma parte de la explicación. Y lo hace a través de la idea de temporalidad como hilo conductor. Para entender el acontecimiento es necesario reconstruir la secuencia de acción e interpretación que conduce de la ruptura (la toma de la Bastilla), a la rearticulación y codificación de una nueva concepción de la revolución que a la larga transformó el concepto de soberanía nacional. Sólo un cambio de vocabulario no generó por sí sólo tal transformación; la eficacia de los símbolos culturales se evalúa según M. Shudson (1989) en su fuerza retórica, en su resonancia para distintas audiencias y en la retención institucional que estimulan. Sewell señala cómo la alteración de las prácticas y relaciones de poder institucional y militar (la modificación de los marcos legales y militares) es lo que genera la transformación social y política. Es en la Asamblea donde la noción de “revolución” fue legitimada⁷³.

En el discurso político pre-Bastilla la violencia era considerada irracional, contagiosa y punible. Con el transcurso de los acontecimientos, se produce una alteración en el discurso sobre la violencia y ésta pasa de ser una acción inaceptable a su total legitimación en la Asamblea; en unos días de debates políticos, la violencia se convierte en una forma de resistencia, fundadora de un nuevo orden, creativa/creadora, necesaria y legítima.

"Dentro del campo semántico y político creado por el concepto de revolución, la frontera entre la legitimidad y la ilegitimidad de la violencia popular, entre revolución y rebelión no pudo ser nunca marcada" (Sewell, 2005: 244).

Aquí estriba, a mi modo de ver, la diferencia fundamental entre Tilly y Sewell para dar cuenta de cambios en los repertorios y estilos de la protesta violenta. Mientras el primero apela a cambios estructurales de larga duración, el estudio en profundidad de un acontecimiento (o sucesión de acontecimientos) permite al segundo señalar cambios en la propia concepción de la violencia, en lo que de forma sobrevenida se puede convertir en tolerable y justificable.

⁷³ Sewell no es ciego a tendencias subyacentes de cambio estructural (material, por así decirlo). Plantea más bien la cristalización de las mismas en el proceso transformador del acontecimiento.

Entre las implicaciones teóricas de la narración de acontecimientos, Sewell resalta las siguientes cuestiones:

1) Los acontecimientos históricos rearticulan las estructuras (prácticas institucionales y discursivas).

2) Los acontecimientos históricos son transformaciones culturales: son "*actos de significación*" (Sewell, 2005: 245) literalmente significativos porque "*introducen nuevos significados de lo que realmente existe*" (de lo que está bien, de lo que es posible) y reconstruyen las categorías mismas de la cultura y la acción política. Esto implica que el proceso de interpretación simbólica es parte y todo del acontecimiento histórico.

3) Los acontecimientos están perfilados también por condiciones particulares: por ejemplo, las condiciones semánticas a las que estaba sujeto el concepto "pueblo" o el significado anterior de la "fortaleza", que ya era símbolo de injusticia. Este conjunto de factores y condiciones locales previamente existentes contribuyen a alimentar el acontecimiento.

4) Los acontecimientos son momentos de incremento desmesurado de las emociones, momentos de "efervescencia colectiva" y actos de creatividad colectiva: se elaboran nuevos argumentos, se generan improvisaciones, nuevas formas de organización, circulan nuevas ideas y todo cristaliza en la esfera pública.

5) Los acontecimientos están salpicados de rituales y, además, generan otros acontecimientos: la procesión con los vencedores, la visita a la Asamblea, los ceremoniales. Se genera una percepción de "comunitas" que, otorga poder psicológico y social.

Finalmente, hay dos aspectos de la teoría de los acontecimientos de Sewell que son interesantes de rescatar para avanzar en el análisis que me propongo emprender y que tienen que ver precisamente con el modo de indagación. Para convertirse en acontecimientos fundadores de cambios estructurales —en actos de significación— deben ser sancionados por algún tipo de autoridad: todo lo narrado por él sólo obtuvo carta de naturaleza cuando la Asamblea francesa y los poderes centrales lograron la aquiescencia del rey. Se producen reformas institucionales (un tratado, una firma, un documento...) y todo ello cristaliza en las relaciones sociales. Esta idea es más que interesante desde el punto de vista metodológico ya que constituye a la vez la respuesta a la pregunta por el "rastros" que dejan los fenómenos que se pretenden estudiar. Por otro lado, los acontecimientos son procesos temporales y espaciales cuya definición requiere un acto

de juicio: definir los límites de un acontecimiento dependerá de aquello que se quiera explicar. No se puede explicar todo de un evento. De hecho, Sewell sólo explica la emergencia de la moderna noción de revolución y las implicaciones para la comprensión de la violencia colectiva.

En esta breve exposición espero haber aclarado las dos nociones que quería recuperar para el análisis de los aspectos más simbólicos de la violencia y de sus vínculos con la temporalidad. Está claro que el método narrativo empleado por Sewell, si bien puede dar cuenta de la violencia de un modo más cercano a lo simbólico, no es capaz (ni pretende) abarcar en esos términos el análisis de tres siglos de violencia. Por esta razón, los análisis de Tilly siguen siendo necesarios para comprender las trayectorias de violencia⁷⁴ en el espacio y el tiempo.

Complementar estos planteamientos con el argumento de que hay acontecimientos que bajo determinadas circunstancias contribuyen a cristalizar tendencias de largo recorrido, y que son a su vez transformados por los actores y transformadores en sí mismos, puede ser de enorme utilidad.

En los próximos capítulos se abordará el análisis en profundidad de un caso. Un caso de conflicto político en el que la violencia ha estado presente en los último cuarenta años y que presenta transformaciones significativas que se prestan a ser interpretadas a la luz de determinados acontecimientos transformadores similares, en términos teóricos, a los aquí señalados. Se abordará el modo en que la última década, sin duda atravesada por acontecimientos de violencia “global” transformadora, se han generado dinámicas de cambio social global que han alterado en buena medida alguna dinámicas locales y por ello, se puede hablar de lógicas globales.

No es mi intención hacer del 11S y de *la guerra contra el terror* un acontecimiento como la toma de la Bastilla. Sin embargo, una aproximación a este acontecimiento y a otros similares, que entiendo compuestos por una sucesión de hechos más allá de los atentados, es significativo para ilustrar dos de los aspectos planteados a lo largo de este capítulo: 1) que la violencia está sujeta a narrativas y discursos en un momento histórico y en un lugar concretos, y 2) que, aunque no podamos hablar de cambios en el repertorio prevalente de la confrontación en los países

⁷⁴ Sobre métodos alternativos de abordar el análisis de la narrativa de la violencia desde un punto de vista más histórico véase: Cerulo (1998)

occidentales⁷⁵, sí podemos sostener cambios en los umbrales de tolerancia pública a distintas formas de violencia que pueden entenderse como parte de un proceso más amplio de cambio cultural e ideológico en el contexto global, pero cuya cristalización a través de la construcción social y política de este evento parece obvia⁷⁶.

El enmarque generado por lo que aquí se denomina “*contexto de la guerra contra el terror*” y las transformaciones en los contextos legales e institucionales a través de los cuales se trata la violencia son dos dimensiones que se analizarán en profundidad y que permiten comprobar en qué medida los acontecimientos han contribuido a impulsar y cristalizar tendencias de cambio estructural en la sociedades occidentales.

El análisis que se emprende ahora evidenciará cambios en los umbrales de violencia tolerada estrechamente vinculados a determinados acontecimientos que, se puede argumentar, son transformadores. Ello me permitirá proponer que una secuencia de acontecimientos, el 11S y el contexto de la *guerra contra el terror*, han redefinido de una manera muy concreta el modo en que se habla de la violencia y el modo en que se maneja en la esfera pública, transformando el grado en que la violencia es tolerada.

Si, como he planteado, esta secuencia de acontecimientos entraña un conjunto de prácticas y discursos que se producen en el contexto global generando un nuevo marco ideológico e institucional, el análisis de la violencia será más robusto considerando no sólo una perspectiva de largo recorrido como plantea Ch. Tilly, sino adoptando un punto de vista cualitativo sobre acontecimientos concretos que, operados por actores bajo la influencia de dinámicas globales de cambio social, puedan ser en alguna medida transformadores. Los términos en los que el terrorismo y la violencia tienen lugar hoy perfilan un escenario diferente al de hace dos décadas, y en este contexto, la perspectiva del “acontecimiento” es particularmente significativa yendo, incluso, más allá de los planteamientos señalados por análisis de episodios de protesta clásicos.

Tal y como se ha señalado, no todo es nuevo. Algunas de las transformaciones observadas en el contexto internacional parecen obedecer a trayectorias de largo recorrido en cuya comprensión la obra de Ch. Tilly sigue siendo fundamental. Sin

⁷⁵ No estrictamente vinculados a este acontecimiento pero sí a dinámicas globales de cambio social Della Porta y Tarrow (2001).

⁷⁶ Una formulación más exhaustiva del papel de los acontecimientos transformadores en el marco de la *guerra contra el terror* puede encontrarse en Fernández de Mosteyrín (2011).

embargo, concebir los acontecimientos en los términos de Sewell, proporciona una noción de temporalidad que, sin dejar de considerar con Tilly que los cambios sociales son como “corrientes de un río” que fluyen en el curso de un proceso de cambio estructural de largo recorrido, se detiene en el análisis en profundidad de secuencias de acontecimientos que son en sí transformadores. Asimismo, fortalece la idea de que las transformaciones estructurales son tan relevantes como los cambios culturales bajo los cuales se entienden; y, por último, justifica el interés de que determinados acontecimientos deban ser examinados por los cambios que generan *per se* y no sólo atendiendo al proceso del que forman parte.

El análisis de la violencia a partir de esta perspectiva sobre los acontecimientos permite argumentar que dicha violencia, en tanto parte del repertorio, estaría también afectada por el universo de justificaciones morales y políticas que está disponible y es compartido en el ámbito de lo público; es decir, por el grado en que es aceptada como medio de acción colectiva. Por otro lado, se puede también señalar que la legitimación o deslegitimación pública que se confiere a la violencia es sensible al curso de acontecimientos concretos.

Finalmente, me gustaría plantear que esta perspectiva sobre los acontecimientos invita a abordar, entre otros aspectos, el modo en que las dinámicas globales señaladas tienen un impacto perceptible en procesos locales. Los dos conjuntos de transformaciones vinculadas al 11S -narrativos e institucionales- han tenido su resonancia en los ámbitos domésticos influenciando escenarios “clásicos” de violencia, consolidados como tales mucho antes de que estos fenómenos aparecieran. Observar las estrategias de acción puestas en práctica por los distintos actores (gubernamentales, de la sociedad civil o las propias organizaciones clandestinas), asumiendo una transformación en la legitimidad del uso de la fuerza como modo de hacer política, es interesante en la medida en que ayuda a comprender lo que está disponible, es conocido, legítimo y aceptado como medio para lograr objetivos políticos en distintos escenarios sociopolíticos.

UNA POSTURA TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA Y ALGUNAS PAUTAS DE REFORMULACIÓN OPERATIVA DE LOS CONCEPTOS:

A partir de todo lo expuesto a lo largo de este capítulo, conviene detenerse aquí para especificar los presupuestos teóricos y metodológicos a partir de los cuales se desarrollará el análisis en las próximas páginas.

En primer lugar he asumido que los conflictos políticos (aquellos que implican una disputa sobre la distribución de poder), ya sea dentro de la unidad del estado nación, ya sea entre-estados, son procesos históricos sujetos al cambio. Por tanto, serán mejor comprendidos bajo un punto de vista sociopolítico; atendiendo a los procesos de movilización en los que diferentes actores hacen públicas sus demandas a través de medios que son históricos, culturales y estructurales.

He aceptado también que estos conflictos, aun cuando sean consolidados y de larga trayectoria histórica, ya no pueden ser comprendidos sin considerar la dimensión global. Es más, las dinámicas globales de cambio social deben ser centrales en el análisis.

Partiendo de los presupuestos de la literatura de la acción colectiva, he subrayado que la violencia política es un medio racional y simbólico de acción política y que debe ser comprendida como parte de un *repertorio* de acciones de protesta; como parte del conjunto de acciones que diferentes actores pueden poner en marcha bajo circunstancias concretas con el fin de hacer valer sus demandas.

Por otro lado, cuando hablamos de procesos de movilización, de *viejos* conflictos políticos, he enfatizado la necesidad de situar el análisis más allá de la noción de *acción colectiva* con el fin de evitar la idea de “desafíos desde fuera del sistema” y ser capaces de cubrir la amplia variedad de acciones de los distintos actores. En este sentido, los conceptos de “reivindicación de demandas” y “visibilización de demandas” (Claim-making), nos permiten proceder de esta manera y dar cuenta de la estrategias de acción de partidos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos extremos y, eventualmente de organizaciones clandestinas violentas. A la vez, esta opción permite dar cuenta de la gran variedad de acciones que incluirían desde los medios de la política convencional como la actividad partidista o los grupos de presión hasta los medios menos convencionales y vinculados al riesgo de violencia. La intención al hacer esta distinción es tratar de superar cierta limitación para incluir la diversidad de actores que comúnmente nos encontramos en el tipo de conflicto al que me estoy refiriendo.

He recalcado también que, con el fin de hacer operativa para mi análisis la dimensión simbólica de la acción, ésta ha de abordarse considerando significados, discursos, legitimaciones, aprendizajes sociales, culturas políticas, procesos de difusión

y copia y sobre todo, el universo simbólico lingüístico en el que la violencia es puesta en marcha y en la que tiene sentido para usuarios y audiencias.

He propuesto la necesidad metodológica de analizar la violencia y la acción en relación a contextos específicos. A pesar de las especificidades culturales y estructurales que afectan cada conflicto, cualquier conflicto afronta, entre otros factores, procesos globales de cambio cultural, y de difusión de repertorios, ideas y discursos de significación sobre modos de hacer política. Por lo tanto, hablar de “*oportunidades discursivas*”, me permite situar la violencia en un ambiente global que, por así decir, es un universo simbólico en el que el uso y el discurso sobre la violencia cobra sentido.

Con el fin de dar cuenta de la temporalidad y la historicidad de los procesos mencionados, he optado por mirar episodios históricos significativos que, tanto si hablamos en términos de las transformaciones globales como si miramos a las trayectorias históricas de conflictos locales, generan cambios lingüísticos y culturales en el modo en que la violencia es concebida y públicamente tratada. Aproximarse a las construcciones públicas y políticas de estos episodios y a las narrativas y discursos que de ellos emergen, puede abrir el camino para conocer cambios y continuidades en el modo en que la violencia es concebida y, eventualmente, usada.

A partir de aquí estableceré como definiciones operativas las siguientes:

El conflicto es el proceso sociopolítico en cuyo marco ocurre la violencia:

Para ello entenderé con Tilly, que el conflicto incluye “*todas las ocasiones en las que algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (reivindicaciones que si se cumpliesen, afectarían a los intereses de estos últimos) y en las que al menos una de las partes, incluyendo terceras partes, es un gobierno*” (Tilly, 1998: 30).

La violencia es parte de un repertorio:

Ello implica considerar cualquier situación en la que la violencia, el uso o la amenaza de la misma, ocurre en relación con cualquier tipo de demanda vinculada a la distribución de poder e implica también plantear su contingencia y su vinculación con el contexto y, finalmente, supone considerar al menos dos dimensiones que son variables: la efectividad y la legitimidad atribuida a la misma.

Su efectividad se puede definir como el cálculo estratégico sobre los costes y beneficios de emplearla.

Su legitimidad se puede definir como el grado de justificación y aprobación moral para la obtención de beneficios políticos.

Ambas dimensiones están atravesadas por un cálculo estratégico que está sujeto a un contexto variable que es a la vez material y cultural. Y dependen respectivamente de las posibilidades materiales del recurso a la violencia y de las posibilidades morales, discursivas y, en todo caso, culturales del mismo. En la medida en que ambas dimensiones están sujetas al contexto sociopolítico, se puede hablar de hablar de “umbrales” en tanto grados de efectividad y legitimidad otorgada a la violencia en un tiempo y en un espacio social concreto.

Los actores colectivos recurren a la violencia o se posicionan frente a ella:

Ello quiere decir que, siendo las organizaciones político-militares que emplean la violencia un actor central del análisis, aquí se abordará una indagación sobre los posicionamientos de distintas organizaciones, entre ellas el Estado, pero también la comunidad de discurso (Apter, 1997) o su legitimación histórica, en tanto actores colectivos que son parte de un proceso de transformación de umbrales de violencia tolerada.

El contexto de oportunidades es un contexto glocal: el contexto de la “guerra contra el terror”:

El contexto en el que tiene lugar la violencia es un contexto particular. Es global, porque se producen en el ámbito de los actores internacionales y en relación con procesos de naturaleza cultural del ámbito supraestatal. Es local en la medida en que tiene efectos y resonancias en el ámbito subestatal. Se ha denominado teóricamente contexto de la *guerra contra el terror* para aludir a un conjunto de transformaciones institucionales y culturales que se examinarán en detalle en el capítulo 4 en relación con el uso de la violencia en la política.

El contexto y el cambio social están atravesados por acontecimientos transformadores:

Ello implica considerar que hay episodios que generan o cristalizan cambios estructurales significativos en relación con un fenómeno. En este caso, en relación con la legitimidad y la aceptación de distintos tipos de violencia.

CAPÍTULO 3

CONFLICTO POLÍTICO Y VIOLENCIA COLECTIVA EN EL PAÍS VASCO⁷⁷

“la necesaria vinculación entre violencia y justificación obliga a examinar el acto de violencia en el marco de intereses y valores concretos que caracterizan a cada sociedad o a cada grupo social en un momento determinado de su historia.”
(Ignacio Martín Baró, 2003: 81)

Introduciré ahora al lector en el fenómeno de la violencia política en el País Vasco ubicándolo en el marco de un contexto de conflicto al que podemos referirnos como político según los parámetros discutidos al inicio del trabajo⁷⁸. Lo llamaremos conflicto político, según una definición amplia, en tanto que en la historia reciente de esta región, uno o varios grupos, a través de distintas estrategias han llevado a cabo reivindicaciones públicas y visibles sobre una autoridad u otro actor colectivo, con el fin de establecer un modo alternativo de distribución poder político Charles Tilly (1978). Esta definición nos permite abordar el análisis de la violencia en el contexto de la política.

Ahora bien, en el complejo proceso de tratar de comprender la violencia política en el País Vasco, habría que dar cuenta, por un lado, de un trasfondo histórico de conflicto político de carácter nacionalista que hunde sus raíces a finales del siglo XIX y que se mantiene a lo largo de todo el siglo XX con distintas características. Por otro lado, habría que abordar la dinámica contemporánea de violencia llevada a cabo, principal aunque no exclusivamente, por la organización ETA desde finales de los años sesenta. Estos dos procesos, además, deben comprenderse en los últimos treinta años, en el contexto de transición de un régimen autoritario a un sistema democrático y de su compleja consolidación. Solo considerando estos aspectos, podremos abordar los

⁷⁷ Este capítulo está basado en fuentes primarias y secundarias. Se ha recurrido a trabajos históricos y análisis sociológicos de las distintas dimensiones que se abordan. Estos materiales han sido confrontado con los resultados del trabajo de campo realizado en 2004 (cuestionario a élites políticas sobre el “conflicto”) y con las entrevistas a “informantes clave” desarrolladas en 2010, sobre la violencia. En ocasiones, se han comprobado algunas informaciones también con fuentes de prensa escrita.

⁷⁸ Sobre el “apellido” del conflicto hay una larga polémica entre los analistas según la dimensión que se considera más relevante. En todo caso, su denominación se ha movido entre “nacionalista” típico, étnico o cultural (Díez Medrano, 1997).

procesos sociopolíticos de legitimación y deslegitimación de la violencia y de sus relaciones con factores internacionales.

La relación entre las dos realidades señaladas –la violencia y el conflicto nacional– es sumamente compleja y ha generado un universo discursivo y comprensivo propio, convirtiéndose en lo que podríamos llamar un “meta-conflicto”⁷⁹; una disputa sobre propia definición de lo que ocurre: ¿para quién es el “problema vasco” un problema?, ¿Es la violencia de ETA el problema cuando se habla de la “cuestión vasca” o hay una reivindicación histórica previa, socialmente legitimada?, ¿hay un conflicto en la propia sociedad vasca vinculado a los sentimientos de pertenencia a una comunidad nacional por definir, o se trata de un problema político o de una cuestión exclusivamente *securitario* o de terrorismo?. Esta confrontación dialéctica entre distintas y contradictorias explicaciones sobre la violencia y el conflicto, se refleja fundamentalmente en las narrativas de los actores implicados en ambos procesos. Así, al indagar en los argumentos que unos y otros actores elaboran sobre la violencia, se encuentran planteamientos confrontados en las distintas cosmovisiones a partir de las cuales se explica el fenómeno. Esto determina las valoraciones políticas y morales de la violencia, así como las prescripciones que se enuncian para su resolución, tal y como veremos en el capítulo sexto, dedicado al análisis de las narrativas sobre la violencia.

Por esta razón, y por los propios objetivos del trabajo, este capítulo no pretende hacer un análisis exhaustivo de lo que se denomina “conflicto vasco”, pues ello requeriría un trabajo de otra naturaleza, que tuviera en cuenta múltiples dimensiones de carácter histórico, socio-estructural, político, ideológico e identitario a las que aquí no se atiende. Se tratará exclusivamente de ubicar el fenómeno de la violencia en un contexto político complejo, asumiendo en todo caso que muchos de sus múltiples factores no se analizarán en profundidad.

Se han elegido como criterio de organización de la exposición aquellos aspectos del conflicto político que tienen relación directa con la violencia y no se atenderá -en extenso- a todo lo que tiene que ver con la reivindicación de las demandas autonomistas en el marco constitucional. Si bien las reivindicaciones históricas del nacionalismo moderado (mayores cuotas de autonomismo, e incluso soberanismo en

⁷⁹ Con la idea de “meta-conflicto” trato de ilustrar no lo que Galtung refiere como una agudización del conflicto a través de la violencia (2003c), sino algo muy diferente: la idea de que es el propio diagnóstico que se hace del fenómeno (de la reivindicación nacionalista, de la violencia) lo que se convierte en motivo de confrontación.

algunas fases, respecto de la configuración territorial y constitucional del Estado) son fundamentales en el trasfondo del análisis, no es esto lo que interesa a este trabajo.

El argumento central que quiero exponer en este capítulo es que ni la violencia aparece en un vacío sociopolítico ni se reproduce en él. Emerge y se desarrolla en condiciones sociales, políticas y culturales concretas que la hacen posible. Aparece en un momento histórico determinado, y por ello es relevante abordar las condiciones bajo las cuales es posible y dar cuenta del contexto en el que se mantiene, atendiendo a los factores que han generado oportunidades o limitaciones para el uso de la misma.

La exposición se organizará tratando de presentar un fenómeno relacional y dinámico en el que distintos actores emprenden distintas estrategias de acción en situaciones políticas cambiantes: Se abordarán, en primer lugar, algunas de las características sociopolíticas fundamentales de lo que se entiende por conflicto nacional vasco a lo largo del siglo veinte con el fin de ofrecer una perspectiva histórica sobre el fenómeno sociopolítico que analizaré en relación con las raíces de la violencia. Ello me permitirá abordar, en segundo lugar, una descripción analítica de los principales actores que han interaccionado en relación con la violencia así como las características fundamentales de sus estrategias. A través del examen de las trayectorias de los actores se reconstruirá la historia reciente de la violencia en el País Vasco. Fundamentalmente se examinará el papel del Estado en tanto entramado institucional en el que se produce el conflicto y en el que se ha desarrollado la violencia, pero también en su dimensión de actor que despliega un conjunto de estrategias para gestionar y hacer frente a la violencia de ETA. Asimismo se analizará la trayectoria de ETA y del MLNV en tanto actor central de la puesta en práctica de la violencia; sus características, estrategias e historia interna. Se abordará, también el papel de las organizaciones de la sociedad civil a través de una descripción los medios y estrategias más difundidas y visibles que se han puesto en práctica en relación con la violencia Finalmente, se dedicará una sección específica al fenómeno de la violencia y, en concreto, al proceso de progresiva legitimación y adhesión afectiva a la misma en el País Vasco, en relación con la radicalización del código nacionalista y con el déficit de legitimación del Estado a finales del franquismo y en los primeros años de la democracia. A partir de ahí se considerará el proceso inverso; su pérdida de legitimación en los últimos quince años y los factores específicos que han podido influir en dicha transformación.

El fin de este capítulo es situar al lector en el contexto sociopolítico vasco de finales de los años noventa, que en los términos de este análisis se puede caracterizar

por dos tendencias fundamentales: en primer lugar, se puede identificar como una etapa en la que comienza a ser visible un creciente endurecimiento y sofisticación de la estrategia antiterrorista del Estado, como resultado en parte de una fuerte demanda de la sociedad. En segundo lugar, es a finales de los noventa cuando cristaliza la movilización social intensiva del rechazo a la violencia en el ámbito de la sociedad civil tanto vasca como española. Estas dos dinámicas tendrán su reflejo en el ámbito de la política, en una confrontación dura entre el gobierno central y el autonómico. Pero a la vez, son dos conjuntos de cambios que han interaccionado a lo largo de la década del 2000 con transformaciones de gran calado en el escenario internacional, constituyendo parte fundamental del análisis que se desarrollará en la tercera parte de este trabajo.

3. 1 Notas sobre el conflicto vasco en perspectiva histórica

La emergencia del nacionalismo vasco como reivindicación y como proyecto político articulado tiene lugar a finales del siglo XIX, en un contexto de intenso y rápido desarrollo industrial en comparación con el resto de España, y de importantes transformaciones sociales de la demografía, la estructura social, la mentalidad y la composición de la sociedad vasca. La industrialización y la modernización, sin que ello entrañara la desaparición del mundo rural, provocaron cambios en el tejido social vasco que algunos historiadores han considerado determinantes para el surgimiento, las características y el desarrollo del nacionalismo vasco. (Fusi, 2003; Díez Medrano, 1999)

El nacionalismo vasco reconoce su momento fundacional en torno a 1894 con las primeras formulaciones de Sabino Arana Goiri sobre un País Vasco dotado de soberanía histórica e identidad nacional propia. Se parte de una concepción territorial de la patria, *Euskal Herria*, que reivindica las siete provincias *Zazpiak bat* (“las siete en una”)⁸⁰ y esta comunidad territorial se construye, junto con la identidad vasca *euskaldún*⁸¹, como reivindicación política. Puede hablarse por ello de un proceso de producción de la narrativa nacionalista y de construcción de la “comunidad imaginada”

⁸⁰ Las siete provincias son Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (las tres provincias que conforman hoy la comunidad autónoma vasca), Navarra y las tres provincias que forman el País Vasco-Francés (Labort, Baja Navarra y Sola)

⁸¹ *Euskaldún*: vocablo en euskara para definir al que habla la lengua euskara. Se usa habitualmente para determinar al portador de la cultura vasca y en términos nacionalistas al miembro de la comunidad nacional. Hoy se habla de *euskaldún* y de “*euskaldún viejo*” para diferenciar a los hablantes de euskara por la vía materna y los que lo han aprendido como resultado de la recuperación de la lengua y la cultura vascas en el postfranquismo.

(Anderson, 1993). Un proceso en el que en el que la recuperación de la identidad colectiva y su politización constituyen el centro de un proyecto político⁸².

En aquel momento, las reivindicaciones políticas son formuladas en términos de lucha de una “nación sin estado” (Gibernau, 2000), en las que las diferencias fundamental con el resto del país son explicadas en razón de factores étnicos, culturales, lingüísticos, raciales y religiosos. Aparece la necesidad de reconstruir una historia común y un conjunto de símbolos nacionales y mitos que enfatizan la naturaleza no romanizada (y por tanto diferente) de esta región de la península ibérica. Dicho proyecto entrará en un proceso de institucionalización a través del Partido Nacionalista Vasco (en adelante PNV- EAJ) durante la II República Española (1931-1939), momento en el cual se produce el reconocimiento del auto-gobierno de las llamadas “nacionalidades históricas” (Galicia, Cataluña y País Vasco).

La Guerra Civil (1936-1939), como punto de inflexión en la historia de España, lo es también en la historia del País Vasco y de su demanda nacional. No lo es sólo por sus consecuencias políticas estructurales -la instauración de un régimen dictatorial y la represión del disenso político y social- sino por su significado simbólico en el imaginario de algunos sectores de la sociedad vasca y de la familia nacionalista⁸³. La Guerra supone la gran ruptura política que se ha construido como agravio histórico y constituye un momento fundamental de lo que Pérez-Agote denomina la “acumulación originaria de capital simbólico” nacionalista (Pérez-Agote, 2008: 81) a partir del cual habrá que atender al modo en que la conciencia nacional se reproduce en la sociedad vasca.

Ante el golpe de estado, el alineamiento bastante generalizado con la República y la incorporación de sus fuerzas militares al ejército republicano del norte, convirtieron

⁸² Las raíces históricas del conflicto no se abordarán aquí, pero tampoco se pretenden ignorar. Suelen ser referidas en relación al proceso de construcción y centralización del Estado a lo largo de la edad moderna. En estos términos, el “conflicto nacional” vasco estaría vinculado a una falta de acomodación de las reivindicaciones periféricas (Cataluña y lo que hoy es País Vasco, principalmente) en el Estado conforme a la clásica definición que Rokkan y Lipset (1992) han hecho de “línea de fractura” centro-periferia. Y esto es percibido como “agravios históricos”. Por otro lado, está la reivindicación de la existencia de una identidad, una particularidad histórica del pueblo vasco (Jáuregui, 1981). Se trata de una cuestión discutida por los historiadores y está muy presente aún hoy en las narrativas de los distintos actores (políticos y sociales) implicados en la cuestión vasca. Se mencionan agravios históricos, supresión de los fueros, violencias históricas de naturaleza cultural y política y, en todo caso, derechos colectivos históricamente fundamentados.

⁸³ Una antropología de los significados de la Guerra Civil para la sociedad vasca y de las implicaciones de dicho universo simbólico en el desarrollo del conflicto puede encontrarse en Zulaika, (1988). Según su planteamiento es difícil comprender el desarrollo del conflicto y el nacimiento de ETA sin atender a la Guerra Civil como narración original a partir de la cual se reconstruye todo y se genera la división generacional.

al País Vasco en bando enemigo, aunque no pueda hablarse de un apoyo social incondicional al bando republicano, como tampoco podría argumentarse una resistencia total de la sociedad vasca al posterior régimen franquista. También se convierte en escenario de la resistencia de la izquierda, de las contradictorias dinámicas de alineación de clase, si consideramos el posicionamiento ambiguo de las elites industriales y financieras, y de la internacionalización de la guerra en el bombardeo masivo contra civiles en Gernika (1937)⁸⁴.

Al final de la contienda, Vizcaya y Guipúzcoa, aquellos territorios en los que la resistencia había sido más intensa, fueron designados por el régimen como “provincias traidoras” (no así Álava y Navarra que sí apoyaron el golpe militar). Una denominación cuyo significado ha de entenderse atendiendo a la concepción profundamente nacionalista, centralista y unitaria de España que tenía el franquismo, y para la cual cobra especial importancia la significación reivindicativa de autonomía de estas provincias.

A lo largo de los cuarenta años de dictadura franquista (1939-1975), la represión del régimen en esta región se caracterizó, como en el resto de España, por la supresión de los derechos democráticos, políticos y de las libertades públicas. Pero aunque no se puede hablar de que la represión fuera mayor que en otros sitios (Fusi, 2003: 128), las consecuencias prácticas inmediatas fueron la supresión del Concierto Económico (institución que databa de 1878) y del Estatuto de Autonomía del País Vasco (1936), además de todos los símbolos nacionales y culturales, con especial énfasis en la lengua (*euskara*). Como resultado de ello, el universo simbólico del nacionalismo desaparecerá del espacio público para refugiarse en el ámbito de la privacidad⁸⁵.

El régimen gozó sin embargo de un apoyo social considerable en el País Vasco, fundamentalmente entre las oligarquías económicas industriales y financieras, que siempre mantuvieron relaciones ambiguas con la autonomía⁸⁶. Éstas se convierten en

⁸⁴ Aparecen desde luego visiones distintas entre los historiadores sobre si el escenario bélico en el País Vasco fue más o menos cruento que en el resto de España (Garmendia, 2003: 86; Fusi, 2003). Lo que sí es un hecho es que los acontecimientos han pasado a la memoria colectiva vasca en términos de excepcionalidad.

⁸⁵ Será en estos espacios de lo privado y de la intimidad donde tiene lugar la socialización del código nacionalista de las nuevas generaciones según Pérez-Agote (2008).

⁸⁶ Para una descripción detallada y muy analítica del papel de la gran burguesía industrial – la burguesía del selecto barrio bilbaíno de Neguri- en el régimen franquista véase: Onaindía, (2003). Hay, por otro lado, una burguesía industrial de menor peso social y económico que ha sido el pilar histórico del Partido Nacionalista Vasco.

pilar del nuevo estado franquista en el País Vasco exhibiendo un comportamiento antivasquista (Pérez –Agote, 2008:89) en el que lo vasco aparecía como provinciano y rural.

En torno a la década de los cincuenta encontramos sin embargo algunos factores de cambio sociopolítico: en primer lugar, en este clima de represión y de socialización en la prohibición y en el silencio de los símbolos nacionales, hay que comprender la renovación por parte de las generaciones más jóvenes de la sociedad vasca, del “viejo” movimiento nacionalista del PNV, cuyos principales líderes estaban en el exilio (Elorza, 2000; Garmendia, 2003, Pérez-Agote, 2008; Zulaika, 1988). Pero también la extensión e intensificación del nacionalismo político radical que encontraremos estrechamente unida a otras organizaciones embarcadas en la lucha antifranquista, al final de la dictadura⁸⁷. La organización juvenil EGIN, constituida en torno a la recuperación de la cultura y la historia vasca, y vinculada inicialmente al movimiento juvenil del PNV (EGI), nace directamente relacionada con este movimiento. Su trabajo de reformulación ideológica sentará algunas de las bases de lo que más tarde será ETA. En el seno de EGIN se lleva a cabo una redefinición de los planteamientos nacionalistas basada fundamentalmente en el desplazamiento del énfasis desde lo biológico (raza) a lo lingüístico y cultural. Así, la lengua se convierte en la base de la identidad nacional (Tejerina, 1992; 1997).

En segundo lugar, junto a la represión física y simbólica, habría señalar cómo a finales de los años cincuenta se iniciaron profundas transformaciones socioeconómicas que marcarían el final de la autarquía y el aislamiento internacional del régimen franquista. La expansión industrial y el despegue económico en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, vinculados a las empresas siderúrgicas de la margen izquierda de la ría de Bilbao, implicaron cambios sociales importantes como la decadencia del mundo rural o la transformación de la estructura social.

En tercer lugar, una consecuencia fundamental de esta expansión industrial fue la oleada de inmigración proveniente de otras regiones españolas, proceso que ya había ocurrido en la primera industrialización del S. XIX. La oleada migratoria de los años cincuenta generó una crisis de la identidad vasca en la que el inmigrante aparecía para determinados sectores del nuevo nacionalismo como un peligro para la cultura vasca (Jáuregui, 1981: 103)

⁸⁷ Un trabajo en profundidad sobre la reproducción del nacionalismo vasco durante el franquismo puede encontrarse en Pérez-Agote (2008).

En este contexto, surge a finales de los años cincuenta la organización ETA (*Euskadi Ta Askatasuna*) inmersa en el proceso señalado de reforma y de reacción contra el nacionalismo tradicional. Se considera un movimiento que responde al “silencio social” de una generación que había aceptado pasivamente el régimen. La socialización en este silencio genera una rebeldía generacional que opera por un lado contra el sistema político y, por otro lado, contra la propia generación de la guerra.

Será a través de las propias estructuras de implicación social-religiosa vinculadas a sectores de la izquierda nacionalista y a los movimientos cristianos de base como se irá creando un movimiento de recuperación de la cultura vasca en el que cristalizará dicha reacción⁸⁸. Es así como emerge una nueva dinámica de oposición al régimen que establece como objetivos políticos la recuperación de la cultura vasca, principalmente la lengua, la lucha antifranquista y la independencia del País Vasco.

A lo largo de la década de los sesenta, ETA modificará su estrategia social y política hacia la legitimación y el empleo de la violencia, de la lucha armada, como forma de derrocar el régimen franquista y de hacer avanzar, a la vez, las demandas de independencia del País Vasco⁸⁹. Esta violencia tenía en origen escasa capacidad, comparada con la del Estado franquista, pero poseía un enorme potencial simbólico.

A partir de 1968, año en el que se contabiliza la primera víctima mortal de ETA, comienza un década de confrontación entre la violencia represora del régimen franquista, la violencia insurgente de la organización ETA y la violencia contrarrevolucionaria o contrainsurgente de organizaciones vinculadas a la extrema derecha (BVE/“triple A”)⁹⁰. Hacia el final del franquismo, encontraremos en el País Vasco una progresiva legitimación y adhesión afectiva hacia la violencia de ETA que, como

⁸⁸ Un trabajo en profundidad sobre esta ruptura generacional y sobre el desarrollo de la mentalidad activista de la generación de posguerra – la mentalidad de la acción, de la *ekintza* – puede encontrarse en Zulaika(1988).

Para análisis de los orígenes y contenidos ideológicos de ETA véanse: Garmendia, (2000) y Jáuregui, (2000).

⁸⁹ Otro elemento característico en la redefinición elaborada por ETA tiene que ver con el enmarque de su acción en términos de lucha “tercermundista”, anticolonial. No hay que olvidar que la etapa de finales de los años cincuenta coincide en el ámbito internacional con el inicio de procesos de descolonización del Tercer Mundo, la aparición del Movimiento no alineado, la proliferación de revoluciones, guerrillas y otras formas de conflicto político que caracterizarán el contexto internacional de los años cincuenta y sesenta. Así se adaptarán las teorías de la revolución, del “foquismo” y de la resistencia aplicadas en esos momentos en Angola, Argelia o América Latina.

⁹⁰ El Batallón Vasco Español (BVE), también conocido como triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), también Acción Nacionalista Española, es una organización para-policial/violenta vinculada a la extrema derecha española que actuó entre 1975-1981 bajo el paraguas del SECED (organismo de la inteligencia franquista)

plantea Pérez-Agote (2008), está en relación directa con la deslegitimación de la violencia del Estado y por extensión de este mismo⁹¹.

Durante esta etapa final del franquismo, prácticamente a partir de 1967, el País Vasco estuvo sometido a un casi permanente estado de excepción y de intervención del Estado por la vía de la fuerza. ETA aplicaba la teoría de la acción-reacción en virtud de la cual se usaba la violencia con el fin de desatar una respuesta represiva por parte del Estado que afectase a amplios sectores de la población y ganar así la solidaridad, la adhesión, la legitimación y en último caso, la militancia. Y en efecto, la oleada de represión, tal y como señala Florencio Domínguez, tuvo un alcance más que significativo⁹² y el sentimiento de duelo y solidaridad por la muerte de T. Etxebarrieta en 1969 llenó las filas de militantes de ETA⁹³. Además del significado simbólico de la muerte de Etxebarrieta⁹⁴, este acontecimiento, junto con los Juicios de Burgos en 1971, generó una oleada de solidaridad vasca, española e internacional sin precedentes que daría forma a la nueva ETA de los años setenta. Finalmente, el atentado de ETA contra el Almirante Carrero-Blanco, previsible sucesor del régimen, en 1973 hizo que el militarismo de esta organización quedara fuera de todo debate interno, contribuyendo en buena medida a generar las condiciones para su perpetuación.

La consolidación de esta estrategia de violencia política, así como la evolución de la organización ETA desde finales de los años sesenta explica la ruptura del nacionalismo vasco en dos “familias” principalmente, al acabar la dictadura (Pérez-Agote, 2008; Onaindía, 2003). Por un lado, el así llamado “nacionalismo moderado”, a favor de una solución política al conflicto vasco, a la reivindicación nacional, en el marco de un proceso pacífico que sería simultáneo al proceso de transición a la democracia. Por otro lado, el “nacionalismo radical”, que trata de separar el final de la dictadura (la lucha antifranquista) del conflicto vasco-español, y que mantiene una legitimación de la violencia política como parte de un amplio repertorio de acciones

⁹¹ El déficit de legitimidad del Estado en parte de la sociedad vasca se va a mantener en los inicios de la democratización siendo uno de los principales factores del conflicto político y de la reproducción de la legitimidad de la violencia de ETA (Linz, Orizo y Vila, 1986; Llera, 1989).

⁹² Este autor señala cómo en 1969 el número de detenidos sin juicio ascendió a un total de 1953 (Domínguez, 2000: 143).

⁹³ Véase en esta cita la explicación de Garmendia a la eficacia de la teoría acción-represión: “...esta experiencia, la del amigo o compañero muerto, se instaló en ETA de forma definitiva, pero también en sectores de la sociedad vasca, no solamente por cercanía a los militantes, sino porque la represión, si no era ciega, lo parecía en demasiadas ocasiones. La consigna “la policía tortura y asesina” precursora del “que se vayan” tenía el campo abonado y con abundancia de motivos” Garmendia, (2000: 167).

⁹⁴ Txabi Etxebarrieta dirigente histórico y carismático de ETA, autor del primer asesinato calculado de ETA y muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil, es uno de los primeros símbolos del martirologio de ETA y la izquierda abertzale.

encaminadas a obtener el autogobierno. El desarrollo de estas dos tendencias ideológicas ha resultado en la cristalización de un mosaico social y político de organizaciones muy complejo vinculado con el mundo nacionalista.

La transición política en el País Vasco (1977-1979) comienza con las primeras elecciones generales (junio de 1977) y con la aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco (octubre de 1979)⁹⁵ iniciando así la institucionalización del nacionalismo. Desde el punto de vista sociopolítico, esta etapa evidenció de manera significativa tres aspectos interesantes. La existencia de un conflicto político centro-periferia; esto es, del Estado frente a una demanda nacionalista que exige una distribución territorial y política del poder distinta. La existencia de un conflicto dentro de la propia sociedad vasca (un conflicto por la definición de su comunidad política), que era visible a partir de los resultados electorales, las propias actitudes y valores de los ciudadanos respecto a la nueva configuración institucional, y la necesidad de una política parlamentaria de pactos. Y la existencia de problemas de legitimación del Estado dentro del mundo nacionalista e independentista que se manifestó principalmente en la persistencia de la violencia (su intensidad y sus apoyos). Este déficit de legitimidad del Estado se transfiere a la legitimación de ETA como organización que cuestiona el monopolio de la violencia de aquél. ETA y el mundo que representa se niegan a reconocer el carácter democrático del nuevo sistema político y esta percepción de que “nada ha cambiado”⁹⁶ les conduce a romper con el PNV.

La violencia por tanto, presente con distintas intensidades en este contexto desde principios de los años sesenta y reproducida a lo largo de los treinta años de democracia, ha sido una de las características fundamentales del conflicto político, uno de los principales problemas señalados por los españoles en los estudios de opinión y, en todo caso, el modo de abordarla ha constituido una prioridad de todos los gobiernos desde la democracia.

⁹⁵ En octubre de 1979, el estatuto de autonomía fue sujeto a un referéndum en el que la gran mayoría de los votantes expresó su aprobación (Linz, Orizo y Vila, 1986), a pesar de la abstención de la izquierda nacionalista radical.

⁹⁶ Esta idea es referida por Pérez-Agote (2008) como fundamental en el desarrollo posterior del nacionalismo radical vasco. Se analiza en términos de “profecía autocumplida”, de narrativa generadora de realidad social para un determinado grupo que vive y actúa bajo la cosmovisión de estar en un sistema represor en el que nada ha cambiado, como tendremos ocasión de comprobar en el análisis de las narrativas de los actores en el capítulo 6.

3. 2. Las estrategias de los viejos y los nuevos actores

Hasta aquí ha sido mi intención ilustrar al lector en qué es aquello tan complejo que se llama “conflicto vasco”. Dado que mi interés se centra en el aspecto concreto de la violencia, desarrollaré una descripción y caracterización de los actores que han sido centrales en este proceso que entraña la violencia. En concreto, se recogerá el papel del Estado y de sus políticas antiterroristas, la trayectoria de ETA/MLNV y, finalmente, las estrategias de movilización surgidas en el seno de las organizaciones de la sociedad civil.

Aunque al esbozar las características del llamado conflicto vasco se ha ido haciendo referencia a la centralidad de algunos actores, dedicar una sección de este capítulo a abordar una sistematización de los actores colectivos implicados en este proceso de consolidación y transformación de la violencia permitirá también reconstruir la historia reciente de la violencia y del contexto sociopolítico que sitúe el análisis posterior.

Comenzaré por hacer una descripción del papel del Estado, principal proveedor de seguridad y marco institucional en el que se dirimen los conflictos políticos de esta naturaleza. Se desarrollarán las principales estrategias puestas en marcha en relación con la violencia y que han de verse en el contexto de un doble proceso: 1) la democratización del Estado y sobre todo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y 2) la progresiva inclusión del Estado en la UE y su proyección internacional a partir de mediados de los ochenta. En segundo lugar, expondré la trayectoria de ETA y el MLNV para lo cual se recogerán aspectos fundamentales de su historia y algunas transformaciones recientes en sus estrategias de movilización. Finalmente se desarrollará una descripción de las organizaciones de la sociedad civil y su papel desde la Transición tanto en la consolidación de la legitimidad de la violencia, como en la movilización del rechazo a la misma. En los tres casos, este conjunto de actores serán presentados atendiendo a sus características fundamentales, a la evolución de sus narrativas y, sobre todo, a la transformación de sus estrategias.

3.2.1 Estado y gobiernos: políticas de seguridad y estrategias frente al terrorismo

El Estado es el proveedor de seguridad por excelencia para los ciudadanos que administra. El modo en que desarrolla sus estrategias para el mantenimiento del orden público y la seguridad no es nunca neutral ni estático, sino que está determinado por un contexto que es cambiante desde el punto de vista sociopolítico. En todo caso, todo

Estado se arroga para sí el monopolio de la violencia legítima (Weber, 1998) y, en ese proceso, hace uso de dicho monopolio -de la coerción- con el fin de elevar los costes de la violencia. La diferencia más significativa en el ejercicio de la violencia por parte de dicha organización está entre los regímenes autoritarios y los democráticos. En estos últimos, la actividad de los aparatos de seguridad está sujeta a los límites de la ley.

En el caso que nos ocupa – la violencia en el contexto del conflicto vasco- , el Estado se configura a la vez como marco institucional en el cual ocurre dicha violencia y como actor fundamental del proceso. Han sido los distintos gobiernos, apoyados en las instituciones, los encargados de implementar las distintas estrategias para abordar la violencia de ETA, en lo que se conoce popularmente como la política antiterrorista. Si tenemos en cuenta que la violencia de ETA fue el elemento más virulento de la “lucha antifranquista” y su persistencia después del 1978 una de las grandes “anomalías” de la democracia española, parece obvio por qué se ha convertido en los últimos treinta años en una de las principales preocupaciones de todos los gobiernos de la democracia.

En esta sección abordaremos las distintas estrategias gubernamentales desde la transición española, tratando los aspectos de continuidad y cambio que se pueden destacar con respecto al último franquismo. Daré cuenta de las principales dimensiones de dichas estrategia y las etapas más significativas que se pueden determinar en lo que respecta a la misma.

Siendo el Estado el marco institucional en el que las políticas antiterroristas se ponen en marcha, es fundamental mencionar su propia transformación al finalizar el régimen franquista, hacia a un sistema democrático en el que el Estado se sujeta a derecho. Los cambios estructurales y las reformas institucionales habidas a finales de los años setenta, momento en el cual hemos ubicado la mayor intensidad de la violencia de ETA, son de gran importancia para comprender el diseño y el desarrollo de la política antiterrorista.

Reinares (1998) señala que la política antiterrorista en un contexto democrático, aquélla que engloba las distintas estrategias que se ponen en práctica, está condicionada principalmente por el parecer de los ciudadanos (sus percepciones y demandas), por el marco de garantías legales en el que se inserta, y por los intereses activos que se generan respecto a la seguridad interior. Es, por tanto, reveladora de una actitud por parte de las instancias de gobierno que de alguna manera refleja estados de opinión y demandas ciudadanas. Y por ello, su dimensión comunicativa, aquélla que tiene que ver

con el modo en que se pretende responder a las demandas del contexto sociopolítico, es asimismo relevante⁹⁷.

Siguiendo alguno de los principales estudios sobre la materia⁹⁸, atenderemos a cuatro aspectos fundamentales: la configuración de la seguridad interior (la organización de las fuerzas de seguridad del Estado), los consensos políticos entre las elites, el marco jurídico-político y la cooperación internacional (Jaime, 2002). A partir de estas dimensiones, se puede plantear una descripción de las principales estrategias desarrolladas en los últimos treinta años teniendo en cuenta, en todo caso, que se han desplegado en un contexto de transformación esencial del Estado y de progresiva consolidación del sistema democrático así como en el marco de una lenta pero creciente cooperación internacional.

3.2.1.1 Dimensiones de la lucha antiterrorista

La configuración de la seguridad interior

El modo en que está estructurado el Estado para la función de mantenimiento del orden público dentro del territorio es la primera dimensión de la política antiterrorista que hay que considerar, en tanto que estructuralmente determina las posibilidades y limitaciones de la misma. El análisis del final de la dictadura⁹⁹ y de los primeros años de la democracia revela las dificultades que entraña para las estructuras estatales la transformación de la respuesta policial de un contexto autoritario a uno democrático (Jaime, 2002). A pesar de los cambios institucionales de finales de los setenta, el conflicto político se acentuó, como hemos visto, pero también la violencia se intensificó de manera muy notable, siendo uno de sus principales efectos la ralentización de la reforma y renovación de los sectores de la administración directamente relacionados con el mantenimiento del orden público: los cuerpos de seguridad del Estado.

⁹⁷ Considérese que en el contexto que abordamos es el de una sociedad industrial avanzada que ha pasado un proceso de transición política. En el marco de dicho proceso, la violencia de ETA ha tenido en diversas etapas el apoyo significativo de ciertos sectores sociopolíticos de la población y la complicidad implícita del contexto internacional.

⁹⁸ Algunos de los estudios más exhaustivos sobre las estrategias antiterroristas en España pueden encontrarse en: Jaime, (2002); Vercher, (1991); López Garrido, (1987); Reinares, (1998); Fernández Hernández, (2008); Lamarca, (1985).

⁹⁹ Las estructuras de orden público, diseñadas o adaptadas por el régimen franquista para combatir amenazas internas y externas, empleaban técnicas de represión importadas de la Alemania nazi y estaban diseñadas para luchar contra la disidencia (el maquis, por ejemplo); tal era el objetivo de las llamadas fuerzas de orden público (cuerpo general de policía, brigada político-social y Guardia Civil). Sin embargo, Jaime (2002) señala cómo la creación de ETA pasó relativamente desapercibida por las fuerzas de orden público, y sólo cuando los atentados se fueron sucediendo, se adoptó una estrategia diferente. Los procedimientos de detención masiva (con el fin de obtener información) permitieron un control eficaz de ETA hasta lograr su práctica desarticulación.

Dentro de la política de consensos que está en la base de la constitución de 1978, la reforma de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado fue uno de los aspectos más difíciles de abordar. Ello se debe en parte a la propia naturaleza militar del régimen que se reformaba, a los recelos y rechazos de la institución militar, y a su influencia sobre la transición política. Pero también a la intensa violencia de diversas organizaciones en este momento, que determinaban la percepción social y política del orden público.

Las intenciones políticas para su transformación quedaron plasmadas en los Pactos de la Moncloa (1977) donde se definió un nuevo concepto de Orden Público, depurado de contenidos autoritarios y sujeto a la garantía de los derechos fundamentales, y se abrió la vía para la posterior reforma de las Fuerzas de Orden Público. Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado¹⁰⁰ pasaron de ser dirigidos contra la población general, a ser orientados contra aquellos que incurrieran en delito. Este proceso de desmilitarización y democratización de las fuerzas de orden público no fue inmediato sino posterior y muy progresivo¹⁰¹. A pesar de las dificultades, la reorientación de la acción de las FCSE contribuyó a la legitimación del Estado, pues comenzaban a servir para el mantenimiento del orden público y no como agentes de la represión política. La única excepción, a esta legitimación del Estado, tal y como hemos señalado y reconsideraremos al final de este capítulo, es el País Vasco.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, es la policía la que planifica operativamente y desarrolla la acción antiterrorista y muy excepcionalmente se ha recurrido al ejército y a las instituciones de seguridad exterior¹⁰². En España, sin embargo, ha sido la Guardia Civil el cuerpo que ha participado de forma más intensa en la acción antiterrorista, tanto en el nivel pasivo (vigilancia) como en el más activo (inteligencia e investigación)¹⁰³. El objetivo de la acción policial, y en general de la estrategia antiterrorista, es elevar los costes de la acción violenta y disuadir, por la vía

¹⁰⁰ En adelante FCSE

¹⁰¹ Las normas procesales antiterroristas desarrolladas en esta época, por el recorte de garantías para el detenido que contenían, favorecieron malos tratos y abusos hasta bien entrados los años ochenta tanto en el marco de la estrategia antiterrorista como en el de la persecución de la delincuencia común. (Jaime, 2002).

¹⁰² El recurso puntual al ejército británico en el caso de la violencia en el Ulster sería una de estas excepciones.

¹⁰³ Al final del franquismo era el cuerpo que estaba presente en el País Vasco con 1/5 del total de su fuerza desplegada según Jaime (2002), en un territorio en el que habitaba el 7% de la población. Su actividad se incrementaría en los años ochenta y noventa significativamente y se coordinaría con la acción del Cuerpo Nacional de Policía y con la implantación de la policía autonómica –Ertzaintza- en el País Vasco a mediados de los años ochenta.

de la coacción, del recurso a la misma. Entre el conjunto de medios que suelen emplear los cuerpos de seguridad, los expertos hablan de medidas *contraterroristas* cuando se refieren a respuestas pasivas de los cuerpos policiales (de prevención e inteligencia) y medidas *antiterroristas* cuando se trata de estrategias reactivas: la creación de unidades especiales y la dotación o emplazamiento de efectivos. Sean cuales sean estas estrategias, están altamente determinadas por la información, por lo que se conoce como “inteligencia”. El empleo de este abanico de técnicas y estrategias está en función del contexto institucional-legal y se mueve entre el binomio aceptable/no aceptable y eficacia /ineficacia (Wilkinson, 1986).

Pues bien, en España, al finalizar el régimen, y en buena medida debido al desconocimiento de la situación sociopolítica en el País Vasco y a la ignorancia respecto a la organización ETA, la manera de obtener información era por la vía de las detenciones masivas y a través de las estrategias de infiltración¹⁰⁴. La transformación de la seguridad del Estado y de sus estrategias comenzará a dar frutos de nuevo a primeros de los años ochenta con la creación primero del Centro Superior de Información de la Defensa (CSID) y posteriormente de la Comisaría General de Información (CGI). Los cambios en la configuración de la seguridad interior en los últimos treinta años han sido un aspecto fundamental de la política antiterrorista, afectando de una manera clara, tanto a su efectividad como a su legitimidad social y política.

Los consensos en relación con la política antiterrorista

El acuerdo y la aceptación entre fuerzas políticas, así como el apoyo de la opinión pública en relación con el problema de la violencia, son fundamentales para comprender las estrategias desarrolladas para hacer frente a la misma. No se trata sólo de elaborar una definición común del fenómeno, sus causas y el modo de enfocarlas,

¹⁰⁴ Los servicios de información franquista fueron transformados perdiendo gran parte de su efectividad a favor de la legitimidad que les confería su sometimiento al Estado de Derecho. El SECED (servicio central de documentación) era la agencia creada al final del régimen franquista encargada de la inteligencia. Su actividad se mantiene hasta 1977 y se transformará en el CSID (Centro Superior de Información de la Defensa). Fue muy activo en la acción contra el terrorismo, siendo la conocida “operación lobo” de infiltración de un agente en la organización ETA una de sus más efectivas estrategias a finales de los años setenta (momento en el cuál, se llega a desarticular gran parte de la infraestructura de dicha organización).

sino de la elaboración de una estrategia común y ampliamente aceptada de las líneas fundamentales que deben guiar la política antiterrorista.

En el origen de la democracia, por las dificultades de consensuar un diagnóstico-pronóstico compartido, la fractura de las élites era manifiesta y se podía hablar de sectores muy polarizados respecto al terrorismo. En concreto, era posible señalar la presión de la institución militar y de las fuerzas de extrema derecha y, por otro lado, de las fuerzas nacionalistas y de los sectores más progresistas del arco parlamentario. No será hasta bien entrados los años ochenta cuando comience a hablarse de consenso respecto al terrorismo y a la estrategia a seguir. A pesar de ello, esto no afectó en gran medida a las decisiones gubernamentales respecto a la política antiterrorista en la medida en que, sólo a partir de finales de los años noventa, dicha política ha sido objeto de amplios debates políticos y de resonancia en la opinión pública.

El logro de consenso está fuertemente afectado por la orientación ideológica de las partes y sobre todo por su actitud frente a los cuerpos de seguridad del Estado. Pero en general, en casi todo los países de nuestro entorno, el acuerdo ha sido posible a pesar de la dificultad de conciliar una visión de ley y orden (“mano dura”) de los sectores conservadores con visiones más proclives a vigilar la garantía de derechos y libertades públicas de los posibles abusos de las políticas antiterroristas, así como de ciertos recelos de los aparatos de seguridad del Estado dominantes entre las familias progresistas.

La legislación vigente en tanto marco regulador de la política antiterrorista

La transformación en el modo en que se comprende y se aborda legalmente el terrorismo se convierte en un indicador importante de los consensos y de los disensos pero, en todo caso, de lo que se considera aceptable o inaceptable para ciudadanos y gobernantes. A la vez establece los límites de su alcance y, con ello, la efectividad y legitimidad de la misma.

Desde el punto de vista del marco jurídico en relación con el terrorismo, habría que hacer referencia al menos a cuatro aspectos que resultan fundamentales: 1) qué es delito de terrorismo, 2) a quién se considera terrorista, 3) cómo se enjuician tales conductas, y 4) qué castigos (penas) están previstos para dichos comportamientos.

Si consideramos los países de nuestro entorno, las legislaciones antiterroristas han estado caracterizadas en su mayoría por factores de excepcionalidad y urgencia¹⁰⁵. Las medidas de carácter jurídico muestran cuál es la actitud del Estado frente al terrorismo y por ello son una dimensión específica de la política antiterrorista. Tienen como marco limitador el Estado de derecho y proporcionan los mecanismos y los instrumentos para hacer efectiva la acción policial, por ejemplo, facilitando las detenciones, a través del control judicial de las mismas, estableciendo la posibilidad de la incomunicación, u ofreciendo incentivos a la delación. La mayoría de ellas están orientadas a la obtención de información ya que, como ya se ha puesto de relieve, la información es piedra angular de la política antiterrorista. En el caso español, si bien se ha desarrollado en los últimos treinta años una buena batería de medidas antiterrorista de carácter jurídico, hay que señalar, de nuevo, que este desarrollo ha tenido que hacer frente a problemas relacionados con el pasado autoritario.

La cooperación internacional

La cooperación internacional es una dimensión que siempre ha sido fundamental en la gestión de la política antiterrorista. Ahora bien, aunque la tendencia haya sido de expansión continuada de dicha cooperación, ésta no siempre ha existido. Sólo a partir de finales de los años ochenta podemos empezar a hablar de cooperación bilateral con Francia y con algunos países de América Latina y, sólo en la última década, podemos subrayar la existencia de una extensa cooperación tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el espacio mediterráneo y desde luego transatlántico. La cooperación en el ámbito internacional está vinculada a procesos políticos específicos, a intereses geoestratégicos y, en todo caso, está afectada por los límites del Estado soberano (entidad del derecho internacional por excelencia) aunque, como veremos en el capítulo cuatro, esto también ha cambiado en la última década.

Además de estas cuatro dimensiones fundamentales, hay todavía dos tipos de estrategias que han estado presentes en la política antiterrorista en España y a las que habría que aludir, en la medida en que ambas han sido enormemente polémicas, sobre todo en la última década: la política penitenciaria y las negociaciones entre gobiernos y organizaciones violentas. Son estrategias en alguna medida excepcionales, porque van

¹⁰⁵ La mayoría de las legislaciones en países de ámbito europeo a lo largo de los últimos treinta años han estado orientadas a facilitar la acción policial y las medidas más políticas han permanecido en un segundo plano. Y en general han seguido la línea de los procedimientos extraordinarios aunque con adaptaciones a los contextos nacionales concretos. Véase: López Garrido (1987); Pérez Royo (2010)

más allá de la pura pena judicial, están sujetas a criterios políticos, y son procesos ambiguos en los que la opinión pública y la fractura o consenso de las elites juegan un papel muy importante.

3.2.1.2 Etapas fundamentales en las estrategias y políticas antiterroristas del Estado

Además de señalar las principales dimensiones de las estrategias que el Estado ha desarrollado frente a la violencia de ETA, hay que introducir también algún tipo de periodización, en la medida en que, en treinta años de democracia, se ha pasado por diferentes fases en virtud de las cuáles podemos hablar de una tendencia a la visibilización, la sofisticación y el creciente consenso logrado en torno a las estrategias desarrolladas. Estas fases están construidas con propósitos analíticos, siguiendo los análisis de otros autores y, sin embargo, permitirán presentar a la vez la arena política en la cual ha de entenderse la violencia y el papel del Estado en la represión de la misma. Para ello se recuperará la configuración de la seguridad en el marco del proceso de institucionalización de la democracia en España.

Constitucionalización del Orden Público (1976-1980)

Esta etapa coincide con los años de la transición a la democracia. Es un momento de máxima intensidad de la violencia de ETA en concurrencia con la actividad armada de otras organizaciones de naturaleza sociopolítica (FRAP, GRAPO), pero también con la presencia de violencia incontrolada de naturaleza para-estatal. Estuvo marcada por cierta indefinición de las estrategias policiales antiterroristas y por una incipiente legislación antiterrorista, en buena medida heredada del franquismo y con déficits democráticos en el proceso penal. El desconcierto generalizado, reforzado por las actividades de grupos de ultraderecha descontrolados, y la desarticulación parcial de las fuerzas policiales como resultado del nuevo contexto, se tradujeron en una clara descoordinación de los servicios de inteligencia que además, encontraron un escaso apoyo de la ciudadanía vasca. Los pactos de la transición implican la redefinición del concepto de orden público basado en los principios democráticos y una Ley de Amnistía (1977) que provocó la salida de las cárceles franquistas de la mayoría de los presos políticos.

Los primeros cambios en la configuración de la seguridad interior, atendiendo al nuevo concepto de orden público, comenzaron a hacerse visibles siendo Rodolfo Martín Villa (UCD) ministro del interior 1976-1979, y estaban encaminados a la

desmilitarización parcial de la Policía Armada. La Ley de la Policía de 1978¹⁰⁶ regulaba el funcionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado que quedaban configurados por 1) la integración del Cuerpo Superior de Policía, el Cuerpo de la Policía Nacional y 2) la Guardia Civil. Ambos cuerpos fueron sometidos a la jurisdicción civil y al control del Ministerio de Interior y Defensa. En todo caso la democratización y transformación total de ambos cuerpos no sería abordada hasta 1986 por causas directamente vinculadas con la excepcionalidad en la que estaban insertas las fuerzas de seguridad debido al terrorismo.

En lo que respecta específicamente a la actividad antiterrorista, las principales transformaciones estuvieron orientadas a modificar los mecanismos de actuación en los que la detención era un medio para prevenir el delito y no el medio para la obtención de información. Se crearon grupos y unidades especiales dentro de los distintos cuerpos como los GEO (grupo especial de operaciones del CNP) y el GAR (grupo antiterrorista rural) para dar mayor efectividad a la acción policial. La reorganización de estos cuerpos conllevó una pérdida de competencias en materia de orden público para la Guardia Civil, que disminuyó sus efectivos de 62.000 a 60.000 miembros. La Policía Armada, por su parte, descendió de 32.000 a 25.000.

Será a partir de 1980 cuando el ministro J. J. Rosón, lleve a cabo un esfuerzo de coordinación entre los cuerpos de seguridad, a través de la creación de un Mando Único (MULC). Inaugura además una nueva estrategia en la lucha antiterrorista, caracterizada principalmente por la activación de una fuerte política de reinserción de militantes de ETA que tendría su continuación con los siguientes gobiernos del PSOE.

En relación con el consenso sobre las medidas antiterrorista entre las elites políticas, esta primera fase estuvo caracterizada por la clara ausencia del mismo como evidencian, por un lado, las numerosas elaboraciones legislativas en formato decreto-ley, o las dificultades para iniciar y desarrollar la reforma de los cuerpos de seguridad del Estado y de la propia judicatura. Además, la oposición de los nacionalistas vascos a la mayoría de las medidas, su ambigüedad hacia la violencia de ETA, y su resistencia a considerar legítima la actividad de los FCSE en el País Vasco evidencian claras fracturas políticas que se mantendrían hasta mediados de los años ochenta. Con todo, la política antiterrorista seguía funcionando con mayor o menor grado de efectividad. Es

¹⁰⁶ Ley 55/1978 de 4 de Diciembre.

interesante destacar que en este contexto, la política antiterrorista estaba bastante al margen de la opinión pública.

El marco legislativo al finalizar el régimen franquista era especialmente punitivo y en él están unidos el orden civil y el militar. Ya en 1976 se había disuelto el Tribunal de Orden Público (TOP) y en su lugar se había creado la Audiencia Nacional (AN) con la competencia, junto con los juzgados centrales de instrucción, de los delitos de terrorismo. Ante el incremento y la intensidad de la violencia a lo largo de los años setenta se había adoptado en 1975 el Decreto Ley sobre “prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y la seguridad personal”, que aumentó sensiblemente las medidas represivas y las competencias judiciales¹⁰⁷. Este decreto permanecerá en vigor en el inmediato postfranquismo haciéndose uso de él, por ejemplo tras los asesinatos de los abogados de Atocha en 1977. Dicha legislación estuvo vigente hasta 1979 cuando comienzan a promulgarse nuevas normas, en buena medida con carácter de urgencia, y no como resultado de una reflexión sosegada¹⁰⁸. La legislación aprobada hasta 1980 se caracterizaba por acelerar los procesos contra los delitos de terrorismo y por procedimientos de emergencia, dando a la AN mayor competencia para intervenir en breve en los delitos.

El principal elemento normativo en materia de terrorismo es la LO 11/1980 de 1 de Diciembre que además, no derogaba ninguna de las normas de los tres últimos años. Estaba elaborada en virtud del art. 55.2 de la Constitución española (relativo a la suspensión de derechos y libertades) y representa la aprobación, por primera vez, de una legislación permanente, abandonando la forma del decreto-ley. Esto evidenciaba de alguna manera cierto incremento en los niveles de consenso y una mayor gobernabilidad del recién estrenado sistema democrático¹⁰⁹. A pesar de la elaboración de normas que se

¹⁰⁷ Al finalizar el régimen, estaban vigentes desde 1971 los Decreto y 42/71 y 44/71 en virtud de los cuales se encausaban los delitos de terrorismo en el TOP. Esta legislación permitía amplios poderes policiales con plazos de detención de diez días, capacidad de registros con orden gubernativa y jurisdicción militar sobre asuntos de orden público. En todo caso, se daba una violación sistemática de las normas de detención que se usaban como medida de extracción de información (Domínguez, 2000).

¹⁰⁸ En el camino hacia la democratización, se aprobaron los DL 2/1976 y DL 21/1978 y la Ley 58/1978 que derogaban la mayoría de las medidas de carácter autoritario y regulaban las competencias policiales y judiciales en materia de terrorismo si bien adolecían de déficits democráticos en lo relativo a los aspectos procesales y en las capacidades atribuidas a las agencias de seguridad.

¹⁰⁹ Esta ley estaría en vigor hasta la conocida como “ley antiterrorista” de 1984. En todo caso, confería amplias facultades a las agencia policiales y los plazos de detención se podían alargar hasta diez días. Estas facultades fueron profusamente utilizadas, también para cuestiones de seguridad ciudadana no relacionadas con el terrorismo, como revela el caso de la desaparición del delincuente común Santiago Corella “El Nani” en 1983. Jaime (2002) señala que entre 1981-1983 se aplicó extensivamente la legislación antiterrorista a la delincuencia común en al menos 443 casos.

ajustaban al marco democrático, en esta etapa había un escaso control judicial¹¹⁰, un cierto abuso de la legislación como se ha señalado, y una falta de acomodación de las agencias policiales a la nueva realidad, que tendrían sus efectos en la pervivencia de malas prácticas, excesos policiales y eventualmente, actividades para-policiales.

Por lo que respecta a la cooperación internacional, en este periodo sólo se puede hablar de la relación con Francia¹¹¹. El régimen había sido consciente de sus limitaciones en el exterior y se había abstenido de proyectarse en el terreno de la lucha antiterrorista. La proyección de la política antiterrorista en el ámbito europeo no constituye una prioridad en ese momento, sino que lo es el demostrar que el Estado vecino constituye un “santuario” o zona relativamente segura para los miembros de la organización armada. Con todo, ya en 1977 se firman los primeros protocolos vigentes en Europa (la Convención Europea sobre la supresión del Terrorismo en Estrasburgo)

¹¹².

Los gobiernos de la transición y de la democracia, siendo R. Martín Villa ministro, establecieron las primeras iniciativas buscando la colaboración francesa en relación con las limitaciones de la extradición judicial¹¹³. Era sabido que el sur de Francia era utilizado por los militantes de ETA como refugio o “santuario” (Reinares, 1998) y, sin embargo, en estos años la cooperación era nula. La principal limitación era el tema de la “extradición por delitos políticos”, ampliamente protegida en el derecho europeo en general y en Francia en particular (López Garrido, 1987). En el ámbito europeo comienza a discutirse la posibilidad de limitar este principio en el caso de la lucha contra el terrorismo y se presiona a Francia para que revise el estatuto de “refugiado político” cuya defensa había gozado de larga tradición en la república francesa¹¹⁴. Hasta la elaboración de la Constitución española de 1978, Francia se limitó a hacer una revisión de cuestiones legislativas vinculadas al derecho de extradición y al estatuto político de asilado siempre con una oposición interna del Partido Socialista

¹¹⁰ La reforma de la judicatura, igual que la de las FCSE, no tuvo lugar hasta 1980 con la Ley Orgánica del poder Judicial. La ausencia de cambios estructurales también influiría en el desarrollo de la política antiterrorista como señalan Jaime (2002) y Domínguez, (2000).

¹¹¹ Un trabajo en extenso sobre la cooperación franco-española en la lucha contra el terrorismo es el de Morán, (1997).

¹¹² En el ámbito de la UE ya se estaba trabajando desde 1976 en los llamados Grupos Trevi y en los inicios de una cooperación multilateral (véase capítulo 4).

¹¹³ En este momento Francia consideraba la actividad de ETA como delitos de naturaleza política y negaba sistemáticamente la extradición, otorgando, además, el estatuto de “refugiado político” a buena parte de los miembros de ETA que se instalaban en suelo galo.

¹¹⁴ Tradición que había comenzado a romperse con la extradición a Alemania de un miembro de la RAF (fracción del ejército rojo- Baader Meinhof) en 1977.

Francés. No será, hasta 1980 cuando los temas de política exterior se orienten a comenzar las negociaciones para la entrada en la CEE, en la OTAN y a estimular la cooperación antiterrorismo (Morán, 1997).

Expansión de la política antiterrorista (1982- 1989)

Este periodo estará marcado por la llegada al poder del PSOE y su continuidad en el gobierno hasta 1996. Desde el punto de vista de la dimensión policial de la estrategia del Estado, consolidada la transición a la democracia, esta etapa tiene características propias que señalaremos brevemente.

Por un lado, los socialistas heredaron la política de reinserción y el acuerdo de 1982 para la desmilitarización de los *polimilis*, por lo que tuvieron que gestionar la reinserción de 258 personas que normalizaron su situación por la vía de indultos, excarcelaciones y exilios entre 1982-1985. Por otro lado, si bien el gobierno del PSOE concedió a la Guardia Civil un mayor protagonismo, el ministro Barrionuevo continuó en lo fundamental la línea establecida por Rosón de reordenación y expansión de la estrategia operativa.

Este intento de dar a la estrategia antiterrorista una dimensión más global y unificada se materializó en el Plan ZEN (zona especial de norte) de 1983. Este plan establecía las líneas de actuación fundamental de los cuerpos de seguridad y contemplaba una gran inversión en infraestructura (equipamiento técnico, medidas de protección y mejora de las condiciones de vida de los agentes), con el fin de facilitar la tarea policial. El objetivo general era tratar de aislar a ETA dentro de la propia sociedad vasca y constituía una clara apuesta de naturaleza fundamentalmente policial¹¹⁵. Constituyó la base de lo que sería la Ley Antiterrorista de 1984. Sin embargo se trató de una de las iniciativas gubernamentales más controvertidas en materia antiterrorista en aquellos años¹¹⁶. Fue profundamente contestada en el País Vasco y rechazada de plano en el mundo nacionalista. A pesar de ello, el plan formó la base de la estrategia del

¹¹⁵ “Si el ZEN, como es de esperar, consigue a medio plazo restar apoyos a los terroristas; hacer más rentable la acción policial en su trabajo diario para prevenir y luchar contra el delito; lograr mayor colaboración y cooperación entre la policía autónoma vasca o foral de Navarra y los cuerpos de seguridad del Estado en la erradicación del crimen; perfeccionar la formación de quienes más directamente se van a enfrentar con la amenaza terrorista; mejorar la protección de personas e instalaciones (...) se elevarán las cotas de seguridad ciudadana en todo el País Vasco y Navarra. Y tan sólo esto (...) es lo que pretende el ZEN dentro de un plan de seguridad ciudadana” (R. Vera, director de la Seguridad del Estado. *Diario El País*, 20/07/1983).

¹¹⁶ Véase: Parlamento Vasco: *Proposición no de ley sobre el plan ZEN*, 7 de Octubre de 1983.

- Uriarte, E. (1983) "Consideraciones sobre el Plan ZEN." *Diario El País* 8 de Agosto de 1984.

- “Un verdadero Plan Antiterrorista El Plan ZEN”, *Diario ABC*, 2 de Septiembre de Septiembre de 1983

gobierno socialista a lo largo de la década de los ochenta. En su desarrollo se produjeron enormes éxitos policiales y culminó de alguna forma en los consensos de Ajuria Enea a finales de la década.

El plan ZEN Implicaba varias propuestas: 1) la creación de un órgano permanente en la Dirección de Seguridad del Estado, 2) una mayor dotación económica a las Fuerzas de Seguridad para medios e infraestructuras, 3) el desarrollo de un gabinete jurídico, y 4) la promulgación de una nueva ley antiterrorista (Morán, 1997)¹¹⁷. Supuso la unificación de las fuerzas policiales incluyendo la entrada en funcionamiento de la Ertzaintza, y una mayor efectividad policial, en términos informativos y preventivos, así como la incentivación de una colaboración internacional con Francia para dismantelar la organización ETA en el sur de Francia. También recogía la política de reinserción que se había iniciado con la UCD.

Respecto a la configuración de las FCSE, a partir de 1982 comenzó la implantación de la Policía Autónoma Vasca –*Ertzaintza*–, desplegándose progresivamente por toda la región a lo largo de la década, hasta completarse a mediados de los años noventa¹¹⁸. Por otro lado, el final la década de los ochenta mostró un cambio sustancial en lo relativo a la prevalencia de la Guardia Civil sobre el CNP en la lucha contra el terrorismo. La Guardia Civil reveló signos de mayor eficacia en términos de detenciones -más del 60% de las detenciones y del 58% de los envíos a prisión según Jaime (2002)-, evidenciando cierto deterioro de la capacidad operativa del CNP en este contexto. Por ello, su papel se iría consolidando y acrecentando progresivamente, en colaboración con la recién creada Ertzaintza (cuyos logros sólo serían perceptibles a medida que se fueron involucrando en la lucha contra el terrorismo).

A partir de 1988 y hasta 1996, siendo J. L. Corcuera y A. Asunción ministros del Interior, no se hicieron grandes cambios legales u organizativos y se mantuvo prácticamente invariable el entramado de la seguridad interior del Estado. Los cambios de mayor calado vendrían siendo J. A. Belloch, ministro de Interior y Justicia (1994-1996), quien introdujo cambios en la configuración de los servicios de información “inteligencia”. Estos dos cambios revelaron, a medio plazo, un nuevo paradigma en la

¹¹⁷ Considérese que, en este momento, ETA había modificado su estrategia hacia una “guerra de desgaste” que incluía, como hemos visto, el empleo de nuevas técnicas como el coche bomba y un mayor grado de indiscriminación en sus objetivos.

¹¹⁸ En 1995, se responsabilizarían de todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) sustituyendo a los distintos cuerpos de policía estatales.

comprensión de la política antiterrorista, ya por el interés medular en lograr gran efectividad de los servicios de inteligencia, ya por la vía de la, cada vez más estrecha, cooperación entre el poder judicial y las agencias de seguridad.

Respecto a la inteligencia, se trababa de la primera gran reforma de dichos servicios¹¹⁹ en veinte años. Aunque su alcance en estos años fue limitado, según señala Jaime (2002), la atribución de la función de coordinación de todos los servicios antiterroristas a la Comisaría General de Información (CGI) con el fin de restar perfil político a ETA, se convirtió en un elemento de importancia. La estrategia de acercamiento entre los departamentos de Justicia e Interior fue retomada al final de la década de los noventa por ministro Mayor Oreja, quien reforzó la cooperación con el poder judicial en la estrategia contra ETA.

A lo largo de los ochenta, tenemos que señalar todavía un aspecto más en lo que respecta a la seguridad del Estado. Es de interés en tanto que determinó en gran medida la evolución posterior tanto del terrorismo de ETA, como del conjunto de dimensiones que he expuesto y que son parte de las estrategias antiterroristas del Estado (la política de consensos, la legislación y la cooperación internacional). Me refiero a la creación del GAL y su mantenimiento a lo largo de la década de los ochenta.

La emergencia de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL) constituye uno de los capítulos más negros de la política antiterrorista española¹²⁰. Podemos decir, en primer lugar, que constituyen una de las cristalizaciones de prácticas policiales irregulares que proliferaron en el contexto de incertidumbre y desorganización que significó, desde el punto de vista policial, la salida del franquismo¹²¹. Por otro lado,

¹¹⁹ Algunos de los cuales, en concreto el CSID venían siendo objeto de escándalos de corrupción y espionaje vinculados a los GAL.

¹²⁰ Los GAL fueron una organización para-policial (armada) que actuó en el País Vasco y en el sur de Francia entre 1981 y 1986 contra militantes de ETA y de la izquierda abertzale fundamentalmente. Dada su relación con miembros del gobierno y la administración del Partido Socialista (hechos probados según Sentencia 2/1998, del Tribunal Supremo, sobre el caso “Segundo Marey”) diremos que se dieron a conocer en 1983 y que sus actuaciones se prolongaron hasta 1986 como respuesta a la violencia de ETA. El objetivo parecía ser acabar con los dirigentes de la organización en el sur de Francia y presionar a las autoridades francesas para que se implicaran en la cooperación antiterrorista contra ETA (Fernández Hernández, 2008). Su actividad dejó un balance de 26 muertos. Se trataba de una organización aparentemente desideologizada y desvinculada (parcialmente) de otras organizaciones anteriores de extrema derecha (BVE o Triple A). Su dirección, cobertura y soporte se realizó con la connivencia y apoyo explícito de las altas instancias del aparato del Estado, según lo establecido por la Audiencia Nacional, y por las declaraciones políticas de algunos implicados y por el escaso interés de las FCSE en indagar sobre el asunto (Jaime, 2002).

¹²¹ El desconcierto que produjo en los sectores policiales la muerte de Franco afectó a las tácticas policiales irregulares que se venían utilizando. Jaime (2002) señala cómo se comienza a detectar el involucramiento activo tanto de niveles directivos como operativos de las fuerzas franquistas de orden

contribuyeron a la deslegitimación del Estado sobre todo en el País Vasco, pero también a lo largo de los noventa exacerbaron un durísimo debate público sobre las políticas antiterroristas.

Aparece en la primera mitad de los años ochenta una intrincada red (no del todo esclarecida) compuesta por instancias concretas de las agencias de seguridad estatales (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y CSID) y altos mandos del ministerio de Interior, de la extrema derecha y del hampa francesa que desarrollaron una estrategia de acoso a ETA, fundamentalmente en suelo francés. Dado que los niveles de coordinación eran reducidos, estos grupos se caracterizaron por una alta improvisación, escasa profesionalidad y un buen número de errores. Pero a pesar de todo ello causaron un total de 24 víctimas en un periodo de cinco años¹²².

Desde un punto de vista puramente operativo o en simples términos de efectividad, la actividad de GAL generó importantes operaciones contra ETA a partir de la información obtenida y, de una forma clara, aceleró cooperación de las autoridades francesas en la lucha antiterrorista¹²³. Desde un punto de vista democrático, contribuyó enormemente a la deslegitimación del Estado tanto dentro como fuera de España¹²⁴, pero muy especialmente en el País Vasco. La conexión de los GAL con altas instancias del Estado y de la administración socialista constituyó un ejemplo de prácticas irregulares, de guerra sucia o de terrorismo de Estado según los criterios políticos o jurídicos con los que se analice el fenómeno¹²⁵.

La legislación antiterrorista en este periodo experimentó una tendencia muy similar al desarrollo de la política policial. Tal y como se ha subrayado, los principios del plan ZEN se materializaron en la LO 9/1984 de 26 de Diciembre- *contra la actuación de Bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2*

público en organizaciones para-policiales armadas (BVE, ATE) hasta bien entrada la década. La incertidumbre se acrecienta con la victoria del gobierno socialista en 1982 entre la extrema derecha violenta. Sin embargo, estas organizaciones irán desapareciendo a medida que se consolidan los GAL a partir de 1981, una organización de orígenes inciertos pero de clara vocación ilegal.

¹²² Aunque los tribunales nunca lograron esclarecer elementos que permitieran hablar de “organización terrorista”, se puede decir que formó parte de una estrategia deliberada de prácticas irregulares que se aprovechó de factores del contexto sociopolítico, de las estructuras del franquismo aún por transformar, de una cultura policial autoritaria y de la propia cultura organizativa de las FCSE en el País Vasco para avanzar objetivos en la estrategia contra el terrorismo.

¹²³ Véase Morán, (1997).

¹²⁴ Véase Guittiet (2008).

¹²⁵ Para un análisis del GAL en perspectiva de terrorismo de Estado véase: Lamarca, (1993); en términos de “guerra sucia”, véase: Woodworth, (2001). Un análisis detallado de las implicaciones jurídicas y el tratamiento de los GAL en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremos se encuentra en Fernández Hernández, (2008).

de la Constitución- conocida como Ley Antiterrorista. En este texto se constataba el fracaso de las legislaciones previas (a juzgar por la evolución de la violencia de ETA) y plantea un endurecimiento generalizado en diversos aspectos:

En primer lugar la LO introducía figuras nuevas en la tipificación del delito de terrorismo, como era la colaboración con banda armada y la apología del terrorismo. Además, elevaba el coste de la acción terrorista al establecer la distinción entre “delito frustrado” y “delito consumado”. Por otro lado, respecto a la dimensión procesal, se mantenía la posibilidad de detención policial preventiva por diez días, permitía el régimen de incomunicación y facultaba a las FCSE para realizar registros y detenciones sin orden judicial (por la vía gubernativa).

El texto fue aprobado en el parlamento con el apoyo de la oposición, pero con el rechazo significativo del PNV, el PCE y la minoría catalana¹²⁶. Esta ley sería declarada parcialmente inconstitucional por el TC en 1987, y posteriormente derogada en su totalidad, por aquellos artículos que habían sido más polémicos (relativos al delito de apología o al régimen de incomunicación)¹²⁷. La parte de articulado que no había sido derogada fue incluida en la legislación común por la vía del Código Penal y en la Ley de enjuiciamiento Criminal¹²⁸, en un primer intento de “normalizar” la legislación relativa al terrorismo que, como hemos visto, se había elaborado hasta la fecha por la vía de leyes especiales.

Sin embargo, esto sólo fue posible gracias a los consensos generados a partir de 1986 entre el PSOE y el PNV y a las reflexiones y debates en entornos judiciales¹²⁹. A partir de los años noventa, se empezaría a legislar por la vía de la legislación ordinaria y la derogación de la legislación especial coincidió en el tiempo con una disminución perceptible de la actividad de ETA. En todo caso y respecto a la Ley antiterrorista de 1984, es llamativa la elaboración de un texto tan punitivo tratándose de un gobierno

¹²⁶ La aprobación de esta ley en un contexto en el que parecía haber mejoras respecto a años anteriores levantó numerosas críticas tanto dentro como fuera de España. Véase: Martín Pallín (1992) y Bandrés, (1985).

¹²⁷ Es interesante poner de relieve, por un lado, el cuestionamiento que el TC hace de la consideración delictiva del delito de “apología del terrorismo”, vigente en el CP de 2010. Y por otro lado, en lo que respecta a la incomunicación y los plazos de la detención policial (no más de 72 horas), es la tutela judicial lo que se cuestiona y no el propio instrumento. A lo largo de los años noventa y sobre todo en la última década, podremos comprobar que estos instrumentos se han endurecido y sofisticado aunque, en todo caso, han sido cuestionados por las organizaciones internacionales de derechos humanos (AI) o por el propio Relator Especial de los Derechos Humanos de la ONU para la lucha contra el terrorismo.

¹²⁸ En adelante CP y LeCrim.

¹²⁹ Véase: De la Cuadra, B: (1987) “La inclusión de delitos especiales en el Código Penal inconstitucional para expertos juristas” *Diario El País*, 22/11/1987.

socialista. Pero si consideramos la trayectoria de continuidad y endurecimiento de la política antiterrorista (y de orden público en general) bajo su administración, parece más bien evidenciar, como plantea Della Porta (1995), que a menudo son los gobiernos de izquierdas los que avanzan agendas y estilos de represión más duros en relación con el orden público¹³⁰. La necesidad del Ministerio del Interior de dar respuesta urgente a demandas de mayor seguridad vinculadas a la alarma social generada por el terrorismo, llevó a una aplicación “laxa” o difusa de esta legislación que se puso en práctica incluso al ámbito de la seguridad ciudadana común, como ya hemos mencionado.

A pesar de lo narrado, el clima de entendimiento entre el PSOE y el PNV a finales de los años ochenta había comenzado a mejorar (debido probablemente a su colaboración en el Gobierno Vasco), y tuvo como resultado el logro de consensos en cuanto al modo de abordar algunos aspectos relativos al terrorismo que afectaron, sin duda, a la derogación de la Ley Antiterrorista, al establecimiento de los primeros contactos para lo que serían más tarde las negociaciones de Argel o a los Pactos de Madrid y Ajuria Enea. En 1985, el Lehendakari Ardanza (PNV) reconoció, por primera vez, desde la transición la legitimidad de la acción policial y judicial en la persecución del terrorismo. Esta aceptación, y la del hecho de que la acción policial no era incompatible con medidas de carácter político, constituían un paso importante para el nacionalismo democrático, pero también para el avance del consenso en cuanto al modo de abordar el terrorismo. (Domínguez, 2000). Se anunció también en 1986, como parte de una estrategia de colaboración en la lucha contra el terrorismo, la creación de una Comisión internacional de expertos para la elaboración de un informe sobre el modo de afrontarlo. Así, el *Informe Rose* establecía algunas líneas de acción en materia de seguridad que incluía entre otras cosas, según Domínguez, la modificación de la legislación antiterrorista y la visibilidad pública de las víctimas del terrorismo con el fin de sensibilizar a la opinión pública¹³¹.

¹³⁰ En 1992, la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como *Ley Corcuera* o “*Ley de la patada en la puerta*”, evidenciaba (en un ámbito distinto al del terrorismo) la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de seguridad ciudadana antes la percepción de una proliferación de la delincuencia común. Algunos preceptos relativos a la inviolabilidad del domicilio y la tutela judicial relativa a la misma fueron derogados por inconstitucionalidad en STC 341/1993 de 18 de noviembre.

¹³¹ El Informe Rose, elaborado en 1986 por los expertos C. Rose, E. Ferracuti, H. Horchfm, P. Janke y J. Leaute fue bastante opaco para la opinión pública y tampoco se le prestó excesiva atención en los medios de comunicación. Se trató más bien de un intento del Gobierno Vasco de mostrar buena voluntad para acabar en la violencia y sin embargo es revelador de algunos aspectos que se tratan en este trabajo. De nuevo aparece el “factor internacional” cuyo impacto es difícil de medir, claramente rechazado por buena parte de los actores implicados, y sin embargo, a la vista de lo narrado hasta ahora, frecuentemente

Desde el punto de vista político y como resultado de los consensos logrados en relación al terrorismo, los pactos de Madrid (1987), firmados en el Congreso de los Diputados entre la mayoría de las fuerzas parlamentarias, y el Pacto de Ajuria Enea (1988), suscrito en la CAV con contenidos similares, se constituyeron en hitos fundamentales en las estrategias gubernamentales contra ETA. Incluían el reconocimiento de la legitimidad de las FCSE, el respaldo al Estatuto Vasco, la condena de la violencia y la revisión de la legislación antiterrorista. Se firmaron bajo el impacto del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (1987) y en el contexto de los primeros contactos en relación con las negociaciones emprendidas por el gobierno socialista con ETA en Argel.

Si consideramos el texto de Ajuria Enea, en él se contiene un deseo de los firmantes de rechazar la violencia y de sacarla del debate político, y una referencia expresa a avanzar la cooperación internacional. Aunque no parece que operativamente el pacto significara mucho, sí podemos decir que lo fue en términos de enmarque que las elites dieron a las políticas antiterroristas a partir de este momento. En 2004 (en un momento de alta conflictividad política en relación con el terrorismo), el Pacto de Ajuria Enea seguía siendo considerado por buena parte de las elites políticas implicadas en el conflicto vasco, como una de las iniciativas más importantes para la resolución del problema¹³². Se entendía (y en buena medida se sigue haciendo) que dicho pacto constituía la elaboración de un diagnóstico común en el que el enemigo a combatir era el terrorismo y, por ello, suponía la base de para la elaboración de una estrategia antiterrorista efectiva¹³³. Finalmente, respecto a la cooperación internacional en esta etapa, podríamos decir que constituye una de las dimensiones más relevantes de las estrategias antiterroristas a lo largo de los años ochenta y que iría potenciándose en el ámbito policial y judicial hasta la fecha.

Con la llegada del PSOE al gobierno se empezaron a desarrollar reuniones al más alto nivel para superar el atasco de los gobiernos Suárez –Giscard D’Estaing. Los esfuerzos del ministro F. Morán en una campaña diplomática hacia Francia confirmarían el “deshielo psicológico” (Morán, 1997) de las relaciones bilaterales con

presente. Sobre el papel de los “expertos” en la elaboración de diagnósticos y pronósticos sobre el terrorismo, véase el capítulo 4.

¹³² Véase el capítulo 1

¹³³ Al hablar de consensos políticos en este momento es importante destacar que, si bien el Pacto de Ajuria Enea fue firmado por la mayoría de los partido del arco parlamentario, incluyendo a Alianza Popular, los partidos de la derecha estaban inmersos en debates y crisis internas que sólo se resolverán al finalizar la década y, por lo tanto, la cuestión del terrorismo no cobrará significación política en su discurso y su agenda (al menos no de una manera articulada) hasta los años noventa.

Francia a la vez que se negociaba la entrada en la CEE. La cooperación antiterrorista comenzó a dar algunos frutos y hacia 1983 y los refugiados vascos en el sur de Francia empiezan a sentirse inseguros (Domínguez, 2000). Simultáneamente habían comenzado a operar los GAL¹³⁴ contribuyendo definitivamente a la implicación de Francia en la lucha contra el terrorismo. En consecuencia, se inician redadas conjuntas y se asienta la práctica de expulsión a terceros países.

Los Acuerdos de la Castellana (1984) supusieron un punto de inflexión en la actitud de los gobiernos franceses que modifican su visión de la extradición respecto a delitos políticos e iniciaron una cooperación más sólida por la vía de la acción directa¹³⁵. Estos acuerdos han sido descritos como la pieza más importante en la lucha exterior contra el terrorismo hasta aquel momento, y sentaron las bases para una intensificación de la misma a lo largo de la segunda mitad de los ochenta. El paso de la defensa del derecho de asilo a los esfuerzos por poner fin al santuario son algunos hitos que, junto con los consensos logrados con respecto al principio de extradición¹³⁶, hacen de 1984 un momento clave para el tratamiento del terrorismo¹³⁷.

A partir de esta fecha y hasta el momento presente, las relaciones con Francia por lo que respecta a la lucha antiterrorista han sido de cohabitación. El final de la década estará caracterizado por la presencia de una oleada de violencia de carácter internacional en suelo francés, con lo que podemos constatar que el clima internacional ha comenzado a cambiar¹³⁸ y con él también la preocupación francesa por el tema del terrorismo. El ministro del Interior, Chirac comienza a plantear la exigencia de modificar algunos mecanismos internos para la lucha contra el terrorismo. Se trata de modificaciones vinculadas a la cooperación con otros países, el aumento de controles fronterizos o la centralización de las acciones antiterroristas de las que claramente se beneficiaría España (Morán, 1997).

El ingreso de España en la CEE marca otro punto de inflexión en la cooperación. La proyección de la política antiterrorista hacia el ámbito europeo se abre camino, tal y

¹³⁴ Los GAL iniciaron una escalada de violencia sin precedentes en suelo francés que planteó un serio problema de soberanía y desorden público, generando en primer lugar un problema para el Estado francés y en segundo lugar, gran confusión en el entorno de ETA obligando a sus miembros a extremar la clandestinidad.

¹³⁵ En concreto, la supresión de estatutos de refugiados a determinados vascos residentes, la deportaciones a países de América latina o la aceptación, por primera vez, de órdenes de busca y captura dictadas por Interpol (Morán, 1997).

¹³⁶ Véase el capítulo 4.

¹³⁷ A partir de este momento, en Francia ETA pasaría a ser “asociación de malhechores” y sus miembros “delincuentes comunes”.

¹³⁸ Véase el capítulo 4.

como se contemplaba en el plan ZEN y como estaba recogido en los dos documentos fundamentales de aquel momento, consensuadas por las elites políticas (los pactos de Madrid y Ajuria Enea). La cooperación con Francia se intensifica hasta culminar en la Primera Cumbre Franco-Española (1987), que evidencia una armonía entre ambos gobiernos que se hace visible en constantes operaciones conjuntas e importantes éxitos policiales. Para 1990, la cooperación policial y judicial con Francia es imparable y comienza a proyectarse el esfuerzo exterior hacia otras instancias de ámbito europeo.

Fuera del marco de la cooperación internacional y para finalizar este periodo, debemos mencionar aún, como parte de las estrategias estatales para abordar la violencia, dos en particular. En primer lugar es fundamental referir el proceso de negociación conocido como “Conversaciones de Argel” que tuvo lugar entre 1987 y 1989. Los procesos de negociación entre Estados y organizaciones terroristas son una práctica habitual en casi todos los procesos que implican violencia y, sin embargo, se trata de iniciativas políticas altamente sensibles por lo que respecta a la opinión pública y porque implican en todo caso, el reconocimiento de las organizaciones en tanto “actores” (Reinares, 1998). En el caso que trabajamos, se han venido produciendo, con mayor o menor impacto público, en casi todos los gobiernos desde la democracia. En segundo lugar, hay que hacer mención al uso de la política penitenciaria. Dicha política ha constituido también un instrumento de represión de la violencia; ya para incentivar la reinserción, ya para alterar las estrategias y cohesiones internas de la organización ETA. Si bien a principios de los años ochenta la política penitenciaria fue utilizada para incentivar la reinserción de los *polimilis*, esta misma década acabará con la activación, tras el fracaso de las conversaciones de Argel, de una muy controvertida política de dispersión de presos por todo el territorio del Estado y que se ha mantenido hasta el 2012¹³⁹.

Represión policial, represión judicial y cooperación internacional (1990- 1998)

Por lo que respecta a los aspectos puramente policiales, los años noventa se caracterizaron por dos tendencias fundamentales en la lucha antiterrorista. Por un lado, por la progresiva sofisticación de las estrategias policiales, muy centradas en la

¹³⁹ La política penitenciaria hasta ese momento había estado muy sujeta a coyunturas pero, en general, se había concentrado a los presos en las principales prisiones de máxima seguridad. Con la llegada al ministerio del Interior de José Luis Corcuera y de Enrique Múgica al de Justicia (1988), se diseñó la dispersión de los 450 presos de ETA por todo el territorio con el acuerdo de todos los partidos parlamentarios a excepción de HB. (Jaime, 2002). Esta dispersión se ha mantenido hasta 2012 para todos los presos de ETA excepción, recientemente, de aquéllos que se han distanciado de la organización.

actuación de la Guardia Civil y la progresiva articulación de la policía autónoma vasca. A lo largo de esta década, culmina la adecuación positiva entre las FCSE y la legislación antiterrorista y se consolida la desaparición de incontrolados vinculados a las fuerzas de seguridad, reduciéndose también las denuncias por malos tratos en dependencias policiales y de comportamientos “anómalos” (Jaime, 2002)¹⁴⁰.

Desde el punto de vista orgánico, como ya se ha señalado, en la legislatura 1993-1996 se unificaron los ministerios de Interior y Justicia subrayando el carácter cooperativo que estas dos instituciones debían tener en la política antiterrorista. El área donde se introdujeron reformas más importantes fue en la lucha antiterrorista, atribuyéndose a la CGI la función de coordinación de todos los servicios de información, quedando los aspectos de naturaleza operativa adscritos a la Comisaría General de la Policía Judicial. Además, a mediados de la década, quedó consolidada la Ertzaintza, que en esta época comenzaría a implicarse en la lucha antiterrorista¹⁴¹.

A inicios de los noventa, se abandonan también todas las pretensiones de negociación en la medida en que se constataba que podían generar altas expectativas en ETA al tiempo que se opta por la vía de la reinserción y de la dispersión de presos en las cárceles. Estas dos vías lograrían reducir la cohesión interna de la organización que ya estaba afectada por las derrotas policiales de los primeros años noventa, en concreto, por la operación de Bidart (1992).

Los consensos respecto a la política antiterrorista pasaron momentos críticos a mediados de los años noventa. Si bien la sintonía entre PSOE y el PNV había sido buena desde finales de los ochenta, los debates vinculados a la resonancia del caso GAL abierto en la Audiencia Nacional y de otros casos relacionados con las FCSE provocaron una ruptura del PP con los consensos establecidos en Ajuria Enea (en virtud de los cuales el terrorismo quedaba fuera de la “contienda política” cotidiana) e

¹⁴⁰ Con todo, habría que subrayar que las denuncias por malos tratos y torturas se mantuvieron por parte de algunas organizaciones de derechos civiles y políticos en el País Vasco. También las llamadas de atención desde organizaciones internacionales sobre los excesos de la legislación antiterrorista. A lo largo de los noventa Amnistía Internacional emitió al menos veinticinco documentos externos sobre asuntos de encarcelamiento de objetores de conciencia en calidad de presos de conciencia, sobre las presuntas torturas y malos tratos a detenidos en relación con casos de motivación política, así como a otros por delitos comunes. Pero también en relación con las muertes bajo custodia, los indultos y la impunidad de hecho otorgada al personal de las fuerzas de seguridad condenados por torturas y malos tratos. La pena de muerte y los asesinatos, homicidios arbitrarios, secuestros y toma de rehenes perpetrados por grupos de oposición armada fueron asimismo señalados. Véase: Amnistía Internacional (1996): “España: comentarios de Amnistía Internacional al cuarto informe periódico del Gobierno español al comité de derechos humanos”.

Acceso: www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/007/1996/es/55a19047-eb08-11dd-aad1-ed57e7e5470b/eur410071996es.html

¹⁴¹ Y por esta razón también, pasaría a convertirse en objetivo de ETA.

hicieron visible un discurso típico de ley y orden en virtud del cual se exigía “mano dura” y firmeza policial.

La llegada al poder del PP en 1996, mostró la necesidad de pactos y consensos, sobre todo con los nacionalistas, para lograr la gobernabilidad. Por esta razón las iniciativas respecto a la dispersión y a la reinserción se ralentizaron. Con todo, el recrudecimiento de la actividad de ETA contra representantes del PP y del PSOE, fundamentalmente, y los episodios en torno a la muerte de M. A. Blanco (1996), hicieron cristalizar unos consensos que serían poco menos que inquebrantables a partir de ese momento¹⁴².

Respecto a la dimensión legislativa, esta década se caracteriza por la consolidación de la vía ordinaria para legislar las medidas antiterroristas. Se acaban las “leyes antiterroristas” que tantos problemas de constitucionalidad habían generado, y se comienzan a incluir las tipificaciones relativas al terrorismo por la vía del CP y de la LECrim evidenciando, por un lado, el logro de consensos parlamentarios significativos a pesar de las crisis mencionadas y, por otro lado, la normalización de una legislación que era de por sí excepcional (de Prada Solaesa, 1996).

En 1995, se aprueba el primer Código Penal de la democracia, que regula en el título XXI (delitos contra el orden público) y en los capítulos VI y VII los aspectos relativos a la represión del terrorismo. El delito de terrorismo incluye un elemento estructural o material y un elemento teleológico; es decir, es terrorismo la propia acción de actos terroristas pero también la simple colaboración, en distintos grados, para la ejecución de actos terroristas. Si bien este último aspecto ya comienza a ser contestado desde aquel momento (De Prada Solaesa, 1996) no dejaría de ampliarse en sucesivas reformas del CP en los años posteriores. La dimensión no tanto legislativa sino propiamente judicial iría adoptando, sin embargo, en esta época un carácter relevante. Hacia 1996, un nuevo concepto de terrorismo y del modo de abordarlo desde el punto de vista jurídico, comienza a planear por las distintas instituciones que participan de la política antiterrorista. El recorrido hacia la conceptualización de entramado ETA-MLNV será uno de los aspectos más importantes de finales de los años noventa aunque

¹⁴² En la segunda mitad de los noventa, emerge en torno al PP un movimiento sociopolítico que se identifica como movimiento cívico-constitucionalista o espíritu de Ermua, que presiona por una demanda de firmeza policial y judicial contra ETA y que en colaboración con algunas asociaciones de víctimas y los sectores más conservadores del PP, harán avanzar una agenda mucho más dura de lo que se había implementado hasta la fecha; sobre todo en lo que respecta a la dimensión judicial y política de las estrategias antiterroristas.

verá su cristalización a partir del año 2000. La teoría de los “círculos concéntricos” (Garzón, 1997) permite abrir el camino hacia la judicialización de la política antiterrorista en España. El argumento central de esta teoría establece que ETA es una organización armada que forma parte de un “entramado” –el conjunto de organizaciones del MLNV- de las que se señala, además, una colaboración estructural con aquella. Este planteamiento se desarrolla a partir de un concepto de terrorismo claramente más amplio que los anteriores (entramado, colaboración, apología), en el que se ha perdido la dimensión política del mismo y en el que se constatan sinergias entre organizaciones mafiosas y organizaciones terroristas.

En 1996, la Fiscalía del Estado abrió una investigación sobre la *Coordinadora Abertzale Sozialista* (KAS). La estrecha vinculación que había existido siempre entre ETA y KAS, que nunca había tenido repercusión penal (Domínguez, 2000: 334), es abordada por primera vez por la vía de la mencionada teoría de los círculos concéntricos del juez Garzón. Ningún juez se había planteado hasta entonces investigar los vínculos entre la organización y la coordinadora para buscar algo más que afinidades ideológicas y políticas. Esta teoría deja de ser un ensayo intelectual y se convierte en norte de la actuación policial de Garzón, sobre todo a partir de 1998 como veremos en los próximos capítulos.

La década de los noventa acaba, en términos de la estrategia gubernamental contra el terrorismo, con el Pacto entre nacionalistas en Lizarra-Garazi, la declaración de tregua por parte de ETA y el inicio de un proceso de negociación con el gobierno español. Se había generado un contexto caracterizado por la debilidad de la organización, por una clarísima pérdida de su apoyo social tradicional, de rechazo público visible contra ETA por la vía de la movilización social, y por una creciente demanda de seguridad y de políticas de firmeza policial por buena parte de la sociedad española.

En relación con la cooperación internacional esta década verá florecer los resultados de la cooperación francesa y, hacia finales de la misma se produce una proyección significativa hacia la UE, de la cooperación policial y judicial. Si en 1990, la cooperación francesa era imparable, al finalizar la década, era sencillamente, incuestionable.

En 1994, Francia había modificado su código penal cambiando el concepto de “banda armada”, antes considerado como delito político, por el de “movimiento terrorista”. En virtud de este cambio legislativo, sus miembros serían susceptibles de

extradición no sólo por sus acciones sino por la mera pertenencia a la organización. Los tribunales franceses negaban por primera vez la connotación política del hecho terrorista. A mediados de los noventa, aparecen como nuevas medidas la designación de delegados de ambos países para coordinar la lucha antiterrorista, pierde protagonismo cualquier tipo de negociación, y se camina hacia la priorización de la acción policial y judicial coincidiendo temporalmente con la activación del “Caso GAL” en los tribunales españoles y con el inicio de la judicialización de la política antiterrorista. Hacia finales de los noventa, a la vez que comienzan los esfuerzos internacionales del primer gobierno de J. M. Aznar (1996-2000), se lograron en el marco de la UE algunos éxitos en lo que respecta a peticiones históricas de los sucesivos gobiernos españoles respecto al terrorismo.

El contexto internacional a lo largo de la década de los noventa había cambiado mucho, caracterizado por la quiebra del mundo bipolar y la redefinición de los conceptos tradicionales de seguridad, amén de la emergencia del terrorismo internacional como problema de largo alcance. En el marco estrictamente europeo, la desintegración de la URSS y la democratización de los países del Este evidenciaron, por un lado, la posibilidad de transiciones y procesos de independencia pacíficos en distintas partes de Europa. Por otro lado, la emergencia de nuevas formas de violencia vinculadas a una etnicidad enormemente virulenta en la guerra de los Balcanes y, finalmente, la pacificación de uno de los viejos conflictos nacionalistas más cruentos del siglo XX, el conflicto en el Ulster, que encontraría en 1998 un punto de no retorno, en los acuerdos de Viernes Santo en Stormont pusieron de manifiesto el cambio.

En este contexto, la violencia de ETA comienza a revelarse como un hecho aislado en un nuevo contexto internacional. Un nuevo orden global caracterizado por otras violencias y otros conflictos. Un marco en el que el terrorismo claramente había perdido cualquier cualidad política y se convertía en el “gran enemigo” de las democracias occidentales. Empieza a tomar forma lo que en este trabajo he denominado el contexto de la *guerra contra el terror*.

3.2.2 ETA y el MLNV: Movimiento, Organización y Estrategias¹⁴³

Habiendo expuesto en detalle el papel del Estado como actor fundamental del conflicto y como arena institucional, conviene ahora considerar la trayectoria del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) y en particular de ETA, en la emergencia y evolución de la violencia.

El MLNV es considerado como una constelación de organizaciones de muy diversa naturaleza, en general, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Dicho conjunto de organizaciones, variable en sus nomenclaturas y en las dimensiones sociopolíticas que pretende abarcar (feminismo, ecologismo, etc.), pero bastante homogéneo en la medida en que se articula en torno a una demanda fundamental –la reivindicación nacional–, constituye lo que se llama el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. El MLNV sin embargo, no es sólo un conjunto de organizaciones que trabajan con distintos objetivos vinculados al proyecto independentista. Es también el universo simbólico y la comunidad de legitimación en la que cobra sentido y se reproduce la acción de ETA.

Aunque la historia de ETA se remonta al resurgir del nacionalismo vasco en la postguerra civil española, fue durante la transición cuando la recuperación del activismo político y la efervescencia social con la que se vive dicha etapa, hará cristalizar en los sectores más radicales del nacionalismo la necesidad de diseñar un programa político independentista e institucionalizado a través de organizaciones políticas. En 1977, la conocida “Marcha por la libertad”, liderada por el histórico dirigente independentista Telesforo Monzón, constituyó el acto fundacional de la articulación política de la izquierda *abertzale*. A partir de este momento, el sentimiento independentista radical se materializará en un conjunto de partidos de carácter marxista y nacionalista (ANV, HASI, LAIA) que quedarán aglutinados en torno a la coalición Herri Batasuna (HB), obteniendo así carta de naturaleza lo que Aulestia (1998) denomina “el sueño de *Argala*”: la ampliación de la lucha de ETA a la política convencional, la formación de una izquierda *abertzale* institucionaliza a través del Movimiento social.

¹⁴³ No pretendo dar cuenta exhaustivamente de la historia de ETA sino aportar una visión que permita al lector comprender la implicación de dicha esta organización en una estrategia de 40 años de violencia. Para una visión integral de la historia de ETA véanse: Elorza, (2000), Letamendia (1994), Morán (1997), Clark (1990) y Jáuregui, (1981).

Este conjunto de organizaciones se irá ampliando a lo largo de los años ochenta incluyendo problemas y demandas sociales que serán totalizados en la movilización del MLNV¹⁴⁴. Desde su nacimiento y a lo largo de los años ochenta, el MLNV se ha ido convirtiendo en una compleja constelación de organizaciones que incluyen las sensibilidades feministas, ecologistas, pacifistas, la defensa de los derechos civiles, el mundo asociativo juvenil, o la acción cultural, siempre bajo el paraguas del programa de liberación nacional en virtud del cual la resolución de todo problema social pasa por el logro de la autodeterminación de Euskal Herria.

Dentro de este mosaico de organizaciones, ETA ha sido hasta el presente el actor principal. Esto es así en la medida en que se ha configurado históricamente como una organización político-militar que ha pretendido estar en la “vanguardia” de un movimiento político. Pero dado que la una no existe sin la otra – no hay organización armada sin comunidad de legitimación-. Trataré de hacer una narración paralela de la trayectoria entremezclada de ETA con el MLNV, aun asumiendo que la reconstrucción de ETA requiere volver la mirada veinte años antes de la transición española.

3.2.2.1 Orígenes y evolución en el franquismo: El camino hacia la legitimación de la violencia revolucionaria

Como ya hemos apuntado, ETA nace como organización independiente en 1959 a partir de un grupo de trabajo para la recuperación de la lengua y la cultura vasca - EKIN- que había sido creada por un grupo de jóvenes 1952. Surge en el contexto sociopolítico caracterizado por cuatro aspectos fundamentalmente: 1) la fuerte represión física y simbólica sobre la lengua, la cultura y los símbolos nacionales vascos, 2) importantes transformaciones de naturaleza socioeconómica que afectan a la estructura social, a cierta descomposición del mundo rural y a alteraciones demográficas que implican la recepción de altas cotas de inmigración procedente del resto del Estado, 3) una crisis de la identidad vasca que convierte la reformulación y la adaptación del código nacionalista, en una prioridad, y 4) un contexto internacional favorable y

¹⁴⁴ "poco a poco, toda reivindicación popular se fue encontrando con la presencia de personas de la Izquierda abertzale rupturista, que no tanto por la organización o claridad de ideas como por su perseverancia comenzaban a condicionar primero y a controlar después estas realidades" (Aulestia, 1998: 53).

predispuesto al respaldo de estrategias de oposición a una dictadura rechazada ampliamente en el entorno europeo, junto con la difusión de aspectos ideológicos y estratégicos de procesos de conflicto, descolonización y guerrillas en otras regiones del mundo.

El proceso de reformulación del nacionalismo llevado a cabo por EGIN¹⁴⁵ a lo largo de los cincuenta implicaba, entre otras cosas, la constatación de que el pueblo vasco vivía en un estado de opresión, y que recuperar las señas de identidad nacionales, que el régimen no dejaba manifestar, era un proceso que dependía de la iniciativa popular. En esta redefinición del nacionalismo, se transfiere, además, el énfasis en los aspectos raciales de la identidad vasca hacia una centralidad de la lengua y la cultura. A partir de dicha organización, vinculada a los grupos juveniles del PNV (EGI), surgirá en 1958-59 en *Euskadi Ta Askatasuna* – ETA (en castellano, “Euskadi y Libertad”).

En el sustrato ideológico de ETA se encuentra un fuerte componente nacionalista y, sobre todo, independentista que agrupó inicialmente a tres tendencias distintas: 1) un elemento marxista vinculado a la difusión de este paradigma ideológico de enorme éxito en ese momento histórico, al triunfo de la revolución cubana, o a la experiencia de la guerra de Argelia, 2) una convicción profundamente patriótica de la que eran potadores jóvenes preocupados por la recuperación de la lengua e interesados en lograr la independencia¹⁴⁶, y 3) un catolicismo revolucionario que se plasma en algunos de los primeros escritos de clara influencia religiosa, siendo muchos de sus miembros sacerdotes de corrientes renovadoras de la iglesia “de base”. Esta diversidad ideológica inicial se irá refinando con el tiempo en distintos procesos internos bajo los cuáles se comprueba la continuidad, cuyo soporte será un grupo militar de ideología nacionalista radical.

En los primeros años sus actividades son de naturaleza exclusivamente intelectual-cultural y de difusión de sus propuestas. Y sólo a partir de la década de los años sesenta, cuando los medios a partir de los que trabajan se diversifican, se abre un proceso de militarización y legitimación de la violencia armada. Una de la primeras

¹⁴⁵ Esta organización considerada el embrión de ETA, estaba compuesta por un grupo de estudiantes e intelectuales del ámbito universitario que trabajaban semanalmente sobre temas vinculados a la lengua y la cultura vasca. Jose Manuel Aguirre, Benito del Valle, Julen Madariaga o Luis Álvarez Emparanza “Txillardegi”, etc., que pasan por ser fundadores de ETA, constituían el núcleo de esta organización. EGIN Significa “actuar”, “hacer” y con ello se ilustra la necesidad que esta generación tenía del activismo frente a la generación de la guerra, que era vista como pasiva.

¹⁴⁶ No es posible comprender el nacimiento de esta organización sin atender a la revalorización de la lengua en esta generación de jóvenes.

referencias a la violencia aparece en abril de 1962 en boletín *Zutik* en el que se escribe “la violencia consiste en pasar de la resistencia pasiva a la resistencia activa” (Morán, 1997: 65). En este momento, ETA no se considera una organización sino un movimiento nacional de resistencia y en sus palabras subyace la mentalidad de activismo -la *mentalidad de la ekintza*- (Zulaika, 1988) de la implicación activa, del “hacer”. La violencia se plantea en términos de resistencia.

En su segunda asamblea (1962) Julen Madariaga aboga por la lucha armada en los siguientes términos: “... *nuestra política de defendernos de la violencia del tirano ocupante por medio de la violencia no la hemos elegido nosotros, los vascos, nos la han impuesto, y por ende no cesará hasta que la última pulgada de nuestro territorio nacional se haya liberado*”¹⁴⁷. La cita evidencia de nuevo una visión de la violencia armada en términos de resistencia y, de una manera clara, la percepción de territorio invadido y la demanda de independencia.

En este proceso de legitimación de la estrategia armada la “biblia” de ETA será el texto de F. Krutwig¹⁴⁸ *Vasconia*, editado en Buenos Aires en 1962, en el que se definen las bases de la estrategia de guerrilla y la teoría básica de la acción de ETA. Krutwig elabora una defensa del marxismo y una adaptación de la vía “tercermundista” y de la estrategia de la acción-represión: en definitiva, la guerra revolucionaria como medio para la liberación de Euskadi.

Otra aportación importante a la ideología y a la legitimación de la violencia está en el trabajo de José Etxebarrieta. Su planteamiento se basará en la revisión de Mao Tse Tung identificando la lucha nacional con la lucha “de clase”. También ETA tratará de atraerse al movimiento obrero a su estrategia. “*el arma más importante que da la vitoria al combatiente de la guerra revolucionaria es la población civil, el hecho de que el pueblo esté de nuestro lado*”¹⁴⁹.

Las distintas contribuciones a la narrativa de legitimación intelectual de la violencia armada se materializarán en el folleto interno de ETA “Insurrección en Euskadi”, y será en la Tercera Asamblea en 1964 cuando la vía “tercermundista” se imponga sobre la “obrerista” (de corte socialista), definiéndose la organización en términos anticapitalistas, antiimperialistas y con un claro predominio del concepto de

¹⁴⁷ Madariaga, J: “Diálogo y Violencia”, *Zutik*, 3ª serie, nº 7, p.3 y ss. Cit en Morán (1997).

¹⁴⁸ Fernando Sarailh de Ihartza con el pseudónimo de Federico Krutwig Sagredo.

¹⁴⁹ *Insurrección en Euskadi*, manual interno de ETA. Cit en. Morán 1997: 67)

liberación nacional. En todo caso, las discusiones internas de naturaleza intelectual-filosófica se mantendrán hasta los años setenta ya que la estrategia de la organización está atravesada, tal y como plantea Unzueta (1998), por un cierto dilema que emana de la contradicción que se genera entre la lucha antifranquista y el logro de la independencia -vista en términos de descolonización. Estas divisiones generarán varias rupturas en la década siguiente.

Me parece importante resaltar, en este punto, la influencia notable que algunos factores del contexto internacional han tenido con respecto a la violencia. Debo señalar, entre otros, la difusión de procesos políticos (revoluciones, descolonizaciones), de ideas (teorizaciones de la lucha armada) y de repertorios (el recurso a la violencia) de acción colectiva vigentes en otras regiones y conflictos del mundo, y el papel que han tenido, desde el origen del conflicto, en el propio proceso de legitimación intelectual y estratégica del recurso a la violencia. La tendencia inversa, -el papel de algunos factores internacionales en la deslegitimación y pérdida de efectividad de la violencia- tendremos ocasión de analizarla en la segunda parte de este trabajo.

A mediados de los años sesenta, la estrategia revolucionaria-armada está consolidada y se basa en el principio de acción-reacción organizándose en cuatro frentes: político, económico, cultural y militar, aunque muy pronto el frente militar se irá haciendo con el control de la organización y haciéndose central en la estrategia de lucha. Como ya se señaló, es 1968 el año en el que se produce la primera víctima accidental de ETA y la primera “caída” de dos de sus militantes, lo cual precipitará el primer atentado premeditado de ETA contra el comisario torturador de la brigada político-social de San Sebastián, Melitón Manzanás.

El aumento de las acciones de ETA en este periodo trae consigo un incremento de la represión policial indiscriminada del régimen (miles de detenidos, torturados, etc.) que pone contra las cuerdas a la organización. Los efectos de dicha represión son, sin embargo, ambivalentes. Por un lado, la represión policial logró desarticular en buena medida a la organización (Sánchez Cuenca, 2001), y por otro, el clima de violencia indiscriminada generó un ambiente de comprensión y de adhesión afectiva, cuando no de apoyos directos (en forma de reclutamiento) considerable (Tejerina, 1997) logrando así parte del objetivo de la estrategia acción-reacción: atraer la solidaridad de la sociedad.

Las luchas internas en el seno de la organización se mantienen entre las diferentes facciones ideológicas, casi siempre ante la dificultad de conjugar la lucha obrera con la liberación nacional. En función de las distintas perspectivas se plantean estrategias de acción diferentes que cuestionan o no, el uso de la violencia. Entre las diferentes pugnas de poder por el control de la organización, es el colectivo predominante en la V¹⁵⁰ Asamblea el que logra imponer sus perspectivas (tesis colonialistas, lengua y actividad armada).

El año 1970 es uno de los peores en la historia de ETA y cuando tiene lugar el “proceso de Burgos”. Los activistas de la organización son pocos (no llegan a 40 según S. Morán, 1997) y están profundamente divididos. Sin embargo, un acontecimiento que podemos llamar transformador logrará dar la vuelta a la situación y llenar las filas de ETA y su capital de legitimación. En Diciembre de 1970, en momentos de suma debilidad para el régimen franquista, 16 miembros de ETA acusados por la colaboración en la muerte del policía Melitón Manzanas son encausados en un juicio en el que se piden condenas de muerte para 6 de ellos¹⁵¹.

Este episodio se convirtió en una escenificación de la reivindicación de los derechos del pueblo vasco y en un hito en la historia tanto del franquismo como de la propia ETA. La organización consiguió, gracias al proceso, salir del aislamiento y adquirir un impacto internacional muy significativo. Su implicación en la lucha antifranquista alcanzó su máximo apogeo generando una ola de solidaridad sin precedentes tanto en España como en el extranjero, que identificaba a los miembros de la organización como héroes de la lucha antifranquista. Hubo movilizaciones inéditas contra la dictadura en las calles españolas, sobre todo en el País Vasco, evidenciando una clara y organizada oposición a la dictadura. La iglesia se distanció del régimen y éste recibió presiones de países democráticos de Europa pidiendo el indulto. Nunca antes en la dictadura se habían alcanzado aquellos niveles de protesta¹⁵², lo que llevó a declarar el estado de excepción en el País Vasco y, posteriormente, en toda España. El resultado para el régimen fue el contrario del buscado.

¹⁵⁰ En 1970, ETA VI se constituye en grupo rival abandonando la lucha armada e integrándose en diversos partidos revolucionarios.

¹⁵¹ Eduardo Uriarte, Jose María Dorronsoro, Mario Onaindía, Jokin Gorostidi, Francisco Javier Izco y Francisco Javier Larena.

¹⁵² El encierro de 300 intelectuales en el santuario catalán de Monserrat como muestra de rechazo al régimen ha sido analizado como una de las protestas más efectivas en este contexto y que más contribuyó a la proyección internacional de los episodios de Burgos (Díez Medrano, (1999).

Desde el punto de vista del conflicto político nacional, las múltiples protestas por el proceso de Burgos que se tradujeron en una auténtica “ocupación de la calle”, del espacio público, son la expresión de una vida colectiva, pero clandestina, a través de la cual se había ido reproduciendo el código nacionalista y que sólo se había hecho visible a través de la acción de ETA (Pérez-Agote, 2008).

“Logró que para mucha gente, no solo en el País Vasco, los jóvenes de ETA fuéramos unos héroes contra la dictadura cuando la realidad era que ETA en ese momento era una organización muy debilitada y dividida internamente” (Uriarte, 2010: 2 cit en Aizpeolea, 2010).

Desde el punto de vista internacional, la amplia cobertura informativa del proceso, debido también a que ETA aprovechó la ocasión para secuestrar al cónsul alemán Eugen Beihl Schaeffer, proyectó una imagen de la dictadura como la “asignatura pendiente” de Europa occidental¹⁵³ y de la organización ETA como legítima oposición al régimen.

Para propia organización, 1970 fue un año decisivo de transición dentro del mundo de ETA: sus filas se llenaron de militantes, la comunidad de solidaridad se amplió considerablemente y, con ello, su capacidad de reclutamiento aumentó de manera exponencial. Fue ETA V la que logró capitalizar los episodios de Burgos y la que ganó para sí el respaldo y la legitimidad de su acción tanto dentro como fuera del País Vasco. Ideológicamente, la obsesión antiespañola centró el programa político por encima de la lucha antifranquista y se sentaron las bases de lo que sería la ETA de los años setenta. (Domínguez, 2000).

“Es verdad que allí se incubó el virus de los elementos perversos que posteriormente hemos conocido y sufrido. La ETA posterior al Proceso de Burgos se quedó con lo peor de nosotros al hacer de la violencia el centro de su política e ideología” (Uriarte, 2010: 2 cit en Aizpeolea, 2010).

Para quienes habían empuñado las armas hasta entonces la violencia *“pretendía ser lucha armada. Un instrumento al servicio de unos ideales que así eran expresados con una mayor rotundidad, que alcanzaban mayor autenticidad (...) Todavía era controlable, y parecía resultar eficaz para demostrar que ahí había una voluntad*

¹⁵³ En este contexto se comienzan a plantear debates en la prensa internacional sobre la naturaleza “resistente” de la violencia de ETA y su carácter de oposición al régimen autoritario de Franco. “Si España fuera una democracia y si la lengua vasca y las formas de organización comunitaria se hubieran podido desarrollar en libertad ¿se habría desarrollado esta línea de violencia separatista?”. *The New York Times*, 17, December, 1970: “Basque activist Heroes or Villains?”.

resuelta (...) Eran bombas contra símbolos del régimen. Contra monumentos "a los caídos", contra algunos edificios oficiales (...) Se trataba de hacer notar que allí había algo, una voluntad resuelta, un ánimo de ruptura con el pasado de resistencia que no se resistía" (Aulestia, 1998: 31)

Los condenados a muerte en el Proceso de Burgos pasaron siete años en la cárcel. Fueron excarcelados en la Amnistía General de 1977, tras la reinstauración de la democracia, y la mayoría de ellos adoptaron la política convencional bien a través de *Euskadiko Ezkerra*, o bien en HB.

Así pues, ETA V entra en los años setenta renovada, demostrando con el asesinato de Carrero Blanco en 1973 una gran capacidad operativa y gran habilidad fuera de su escenario habitual, el País Vasco. El atentado, que fue reivindicado en rueda de prensa en Burdeos (Francia), consolida la estrategia militar de ETA y es justificado por sus propios autores con el argumento de forzar el régimen hacia la apertura¹⁵⁴. También este episodio tuvo cierto impacto en el proceso de legitimación difusa entre ciertos sectores de la izquierda española (Muñoz Soro, 2005). Pero no sólo se trata de la lucha antifranquista. Como hemos señalado, ETA V reivindica cada vez más el carácter de liberación nacional de su lucha: *"Operación Ogro no sólo respondía a pautas estratégicas de socavar la dictadura en aras a la edificación de un proceso democrático en el Estado; también representaba y demostraba inequívocamente, la firme voluntad de la Resistencia Vasca (...) y su legítimo derecho a constituirse como único e indiscutible sujeto de la soberanía nacional"* (Extebeste, 1994: 13).

A partir de este atentado también, ETA convertirá al Estado francés en su zona de refugio, aunque esto ya se venía materializando desde principios de los años sesenta. En adelante, será considerado el "santuario" en el que multitud de activistas podían vivir fuera de la clandestinidad. En condiciones de seguridad en territorio francés y a partir de la acumulación de recursos humanos y materiales, ETA abrirá una importante campaña de acciones a lo largo de los años setenta. Su estrategia se diversifica, incluyendo las prácticas del secuestro y la extorsión con fines económicos (el llamado impuesto revolucionario), que se venía aplicando a las oligarquías industriales, pero también incluyendo las acciones de carácter más indiscriminado. El atentado la Cafetería Rolando del Madrid en 1974 (en el que murieron 14 personas y 71 resultan heridas, convirtiéndose en el primer atentado indiscriminado de ETA), genera, además

¹⁵⁴ Zutik, nº 64 (ETA- V), 1 de mayo de 1974, pp, 173-174 cit en, Morán (1997: 80).

de un amplísimo rechazo en la opinión pública española y la especial crítica de la izquierda¹⁵⁵, una importante división entre los militantes de ETA.

Se abre así la vía para la escisión que en la VI asamblea de 1973 que conducirá a una fractura interna de la organización en tres facciones: 1) ETA-militar (ETA-m), conocida como los “milis”, que sólo concede importancia a la cuestión nacional obviando la lucha obrera y la opresión de clase. Es la facción más orientada a la acción armada. Este grupo estaba liderado por un dirigente histórico de ETA J. Miguel Beñarán, *Argala*, claro exponente del abertzalismo y el patriotismo independentista¹⁵⁶. 2) ETA-político-militar (ETA pm) conocida como “polimilis”; con un número más reducido de militantes que tratan de conciliar la lucha de masas y la puramente militar, enfatiza el carácter marxista-leninista. Su principal líder Eduardo Moreno Bergareche, *Pertur*, trabajó activamente por la construcción de un proyecto político de largo alcance convencido de las limitaciones de la lucha armada¹⁵⁷. Sentó las bases de lo que después sería la política de partidos materializada en EE. 3) Los *Comandos Bereziak*, formados dentro de ETA político- militar como fuerza de acciones especiales, se integraron posteriormente en ETA militar al considerar una traición la deriva “españolista” de los polimilis que respaldarían la concurrencia en las elecciones generales de 1977 de *Euzkadiko Ezkerra* (EE).

La distinción fundamental entre estas facciones estriba en los objetivos estratégicos y en los medios para conseguirlos. En el caso de los polimilis, ante la inminente democratización del país a finales de los años setenta, algunos vieron la posibilidad de avanzar sus objetivos por la vía de la implicación política institucional. A pesar de ello, continuaron usando la violencia hasta su desmilitarización en 1981, año en el ETA (m) quedará como la única ETA que aún sobrevive en 2011.

Estamos en los estertores del régimen de Franco. Una nueva legislación antiterrorista (DL antiterrorista 10/1975 de 26 de Agosto) modifica y aumenta las medidas de represión policial en virtud de las cuales, a finales de 1975 y coincidiendo

¹⁵⁵ Este atentado marca también una clarísima ruptura en el discurso y las actitudes de la izquierda, determinando su alejamiento de cualquier tentación de asumir o valorar de manera más o menos ambigua el potencial transformador de la violencia política: "...una cosa era matar a un torturador Melitón manzanas o al tirano Carrero blanco y otra muy distinta era "un atentado terrorista indiscriminado donde mueren ciudadanos corrientes" (Muñoz Soro y Baby, 2005: 296). Además, será visto como una amenaza a la transición política al desencadenar acción-reacción.

¹⁵⁶ Fue uno de los últimos “teóricos” dentro de ETA muerto en atentado del Batallón Vasco Español (BVE) en 1978.

¹⁵⁷ Morirá, en circunstancias aún hoy por esclarecer, en 1976.

casi con la muerte del dictador, se producen los últimos juicios por terrorismo, incluyendo condenas de muerte a miembros de ETA y FRAP¹⁵⁸ que nunca fueron conmutadas a pesar, de nuevo, de la presión internacional. Así, el escenario que se abre de transición política estará jalonado por las diversas constelaciones de violencia política¹⁵⁹ (ETA, estatal, parapolicial y de ultraderecha fundamentalmente) que fijarán para los siguientes treinta años el programa y la estrategia de ETA y del mundo social de organizaciones vinculadas que cristalizan a partir de 1976, en el llamado Movimiento Vasco de Liberación Nacional (MLNV).

3.2.2.2 “*Nada ha cambiado*”: la transición a la democracia y la guerra de desgaste

Antes de abordar los cambios y continuidades de la organización al iniciarse la democracia española, señalaré que el contexto español es particular por la propia naturaleza del régimen franquista. Pero es de interés evidenciar que el ecuador de los años setenta constituye para el resto de países occidentales –democracias todas ellas– una expansión del activismo armado, fundamentalmente de extrema izquierda pero también de naturaleza etnonacionalista. Este fenómeno, resultado de los procesos de radicalización dentro del ciclo de protesta abierto en Mayo del 68 (Della Porta, 1995), es de enorme interés para nuestro trabajo, en la medida en que genera el contexto de difusión de ideas, de repertorios y de estrategias de acción colectiva en el que, en alguna medida, se mueve también el MLNV. Entre 1970 y 1990 actúan en contextos democráticos, *The Weathermen Underground* en EEUU, *Brigatte Rosse* en Italia, *Action Direct* en Francia, *RAF- Baader-Meinhof* en Alemania, IRA en el Ulster, o el *Fronte di Liberazione Naziunale Corsu* en Córcega, por poner solo algunos ejemplos.

En los años de la transición (1976-1982), con las filas llenas y el capital de legitimación obtenido en los últimos años del franquismo, ETA abre un periodo de mayor y más intensa actividad de su historia, provocando, entre 1976 y 1981, un total de 275 víctimas. Florencio Domínguez señala cómo en esta etapa ETA sentó las bases operativas, organizativas y estratégicas que le servirían para las dos décadas siguientes (hasta la caída de Bidart 1992). Lo más significativo desde este punto de vista es que se

¹⁵⁸ FRAP: Frente Armado Antifascista y Patriótico. Organización marxista-leninista que empleó la violencia como parte de la estrategia antifranquista a lo largo de los años setenta.

¹⁵⁹ La idea de “constelaciones de violencia” propuesta por Pérez-Agote (2008) resulta de enorme interés para analizar la transformación de la violencia de ETA y su persistencia a lo largo de la democracia. Será analizada al final de este capítulo.

establece una estructura jerárquica que culmina en una cúpula “todopoderosa” que se renueva por cooptación y a la que las bases están supeditadas¹⁶⁰.

Desde el punto de vista político, desaparece la reflexión ideológica y la formación; se abandona el adoctrinamiento a favor del activismo militar. La organización ostenta una altísima capacidad de reclutamiento y operativa, organizando entre 1977 y 1979 hasta 82 comandos *legales*¹⁶¹ (Domínguez, 2000). Además, las condiciones de seguridad que genera el “santuario” francés facilitan enormemente las operaciones de la organización en la que se configuran comandos que atentarán durante más de una década sin ser identificados (como el comando *Argala*, fundado por Txomin Iturbe en 1978, operativo con altísima capacidad legal y no identificado durante casi 12 años). La tolerancia de las autoridades francesas, de intelectuales, de la clase política y de la prensa, que veían a ETA como la organización antifranquista, no cambiaría hasta bien entrada la transición, facilitando enormemente las capacidades de la organización para reproducirse¹⁶².

A su vez ETA es un organismo omnipresente que parece condicionar la vida política en el País Vasco suscitando una tremenda atracción entre los jóvenes que, junto con los excesos policiales en materia de orden público, contribuye a alimentar el rechazo de los más descreídos de la democracia. Será necesaria aún una década para que los vascos dejen de ver a los miembros de ETA en términos positivos (Domínguez, 2000)¹⁶³. Desde el punto de vista narrativo y estratégico, ETA y su mundo se niegan a reconocer el carácter democrático del nuevo sistema político. En esta etapa, se produce

¹⁶⁰ Se conforma la misma cúpula que durará casi hasta Bidart: Domingo Iturbe *Txomin*, JA Urrutikoechea *Ternera*, J Miguel Beñarán *Argala*, J. Ramón Aramburu *juanra*, Jose Luis Ansola *larrañaga Pello el viejo*, Isidro Garalde, *Mamarru*, y algunos procedentes de los comandos *Bereziak* de ETA pm: Francisco Múgica Garmendia *Pakito*, Juan Lorezo Lasa Mitxelena, *Txikierdi*, y Eugenio Etxebeste *Antxón*. Todos ellos menos Iturbe y *Argala* estarán presentes en la crisis de Bidart (dentro o fuera de la cárcel, pero presentes en la toma de decisiones).

¹⁶¹ En los términos conferidos por las agencias de seguridad del Estado un comando *legal* es el constituido por miembros *legales* de la organización; esto es, por miembros no-fichados por los cuerpos de seguridad del Estado.

¹⁶² Uno de mis entrevistados en 2010 cuenta cómo al ser contactado para entregar el impuesto revolucionario en 1980 pasa al sur de Francia y se entrevista a cara descubierta y a plena luz del día con el máximo dirigente de ETA: “Yo tuve que entrevistarme el año 80, con Txomin Iturbe y otro personaje, cuyo nombre no recuerdo pero que fue asesinado por el GAL después, porque a mí el año 80 me mandaron una carta pidiendo el impuesto revolucionario, de cinco millones. Y entonces acudí, con un cuñado mío, acudí a San Juan de Luz. Me entrevisté con aquellos, montamos una bronca de primera división (...) me estaba esperando allá un, un recepcionista en la estación de San Juan de Luz y después estuve allá, a unos diez minutos de coche sentado en una terraza de una cervecería con Txomin Iturbe y compañía (...) Hoy eso es impensable. [Entrevista 15. 6 de mayo de 2010. Bilbao]

¹⁶³ Las percepciones sobre la violencia serán analizadas en los capítulos 6 y 7.

la ruptura definitiva de la familia nacionalista con el PNV por la aprobación del Estatuto (1979); una división que se mantendrá hasta los acuerdos de Lizarra (1998).

Con la transición en marcha, la debilidad del gobierno por el propio proceso de cambio político, una clara falta de orientación estratégica de la política antiterrorista, y en plena campaña de recrudecimiento de las acciones de ETA, el objetivo prioritario es la desestabilización de la democracia¹⁶⁴ porque se percibe que el éxito de ésta, como de hecho ocurrió, entrañaría dificultades de legitimación para la acción armada. Los años 79 y 80 son los más cruentos de la historia de ETA en los que ésta logra generalizar el miedo¹⁶⁵ y la inhibición colectiva que ilustra la muy difundida expresión “algo habrá hecho”¹⁶⁶. Aún con todo, ETA comienza a perder apoyos. Se constata en ese momento que la estrategia de la “guerra revolucionaria” y la espiral acción –reacción ha tocado su fin. No es posible acabar con el Estado. Y comienza a plantearse un cambio estratégico de “insurreccionalismo” a la “negociación” que supone un cambio de orientación asumido por los militantes (Domínguez, 2000).

La necesidad de ampliar la estrategia más allá del ámbito militar consolida la iniciativa KAS como foro en el que se deciden la estrategia política de la izquierda abertzale, siendo ETA la “vanguardia”. La alternativa KAS es también un programa político que incluye ciertos puntos innegociables con el Estado, entre los cuales está el derecho de autodeterminación, la amnistía de todos los presos, la expulsión de los Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo Nacional de Policía) o la integración de Euskadi y Navarra. Como marco de demandas políticas todo lo anterior estará presente hasta los años noventa porque se asume, en definitiva, que se puede lograr la rendición del Estado. ETA adopta entonces en una estrategia que, según Domínguez (2000) y Sánchez Cuenca (2001)¹⁶⁷, se puede denominar “guerra de desgaste” y que se alargará hasta 1998.

¹⁶⁴ Recordemos que las actividades de hostigamiento a la transición coinciden y en buena medida tienen su culmen con el golpe de Estado fallido del 23 de Febrero de 1981, siendo dos los efectos de dicho episodio para el caso que nos ocupa, en primer lugar la desmilitarización definitiva de los “polimilis” y en segundo lugar una cierta involución en el proceso de desarrollo autonómico.

¹⁶⁵ Un miedo que constatan Linz, Orizo y Vila, (1986) en sus análisis de opinión pública sobre temas políticos durante la transición.

¹⁶⁶ Volveremos a esta idea a lo largo de análisis en otros capítulos porque es muy recurrente al hablar de la violencia, de su legitimación y de su deslegitimación. Es interesante percibir en 2010 cómo se ha pasado en 30 años del “algo habrá hecho” para referir a las víctimas de ETA, al “algo habrá hecho” al hablar de los militantes de ETA y del MLNV detenidos o a las organizaciones ilegalizadas en los últimos años.

¹⁶⁷ El trabajo de Sánchez- Cuenca constituye un análisis exhaustivo sobre la estrategia violenta de ETA contra el Estado y cubre desde su nacimiento hasta la tregua de 1998.

Junto con la iniciativa KAS, ETA trata sin éxito de acercar al PNV a su programa y desarrolla o impulsa las organizaciones del MLNV como dinámica de contrapoder. Durante los primeros años ochenta, hará esfuerzos por acaparar o hacer suyas campañas sociales de distinta naturaleza con el fin de atraerse causas y organizaciones a su propio programa. Es el caso de la campaña contra la Central Nuclear de Lemóniz¹⁶⁸ o las movilizaciones contra la drogas. La campaña de Lemóniz se tradujo en 246 acciones terroristas, 5 muertos, 14 heridos y daños materiales por 2100 millones de pesetas y supuso una gran victoria simbólica para ETA (Domínguez, 2000).

A lo largo de los ochenta, sin embargo, ETA tendrá que hacer frente, a varios factores fundamentales para su estrategia: 1) la articulación de una política antiterrorista mejor organizada que contará, a partir de 1986 con cierto consenso de los gobiernos vascos,¹⁶⁹ 2) la consolidación de la violencia para- policial iniciada a finales de los setenta y consolidada en los ochenta a través del GAL, y 3) los inicios de la cooperación francesa en la lucha contra el terrorismo, y la aparición a partir de 1986 del rechazo social organizado contra la violencia (Gesto por la paz).

Los efectos de estos elementos fueron ambiguos, pues si bien disminuían el potencial de la organización por la mayor efectividad policial, aumentaban, por el lado de la actividad ilegal (GAL), la legitimación de la estrategia armada entre los militantes.

Por los distintos factores señalados, se percibe una importante reducción de la violencia (no así de su carácter indiscriminado ni de su impacto) que no recuperará ya los niveles anteriores. Se trata de un nuevo escenario en el que la organización, cada vez más militarizada, recurre a la búsqueda de un mayor impacto social de sus acciones, al

¹⁶⁸ Esta campaña incluyó el asesinato del ingeniero José María Ryan (1981) generando un auténtico clamor social de rechazo. Sin embargo, dicho clamor se vio contrarrestado con la muerte en comisaría y bajo tortura del militante de ETA Joseba Arregi. Dice Florencio Domínguez: *"...pocas veces los terroristas habían visto escenificada con tanta claridad su teoría de la existencia de dos violencias enfrentadas que se alimentan mutuamente"* (2000: p307). La contraposición de dos violencias ha sido uno de los referentes para la legitimación de la violencia armada de ETA y este episodio concreto, uno de sus muchos "mitos". En 2011 uno de los históricos dirigentes de la izquierda abertzale –Rufi Etxeberría– recupera este contraste, (como constatación de dos violencias) eludiendo una crítica de las violencias pasadas de ETA. (*Hoy por Hoy* (2011): Entrevista a Rufi Etxeberría, dirigente histórico de la izquierda abertzale, Cadena Ser, 8 de febrero de 2011).

¹⁶⁹ Dicho consenso se materializará en Ajuria Enea en 1988, pero en todo caso es importante mencionar que a partir de 1986 el Gobierno Vasco respalda, por primera vez, el papel de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo.

mismo tiempo que a un proceso disciplinario interno en la organización¹⁷⁰. Esta estrategia de “apretar filas” ante la pérdida de fuerza se traduce en episodios como el asesinato de la ex dirigente de ETA María Dolores Gonzáles Karatain, *Yoyes*, en 1986¹⁷¹.

La actividad de la organización se mueve entre lo discriminado y lo indiscriminado ya que, si bien es consciente de la necesidad de mantener apoyos, también lo es de la progresiva pérdida de los mismos. Sus dificultades de legitimación generan un recrudescimiento de su actividad, aunque ello encuentra umbrales difíciles de justificar. En estos años, comienza a usarse la técnica del coche-bomba lo que revela una alteración del umbral de intensidad e indiscriminación de su violencia, una selección alternativa de sus víctimas (hasta entonces fundamentalmente miembros de las FCSE) o una disminución de las restricciones con las que operaba ETA hasta entonces. ETA había entrado en una estrategia de violencia indiscriminada difícilmente justificable¹⁷².

La opción de menos atentados pero de mayor impacto tuvo su episodio más cruento en junio de 1987 con el atentado contra el centro comercial Hipercor de Barcelona, y contra la casa-cuartel de Zaragoza, en diciembre del mismo año. En el primero murieron 21 personas y 45 resultaron heridas. En el segundo, murieron 11 personas, de las cuales 5 eran niños, y un total de 88 resultaron heridas. Estos dos acontecimientos significaron en muchos sentidos un punto de no retorno. ETA trataba de llegar a una posible situación de negociación con el Estado con la mayor fortaleza posible. Sin embargo, y a pesar del impacto, hubo gran rechazo social y división y crisis interna entre la familia abertzale¹⁷³, que acabaría con la escisión de HASI¹⁷⁴ y el

¹⁷⁰ ETA está configurada a mediados de los ochenta por una cúpula dirigida por “duros y militaristas, con escasa formación política” como los describe Florencio Domínguez (2000) y una base compuesta por los militantes jóvenes nacidos en los años setenta que, a diferencia de los anteriores, no han vivido personalmente las consecuencias del franquismo pero que han sido socializados en el código nacionalista radical y en una compleja constelación de violencias provenientes del Estado (de las fuerzas de orden público) de los grupos parapoliciales (BVE, GAL) y de la propia ETA (Tejerina, 1997).

¹⁷¹ En este momento una de las iniciativas gubernamentales del ministro del interior Rosón se basaba en generar incentivos para la reinserción y en este marco, muchos militantes de ETA estaban volviendo del exilio (América Latina o Francia) para acogerse a dicho proceso.

¹⁷² Entre 1985 y 1992 el uso sistemático del coche-bomba causó el 68% de las muertes y el 64% de los heridos, buena parte de ellos, ajenos a las fuerzas de seguridad (Domínguez, 2000; Alonso, Domínguez y García Rey 2010).

¹⁷³ Txomin Zuluaga, fundador e histórico dirigente de HASI y HB se expresa así sobre el atentado de Hipercor: *“En el atentado de hipercor hubo 21 personas civiles que murieron. A nosotros nos impactó mucho eso de que personas civiles, no implicadas en absoluto en el conflicto, paguen los efectos directos o indirectos de ese conflicto (...). No hicimos declaraciones públicas, pero sí internamente. Explicamos que este tipo de acciones que afectan a probación civil se vuelven en contra de nuestra lucha por la*

abandono de cerca de 100 militantes (Domínguez, 2000). Ello no fue suficiente para generar una ruptura entre la izquierda abertzale y ETA pero sí para erosionar la adhesión afectiva dentro de la propia sociedad vasca¹⁷⁵. En definitiva, La apuesta por la violencia indiscriminada se había vuelto como un bumerang contra la propia ETA en la medida en que no fue seguida por parte de la izquierda abertzale.

3.2.2.3 La ruptura de Argel, la crisis de Bidart y el muro de Berlín

El final de los años ochenta cambiará algunos aspectos tanto en el mundo interno de ETA y en sus relaciones con el MLNV, como en su propia estrategia contra el Estado. Aunque se mantiene la estrategia de “guerra de desgaste” (Sánchez. Cuenca, 2001; Domínguez 2000; Letamendia 1994), ente 1989 y 1998 confluyen algunos procesos de interés para este trabajo.

En primer lugar, tuvieron lugar las fallidas Conversaciones de Argel (1986-1989)¹⁷⁶ en medio de una intensa campaña de ETA y con divisiones internas en las filas de la izquierda abertzale. La organización encuentra dificultades para la legitimación de su lucha armada. Aparecen las divisiones dentro del MLNV y se comienza a consolidar el rechazo social, por la vía de las movilizaciones pacifistas y, político, a través de los pactos y consensos entre partidos en Ajuria Enea. La cooperación de Francia es cada vez más intensa y efectiva -a partir de 1987 comenzaron las expulsiones masivas según relata Morán (1997)-, y España ha completado su ingreso en la Comunidad Económica Europea. Esto evidencia para mucha gente que las cosas sí han cambiado y que es difícil seguir manteniendo que el nuevo régimen es “franquismo maquillado” (Idoyaga, 2009).

libertad del pueblo vasco” (Medem, 2003 p500). Zuluaga Será expulsado de la organización junto con otros militantes críticos, en 1988.

¹⁷⁴ HASI: en euskera partido socialista revolucionario del pueblo fundado por los dirigentes históricos abertzales T. Zuloaga y Santi Brouard en 1977.

¹⁷⁵ “para erosionar la cobertura social ante la represión por parte de sectores vascos no pertenecientes a la Izquierda abertzale. (Idoyaga, 2009: 50)

¹⁷⁶ Estas conversaciones se habían iniciado en la búsqueda de una solución pacífica a la violencia que se vivía en el País Vasco. Fue el resultado más sistemático de los numerosos contactos mantenidos por los distintos gobiernos a lo largo de toda la década (Sánchez-Cuenca, 2001). Por parte de ETA participaron Domingo Iturbe, Txomin quien morirá en circunstancias no muy claras en pleno proceso de negociación. Fue sustituido por E. Etxebeste, Antxón y acabaron fracasando con la Francisco Múgica Pakito. Tuvieron lugar con la mediación del gobierno francés y la colaboración argelina (Morán, 1997) en medio de una campaña de atentados que ETA sólo paró por breves periodos de tregua. Me parece importante destacar que muchos de los entrevistados para este trabajo en 2004 referían este proceso como uno de las iniciativas más efectivas para la resolución de la violencia a lo largo de la democracia. Es llamativo que esto no haya vuelto a aparecer luego de una manera significativa en 2010. Un trabajo en profundidad sobre las mismas es el de Pozas (1992).

Además de los procesos internos, parece que el contexto internacional al que ETA y el MLNV siempre han mirado¹⁷⁷, comienza a cambiar. Ya no se trata sólo de la progresiva pérdida de la tolerancia en Francia ni de la consideración de España como democracia por parte de la CEE, sino de la propia caída del muro de Berlín. Este acontecimiento modifica la geopolítica mundial y con ella las configuraciones y narrativas políticas vigentes durante setenta años. Ideológicamente esto se traduce en la crisis del marxismo como paradigma sociopolítico y en la constatación de que la “democracia liberal” ha triunfado sobre el socialismo y las experiencias revolucionarias.

Este contexto también es percibido dentro del mundo de la izquierda abertzale, que se ve abocada por su propia dinámica interna a un proceso de reconversión ideológica y de distanciamiento de los aspectos más negros del marxismo y de una narrativa que parece devaluada por la historia, y que está recogida en los estatutos de algunas de las organizaciones del MLNV como HASI o JARRAI¹⁷⁸. Comienzan a entrar en un proceso de involución y crisis de identidad que tendrá su momento más álgido con la caída de la cúpula de ETA en Bidart en 1992¹⁷⁹. Éste es el año de las Olimpiadas de Barcelona. A pesar del fracaso de las conversaciones de Argel, se habían generado grandes expectativas dentro del MLNV de que el Estado negociaría y trataría de resolver el problema por el impacto internacional de las Olimpiadas¹⁸⁰. Pero también el Estado evalúa el contexto internacional y cada vez cuenta con mayor solidaridad en el

¹⁷⁷ La tradicional existencia de un “aparato internacional” de ETA como la intensa para-diplomacia de la izquierda abertzale así lo revelan.

¹⁷⁸ “... es evidente..., eh... se propugnaba la lucha armada de las Brigadas Rojas o de la Baader-Meinhof como una vía para cambiar eh... la sociedad, la estructura social de Italia o de Alemania (...) y sin embargo eso se abandona porque se ve que, que no es posible por un lado (...) porque ya no hay forma bolchevique de llegar al.. al poder, pero segundo porque no concita apoyo social” [Entrevista 23. 17 de Junio de 2010, Vitoria].

¹⁷⁹ El 29 de marzo de 1992, se produjo una de las mayores operaciones contra ETA. Después de una minuciosa investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, en estrecha colaboración con la policía francesa se detuvo a la dirección de la banda terrorista, en la localidad francesa de Bidart. Esta cúpula, estaba integrada por José Luis Álvarez Santacristina 'Txelis', José Javier Zabaleta Elozegi 'Baldo', Francisco Múgica Garmendia 'Paquito' y José Arregi Erostarbe 'Fitti', muchos de los cuales se habían mantenido al frente de la organización a lo largo de la década de los ochenta. Esta actuación policial generó la mayor crisis registrada hasta entonces en el seno de la organización y obligó a ETA a la recomposición de la dirección, a la reorganización de sus relaciones con el entramado civil y en todo caso a la reconsideración de las condiciones de seguridad en Francia. Esta operación es la evidencia de la plena cooperación policial francesa.

¹⁸⁰ En palabras de uno de mis entrevistados que en ese momento militaba en HB: “...hay que recordar que en el 92, eh...se pusieron muchas, muchas expectativas de la izquierda abertzale se centraron en el 92...; 92, olimpiadas, expo en Sevilla.... y eh...el planteamiento era "España no va a poder ir al 92 sin solucionar el problema de terrorismo porque le va a crear un, un caos interno ¿no?. Y el 92 lo que trajo fue la detención de la cúpula de ETA en Bidart, el desmantelamiento de la cúpula de ETA, y por supuesto ni un proceso de negociación, ni ninguna desestabilización de, del Estado ¿no? por parte de la izquierda abertzale. Con lo cual en ese proceso, bueno, pues algunos llegamos a la conclusión de que así no íbamos a ningún lado y otros no; a otros les está costando más pero llegarán”[Entrevista 23. 17 de Junio de 2010. Vitoria].

entorno europeo. Como resultado de la creciente y más efectiva cooperación franco-española, se lleva a cabo la operación más importante contra ETA hasta ese momento.

La crisis de Bidart tuvo un efecto demoledor sobre la organización ya que su impacto se prolongó tras la detención de sus dirigentes, y hasta hacerle perder la mayoría de sus comandos operativos. Este hecho hará constatar a la organización la invalidez de uno de sus mitos más importantes, compartidos entre dirigentes, militantes y simpatizantes: que ETA era policialmente indestructible. Ello genera desorganización política porque abre una crisis interna de gran calado, y deja a los miembros desmoralizados y sin referencias, y provoca problemas organizativos de los que tardaría en recuperarse. Al Acabar el año 1992, el número de acciones era el más bajo desde la muerte de Franco (Domínguez, 2000).

Bidart cambió las convicciones de los militantes respecto de la denostada policía en la medida en que supuso un éxito policial de gran impacto nacional e internacional e hizo a algunos replantearse la viabilidad de la lucha armada, tanto dentro de la organización como entre el MLNV: provocó desencanto, desmotivación y debilidad ideológica¹⁸¹. ETA comienza entonces un proceso de involución que le llevaría a recrudecer sus acciones y a la redefinición de su estrategia -conocida a través de la ponencia Oldartzen como “socialización del sufrimiento” y que se traduce en el asesinato de cargos políticos-, que será defendida a ultranza con prácticas y discursos del MLNV (Idoyaga, 2009).

En el MLNV, el debate interno se zanja con un aparente cierre de filas hasta 1995, dando como resultado la conversión de la iniciativa KAS en la “Alternativa Democrática”, que marca una nueva estrategia en la que negociar con el Estado quedaba postergado. Ahora se trataba más bien de lograr un acuerdo entre vascos para avanzar en la independencia (Domínguez, 2006). La conocida “acumulación de fuerzas” se plantea como una estrategia para avanzar en la independencia junto con el resto del nacionalismo, por la vía de los hechos.

La campaña de de ETA, sin embargo, revela dificultades cada vez mayores para legitimar su propia estrategia. Se inicia con el asesinato del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez¹⁸² y tendrá como momento culmen el secuestro y asesinato

¹⁸¹ El propio Txelis escribirá unos meses más tarde desde la cárcel llamando al cese de la “actividad armada”.

¹⁸² Este asesinato fue criticado individualmente por algunos miembros destacados de la izquierda abertzale y por presos de ETA. *El país*, 26, Enero de 1995. “La situación no podía seguir así, y mi decisión de dar el puñetazo encima de la mesa diciendo ¡basta ya!, ¡hasta aquí hemos llegado!, coincide

del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997. Una cruenta estrategia jalonada por múltiples actos de violencia callejera, impactantes secuestros¹⁸³ y alta confrontación en las calles del País Vasco por la presencia cada vez más visible de movilizaciones de rechazo a la violencia¹⁸⁴.

De la crisis de los noventa van a surgir los llamados Grupos Y, de jóvenes vinculados al sector juvenil del MLNV (Jarrai). Son dirigidos por ETA para llevar a cabo acciones violentas de “baja intensidad”, como son los daños a la propiedad, al mobiliario urbano y la confrontación callejera con las fuerzas de seguridad. El recurso a este tipo de violencia, que forma parte de una estrategia de recuperación del espacio público, allí donde el MLNV siente que va perdiendo apoyos (De la Calle, 2007), será enormemente eficaz y de relativo “bajo coste” hasta que encuentre el rechazo institucional en el año 2000, como veremos.

De la campaña de “socialización de sufrimiento” y del proceso involutivo de ETA, podemos decir que “tocó fondo” con el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el verano de 1997. No hubo clemencia para Blanco a pesar de que se registraron las manifestaciones más masivas contra ETA en toda su historia, tanto dentro como fuera del País Vasco. Los “días de Ermua” tuvieron numerosos efectos sociopolíticos. Pero claramente tuvieron un importante impacto para la organización ETA: públicamente, al menos dos dirigentes históricos de ETA –Txelis y Urrusolo Sistiaga- condenaron el atentado. También recibió las duras críticas del Colectivo Sarobe Elkarte (compuesto miembros críticos de HB ex miembros de ETA y presos) y las manifestaciones individuales de concejales de HB se sucedieron con cierta frecuencia después de Ermua. Pero, sobre todo, la capacidad de movilización del MLNV bajó a mínimos habida

con el atentado contra [el concejal] Gregorio Ordóñez [asesinado el 23 de enero de 1995]. Para mí, la brújula de la dirección etarra había enloquecido. Patxi Zabaleta, Begoña Garmendia y yo mismo criticamos duramente el atentado contra el dirigente popular, y en una declaración del 28 de enero afirmo que "toda acción armada, sea contra quién sea, no es aceptable, y hoy la lucha armada es negativa para nuestros planteamientos independentistas". Asimismo reitero que, lamentándolo mucho, abandonaré HB si se confirma que ETA es la autora del atentado y la formación política en la que milito no lo condena. (Pocos días después, en una de las decisiones "más complicadas y duras" de su vida, dejó también la militancia en HB). [Landaburu, A. (2009) "Entrevista a Julen Madariaga, Fundador de ETA, Cincuenta años después" Diario El País 26 de julio de 2009.

¹⁸³ Los industriales Julio Iglesias Zamora (1993; 117 días) y José María Aldaya (1995; 341 días), Cosme Delclaux (1996; 232 días) y el funcionario de prisiones JA Ortega-Lara (1996; 532 días).

¹⁸⁴ Un análisis muy elaborado del proceso de movilización de la sociedad vasca contra la violencia se puede encontrar en Funes (1998). Además, ilustra con gran detalle la tensión y la confrontación social en la calle que he referido.

cuenta de que empezaba a tener problemas legales, y todos los miembros de su Mesa Nacional fueron encarcelados en diciembre del mismo año¹⁸⁵.

ETA acaba la década de los noventa con dificultades operativas, con complejísimas relaciones con el mundo de organizaciones que componen el MLNV, con una pérdida clara de referentes internacionales¹⁸⁶ y de apoyos o tolerancias en la comunidad internacional, con un rechazo cada vez más amplio y organizado entre la sociedad vasca y española, y ante los inicios de lo que será la política antiterrorista más potente a la que ETA se ha enfrentado. En definitiva, con auténticas dificultades para lograr la efectividad y la legitimidad de la violencia que dice ejercer en nombre de una comunidad.

3.2.3 La sociedad civil: estrategias en relación con la violencia

Resulta imposible considerar el papel de “la sociedad” en su conjunto en la reproducción y evolución de la violencia, así como en la pérdida de aceptabilidad social de la misma. Sin embargo, a lo largo de este apartado trataré de sintetizar, en la medida de lo posible, algunos movimientos y tendencias sociales perceptibles con respecto a la violencia hasta el final de los noventa. Si entendemos la sociedad civil como el ámbito no estatal formado por un mundo heterogéneo de organizaciones que, con mayor o menor grado de institucionalización, inciden, por la vía de sus prácticas colectivas, en la configuración de la agenda política, en el caso que nos ocupa, organizaciones de distinta naturaleza han influido enormemente en la dinámica de la violencia; tanto en su legitimación y reproducción a la salida del franquismo, como en la emergencia y consolidación del proceso inverso en el periodo analizado.

Tanto si tenemos en cuenta la sociedad española en su conjunto como si estableciéramos un análisis específico de la sociedad vasca¹⁸⁷, habría que subrayar, en primer lugar, que los cambios sociológicos experimentados en ambas realidades han sido amplios en los últimos treinta años, afectando a la estructura socioeconómica, a las

¹⁸⁵ A lo largo de los años ochenta y noventa, el MLNV se había ido convirtiendo en una “sociedad dentro de la sociedad” (Aulestia, 1998), que vive bajo la potente narrativa del “nada ha cambiado” a la vez que comprueba que hay cosas que sí han cambiado y que ya no es tan fácil vivir la violencia en total naturalidad.

¹⁸⁶ 1998 es el año en que en el Ulster se alcanza los “Acuerdos de Viernes Santo” que perfilan el final de uno de los conflictos armados más cruentos de Europa occidental y sin duda un referente histórico para ETA.

¹⁸⁷ No pretendo desarrollar un análisis diferenciado de la sociedad vasca y de la sociedad española como parcelas cerradas. Aunque hay características propias de cada una de ellas y analíticamente puedan separarse, buena parte del “conflicto” o del meta-conflicto tiene que ver con esta separación, que a menudo es problemática, debatida y excluyente para ambas.

dinámicas de clases y a la emergencia de nuevas culturas, identidades y modos de pensarse y vivirse la propia sociedad. Dichos cambios junto con las transformaciones propiamente políticas vinculados a la consolidación de la democracia, generan un universo social que es cuanto menos, complejo¹⁸⁸. Con todo, aunque este argumento ha sido controvertido (Funes, 1998), ni la sociedad española en su conjunto ni la vasca en particular parecen haber sido especialmente inclinadas a la movilización ciudadana excepto en momentos concretos y en relación con procesos específicos. Aunque la sociedad vasca es presentada a menudo como una sociedad altamente politizada, esto se debe en parte a que el uso de “la calle” y la toma del espacio público ha sido un elemento recurrente del muy activo MLNV (Casquete, 2006). Es decir, que se trata más bien de una sociedad que experimenta una alta movilización en relación con la violencia en momentos concretos, pero básicamente es apática en otras esferas de la vida social, como señalan algunos expertos¹⁸⁹. Por lo que respecta al interés de este texto, la violencia, el papel activo de la sociedad civil ha sido sin embargo bastante perceptible en algunas trayectorias que iremos desarrollando a lo largo del trabajo.

Si bien al hablar del MLNV se subrayó el proceso de legitimación de la violencia que se había producido en su seno, sobre todo al final del franquismo, y cómo ésta se había reproducido en los primeros años de la democracia, debemos señalar de una manera sintética al menos tres conjuntos de demandas que siendo heterogéneas, han evidenciado el rechazo social a la violencia por la vía de la movilización de partes de la sociedad civil. Así, han contribuido al proceso de deslegitimación de la violencia, no sólo hacia la violencia de ETA como veremos, sino, en algunos casos hacia la violencia del Estado.

Hablaremos, principalmente, de las demandas que podemos denominar pacifistas, ampliamente visibles desde mediados de los años ochenta y consolidadas en los noventa a través de dos organizaciones clave: Gesto Por la Paz y Elkarri. Ambas tienen su origen en el País Vasco y en mayor o menor medida están vinculadas con una visión nacionalista del conflicto político, tal y como mencionamos al hablar de las principales narrativas. Aunque no me extenderé en ellas, pues su politización adquiere un carácter más visible a partir de 1997, hablaremos también de las que podríamos

¹⁸⁸ No es mi intención abordar en detalle estos cambios sociales y por lo tanto me limitaré a subrayar la naturaleza modernizada postindustrial, democrática y compleja de dicha sociedad, asumiendo las especificidades propias de una sociedad -la española- que contiene múltiples identidades sociopolíticas y culturales que entran en conflicto con distintas intensidades a lo largo de estos treinta años.

¹⁸⁹ [Entrevista 21: experto sociólogo. Madrid. Abril de 2010].

llamar movilizaciones de víctimas de ETA y de las transformación de sus objetivos y reivindicaciones, desde la provisión de servicios, la memoria y la reparación, hacia una politización mucho más alta de sus quejas orientadas hacia el nivel de las estrategias estatales para combatir la violencia. Me referiré brevemente también a la emergencia de lo que se conoce como movimiento cívico contra ETA o bloque “constitucionalista” y de su surgimiento directamente relacionado con la muerte del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco en 1997. En torno a este movimiento encontramos un mosaico de organizaciones que, trabajando en ámbitos distintos, han visibilizado demandas de naturaleza “securitaria” por un lado, (de mayores grados de punitivismo y de orientación de las políticas antiterroristas) y, sobre todo, de defensa del Estado Constitucional nacido en 1978 frente a lo que se considera una amenaza al mismo. Tanto la consolidación de las organizaciones de víctimas como del propio movimiento cívico-constitucionalista, como actores visibles del conflicto se produce fundamentalmente a partir de 1998.

3.2.3.1 Las dos violencias¹⁹⁰: demandas pacifistas en Gesto por la Paz y Elkarri

La complejidad de la sociedad vasca y la española se ha manifestado claramente en el modo en que se ha producido el rechazo progresivo a la violencia, y en el papel que las organizaciones de la sociedad civil han tenido en dicho proceso. A lo largo de los últimos treinta años la persistencia de la violencia de ETA ha supuesto que amplios sectores se vayan identificando con los colectivos por la paz, y que el apoyo social explícito o difuso a ETA, patente en el tardofranquismo, se fuera difuminando, sobre todo en la década de los noventa¹⁹¹.

Con todo, parte de los apoyos que se han mantenido se pueden explicar, no sólo por la acción de ETA sino por algunos factores ya señalados como la actividad de los GAL, la falta de acomodación de los FCSE al nuevo marco legal, e incluso por los excesos de algunos mecanismos legales ya expuestos. Sin embargo, desde finales de los

¹⁹⁰ Un parte no desdeñable de las organizaciones que operan fundamentalmente en el ámbito de la política, han abordado tradicionalmente el tema de la violencia a partir de la constatación de la existencia de dos violencias en el marco del conflicto. Por un lado, estaría la violencia de ETA y, por otro lado, se subraya la violencia del Estado. La violencia que proviene del Estado es vista, dependiendo de las organizaciones y de los momentos históricos, en términos de violencia explícita (torturas, por ejemplo) o en un sentido más difuso como violencia legal/institucional que abarca desde la dispersión de presos a la existencia del régimen de incomunicación procesa o incluso a la Ley de Partidos. En el caso de los dos colectivos que abordamos aquí, la constatación de las “dos violencias” aparece desde el origen y se ha mantenido a lo largo de la última década.

¹⁹¹ Véase también datos de opinión y resultados electorales en el anexo.

años ochenta, comienza a ser visible un movimiento que evidencia cómo “en la vida diaria se desenreda la madeja que envuelve y protege la acción violenta” (Funes, 1998: 12).

La experiencia pacifista en Euskadi está recogida en el trabajo de Funes (1998) constituye uno de los factores más importantes en la trayectoria de rechazo a la violencia que se desarrollaría a lo largo de los noventa, cristalizando y ampliándose a otros sectores de la sociedad, tras los acontecimientos que rodearon el secuestro y ejecución del concejal del PP en Ermua M. A Blanco en 1997. Esta experiencia fue articulada, fundamentalmente, por la Coordinadora Gesto por la paz en Euskal Herria, y por la organización Elkarri.

La coordinadora nació en 1986 con el objetivo de ser una plataforma pacifista, cívica que aglutinara a distintos colectivos para generar “respuesta organizada de la sociedad civil frente al constante azote de la violencia que el pueblo vasco y navarro sufren en virtud e unos pretendidos fines políticos para esta sociedad” (Gesto, 1986). Se define como pacifista en tanto entiende que la consecución de la paz tan sólo vendrá por el ejercicio de unas actitudes pacíficas¹⁹².

Como organización integra fundamentalmente a jóvenes de procedencia cristiana (comunidades de base), universitarios de Deusto, y jóvenes militantes de partidos políticos como EE. La mayoría de ellos provenía de la experiencia de la lucha antifranquista y, tras la aceptación de la nueva legalidad constitucional, forman la coordinadora con el fin principal de hacer explícito su rechazo a las violencias que ocurren en el País Vasco en relación con la política. Partiendo de la constatación de que no hay una respuesta organizada a la violencia¹⁹³, asumen, que es responsabilidad de los ciudadanos y de la sociedad vasca contestar este silencio. Constituida inicialmente como una plataforma compuesta por unas cincuenta organizaciones de distinta naturaleza, hacia 1992 había logrado implantarse en todo el territorio de la CAV y Navarra con un número de organizaciones en torno a ciento ochenta.

¹⁹² En los documentos de Gesto por la paz es constante la mención a la filosofía de la no-violencia de Gandhi.

¹⁹³ “Las cosas han cambiado considerablemente. Ha habido una conquista de la calle .Pero es que en ese momento, no había respuesta en manifestaciones....salvo esporádica (...) pero no una respuesta sistemática...y la única actividad que se veía en la calle era de toda esta gente pues eso, pidiendo la amnistía, la independencia o lo que fuera, y siempre con el riesgo de que el mobiliario urbano terminara, donde fuera menos en su sitio. ...” [Entrevista con miembro de la Comisión Permanente de la Coordinadora Gesto por la Paz con 25 años de militancia, Bilbao 13/04/2010].

En su narrativa aparece el respeto a los derechos humanos y la consideración de que hay más de un tipo de violencia. La idea de “violencia venga de donde venga”, que implicaba reconocer que el Estado era también responsable de determinadas formas de violencia en aquel contexto, ha estado muy presente en su actividad. La permanente denuncia de la ilegitimidad ética y política de la violencia, que se circunscribe en general al ámbito de Euskal Herria, es una constante en su argumentación y en su acción, en tanto que entiende que no hay justificación posible para ningún tipo de violencia (ni siquiera asumiendo que pueda tener cierto el respaldo social). Respecto a la dimensión política del conflicto, entienden que el marco autonómico es discutible y alterable, pero se consideran prioritarias la reconciliación social y la superación de la violencia.

Aunque su línea argumental es compleja, dos ideas han sido fundamentales: la defensa del derecho a la vida y el rechazo a la violencia, bajo las que subyacen un discurso de los derechos humanos y una ideología de la no violencia. Ambos aspectos son visibles en su crítica a cada una de las acciones de ETA, pero también a las acciones del Estado cuando se consideran violentas o de un exceso de fuerza, como la política de dispersión o la Ley Antiterrorista de 1984 pero también los procedimientos especiales de asilamiento del entorno de ETA en los noventa. En relación a estas cuestiones han elaborado documentos y reflexiones que, sin embargo, tienen escasa incidencia en los medios mayoritarios de ámbito nacional, siendo más visibles sus acciones colectivas simbólicas: los “gestos” principalmente.

Dentro de su repertorio de movilización, Gesto ha generado un estilo de propio y ciertamente difundido a otros ámbitos de la vida social. La comunicación y la acción simbólicas forman parte de su acervo y proponen la “rutinización” de la acción de respuesta frente a la práctica habitual de la violencia. Pretendían ser “la voz del silencio” (Funes, 1998: 43). Entre los medios de acción a los que han recurrido están las concentraciones silenciosas que son reuniones colectivas silenciosas a lo largo de la geografía Vasca y Navarra cada vez que se produce una muerte relacionada con el conflicto violento. Las concentraciones siempre se celebraban al día siguiente del fallecimiento de la persona, y rápidamente pasaron a ser conocidas como los *gestos*¹⁹⁴.

¹⁹⁴ “Porque lo importante de hacer un gesto es el compromiso personal que requiere hacer eso. Venir a Bilbao a una manifestación, quedas perdido en el anonimato. Salvo el que lleva la pancarta, casi ni se te ve. Sin embargo tú estás en el “gesto” y estás en tu entorno, donde vas a comprar el pan todos los días, donde te tomas el vino, donde te ven su vecinos....y ahí dices que tú estás en contra de que eso pase...”

Coincidiendo con la campaña de secuestros de ETA, a mediados de los años noventa, establecieron además una rutina de *gestos* semanales en señal de protesta por los mismos que se dilataron en el tiempo hasta 1997¹⁹⁵. Por otro lado, esta plataforma puso en marcha, con enorme éxito, la campaña del *lazo azul*. Una acción consistió a mediados de los noventa, en la ostentación individual de un lazo azul en la solapa. Se trató de una iniciativa de gran potencial simbólico cuyos resultados colectivos fueron muy visibles en la década de los noventa.

Tanto el “gesto” como la campaña del *lazo azul* suponían un alto nivel de compromiso individual en la medida en que la decisión personal de señalarse socialmente en aquel contexto podía implicar un coste elevado en la vida cotidiana, sobre todo en los pueblos pequeños. Sin embargo, los resultados colectivos fueron enormemente visibles logrando generar el contexto proclive para un movimiento amplio de rechazo a la violencia¹⁹⁶. Además de estos dos tipos de movilización, la coordinadora ha recurrido también, a lo largo de su trayectoria, a la publicación y difusión de materiales de discusión y reflexión sobre distintos ámbitos en relación con la violencia: derechos humanos incluyendo los de presos y detenidos, violencia de persecución, solidaridad con las víctimas o educación para la paz.

La actividad de Gesto por la Paz, sobre todo a partir de las campañas en contra de los secuestros (1993-1997), contó con el apoyo de las organizaciones políticas y el respaldo del consenso de Ajuria Enea. Sin embargo, estimuló con potencia la reacción del MLNV. El mundo independentista más radical vio cómo en el espacio público, tradicionalmente dentro de su ámbito de control e influencia, comenzaban a proliferar imágenes y expresiones de rechazo. A mediados de los años noventa, en un clima de enorme tensión, el MLNV, a través de la organización Gestoras Pro-Amnistía, comenzó

[Entrevista con miembro de la Comisión Permanente de la Coordinadora gesto por la Paz con 25 años de militancia, Bilbao 13/04/2010].

¹⁹⁵ La campaña de secuestros desarrollada por ETA en los noventa fue especialmente intensa. Durante el periodo de tiempo que duraron los secuestros de Julio Iglesias Zamora, José María Aldaya, Cosme Delclaux y José A. Ortega Lara, entre 1993 y 1997, Gesto por la paz mantuvo una movilización sin precedentes.

¹⁹⁶ “Ir al gesto” se convirtió en una rutina semanal para miembros y simpatizantes de Gesto por la Paz en numerosas localidades de la CAV y Navarra. Constituía una forma de dar continuidad simbólica al rechazo a la violencia y logró dar una visibilidad al movimiento que según la propia organización contribuyó a sensibilizar a la sociedad contra la violencia: “...y tuvimos una actividad frenética. Eso, estaba creando una actividad social muy fuerte. Había un ambiente social muy propicio a manifestarse contra la violencia” [Entrevista con miembro de la Comisión Permanente de la Coordinadora gesto por la Paz con 25 años de militancia, Bilbao 13/04/2010].

a convocar contra- manifestaciones de manera rutinaria y simultánea a los “gestos”¹⁹⁷. Este proceso evidenció cómo el MLNV comenzaba a constatar la pérdida de parte del apoyo difuso que había podido tener en el inmediato post franquista en la sociedad vasca. La campaña de secuestros de ETA, enmarcada en su campaña de “socialización del sufrimiento” que ya comentamos, culminó en 1997. Nada de lo ocurrido en los días del secuestro del concejal de Ermua M. A. Blanco, podría comprenderse sin la acción visible y sostenida de Gesto por la Paz a lo largo de una década.

En 1992, en un contexto muy relacionado con el clima generado por la actividad de Gesto, nace la asociación *Elkarri: asociación por la paz, el diálogo y el acuerdo*. Este colectivo, bastante heterogéneo, procede del mundo nacionalista y, aunque entre sus miembros y fundadores podían encontrarse ex militantes de la izquierda abertzale oficial, no pueden establecerse claramente lazos orgánicos con ninguna de las organizaciones de la izquierda independentista¹⁹⁸. El proyecto estuvo inspirado claramente por la filosofía de la resolución de conflictos” y los llamados “peace and conflict studies”, y se proponía la tarea de estimular el diálogo y la mediación entre los agentes sociopolíticos. Aunque nunca se ha definido específicamente como pacifista, puesto que se ha propuesto desde su origen el trabajo por la paz y en la medida en que refleja, como Gesto, una iniciativa para superar la violencia, podemos incluir su trayectoria dentro de las movilizaciones por la paz de los años noventa.

Como organización, procede del mismo sector de Gesto que había estado implicado en la lucha antifranquista, representando el bloque más a la izquierda del mismo y con una clara orientación independentista; de aquel sector que cuestionó los déficits democráticos del nuevo régimen y también el Estatuto Vasco de 1979. Algunos de sus impulsores provenían de la izquierda abertzale (ámbito sociopolítico que como hemos comentado, gozaba de un enorme potencial movilizador). Tal y como señala Funes (1998), los principales ámbitos de reclutamiento del colectivo Elkarri fueron la Coordinadora de Curas de Euskal Herria (*Herria 2000 Eliza*), comunidades cristianas

¹⁹⁷ El clima de tensión y conflicto social generado en el espacio público durante este periodo, está recogido con gran detalle en el trabajo de Funes, (1998).

¹⁹⁸ Se trata de una organización que es vista con recelo por parte de las organizaciones no nacionalistas vinculadas a lo que llamaremos el movimiento constitucionalista (para quienes Elkarri fue siempre una iniciativa de y tutelada por ETA y el MLNV), pero a su vez es considerada con distancia dentro de la izquierda independentista radical del MLNV. Este conflicto, y la dificultad de ubicar “ideológicamente” al colectivo Elkarri, está recogido en el trabajo de Funes (1998). En 2010, la propia organización “heredera” de Elkarri -Lokarri- fundada en 2005, constataba este recelo por ambas partes.

de base y la plataforma Lurralde (creada como organización cívica para la protesta de Leizarán¹⁹⁹).

Dentro de su cosmovisión, Elkarri parte de la unión ineludible entre conflicto político y violencia. La aceptación de que en el País Vasco existe un conflicto político en el que hay dos partes, y un conflicto social que se derivaría del primero es su punto de partida fundamental, a partir del cual, consideran fundamental trabajar en las bases sociales. Como consecuencia de esta visión, su estrategia, muy basada en la teoría de la resolución de conflictos, ha buscado, por un lado, expandir el diálogo y hacerlo posible en tres niveles: 1) en las bases sociales (en los barrios, asociaciones, asambleas), 2) en las instituciones, ayuntamientos y organizaciones políticas (es decir, en los niveles intermedios), y 3) propiciando un diálogo en el nivel superior del Estado con ETA. El objetivo principal es transformar, como señala Funes, las pautas de enfrentamiento en mecanismos de diálogo y promover la no violencia junto a los derechos humanos y el diálogo.

Querría destacar que este colectivo inscribe su tarea en el ámbito internacional de una manera muy activa. No sólo gran parte de sus referentes están en los centros de diálogo y mediación que proliferaban a nivel internacional a lo largo de los ochenta y noventa, sino que su tarea se basa, en buena medida, en informar a otros países de la existencia del conflicto, en estar presentes en foros internacionales, y en adoptar estrategias similares a la seguidas en otros conflictos como el del Ulster o la propia transición sudafricana. Así, mantienen contactos y relaciones permanentes con actores implicados en aquellos procesos.

En relación con su repertorio de acciones colectivas, se puede decir que esta organización (en parte por su propia naturaleza) no ha orientado su acción al ámbito de la movilización convencional (manifestaciones o reuniones colectivas). Más bien se ha ubicado en el ámbito de la pedagogía y la mediación política por la vía de los seminarios, los talleres locales, las asambleas de barrio o la facilitación de mecanismos de diálogo, siendo una de sus iniciativas más exitosas, las “conferencias de paz”²⁰⁰. Dichas conferencias son foros políticos de vocación local, nacional e internacional que incluyen a expertos, mediadores y organizaciones sociales, y tienen como fin el debate y la visibilización de los temas que desde la mediación se consideran fundamentales

¹⁹⁹ Tal y como se expuso al hablar del MLNV, la experiencia de la movilización contra el trazado de la autovía de Leizarán había supuesto un éxito para dicho movimiento, pero también un aprendizaje de gran importancia en términos de socialización política en la izquierda independentista.

²⁰⁰ Hasta tres conferencias de paz han sido desarrolladas por Elkarri, en 1996, 2001/2002 y 2006.

(derechos humanos, diálogo político, convivencia, territorialidad etc.). Las conferencias conllevan el desarrollo de talleres locales, asambleas, seminarios, campañas de difusión, etc.

Por la propia naturaleza de la organización y de su modo de trabajo, el colectivo Elkarri se hizo particularmente visible a finales de los noventa en un contexto previo al llamado proceso de paz vinculado al pacto de Lizarra y a la tregua de 1998. Fue uno de los firmantes de Lizarra y uno de los impulsores de la utilización del proceso de pacificación del Ulster como referente para una salida negociada de la violencia en el País Vasco, abonando así el terreno social previo a la tregua²⁰¹. Su trayectoria posterior ha estado muy vinculada al objetivo de recuperar y generar las condiciones para un proceso de paz y puesto que en que parte de los objetivos se consideraron logrados a partir de 2003, esta organización se disolvió dando paso a Lokarri (red ciudadana por el acuerdo y la consulta)²⁰²

Las movilizaciones y la visibilización del rechazo colectivo a la violencia, narradas hasta aquí, abonaron el terreno social para la deslegitimación de la violencia sin el cual no podrían comprenderse las manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades de España con motivo del secuestro de Blanco en 1997.

3.2.3.2 La reacción contra ETA: las víctimas y la emergencia del “espíritu de Ermua”

En la década de los noventa, aunque siguiendo una lógica totalmente diferente a la de las organizaciones anteriormente descritas, tenemos que hacer referencia también a un proceso de progresiva visibilización de lo que podemos llamar el movimiento de víctimas. La Asociación víctimas del Terrorismo (AVT), principal organización de víctimas del terrorismo a lo largo de los años noventa, fue fundada en 1981 como organización apolítica y de carácter benéfico-asistencial con el fin de proporcionar apoyo social a los familiares y afectados por terrorismo. En su narrativa, se parte de la constatación de un claro abandono y marginación por parte del Estado y las autoridades, y se plantea la necesidad de reconocimiento, reparación y memoria.

²⁰¹ Como tendré la ocasión de detallar más adelante, esta organización se ha movido de una manera muy activa y visible en contextos de tregua/y/o negociación política, sobre todo a partir de 2006.

²⁰² La propia organización Lokarri constataba en 2005 que, aun cuando el diálogo, la no violencia y los derechos humanos no estaban aún garantizados si *“están [estaban] social y políticamente conquistadas y pueden considerarse ya como presupuesto asumidos del proceso de paz”* Véase: Lokarri: “misión”. www.lokarri.org

La AVT ha trabajado tradicionalmente en tres ámbitos. En primer lugar, en los aspectos psico-sociales de la atención a víctimas y familiares; en segundo lugar, en el terreno de carácter económico vinculado a la recogida y provisión de fondos desde entidades públicas y privadas. Finalmente, en el espacio jurídico-administrativo, a través de la personación como organización en los sumarios y causas abiertas por delitos de terrorismo. A lo largo de los años noventa, sus demandas se fueron haciendo cada vez más visibles por la vía de la difusión y de campañas puntuales, sobre todo de recogida de firmas. Sin embargo, no será hasta 1999 cuando la Ley 32/1999 de *solidaridad con las víctimas del terrorismo* recoja por primera vez las demandas de reparación, justicia y memoria, contribuyendo a generar visibilidad y reconocimiento de las víctimas como colectivo.

Coincidiendo por un lado, con la mencionada intensa campaña de ETA, pero también con el clima de rechazo a la violencia que he tratado de subrayar, esta organización comienza a hacer pública una agenda que va más allá de la mera demanda asistencial para buscar la justicia y reparación por la vía judicial-penal. Se puede observar cómo, a partir de mediados de los años noventa, dentro de sus peticiones más visibles se politiza una demanda al Estado de políticas más punitivas y de un claro endurecimiento de la política antiterrorista. A partir de 1994, se abogará abiertamente por el cumplimiento íntegro de las penas, se desarrollarán movilizaciones contra la reducción de las mismas y la política de reinserción y se reivindicará, a la vez, una mayor contundencia de las políticas antiterroristas, rechazando la desactivación de la política de dispersión de presos en cárceles españolas²⁰³.

Hacia 1998 y coincidiendo por un lado con la tregua ETA en 1998, pero también con el clima social generado después de los acontecimientos de Julio 1997 – lo que sería el Espíritu de Euzkadi-, surge el colectivo de víctimas del País Vasco (COVITE). Junto con la AVT, han revelado en la última década una clara intención de convertirse en actores con pretensión de voz legítima en procesos de esta naturaleza²⁰⁴ evidenciando, de esta manera, la transformación de sus demandas.

A partir de ese año, podemos hablar de una fase de alta politización de las víctimas que, además, comienzan a asumir un papel mucho más público por la vía de las

²⁰³ Buena parte de esta agenda fue asumida por el gobierno del Partido Popular y comenzarían a ser implementadas a partir de la legislatura 2000-2004.

²⁰⁴ Llama la atención la ausencia de la voz de las víctimas con respecto a la públicamente retransmitida negociación de Argel en 1989, frente a los procesos de negociación posteriores (1998 y 2004) en los que las víctimas han jugado un papel considerable. Véase el manifiesto fundacional de COVITE (28 de noviembre de 1998: www.covite.org).

movilizaciones convencionales, las manifestaciones en la calle y otras formas de protesta clásicas que adoptarán. Esta transformación del movimiento de víctimas del terrorismo y del paso de sus demandas, desde aquellas de naturaleza asistencial hacia la politización de los ámbitos de reconocimiento, justicia y reparación²⁰⁵, además de concitar una buena dosis de apoyo en la opinión pública, ha estado ampliamente respaldada por otro movimiento que nace directamente vinculado con los episodios de Julio de 1997. Su visibilidad y los efectos de la politización y movilización de sus demandas en la última década han sido, como veremos, un factor influyente en las repuestas del Estado a la violencia, pero también en las acciones de otros actores implicados en el conflicto. Nos referimos a lo que se ha dado en llamar movimiento cívico-constitucionalista o “espíritu de Ermua”, que constituye la última “reacción” significativa de los años noventa contra la violencia de ETA en el seno de la sociedad.

Este movimiento, surgido espontáneamente a partir de la muerte de M. A. Blanco en Ermua, aglutina en torno a la expresión “basta ya”²⁰⁶ una percepción social de hartazgo de la violencia que aparece en el contexto señalado hasta ahora, coincidiendo con una proliferación de asociaciones, algunas de las cuáles ya existían, que comparten tres líneas argumentales principalmente: en primer lugar, el rechazo al terrorismo; en segundo lugar, el recelo del nacionalismo vasco; y finalmente, una narrativa de defensa de la constitución de 1978 y del Estado de derecho, que se traduce en un marcado discurso de ley y orden que propugna el endurecimiento de las políticas antiterroristas.

Las dos organizaciones más visibles de este movimiento, en torno a las cuales se movilizó el rechazo a la violencia de ETA y la demanda de endurecimiento del Estado de Derecho, fueron el Foro de Ermua y la Iniciativa Ciudadana Basta ya²⁰⁷. Ambas se nutrieron de personalidades del mundo de la cultura, del periodismo y de la academia, así como del amplio número de personas perseguidas o amenazadas por ETA. Pero, en todo caso, el movimiento, cristalizado a partir de las manifestaciones masivas

²⁰⁵ Esta evolución es visible en los distintos boletines emitidos por la AVT desde 1981. Véase. “La razón: boletín informativo de la Asociación víctimas del terrorismo”, sobre todo, aquellos emitidos a mediados de los noventa. Números 36 y siguientes. (<http://www.avt.org/revista/>).

²⁰⁶ Esta consigna es un claro referente a la saturación de un umbral de tolerancia social hacia la violencia.

²⁰⁷ Utilizar el término movimiento puede ser arriesgado en la medida en que se trata de un fenómeno bastante heterogéneo, en el se pueden incluir diferentes organizaciones como la Fundación Gregorio Ordóñez, la Fundación para la Libertad, o la Fundación M. A. Blanco. No todas ellas han tenido un protagonismo tan claro ni en términos de politización ni de movilización y, sin embargo, todo este mosaico aparece en el contexto de finales de los noventa y se distingue claramente de las movilizaciones por la paz de Gesto y Elkarri. Por ello y a pesar de que el “peso” de este fenómeno recayó fundamentalmente en el Foro de Ermua y Basta ya, he decidido incluirlas aquí.

de Julio e 1997, gozó de un amplio respaldo social²⁰⁸ a finales de los noventa, proyectando visiblemente su actividad hacia el ámbito internacional y logrando en buena medida presionar las agendas gubernamentales en la línea señalada.

En definitiva, al exponer de una manera somera la trayectoria de movilizaciones por la paz y contra la violencia de ETA a lo largo de los noventa, he querido señalar un proceso de transformación de la sociedad vasca y del conflicto. Existen en esta década noventa importantes cambios sociológicos que permiten hablar de la emergencia de “actores” vinculados a cambios en la violencia.

Gesto por la paz y Elkarri son dos fenómenos que se alimentaron mutuamente, produciendo principalmente un ambiente de cambio en la sociedad vasca; es lo que Funes llama “la salida del silencio”. Para cuando tienen lugar los episodios de Julio de 1997, estos actores se habían consolidado como centrales en el “movimiento por la paz” en la sociedad, evidenciando una clara transformación en el umbral de lo socialmente tolerable en términos de violencia. En 1998, el elenco de organizaciones de la sociedad civil activos en el proceso de deslegitimación de la violencia es muy amplio y diverso como he subrayado, generando un escenario bien diferente al de décadas anteriores. La articulación de la sociedad civil en relación con la violencia en el País Vasco, que hasta entonces había estado invisible exceptuando al MLNV, no sólo no desaparecerá a partir de 1998, sino que su peso se incrementará en lo que concierne al rechazo de la violencia, en un proceso muy similar a otros conflictos en el ámbito europeo.

Las demandas señaladas se han traducido en distintas organizaciones con mayor o menor peso en el ámbito de la política institucional, dependiendo de las coyunturas. Cada una de ellas ha surgido y se ha politizado en un contexto específico. Sin embargo, todas evidencian de alguna manera, por un lado, una progresiva pérdida de aceptabilidad de la violencia como medio de expresión política, en algunos casos una creciente demanda de seguridad (ley y orden), y, en todas ellas se pone de manifiesto que el camino hacia la deslegitimación de la violencia ha sido conflictivo en la propia sociedad.

Cuando abordemos los cambios en la configuración y las estrategias de los actores en el periodo 1998-2008, partiré de la idea de que el papel de la sociedad ha sido más o menos activo dependiendo de las fases y según las dimensiones de la violencia, y podremos comprobar un cierto retraimiento de los movimientos más *securitarios* (o que

²⁰⁸ Este respaldo no es tan obvio en el País Vasco al menos, en la última década.

planteaban demandas de mayor firmeza policial, judicial y política) cuando el Estado ha adoptado una posición más dura.

3.3 Recapitulando: umbrales de legitimación y deslegitimación de la violencia

Para finalizar, querría recuperar de esta narración una idea que subyace a la dimensión violenta del conflicto que he presentado. Tal y como se ha ido recogiendo a lo largo de las páginas de este capítulo, la violencia ha sido un elemento fundamental del conflicto político en el País Vasco, sobre todo a partir de la institucionalización de la democracia. Al presentar el proceso, he subrayado permanentemente mi interés en abordar el fenómeno de la violencia, vinculado al conflicto, pero analizable de manera aislada.

Si consideramos la violencia a partir de la presentación de los actores implicados y de sus estrategias a lo largo de los últimos treinta años, podemos comprobar cómo ésta ha sido una estrategia que determinados actores colectivos y organizados, estatales y no estatales, han puesto en marcha en contextos institucionales e ideológicos concretos. Dichas estrategias están marcadas por los recursos organizativos y materiales de las organizaciones y por el marco institucional en el que se ubican los distintos actores y ocurre el conflicto. Pero también he hecho referencia a los estados de opinión pública, a las comunidades de legitimación y al respaldo social que han generado el contexto ideológico o simbólico en el que las violencias tienen lugar.

Recoger la violencia de ETA exclusivamente sería reducir mi análisis de la violencia. Por ello, he constatado que en el caso vasco no sólo puede hablarse en los últimos treinta años de violencia no estatal sino, como plantea Pérez –Agote (2008), de la existencia, en la salida del franquismo, de una “constelación de violencias” físicas y simbólicas que se han perpetuado en distintos momentos, con distintas intensidades y con variables grados de legitimación social, explícita o difusa. Si consideramos el análisis de este autor sobre la reproducción de la conciencia nacional vasca, el lugar que ocupa la violencia en el universo simbólico vasco y en la cultura política en general es esencial y ha determinado la evolución de la misma en los últimos treinta años. La violencia simbólica del Estado durante el franquismo, y sus dificultades para legitimarse en el País Vasco a partir de la transición a la democracia, están directamente relacionadas con la violencia física de ETA y la resignificación del papel atribuido a la misma en buena parte de la sociedad vasca.

La violencia de ETA en los años setenta, por intensa que fuera, tuvo escasa incidencia en el Estado, y sin embargo, dificultó en buena medida la legitimación del propio Estado en términos de nación (Pérez-Agote, 2008:102), y visiblemente, como hemos señalado, en términos de su monopolio de la coerción legítima. Donde la fuerza no es legítima, el Estado no es efectivo en su más radical propiedad: la garantía de la seguridad (Weber, 1998).

La percepción que se tenía de la violencia en estos años jugaba un papel central en la socialización política, especialmente de los jóvenes²⁰⁹, La violencia podía ser como mucho criticada, pero era afectivamente aceptada.

“En el País Vasco [al finalizar el franquismo], el comportamiento violento constituye una de las posibilidades normales de comportamiento, es decir, que es una salida (en el sentido que tienen las salidas de una carrera universitaria), una actividad comprendida en el marco de posibilidades que realmente se le presentan al individuo en su medio social. En pocas palabras, la violencia pertenece a la cultura, en el sentido más plano del término, y a la vida cotidiana (...) es un medio socialmente legitimado”. (Pérez-Agote: 2008: 169)

Con la muerte del dictador y a partir de la configuración de la nueva legalidad, la valoración simbólica que se hace de ella cambia profundamente generando una fractura ideológica dentro del nacionalismo y posteriormente dentro de la sociedad, y marcando tanto la cultura política como el propio desarrollo del conflicto. La imagen de la violencia al iniciarse la democracia aparece en el discurso social escindido entre sentimiento y razón (se critica pero en el fondo se acepta), posiblemente debido a la experiencia directa personal y biográfica de la misma. Por ello, Pérez Agote se refiere a “adhesión afectiva” a la violencia. En pocos contextos nacionalistas aparece la expresión “terroristas” y se consolida la idea de “las dos violencias” que ya hemos referido, y que aún hoy permanece en algunos sectores.

El trabajo de B. Tejerina (1997) evidencia de una manera concluyente la centralidad que para la violencia de ETA ha tenido, principalmente en los años ochenta, su capacidad de alcanzar un umbral de legitimidad entre los miembros de la sociedad que dice defender. La legitimidad de las organizaciones que emplean la violencia, sean

²⁰⁹ Este proceso, ha sido visible hasta muy recientemente en los sectores juveniles del independentismo, aunque no con la misma intensidad, según señala Pérez- Agote (2008:83).

estatales o no estatales, como en el caso de ETA, ha sido el requisito fundamental para mantener su perpetuación; de ahí sus esfuerzos por general una comunidad de legitimación política de sus objetivos y de sus fines, pero también de sus medios. Y así, mientras el núcleo militar de ETA ha actuado como vanguardia, las organizaciones de la órbita del MLNV han tratado de reducir los costes de la violencia, incrementando sus apoyos. En este proceso, la socialización y la reproducción de la violencia analizados por Pérez Agote han sido fundamentales y pueden rastrearse desde la periferia del MLNV donde es difusa, hasta el núcleo de la organización armada (Funes, 1997).

En todo caso, podemos constatar desde finales de los años ochenta, y claramente a lo largo de los noventa, el hecho irrefutable de la pérdida de imagen positiva de ETA y la merma de apoyos electorales²¹⁰ de las organizaciones políticas del MLNV²¹¹. Y, por lo tanto, se ha producido una transformación en las representaciones sociales sobre la violencia y, sobre todo, en el sentido que ésta tiene para la conciencia nacional vasca, proceso también visible en la emergencia de los actores de ámbito vascos como Elkarri y Gesto por la Paz.

Desde la legitimación de la violencia en el seno de la conciencia nacional vasca en los inicios de la democracia, hasta la emergencia del proceso inverso en los últimos veinticinco años, se ha recorrido un camino que abarca desde el rechazo pasivo hasta la activación de demandas de deslegitimación activa y de tolerancia cero. Este proceso, que se constata desde la periferia del nacionalismo vasco hasta los ámbitos más cercanos a la organización armada, es ampliamente visible en la opinión pública, y, desde luego, en la cosmovisión de todos los actores implicados en este conflicto; todo ello da lugar, en torno a 1998, a un auténtico cambio de contexto en lo que respecta a dichos actores.

A finales de los noventa, nuevos y viejos actores- Estado, organizaciones armadas- ETA-, organizaciones pacifistas, organizaciones cívico-constitucionalistas y víctimas, pero también estados vecinos y organizaciones internacionales²¹²- habían adoptado narrativas y estrategias distintas en relación con la aceptabilidad/no aceptabilidad de violencia. Dichas transformaciones en la legitimidad de la misma para los actores eran visibles desde el punto de vista sociopolítico. El rechazo social a la

²¹⁰ Véase el anexo I.

²¹¹ Con todo, la violencia ha continuado legitimándose dentro del MLNV a partir de la socialización en la definición impuesta de que nada había cambiado con la transición y en la deslegitimación del Estado en términos de nación y de monopolio de la coerción legítima.

²¹² Este fenómeno también es visible en los medios de comunicación y la opinión pública.

violencia y su pérdida de aceptabilidad no sólo se han mantenido en la última década (1998-2010) sino que se ha pasado del desgaste de la legitimidad difusa y directa a la intolerancia social, política y jurídica tanto en el nivel doméstico como en el internacional. La idea de “tolerancia cero” se ha traducido en la modificación de las estrategias de todos los actores mencionados aquí, y en la aplicación estricta de las mismas, revelando una alteración del umbral de tolerancia a la violencia. En los siguientes capítulos, trataré de evidenciar en qué medida en la última década los cambios en el contexto internacional-global que me dispongo a exponer a continuación han influido en este proceso.

PARTE II: LA GUERRA CONTRA EL TERROR ENTRE LO GLOBAL Y LO
LOCAL 1998-2010

CAPÍTULO 4

LA EMERGENCIA DE UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL.

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001: “LA GUERRA CONTRA EL TERROR”.

“la guerra fría ha terminado; viva el terrorismo”
(Joseba Zulaika, 2009:189)

“El contexto en el que ocurre la violencia puede influir enormemente en su identificación. El contexto se convierte en un marco conceptual a través del cual las audiencias interpretan y evalúan las acciones violentas” (Karen Cerulo, 1998: 27)²¹³

En el capítulo anterior he situado al lector en los parámetros fundamentales del llamado conflicto político vasco, en cuyo contexto quiero abordar el análisis en los cambios en lo socialmente tolerable del uso de la violencia y su relación con algunas dinámicas de transformación global. Al finalizar, he querido subrayar la importancia de dos trayectorias de cambio en los últimos quince años respecto a la violencia: la creciente oposición pública (social y política) a la violencia y el incremento de la legitimidad y la efectividad policial, judicial y política en lo que se conoce como “lucha antiterrorista”.

He planteado que, concebido en términos sociopolíticos más amplios que el puro uso de la violencia/terrorismo, este conflicto ha estado sujeto a cambios considerables en sus cincuenta años de existencia. Tanto el contexto político institucional como los procesos de transformación social han estado en la base de la modificación de las estrategias del Estado, de ETA y de las propias organizaciones de la sociedad civil implicadas. A pesar de que la dimensión internacional escasamente se ha entendido como una variable fundamental en este proceso, y a pesar del tradicional rechazo a incluirla por parte de la mayoría de los actores implicados, los factores internacionales han jugado un papel que es de interés considerar²¹⁴.

²¹³ Traducción propia.

²¹⁴ Conviene señalar entre otros, el efecto “difusión” de los ciclos de violencia política en otras regiones del mundo a partir de los años cincuenta en América latina y de procesos descolonización en Asia y África o el impacto de las protestas internacionales en la legitimación de ETA en el contexto de la lucha

Como he aclarado anteriormente, es el objetivo de este trabajo determinar en qué medida aquellas dos trayectorias de cambio (en los umbrales de aceptación de las violencia) son atribuibles, entre otros muchos factores, a los cambios en el escenario internacional de los últimos quince años, o a la emergencia de nuevas formas y discursos sobre la violencia y el terrorismo y concretamente, al contexto posterior al 11 de Septiembre de 2001. Dicho de otro modo, cuáles son los efectos del nuevo contexto *securitario* en un viejo escenario de conflicto y violencia.

Norris et al., (2003) aportando datos de la RAND Corporation y de los informes del Departamento de Estado de los EEUU²¹⁵, han planteado cómo el terrorismo internacional tuvo su máximo impacto a lo largo de los años setenta y ochenta. Esto es consistente con los análisis de Tilly (2003) y otros autores. Con ello argumenta que el carácter de la violencia que hemos percibido en los últimos años (y que se ha dado en llamar global) no es del todo nuevo. Lo que sí parece nuevo es el impacto de dichas violencias: sus objetivos y, fundamentalmente, el modo en que se habla de ellas: la construcción pública del discurso de la *guerra contra el terror* que resuena en la esfera pública generando amenazas y respuestas. Y esto no parece del todo coyuntural, puesto que está tomando cuerpo al menos de dos modos distintos: a través del lenguaje público y por medio de la acción de los gobiernos.

Sin duda, los episodios del 11S (2001) en EEUU y los siguientes en Madrid (2004) y Londres (2005), así como las estrategias desarrolladas inmediatamente para hacer frente al terrorismo, han modificado sustancialmente el modo en que la violencia es concebida, enfocada y combatida por parte de las agencias estatales de seguridad. Este proceso conlleva complejas transformaciones que parecen afectar a los imaginarios y prácticas de las viejas y nuevas organizaciones que recurren a la violencia, pero también a los de los Estados, los actores internacionales y finalmente, de la opinión pública.

Retomando la pregunta que guía este trabajo, esta sección tiene por objeto establecer los parámetros de lo que aquí denomino, con fines analíticos, el contexto de la *guerra contra el terror*. El principal objetivo es extraer sus reflejos, sus ecos y sus relaciones dinámicas con un contexto doméstico concreto. Tal y como se evidenciará en

antifranquista durante los Juicios de Burgos 1973. En un sentido muy distinto conviene recordar la implicación de otros Estados en la cooperación antiterrorista o la gestión de extradición, exilio o refugio (Francia, Venezuela, República Dominicana).

²¹⁵ RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents: <http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html> y Department of Homeland Security: *Patterns of Global Terrorism*, (2001-2009): <http://www.state.gov/documents.pdf>.

las próximas páginas, este contexto es global, ideológico y se ha consolidado como marco institucional específico a través del establecimiento de algunas tendencias de cambio ocurridas tras la quiebra del orden bipolar. Muy especialmente se ha afianzado a través de la reconstrucción social de determinados acontecimientos históricos que, como el 11 de Septiembre de 2001, se pueden entender como transformadores desde distintos puntos de vista²¹⁶.

En primer lugar, se abordará un conjunto de transformaciones ideológicas y discursivas en el nivel global que han sido señaladas por algunos estudios recientes, en relación a la violencia, el terrorismo y el antiterrorismo. A partir de la exploración de esta literatura, se argumentará que un determinado tipo de violencia política –el terrorismo– y un tipo de respuesta posible a la misma –el antiterrorismo/contraterrorismo– se entienden hoy en unos términos que son distintos a los de décadas pasadas. Se señalará el modo en que, desde las instituciones y organizaciones internacionales, el ámbito académico (a través de la figura del “experto”) y la opinión pública y “publicada” se ha ido conformando algo parecido a una “comunidad de deslegitimación” (Apter, 1997) del terrorismo y de otras formas de violencia. Al tiempo, veremos cómo se legitiman nuevas formas de coerción de los Estados y las organizaciones internacionales en la elaboración y desarrollo de sus estrategias antiterroristas, contraterroristas y de defensa.

Se presentarán los aspectos fundamentales de los nuevos discursos sobre el terrorismo y antiterrorismo, y el modo en que éstos, por más que se fueran gestando desde los años ochenta, se han afianzado a partir de episodios concretos. La narración de estos cambios nos permitirá hablar en adelante de la dimensión ideológica-discursiva del nuevo contexto global.

En la segunda parte de este capítulo se abordarán los cambios a nivel internacional-global en las estrategias para el manejo o la gestión de la violencia. Se presentarán las políticas de seguridad y defensa desarrolladas en los últimos quince años en el marco de dos instituciones internacionales con vocación global: la ONU, y muy especialmente la Unión Europea, por cuanto esta organización de integración tiene la capacidad de armonizar, *de iure*, las legislaciones de sus Estados miembros y, por tanto,

²¹⁶ Esta sección se ha basado en materiales secundarios, literatura específica, literatura gris de producción institucional y en el análisis de los principales documentos que definen las estrategias de seguridad de las instituciones analizadas. Por ello, se señalarán los rasgos fundamentales de la “narrativa” del terrorismo y del antiterrorismo siguiendo los análisis de otros autores. Dichos análisis han sido contrastados en mi revisión de los textos fundamentales de ONU, UE, OTAN y OSCE.

de influir de una manera efectiva en el manejo que se hace del terrorismo²¹⁷. En esta sección se describirán las estrategias de seguridad y específicamente lo que se conoce como “política antiterrorista” y su desarrollo en pleno proceso de reconfiguración del mundo post-bipolar. En concreto, se hará hincapié en algunas transformaciones recientes y en la “producción institucional” vinculada a tres acontecimientos concretos: 11S 2001; 11M 2004; 7J 2005. Esta narración permitirá hablar de la dimensión institucional-legal del contexto.

Finalmente, se recogerán algunas dinámicas fundamentales que se desprenden de este contexto y que se consideran básicas para el análisis que se desarrollará en los capítulos siguientes.

4.1 La guerra contra el terror como retórica política: nuevas narrativas para nuevas (y viejas) violencias

Los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y el ciclo de violencia posterior permite hablar de un “antes y un después”, en primer lugar, respecto al modo en que se habla de la violencia, el terrorismo y el antiterrorismo en la esfera global. La expresión “guerra contra el terror” se ha integrado a lo largo de esta década, en el vocabulario internacional y tiene implicaciones políticas y militares en el nivel internacional que contribuyen a sostener la tesis de que la guerra y el terror son amenazas globales. El unilateralismo de la acción de los EEUU desde el 11S, invocando el derecho a la legítima defensa frente a lo que se consideró un “acto de guerra”²¹⁸, y las consiguientes campañas militares en Afganistán e Irak han abierto el debate sobre numerosas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la amenaza, pero también con la legalidad internacional y el orden político y moral. Este debate se está produciendo no sólo en el nivel de las organizaciones nacionales e internacionales sino también en el ámbito de la sociedad y de la opinión pública.

La expresión tiene más implicaciones que las campañas militares de los EEUU. En esta década, la cuestión ha cobrado una fuerza retórica considerable convirtiéndose en parte de un discurso político cotidiano que logra cada vez más consenso en el

²¹⁷ No se pretenden reducir las estrategias de seguridad global al fenómeno del terrorismo. De hecho, si bien éste constituye para las organizaciones internacionales una de las principales amenazas, la seguridad (en general) se entiende como una cuestión multidimensional que incluye fenómenos tan diversos como el crimen organizado, el cambio climático, la inmigración ilegal, la trata de personas o el subdesarrollo.

²¹⁸ Montgomery (2005).

contexto global así como en muchos Estados. En tanto discurso podemos señalar algunas de sus características más sobresalientes:

Para empezar, se trata de una narrativa hegemónica, por emplear el término de Gramsci. Aun considerando que ni la solidaridad con los EEUU el 11 de Septiembre fue absoluta, pues regiones importantes del mundo quedaron fuera de la misma, ni los consensos tan amplios, puede hablarse de un discurso dominante en las sociedades occidentales y en gran parte de los actores con vocación global; y no solo por el modo en que es una línea prioritaria de acción política (la seguridad y en concreto el terrorismo), sino por la existencia de amplios consensos en cuanto a su diagnóstico y pronóstico tanto en el nivel gubernamental como en el social.²¹⁹

Podemos hablar de una narrativa también “global” en la medida en que es en la comunidad internacional donde se hicieron más esfuerzos en este sentido y donde más retórica antiterrorista se genera por la vía de la actividad política cotidiana. Hoy se habla de sociedad global ante la imposibilidad de trazar fronteras en la vida social y la necesidad de comprender el modo en que los fenómenos sociales se configuran entre lo local y lo global (Robertson, 1992). La narrativa sobre el terrorismo no puede situarse en los límites de un Estado y no puede decirse que esté “fija” en las instituciones internacionales, porque la información fluye de lo global a lo local por la vía de los medios de comunicación, de las redes de expertos, de las comunidades académicas, de la *blogosfera* y en todo caso, por la “vieja” vía del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por los Estados en el ámbito supraestatal. Numerosos estudios han abordado en los últimos diez años el enmarque de los acontecimientos del 11S por parte de la prensa internacional, así como en los distintos contextos domésticos, apuntando en su mayoría a claros cambios en el modo en que se trata la violencia y es comprendida en el discurso público²²⁰. Puede decirse que es global en la medida en que se genera y se comparte en múltiples instancias sociopolíticas tanto dentro como fuera de los Estados. Pero además, se transforma y adopta particularidades en función de las características de los propios actores globales que recurren tales narrativas. El impacto que tienen en distintas regiones del mundo el discurso de la “lucha antiterrorista” o la

²¹⁹ Lo que podemos denominar “obsesión condenatoria” es un fenómeno que ilustra de una manera interesante esta idea. Consiste en el hecho recurrente de que, tras cada expresión del fenómeno terrorista, tanto en el nivel de los actores globales como en el mundo de la sociedad civil, todo aquél que tiene una posición pública relevante, sea agente gubernamental, organización internacional o intelectual, emite su correspondiente declaración de descalificación y condena. Este pronunciamiento es esperado y analizado (en su ausencia cuestionado) por la opinión publicada y en menor medida, por la opinión pública.

²²⁰ Norris et al., (2003); Ruigrok et al., (2008) Persson, (2004); Montgomery (2005) y Zizek (2005).

cooperación antiterrorista” es interesante en tanto se *securitizan*²²¹ las relaciones bilaterales (España-Marruecos por ejemplo), la ayuda al desarrollo -especialmente en África²²²- o la inmigración ilegal.

Si pensamos en el papel de los EEUU en el escenario global de la última década, conceptos como “seguridad global”, “guerra preventiva” o “combatientes ilegales” reflejan algunos de los parámetros en los que se entiende la violencia. A la vez, la realidad a la que aluden estos conceptos evidencia alteraciones importantes en los niveles de democracia, como el balance constitucional y legal, las estructuras de poder sobre las que descansa el sistema internacional, la tensión entre los derechos civiles y libertades públicas frente a los requerimientos de la seguridad, o el uso de la fuerza en el marco de la legalidad internacional. Sin duda, los EEUU han recurrido y contribuido a generar el régimen retórico de la *guerra contra el terror* para legitimar una campaña global contra el terrorismo. Y la apropiación del significado cultural y político del 11S y su interpretación única en términos de guerra ha sido un factor decisivo en este proceso²²³.

Sin embargo, este lenguaje, como las estrategias y las transformaciones institucionales que entraña, es visible no sólo en los EEUU, sino que se aprecia también en las organizaciones internacionales (OSCE, UE, OTAN, ONU) y en muchos países como por ejemplo Reino Unido, España, Australia, Colombia, Italia o Israel (Thornberry, 2003). Por esta razón, limitar la idea de *guerra contra el terror*, al papel de los EEUU, sería empobrecer el verdadero significado de esta expresión. Además, se trata de una narrativa en la que el papel de los acontecimientos, la construcción social de determinados episodios, es fundamental. En distintos países, en distintas regiones del mundo, académicos, expertos, políticos, intelectuales de todo tipo o medios de comunicación, todo el mundo escribió “algo” inmediatamente después del 11S. Por esta razón, aunque no todo es nuevo desde el 11 de Septiembre, sí puede hablarse de una narrativa en la que dicho acontecimiento es presentado en la esfera global de manera

²²¹ “Securitizar” no es una palabra que exista en el diccionario y sin embargo, es una expresión cada vez más utilizada para referir la impregnación de discursos y prácticas sociopolíticas de consideraciones y justificaciones basadas en la idea de la seguridad. Véase Bigo y Tsoukala, (2010).

²²² Véanse dos trabajos interesantes sobre este aspecto en Sanahuja (2005); Aning (2010).

²²³ Excede de este trabajo considerar el papel de los EEUU en la generación del discurso de la *guerra contra el terror*. Ha sido muy trabajado en esta última década y la mayoría de los autores coinciden en señalar el modo en que el discurso genera identidades, (terroristas malos vs. americanos buenos), amenazas y peligros, y justificaciones para la buena y “nueva” *guerra contra el terror*. Aquí me limitaré a exponer los rasgos fundamentales y los consensos que este discurso ha generado en perspectiva transatlántica (EEUU –UE). Estudios en profundidad sobre el discurso de los EEUU sobre la guerra se pueden encontrar en: Norris *et al* (2003); Zulaika (2009); Robinson, (2008) y Jackson (2005 a y 2005b).

que amplifican y hacen resonar un discurso que parecía haber estado limitado a espacios académicos o gubernamentales hasta ese momento.

Otra de las características fundamentales de esta retórica tiene que ver con su carácter “escrito”²²⁴. Ya desde la caída del muro de Berlín (1989), a lo largo de los noventa los países occidentales se vieron inmersos en un proceso de replanteamiento conceptual y estratégico de la seguridad. La desaparición de su principal enemigo, la integración de la ex URSS en la estrategia de seguridad colectiva occidental y la emergencia de nuevos fenómenos -definidos como amenazas- condujeron a un amplio debate internacional en el que se planteaba la contraposición de nociones estrictamente militares de seguridad frente a otras más amplias y de amenaza múltiple como el terrorismo o el crimen organizado, el subdesarrollo, el cambio climático o la inmigración ilegal. Este debate se ha hecho mucho más obvio en la última década pasando en buena medida a la opinión pública por la vía de las agendas gubernamentales y el papel interviniente de los medios de comunicación.

La *guerra contra el terror*, en su dimensión ideológica es un lenguaje contenido en un voluminoso conjunto de textos (normativa, literatura gris, debates parlamentarios, etc.). Un discurso sobre la seguridad, la amenaza, el riesgo del terrorismo, el modo legítimo y efectivo de gestionarlo o las causas que lo generan. Es tan complejo y tan voluminoso que podríamos hablar de varias “capas” y ha sido analizado exhaustivamente por Jackson (2005a), entre otros.

En un primer nivel, el lenguaje de la *guerra contra el terror* consiste en todo un cuerpo de discursos oficiales, entrevistas en los medios, notas de prensa, noticias de radio y televisión, artículos de expertos, discurso hablado, escrito, entrevistas, web-posts o emails institucionales. En un segundo nivel, se encuentran los textos legales que proceden de las organizaciones, las instituciones internacionales y de los Estados. La tercera capa de textos incluiría todo tipo de literatura gris: informes de *briefing*, informes internos, cartas, manuales de operaciones y documentos de las webs oficiales de un amplio conjunto de organizaciones internacionales, de departamentos ministeriales y de agencias de seguridad. Por último, encontramos las representaciones simbólicas de las estrategias contra el terrorismo: los símbolos como fuente de comunicación poderosa contienen mensajes obvios y otros encubiertos. Piénsese en los

²²⁴ Esto puede parecer una obviedad puesto que todo discurso es, en definitiva, un texto. Sin embargo, es un hecho que la proliferación de “papel” sobre la seguridad, el terrorismo y el antiterrorismo alcanza niveles formidables en la última década y esto es señalado casi de forma rutinaria en toda publicación sobre el tema después de 1995.

juegos de colores o las referencias ordinales a través de las cuáles se establecen los sistemas de alerta antiterrorista, los sellos conmemorativos, los rituales, las manifestaciones de rechazo, las “zonas” cero o las imágenes mitificadas de atentados, por ejemplo.

Todas estas capas de productos culturales establecen los universos simbólicos a través de los cuales se entienden la violencia y el terrorismo contemporáneos. Unos universos que, podemos decir, son mayoritariamente compartidos en las sociedades occidentales y en sus instituciones de gobernanza global y en los que la deslegitimación, el rechazo y el “combate” al terrorismo, y de una manera menos visible a cualquier forma de violencia no estatal, se han convertido en la última década en una prioridad social y política de las agendas de Estados e instituciones internacionales. En este proceso, la centralidad de la figura del experto y de los llamados “think tanks” en la configuración del discurso de la seguridad y el terrorismo para el diseño de la agenda política es muy apreciable²²⁵. Las explicaciones hegemónicas sobre el terrorismo están siendo generadas y capitalizadas en el campo de los llamados “security studies” y los estudios sobre terrorismo. Estos expertos, además de constituir una comunidad relativamente pequeña y altamente interconectada a través de redes internacionales e institutos de investigación, están a menudo vinculados a las agencias gubernamentales, cumpliendo un papel fundamental a la hora de orientar las políticas públicas de seguridad y las estrategias antiterroristas de Estados y organizaciones internacionales. En la medida en que su actividad es también amplificada por la cobertura de los medios de comunicación, son para la opinión pública, una figura autorizada, convirtiéndose, como plantea Zulaika, en promotores del pensamiento contrterrorista y de la retórica de la *guerra contra el terror*²²⁶.

Sin duda, el corazón de la retórica de la *guerra contra el terror*, es el concepto de terrorismo. *Terrorismo* se ha convertido en una categoría omnicomprensiva y vagamente definida bajo la cual se incluyen todo tipo de violencias aunque, en general, no aquella que procede del Estado²²⁷. Este discurso, que trataré de sintetizar en el siguiente apartado, es una de las narrativas políticas hegemónicas en el escenario

²²⁵ Algunos estudios que abordan el papel de los expertos en la generación del discurso del contrterrorismo son los de Miller y Mills (2009); Petras (2004); Toivanen (2010) y Zulaika (2009).

²²⁶ Voces críticas con las limitaciones teóricas, metodológicas y, sobre todo, empíricas con las que cargan estos trabajos se han organizado recientemente bajo una corriente crítica de análisis del terrorismo: *Critical Studies in Terrorism*. Véase la revista del mismo nombre editada desde 2008.

²²⁷ El concepto se ha dilatado de tal manera en la última década, que se habla de ciberterrorismo o eco-terrorismo e incluso de terrorismo doméstico (para referir la violencia de género).

internacional (junto con el discurso de los derechos humanos, la pobreza global o la no proliferación) y constituye una dimensión fundamental del contexto que estoy definiendo²²⁸. Aunque hegemónico, no es monolítico ni adopta la misma forma en todos los actores globales. Hay diferencias sustanciales entre el discurso del terrorismo y antiterrorismo en EEUU, la UE o la ONU, por ejemplo. Sin embargo, lo más relevante es el modo en que algunos presupuestos fundamentales en términos de diagnóstico son compartidos.

4.1.1. El discurso de la guerra contra el terror en los EEUU y la Unión Europea

Jackson (2005), Hulsse y Spencer (2008) y Krebs y Jackson (2007) han desarrollado análisis de los discursos que nos interesan sobre el terrorismo y el antiterrorismo en el ámbito transatlántico. Como hemos planteado, desde el 11S el terrorismo y el antiterrorismo son una prioridad de la agenda de los EEUU y de la UE. No es que no constituyera un área de interés en la Unión Europea antes del 11 de Septiembre pero, en ningún caso, un área prioritaria²²⁹. Ambos actores han elaborado en esta década un conjunto de asunciones, etiquetas y narrativas para describir y explicar la naturaleza y las causas del terrorismo así como sobre el modo de gestionarlo; las narrativas de ambos descansan sobre consensos y similitudes bastante consolidados y que, sin ánimo de exhaustividad sino con el fin de ilustrar el contexto ideológico que estamos presentado, expondré brevemente²³⁰:

Existe, en primer lugar, cierto consenso en entender el terrorismo como una forma de violencia política no estatal, desarrollada por individuos y grupos que operan frecuentemente en redes. Aunque hay referencias a “estados patrocinadores” (en relación a Irak, por ejemplo), la posibilidad de que un Estado pueda emplear el terror como instrumento de la política interna o exterior está totalmente ausente del discurso

²²⁸ Algunos estudios sobre el concepto de terrorismo en la narrativa hegemónica son los de Al-Sumait y et al., (2009); Gökay y Walker (2003); Aretxaga (2002); Rasmussen (2004); Aldis y Herd (2007); Zulaika (2009). Sobre la ausencia del Estado en las perspectivas dominantes véase: Jackson (2005); Tilly (2004b); Gunning (2007) Herring (2008).

²²⁹ Si comparamos las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (1999) en el que se abordó el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (el llamado Tercer Pilar), con cualquier texto posterior a 2001, podemos comprobar que el terrorismo pasa inmediatamente a ser prioritario en la agenda de la UE y se comienzan a tramitar con urgencia medidas que llevaban años sin progresar. Véase *Consejo Europeo de Tampere*, 15 y 16 de Octubre de 1999: Conclusiones de la Presidencia." Bruselas. *Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo.*" 2001, Texto Aprobado por el Parlamento el 5 de Septiembre de. 2001 Bruselas: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C72/ E de 21-3-2002; pp: 135 - 141.

²³⁰ Este apartado está basado en los siguientes trabajos que han sido contrastados: Jackson (2007) y Guittet, (2004).

de la UE y de los EEUU. El terrorismo como fenómeno se entiende bien como acto de “guerra”, bien como acto criminal y, por lo tanto, penalmente punible, pero en todo caso, se trata de un tipo de acción que emprenden organizaciones no estatales y que carece de un carácter político.

En segundo lugar, la amenaza aparece como un elemento central en este discurso. Se asume que el terrorismo de pequeños grupos establece un peligro claro, “existencial” y sin precedentes contra las sociedades modernas. De acuerdo con EEUU y la UE, no es sólo una amenaza de destrucción masiva “inimaginable” e intolerable sino que se dirige contra la democracia, la paz, los derechos humanos, las libertades y los “modos de vida”. Se entiende como un ataque al corazón de los valores occidentales; contra la civilización y el propio sistema²³¹. La amenaza, cuya intensidad se presenta como variable pero nunca inexistente, se convierte en el argumento para cambios en las estrategias gubernamentales. Las organizaciones terroristas se describen como altamente sofisticadas, bien financiadas y operantes a través de redes muy organizadas y con una gran presencia en el espacio de la UE y de EEUU (“el enemigo en casa”). La presencia del terrorismo es ubicua. Es una amenaza principalmente externa y proveniente de otras regiones del mundo. Sin embargo, en la evolución temporal del discurso a lo largo de la década, y en la medida en que nuevos episodios han evidenciado otras realidades, también se ha desarrollado como un riesgo para la seguridad interna²³², generando a su vez cambios en las estrategias a seguir.

En tercer lugar, a ambos lados del Atlántico se ha construido una narrativa anclada en un consenso muy popular y en aumento que establece que este tipo de terrorismo es “nuevo terrorismo”. En realidad, si este terrorismo es un “nuevo tipo” de violencia o si se trata fundamentalmente del mismo fenómeno en otro contexto socioestructural, es aún un tema muy debatido entre los investigadores, aunque pueden

²³¹ La proliferación de trabajos en la línea del Choque de Civilizaciones de Huntington (2006), es significativa a este respecto.

²³² A pesar de las campañas terroristas “domésticas” en algunos Estados miembros, la Unión Europea había tratado la amenaza terrorista como un problema criminal “externo” y global. Sin embargo, a partir de 2003 (en la *estrategia de seguridad europea*) pero muy intensamente después de los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, los textos empiezan a plantear la amenaza también en términos internos. Esta dimensión discursiva se consolidará tras el 7J en Londres, 2005. Sobre el 11 de Marzo dice el Consejo Europeo: “el terrorismo es una amenaza a todos los Estados y a todas las personas. La amenaza del terrorismo es una amenaza a *nuestra* seguridad, a *nuestra* democracia, y a *nuestro* modo de vida en la Unión Europea” (Estrategia de Seguridad Europea, 2003; énfasis añadido). A partir de este momento, la amenaza es tanto externa como interna y las estrategias de seguridad interna pasan a ser prioritarias.

señalarse algunos cambios significativos en la naturaleza de la violencia política.²³³ El nuevo terrorismo se describe en términos religiosos y no por motivaciones políticas. Tiene que ver con “fundamentalismos”, “extremismos” o “radicalismos” de naturaleza religiosa. Frente a esta novedad están los “viejos” terrorismos que respondían a motivaciones y objetivos políticos y que, se insiste, eran producto de lógicas sociopolíticas distintas, aunque no dejen de estar afectados por las nuevas dinámicas. La referencia a la “novedad” de la amenaza está muy presente en los textos oficiales y se convierte en la justificación para nuevas estrategias y medidas, nuevas actitudes y un nuevo enfoque frente al terrorismo: “ante nuevas amenazas, nuevas respuestas”.

En cuarto lugar, hay un consenso bastante difundido respecto de las causas que originan la amenaza y el terrorismo. Las explicaciones dominantes son de naturaleza individual en virtud de las cuales la violencia responde a factores psicológicos y a una irracionalidad que proviene del fanatismo religioso; a psicopatologías, extremismos, o a la desestructuración individual vinculada a procesos de rápida modernización²³⁴. En el discurso europeo esta ausencia de causas subyacentes se matiza visiblemente a partir de 2003 y comienzan a plantearse voces críticas que apuntan también de otro tipo de factores de naturaleza social como son las formas de gobierno autocráticas, o los sistemas democráticos débiles o parciales. Se cuestiona en cierta medida el argumento repetido hasta la saciedad durante la presidencia española de la UE (2002) de la necesidad de combatir “las consecuencias del terrorismo, no sus causas”. En todo caso, permanece el énfasis en los procesos de *radicalización* en sociedades desestructuradas y en la enajenación de los jóvenes por las “presiones ejercidas por la modernización, la

²³³ A lo largo de los años ochenta y noventa, el terrorismo fue consolidando las tendencias que ya había experimentado en el pasado. La transición del llamado “terrorismo internacional” hacia la configuración del “terrorismo global” tuvo lugar a lo largo de este periodo en el que se produjeron algunas acciones terroristas cuyos instigadores, motivaciones y principales características parecían distintas a las anteriores. Traspasaron las fronteras de los Estados y se desvincularon de los escenarios habituales. Es el caso del atentado al WTC (1993) y los intentos de voladura del edificio de las Naciones Unidas (1993), el centro del FBI y de los túneles Lincoln y Holland también en Nueva York, por parte de un grupo islamista. En todas estas acciones, el principal objetivo era la destrucción masiva y el máximo número de víctimas. Es también el caso del atentado contra la base de Al Chobar en Arabia Saudí (1996) y los atentados simultáneos a las embajadas de Nairobi y Dar-es-Salam en Kenia, que provocaron 224 muertos y cerca de 4500 heridos (1998).. Para una aproximación a los debates sobre la novedad de la violencia política global véanse: Münkler (2005); Kaldor (2001); Hoffman (2004); Laqueur (2003); Reinares (2003).

²³⁴ Sobre los factores explicativos del terrorismo hay una extensa literatura y un debate académico muy prolífico. No es este el lugar de plantearlo sino que lo que se pretende es señalar el carácter hegemónico de un tipo de explicaciones sobre el mismo. Sobre este punto véase: Gunning (2007); y Zulaika y Douglass, (2008).

crisis cultural, social y política”²³⁵ Son los procesos de radicalización y enajenación (individual) los que hay que evitar.

En quinto lugar, hay que resaltar que se trata en ambos casos (UE, EEUU) de un discurso con un marcado sesgo moral. Los terroristas son presentados como profundamente irracionales y deshumanizados. Se insiste en su incapacidad moral. El terrorista es “el mal”, “bárbaro”, “sin rostro”, “cáncer de la sociedad”, y pretende “asaltar los valores de la civilización”; sus actos son “actos de odio”, “ataques a la democracia y a la tolerancia”²³⁶.

En sexto lugar, la democracia, las libertades y los valores de la civilización occidental parecen ser tanto el objetivo del terrorismo (la violencia ataca a la democracia) como su cura. El terrorismo es presentado como la principal amenaza a la democracia y, en el caso de la UE, se trata además de una amenaza al espacio común, a la naturaleza misma de la Unión: “pretende socavar la apertura y la tolerancia de nuestras sociedades y representa una creciente amenaza estratégica para toda Europa”²³⁷.

Se entiende que el espacio común de la Unión Europea es aprovechado por el terrorismo para sus objetivos. Pero a la vez, se considera que sólo haciendo valer la democracia y sus principios, se puede hacer frente al terrorismo. En el caso de Europa, Guittiet (2004) señala en qué medida la defensa de la democracia y la seguridad en Europa se están convirtiendo en parte fundamental de su identidad en construcción.

En séptimo lugar, aunque Jackson y Guittiet no lo consideran elemento fundamental del discurso, mi propia revisión indica que en la gran mayoría de los documentos oficiales y textos legales de la UE hay una referencia a acontecimientos que se consideran significativos como 11S, 11M y 7J. Éstos se construyen en la memoria y el discurso colectivo como “puntos de inflexión”. Y si bien el discurso que estamos

²³⁵ *Una Europa segura en un mundo mejor: Estrategia de Seguridad Europea*, 2003 pp.3 y *The European Counter-Terrorism Strategy*, 2005.

²³⁶ Aquí es necesario matizar que la ausencia de motivación racional o de subjetividad en la representación de los terroristas se ha llevado hasta el extremo en el discurso y la acción de los EEUU, donde los prisioneros acusados de terrorismo han sido reducidos a la cualidad de *homo sacer* de Agamben (2005) No hay hasta el momento evidencia clara de que éste haya sido el caso en el ámbito europeo, aunque informes de Amnistía Internacional (2008) y de la Oficina del Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2008) señalan frecuentemente excesos por parte de los estados europeos en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, los propios informes de la UE sobre los vuelos de la CIA revelan una clara connivencia con prácticas abusivas.

²³⁷ *Una Europa segura en un mundo mejor: Estrategia de Seguridad Europea*, 2003: 5

presentando tiene sus raíces en los noventa²³⁸, estos acontecimientos lo han hecho resonar en el debate público, cristalizando además en las estrategias a seguir. Por esta razón, podemos hablar de aquellos acontecimientos como transformadores. Buena parte de los textos oficiales, legales y discursos institucionales toman los atentados como referencia y son considerados como hechos singulares, únicos, y excepcionales. Como momentos que todos los ciudadanos recuerdan y que representan vivamente la novedad de la amenaza y la necesidad de “otro” tipo de respuesta

En último lugar, hay un consenso sobre la necesidad de una respuesta coercitiva: las reacciones del contrterrorismo (ya militares, como en el caso de EEUU, ya por la vía política y de la justicia criminal, como veremos) son presentadas como legítimas y eficaces pero sobre todo como las “únicas alternativas posibles” para hacer frente a los mismos. Esto está mucho más presente en la narrativa de los EEUU, como señala Jackson, en tanto que se ha apostado por la violencia, por la *guerra contra el terror*. Sin embargo, en Europa se habla de la “lucha contra el terrorismo”, “la batalla contra el terrorismo” como necesaria, larga, difícil. La metáfora bélica también está presente. Y se recurre a expresiones como “resolución” y “firmeza”, o “vencer” a los terroristas.

Paralelamente a estos consensos, hay diferencias pequeñas pero fundamentales en los términos en que EEUU y UE plantean el tema. Los contrastes tienen que ver con la concepción de las amenazas y del terrorismo y han tenido un impacto claro en las estrategias seguidas por uno y otra. Es de sobra conocido que, en tanto los EEUU han planteado la cuestión en términos abiertamente bélicos -“actos de guerra”- han optado por la vía de la violencia. Por el contrario, en el ámbito europeo, se muestra una muy bien arraigada concepción del terrorismo en términos criminales (desde los debates legales en Europa sobre la despolitización del delito de terrorismo²³⁹, el terrorismo se entiende como un hecho criminal). El lenguaje de la justicia, aunque presente también al otro lado del Atlántico, en Europa está vinculado a los derechos humanos, al respeto a los principios del derecho internacional y al marco proporcionado por Naciones Unidas. En consecuencia, la respuesta europea está saturada de cooperación, de coordinación,

²³⁸ Un análisis muy en profundidad de este discurso del terrorismo y contra terrorismo puede encontrarse en Zulaika (2009) y Zulaika y Douglass (1996).

²³⁹ En 1977, el *Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo*, (número 090 del Consejo de Europa), firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, rompe con las tradiciones liberales de regulación del delito político en las Relaciones Internacionales. Véase: López Garrido, (1987).

de multilateralidad y de necesidad de compartir información, siempre a través del respecto a las normas –el discurso del *law and order*– lo que claramente refleja los factores históricos y el marco institucional posible, dada la propia naturaleza de la organización²⁴⁰.

Los rasgos presentados de un modo muy general, y que forman la base de los discursos institucionales sobre el terrorismo en el ámbito internacional, están también presentes en muchos países. En España, como veremos, también lo están. Pero son visibles en todo caso, en los documentos de las Naciones Unidas de la última década²⁴¹, en algunos textos públicos de la OSCE²⁴², y por supuesto en la OTAN²⁴³. También aparecen en numerosos textos académicos, informes de “think tanks”²⁴⁴, artículos de prensa, y productos de entretenimiento cultural (novelas, películas, etc.). Podemos decir entonces que tanto sus productores como los consumidores de esta narrativa son o tienen vocación de ser globales.

En este marco de deslegitimación social y política de la violencia en cualquiera de sus formas y del empleo de la violencia (no estatal) como medio para el logro de fines políticos, el terrorismo es no sólo rechazado sino “combatido” a través de distintas estrategias, siendo la retórica una de ellas²⁴⁵. Por todo ello, podemos hablar de

²⁴⁰ Jackson (2007) plantea que las propias limitaciones institucionales de la UE determinan la respuesta posible que se puede dar al fenómeno, siendo el uso de la fuerza una competencia exclusiva de los Estados y la lucha antiterrorista por principio, una atribución de los Estados miembros. Por otro lado, esta concepción y respuesta basada en la justicia criminal es ampliamente considerada como *blanda* por parte de los “expertos” y think tanks de seguridad. Véase: Zimmerman (2006) y Keohane (2005).

²⁴¹ Consejo de Seguridad, Naciones Unidas. 2001. “Resolución 1368 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001 ” *S/RES/1368 (2001)*.

2001. “Resolución 1373 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001.” *S/RES/1373 (2001)*

2006. “Resolución 1673 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5429ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2006.” *S/RES/1673 (2006)*

Asamblea General de Naciones Unidas. 2005. “Documento Final de la Cumbre Mundial Contra el Terrorismo, 2005.”.

2006. “Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de Septiembre de 2006.” *A/RES/60/288*

2006. “Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo. *A/60/825*

²⁴² OSCE, *Declaración de lucha contra el Terrorismo*. Consejo Ministerial Bucarest, Decisión 1, Diario CM (9) n° 2, punto 9 de 4 Diciembre de 2001.”

²⁴³ OTAN: Statement by the North Atlantic Council. 11 Sep. 2001 y OTAN: Statement on combating terrorism: Adapting the Alliance's Defence Capabilities 18 Dec. 2001.

²⁴⁴ Véase como ejemplo: Avilés (2002 y 2003); Reinares, (2007)

²⁴⁵ Por poner otro ejemplo, parte de las justificaciones intelectuales de la violencia insurgente entre los intelectuales de los sesenta hoy sería implantables o, como dice Wieviorka, en occidente “cualquier referencia positiva a la violencia está simplemente fuera de debate”. En el contexto de la guerra fría se podían hacer distinciones entre violencias, tipos de violencias, significados de violencias (una revisión de la literatura de esas décadas lo evidencia). Wieviorka (2005: 111). Por su parte, Asta Maskaliunaite (2007) señala cómo las ciencias sociales en general en el periodo 60 - 90, tendían a analizar la violencia como parte de un conflicto o crisis, proporcionando una visión instrumental o racional como medio para

la dimensión ideológica y discursiva de la *guerra contra el terror*, y por ello me atrevo a plantearla como parte fundamental del contexto global que estoy describiendo.

4.2 La guerra contra el terror como expresión institucional: lo nuevo y lo viejo en las políticas de seguridad

Las narrativas son historias que se cuentan sobre los hechos y que proveen coherencias y justificaciones para las acciones; en concreto, para las políticas públicas. Los eventos del 11 de Septiembre de 2001 y el ciclo de violencia posterior marcan un punto de inflexión no sólo en términos de la *securitización* retórica señalada, sino en relación con los cambios institucionales que han generado a nivel global.

Los episodios del 11S produjeron inicialmente un rechazo masivo entre las sociedades y los Estados occidentales y un apoyo casi unánime hacia los EEUU, respaldando su derecho a la legítima defensa. Este apoyo se materializó en una reestructuración de las agendas políticas de instituciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea, dentro de las cuales se activaron proyectos de seguridad convirtiendo la cuestión en un asunto de prioridad institucional absoluta.

La estrategia bélica seguida por los EEUU con el consenso de la comunidad internacional con respecto a la invasión de Afganistán en el otoño del 2001 es de sobra conocida. También lo es la mundialmente polémica campaña ilegal en Irak en 2003 y su menor respaldo internacional²⁴⁶. A pesar de las diferencias y los disensos entre los distintos actores internacionales en torno a la respuesta apropiada a la amenaza terrorista, hay unos acuerdos bastante sólidos respecto al enfoque y a la “necesidad” de una alianza global contra el terrorismo. Veamos pues cómo ha sido el desarrollo en el seno de las Naciones Unidas y de la Unión Europea haciendo mención a las repercusiones de sus respectivas estrategias en un amplio conjunto de actores globales.

Ya desde los mismo orígenes de la internacionalización del terrorismo contemporáneo a lo largo de los años setenta y ochenta, y debido en parte a la creciente interdependencia y cooperación entre Estados durante los noventa, la comunidad internacional llevó a cabo el diseño de determinado tipo de medidas en el campo de la

lograr objetivos políticos. Hoy estas perspectivas han sido extensamente abandonadas como “deterministas” y la violencia aparece vinculada a la afirmación de las subjetividades.

²⁴⁶ El respaldo del llamado “trío de las Azores” y el rechazo masivo de la opinión pública mundial convierten este segunda “fase” de la guerra norteamericana contra el terror en proceso enormemente polémico y complejo que no voy a analizar pero que en todo caso evidencia la ruptura inicial del consenso y solidaridad con los EEUU expresado ampliamente en la comunidad internacional.

seguridad con el fin de hacer frente a la amenaza que entrañaba dicho proceso. En este contexto, surgieron debates sobre la adopción de medidas militares defensivas fuera de los límites estatales para responder a dicha violencia. Asimismo, se dieron los primeros pasos para una creciente cooperación en el marco de la multilateralidad y la bilateralidad para la supresión del terrorismo.

Sin embargo, el 11 de Septiembre desencadena un proceso de transformación institucional y en algunos casos de aceleración de cambios en marcha que no ha parado en la última década. Para empezar, todas las organizaciones internacionales de vocación regional o global emitieron sus correspondientes declaraciones de condena, sin precedentes en muchos casos y, en un breve periodo de tiempo, elaboraron planes de acción, estrategias, sistemas de detección y alerta temprana de amenaza (*early warning systems*) y un amplio conjunto de medidas de aplicación internacional. Los debates en el seno de la Asamblea General de la ONU en el otoño de 2001 y las consecuentes medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad son más que significativas y establecieron las principales áreas en las que había que trabajar para el fortalecimiento de las estrategias antiterroristas.

En el marco de la política comunitaria la respuesta de los Estados miembros contra el terrorismo global ha sido decisiva, en parte también por la relación directa e indirecta de Europa con el terrorismo. Las primeras iniciativas tomadas por las instituciones europeas, contienen amplias medidas que han sido desarrolladas para promover la cooperación entre los servicios de seguridad y los departamentos de policía de los distintos Estados.

4.2.1 El tratamiento del terrorismo en el marco de las Naciones Unidas y del derecho internacional

“Tras el 11 de septiembre de 2001 un escalofrío recorre la espina dorsal de la sociedad internacional. Incluso la de aquellos de sus miembros que por razones de simpatía o afinidades varias pudieran haber tenido la tentación de explicar lo ocurrido en términos de la perspectiva derivada de una cierta visión del mundo. No había justificación para la matanza (...) ni atenuantes para los criminales y sus cómplices. Nadie, ni los más poderosos, estaban a salvo... en una fracción breve de tiempo y de profunda y angustiosa intensidad emocional la comunidad internacional cree comprender que siendo el riesgo diferente también debe serlo la respuesta (...) todos comprenden que la solución, si existe, debe buscarse en una voluntad reforzada de la

cooperación internacional.” (Javier Rupérez, Subsecretario general y director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo en las Naciones Unidas, Nueva York, 2006)

La primera consideración que habría que hacer es que el terrorismo ha sido siempre un punto de debate en el marco de las Naciones Unidas y un objeto de reglamentación jurídica en el derecho internacional público: un tema siempre controvertido pero habitualmente tratado. Las polémicas han sido frecuentes ya que, como hemos insistido a lo largo de este trabajo, se trata de un fenómeno ambivalente y de difícil definición, históricamente anclado, y políticamente debatido en tanto los significados a los que se vinculan varían en función de la posición de los actores -de los Estados- y de los contextos. La segunda consideración que hay que hacer es que, en general, la reglamentación del terrorismo en el ámbito internacional, como en el nacional, se ha configurado siempre respondiendo, por un lado, a principios de emergencia y coyuntura y, en segundo lugar, en términos jurídicos de excepcionalidad (Pérez Royo, 2010).

Un recorrido breve por los programas de seguridad y la reglamentación de la misma en el derecho internacional nos llevaría a los orígenes de la represión jurídica de la violencia política en el periodo de entreguerras del siglo XX. A lo largo de los años treinta, tienen lugar los primeros intentos de unificación internacional del derecho penal y, en el seno de la Sociedad de Naciones, se invita a cada estado a reprimir cualquier acto terrorista y a asistir a sus aliados cuando lo necesiten. En este momento se ensayan sin éxito las primeras definiciones consensuadas del fenómeno terrorista. Este primer intento, fracasa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y no será hasta los años setenta cuando en el marco de las Naciones Unidas se empiecen a generar los primeros textos jurídicos -Resoluciones 2625 y 2734 de 1970- vinculados directamente al terrorismo.

En el contexto del mundo bipolar, las principales fuentes de discrepancias en los debates de la Asamblea General estuvieron ligadas, sobre todo, a la inclusión o exclusión del terrorismo estatal y a la consideración de “causas subyacentes”²⁴⁷. Las perspectivas defendidas por los países del Tercer Mundo, y en concreto por los países

²⁴⁷ En este momento, fundamentalmente dos tipos de violencia podían ser incluidos bajo esta denominación: la violencia etno-nacionalista o revolucionaria en distintos países de Europa (IRA, ETA, RAF, BR, etc.) y, por otro lado, los movimientos armados revolucionarios y de liberación nacional en América Latina u otros países en vías de descolonización además de una emergente violencia de naturaleza religiosa en el mundo islámico. Las fronteras entre estas “etiquetas” son discutibles y en todo caso aproximadas, pero bastan para situar los *hot spots* de la violencia en ese contexto.

“no alineados”, en el contexto de la descolonización y de la filosofía de la libre determinación de los pueblos son reveladoras a este respecto. Esta discrepancia ideológica entre bloques se ha mantenido hasta nuestros días y con ella, la dificultad de lograr una definición de terrorismo que permita una tipificación del mismo en el marco del derecho internacional.

Una de las consecuencias más importantes de estos desacuerdos ha sido la configuración regional de los instrumentos convencionales de carácter internacional sobre terrorismo que rompen con el supuesto universalismo del derecho internacional. Entre 1971 y 1989 se firmaron acuerdos multilaterales para las Américas, el Sudeste Asiático, los Estados Árabes, Europa, y la Unión Europea²⁴⁸.

El otro proceso que se puede señalar en relación a la falta histórica de consenso sobre la tipificación del fenómeno es un desarrollo jurídico internacional en el que el papel del derecho de extradición es fundamental. La situación privilegiada que en el derecho liberal se concedía a los “delitos políticos” (delitos que en la mayoría de los Estados quedaban fuera de la extradición), permitía que cada Estado pudiera entender el terrorismo de la forma más conveniente a sus intereses. Este estatus de “delito político” ha ido perdiendo progresivamente su privilegio en el derecho internacional para la supresión del terrorismo²⁴⁹, lo cual indica un mayor grado de consenso y cooperación y una clara despolitización del mismo.

En todo caso, entre 1963 y 2004, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la comunidad internacional elaboró 12 convenios de lucha contra el terrorismo abiertos a la participación de todos los Estados miembros²⁵⁰. Por lo

²⁴⁸ Convenio de Washington (Convención Interamericana contra el Terrorismo) aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 2 de febrero de 1971 (ratificado por 12 Estados); Convenio de Katmandú sobre la eliminación del terrorismo aprobado por la ASEAN el 4 de noviembre de 1987 (ratificado por 7 Estados); ; Convenio de El Cairo aprobado por la Liga Árabe el 24 de abril de 1998 (ratificado por 22 Estados); Convenio de Estrasburgo sobre la represión del terrorismo aprobado el 27 de enero de 1977 (ratificado por 29 Estados) y Acuerdo de Dublín aprobado el 4 de diciembre de 1979 que incorpora el Convenio de Estrasburgo antes referido al Derecho de la Unión Europea. La Unión Europea incorporó medidas sobre el terrorismo en los Acuerdos de Maastricht de 1992 y de Ámsterdam de 1997, así como al Convenio de Bruselas sobre Extradición, aprobado el 27 de septiembre de 1996.

²⁴⁹ López Garrido (1987).

²⁵⁰ Estos convenios son: (1) Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963, en vigor desde el 4 de diciembre de 1969. (2) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970, en vigor desde el 14 de octubre de 1971. (3) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Firmado en Montreal el 23 de septiembre, en vigor desde el 26 de enero de 1973. (4) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988, en

tanto, hay que decir que el terrorismo siempre ha formado parte del acervo del derecho internacional y ha sido tema de trabajo de las Naciones Unidas. Sin embargo, en doce de los dieciséis instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra el terrorismo actualmente en vigor, el porcentaje de adhesión de los Estados miembros de las Naciones Unidas a estos convenios y protocolos era bajo hasta hace diez años.

Podemos hablar aquí también, de “un antes y un después” del 11 de Septiembre de 2001. Una simple mirada a la página web del Comité Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas revela la importancia que se concede al tema a partir del 11S. Miles de documentos para la descarga, cientos de notas de prensa, condenas, instrumentos jurídicos, conferencias, seminarios, grupos de trabajo. Si recordamos lo expresado en la primera parte de este capítulo –la *guerra contra el terror* es literalmente cientos de páginas escritas sobre la amenaza, el terrorismo, y la respuesta al mismo- una mirada a esta página, revela el “proceso de producción” de tal fenómeno, a la vez que evidencia cambios organizativos e institucionales en el seno de los distintos actores. Lo mismo ocurre con la de la oficina especial de la OTAN o de la OSCE²⁵¹.

Analicemos las propias palabras del director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo, de las Naciones Unidas en 2006 con las que abríamos este epígrafe:

Para empezar, hay una referencia expresa al 11S. Éste se construye en esta cita, como en muchas otras de los documentos producidos por la ONU desde entonces, como acontecimiento de especial sensibilidad; como un “escalofrío que recorre la espina dorsal” de la sociedad internacional. Este escalofrío es retórico, pero a la vez, estructura,

vigor desde el 9 de agosto de 1989. (5) Convenio sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Aprobado por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1973, en vigor desde el 20 de febrero de 1977. (6) Convención internacional contra la toma de rehenes. Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979, en vigor desde el 3 de junio de 1983. (7) Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Firmada en Viena el 3 de marzo de 1980, en vigor desde el 8 de febrero de 1987. (8) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, en vigor desde el 1 de marzo de 1992. (9) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, en vigor desde el 1 de marzo de 1992. (10) Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección. Firmado en Montreal el 1 de marzo de 1991, en vigor desde el 21 de junio de 1998. (11) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Aprobado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1997, en vigor desde el 10 de abril de 2002. (12) Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999, en vigor desde el 10 de abril de 2002.

²⁵¹Véase; <http://www.un.org/es/sc/ctc/>

NATO Defense against terrorism programme :

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50313.htm?selectedLocale=en

OSCE Secretariat-against terrorism unit: <http://www.osce.org/atu/>

como veremos, las estrategias y los cambios institucionales generados en esta organización. Además, la cita contiene una condena, una deslegitimación rotunda de la violencia en la que se constata además, la imposibilidad de justificación desde ninguna visión del mundo. Entre las muchas iniciativas elaboradas en los últimos años está la tarea expresa de abordar los llamados “espacios de impunidad” y justificación o connivencia con el terrorismo.

En tercer lugar, se trata de una acción que se considera criminal (no un acto de guerra) y es por la vía de la justicia criminal por la que las Naciones Unidas han exhortado a los Estados a reprimir el terrorismo. En cuarto lugar, se confirma que “nadie, ni los más poderosos, estaban a salvo de las embestidas”. Como en otros muchos textos de la ONU, el terrorismo se ha convertido, desde el 11 de Septiembre, y no antes, en una amenaza global. En quinto lugar, se evidencia que “siendo el riesgo diferente, también debe serlo la respuesta” y que dicha respuesta se ha convertido en una prioridad de las agendas internacionales. Finalmente se constata que la cooperación, como todos los Estados han comprendido, es la única solución posible. Una coalición internacional contra el terrorismo. En una sola cita, de entre muchas que repiten el mismo mensaje, están contenidas las líneas fundamentales del programa básico de acción de las Naciones Unidas contra el terrorismo después del 11S.

Tras la firme condena del Consejo de Seguridad el 12 de Septiembre de 2001²⁵² el primer y más significativo cambio institucional que tiene lugar en esta organización está contenido en la Resolución 1373/2001²⁵³. Esta norma es la pieza central de toda la concepción y de toda la actuación antiterrorista de la ONU después del 11S. Es una resolución adoptada bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y que, por tanto, contiene obligaciones jurídicamente exigibles por la Organización internacional bajo la eventual amenaza de sanciones.

²⁵² Consejo de Seguridad, Naciones Unidas. 2001. "Resolución 1368 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001 en la que se reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, exhorta a los Estados a que colaboren con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas y a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo.

²⁵³ Consejo de Seguridad, Naciones Unidas. 2001. "Resolución 1373 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001." Nueva York. Esta resolución, que tiene carácter de norma jurídica e impone obligaciones para los Estados ha sido criticada por cuanto que algunos la han considerado una “invasión” de los poderes atribuidos a la Asamblea General a quien corresponde legislar.

A través de este instrumento jurídico, se imponen obligaciones genéricas a los Estados miembros -las de criminalizar la financiación del terrorismo y el mismo terrorismo- y se recomienda la adopción de una amplia serie de medidas en el ámbito de la cooperación internacional contra el fenómeno (desde la colaboración entre servicios policiales y de inteligencia hasta los aparatos judiciales). A partir de este momento, una norma jurídica del derecho internacional establece, como hecho novedoso, la obligación, para todos los Estados miembros, de legislar contra el terrorismo por petición expresa de las Naciones Unidas²⁵⁴.

La resolución parece haber creado una dinámica muy favorable a la observancia de sus normas y, con ello ha evidenciado, un consenso bastante generalizado en contra del terrorismo. En palabras del director ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo: “Ningún miembro de la comunidad internacional, con alguna pequeña y no demasiado significativa excepción, ha osado públicamente oponerse al cumplimiento de sus disposiciones” (Rupérez, 2006). Finalmente, la resolución exhorta a los Estados a adherirse a los tratados y convenios vigentes para la supresión del terrorismo. El aumento de las ratificaciones de los Convenios internacionales sobre el terrorismo ha sido notable después de la aprobación de la resolución, las doce resoluciones existentes antes del 11 de septiembre recibieron entre un tercio y dos tercios de las ratificaciones después del año 2001, oscilando el número total de las mismas entre las ciento ochenta (convenciones para la protección de las navegación aérea) y las ciento veinte (relativas a la protección del material nuclear o la fabricación de explosivos plásticos). La última de las Convenciones, relativa a los actos de terrorismo realizados con armas o componentes nucleares, fue adoptada por la Asamblea General el 13 de abril de 2005, recibió ochenta y dos firmas en el momento inicial, y contaba en 2006 con ciento seis y con tres países que ya la han ratificado (Rupérez, 2006).

Esta disposición para firmar y ratificar las convenciones antiterroristas tiene que ver, no sólo con la observancia de la Resolución 1373, sino muy posiblemente, con el priorización de la seguridad y el antiterrorismo en las agendas nacionales e

²⁵⁴ De entre las medidas concretas a las que insta la R 1373, figuran las siguientes: (1) Tipificar como delito la financiación del terrorismo; (2) Congelar sin dilación los fondos de las personas que participen en la comisión de actos de terrorismo; (3) Denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas; (4) Prohibir la provisión de refugio o de cualquier tipo de asistencia o apoyo a terroristas; (5) Intercambiar información con otros gobiernos en relación con cualquier grupo que cometa o se proponga cometer actos de terrorismo; (6) Cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos; y (7) Tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito.

internacionales después del 11S. La dinámica de adhesión ha sido también fomentada por la creación de otro órgano subsidiario del Consejo, el Comité Contra el Terrorismo²⁵⁵, que tiene como finalidad fundamental la de comprobar el cumplimiento de los términos de la propia Resolución 1373/2001 a través de una relación continua con los Estados miembros.

El impulso dado por el Consejo de Seguridad a las medidas contra el terrorismo ha tenido, a lo largo de la última década, varias manifestaciones más²⁵⁶. A lo largo de esta década se han emitido en el seno del Consejo periódicamente resoluciones de compromiso contra el terrorismo. Pero es sin duda un nuevo acontecimiento - el 11 de Marzo de 2004 - el que revitaliza el Comité contra el Terrorismo. A partir del 11 de Marzo, se crea la dirección ejecutiva del mismo que queda configurada como “misión política especial” regida por las normas de la ONU²⁵⁷.

La Secretaría General de las Naciones Unidas también ha desarrollado su propio cambio de actividad en relación con el terrorismo, convirtiéndose en un claro impulsor de la agenda antiterrorista. A partir de su trabajo con comités y grupos de expertos y de los informes producidos por el Grupo de Alto Nivel (un consejo de expertos en riesgos y amenazas), Kofi Annan hizo públicas en 2005 las conclusiones para lanzar un primer esbozo de la estrategia global contra el terrorismo de las Naciones Unidas²⁵⁸ que sería aprobada por la Asamblea General en Septiembre de 2006.

La estrategia, en forma de resolución y de plan de acción, es un instrumento que potencia una vez más, los esfuerzos nacionales e internacionales contra el terrorismo. Es la cristalización de una voluntad histórica de Naciones Unidas, pero fundamentalmente, es la materialización de un consenso sobre la prioridad de la amenaza del terrorismo

²⁵⁵ El mandato de este comité incluye las siguientes tareas: visitar los Estados miembros, a petición de éstos, para supervisar los avances realizados en cumplimiento de la resolución; asistencia técnica; emisión de informes de los Estados miembros; prácticas recomendables; reuniones especiales para establecer alianzas y una mejora de la cooperación y, siempre, fortalecer las capacidades de los Estados para combatir las actividades terroristas.

²⁵⁶ La Resolución 1377/2001 de 12 de Noviembre “sobre el esfuerzo global para combatir el terrorismo” y la R 1456 de 20 de Enero de 2003 “sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo” son ambas, reiteraciones del mensaje de la 1373, pero evidencia, la insistencia y el compromiso de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Obsérvese que hasta este momento, es siempre el Consejo de Seguridad quien dicta la política antiterrorista de las Naciones Unidas.

²⁵⁷ Resolución 1535 de 26 de Marzo de 2004.

²⁵⁸ Discurso pronunciado en Marzo de 2005 en Madrid con motivo de la Cumbre de Madrid en el primer aniversario del 11M. Fuente, Diario El Mundo, Jueves 10 de Marzo de 2005

<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/10/espana/1110427075.html>

Posteriormente fue presentado el documento “*Un concepto más amplio de libertad: seguridad, desarrollo y derechos humanos para todos*”. Informe presentado a la Asamblea General por el Secretario General, Kofi Annan el 21 de Marzo de 2005 donde se recogen los principios fundamentales de lo que será la estrategia global contra el terrorismo.

después del 11S. Era la primera vez que todos los Estados miembros acordaban un enfoque estratégico y operacional común para luchar contra el terrorismo y si bien aún hoy no hay adoptada una definición común de terrorismo²⁵⁹, la Asamblea General con sus 191 Estados miembros, muestra con este documento un consenso nunca antes logrado y se revela asimismo, como actor con protagonismo contra el terrorismo²⁶⁰ creando la Fuerza Operativa Antiterrorista (*Counter-Terrorism Implementation Task Force- CTITF*) para la implementación de la estrategia junto con los Estados miembros. Este organismo colabora con 29 unidades y con Interpol para la prevención y gestión de conflictos, el antiterrorismo y la observancia de los derechos humanos en este proceso. En estas tareas, es seguido y controlado por oficina del Relator Especial para los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo²⁶¹.

Si algo revela este amplio conjunto de cambios institucionales y estratégicos, es en primer lugar, el papel protagonista que quiere adoptar la ONU ante lo que considera una amenaza global. En tanto organización global, el logro de un consenso interno respecto a la represión del terrorismo evidencia un cambio claro respecto a décadas pasadas. En segundo lugar, consolida un nuevo “marco” global en el que operan los Estados miembros y que, independientemente de la escasa capacidad coercitiva de la Naciones Unidas para hacer cumplir las normas que emite, es un contexto mucho menos tolerante con el terrorismo de lo que podría haber sido en el pasado. Es un marco en el que se cierran oportunidades y espacios para el terrorismo y otras formas de violencia. Finalmente, a pesar de que la prioridad de la seguridad no ha sido de la misma intensidad a lo largo de la última década, los cambios institucionales, cuando cristalizan, permanecen y tienden a reproducirse por lo que podemos hablar claramente de un nuevo contexto en relación con el terrorismo en la comunidad internacional.

²⁵⁹ Sí una condena expresa y unánime de los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas reunidos en la Cumbre Mundial, celebrada en Nueva York del 14 al 16 de septiembre de 2005. Acordaron por primera vez condenar claramente y sin reservas el terrorismo "en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa, de dónde y con qué propósitos": <http://secint24.un.org/spanish/terrorism/factsheet01.shtml>.

²⁶⁰ Naciones Unidas, Asamblea General. 2005. "Documento Final de la Cumbre Mundial Contra el Terrorismo, 2005. Nueva York.
———. 2006. "Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de Septiembre de 2006. A/RES/60/288, Nueva York.

²⁶¹ La oficina del Relator Especial para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, vinculada al Comité contra el Terrorismo cumple un papel importante en la fiscalización de vulneraciones de derechos humanos en el contexto del antiterrorismo para lo cual emite informes periódicos para el Consejo de Derechos humanos y la Asamblea General.

4.2.2 El tratamiento del terrorismo en la dinámica europea

La Unión Europea es una organización internacional de integración regional y de cooperación inter-estatal. En su proceso de construcción tiene la capacidad de modificar y armonizar las legislaciones de los países miembros con el fin del logro de intereses comunes. En tanto actor internacional de primera magnitud (en términos comerciales, políticos y, cada vez, más geopolíticos) y por su propio desarrollo interno, su acción tiene cada vez un mayor impacto en el escenario global.

Por otro lado, en la tradición europea en general y en la UE en particular, la observancia de los dictados de las Naciones Unidas y la adopción de sus perspectivas, también en lo que respecta al terrorismo y la seguridad, son dos de sus referencias políticas más claras. Por esta razón, y porque España forma parte de este proceso de integración supraestatal y tiene, por tanto, cedida parte de su soberanía a dicha organización, el papel de la Unión Europea es central en el trabajo que nos ocupa.

Tanto en el marco europeo como dentro de la propia UE, hay una experiencia temprana de cooperación contra el terrorismo, en el ámbito internacional y en el doméstico, y una larga trayectoria cooperativa y de compromiso antiterrorista por parte de los Estados. En este recorrido son hitos fundamentales el Convenio europeo de 1977 sobre terrorismo a nivel regional²⁶², la constitución progresiva del entramado institucional-legal de la Unión Europea y su impacto en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, y el papel de las Naciones Unidas a la hora de informar la legislación internacional y nacional como hemos visto. En este contexto, el antiterrorismo adoptó su forma a partir del problema del reconocimiento de Estados como *inter pares* y la cooperación, y la seguridad en general se entendían como dominio del Estado (intercambio positivo entre Estados) en el que se exhortaba siempre a la cooperación en el marco de la bilateralidad, la multilateralidad y de la cooperación reforzada²⁶³.

²⁶² El *Convenio Europeo para la represión del terrorismo* n° 090 del Consejo de Europa de 1977, ya recoge la necesidad de la colaboración entre Estados y una tendencia a la limitación del “delito político” vinculada a la extradición, con el fin de facilitar la cooperación interestatal.

²⁶³ La *cooperación reforzada* permite una colaboración estrecha entre Estados que quieren profundizar en aspectos de la Unión, respetando el marco institucional. Así, algunos Estados pueden progresar según ritmos e intereses distintos. En este contexto, los llamados grupos TREVI creados a partir de 1975 constituyen el más significativo precedente de la cooperación intergubernamental en asuntos de interior y ha sido acicate de la agenda de seguridad de las décadas siguientes. Estos grupos son el primer ejemplo de la puesta en común de estrategias y conocimientos en la lucha contra el terrorismo en el ámbito de la cooperación intergubernamental. Integrados los Ministros de Interior para luchar contra el terrorismo y coordinar la cooperación policial de toda la Comunidad en este terreno, éstos se reunían en el seno de este Grupo para tratar problemas de orden público y de terrorismo, y bajo sus auspicios se crearon varios

Será a finales de los años ochenta y sobre todo a lo largo de los años noventa, coincidiendo con una mayor presencia e intensidad del terrorismo internacional pero también con la emergencia de la ideología antiterrorista en los EEUU, cuando comienzan a configurarse los denominados “tres círculos de la represión” del terrorismo: 1) el ámbito judicial, 2) el ámbito policial, y 3) el espacio jurídico europeo²⁶⁴. En el momento en el que el terrorismo comienza a desbordar los límites territoriales del Estado y se convierte progresivamente en un fenómeno transnacional²⁶⁵, la adopción de medidas a través de estructuras de colaboración interestatal estables, hace los esfuerzos más eficaces. Es aquí donde la Unión Europea, en tanto orden combinado de integración supranacional y cooperación interestatal, se convierte poco a poco en una plataforma para progresar en la lucha contra el terrorismo²⁶⁶.

La primera mención a la lucha contra el terrorismo en un tratado de la UE aparece en el Tratado de la Unión Europea (TUE, también conocido como de Maastricht, 1992). El terrorismo es mencionado en el contexto de la cooperación policial y directamente relacionado con las líneas maestras de lo que sería el Tercer Pilar -la cooperación en asuntos de Justicia e Interior (JAI). Así, se intentaba afrontar desde una plataforma intergubernamental comunitaria las consecuencias de la supresión de fronteras que implicaba la libre circulación (Schengen) y que, a partir del Acta Única (1986), se planteara como una verdadera necesidad el establecer “medidas compensatorias” para contrarrestar el déficit de seguridad que la misma entrañaba²⁶⁷.

El tratado de Amsterdam (1997) introduce como objetivo a largo plazo el establecimiento dentro del Tercer Pilar, de un “Espacio de Seguridad, Justicia y Libertad”. Si bien habría de pasar casi una década para que dicho objetivo cristalizara en medidas e instrumentos concretos, este tratado modificó radicalmente la cooperación

grupos y subgrupos de trabajo. En aquellos momentos, las instituciones europeas quedaban al margen de este proceso, que se desarrollaba de acuerdo con las reglas de juego intergubernamentales.

²⁶⁴ Un trabajo en profundidad sobre el desarrollo de legislaciones antiterrorista en el ámbito europeo a lo largo de los ochenta se encuentra en López Garrido (1987)

²⁶⁵ Reinares (1998).

²⁶⁶ Aldecoa (2004).

²⁶⁷ A lo largo de esta década, sin ánimo de exhaustividad, se producen los siguientes instrumentos en el marco de la Unión Europea: (1) Declaración de Gómea de 1995 para reforzar la cooperación policial y judicial (2) Convención de Europol de 1995; (3) Acción Común 96/277/JAI de 22 de abril de 1996 (creación de la figura de los magistrados de enlace); (4) Acción Común 96/610/JAI 15 de Octubre de 1996 repertorio de conocimiento en la lucha contra el terrorismo (5) Acción Común 98/428/JAI 29 Junio de 1998 creación de Red Judicial Europea (6) Acción común 98/ 733/ JAI represión de participación en actividades criminales.

en el marco de los asuntos de JAI al “comunitarizar”²⁶⁸ parcialmente algunas cuestiones planteadas en el Tratado.

El consejo de Tampere (1999) supone un nuevo impulso de planificación y voluntad política en lo referente al tema de la seguridad, aunque en mucha menor medida al terrorismo. Este consejo extraordinario, convocado a propuesta española²⁶⁹, estuvo dedicado monográficamente al espacio de seguridad. En él se estableció un programa completo basado en los siguientes principios: una política de asilo e inmigración de la UE, un auténtico espacio europeo de justicia, la lucha contra la delincuencia organizada a escala de la Unión y una acción exterior más firme. Podemos decir, por tanto, que la prevención y el tratamiento del terrorismo no estaban ausentes de los distintos ámbitos de política pública de la UE antes del 11 de Septiembre.

De hecho, como hemos señalado anteriormente, a lo largo de los noventa Europa había ido desarrollando progresivamente una noción de seguridad amplia bajo la cual se iban incluyendo nuevos factores de desestabilización y amenazas al proyecto de la UE, entre las que estaba el terrorismo, siempre entendido, no obstante, como un problema interno de los Estados y por tanto una amenaza “menor” a la seguridad²⁷⁰ de la UE. Tras el 11S la comprensión del terrorismo -fundamentalmente de carácter islamista- en términos globales, se convierte en principal amenaza y prioridad política.

Es un hecho que la UE se ha desarrollado en buena medida, tal como preconizara Robert Schumann en 1950, a “golpe” de acontecimientos; a base de respuestas coyunturales que cristalizan en el largo plazo. Son muchos los Estados, las experiencias históricas y los intereses nacionales. En parte por esta razón, el antiterrorismo ha tenido una trayectoria bastante limitada en el ámbito de la multilateralidad y las políticas colectivas (no así de la bilateralidad como evidencian los grupos TREVI). “A golpe de acontecimiento” quiere decir que tanto el 11S, como el 11M y el 7J, marcan el desarrollo de nuevas fases, nuevas estrategias y nuevos debates políticos. Son momentos de solidaridad, consenso y reacción política, cuya resonancia tiene una expresión jurídica. La solidaridad democrática, como veremos a lo largo de este trabajo, se ha convertido en uno de los consensos básicos para apuntar la estrategia

²⁶⁸ Término técnico que en la jerga de la UE significa transferir al “ método comunitario” (primer pilar) un ámbito que, en el marco institucional de la Unión, se rige por el método intergubernamental.

²⁶⁹ Como tendré la ocasión de exponer en los próximos capítulos, el papel de España en el impulso de la agenda antiterrorista de la UE ha sido fundamental y permanente.

²⁷⁰ Den Boer (2003).

antiterrorista europea, especialmente después del 11M. Puede decirse que este acontecimiento modificó la estrategia global de la UE, generando una solidaridad de hecho y una inclinación hacia la armonización por parte de los Estados.

El Tratado de Ámsterdam (1999) había sentado las bases de una actuación de la Unión en materia de terrorismo, por entonces limitada a algunos Estados. Esta acción se ha intensificado en los últimos diez años llamativamente constituyéndose además en estrategia de cooperación conjunta de la UE²⁷¹. Podemos señalar, al menos, tres procesos de cambio institucional y estratégico (enormemente complejos y llenos de matices) que se desarrollan después del 11 de Septiembre. En primer lugar, la aceleración de medidas legislativas y judiciales encaminadas a fortalecer la cooperación policial y judicial en el ámbito de la UE. En segundo lugar, la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (con sus respectivas ramificaciones) como área prioritaria y autónoma de la política pública de la UE. Y, finalmente, la consolidación del nexo transatlántico en la lucha contra el terrorismo a pesar de las claras divergencias.

Como primera característica, entre los cambios habidos en el contexto posterior al 11S, habría que considerar un cambio perceptible en la lógica jurídica. La legislación se ha ido adaptando cada vez más a un paradigma de la *normalidad* frente a la *excepcionalidad* en la que se ubicaban las resoluciones judiciales en materia de terrorismo²⁷². Tras el 11S se asume que los actos terroristas no son fenómenos aislados, sino que responden a una organización y una decisión sobre determinados objetivos que, en cualquier momento, pueden ser atacados. Por tanto, la estrategia de prevención y confrontación debe tener un carácter estructural, común y conciliado con respecto a las libertades fundamentales.

La segunda característica fundamental de este proceso, es que se ha profundizado en el enfoque criminal (no militar, ni político) sobre el fenómeno terrorista. El antiterrorismo es un ámbito de la política pública con una fuerte carga retórica en los valores de la libertad y la democracia comunes a Europa. El enfoque criminal, la perspectiva penal sobre el terrorismo, se ha convertido en insignia de la

²⁷¹ Para una presentación detallada de la política pública de la UE frente al terrorismo véanse los documentos en:

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/index_es.htm

²⁷² Para una discusión de las lógicas de excepcionalidad vs. normalidad en las disposiciones para la lucha antiterrorista véase: Rosenfeld (2005) y Rodríguez-Izquierdo (2010).

agenda europea y en una especie de “valor añadido” del modo europeo de lucha antiterrorista.

La tercera característica tiene que ver con las propias limitaciones institucionales de la UE, que han determinado el modo en el que se está desarrollando la agenda. Por un lado, dadas sus dificultades institucionales para consensuar políticas públicas, el papel del *soft law*²⁷³ ha sido fundamental para la consolidación de un marco para la política antiterrorista y de seguridad, como en muchos otros ámbitos. Las estrategias se han venido generando, en buena medida, a través de la definición de líneas por la vía de declaraciones, guías o posiciones comunes que se realizan (se ejecutan) después por la vía de Convenios o Decisiones Marco²⁷⁴. En el caso de las medidas antiterroristas, la dificultad de lograr consensos absolutos entre los Estados se ha “compensado”, de alguna manera, con la casi permanente emisión de declaraciones, comunicaciones o documentación informativa sobre los aspectos más urgentes de la prevención del terrorismo.

Por otro lado, la UE como poder público frente al terrorismo tiene algunas limitaciones fundamentales. Si bien la integración es un proceso de atribución de poderes y soberanía al orden europeo para el diseño de políticas comunes, en el caso de la seguridad, su legitimidad es transmitida desde las comunidades estatales. Su margen de actuación es limitado, en primer lugar, por los objetivos que los Estados miembros le encomiendan y por los instrumentos que se le quieran atribuir. En segundo lugar, porque las propias condiciones de constitucionalidad de la UE hacen imposible acciones que limiten el régimen de libertades. En último extremo, son los Estados los suministradores únicos y soberanos de la seguridad. Tanto la lentitud de los procesos de armonización judicial en materia de terrorismo, a pesar de la insistencia retórica de la

²⁷³ En la esfera comunitaria se entiende como *soft law* las guías, las declaraciones y las opiniones que no son vinculantes pero que pueden producir efectos legales y sacar proyectos políticos adelante.

²⁷⁴ La Decisión Marco es un instrumento jurídico de la UE que se ha convertido en el mayor protagonista en la identificación del terrorismo como categoría delictiva y en la creación de sinergias y lógicas de cooperación. Se utiliza para aproximar las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. Propuesta a iniciativa de la Comisión o de un Estado miembro, debe ser adoptada por unanimidad. Vincula a los Estados miembros en cuanto a los resultados que deben alcanzarse y deja a las instancias nacionales la decisión sobre la forma y los instrumentos necesarios para alcanzarlos. La decisión se utiliza para cualquier objetivo distinto de la aproximación de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros. Es vinculante y las medidas necesarias para aplicarla a escala de la Unión Europea se adoptan en el Consejo por mayoría cualificada. La UE diseñaba en las DM “mínimos” comunes de regulación que los Estados debían incorporar para que las acciones de prevención y coordinación policial fueran efectivas. A través de estos mínimos se han generado pautas de transformación. Esta DM fue modificada en 2008 para armonizar las legislaciones internacionales en materia de prevención.

línea antiterrorista de la UE, como las reticencias de algunos Estados, que siguen siendo recelosos de perder autonomía en uno de sus espacios más esenciales (la provisión de la seguridad), son en alguna medida atribuibles a estos dos factores. Por ello, el papel y las experiencias históricas de algunos Estados en relación con el terrorismo son un elemento fundamental en el avance de la agenda.

La última característica que habría que señalar es la clara diferencia temporal entre una primera fase más política, la inmediatamente posterior al 11 de Septiembre, y una fase efectiva-técnica, a partir del 11M y 7J²⁷⁵. Los tres procesos señalados -la aceleración de medidas, la consolidación del espacio de seguridad y la cooperación transatlántica- están atravesados en buena medida por la capacidad performativa de dichos acontecimientos.

4.2.3 Medidas antiterroristas de la UE: aceleración de un proceso

Las medidas desarrolladas están enmarcadas en los citados tres círculos de la represión: la cooperación judicial, la cooperación policial y la política, y dibujan una estrategia cuyas líneas fundamentales tienen que ver con el acceso e intercambio de información, la prevención, las medidas relativas a la financiación del terrorismo (congelación de bienes, listas de personas y grupos) la persecución penal (orden de detención europea y convenio de extradición) y la respuesta (mecanismos de cooperación y protección civil)²⁷⁶.

Dentro de las primeras medidas adoptadas en el seno de la Unión, y en parte para armonizar su estrategia con la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre de 2001 definió el terrorismo como uno de los principales retos mundiales y la lucha contra el terrorismo como uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea (UE). Con la Posición Común 2001/931/PESC²⁷⁷, se establece una definición consensuada de terrorismo y una lista de personas, grupos y entidades implicados en actos de

²⁷⁵ Sobre esta especial periodización y las medidas desarrolladas en cada fase véase Aixalá (2007).

²⁷⁶ Aquí nos limitaremos a aportar algunas líneas básicas de actuación. Para trabajos más concretos sobre los cambios en la legislación antiterrorista europea después del 11S pueden consultarse en: Aixalá (2007); Álvarez Conde y González (2006); Asúa Batarrita (2008); Catalina (2006); Den Boer (2003); Rodríguez-Izquierdo (2010); Thieux (2004).

²⁷⁷ Posición común [2001/931/PESC](#) del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la aplicación de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. *Diario Oficial n° L 344 de 28/12/2001 p. 0093 – 0096*.

terrorismo a los cuales es necesario aplicar la medida de congelación preventiva de fondos en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo.

Será en 2002 cuando se apruebe la primera Decisión Marco de carácter vinculante para los Estados miembros²⁷⁸. Tiene por objeto hacer más efectiva la lucha antiterrorista y dirige a los Estados miembros hacia la adopción de las medidas necesarias para la tipificación de estos delitos que incluyen: provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo; captación y adiestramiento de terroristas; hurto o robo con agravantes, chantaje y libramiento de documentos administrativos falsos, con el fin de cometer un delito terrorista. La adopción de estas medidas plantea la modificación de los códigos penales de los Estados miembros con el fin de una armonización del modo en que se persigue el Terrorismo. Es por ello que se trata de uno de los principales y más efectivos instrumentos en la política antiterrorista desarrollado en esta década.

Las principales instituciones creadas o modificadas en este periodo están vinculadas a la configuración del espacio judicial y policial europeo. Por un lado, se crean la agencia EUROJUST²⁷⁹ para la coordinación de la actividad judicial en 2002, y

²⁷⁸ En ella se definen los actos de terrorismo como: “actos intencionados que se refieran a: a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados graves contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas. DM 474/JAI del Consejo, de 13 de Junio de 2002 relativa a la lucha contra el terrorismo. El cumplimiento de esta DM por parte de los Estados para la armonización de las respectivas legislaciones ha sido evaluado en el Informe de la Comisión, de 6 de noviembre de 2007, [[COM \(2007\) 681](#) final – Diario Oficial C 9 de 15.1.2008] y en el Informe de la Comisión, de 8 de junio de 2004, [[COM \(2004\) 409](#) final – Diario Oficial C 321 de 28.12.2004].

²⁷⁹ Decisión Marco del Consejo 2002/187/JAI por la que se crea EUROJUST, desarrollada con la intención de fortalecer la lucha contra el crimen. Es una institución de coordinación judicial entre los Estados miembros. Su puesta en marcha fue decidida en el Consejo de Tampere (1999) pero tal y como refleja su presentación pública en la web de la UE, “los ataques del 11S, han evidenciado que el terrorismo no es un fenómeno limitado a los Estados nacionales y que la lucha contra el terrorismo debe ser coordinada en el amplio contexto internacional”. Es un órgano con personalidad jurídica propia en la que hay representantes (jueces, fiscales y policías) de los Estados miembros. Es competente para los tipos de delincuencia e infracciones que cubre Europol. En su seno se han creado equipos de investigación conjunta (bastante efectivos en la lucha contra el terrorismo). Mantiene relaciones privilegiadas con la Red Judicial Europea y con la oficina de EUROPOL.

la Orden De Detención Europea²⁸⁰ en 2004 como mecanismo facilitador de los procesos de cooperación judicial. Junto con la Red Judicial Europea constituyen las instituciones centrales del espacio judicial europeo. Por otro lado, se intensifica la actividad y, sobre todo, las competencias policiales de la agencia EUROPOL²⁸¹ que pasa a tener un mandato expreso y prioritario en relación a la lucha antiterrorista²⁸².

4.2.4 El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y la Estrategia Europea de Seguridad

Este proceso de aceleración de cambios y medidas en la lucha contra el terrorismo ha tenido como principal consecuencia la consolidación de uno de los pilares fundamentales de la UE: el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia²⁸³ previsto desde finales de los noventa, pero que está en la base de la cooperación política de la UE casi desde sus inicios. El ELSJ se inicia a partir de un área de cooperación intergubernamental que usaba el aparato institucional de la UE y las comunidades para asuntos de JAI. La intensificación de la cooperación en esta materia ha conducido a una progresiva "comunitarización" de muchos de los temas hasta entonces propios de la relación intergubernamental. En el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior, se abordan cuestiones como el asilo y la inmigración, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la política de visados y la gestión de las fronteras externas de la UE, así

²⁸⁰ Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de Junio relativa a la Orden de Detención Europea y a los procedimientos de entrega. Fue decidida también en Tampere (1999) con el fin facilitar el "reconocimiento" mutuo de las resoluciones judiciales, convertida desde entonces en piedra angular del espacio judicial europeo. Tiene por objeto sustituir el sistema de extradición, obligando a los Estados a reconocer *ipso facto* la solicitud de entrega formulada por una autoridad judicial en otro estado miembro. Entra en vigor el 1 de Abril de 2004.

²⁸¹ EUROPOL es una agencia europea para el mantenimiento del orden público, contemplada en el TUE (1992). Sin embargo, no será hasta 1998 cuando la Convención de Europol será ratificada por todos los miembros. Comienza su actividad en Junio de 1999 siendo sus prioridades la lucha contra el fraude y el crimen. En Enero de 2002 (tras los episodio del 11S su mandato se extiende a formas y actividades de criminalidad internacional. Facilita el intercambio de información entre los Estados miembros, proporciona análisis operativos y apoyo a las operaciones en los Estados, proporciona conocimiento y experiencia y apoyo para operaciones, y genera informes estratégicos sobre la base de los servicios de inteligencia de los Estados miembros. No tiene poderes ejecutivos y necesitan la aprobación de las autoridades estatales. La lucha contra el terrorismo constituye una de sus labores prioritarias. Estrechamente vinculada a esta agencia se crea CEPOL en 2005. La Escuela Europea de Policía reúne a los funcionarios policiales de rango superior con el objetivo de fomentar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento de la seguridad y el orden públicos. Creada en 2005 como agencia de la Unión Europea (UE) (por [Decisión del Consejo 2005/681/JAI de 20 de septiembre de 2005](#)).

²⁸² Sin perjuicio de las instituciones ya existentes y que son fundamentales en la estrategia antiterrorista, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1998).

²⁸³ En adelante ELSJ.

como la colaboración policial, judicial y aduanera. En esta década ha dejado de ser el Tercer Pilar para convertirse (a través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) en un área de prioritaria y autónoma de la política de la UE²⁸⁴ y consolidándose como un verdadero espacio europeo de "Libertad, Seguridad y Justicia" a través de los programas de Tampere (1999-2004), La Haya (2004-2009) y Estocolmo (2010-2014).

La seguridad en el marco del ELSJ tiene una clara dimensión exterior que es visible a través de la institucionalización de la política exterior europea PESC (política exterior y de seguridad común) y PESCD (política de seguridad y defensa)²⁸⁵ y una dimensión interior que desde el 11M y el 7J ha ido cobrando una importancia progresiva hasta desembocar en la Estrategia de Seguridad Interior (2010). El Programa de la Haya, diseñado en 2004²⁸⁶, impulsa la consolidación del espacio de seguridad e insiste en el carácter prioritario que el mismo tiene para la UE.

En 2005, justo después de los atentados en Madrid, el Consejo Europeo, en el marco de este proceso de consolidación, aprobó un ambicioso plan de acción para luchar contra el terrorismo y creó la figura del Coordinador Europeo en la Lucha contra el Terrorismo. Dependiente del Secretario General de la PESD, Javier Solana, Gijs de Vries asume esta responsabilidad abriendo una etapa de mayor efectividad y de implementación de las medidas desarrolladas después del 11S.

Dentro del espacio de seguridad, el desarrollo de las estrategias de seguridad y antiterrorismo, aparecen como ámbitos prioritarios del espacio de seguridad. El Consejo

²⁸⁴ Para un estudio en profundidad de la dinamización de espacio de seguridad en los últimos años, véase: Argomaniz y Bermejo (2010).

²⁸⁵ Según los propios textos de la UE, la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea incluye la definición progresiva de una política de defensa común que podría conducir, llegado el momento, a una defensa común. La política europea de seguridad y defensa (PESD) tiene por objetivo permitir a la Unión desarrollar sus capacidades civiles y militares de gestión de las crisis y de prevención de los conflictos a escala internacional. De este modo, contribuye al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. La PESD, que no implica la creación de un ejército europeo, evoluciona de manera compatible y coordinada con la OTAN. Fuente: http://europa.eu/scadplus/glossary/european_security_defence_policy_es.htm

²⁸⁶ Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, «Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia» [COM (2005) 184 final – Diario Oficial C 236 de 24.9.2005]. Programa plurianual (2005-2009) de enorme relevancia. Incluye asuntos como el abandono de la unanimidad para temas clave del título IV del Tratado constitucional. Se establecen 10 objetivos estratégicos de gran implicación para la lucha contra el Terrorismo: la necesidad de una respuesta global, maximización del impacto positivo (integración) de la inmigración, control de fronteras y visados, privacidad y seguridad del intercambio de información, cooperación en justicia penal etc.

Europeo de Junio de 2004, en línea con la Declaración de 25 de marzo, adoptada tras los atentados del 11-M en Madrid (que instauró el principio de solidaridad por el que un ataque terrorista contra un país es un ataque contra toda la Unión), aprobó el Plan de Acción de la UE para la lucha contra el terrorismo que plantea un enfoque integrado, atendiendo no sólo la represión del fenómeno, sino también su prevención o la gestión de las consecuencias de un ataque. El plan ha reforzado el marco de seguridad existente que se concretaba en las diversas Decisiones Marco y Decisiones previas²⁸⁷, con un incremento del papel de Eurojust, EUROPOL, del Coordinador antiterrorista europeo y del SITCEN²⁸⁸, y con medidas para una mejor asistencia a las víctimas y un mejor control del almacenamiento y transporte de explosivos.

El Tratado de Lisboa (2007) supone un nuevo impulso a este proceso en la medida en que contempla cambios significativos en el marco jurídico inicial (del sistema de pilares) al poner en el mismo plano que el resto de las políticas, las relativas a seguridad y además, añade la proyección de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Lisboa hace desaparecer el sistema de pilares y consolida un ordenamiento jurídico, político e institucional único. En el ámbito de la de la lucha contra el terrorismo, revela una conciencia mayor de la necesidad de esfuerzos.

En el proceso de consolidación del ELSJ a lo largo de ésta década, la Estrategia de Seguridad Europea (2003) ha sido uno de los productos más claros de respuesta de la UE a lo que ha definido como sus principales amenazas. El terrorismo aparece en ella como un peligro exterior de naturaleza prioritaria, se establecen objetivos estratégicos y las principales implicaciones para Europa, ya que lleva adjunto su respectivo plan de acción pero, fundamentalmente, este documento representa una reivindicación de la UE en su papel como actor global.

Uno de los aspectos más relevantes es la emergencia de un planteamiento distinto al de muchos documentos en el contexto inmediatamente posterior al 11S. En esta estrategia, cuyo lema es “una Europa más segura en un mundo mejor”, aparece claramente reflejada una concepción más amplia de seguridad -la seguridad humana- y de las posibles causas y factores que están en la base de la amenaza del terrorismo²⁸⁹.

²⁸⁷ Como por ejemplo, las relativas a la Orden Europea de Detención y Entrega –que sustituye al procedimiento de extradición entre estados miembros-, a la armonización del delito de terrorismo, la creación de Equipos Conjuntos de Investigación, las medidas adoptadas para perseguir la financiación del terrorismo o la elaboración de una lista de grupos, personas y entidades terroristas.

²⁸⁸ Organismo Europeo de Inteligencia.

²⁸⁹ Hay que insistir en que la mayoría de los documentos que se recogen aquí, así como las medidas señaladas, están diseñados para afrontar no sólo el fenómeno terrorista, sino un amplio conjunto de

Aquí se puede percibir cómo existe un “estilo europeo”²⁹⁰ de combatir el terrorismo que se considera basado en el enfoque criminal y en el respeto al marco de las Naciones Unidas y a los derechos humanos. Un factor fundamental en este énfasis en el estilo europeo tiene que ver posiblemente con los debates internacionales y las masivas manifestaciones mundiales ocurridas en relación con la guerra de Irak en Febrero de 2003²⁹¹. La nueva estrategia de seguridad plantea el “multilateralismo eficaz” y la garantía de la seguridad en los países vecinos como *motto* de la política exterior²⁹².

En el periodo que analizamos -en el camino de proceso de reforma del sistema de pilares-, el 11S y el 11M evidencian para la UE la existencia de una amenaza mayor y más potente que las particulares del terrorismo a escala estatal. Al Qaeda se convierte en un problema común y su presencia satura el umbral de lo tolerable hasta la fecha, incluso para aquellos Estados que hasta entonces habían sido reticentes por distintas razones e intereses. Lo más característico de esta última fase será el replanteamiento de los términos de la estrategia; ya no se trata de una amenaza exterior sino de una amenaza interior. Y su resultado más visible será la mencionada Estrategia de Seguridad Interior.

En todo caso, las estrategias de seguridad y antiterrorismo europeas, han apostado por una definición internacional y común de terrorismo y han intentado adaptar sus recursos a las nuevas amenazas. En consecuencia en esta década se ha avanzado enormemente en la cooperación policial y judicial²⁹³, y en el intercambio de información, siendo su objetivo combatir el terrorismo “con la ley en la mano” y en el marco del Estado de Derecho. La aproximación (europea) a la lucha contra el terrorismo ha singularizado a la Unión en la escena internacional. Hay un *European way* en la lucha antiterrorista y la Estrategia Europea de Lucha contra el Terrorismo, aprobada en

factores que se consideran amenazas y que son planteados en términos de criminalidad. Es decir, la seguridad no está sólo vinculada con el terrorismo aunque siempre o casi siempre se señala el terrorismo como prioridad y el 11S como acontecimiento fundamental.

²⁹⁰ Un *European way* de luchar contra el terrorismo. Aixalá (2007).

²⁹¹ No hablaría de “cambio” de estrategia pues la UE no ha optado por la vía militar en relación con el terrorismo, pero sí de un énfasis – políticamente calculado – en distanciarse de la línea norteamericana.

²⁹² La UE ha empleado en los últimos años una buena cantidad de recursos en la investigación sobre temas de seguridad, no sólo con el fin de mejorar técnicamente la efectividad de sus estrategias sino, en buena medida, para informar sus políticas públicas. Véase: HSSG, Barcelona Report of the Security Group on Europe's security capabilities. 2004. "A human security Doctrine for Europe." ed. HSSG. Barcelona: LSE HSSG y HSSG, Human security Study Group 2007. "The Madrid Report of the Human Security Study Group comprising a Proposal and Background Report." In *global security*, ed. LSE. Madrid: Centre for the Study of Global Governance LSE.

²⁹³ Un estudio extenso de la cooperación policial y judicial en el marco de la UE en este periodo véase: Guild y Geyer (2008).

diciembre de 2005, responde a este planteamiento²⁹⁴. En esta labor, el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parecen haber jugado un papel fundamental²⁹⁵.

No hay duda de que el camino que va desde la Estrategia de Seguridad hasta la Estrategia de Seguridad Interior (2010) está marcado, entre otras, cosas por la emergencia de voces críticas, por un lado, con los excesos de las políticas antiterroristas tanto en los EEUU como en la propia Europa²⁹⁶, y por un claro cuestionamiento de la estrategia militar de los EEUU y de la coalición de las Azores. Esto es relevante en la medida en que gran parte del discurso y de la estrategia de la UE hoy, y de algunos Estados en particular, pasa por enfatizar permanentemente dos aspectos: 1) el marco del Estado de Derecho, los límites legales de la política antiterrorista y el respeto escrupuloso a los derechos y libertades; y 2) la creación de comisiones, relatores y agencias para velar por el respeto a lo anterior.

Tal y como lo plantea Gijs de Vries en 2006: “la lección es simple: la libertad es más fuerte que el miedo. Promovamos estas libertades, estos derechos y libertades, que constituyen el auténtico corazón de nuestra identidad. En la lucha contra el terrorismo, nuestros valores son nuestra mejor defensa” (2006:11)²⁹⁷. Por tanto, la estrategia europea ha sido la de adherirse a las normas del derecho internacional y modificarlas hasta el límite de la “tolerancia cero”.

4. 3 Recapitulando: Deslegitimación, relegitimación y “Spill Over”

Lo narrado en estas páginas presenta algunas ideas que deseo subrayar a modo de sumario y que abren las preguntas centrales que se abordarán en capítulos sucesivos. Los cambios jurídicos e institucionales pueden ser entendidos como expresión política. Se han expuesto en “trazo grueso” algunas líneas fundamentales en el tratamiento del terrorismo en los últimos quince años con un énfasis especial en los cambios

²⁹⁴ Consejo, 30 Noviembre de 2005: Estrategia Europea antiterrorista.

²⁹⁵ Es muy llamativo que este debate, como en general la elaboración de las políticas de seguridad y antiterrorismo, se ha situado bastante lejos de la ciudadanía. Muchas de las medidas adoptadas en los quince últimos años, se han elaborado a “espaldas” de la opinión pública a pesar de que nunca antes había tenido tanta resonancia el discurso del terrorismo. Y sin embargo se puede decir que el gran público parece satisfecho con las mismas.

²⁹⁶ Y en otros países como Australia, Colombia o Rusia, por ejemplo.

²⁹⁷ Guittiet (2006), señala cómo este “estilo particular” de Europa en la lucha antiterrorista -el enmarque de la amenaza terrorista en términos de “amenaza a la idea de Europa” y la idea de “solidaridad democrática”- ha sido fundamental en los últimos diez años en la configuración de una identidad europea, históricamente deficitaria.

acontecidos después del 11S y del ciclo de violencia posterior. Estas estrategias son claramente el resultado de cambios geopolíticos más amplios y mucho más profundos, enraizados en el final de la guerra fría, así como de transformaciones estructurales y culturales en el contexto del cambio global.

Sin embargo, a la luz de los análisis disponibles y de la propia información contenida en la mayoría de los documentos públicos a través de los cuales se configuran las estrategias sobre las que descansa la lucha antiterrorista en lo que ahora podemos llamar contexto global, se puede argumentar que los acontecimientos del 11 de Septiembre, y más en concreto para el caso de Europa el 11M, han acelerado y contribuido a cristalizar este marco.

- En primer lugar la construcción social de estos acontecimientos, la reacción política y la cristalización de esta reacción en la forma jurídica e institucional, forman parte de un mismo proceso, un proceso de deslegitimación moral y política de la violencia, un proceso de relegitimación del papel de los Estados y de las instancias supranacionales en la represión del terrorismo y en definitiva un nuevo marco ideológico y político a través del cual se regula, se gestiona y en último caso, se combate la violencia.

- En segundo lugar, la legitimidad de las políticas represivas de los Estados y las organizaciones internacionales ha rebasado el ámbito del terrorismo generando un contexto de securitización de la sociedad global que pone en riesgo las libertades públicas como algunos autores señalan (Bigo y Tsoukala, 2008); Recasens, (2007).

- En tercer lugar, hay también un efecto “spill over”, o de desbordamiento, de este conjunto de cambios, en la medida en que, si bien estas estrategias y cambios institucionales se han desarrollado principalmente para gestionar fenómenos internacionales —el terrorismo islamista entre otros— sus efectos son perceptibles en el tratamiento de la inmigración ilegal, de la delincuencia organizada y sobre otros tipos de violencia, como ilustra el caso analizado en este trabajo y sobre el que vamos a profundizar en los próximos capítulos.

- En cuarto lugar, este efecto también es visible en el modo en que de lo global se pasa al ámbito de los Estados. No se puede olvidar que los Estados siguen siendo los principales proveedores de seguridad y en este sentido, la política antiterrorista es una de las áreas de política pública más desarrollada en muchos países en los últimos años.

- Finalmente, hay que señalar que no todo en la política global contra el terrorismo es vertical (*top down*). Más bien es un fenómeno complejo en virtud del cual,

a menudo, las estrategias y los intereses de determinados Estados han presionado las agendas de las organizaciones internacionales, como es el caso de España. Por ello es interesante observar cómo ha permeado este contexto global en los contextos domésticos y en qué medida lo local ha influido también en lo global.

Lo narrado en este capítulo constituye un contexto real, un contexto dinámico, cambiante y en proceso de evolución. Lo que se dice y se piensa sobre la violencia -la ideología del contrterrorismo- y lo que se hace respecto de la violencia hoy, es ampliamente consensuado en un entorno que, dada la naturaleza de la sociedad contemporánea, es global.

Este contexto ideológico-discursivo pero también institucional, constituye un marco de oportunidades políticas que, bien podemos afirmar, son globales; unas oportunidades discursivas (que determinan lo que se puede decir y lo que no) pero también unas oportunidades materiales para la acción violenta. En tanto el terrorismo y el antiterrorismo son globales y los factores geoestratégicos obtienen un papel preponderante ¿en qué medida afecta esto a “viejas” violencias? ¿Cuáles son las posibilidades de acción de quien cada vez tiene un menor y más difícil espacio para la justificación de la misma?

Estas complejas preguntas serán abordadas en los próximos capítulos a través del análisis de cuatro instancias de deslegitimación del terrorismo y sus vínculos con las dinámicas globales señaladas: (1) la política antiterrorista y de seguridad española, antes y después de 11S-11M; (2) las percepciones de los actores centrales del conflicto respecto a la deslegitimación de la violencia y la relegitimación de la política antiterrorista; (3) las evaluaciones y percepciones sobre el 11M como acontecimiento transformador; y (4) la reconfiguración de los actores y sus estrategias a lo largo de la última década.

PARTE III: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO GLOBAL

CAPÍTULO 5
LA POLÍTICA ANTITERRORISTA EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA
CONTRA EL TERROR

"Todo aparato del Estado, sea represivo o ideológico, "funciona" a la vez, mediante la violencia y la ideología." (Louis Althusser, 1971: 12).

Las políticas de seguridad en relación con el terrorismo en el País Vasco se han revelado, no sólo como un condicionante fundamental de las posibilidades de la violencia sino como un indicador de actitudes de los distintos gobiernos hacia la misma, reflejando en buena medida demandas o percepciones ciudadanas. Esta sección presenta una descripción de las continuidades y cambios en las estrategias fundamentales de las políticas antiterroristas en el periodo 1998-2010 con un doble propósito. En primer lugar, con el fin de convertir dichas políticas en una dimensión fundamental para dar cuenta de la transformación en los niveles de violencia tolerada; y en segundo lugar, para argumentar la idea de que dicha transformación constituye una modificación, a su vez, de las oportunidades políticas para el uso de la violencia, en la medida en que entraña un aumento de la sofisticación legal para su represión.

Como tuvimos la ocasión de exponer en el capítulo teórico, los estudios clásicos del conflicto y de la acción colectiva han abordado las condiciones en las que se produce la violencia. Se ha convenido (Della Porta 1995) que habría que considerar factores macro, vinculados al sistema político, meso, relativos a la configuración y recursos de las organizaciones, y finalmente, elementos de carácter micro, en relación con las motivaciones individuales. Comenzando por los factores de naturaleza sistémica –aspectos institucionales o culturales que configuran el contexto en el que operan las organizaciones y los actores- podemos decir que, en la represión de la protesta, los elementos constitucionales, los marcos ideológicos, las estructuras policiales y las configuraciones de poder son fundamentales. Así, examinar las políticas de seguridad y antiterroristas en el caso concreto del conflicto en el País Vasco permite indicar en qué

medida dicha represión y sus transformaciones generan condiciones específicas para determinados tipos de violencia.

Como he venido argumentando, la violencia política puede comprenderse como una radicalización de los repertorios de la protesta, que se transforman en la interacción con los actores y con las condiciones estructurales del entorno. Las sociedades pasan por ciclos de protesta en los cuales se producen dichos procesos de radicalización y en los que, como he ilustrado al recorrer la evolución de la violencia en el caso del País Vasco, los distintos actores implicados (Estado, organizaciones político-militares, coaliciones y partidos, etc.) transforman, adaptan e innovan sus estrategias de confrontación. La interacción entre unos actores y otros -entre el Estado y ETA-, pero también entre organizaciones pacifistas y organizaciones del MLNV, o entre organizaciones constitucionalistas y el Estado, ha sido un proceso fundamental a la hora de definir las estrategias de todos ellos.

Por lo que respecta al uso de la violencia, es la relación entre ETA y el Estado (la represión policial y judicial del terrorismo) la dimensión más relevante. Siguiendo los análisis de Della Porta, (1996), podemos comprobar cómo el Estado ha adaptado sus estrategias y, en esa interacción, también ETA ha probado tácticas nuevas y “recursos para la violencia” inéditos. Esta perspectiva nos permite entender la evolución de ETA modificando sus estrategias en función de variables como la efectividad, la legitimidad pero también respondiendo a lo policial y judicialmente aceptable.

Hay consenso en la literatura en asumir que el mantenimiento del orden público y la represión policial de la violencia son una condición fundamental para el desarrollo de la misma (Della Porta, 1995; Marx, 1998). Por esta razón, abordaremos aspectos de la organización de las FCSE, de las estructuras de seguridad interna y de las agencias que intervienen en la represión de la violencia (la política antiterrorista). Algunos autores han señalado también el papel interviniente de las características constitucionales del sistema (Kitschelt, 1986:61-64) como parte fundamental de la represión policial y judicial. Es decir, todos aquellos factores institucionales y legislativos que afecten a la represión policial. Kriesi (1999:295), por su parte, considera las estrategias nacionales de resolución de conflictos. Con esta idea, que a la postre toma en cuenta los aspectos más culturales de la represión de la violencia, señala cómo las concepciones de la democracia, de la ciudadanía o de los propios conflictos

definen en buena medida las estrategias adoptadas por el Estado para el manejo de la misma²⁹⁸.

Tanto lo institucional como lo cultural parecen, por tanto, afectar a las “oportunidades estables” y a las constricciones del modo en que se reprime la protesta. Pero incluso las oportunidades estables cambian, y si los procesos de socialización reproducen las estrategias nacionales, los eventos traumáticos pueden estimular procesos de aprendizaje (Della Porta, 2008: 74). Tanto en Italia como en Alemania, las experiencias traumáticas tras la escalada del terrorismo forzaron la institucionalización de la protesta y el desarrollo de estrategias políticas tolerantes (Della Porta, 1995). En nuestro caso, podremos ver cómo eventos traumáticos (los episodios de Ermua, en 1996 y el 11-M) modificaron los umbrales de violencia tolerada e impulsaron políticas de represión policial y judicial mucho más restrictivas, alterando así las oportunidades estables.

También hay consenso en la literatura en asumir que la configuración del poder político prevalente en cada coyuntura (la alineación de las élites políticas) es un factor fundamental para la adopción de distintas estrategias gubernamentales, en la medida en que la violencia genera una polarización coaliciones de ley y orden frente a coaliciones de derechos civiles (Della Porta, 1995). Es decir, si bien el gobierno es fundamental en la definición de la política de seguridad policial, otros actores también juegan un papel importante (partidos políticos, grupos de interés, organizaciones de movimiento o los medios de comunicación). El hecho de que las políticas de seguridad sean públicamente debatidas es signo de tolerancia democrática y, por otro lado, el recurso a políticas duras es signo de presión de coaliciones de ley y orden. En definitiva, las hipótesis que se manejan en el ámbito de los movimientos sociales acerca del papel de la represión policial de la violencia sobre sus tácticas y repertorios son principalmente: 1) que la reducción de la represión facilita el desarrollo del movimiento social, y 2) altos grados de represión se asocian a “radicalización” y escaladas de violencia²⁹⁹.

²⁹⁸ Della Porta (2008) señala cómo una definición de la democracia alemana como militante (protección del enemigo interno), unas justificaciones de legislación y represión policial fuerte y, por otro lado, unas culturas políticas no plenamente consolidadas reflejaron estilos duros de represión.

²⁹⁹ Entre las más clásicas hipótesis, Skocpol (1979) prueba en qué medida las revoluciones sociales se producen durante las crisis del Estado o cuando éste pierde el control sobre su capacidad de reprimir. McAdam (1982), por su parte, plantea cómo la reducción de la represión fue factor clave en la emergencia del movimiento de derechos civiles en EEUU. A su vez, Goldstein (1983:340) sugiere cómo en aquéllos países que en el siglo XIX reprimieron las consecuencias de la modernización, el movimiento obrero y el disenso cosecharon movimientos de oposición tan brutales, rígidos y obstinados como el

Pero esto no siempre es así. Para Della Porta (1995), dar cuenta de la compleja relación entre represión y movimientos sociales supone constatar que la represión afecta tanto a los costes esperados, como a los beneficios calculados de la acción colectiva. Por un lado, representa el coste más alto al que se enfrentan los movimientos sociales (Tilly, 1978:100) y por otro lado, la forma de la represión del Estado influye en los propios agravios de los movimientos, contribuyendo a crear o a transformar “marcos de injusticia” (Gamson, 1992). El caso de los GAL para el MLNV es significativo en este sentido. En conclusión, los repertorios policiales y de violencia evolucionan a través de procesos de adaptación e innovación recíproca

Es la hipótesis de este trabajo que eventos traumáticos han transformado aspectos de las oportunidades estables al modificar el umbral de violencia socialmente tolerado. Pero, además, se considera que dicha transformación se ha producido en la relación entre el contexto doméstico y los cambios en el contexto global contribuyendo así a generar “oportunidades globales”. Para evaluar dicha transformación en las oportunidades estructurales o estables del sistema es necesario revisar las políticas antiterroristas y de seguridad desarrolladas en el marco de la *guerra contra el terror* en la última década.

A partir de estos presupuestos teóricos, este capítulo desarrollará la descripción de las continuidades y cambios en algunos de los elementos estables de la oportunidad política, así como en los más volátiles. Por un lado, se presentará la configuración de los consensos en torno a la política antiterrorista, los consensos básicos, las nuevas justificaciones y la alineación de las élites en torno a la política antiterrorista. En segundo lugar, se examinarán los cambios institucionales: los de naturaleza constitucional/ legal y los que afectan a la configuración de la seguridad interior (la estructura policial) y a la cooperación antiterrorista internacional. Finalmente, se evaluará el impacto de dichos cambios sobre la organización ETA y sobre el MLNV. Ello nos permitirá hablar de oportunidades políticas en la medida en que las oportunidades lo son para actores concretos. El texto estará jalonado de comentarios sobre una dimensión concreta: la internacional; sobre el modo en que los factores internacionales han transformado las oportunidades estables del sistema con el fin de establecer en qué medida podemos hablar del impacto de dicha dimensión.

Estado. Finalmente, Kitsechlet (1985:302) plantea que las prácticas de culturas políticas no liberales empujan a los movimientos a adoptar estrategias antagónicas y confrontacionales.

Al finalizar el capítulo tercero tuve la ocasión de presentar cómo el periodo 1996-1998 estuvo marcado, en términos de violencia, por una intensificación de la actividad de ETA que, al transformar parte de su estrategia, había iniciado una campaña de acoso a cargos políticos electos de los dos partidos mayoritarios (PP- PSOE), así como de personalidades del mundo de la cultura y del periodismo. Aquella campaña de secuestros y atentados fue apuntalada, además, con una intensificación de la violencia callejera que, si bien no era nueva, sí se consolidaría a partir de este momento como una vía de acción de “baja intensidad” pero de considerable impacto en la vida social y política en el País Vasco.

Junto con este incremento de la violencia³⁰⁰ pudimos señalar una creciente movilización social contra ETA a través de las acciones pacifistas de la coordinadora Gesto por la paz y, por parte del Estado, una creciente eficacia y cooperación con Francia que condujo desde 1992 a estrechar el cerco a la organización ETA. La liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en julio de 1997 del cautiverio más largo conocido hasta aquella fecha (532 días) constituyó un gran éxito policial pero fue seguido de uno de los episodios más negros de la historia de ETA: el secuestro y ejecución del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Como ya he señalado, estos acontecimientos, episodios transformadores en el sentido conferido por W. Sewell (2006) desataron una ola de indignación social nunca antes percibida, que se expresó en numerosas y masivas manifestaciones de rechazo a ETA y al MLNV. Esta movilización, que cristalizaría como el “espíritu de Ermua”, hará emerger además, una demanda hacia el Estado de políticas de seguridad y antiterrorismo mucho más duras y represivas, no sólo con el terrorismo y la violencia, sino con el marco de “comprensión” que gira en torno a la misma. Así, podemos hablar a partir de 1998 de la progresiva consolidación de algunas dimensiones de la política antiterrorista que antes sólo se podían atisbar.

5.1 Dimensión cultural: Justificaciones y consensos

"Lo políticamente correcto, en un momento dado, suele ser siempre lo políticamente incorrecto en momentos precedentes (...) si en el año 1996 algunos hubiésemos avanzado en la ilegalización de Batasuna, teniendo la

³⁰⁰ Los niveles de violencia, cuantificados en número de atentados y letalidad (bajas) nunca tuvieron el impacto de los años ochenta. Sin embargo, la amenaza y la posibilidad de convertirse en víctima de ETA afectaba a un mayor y más diverso número de personas.

certeza moral de que había que hacerlo, porque Batasuna era ETA, probablemente hubiese sido una decisión políticamente incorrecta. Pero al final, esa decisión se acabó transformando en lo políticamente correcto.”
(Jaime Mayor Oreja, ex Ministro del Interior -1996/2000-, 2006: 61 cit en Garzón, 2006)

Las políticas gubernamentales están afectadas por la lucha simbólica que se genera en diferentes arenas públicas entre la ley y el orden y la defensa de los derechos civiles y por el establecimiento de límites entre la seguridad y libertad. Della Porta (1995) señala cómo en Italia y Alemania en los años setenta, la configuración de coaliciones opuestas por la defensa del orden (que reclaman medidas antiterroristas) y las defensoras de derechos civiles constituyó uno de los factores determinantes de la configuración de oportunidades políticas para la radicalización de la violencia. Ambas coaliciones usaban distintos medios para exponer sus marcos sobre formas legítimas de protesta y mecanismos aceptables de represión política. La acción de unos y otros afectaría, en último caso, tanto a los movimientos sociales como a la acción del propio Estado.

La violencia es un fenómeno que claramente polariza el debate público sobre el modo de manejarla. Por ello, uno de los retos fundamentales está en comprender el papel de las narrativas emergentes sobre terrorismo y antiterrorismo en los últimos años o en qué medida se han generado consensos sobre la ley y el orden y sobre la política antiterrorista a aplicar. En el caso que analizamos, parece bastante claro que tanto el propio desarrollo de la violencia o la percepción social de hartazgo, como el mismo contexto internacional, han abonado el terreno para políticas de ley y orden: más duras, más represivas, y más cerradas para la acción violenta, pero también para la acción política. El modo en que se logra que los consensos o las narrativas hegemónicas se implanten en el discurso público produciendo efectos institucionales constituye oportunidades del sistema para la radicalización y la violencia, como vimos en el capítulo tercero, pero también puede contribuir para su des-radicalización y para su eventual desmovilización.

El acuerdo logrado entre las élites políticas a finales de los años noventa, en concreto a partir del fracaso de la tregua del Proceso de Lizarra, muestra de alguna forma esta idea. Ha habido disenso y conflicto en el debate político cotidiano y, de alguna manera, el enfrentamiento sobre la política antiterrorista ha sido constante en la vida parlamentaria y mediática española. Además, a partir de 1998, la configuración de

una “política de bloques” en el marco del conflicto político entre partidos nacionalistas y partidos de ámbito estatal ha tenido momentos de altísima crispación, sobre todo a lo largo de la segunda legislatura del PP (2000-2004), que sólo se matizarían con la llegada del PSOE al gobierno en 2004.

Con todo, si algo evidencia el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo (conocido como Pacto Antiterrorista) de 2000, suscrito entre los dos partidos mayoritarios de ámbito estatal, es que las políticas antiterroristas gozarán a partir de entonces de una legitimación que ha dado forma al contexto institucional en el que tiene lugar la llamada “lucha antiterrorista”. Un consenso que se ha materializado en la última década en la creación y transformación de un amplio conjunto de medidas legales e institucionales que han otorgado a las estrategias antiterroristas del Estado una altísima eficacia y altas dosis de aceptación y respaldo político y social.

Las grandes líneas de consenso consolidadas hasta 1998 estaban recogidas, como vimos, en los pactos de Ajuria Enea y de Madrid. Unos documentos que recogían un amplio acuerdo de todos los partidos del arco parlamentario (a excepción de HB), y entre cuyas líneas maestras estaba la aceptación del marco constitucional, el respaldo a las FCSE y la necesidad de potenciar la acción antiterrorista de los gobiernos de turno. Dicho consenso, sin embargo, hacía tiempo que se había roto por diferentes razones, y a finales de los noventa, en la coyuntura creada en torno a la tregua de 1998 y el Pacto de Lizarra, el enfrentamiento entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas era manifiesto³⁰¹.

No obstante, entre los partidos mayoritarios PP-PSOE, con un claro apoyo del movimiento “constitucionalista” y de las organizaciones de víctimas del terrorismo³⁰², pero también de la opinión pública española, surgirá un acuerdo básico sobre la necesidad de potenciar una política antiterrorista que llamaremos en adelante de “tolerancia cero”³⁰³.

³⁰¹ El momento de máxima expresión de este enfrentamiento llegaría en las elecciones vascas de 2001. Así es percibido por la mayoría de los actores. Véase: “La Pelota Vasca: la piel contra la piedra.” Director, Julio Medem. España: Alicia Produce, SL. 2003.

³⁰² Un total de 14 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo se adhirieron en diciembre de 2002 a la demanda de ilegalización de Batasuna, declarando ante notario cómo “Batasuna era la prolongación del terrorismo de ETA en la vida cotidiana de sus representados” (Michavila, 2003: 11).

³⁰³ Si tenemos en cuenta las actitudes de los españoles reflejadas en los estudios periódicos del CIS sobre los temas de terrorismo, tenemos que señalar, en primer lugar, que independientemente de la coyuntura, el terrorismo junto con la inseguridad ciudadana se sitúan desde hace treinta años entre los cinco primeros problemas percibidos por los españoles. A partir de aquí, consultados algunos estudios específicos [barómetros: 2220 Julio de 1996, 2400 de Octubre 2000; 2436 de Septiembre de 2001; 2466 de Septiembre de 2002; 2477 de Enero de 2003; 2562 de abril de 2004; 2481 de abril de 2006] podemos

5.1.1 Nuevas líneas de consenso en la lucha antiterrorista

El asentamiento de algunas líneas de consenso que hasta entonces no se habían expuesto ni acordado de una manera tan clara y, sobre todo, con tanta resonancia en el debate público, se produce en relación directa con los acontecimientos de Ermua (1996) y la tregua de 1998, pero dejando claramente fuera de dichos acuerdos a las fuerzas nacionalistas y a algunos partidos minoritarios de ámbito estatal³⁰⁴.

Podemos señalar algunas de las fuentes de este consenso:

En primer lugar, y de una manera difusa, está la corriente ideológica que emerge en el ámbito penal a lo largo de los años noventa, y que plantea un derecho penal simbólico junto con el resurgimiento del punitivismo. En el extremo de esta corriente estaría la doctrina del llamado Derecho Penal del Enemigo que algunos autores ven ya presente en el CP de 1995 (Cancio, 2002; Tenorio, 2007).

En segundo lugar y de una manera más específica, hay que evidenciar la emergencia de una teoría jurídica que comienza a ser visible a partir del trabajo del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien, a través de sus investigaciones judiciales, primero a los GAL y después a la actividad de ETA, venía desarrollando teorías jurídicas que planteaban la idea de que el MLNV- y ETA eran prácticamente lo mismo: un entramado de organizaciones con vínculos orgánicos y que se configuraba en círculos concéntricos, en un complejo político-militar orientado a fines políticos por medios violentos (Garzón, 1997; 2006). Esta constatación, que era de sobra conocida, pero que nunca había sido planteada en términos penales (Domínguez, 2006), cristalizaría por primera vez en 1997 con la encarcelación de todos los miembros de la Mesa Nacional de HB a finales de 1997.

Las implicaciones jurídicas de considerar el MLNV como un “entramado” con vínculos orgánicos suponían una consideración del delito de terrorismo más amplia de la difundida hasta este momento. Se abría así una vía de jurisprudencia a partir de la

decir que las reformas legales encaminadas a endurecer la política han sido bien recibidos por la opinión pública, obteniendo altos niveles de satisfacción ciudadana las medidas de reforma del Código Penal de 2003 (cumplimiento íntegro de penas, elevación de los años de condena) y de la Ley del Menor. Estos niveles son ligeramente más bajos en relación con la ilegalización de Batasuna y la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), reflejando posiblemente una mayor fractura en las élites políticas.

³⁰⁴ En el ámbito de las organizaciones sociales, en este contexto se produjo una importante ruptura entre aquellas organizaciones pacifistas de ámbito vasco que habían venido movilizándose a lo largo de los noventa contra ETA y el movimiento constitucionalista emergente de Ermua que las acusaba de pasivas con la violencia y conniventes con el nacionalismo independentista al abogar por la vía de la negociación. Este enfrentamiento permanece aún hoy y es muy visible en el discurso de unas y otras al indagar en la implicación de la sociedad civil en contra de la violencia.

cual la categoría de “terrorismo” fue ampliándose progresivamente y tipificándose a través de varias reformas legales, que harían de la misma algo mucho más abierto que la pura implicación activa en un acto de violencia. A partir de este momento, actividades como el enaltecimiento, el apoyo tácito o explícito, la financiación directa o indirecta etc., constituirían también delito de terrorismo y comenzarían a ser encausadas como tales.

Esta concepción del terrorismo satisfaría, a su vez, los argumentos de quienes, a partir de entonces, se han venido manifestando a favor de mayores grados de punición para aquellos activistas que configuraban la “comunidad de legitimación” o el “marco de comprensión” de la violencia de ETA. Al mismo tiempo, permitía abordar reformas legales que modificaran el contexto de las políticas antiterroristas, buscando llevar a término otra de las demandas emergentes de los movimientos cívico-constitucionalistas y, sobre todo, de víctimas: acabar con los llamados “espacios de impunidad”³⁰⁵ e impulsar políticas de deslegitimación de la violencia; expresión que, en adelante, se convertiría en uno de los elementos centrales del discurso antiterrorista.

Por otro lado, a partir de este momento, la “vía judicial”, abierta desde el Tercer Poder, será utilizada por las instancias gubernamentales, impulsada por las reformas legislativas en el parlamento y frecuentemente empleada por las organizaciones cívico-constitucionalistas, constituyéndose así como uno de los principales “frentes” en la “lucha antiterrorista”. De este modo se haría efectiva la idea de que era por la vía de la ley y del Estado de derecho como había que hacer frente al terrorismo: *“con la ley, pero con todo el peso de la ley”*. Una máxima sin duda, de importante resonancia en el debate público en la última década.

Por último, podemos señalar la conformación del Pacto Antiterrorista (2000). Este pacto, firmado entre PP y PSOE a propuesta del PSOE para consensuar las líneas básicas de la política antiterrorista en otoño de 2000, contiene unas líneas de acuerdo sobre aspectos fundamentales que conformarían en adelante la política antiterrorista.

La construcción que los medios hegemónicos y el propio discurso que los dos partidos mayoritarios hicieron de este acuerdo estuvo planteada en términos de “patriotismo constitucional”, de respuesta a una demanda social de los movimientos

³⁰⁵ La percepción de situaciones en las cuales personas vinculadas al MLNV podían ostentar cargos públicos (ayuntamientos, parlamentos, instancias de gobierno) contribuyendo con su acción (por la vía de la financiación, de la comprensión o de la no condena) a la perpetuación de la organización ETA.

cívicos y de víctimas y de un cierto enfrentamiento con el nacionalismo, que -se entendía- colabora con la violencia, o se beneficia de ella.

En su filosofía fundamental contenía la idea de que la negociación política no era útil para acabar con la violencia en tanto que alimentaba las aspiraciones independentistas. Por ello, se decidió excluir del Pacto a aquellos partidos que participen de los acuerdos de Lizarra. Subrayaba, además, que el marco constitucional de 1978 y el estatuto de Gernika eran innegociables, y que sólo una política policial y judicial fuerte podrían acabar con el terrorismo. El terrorismo se construye como un “problema de Estado”, y por ello la política antiterrorista debería ser acordada por el gobierno y la oposición con carácter de continuidad y no de debate partidista³⁰⁶. El objetivo fundamental de la política antiterrorista debía ser la deslegitimación global del terrorismo más allá de la persecución policial y penal de los perpetradores del mismo.

A partir de este diagnóstico consensuado, el pacto antiterrorista implicaba cuatro tipos de reformas acordadas: 1) Trabajar para la deslegitimación de la violencia; " para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta de la violencia". 2) Un compromiso con el respaldo y la dotación a la acción policial y judicial (colaboración ministerial, dotación de recursos, respaldo político). Ello suponía endurecer la vía policial y judicial que se hace extensible en el fortalecimiento de la política penitenciaria como “frente de persecución” del terrorismo. Subyace la idea de que no hay nada que negociar políticamente y de que la política antiterrorista debe traducirse, fundamentalmente, en más policía, más juicios, endurecimiento de las penas y de las condiciones penitenciarias etc. 3) Compromiso para la reforma penal donde cristalizará la ampliación de la categoría de terrorismo y el endurecimiento de las penas. 4) El fomento de la cooperación internacional a partir de la constatación de que es fundamental activarla más allá de las relaciones bilaterales con Francia; proyectando hacia el exterior la política antiterrorista, fomentando iniciativas de cooperación en el ámbito de la UE, y haciendo una política de información en el nivel internacional sobre la situación de la violencia en el País Vasco. 5) Por último, el acuerdo recoge las demandas de visibilidad de las víctimas y se compromete a elaborar una legislación específica para su reconocimiento y su reparación, así como la importancia del

³⁰⁶ Este último aspecto ha sido el más conflictivo en lo que respecta a los dos partidos firmantes, que con mucha frecuencia en la última década contienden en torno al mismo. Sin embargo, el consenso fundamental que subyace al pacto (el fortalecimiento de la política policial y judicial, las reformas penales o el fomento de la cooperación internacional) ha sido siempre respetado y ha informado con continuidad las políticas tanto del PP como del PSOE cuando han estado en el gobierno.

compromiso social y ciudadano contra la violencia, que se había hecho manifiesto desde finales de los noventa.

Tanto si consideramos el giro en la comprensión penal del terrorismo impulsado desde el poder judicial, como si tomamos en cuenta el acuerdo y la aceptación de las ideas fundamentales en la política antiterrorista contenidas en “el Pacto”, podemos esbozar cómo uno y otro implican unas nuevas líneas de consenso sobre el modo de hacer frente al terrorismo, que se concretan de la siguiente manera:

- *La vía de la legalidad*: los enfrentamientos políticos vinculados a los procesos del GAL y la implicación de los gobiernos socialistas de los años ochenta en la llamada “guerra sucia” habían generado una enorme controversia política y social que fue un pilar fundamental de la política de oposición con la que JM. Aznar llegaría al poder en 1996. Además, los procesos abiertos en la Audiencia Nacional en la segunda mitad de los noventa abrieron debates importantes en los medios de comunicación y la opinión pública en relación con los límites y los marcos en los que debía configurarse la política antiterrorista. El acuerdo fundamental en torno a la idea de que es con la legalidad - mediante los instrumentos del Estado de Derecho para alterar el marco legal en que se produce la “lucha antiterrorista”- como debe combatirse el fenómeno de la violencia, estará en la base de un conjunto de transformaciones que, como veremos, cierran el marco de oportunidades para la violencia al establecer cambios en lo que se considera terrorismo y en la forma de enfocarlos.

- *La expansión conceptual y jurídica del terrorismo*: el argumento de que el terrorismo de ETA va más allá de la pura implicación en un “atentado” -y que tiene que ver con una comunidad de legitimación que, por la vía de distintas organizaciones legales, genera las condiciones para la perpetuación de la violencia- es acordado como un aspecto a reformar penalmente con el fin de acabar con los “espacios de impunidad” y hacer imposible la legitimación social de la violencia (muy visible en los espacios públicos, en las instituciones de gobierno local vasco o en la propia geografía urbana del País Vasco).

- *La separación “medios” y fines*: la idea de que los medios legitiman los fines políticos y, por tanto, que aquellas organizaciones que aspiran al independentismo deben posponer sus demandas de reforma constitucional mientras exista la violencia. Sólo una clara y expresa separación de la violencia, que se traduce en la exigencia de condenas y rechazos explícitos (lo que en otro lugar he denominado la “obsesión

condenatoria”) legitima a las organizaciones para la expresión política en el marco del conflicto vasco³⁰⁷.

- *La necesidad de potenciar y proyectar la dimensión internacional*: se constata que, mientras el MLNV ha proyectado históricamente su imagen y su estrategia hacia el exterior, ni el Estado ni las organizaciones contrarias a la violencia de ETA han sido efectivas en este sentido. Por ello, el contexto internacional se presenta como un ámbito hacia el que hay que proyectar la política antiterrorista buscando el respaldo y la cooperación internacional, por la vía de una intensa política informativa³⁰⁸, y mediante las iniciativas encaminadas a fortalecer el llamado “tercer pilar” o espacio de seguridad.

- *El respaldo a las FCSE* se consensúa como una dimensión fundamental de la política antiterrorista. Si a lo largo de los años noventa, algunas agencias de seguridad se habían visto envueltas en escándalos de corrupción y de abusos policiales en relación con el terrorismo, (casos del CSID, y de la Guardia Civil), emerge ahora un consenso fundamental sobre la necesidad de dotar de legitimación y respaldo político a las mismas, pero también el compromiso de dotarlas de recursos, financiación y reformas necesarias para que la política antiterrorista sea efectiva.

Estos aspectos que aparecen como líneas de acuerdo fundamental en torno al año 2000, y que serán la base de las políticas antiterroristas de las dos legislaturas del PP (1996-2004) con continuidad esencial con la entrada en el gobierno del PSOE, han ido consolidando un consenso que ha sido fundamental a lo largo de la última década. Con todo, la emergencia de nuevas formas de violencia y el ciclo abierto de “terrorismo global” a partir del 11 de Septiembre ha contribuido, por un lado, a expandir el alcance de estos acuerdos a otros partidos del arco parlamentario y, por otro lado, a incluir nuevas líneas de acuerdo que han estructurado la política antiterrorista. Los episodios

³⁰⁷ Este argumento, ha sido frecuentemente reiterado en el discurso del movimiento cívico-constitucionalista logrando gran resonancia en el debate cotidiano. Esta cita lo expresa con bastante claridad: “... acabar con el terrorismo (...) significa también derrotar políticamente a quienes sostienen que todas las ideas son legítimas sin percatarse de que las ideas que precisan del crimen para imponerse nunca serán democráticas” (Rosa Díez, diputada de UPyD; en Garzón, 2006: 115). A partir de esta consideración, poner en cuestión los fines del nacionalismo y del independentismo vasco, en virtud de los medios violentos que algunas organizaciones han empleado históricamente para lograrlo, ha sido uno de los temas recurrentes en el discurso político del antiterrorismo en la última década.

³⁰⁸ Como ya se apuntó en el capítulo tercero, en 2004, una serie de entrevistas desarrolladas en el marco de la investigación PEACE COM revelaron cómo la dimensión internacional [vista en términos de implicaciones de instituciones internacionales] sólo aparecía evaluada de forma positiva por aquellas organizaciones más cercanas al nacionalismo vasco independentista, mientras que, por el contrario, era negada o rechazada por el resto de los actores. En 2009 sin embargo, la mayoría de los actores coincide en señalar la importancia de proyectar el problema hacia el exterior para acabar con la “confusión”, o la “comprensión” que históricamente se había instalado en las percepciones externas sobre el problema vasco.

del 11S ya se revelaron como un punto de inflexión a la hora de lograr consensos para el desarrollo de medidas antiterroristas. La reforma del CNI (2002) por ejemplo, o la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos)³⁰⁹, así lo evidencian.

Por su parte, los episodios del 11M han ayudado a atraer al consenso a otros partidos minoritarios (IU o las minorías catalanas) que, si bien continúan siendo críticos con algunas medidas desarrolladas en esta década, han respaldado a los distintos gobiernos en torno a varias cuestiones relativas a la política antiterrorista y que son visibles, por ejemplo, en los debates de la Comisión del 11M o en las reformas de la seguridad interior iniciadas inmediatamente después. Estos debates han puesto de manifiesto que, con escasas diferencias³¹⁰, por un lado se defiende una política de tolerancia cero con los límites del Estado de Derecho, y por otro lado, una legitimación política cada vez más amplia de mayores grados de punición y represión legal con el terrorismo.

En el contexto posterior al 11 de Septiembre, algunas líneas nuevas de consenso se han instalado, además, en el discurso de los partidos mayoritarios, muy en relación con el acuerdo generado en el Pacto Antiterrorista. Dichas ideas han florecido a partir de la constatación de un cambio en el entorno internacional y en las dinámicas geopolíticas en que se inscribe el terrorismo (viejo y nuevo), de las cuales cabe destacar:

Ante todo la idea de que todos los terrorismos son iguales. A pesar de los esfuerzos de JM. Aznar en 2001 por generar un discurso que igualara todo tipo de terrorismos, a lo largo de la década se ha consolidado más bien la idea de que no todos los terrorismos son iguales pero tienen un elemento que los hace comunes: constituyen una de las principales amenazas a la democracia y deben ser combatidos con los instrumentos de la legalidad. Se afirma además que España está en la vanguardia de la “lucha antiterrorista”. La larga experiencia española con el terrorismo la ha convertido en un país “experto” y pionero en políticas antiterroristas y, sobre todo, en la defensa de una agenda internacional de cooperación interestatal y europea. Esta constatación,

³⁰⁹ Valga esta justificación de la Ley de Partidos como evidencia de que se percibe que España es un país pionero en la lucha antiterrorista, pero, a la vez, el modo en que el 11S ha cambiado el contexto ideológico en el que se entienden estas políticas: “... esta convicción, tanto de los poderes públicos como de la sociedad española, es tan fuerte que el espíritu que ha inspirado las medidas legales contra el terrorismo está empezando a sentirse en Europa; tanto que durante los años 2002 y 2003 la Unión Europea ha asumido la lucha contra el terrorismo como uno de los objetivos prioritarios en todos los Consejos de Ministros de Justicia e Interior. Hoy España es fuerte contra el terrorismo porque Europa es también fuerte, porque la UE ha sabido responder con firmeza para que no haya santuarios terroristas, para plantarle cara al terror, que no conoce fronteras” (JM Michavila, 2003: 15.)

³¹⁰ Siendo una de ellas el respaldo a la vía militar en Irak vs. la vía del Estado de Derecho.

compartida por todas las sensibilidades políticas, ha reforzado la posición española a la hora de demandar más cooperación antiterrorista y más espacio de seguridad para gestionar el terrorismo global, pero también para avanzar su propia agenda de seguridad interior, logrando el respaldo internacional en las estrategias antiterroristas desarrolladas a lo largo de la década. Ha cobrado fuerza la idea de que existe un “Spanish way” de lucha antiterrorista y de que éste ha funcionado y puede ser de alguna manera exportado (Garzón, 2006).

Si atendemos a los comentarios de élites políticas sobre qué es el terrorismo, qué significa el Pacto Antiterrorista, y los comentarios generales sobre la política antiterrorista, éstos revelan escasas diferencias en la cuestión de la “lucha antiterrorista”. En concreto, se percibe que el contexto ha cambiado y es un contexto de solidaridad y comprensión que facilita la política antiterrorista: se difunde la constatación de que, en efecto, el contexto internacional es distinto y se ha generado un clima de comprensión y solidaridad mucho más proclive a reconocer, por un lado, la amenaza real que supone para la democracia el terrorismo, y por otro, a respaldar y cooperar en las estrategias policiales y judiciales que España ha venido reclamando. Este “nuevo clima” es confirmado por buena parte de las élites políticas³¹¹ que han visto

³¹¹ *"A lo mejor a alguien le extrañarán mis palabras, pero la verdad es que suelo pensar que el 11 de Septiembre de 2001, supuso para la lucha contra el terrorismo en Europa, particularmente contra ETA, que era el más letal y persistente que sufríamos -hasta que Al Queda atentó en Madrid - , un "bien colateral" (...) esa indiferencia con la que los demócratas europeos miraron hacia otro lado durante los dramáticos años de la dictadura franquista, esa indiferencia con la que los demócratas europeos han observado el terrorismo vasco, se evaporó el 11 de Septiembre de 2001 (...) esa sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, empujó - y de qué manera - a algunos reticentes europeos que planteaban problemas, a la implementación en sus países de dos iniciativas del Parlamento Europeo del 6 de Septiembre de ese mismo año - la Orden de Busca y Captura y la Definición Común del Delito de Terrorismo -, y fueron finalmente aprobadas por el Consejo el 6 de diciembre de 2001. Después llegó la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas, las decisiones contra el blanqueo de dinero o la decisión del Parlamento Europeo de habilitar una línea presupuestaria de ayuda a las víctimas del terrorismo."* (Rosa Díez, diputada de UpyD: en Garzón, 2006: 114- 115).

"La comunidad internacional ha pasado de la indiferencia, - cuando no de la velada comprensión - al más absoluto de los rechazos de cualquier clase de acto de violencia terrorista." (Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado (en Garzón, 2006-2011; 2004:175).

"Creo que hay un momento factible de reforzar el pacto antiterrorista, me parece que después de casi un año los resultados del mismo son enormemente positivos y creo que todo el proceso de reflexiones y de medidas que se han adoptado a raíz del 11 de septiembre permiten implementar nuevas medidas y nuevas líneas de acción política en el seno del pacto, y junto a esto yo creo que también es un momento de hacer una invitación al conjunto de los grupos parlamentarios para que puedan tener una posición de apoyo al pacto por las libertades y contra el terrorismo que firmamos el PP y el PSOE". (José Luis Rodríguez Zapatero, Secretario General del PSOE; en Caño, 2001).

"Por fin, los responsables políticos, la democracia, están dando la única respuesta que era posible: el exacto cumplimiento de la Ley, de la Constitución y de un Estado de Derecho fuerte y una justicia imparcial. Y no estamos solos, a nosotros se han sumados las democracias europeas, encabezadas por el Gobierno y la sociedad francesa" (...) La colaboración entre Francia y España fue la punta de lanza de la lucha internacional contra el terrorismo y hoy es ejemplo para el resto de la Unión Europea y del

en el 11 de Septiembre un punto de inflexión en términos de solidaridad y reconocimiento del terrorismo de ETA, pero también para el desarrollo de iniciativas y cambios institucionales a nivel internacional-global (hacía tiempo demandados por España) que hacen más efectiva la lucha contra la violencia en el País Vasco.

Siguiendo a Guittiet (2008), podemos decir que, en términos discursivos, el Pacto Antiterrorista, establece una racionalidad política que abre un “campo político hegemónico”, asentando los límites de lo posible y lo no aceptable en política (2008: 286). Si bien el Pacto antiterrorista estuvo suscrito sólo por PP y PSOE, esta racionalidad política de rechazo unánime del terrorismo ha hecho de la “condena” el requisito fundamental para la prueba de democracia, estableciéndose una relación entre moralidad y legitimidad y un proceso de securitización de lo que la democracia puede o no debe permitir.

En definitiva, la dimensión internacional tal y como la vengo presentando en este trabajo, está presente en la construcción del consenso sobre terrorismo y antiterrorismo en el caso vasco de dos maneras: En primer lugar, a través de la necesidad de “proyectar” la política antiterrorista hacia fuera; de desarrollar una política informativa que se considera necesaria en la medida en que se constata que el MLNV ha sido muy efectivo en esta estrategia. Y, por otro lado, en el desarrollo de una agenda de cooperación interestatal más allá de Francia; hacia la política Europea.

En segundo lugar, se perciben determinados acontecimientos globales (el 11S en concreto) también en relación con los efectos que tienen en la política doméstica, como punto de inflexión favorable a las oportunidades políticas en las estrategias del Estado. Pero también el 11M, como acontecimiento global que ha proyectado hacia el exterior el modo particular y basado en la experiencia con el que España gestiona el terrorismo: una respuesta basada en la legalidad y en la sofisticación de policía y tribunales que convierte a España en referente de la “lucha antiterrorista” a nivel internacional.

La “bidireccionalidad” es, por tanto, la lógica que subyace al modo en que se ha comprendido el contexto internacional que en este trabajo he llamado el contexto de la *guerra contra el terror*. Tendremos la ocasión de volver sobre esta idea al analizar, con mayor profundidad, las percepciones de los actores implicados en el capítulo sexto.

mundo tras ser golpeados por los atentados del 11 de Septiembre.” (José María Michavila, Ministro de Justicia (2002-2004); 2003: 8).

5. 2 Dimensión institucional

Las líneas de consenso señaladas en el apartado anterior han tenido en la última década un desarrollo legislativo e institucional bastante intenso, siendo las sucesivas reformas del Código Penal (CP) y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), junto con la elaboración de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP), las cristalizaciones fundamentales de una política de “tolerancia cero”. Estas transformaciones han gozado, por un lado, de importante respaldo político y social y, por otro, han supuesto un cierre de oportunidades políticas para la violencia y para la política en el contexto del conflicto vasco, haciendo el marco legal de la lucha antiterrorista más amplio y efectivo.

Como vimos en el capítulo tercero, España había desarrollado en los últimos treinta años una amplia batería de medidas legislativas, policiales y judiciales para manejar la violencia (Álvarez Conde y González, 2006; Catalina, 2006), que convertían a España en un país pionero en las políticas antiterroristas. Sin embargo, en el periodo que analizamos (1998-2010), un conjunto de transformaciones en esta materia sobre la base de una nueva concepción sociológica y jurídica del terrorismo y junto con el consenso señalado, se han explicitado en cambios concretos que son visibles tanto en dichas normas como en los debates políticos que han implicado. En este proceso, la influencia del cambio en el contexto internacional ha sido significativa, como me dispongo a exponer.

5.2.1 Transformaciones legales: la vía penal como instrumento de la política antiterrorista

El recurso a la vía penal como instrumento de la lucha contra el terrorismo ha sido, sin duda, la característica fundamental, junto con la cooperación internacional de los últimos quince años. Siguiendo tendencias claramente generalizables a la mayoría de los países de nuestro entorno (Jakobs y Cancio, 2006), se puede hablar de algunos aspectos que han convertido esta opción en la estrategia privilegiada para la lucha contra el terrorismo en el contexto europeo.

Ante todo, y como ya señalé al referir las transformaciones en las políticas de seguridad en el marco internacional, la normalización por la vía de leyes ordinarias de las normativas relativas a un fenómeno excepcional como es el terrorismo se ha convertido en tendencia (Asúa Batarrita, 2003; Tenorio, 2007). En el caso español, esta propensión había quedado ya plasmada en el Código Penal del 1995, en el cual se

sistematiza por primera vez la normativa relativa a la represión del terrorismo. A partir de este momento y aun habiéndose producido numerosos cambios, el CP y la LECrim, son las normas generales por las que se regula la tipificación y el tratamiento penal y procesal del terrorismo.

Por otro lado, podemos hablar de una tendencia hacia mayores grados de punición, que han dado lugar a una ampliación considerable de las conductas tipificadas como terrorismo (que ahora incluyen la apología, el “terrorismo urbano” o el “terrorismo individual”), pero también en el tipo de penas que se establecen para dichos delitos, llegando a cuarenta años de reclusión sin acceso a privilegios penitenciarios. Finalmente, la tendencia señalada hacia fenómenos de neo-criminalización y punitivismo subraya el marcado sesgo simbólico que ha adquirido el derecho penal³¹² y su resonancia en la vida política.

Estas tendencias se han concretado desde 1998 en dos tipos de cambios legislativos. Por un lado, en las sucesivas reformas del CP y la LECrim y, por otro lado, en la elaboración de la LOPP. La tendencia punitiva de finales de los años noventa abrió el camino para importantes reformas penales, pero mantengo la idea de que ninguno de los dos conjuntos de cambios habría sido posible sin un cambio en el contexto internacional.

- Cambios en la legislación penal:

El Código penal de 1995 fue prolíficamente reformado en el periodo 1998-2003 (Fernández Hernández, 2008), estando los principales cambios orientados a la agravación de las penas y a la ampliación de las conductas tipificadas como terrorismo³¹³. Así, la regulación criminal del terrorismo incluiría a partir de entonces la

³¹² Sobre el nuevo paradigma de derecho penal y su dimensión simbólica véanse: González Cussac, 2005; Jakobs y Cancio, 2006. Cancio subraya cómo el planteamiento de “ley y orden” y endurecimiento generalizado de la represión del terrorismo ya estaba presente en el Código Penal de 1995 y sin embargo, en sus propias palabras: “... la mayoría parlamentaria de la derecha política existente en España desde 1996 hasta la primavera de 2004 ha hecho caer una verdadera cascada de reformas penales sobre la imprenta del Boletín Oficial del Estado (en muchos sectores diversos) que en el año 2004 (justo para las elecciones generales) desembocó en una especie de revisión general del Código Penal del 1995, adaptando, mediante el incremento generalizado de los marcos penales y la creación de nuevos tipos delictivos la legislación penal española al nuevo clima político” (...) “esto ha sucedido - es esencial subrayarlo- con una aprobación muy amplia de casi todas las fuerzas políticas, especialmente en todos aquellos ámbitos que algo podrían tener que ver con el terrorismo (...) en cuando se pronuncia esa palabra, casi todos los agentes políticos inician una carrera para llegar los primeros al frente (mediático) del “decidido combate”. (2006: 104 y 105).

³¹³ LO 2/1998 de 15 de Junio de reforma del CP; LO 5/2000 de 12 de Enero de responsabilidad penal de los menores; LO 7/2000 de 22 Diciembre de reforma del CP; LO 9 /2000 de 22 de Diciembre de responsabilidad penal de los menores; LO 6/2002 de 27 de Junio de los Partidos Políticos; LO 1/2003 de

responsabilidad penal de los menores para hacer frente a los actos de *kale borroka*, la apología del terrorismo que permitiera criminalizar a lo que ya entonces se consideraba el “entorno”, un endurecimiento del cumplimiento de penas, la reincorporación del delito político (que había sido despenalizado en el CP 1995), y nuevas normas procesales relativas a las condiciones de prisión provisional y detención en régimen de incomunicación.

Este conjunto de medidas vino a sumarse al acervo de previsiones antiterroristas establecido en el CP de 1995 “delitos de terrorismo”. Lo novedoso, siguiendo a Esparza Oroz (2004), no era la adhesión a dichas conductas - que en su mayor parte habían sido despenalizadas-, sino su tipificación penal mediante modificaciones al llamado “código penal de la democracia” (1995). Se trata de una trayectoria de cierta recuperación de lo ocurrido hasta la aprobación del CP de 1995: se amplían las conductas, se agravan las penas, y se intenta poner freno a la violencia a través del derecho penal. Se vuelve a una regulación de la represión del terrorismo muy dura, buscando un escaparate de efectividad (Fernández Hernández, 2008), con una diferencia que considero que debe ser tomada en cuenta: los niveles de violencia de los años ochenta eran muy superiores a los niveles del año 2000³¹⁴ y, por lo tanto, habría que considerar entre, otros factores, el impacto mediático que el terrorismo ha generado en esta última década.

Ya he señalado factores internos intervinientes en esta transformación de la vía penal contra el terrorismo: el secuestro de Ortega Lara, el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco y la ola de indignación moral y política que generaron. Sin embargo, el factor externo ha de ser evaluado en la medida en que son muchos los autores que al hacer análisis comparados de la evolución de la vía penal han apuntado también a cambios en el contexto internacional (Portilla Contreras, 2005; Tenorio, 2007; Asúa Batarrita, 2003; Esparza Oroz, 2004; Fernández Hernández, 2008).

Podemos ver también la influencia de las nuevas teorías criminológicas y del paradigma del derecho penal del enemigo³¹⁵ en los cambios penales de 2003. En concreto se aprecia:

- 1) Un endurecimiento de penas (art. 571 y ss.);

10 de Marzo, del reforma del CP; LO 7 /2003 de 30 de Junio para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas; LO 13/2003 de 24 de Octubre de ref. de LECrim; LO 15/2003 de 25 de Noviembre de reforma del CP del 1995; LO 20/2003 de 20 Diciembre de reforma del CP.

³¹⁴ ETA en 1980 mató a 93 personas. En 2000 las víctimas fueron 23. Datos del Ministerio del Interior.

³¹⁵ Sobre el reflejo de este paradigma en el derecho penal español véase: Portillo Contreras, 2005; Tenorio, 2007; y Asúa Batarrita, 2003.

2) Recorte de garantías procesales: prisión preventiva, controles corporales, intervención de las comunicaciones en ámbitos privados sin control judicial, o prolongación de los periodos de incomunicación;

3) El cumplimiento íntegro de penas: la prolongación de prisión hasta cuarenta años, sin apenas posibilidades de reducción y concesión de la libertad condicional (arts. 78 y 90) para los delitos de terrorismo (reforma de LO 7/2003, de 30 de junio de 2003). El cómputo de los beneficios penitenciarios sobre la pena global (*Doctrina Parot*) - sobre la totalidad de la pena impuesta- y no sobre la pena máxima a cumplir cuando ésta no llegue a la mitad de las penas impuestas. Y finalmente, las dificultades de acceso al tercer grado desde el primer día de reclusión y, en delitos graves, se requerirá haber cumplido la mitad de la condena;

4) La ampliación de la intervención del derecho penal que supone anticipar la punición en fases alejadas de la comisión del delito como en la conspiración o la simple pertenencia a organizaciones criminales. Por ejemplo, en la apología, enaltecimiento o justificación- del terrorismo (578), penalización de convocatoria de referéndum ilegales (506 bis) y de la concesión de subvenciones a partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial (576 bis) (introducidos por la LO 20/2003, de 23 de diciembre de 2003).

Se trata de transformaciones penales que algunos han considerado críticamente por el riesgo de dilatación de la noción de terrorismo que conduce a la idea de “peligrosidad ideológica” o a la criminalización de la proximidad ideológica (Asúa Batarrita, 2003)³¹⁶.

Algunos de estos cambios, sin embargo, fueron eliminados bajo el gobierno del PSOE después de 2004. En concreto, se han hecho transformaciones conducentes a la eliminación del delito político en la LO 2/2005 de 22 de Junio, que deroga íntegramente la LO 20/2003 de reforma del CP y en la LO 4 /2005 de 10 de Octubre que modifica el CP en materia de delitos de riesgo provocado(s) por explosivos como los del 11M.

En 2010, la reforma del Código Penal (LO 15/2010 de reforma) emanó directamente de los compromisos adquiridos a nivel internacional. Así, la Decisión Marco de la UE de 28 de noviembre de 2008 sobre la lucha contra el terrorismo era

³¹⁶ Además de las propias críticas y debates doctrinales entre constitucionalistas y penalistas españoles, algunos aspectos de esta regulación, sobre todo lo que tiene que ver con la definición “vaga” y laxa de ciertos delitos y sobre el recorte de garantías procesales (en especial la prolongación del régimen de incomunicación), han venido siendo denunciadas desde organizaciones e instituciones internacionales como revelan los informes de Human Right Watch (2005), Amnistía Internacional (2002 y 2010) o el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas (2008).

vinculante para la adaptación de la legislación penal de los estados miembros para armonizar la lucha contra el terrorismo internacional y la estrategia de la seguridad europea. Esta reforma viene precedida, en relación a los delitos de terrorismo, por dos Decisiones Marco, la 2002/745/JAI y la 2008/919/JAI de 28 de noviembre de 2008 del Consejo que modifica, ampliándola, la anterior. Si en la primera se delimitaban los conceptos de organización y de grupo terrorista, en la segunda se ponía especial énfasis en la necesidad de tipificar penalmente la difusión de materiales “que podrían inducir a las personas a cometer ataques terroristas”. Se pretende poner freno a la difusión a través de Internet del ideario terrorista, con coste cero y amplísima repercusión, para prevenir la comisión de atentados. Por ello, y aunque ya después de la DM de 2002 se habían tipificado ciertas cuestiones relativas a la financiación del terrorismo y la protección de infraestructuras críticas (Asúa Batarrita, 2002), los nuevos cambios han permitido acomodar el marco de la legislación penal a las nuevas formas de violencia global, nuevos modelos organizativos y nuevas estrategias de reclutamiento y difusión de ideas. Así plantea Reinares (2010) el gran avance que supone la nueva reforma del CP en la lucha contra el terrorismo.

El efecto *spill over* de la legislación internacional sobre el ordenamiento penal español es visible aun habiendo tenido España un gran acervo de medidas antiterroristas. Sin embargo, los episodios del 11S (cuyo efecto legislativo más importante es la DM 2002) y del 11M (estrategia de seguridad europea y DM, 2008) han tenido también en este nivel un impacto perceptible en la legislación española, contribuyendo, por un lado a legitimar muchas de las medidas ya existentes³¹⁷, y por otro, a desarrollar medidas inéditas, para encarar “nuevos” fenómenos de violencia.

- *Cambios político-penales y la ilegalización de partidos: la Ley Orgánica de Partidos Políticos:*

La Ley Orgánica de 2002 que regula el funcionamiento de los partidos políticos es, a mi juicio, el documento que culmina el proceso de reformas institucionales y legislativas que vengo refiriendo. En las dos décadas posteriores a la constitución de

³¹⁷ El Pleno del Parlamento Europeo, en la reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2003, aprobó un Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. En dicho informe se dice de manera expresa que la ilegalización de Batasuna en España fue llevada a cabo mediante una ley que es conforme con los «principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho» (Torres del Moral, 2004: 69).

1978 se había “consentido” la existencia de partidos de trayectoria singular por su cercanía a la organización ETA, como es el caso de HB y Batasuna. A pesar de algunos intentos de ilegalización, y dado que existían algunos mecanismos legales que permitían la ilegalización de partidos y asociaciones en determinados supuestos penales (Esparza Oroz, 2004), durante los años ochenta y noventa imperaba tanto en España como en los países del entorno europeo la convicción de que convenía sujetar las ideologías extremistas o radicales mediante su imbricación y cobijo legal bajo la normativa reguladora de los partidos. Tal era la “voluntad política” dominante. Sin embargo, cuando ésta se movió, como vemos, hacia una menor tolerancia de determinadas violencias, se acometieron las reformas legislativas correspondientes, encaminadas a la ilegalización de Batasuna. La pregunta que surge casi de forma espontánea es ¿qué cambió en la siguiente década en términos de “voluntad política”?

La transformación de las líneas de consenso señaladas al principio de este capítulo permite constatar dos ideas que ayudan a comprender este cambio en la voluntad política. Por un lado, la clara influencia de un factor interno que sería la transformación del umbral de tolerancia social a partir de los episodios de 1997, el llamado “espíritu de Ermua” y la ruptura de la tregua de ETA de 1999. Muchos venían poniendo en evidencia el abuso que hacían de las instituciones del Estado los “enemigos” de la democracia, y reclamando nuevas medidas encaminadas a lo que se consideraba una “defensa” de la constitución, y estos acontecimientos empujaron la agenda de la reforma del marco legal en el que ocurre la política antiterrorista. Por otro lado, podemos señalar el cambio en el contexto internacional vinculado a los episodios del 11S: es decir, lo que en este trabajo vengo denominando el contexto de la *guerra contra el terror*. Un contexto favorable a la profundización en aquellas transformaciones y al respaldo, por parte de la comunidad internacional de las mismas.

En 2002, poco después de la aprobación de la Decisión Marco del Consejo de la UE relativa a la lucha contra el terrorismo, el legislador español decidió limitar más la libertad de los partidos políticos. Sea casualidad o no, a mi juicio, el cambio en el contexto internacional favoreció una reforma política que habría resultado mucho más difícil diez años antes, dado que su aprobación vino a coincidir con una serie de decisiones normativas adoptadas en la UE y el Consejo de Europa después del 9/11 que tuvimos la ocasión de desglosar en el capítulo 4.

Esta pieza legislativa añadió al existente control penal un mecanismo de disolución basado en la determinación de una serie de conductas especificadas en el

texto que conculcan valores constitucionales expresados en los principios democráticos y en los derechos fundamentales. La Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 de 22 de Junio ha sido desde los debates de su anteproyecto una pieza normativa controvertida. Políticamente controvertida y con intensos debates doctrinales entre penalistas y constitucionalistas.

Respecto a las posturas doctrinales, las dos corrientes más destacadas se podrían dividir en: democracia militante vs. pluralismo constitucional, y constitucionalidad vs. inconstitucionalidad. Por un lado encontramos el debate acerca del modelo constitucional de “democracia militante”³¹⁸ frente al modelo de democracia pluralista. La argumentación política fundamental de la postura “militante” es que la democracia tiene que defenderse de sus enemigos y, por tanto, la constitucionalidad está sujeta a la defensa de unos valores concretos que son de obligada “aceptación” para el sano funcionamiento de la democracia (Torres del Moral, 2003; Díez Picazo, 2002). Este argumento, prohibido expresamente en la CE de 1978 y reiterado por el TC en sucesivas sentencias sobre la LOPP, implicaría la posibilidad de extraer consecuencias jurídicas de la expresión de ideas y programas políticos por su naturaleza contraria a los valores democráticos. Frente a esta postura, se situaría una visión “pluralista” del modelo constitucional en virtud del cual no cabe la prohibición de ideas o proyectos en la medida en que ello limita el potencial pluralista de la constitución (Pérez Royo, 2002; Bastida Freijedo, 2002).

El debate doctrinal en relación a la constitucionalidad o no de la LOPP también ha sido intenso en el ámbito jurídico. Algunos juristas han visto serios problemas de constitucionalidad vinculados a la vaguedad de algunas concepciones y tipificaciones, sobre todo las relativas a conductas delictivas como el apoyo *tácito* o a la posibilidad de extraer consecuencias jurídicas del “silencio” y la “no condena” ante actos de violencia (Asúa Batarrita, 2002; Pérez Royo, 2002; Portilla Contreras, 2005; Amnistía Internacional, 2002). Como cabía esperar, tanto el Gobierno vasco de 2002 como los propios partidos y agrupaciones electorales afectados, han recurrido la

³¹⁸ La teoría de la democracia militante o combativa, surge en el periodo de entreguerras y tiene su plasmación más clara en la Ley Fundamental de Bonn (1949). Recoge la necesidad de establecer un instrumento de defensa del ordenamiento jurídico y de la democracia, frente a aquellos partidos con idearios y proyectos políticos contrarios al orden constitucional. La doctrina de la democracia militante, tal y como es concebida por el TC alemán, exige una adhesión positiva a la constitución y al ordenamiento jurídico por parte de los partidos. (Álvarez Conde, 2004: 8). Este modelo es exportable a otras democracias según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. SETDH de 31 de Julio de 2001, caso *Refah Partisi (partido de la prosperidad)* y otros contra Turquía nº 103; y STEDH de 30 de Junio de 2009, caso de *Herri Batasuna* y *Batasuna contra España*. Nº 82 y 93.

constitucionalidad de la misma, por lo que el Tribunal Constitucional ha tenido numerosas ocasiones para pronunciarse acerca de la norma, evaluando siempre positivamente la adecuación de la norma a los principios constitucionales.

En términos de debate político, si bien he subrayado el consenso fundamental entre los dos partidos mayoritarios³¹⁹, hay que mencionar que la elaboración de dicha norma también fue críticamente discutida tanto por algunos partidos minoritarios de ámbito estatal como por los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Las principales críticas vinieron, por un lado, de las supuestas dificultades de encaje constitucional que dicha norma planteaba así como del cuestionamiento de la vulneración de libertades ideológicas y el aislamiento de partidos políticos del juego democrático. En este sentido, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el entonces Gobierno nacionalista vasco ante el TC en Agosto de 2002 evidencia el rechazo que la ley encontró en los partidos de ámbito nacionalistas. La ley tuvo que enfrentar críticas, también, en el ámbito de partidos minoritarios, en relación con la “obsesión securitaria” del gobierno Aznar y de las amenazas para las libertades públicas. En este caso, se puede comprobar de qué modo los actores evalúan igualmente el modo en que el contexto internacional venía a legitimar o respaldar unas medidas percibidas como “excepcionales”³²⁰.

Con todo, la LOPP se aprobó en el Congreso de los Diputados por mayoría de 304 votos a favor procedentes del PP, PSOE, CIU, CC y Partido Andalucista y 16 votos en contra (PNV, EA, ICV, CHA).

³¹⁹ Un consenso entre el PSOE y el PP que, además, argumentó de manera muy enérgica en términos de defensa de la democracia y de la guerra contra el terror: “... cualquiera que sea la concepción de la democracia que se tenga, nadie puede considerar admisibles tales conductas e ignorar que las mismas cuestionan de raíz el Estado de Derecho y el imperio de la ley, ponen en riesgo el Estado democrático y aniquilan los derechos humanos. Ante ello, señorías, el legislador, todos ustedes tienen legitimidad plena tanto desde la lucha contra el terror como desde la defensa de la democracia para cerrar cada vez más los espacios de impunidad, para acabar con la agresión y para expulsar al terrorismo de la política y para evitar que el terrorismo se sirva de la política para lograr sus fines (aplausos).” (Ángel Acebes, Ministro del Interior 2002-2004. Debate Congreso de los Diputados: Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos, 22 Mayo de 2002, pp 8300).

³²⁰ “... estamos ante una política de imagen que no aporta ninguna efectividad real en la lucha antiterrorista y que, sin embargo, daña gravemente el ordenamiento jurídico y constitucional de nuestro país” (...)El camino del señor Aznar sigue siendo el de destruir los puentes de diálogo y el de criminalizar al adversario, el de aislar a los nacionalistas y federalistas o fines puramente políticos y partidistas(...) Desde el 11 de Septiembre, su obsesión antiterrorista nos lleva a la simplificación y a la ceguera política. Sin embargo, no deben engañarse, la enfermedad política de Euskadi y España no es que Euskal Herriarrok se presente a las elecciones sino que haya 150.000 o 200.000 personas dispuestas a votarles. Este es el problema político del País Vasco. Este cáncer de la democracia española y de la democracia vasca, no se soluciona con la prohibición.” (Gaspar Llamazares, portavoz de IU. Debate Congreso de los Diputados: Proyecto de Ley orgánica de Partidos Políticos, 22 Mayo de 2002, pp 8300).

Por otro lado, si consideramos las actitudes de los españoles hacia esta reforma, los resultados de las consultas regulares del CIS revelaron que, en Septiembre de 2002, un 79% de los entrevistados consideraba que había mucha o bastante relación entre ETA y Batasuna. A partir de esta constatación, el 65, 4% de los entrevistados en Septiembre de 2002 estaba a favor o muy a favor de la ilegalización³²¹, y el 56, 2 % consideraba dicha ilegalización un avance muy importante en la lucha antiterrorista. El apoyo a la ilegalización, siendo mayoritario, no lo era de una forma abrumadora. Sin embargo, atendiendo a las actitudes de respaldo hacia las reformas del Código Penal en 2003 hacia mayores grados de punitivismo en relación con el terrorismo, que he señalado, podríamos hablar de nuevo de umbrales de tolerancia y del modo en que la vía penal habría obtenido mayor respaldo que la vía político-penal, reflejando en alguna medida los disensos entre las élites parlamentarias.

En todo caso, con el respaldo de la interpretación constitucional del TC en varias ocasiones y con la legitimación del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2009, se trata de una Ley que, como veremos de nuevo en el capítulo sexto, goza hoy, si no de un mayor respaldo político, sí al menos de una ausencia de cuestionamiento, salvo en entornos muy minoritarios del ámbito de la izquierda y del nacionalismo independentista.

La regulación de los partidos políticos, se venía ordenando por la Ley 56/1978 de Partidos Políticos. Una ley que, según plantean algunos juristas, estaba pensada para “legalizar lo ilegal” (en el marco del proceso de transición). En el caso de la LOPP 2002, se trata del principio contrario: de la elaboración de una norma que permitiera la ampliación de la concepción de terrorismo para incluir los fenómenos de apología y justificación y su aplicación, de manera colectiva a organizaciones políticas³²².

Destacaré algunas características que se consideran relevantes de dicha norma en lo que respecta al objeto de este trabajo: la transformación del umbral de lo socio-políticamente tolerado. En primer lugar, se trata de una norma que todos los agentes políticos coinciden en señalar como instrumento y pieza fundamental de la política antiterrorista. En este sentido, y dado que la lucha antiterrorista hasta el 11 de Marzo de 2004 estaba fundamentalmente (aunque no sólo) orientada a la organización ETA,

³²¹ Barómetros: Estudio 2466 CIS, Septiembre de 2002.

³²² Dos estudios exhaustivos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (2002) se puede encontrar en: Esparza Oroz, 2004; y Fernández Hernández (2008). Ambos trabajos ubican dicha norma dentro del marco de la política antiterrorista y ambos consideran el cambio en el contexto internacional después del 11S como un factor de influencia relevante en el diseño y legitimación de la misma.

hablamos de una ley que fue diseñada para la ilegalización de un partido en concreto: HB, Batasuna.

Tal y como se expone en su preámbulo, surge de la necesidad de “disciplinar nuevas realidades del presente”; pero si atendemos a su contenido, podemos ver cómo se ajusta a una nueva y más amplia concepción de lo que es terrorismo y a algunas de las líneas de consenso señaladas con anterioridad³²³.

1) *Ilegalización de conductas y no fines*: una de las principales innovaciones de la ley es la de limitar la actividad de los partidos imponiendo la obligación de respetar los valores constitucionales, los principios democráticos y los Derechos Humanos (art. 9.1). Pero, además, se tipifican tres tipos generales de conductas que, por vulnerar los mismos, darían lugar a la disolución: a) vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o integridad de las personas; b) fomentar, propiciar o legitimar la violencia como medio para la consecución de objetivos políticos; c) complementar o apoyar políticamente la actividad de organizaciones terroristas.

Estos tres principios han sido criticados por la vaguedad con la que están definidos. Sin embargo, el TC ha despejado dudas subrayando reiteradamente que el supuesto de ilegalización se basa en la actividad (las conductas) de los partidos y no sus idearios³²⁴.

2) *Silencio, no condena*: se han planteado también dudas sobre las conductas tipificadas en el art. 9 en la medida en que podría eventualmente considerarse como prohibición de ideas: en concreto (art. 9.3.a y 9.3.d.), sobre el apoyo político expreso o

³²³ Si atendemos al preámbulo de la propia ley podemos percibir el carácter general que se le pretende dar y que dejaría abierta la posibilidad de aplicación a otro tipo de partidos y agrupaciones electorales. “*El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Especialmente si se tiene en cuenta que, por razón de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas (...) con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades (...) A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se prevé en el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas por las causas previstas en sus artículos 515 y 520*”. [Exposición de Motivos: LEY ORGÁNICA 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos] la negrita es mía.

³²⁴ El TC no se ha acogido a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la injerencia del Estado cuando los *proyectos* políticos entran en contradicción con la sociedad democrática (2001) y plantea que, como en la LOPP la disolución se produce en relación con la conducta, el Estado no ejerce control ideológico. STC 48/2003, FJ 7º.

tácito al terrorismo y la utilización de símbolos, mensajes o elementos que se identifiquen con el terrorismo o la violencia.

El problema de extraer consecuencias jurídicas del silencio y la no condena también ha sido considerado por algunos autores un motivo de inconstitucionalidad. Si bien se puede tratar de comportamientos moralmente reprobables, esta conducta estaría amparada por la libertad ideológica y de expresión (Pérez Royo, 2002; Esparza Oroz, 2004). El TC ha defendido este principio en la idea de que hay un contexto prolongado de violencia terrorista en virtud del cual la acumulación de conductas omisivas de esta naturaleza se une a un conjunto de actos y conductas graves y reiteradas de las que se infiere “compromiso con el terror”. (STC 5/2004, FJ 18º).

La utilización de símbolos vinculados a la violencia se ha considerado directamente colaboración con el terrorismo y no amparado por libertad ideológica. De hecho, fuera de las conductas tipificadas en la LOPP, el TC no ha tenido inconveniente en extraer consecuencias jurídicas de apoyo a determinados candidatos electorales (Holgado, 2010: 196). Finalmente, otras dimensiones que afectan a la constitucionalidad o no de la LOPP tienen que ver con la idea de la doble sanción que implica la disolución, la proporcionalidad o no de dicha medida, la singularidad o no de dicha norma, o la posible sucesión fraudulenta de un partido ilegal. (Holgado, 2010).

En una evaluación de la relevancia política de esta ley, podríamos decir que su novedad reside en que ha permitido la articulación de un cauce especial de disolución de partidos políticos, enmarcado en el contexto de la represión del apoyo político al terrorismo (Esparza Oroz, 2004: 28), evidenciando así el paso del ámbito de la represión penal al político. Esta norma, al entender que el terrorismo es un fenómeno amplio que incluye una dimensión puramente política, ha resultado ser un instrumento jurídico fundamental para expulsar de la arena política a formaciones vinculadas al MLNV. Sin embargo, y aunque excede el objeto de este trabajo, está diseñada para la ilegalización de Batasuna y en el marco de la lucha contra ETA, pero esta norma deja el campo abierto para la eventual ilegalización de otras formaciones³²⁵.

³²⁵ Este es uno de los argumentos expuestos por el grupo parlamentario socialista para defender la generalidad de la LOPP: “... los cambios que hoy abordamos se centran en la necesidad de dar respuestas apropiadas al problema que de forma persistente ha dañado y amenazado a la democracia española, pero también señorías, a los problemas que podrían amenazarla en un futuro no muy lejano. Quiero que los ciudadanos españoles sepan que para el Partido Socialista no estamos sólo ante una ley reactiva frente al reto del terrorismo, sino también frente a los retos de la intolerancia, el racismo, y la xenofobia, que amenazan igualmente a la democracia y sus valores esenciales.” (Jesús Caldera, portavoz del grupo parlamentario socialista 2002-2004. Debate Congreso de los Diputados: *Proyecto de Ley orgánica de Partidos Políticos*, 22 Mayo de 2002, pp. 83220.

5.2.2 Transformaciones en la configuración de la seguridad interior

Además de los cambios narrados en relación con el marco legal para la regulación de la política antiterrorista, debemos señalar algunos cambios también en la configuración de la seguridad interior. Ya en el capítulo tercero vimos cómo al finalizar la década de los noventa, las FCSE habían logrado un alto grado de efectividad en la lucha contra ETA, siendo la Guardia Civil a través de sus diversos cuerpos, junto con el CNP y una Ertzaintza cada vez más implantada en la CAV, las principales agencias para la ejecución de la política antiterrorista en coordinación, fundamentalmente, con la Comisaría General de Información. Pudimos señalar también la progresiva colaboración interministerial entre los ámbitos de Justicia e Interior y el modo en que un trabajo cada vez más estrecho y su proyección al ámbito internacional habían supuesto una considerable sofisticación de la política antiterrorista. Finalmente expuse que, en el último tramo de los noventa, parte del consenso desarrollado entre los partidos mayoritarios, incluía el respaldo y la legitimación a la labor de las FCSE como pieza fundamental de la política antiterrorista.

Para cuando ocurrieron los atentados del 11 de Marzo de 2004 en Madrid, España disponía de una estructura de seguridad interior muy desarrollada y eficaz en materia de lucha antiterrorista. Las FCSE habían perfeccionado durante más de tres décadas sus capacidades para prevenir y combatir el terrorismo dentro del Estado de Derecho, como hemos ido señalando. Y de hecho, a la luz de la descripción presentada en otros capítulos de este trabajo, ETA se encontraba en uno de los peores momentos de su trayectoria sobre todo, pero no sólo, por la eficacia policial.

Sin embargo, las estructuras nacionales de seguridad interior no estaban adaptadas para hacer frente a los desafíos de nuevas formas de violencia terrorista, en concreto de la presentada por el fenómeno Al Qaeda³²⁶. La policía española estaba mal adaptada para hacer frente a nuevas amenazas del terrorismo global tal y como el ex presidente Aznar reconocería ante la Comisión del 11M, y el ministro de Interior José Antonio Alonso en la Comisión de Interior, al desglosar las numerosas iniciativas tomadas por su ministerio a partir de 2004. Por tanto, se puede hablar también en este ámbito de la seguridad interior de cambios perceptibles en el periodo 1998-2008. Pero,

³²⁶ Aunque si había un país pionero en la investigación judicial de dicho fenómeno era España. No en vano fue el primer país en llevar a los tribunales a imputados por los atentados del 11-S. Véase Garzón (2006).

sobre todo, veremos el modo en que este periodo está atravesado por dos acontecimientos globales fundamentales: el 11 de Septiembre de 2001 y el 11 de Marzo de 2004.

Las transformaciones coinciden temporalmente con la segunda legislatura del gobierno de Aznar (2000-2004) y con relevo del PSOE en la VIII legislatura (2004-2008). Aunque podamos encontrar claras diferencias en el modo de gestionar la seguridad de uno y otro gobierno, es fundamental el hecho de que, para ambos, tanto la seguridad en relación con el contexto exterior como la propia lucha contra ETA han sido prioridades de la agenda de gobierno. En este ámbito, los dos momentos de reflexión y cambio institucional en torno a la configuración de la seguridad interior y exterior han estado vinculados a la creación del CNI y a la Comisión del 11M. El principal cambio posterior al 11 de Septiembre es la reforma del Centro Nacional de Inteligencia que vino a suceder al Centro Superior de Información de la Defensa-CSID, salpicado a lo largo de los noventa por numerosos escándalos de corrupción y actividades ilícitas. La creación de este organismo en 2002 (Ley 11/2002) se fundamentó en la necesidad de mayor eficacia para la gestión de nuevos riesgos y amenazas nacionales e internacionales, y con el fin someter al control parlamentario dicho organismo. Su creación no es consecuencia directa de los episodios del 11S sino que estaba ya recogida en el programa del PP en 1996.

España no contaba con una “comunidad de inteligencia” en tanto sistema de agencias y organizaciones de seguridad coordinadas para la producción de información y análisis sobre riesgos y amenazas para la seguridad interna y externa del país. Por ello, esta reforma era una asignatura pendiente de la configuración de la seguridad española (Díaz Fernández, 2006). Díaz Fernández señala en consecuencia cómo los episodios del 11S sí tuvieron un papel interviniente en el impulso dado a la creación del CNI en 2002³²⁷. La reforma se justificó, en parte por el 11S, porque este episodio evidenció una falta de adecuación de las estructuras existentes a un nuevo tipo de amenazas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia en la lucha contra el terrorismo. La reconfiguración de la seguridad debía pasar por nuevas fórmulas que superasen la organización clásica de los ministerios de Interior y Defensa y que estuvieran a medio

³²⁷ No puede olvidarse cómo la reforma del CNI fue la primera medida anunciada por el Presidente del Gobierno, tras el Consejo Europeo extraordinario en Septiembre de 2001. [Intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, para informar sobre el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas. Pleno del Congreso de los Diputados. 26/09/2001: <http://www.jmaznar.es/discursos/pdfs/01854A1854.pdf>]

camino entre lo policial y lo militar. De ahí, que una de sus principales innovaciones sea la desmilitarización del organismo a pesar de su adscripción al Ministerio Defensa.

Por otra parte, si el CSID se había configurado a lo largo de los ochenta y noventa, primero orientado a las amenazas de involución de la transición y después hacia la lucha contra ETA; ahora los nuevos riesgos diagnosticados para el siglo XXI eran mucho más heterogéneos e inespecíficos, siendo otra de sus innovaciones fundamentales la proyección internacional. Ello se concretó en el fomento de la presencia en el extranjero (por la vía de las oficinas diplomáticas) y la cooperación con agencias de inteligencia de otros Estados. Después del 11 de Marzo de 2004 los cambios fueron mucho más significativos. No en vano se trató de un episodio que afectó directamente a la seguridad interior española y que evidenció la necesidad de una reconfiguración de las estructuras previas. Según Reinares (2010) el 11M había puesto de manifiesto que el terrorismo global no había sido prioridad gubernamental.

En la opinión pública prevalecía la idea de que los atentados eran consecuencia de la participación española en la invasión de Irak pero también, aunque de modo más minoritario, de que ETA estaba detrás de la autoría de los atentados. Entre ambas visiones, en el Ministerio del Interior configurado después de elecciones de 2004 se percibió con claridad que este nuevo fenómeno constituía una verdadera y duradera amenaza (Reinares, 2010). Así lo expresó el propio ministro en sede parlamentaria³²⁸.

Los cambios institucionales implementados para la lucha contra el terrorismo después del 11-M han tenido una clara continuidad en las dos legislaturas del PSOE a través de la figura del Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho (ministro del Interior en 2011), evidenciando una clara voluntad de priorizar la agenda lanzada tras la crisis pero también de dar continuidad y estabilidad a la misma, lo que parece haber repercutido en la efectividad de la lucha antiterrorista. Las principales decisiones adoptadas fueron informadas por expertos el Ministerio del Interior y de las FCSE y

³²⁸ “Señorías, si los gravísimos atentados de Bali, Casablanca, Estambul y Madrid fueron sucesivamente la confirmación extrema y brutal de la presencia y capacidad operativa de este movimiento terrorista, los atentados de Londres nos han recordado que la amenaza está consolidada, que es persistente y consistente (...) (debemos) poner en marcha una serie de medidas que si bien no eliminan la amenaza, sí deben permitirnos estar más preparados para responder a esa amenaza a nuestra seguridad, por tanto, a nuestra libertad y a los valores democráticos que la sustentan, a nuestro modo de vida, a nuestro progreso, a la seguridad y a la libertad también de nuestros aliados”. Comparecencia del Ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 2005. *Diario de Sesiones: Las previsiones del Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de investigación del 11-M* (nº de expediente 213/999408: pp4].

estuvieron orientadas en dos direcciones fundamentalmente: 1) potenciar en medios y dotación de personal a las unidades de información exterior (terrorismo internacional); 2) potenciar la inteligencia, la creación de una estructura profesional de información, análisis y evolución de riesgos.

A partir de 2004, dos nuevos actores entran a formar parte de la “comunidad de inteligencia”:

Por un lado, se constituye el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (CEMU). Este órgano tiene una función de coordinación informativa y operativa³²⁹. Sus decisiones tienen carácter directivo sobre las Fuerzas de Seguridad y vela por la actuación integrada de los cuerpos policiales y la coordinación orgánica y operativa del CNP con la Guardia Civil en la cooperación policial internacional, la seguridad ciudadana, las tareas de información e investigación, policía judicial, infraestructuras y material.

Entre sus actividades están la aprobación de planes estratégicos de los centros directivos (prevención y lucha contra el terrorismo), asegurar la coordinación y unidad operativa del CNP y la Guardia Civil, e impulsar la creación de unidades conjuntas especiales. En definitiva, la práctica totalidad de las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo han sido acordadas en el seno de este comité, al que por otro lado, se asignaron de modo extraordinario cuantiosos recursos humanos, económicos y materiales. (Reinares, 2010).

La otra gran innovación de la seguridad en España ha sido la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Esta agencia nace de una dinámica posterior al 11-S, que se ha difundido en diversos países (Díaz Fernández, 2006), orientada a establecer centros contrterroristas específicos por recomendación de la propia Comisión del 11-S. El Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2004 aprobó su creación como parte de un Plan de Lucha Antiterrorista que permitirá impulsar una nueva estrategia en la actuación frente a todas las formas de terrorismo, sea cual fuere su origen. El CNCA es un órgano complementario y auxiliar de las FCSE pero sin ser un tercer cuerpo de seguridad. Trata de potenciar la estructura de lucha contra el terrorismo ya existente y mejorarla con un centro de información y análisis que ejerce funciones de inteligencia, información y coordinación. Ésta es una estructura técnica, y

³²⁹ Formado por el secretario de Estado de Seguridad, que la preside, y los directores de la Policía, la Guardia Civil, de la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad y el gabinete del ministro del Interior.

no política, que depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado ya citado. Es una agencia, por tanto, que recibe, procesa y valora la información estratégica disponible sobre todo tipo de terrorismos que se consideran amenazas para España e identifica los escenarios posibles de intervención y planificación de respuestas. Trabaja con la información que recibe de los cuerpos a su mando y tiene acceso a las bases de datos del CNP, Guardia Civil y CNI. Por la propia dinámica de la que surge, tiene una proyección internacional importante habiendo establecido vínculos con sus servicios secretos gemelos de bastantes países de la UE y sobre todo de EEUU. Presenta informes relativos tanto al terrorismo internacional como al nacional.

Ambas agencias tenían por objetivo fundamental la adecuación de las capacidades de inteligencia para la lucha antiterrorista y el reforzamiento de la coordinación entre las FCSE, a la luz de la descoordinación mostrada en el 11-M. Pero también trataban de evitar la ineficacia de la política antiterrorista, en virtud de una experiencia previa en la que las subculturas corporativas y las rivalidades institucionales (Jaime Jiménez, 2002), en el caso del CNP y de la Guardia Civil con relación a la lucha contra ETA habían afectado a su efectividad.

Además de la creación de estas dos agencias, se puso en práctica el principio de disponibilidad de información mediante un sistema de bases de datos policiales compartida que centraliza el CEMU y se elaboró un Plan Operativo de Lucha contra el Terrorismo con los siguientes objetivos: maximizar las capacidades de inteligencia, potenciar las capacidades de prevención y protección antiterrorista, impedir el acceso a recursos económicos, protección y seguridad en los transportes, refuerzo de la cooperación internacional³³⁰. La mayoría de estos objetivos están basados en las nuevas directrices de seguridad de la UE desarrolladas después del 11S y del 11M respectivamente. En este sentido, se puede decir que España se situó a la cabeza de los

³³⁰ En el CNP y la Guardia Civil ha habido un aumento importante de puestos de trabajo (para prevención y lucha contra el Terrorismo). En la legislatura (2004-2008) se incorporaron 1000 policías cubriéndose así las necesidades estimadas por las FCSE para prevenir y combatir el terrorismo global. Esto no ha supuesto una mengua en el monto de agentes dedicados a ETA, sino que la plantilla de los servicios antiterroristas de las FCSE aumentó cerca de 35% en 2004-2008 (aunque 3 de cada 4 fueron al servicio exterior). El crecimiento de los recursos humanos en servicios y unidades de información exterior (terrorismo internacional) ha sido en el CNP del 72% y en la GC del 22%. Además ha habido una adaptación del tipo de personal necesario para la heterogeneidad de las amenazas (infiltrados, traductores, agentes de etnias musulmanas). (Reinares, 2010).

países que adaptaron los parámetros de la seguridad interior y exterior con mayor diligencia³³¹.

Queda claro que los principales cambios posteriores al 11-M están orientados a la adaptación de las estructuras de la seguridad a “nuevas amenazas”³³². Por ello, es muy llamativo el hecho de que, tras treinta años de experiencia en la lucha contra ETA, nunca se hubieran desarrollado agencias de coordinación informativa y operativa que sistematizaran el trabajo de las FCSE. Los expertos coinciden en señalar que los principales cambios en la configuración de la seguridad interior se produjeron más bien después del 11-M. Pero como ya hemos señalado en lo que respecta a cambios de carácter legislativo, el 11-S sí es un referente internacional que ha afectado a las dinámicas internas. Ello nos podría permitir plantear que el 11-S fue aprovechado para dar proyección internacional a la lucha contra ETA y para lograr el respaldo de la comunidad internacional a un conjunto de medidas que ya venían desarrollándose, mientras que el 11-M, al evidenciar la heterogeneidad de las amenazas y las dificultades estructurales para afrontarlas, ha tenido un efecto más claro en la reconfiguración de las agencias de seguridad.

Con todo, y aunque aparentemente toda esta reconfiguración de la seguridad esté orientada a la lucha contra el terrorismo internacional de carácter religioso, no solo no se ha bajado la guardia con ETA sino que ésta se ha diversificado y sigue afectándola profundamente. ETA ha seguido estando en el centro de la política antiterrorista a lo largo de la última década y una mirada rápida a los resultados de la lucha antiterrorista permite evaluar además la efectividad con la que se ha trabajado tanto desde el ámbito de la seguridad como desde la vía penal³³³.

Antes de abordar la cooperación internacional como parte de la política antiterrorista, habría que mencionar aún dos estrategias: la política penitenciaria y la negociación política. La política penitenciaria es probablemente el ámbito de dicha política que menos se habría transformado en los últimos años, puesto que el cambio

³³¹ Congreso de Los Diputados. 2005. Pleno. *Diario de Sesiones: Las previsiones del Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de investigación del 11-M. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (nº de expediente 213/999408)*. 407. 27 de Octubre de 2005.

³³² Hay que evidenciar también que aunque aquí se subraya esencialmente lo relativo a la lucha antiterrorista, cuando se definen las amenazas desde las agencias de inteligencia y seguridad se suele hablar de terrorismo, crimen organizado, y otras formas de “delincuencia” global como las “nuevas amenazas”. Por otro lado, éstas coinciden con las señaladas por las estrategias de seguridad a nivel europeo y, en todo caso, se suelen recoger en la expresión “nuevos riesgos, nuevas amenazas, nuevas respuestas”.

³³³ Véase anexo.

estratégico fundamental se produjo a lo largo de los años noventa con la llamada “política de dispersión” (aplicada desde 1987). Dicha medida se complementó dos años más tarde con la concesión de beneficios penitenciarios a los dispuestos a abandonar el terrorismo. Posteriormente, las políticas de “tolerancia cero”, y sobre todo la ley para el cumplimiento íntegro de las penas y reforma del CP 2003 eliminarían dicha opción.

A lo largo de esta década, se ha mantenido la dispersión habida cuenta de la efectividad cosechada en términos de fragmentación de la organización. Y si bien en la legislatura 2008-2011, siendo Alfredo Pérez Rubalcaba ministro del Interior, se ha reintroducido la figura del arrepentimiento con el fin de lograr la desvinculación de la organización por parte de aquellos presos disidentes proclives al abandono de la violencia, dicha medida está siendo bastante cuestionada por las organizaciones de víctimas y las del llamado “bloque constitucionalista”, más partidarias de la aplicación de las políticas de endurecimiento penitenciario iniciadas a principios de la década³³⁴. Esta política tiene como finalidad dividir a los reclusos de ETA y facilitar el abandono del terrorismo, debilitando así a una organización cuya presencia en las cárceles es más visible que fuera de ellas (con una cifra aproximada de 750 presos)³³⁵. Por otro lado, hay que hacer mención por último a una estrategia -la negociación política- que dentro de la política antiterrorista es quizá la de menor carácter estructural y más sujeta a las coyunturas políticas y a las propias dinámicas gubernamentales y de la organización ETA.

El periodo que analizamos se inició con una tregua “indefinida y sin condiciones” de ETA que duró hasta agosto de 1999 en el marco de la cual se produjeron conversaciones del gobierno del PP con la organización ETA en la ciudad de Zurich³³⁶.

³³⁴ Una crítica de dicha política que recoge el descontento de las víctimas véase en Buesa, M (2010).

³³⁵ Así, la prisión alavesa de Nanclares de Oca se ha convertido en los últimos cinco años en el corazón de la disidencia de la organización y centro donde se recluyen aquellos presos que se están acogiendo al arrepentimiento, y la desvinculación organización. Véanse: «Siete internos de ETA acceden a permisos regulares y aspiran a la prisión atenuada», *Diario El País*, 19 de julio de 2010; Melchor Sáiz-Pardo: «Interior cree que la disidencia en ETA alcanza casi a un centenar de presos», *Diario El Correo*, 20 de julio de 2010; Melchor Sáiz-Pardo: «Interior acerca al País Vasco a la terrorista más sanguinaria de toda la historia de ETA tras dejar la banda», *El Correo*, 29 de julio de 2010; Fernando Lázaro: «Interior acerca a dos etarras condenadas por 23 asesinatos», *El Mundo*, 30 de julio de 2010; Ángeles Escrivá: «Nanclares acoge a 19 etarras que firmaron cartas pidiendo perdón», *El Mundo*, 1 de agosto de 2010; y Fernando Lázaro: «Txelis, ideólogo de la ETA más dura, pronto en semilibertad», *El Mundo*, 8 de agosto de 2010.

³³⁶ En la única conversación de Zúrich participaron los etarras Mikel Antza, entonces jefe del aparato político de la banda, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalba, que había estado también en las negociaciones de Argel. Por parte del Gobierno, acudió una delegación integrada por el secretario general

La tregua estuvo precedida por un amplio rechazo social tanto en el País Vasco como en el resto de España posterior a los episodios de Ermua, por el inicio del cerco judicial a las organizaciones del MLNV, y por un acuerdo entre fuerzas políticas nacionalistas en el que las partes se comprometían a lanzar un proyecto soberanista y tratar de atraer a dicho movimiento a las vías democráticas. En su dimensión internacional, estuvo enmarcada en el contexto del éxito del proceso norirlandés de Stormont (1998) y de los Acuerdos de Viernes Santo que iniciaban el fin de treinta años de violencia en el Ulster.

Más allá de las implicaciones de este proceso para los distintos actores sociales y políticos, que veremos en los próximos capítulos, baste aquí señalar que supuso un antes y un después en la comprensión social de la negociaciones. A partir de este momento, y con la creciente demanda social y política de endurecimiento de la política antiterrorista -recogida en el Pacto por las Libertades-, las dificultades para afrontar y hacer creíble a la opinión pública la posibilidad de acabar con la violencia por la vía de la negociación han sido manifiestas.

En Marzo de 2006, ETA declaró un “alto el fuego permanente”³³⁷ y en Mayo de 2006, el Congreso de los Diputados -con la única oposición del PP- autorizó al

de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor personal de Aznar, Pedro Arriola.

EL Mundo contó además que, tras la reunión de Zúrich con la cúpula etarra, los representantes del ejecutivo se reunieron inmediatamente con José María Aznar en La Moncloa para contarle lo ocurrido. Acto seguido, en otra reunión, defendieron ante el presidente la necesidad de hacer un gesto en política penitenciaria para dar más solidez al proceso de diálogo. A pesar de las voluntades negociadoras, este intento de los 'populares' por terminar con la violencia tampoco consiguió dar frutos. ETA se negó a seguir adelante con los contactos y, en noviembre, anunció a través de un comunicado que rompía la tregua. En él atribuía la responsabilidad de la ruptura del camino a la paz al PNV y EA por "no avanzar en los objetivos de la construcción nacional", que la banda quiso compaginar con las conversaciones con el Ejecutivo sobre los presos. El primer atentado mortal tras este paréntesis se produjo en enero de 2000 y le costó la vida al teniente coronel del Ejército, Pedro Antonio Blanco García. Diario *El Mundo Digital*: Especial: ETA la dictadura del Terror. <http://www.elmundo.es/eta/negociaciones/aznar.html> .

³³⁷ Los barómetros 2303 de septiembre de 1998 y 2640 de abril de 2006 nos permiten comparar la acogida en la opinión pública de los dos procesos señalados:

En ellos podemos ver también el reflejo de cierto convencimiento arraigado de que la vía policial es más efectiva (no es posible medir si más aceptable) que la vía de la negociación.

La tregua de 1998 fue acogida fundamentalmente con escepticismo (61.2% de los entrevistados) mientras que sólo un 31.5% de la población española la recibió con esperanza. Las causas que se atribuían a la situación de tregua estaban vinculadas por un lado a las movilizaciones ciudadanas (43,1%) y a la actuación policial (42.6%). Y predominaban las actitudes que veían poco o nada probable que una negociación pudiera acabar con el problema de la violencia en el País Vasco (58.1%).

En 2006, la tregua se acogió con mayor esperanza (43,1 %), aunque predominaba el escepticismo, por más que se hubiera reducido casi 12 puntos (53, 9%). Las causas que se atribuían a la situación de tregua estaban vinculadas en mayor medida a la actuación policial (56.7%) que a la movilización ciudadana (40.7%) y, en todo caso, había aumentado casi diez puntos el número de opiniones que veían poco o nada

Gobierno para emprender un diálogo con la banda terrorista siempre que ésta abandonara la violencia. Tras casi tres años sin víctimas mortales, habiendo mediado en primer lugar la ilegalización en cascada de la mayoría de las organizaciones del MLNV, la pérdida de apoyos sociales del mismo, el indudable incremento de la presión policial sobre ETA, el 11-M y sus efectos en las percepciones sobre las posibilidades de la violencia y la declaración de Anoeta (noviembre de 2004) en virtud de la cual la izquierda abertzale lanzaba un hipotético compromiso con las vías exclusivamente pacíficas y siendo la coyuntura internacional claramente diferente, este proceso parecía estar abonado por condiciones más fértiles para un final dialogado de la violencia. En Diciembre de 2006, una bomba colocada en la Terminal 4 del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, acabó con dicho proceso, cerrando así las posibilidades para el gobierno de cualquier intento negociador³³⁸.

Con todo, el periodo que duró este proceso estuvo jalonado por importantes movilizaciones contra el mismo por parte de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones del movimiento constitucionalista – fundamentalmente el Foro de Ermua- y del Partido Popular en la oposición. El argumento principal fue siempre la ruptura del pacto antiterrorista, del consenso que se había logrado en torno a la idea de la no negociación y de que sólo la vía policial y judicial era legítima para lograr el final de ETA. Tras el final de dicho proceso, la política antiterrorista volvió a estar centrada en sus elementos más estructurales (la actividad policial y judicial) obteniendo importantes éxitos en ambos campos y, aunque en 2010 ETA declaró una tregua “permanente, general y verificable”, esta vez la política gubernamental no parece haberse apartado de la estrategia policial-judicial, como por otro lado reivindican el entonces partido de la oposición (PP) y las organizaciones de víctimas y constitucionalistas.

probable que se lograra una solución a la violencia por la vía de la negociación (49%) frente a un 42. 3% que veía muy o bastante probable que pudiera llegarse a un final dialogado de la violencia.

Es reseñable, por tanto, el modo en que la actuación policial se ha revalorizado en la opinión pública en los últimos 12 años aun cuando se percibe que un proceso de negociación puede ser efectivo.

³³⁸ Véase: Aizpeiolea, Luis. 2011. "Así fue el diálogo con ETA en 2006." *Diario el País*, 29/03/2011.;

Un texto de referencia para comprender el proceso de 2006 es: Murua Uría, M. 2010. *El triángulo de Loiola* Donostia: Ttarttalo.

5. 2. 3 Cooperación internacional

La cooperación internacional ha sido sin duda la dimensión de la política antiterrorista que más se ha desarrollado en la última década, y que ha estado más atravesada por el impacto de las nuevas formas de violencia global, en concreto por los episodios de 11-S, 11-M, 7-J. Como vimos en el capítulo tercero, esta cooperación antiterrorista se fue convirtiendo a lo largo de los noventa en un aspecto fundamental de las agendas de los distintos gobiernos españoles. Consolidada la cooperación franco-española en el marco de la bilateralidad, se imponía cada vez más, la necesidad de buscar la alianza de la comunidad europea con el fin de hacer más efectiva la labor policial y judicial contra ETA.

Si retomáramos algunas de las ideas que hemos ido apuntando al narrar las transformaciones en la política antiterrorista durante la última década, podemos subrayar dos dimensiones fundamentales para ésta en lo relativo a la cooperación internacional. Por un lado, el papel que España ha jugado, tanto en la proyección internacional de sus propias estrategias antiterroristas, como en el impulso de la agenda europea de seguridad vinculada al Espacio Europeo de Seguridad (parte del llamado Tercer Pilar). Por otro, el efecto que las propias dinámicas internacionales, y en concreto europeas, ha tenido en la reconfiguración tanto del marco legislativo como de la configuración de la seguridad interior en España.

Si consideramos el marco de la multilateralidad y nos fijamos en el espacio de la UE, entre el Consejo Europeo de Tampere en 1999, en el que se discutió la constitución del Espacio Jurídico Europeo como parte central del Tercer Pilar con una importante participación del gobierno español³³⁹, y la Presidencia Española de turno en la UE (2002) mediaron de una manera significativa los episodios de 11-S. La UE ha avanzado comparativamente mucho más en la lucha antiterrorista desde el 11-S que en la década anterior y, en parte, gracias a las actuaciones de España (Mestres, 2001). En concreto, España ha presionado históricamente por el fortalecimiento de lo que hoy se denomina espacio de seguridad y que a finales de los años noventa se consideraba el Tercer Pilar de la UE. En especial por la adopción de estrategias antiterroristas de cooperación aplicables por todos los estados miembros.

³³⁹ “Aznar pide la supresión del delito político para denegar la extradición entre países comunitarios”. Diario *El Mundo* 15/10/1999.

A partir de los episodios del 11-S España se convertiría en un actor clave en el nivel de desarrollo de dichas medidas en tanto que la cooperación judicial y policial que venía demandando pasó a ser un área de interés prioritario (Collantes, 2008). Desde los primeros momentos de la crisis de 2001, el presidente del gobierno se situó como líder comprometido en la lucha contra el terrorismo, expresando una voluntad de potenciar la cooperación a escala internacional, y evidenciando, a través de sus múltiples intervenciones, una especial solidaridad pero también conocimiento del fenómeno terrorista³⁴⁰. Este compromiso se manifestó en dos dimensiones fundamentales.

Por un lado, España se sumó a la coalición internacional antiterrorista promovida por EEUU, la UE y la OTAN. Esta coalición, que devino en el recurso a la vía militar, supuso la participación española de varias maneras: 1) apoyo político y diplomático tanto en la ONU, OTAN, UE como en las relaciones con el mundo árabe³⁴¹; 2) apoyo policial y de los servicios de inteligencia; y 3) oferta de colaboración militar en Afganistán (Mestres, 2001). Más tarde, en 2003, España se implicaría también en el envío de tropas a Irak, esta vez sin el consentimiento de Naciones Unidas y con un alto grado de disconformidad en la opinión pública y la clase política española³⁴².

Por otro lado, España ejercía la presidencia de turno de la UE (2002) cuando, en el periodo posterior al 11-S, se acordaron medidas sobre dos demandas históricas de la agenda española: la *Euroorden* (sistema de detención automática y extradición a los países de la UE) y la implantación de *Eurojust* (cuerpo de coordinación para la instrucción judicial). Pero también se decidió sobre aspectos relativos a la seguridad del

³⁴⁰ "Los ataques de EEUU demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto de lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca." [Intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, en su conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro de Estonia, Maart Laart, 11 de Septiembre de 2001, Tallín, (Estonia); Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores].

³⁴¹ La visita de Aznar a Túnez, 24 de Septiembre, siendo el primer líder occidental que viajaba al mundo árabe desde 9/11 es significativa en este sentido.

³⁴² El respaldo inicial a las actuaciones del gobierno español del PP vino de parte de los principales partidos. Las críticas del PSOE se basaron en la falta de suministro de información del gobierno a los partidos y en ausencia de liderazgo de Aznar para promover el desarrollo de una coalición internacional no sólo contra el terrorismo sino contra sus causas y por la implicación del Estado en una guerra sin autorización del parlamento.

Por otro lado la opinión pública española se mostró preocupada por los acontecimientos, proclive a establecer reformas legales y del ámbito de la seguridad en 2001. Más de un 80% de los españoles estaba a favor de una coalición internacional contra el terrorismo. En concreto, más de la mitad habría estado a favor de que España participara en algún tipo de acción militar. Estas actitudes cambiarían significativamente en 2003 cuando se produjeron las manifestaciones más masivas contra la guerra de Irak. [CIS, barómetro- especial atentados de Nueva York- octubre 2001].

espacio aéreo, sobre temas de financiación y blanqueo de capitales y fundamentalmente, se adoptó la Decisión Marco de 2002, relativa a la lucha antiterrorista. Esta decisión histórica aproximaba una definición sobre el delito, las penas y las sanciones vinculadas con el terrorismo, teniendo efectos en la armonización de las diferentes legislaciones³⁴³.

Sin duda, donde España ha ejercido una presión más fuerte ha sido en la elaboración de listas de organizaciones terroristas por parte de la UE, así como para la inclusión de ETA en la lista del Gobierno de los EEUU. Aznar consiguió el compromiso en el Consejo Europeo de Gante (19 octubre de 2001); una lista en la cual se encontraría ETA (y posiblemente su entorno), con lo que España conseguiría cortar el suministro financiero de ETA y, además, implicaría a los países de la UE en la lucha contra el terrorismo, y sobre todo, contra ETA. En 2003, Batasuna fue incluida en dicha lista y antes que ella las organizaciones juveniles del MLNV: Jarrai, Haika y Segi³⁴⁴, constituyéndose en un logro fundamental para la lucha contra ETA, resultado del nuevo marco normativo.

Independientemente de las transformaciones en el marco del multilateralismo que han sido de gran envergadura, los arreglos bilaterales con los distintos países europeos con los que España ha venido cooperando (Francia fundamentalmente), el fortalecimiento de las relaciones antiterroristas en regiones como América Latina y Magreb, o el establecimiento de nuevas relaciones de cooperación en Oriente Medio y Asia-Pacífico continúan siendo el ámbito de cooperación más efectivo, por el carácter confidencial de la información que se intercambia. (Reinares, 2008)³⁴⁵. Con respecto a EEUU, la alineación en la coalición internacional contra el terrorismo condujo, probablemente, al desarrollo de una más estrecha relación que ha trascendido la

³⁴³ Estas medidas ya se presentaron con detalle en el capítulo 4.

³⁴⁴ [Posición común 2003/482/PESC del Consejo de Europa, de 27 de junio de 2003. Lista de personas y organizaciones terroristas.](#)

³⁴⁵ Uno de los principales problemas que afloran con la “explosión” de las instancias de la cooperación antiterrorista en la última década, tiene que ver con la necesidad de hacer un balance entre la preservación de la soberanía y las necesidades de la dependencia (Navarrete Paniagua, 2010). La inteligencia (información y análisis) es costosa y requiere de mecanismos sofisticados y de larga experiencia. A menudo, compartirla supone un menoscabo de la soberanía y de los propios servicios de información. Por ello, es tan complicado articular bases de datos compartidas entre países e incluso entre agencias de un mismo país (como se ha evidenciado hasta muy recientemente entre la Guardia Civil y el CNP en la lucha contra ETA).

cooperación judicial y policial³⁴⁶. Sin embargo, dicha cooperación se ha consolidado y fortalecido, a pesar de las tensiones diplomáticas en la VIII y IX legislaturas (PSOE)³⁴⁷.

A partir de 2004, con el cambio del gobierno, España ha mantenido su compromiso con la cooperación antiterrorista mostrándose muy activa en la línea de la participación española en las legislaturas precedentes: proyectando e impulsando la agenda de la cooperación en el Consejo de Ministros de la UE (JAI); llevando algunas de las iniciativas españolas tras el 11M al Tercer Pilar; siendo pionera en la trasposición normativa de las directivas comunitarias al ordenamiento jurídico; y en definitiva, situándose en la vanguardia de los países que se implican en asuntos de seguridad comunitaria³⁴⁸.

En opinión de las élites políticas españolas, la cooperación internacional dirigida por España y sus efectos en la lucha antiterrorista, la han convertido en pionera en el impulso de esta vía de colaboración, experta en los mecanismos de la lucha antiterrorista haciendo valer la sujeción de las estrategias policiales al Estado de Derecho como pieza fundamental del “spanish way”, y solidaria con los países en los que ocurre el fenómeno terrorista. Por otro lado, la mayoría coincide en señalar cómo el cambio de contexto, atravesado por los episodios del 11-S y el 11M fundamentalmente, ha sido esencial para el impulso de la cooperación tanto bilateral como multilateral³⁴⁹.

5. 3 Efectos de las transformaciones en las estrategias contra el terrorismo

Antes de recapitular lo narrado hasta aquí quisiera hacer un mínimo balance del impacto de las transformaciones señaladas tanto en el ámbito penal como en la configuración de la seguridad y en la cooperación- en la política antiterrorista, sobre la organización ETA, el MLNV y, en definitiva, sobre el mundo de la violencia en el País Vasco.

³⁴⁶ “Aznar y Bush relanzarán la cooperación antiterrorista el fin de semana en Camp David”: Diario *El País*, 02/05/2002; Cernuda, O: *Ciberspionaje ¿Echelon contra ETA?* Diario *El Mundo*, 15/06/2001; “US offers to spy on ETA for Spain”: *The Guardian*, 15/06/2001.

³⁴⁷ “España y EEUU firman un convenio sobre cooperación antiterrorista” Diario *El Mundo*, 17/12/2004. “Los ministros de Justicia e Interior abordarán la cooperación policial y judicial entre la Unión Europea y Estados Unidos”: Nota de Prensa. Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales - Gabinete de Prensa. 08/04/2010: http://www.mir.es/gl/DGRIS/Notas_Prensa/Ministerio_Interior/2010/np040805.html

³⁴⁸ Congreso de Los Diputados. 2005. Pleno. *Diario de Sesiones: Las previsiones del Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de investigación del 11-M. A solicitud del Grupo Parlamentario de izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per catalunya Verds (nº de expediente 213/999408)*. 407. 27 de Octubre de 2005.

³⁴⁹ Un texto de referencia para conocer las opiniones de líderes políticos, representantes de las instituciones del Estado y expertos de las agencias de seguridad en relación a la lucha antiterrorista y a la dimensión internacional de la misma es el de Garzón (2006).

Las tres principales transformaciones de la política antiterrorista se han producido en la última década en tres frentes: por un lado en relación con la vía penal, lo que podríamos llamar el “frente judicial” de la lucha antiterrorista; por otro, en lo que respecta a la configuración de las agencias de seguridad, “el frente policial”; y, finalmente, las vinculadas a la cooperación internacional “frente internacional”. En todos ellos, hemos señalado un proceso que revela una menor tolerancia con comportamientos vinculados a la violencia y, por otro lado, un mayor respaldo social y político en forma de consensos en torno al modo de enfocarlos.

Los principales efectos de estas transformaciones se han producido sobre la propia organización ETA, pero también sobre su comunidad social de referencia, el “entramado” de organizaciones que lo apoyan. Por ello, podemos hablar de consecuencias importantes sobre el MLNV en la última década.

En lo que respecta a la propia organización ETA, se constata en la última década una intensa actividad policial y una cada vez menor actividad violenta³⁵⁰. Si hasta 1997, la actividad policial solo se orientaba hacia las estructuras militares de la banda terrorista, a partir de ese momento, el esfuerzo de las FCSE también se dirige contra las estructuras y organizaciones que se entiende complementaban la acción de la banda terrorista. La eficacia en la lucha contra las estructuras operativas de ETA también ha aumentado y las operaciones contrterroristas realizadas tanto en España como en Francia han afectado considerablemente al funcionamiento de los aparatos de ETA en Francia, especialmente a los aparatos “militar” y “logístico”³⁵¹.

³⁵⁰ Véase anexo.

³⁵¹ Según datos del Ministerio del Interior: entre 1996 y 2003 un total de 24 comandos legales desarticulados y 29 ilegales. Se dismantelaron cinco redes de captación e infraestructuras y se detuvo a 634 presuntos miembros o colaboradores de ETA. Entre 2004 y 2008 el total de presuntos miembros o colaboradores de ETA detenidos ascendió a 590 y un total de 149 los detenidos por colaboración en la *kale borroka*.

[http://www.interior.gob.es/DGRIS/Terrorismo de ETA/Operaciones de Lucha Antiterrorista/cuadro7.html](http://www.interior.gob.es/DGRIS/Terrorismo%20de%20ETA/Operaciones%20de%20Lucha%20Antiterrorista/cuadro7.html)

En 2008 se alcanzó la cifra más alta de presos de ETA en cárceles españolas y francesas. Un total de 614 presos en los centros españoles y más de un centenar en centros franceses debido a la intensa colaboración policial y judicial de las autoridades de aquel país. De aquéllos que están en centros penitenciarios españoles, 413 cumplen condena y el resto (un total de 210 en 2008) estaban en situación de prisión preventiva a la espera de juicio. Véase: “Las cárceles albergan el mayor número de etarras de la historia”. Diario *El País*, 14/11/2008.

Por otro lado, se calcula que más de un centenar de presos de ETA (y esto parece ser un proceso creciente) están desvinculados de la organización y del colectivo de presos. Véase: “ETA se rompe en las cárceles” Reportaje, Diario *El País*, 10/10/2010.

Por otro lado, la desarticulación de los comandos que la banda terrorista logra introducir en territorio español es cada vez más rápida y se une a continuas y siempre más veloces desarticulaciones de las estructuras directivas en territorio francés. Las operaciones policiales de los últimos años han alcanzado con mucha frecuencia a los cuadros dirigentes y a la base. Es decir, están dirigidos contra la cabeza y contra los miembros ejecutores (González Bueno, 2004).

Entre los principales efectos que dichas operaciones parecen tener sobre la organización debo mencionar los siguientes:

a) Un sentimiento de infiltración y la necesidad de ETA de recomponer estructuras en Francia.

b) La imposibilidad de implantación de una cúpula directiva estable.

c) La necesidad de reestructuración interna de sus aparatos frente a las continuas “caídas” y al sentimiento subjetivo de infiltración. ETA ha aumentado la organización y compartimentación de cada uno de sus aparatos, incluyendo el desdoblamiento de los más importantes para que no se interrumpa la actividad armada.

d) Una preocupación obsesiva por la seguridad dentro de sus estructuras, que dificulta la actividad operativa según Martínez Zagoza, (2004).

Con respecto al MLNV, se pueden rastrear ya desde 1997 intentos pioneros en la Audiencia Nacional de extraer consecuencias penales de la colaboración con el terrorismo, cuando se ilegaliza por primera vez la Mesa Nacional de HB con todos sus dirigentes. Esta decisión fue posteriormente reprobada por el TC constitucional, como hemos visto. Sin embargo, podemos apuntar algunos ejemplos de lo que las sucesivas reformas penales de 2003 y la aprobación de la LOPP en 2002 han supuesto para el MLNV:

1- La ilegalización de HB y Batasuna por sentencia del TS 7/03/2003. A partir de ahí y a pesar de que el PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) lograra entrar en el parlamento vasco en 2005 con 9 escaños y de que la formación ANV pudiera entrar en las elecciones municipales de 2007, se han sucedido las ilegalizaciones de la diferentes siglas de la izquierda abertzale oficial: HB, EH, ANV, D3M, Askatasuna³⁵².

³⁵² “Garzón ilegaliza Gestoras Pro Aministía por ser “parte integrante” de la banda terrorista ETA.” *Diario ABC* 20/12/2002.; “Garzón ilegaliza Ekin mientras la Audiencia excarcela a sus líderes” *Diario El Mundo* 5/04/2001.; Garzón Ilegaliza Haika, como ejecutora de la “kaleborroka” en integrada en ETA” *Diario ABC*, 10/05/2001.; “Garzón ilegaliza también a Askatasuna y Segi por su vinculación con ETA”: *Diario El País*, 06/02/2002.; “Garzón ordena el cierre de las sedes y locales de Batasuna para los

2- Se han abierto” macro-juicios contra supuestos colaboradores de la organización ETA. Así, los sumarios 18/98³⁵³ (caso *Kas, Ekin, Xaki*) y el caso *Jarraí-Haika-Segi* son dos de los más polémicos y significativos, en los que la categoría de terrorismo parece haberse aplicado con mayor laxitud. Por otro lado, todas estas organizaciones se encuentran hoy en la lista europea de organizaciones terroristas.

Se han abierto procesos contra otras iniciativas vinculadas a la izquierda abertzale. En concreto, puede mencionarse el caso *Udalbiltza* (asamblea de electos en municipios abertzales) desmantelada en 2003 por orden de la Audiencia Nacional y absuelto en 2011³⁵⁴.

3- Cierre de periódicos. El cierre de *Egin* (1998) reveló una clara intención de abordar los elementos más visibles del MLNV. En 2003 el cierre de *Egunkaria* se convirtió en una de las acciones más polémicas de la Audiencia Nacional. El fiscal retiró la acusación en 2006 por considerar que no existían indicios de que perteneciera a la estructura de ETA)³⁵⁵.

El resultado de dichas políticas para el MLNV se ha traducido en una clara debilidad estructural y funcional (CNI, 2004; Martínez Zagoza, 2004) en precariedad económica³⁵⁶ y en pérdida de influencia social y política. El aislamiento político ha sido el resultado más claro de esta estrategia que ha logrado, hasta 2011, sacar parcialmente a la izquierda abertzale de las instituciones situándola en unas condiciones que, como veremos en los próximos capítulos, la han llevado a un debate interno

próximos tres años.” Diario *El País* 26/08/2002.; Sumario 35/02: Auto de imputación a la cúpula de Batasuna. 21/11/2002.; Providencia por la que el juez Baltasar Garzón prohíbe cualquier manifestación de apoyo a Batasuna Juzgado Central de Instrucción N°5 de Madrid. Sumario (proc. Ordinario) 35 / 2002Y.

³⁵³ Desde 2002, este sumario ha sido especialmente polémico, entre otras cosas por la asimilación de actividades de desobediencia civil al terrorismo de ETA. El caso de la imputación del activista por la *no violencia* Sabino Ormazábal y de otros miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe absueltos por el Tribunal Supremo en 2009 ha tenido repercusión internacional y ha sido fuertemente criticado en todos los entornos progresistas y nacionalistas. Véase: “La Audiencia Nacional considera que Ekin es ETA y condena a 47 de los procesados” Diario *Público* 19/12/2007.; “Miles de personas se manifiestan en Bilbao en contra del juicio al entorno de ETA”. Diario *El Mundo*, 10/03/2007.; Jaume Asens y Gerardo Pisarello [Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona]: *La “ilógica de la guerra” y el macro-proceso 18/98*. Diario *Público*. 05/01/2008.

Plataforma solidaria con las personas afectadas por el Sumario 18/98

http://www.nodo50.org/18/98/manifiesto_madrid.html

³⁵⁴ “La Audiencia considera que Udalbiltza no delinquirá al compartir ideas de ETA”. Diario *El País*, 2001/2011.

³⁵⁵ Garzón cierra “Egin” por ser un “instrumento del entramado delictivo de ETA-KAS” Diario *El País*, 16/07/1998.; El juez Del Olmo cierra el periódico ‘Egunkaria’ por ser “instrumento” de ETA. Diario *El País*, 21/02/2003. “La Audiencia reconoce que ‘Egunkaria’ no debió cerrarse Diario *El País*, 2010 13/4/2010”.

³⁵⁶ El Ministerio de Justicia ha cifrado en 780 millones de pesetas la pérdida de ingresos oficiales de Batasuna tras la ilegalización. (CNI, 2004).

importante y al enfrentamiento con la organización armada por primera vez tras cincuenta años de existencia.

5. 4 Recapitulando: Reconfiguración global de oportunidades para la violencia en condiciones de *guerra contra el terror*

Este capítulo ha tenido por objetivo fundamental el análisis del modo en que la dimensión internacional está presente en la última década en las transformaciones experimentadas en las políticas antiterroristas y de seguridad con las que se ha venido manejando la violencia en el País Vasco. El propósito era doble: señalar un cambio en los niveles de violencia tolerada y, en un sentido más analítico, comprobar en qué medida dicha transformación ha alterado la estructura de oportunidades políticas para la violencia.

En los términos más clásicos, la oportunidad política trata de explicar en qué situaciones o bajo qué condiciones una determinada acción colectiva tendrá éxito; y por ello, busca vincular la política institucional a la acción colectiva, subrayando la importancia del sistema político en la estructuración de dichas condiciones. (Tarrow: 1997:85). En una elaboración más específica, D. Rucht (1996) incluye también factores de naturaleza social y cultural para dar cuenta de dicha configuración de oportunidades, más allá de los factores estrictamente vinculados al sistema político. Finalmente, R. Koopmans (2005) ha reflexionado sobre el papel interviniente del discurso público para la movilización, lanzando la propuesta de las “oportunidades discursivas”.

El control de la violencia -en este caso la superestructura de políticas antiterroristas narrada- ha sido utilizado aquí como un barómetro que permite dar cuenta de la evolución de las oportunidades políticas en la última década. Un marco institucional-legal como el expuesto y una sofisticación de las estructuras y agencias de seguridad sólo pueden explicarse por el recrudecimiento internacional del terrorismo y su concreta persistencia en el ámbito interno español. La incesante actividad de ETA explica una parte de las reformas acometidas en España. Pero es el cambio en el contexto internacional el que da cuenta, en alguna medida, de los desarrollos posteriores que amplían el ámbito de lo criminal a actividades de naturaleza política, y son respaldados desde las instancias europeas fundamentalmente.

Dicho marco supera claramente el sesgo “estatalista” del que han adolecido la mayoría de los estudios de violencia y movimientos sociales hasta fecha recientes. En esta narración se ha establecido una relación entre las dinámicas globales y los procesos

locales (aparentemente ajenos a aquéllas) en virtud de la cual he podido señalar un proceso de abajo hacia arriba (“bottom up”) en la proyección de la agenda antiterrorista de los gobiernos españoles hacia la gran campaña global contra el terrorismo. Se trata de un proceso que busca el respaldo, la solidaridad, la legitimación, pero también la implementación de medidas concretas de cooperación que favorezcan la lucha contra una violencia profundamente local como es la de ETA. Pero también he podido señalar un proceso de arriba hacia abajo (“spill over”) a través del cual las propias dinámicas de cambio en el contexto global -y en concreto en el marco de la UE, aunque no solo- han tenido efectos en la configuración de la legislación española y en la reestructuración de sus estructuras de seguridad. Esta bi-direccionalidad en el proceso de transformación del umbral de violencia tolerada nos permite hablar de una estructura de oportunidades *glocales*, es decir, de un marco de incentivos y elementos disuasorios que está configurado tanto por aspectos del propio contexto español como del contexto internacional.

Al asumir el reto planteado por Della Porta (2008) de incluir en las oportunidades contextuales para la violencia la dimensión global de formas contemporáneas de violencia política y de los discursos que se desarrollan a su alrededor, he atendido al contexto señalado en el capítulo cuarto: 1) al papel de los actores internacionales en la represión de la violencia; 2) a la adopción y el desarrollo generalizados, tanto en el nivel internacional como en el doméstico, de medidas legislativas y judiciales para facilitar la represión de dicha violencia; y 3) al proceso de emergencia y la difusión de ideas y discursos sobre el uso de la misma.

Podemos entonces hablar de oportunidades contextuales para la violencia en términos globales en la medida en que este marco institucional-legal afecta a un proceso hasta ahora concebido en términos locales y sujeto a lógicas estrictamente domésticas del desarrollo de la democracia española.

Este contexto de oportunidades supera, además, el ámbito del sistema político entendido en sentido estricto, al incluir el papel interviniente del discurso público (narrativas dominantes, consensos de las elites políticas, opinión pública y opinión publicada) y hacer así evidente que las oportunidades tienen también un marcado componente cultural e ideológico más allá de la configuración del sistema político.

La estructura antiterrorista recogida en estas páginas es un indicador de la transformación del umbral de violencia tolerada social y políticamente. Su análisis me ha permitido constatar que, si bien el grado de violencia que se acepta es

sustantivamente menor que hace quince años, hay, por otro lado, una creciente legitimación para políticas de seguridad y antiterrorismo más restrictivas. Y dichos cambios han ocurrido en relación directa con acontecimientos traumáticos que, por las transformaciones que han generado o contribuido a cristalizar, pueden ser entendidos como hitos de un proceso más amplio.

También el caso que analizamos ha permitido superar el sesgo estatalista en la medida en que la dimensión internacional ha sido visible tanto en la resonancia de las demandas españolas en el exterior, como en el clima de comprensión y deslegitimación relacionada con las nuevas formas de violencia y la campaña global de la *guerra contra el terror*.

La estructura de oportunidad política definida, como lo hicimos al inicio de este trabajo, en términos institucionales y culturales, se ha configurado en el caso vasco reciente como:

1) “*Glocal*” en la medida en que hemos podido ver la bidireccionalidad de las transformaciones. El contexto se percibe y se proyecta hacia fuera pero también se “recibe”.

2) *Más resistente* para el uso de la violencia, porque hemos señalado niveles más altos y sofisticados de represión policial, judicial y política de la violencia que se conforman tanto en el nivel doméstico como en el internacional. Ello podría, a la vez, incentivar una estrategia política por parte de las organizaciones que históricamente han recurrido a la violencia.

3) *Más cerrada*, paradójicamente, para la acción política. en la medida en que una concepción más amplia del fenómeno terrorista permite ilegalizar formaciones políticas que antes participaban de la política institucional. Y este proceso es respaldado internacionalmente.

4) Caracterizada por un nivel *de tolerancia hacia la violencia “terrorista”* significativamente *menor* que hace una década. Este proceso es visible en la acción del Estado, en el respaldo social y en el respaldo internacional debido al cambio de contexto.

5) *Un nivel de tolerancia mayor* y de respaldo o legitimidad de las *políticas de seguridad* y antiterroristas del Estado que está atravesado por dinámicas internacionales en la medida en que dicho proceso es constatable en otros países de nuestro entorno.

6) Según Guittet (2008), España ha aprovechado la oportunidad del 11-S como ningún otro Estado para mejorar sus propias medidas antiterroristas con el fin de manejar sus propios asuntos en el País Vasco. En este capítulo se ha constatado que, en condiciones del contexto de la *guerra contra el terror*, hay en el nivel macro estructural una reconfiguración de las oportunidades políticas estables (represión policial, alineación de las élites, consensos) y que está atravesada por dinámicas globales. En resumen, que hay formalmente, más incentivos para el abandono de la violencia que para ponerla en práctica.

Sin embargo, un análisis más completo necesitará comprobar en qué medida o de qué modo estos cambios han afectado a las organizaciones implicadas en el conflicto: a aquéllas que usan la violencia, a las que hoy se considera “entramado” o parte de ETA (el MLNV) pero también al modo en que el resto de los actores evalúan este contexto de oportunidades. En las páginas que siguen desarrollaremos el análisis de este nivel meso-micro de motivaciones y justificaciones a nivel organizacional con el fin de capturar el modo en que la estructura del contexto se refleja en los marcos de diagnóstico y pronóstico de acción para dichas organizaciones.

PARTE III: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO GLOBAL

CAPÍTULO 6
PERCEPCIONES SOBRE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA
GUERRA CONTRA EL TERROR

"la gente no comete violencia política sin discurso; necesitan hablarse a sí mismos sobre ella"
(David Apter, 1997: 2).

*Las explicaciones sobre la violencia son estructuras simbólicas que establecen los parámetros
de evaluaciones morales de la violencia"* (Karen Cerulo, 1998).

Este capítulo analiza de las percepciones y evaluaciones que los principales actores implicados en el conflicto proporcionan de su experiencia de la violencia. Si hemos podido comprobar una reconfiguración en las oportunidades políticas estables (represión policial, alineación de las elites, consensos) atravesada por dinámicas del contexto global, vale la pena tratar de señalar también el modo en que dicho proceso es percibido y diagnosticado por expertos y actores: por aquéllos que ocupan posiciones destacadas en las principales organizaciones envueltas en el conflicto.

La principal justificación de dicha indagación está en la necesidad de comprobar que, junto con los elementos estructurales que generan las condiciones para la violencia, hay también un marco de evaluaciones que constatan y justifican dichos cambios en relación a sus propias estrategias. Por ello, he tratado de partir de los siguientes supuestos:

- Las percepciones y evaluaciones de la violencia son un indicador cualitativo importante de las transformaciones en los niveles de tolerancia e intolerancia a dicha violencia.

- Los diagnósticos que realizan los actores permiten comprobar que la dimensión internacional /global está presente a la hora de evaluar las posibilidades de la violencia o de las estrategias para hacerle frente.

Gran parte de los trabajos recientes sobre acción colectiva han incorporado a sus análisis la dimensión cultural con el fin de evitar planteamientos excesivamente estructurales sobre las posibilidades o limitaciones de la violencia. Si para abordar los

factores contextuales de la violencia se considera que el marco de oportunidades políticas es fundamental, y en concreto -como ya vimos en el capítulo quinto- los aspectos relativos a la represión de la violencia, dichas oportunidades no pueden comprenderse del todo sin atender al nivel intermedio, el de las organizaciones: a lo que piensan y hacen los “actores”, y a cómo lo hacen. Por ello, tenemos que incorporar aquí un análisis de enmarques, de narraciones y de percepciones en virtud de los cuales los actores evalúan la violencia y sus posibilidades a la luz de un nuevo contexto internacional.

Para abordar los aspectos culturales y discursivos de la acción colectiva se ha venido trabajando tradicionalmente en dos direcciones. Por un lado, y siendo una de las perspectivas más exitosas, sobre los análisis de marcos (Snow, *et al.*, 2000). En ellos la investigación se desarrolla a partir de categorías “goffmanianas” para elaborar un enfoque que permita comprender de qué modo los movimientos sociales politizan sus problemas a través de la construcción negociada de un marco de injusticia, un diagnóstico compartido y una solución colectiva. Por otro lado, se ha trabajado a través del análisis semiótico de discursos y narrativas con el fin de dar cuenta de los marcos ideológicos y culturales que estructuran la acción colectiva (Williams, 2004; Potter y Wetherell, 1978); un tipo de análisis mucho más profundo, vinculado a la dimensión metafórica y semiótica del uso del lenguaje.

En todo caso, ambos enfoques tratan de vincular el mundo de los significados a la capacidad “activa” de los individuos y grupos: al nivel de la acción. Pero mientras que los primeros abordan la perspectiva cultural desde un punto de vista claramente “movimiento-céntrico” y analizan los procesos de encuadre con una evidente falta de atención a los factores contextuales (Hallgrímsdóttir, 2006; Williams, 2004), los segundos se han orientado a considerar la relevancia del contexto cultural, y el orden hegemónico e ideológico en el cual se generan dichos marcos.

Entre uno y otro planteamiento, hay consenso en señalar que ni los contextos culturales son radicalmente estructurantes, ni la agencia individual y colectiva es enteramente “libre” para elaborar los marcos que dan sentido a la acción. Más bien, como plantea Gamson, (1992), la realidad social se nos presenta codificada y los individuos son procesadores “activos” de la misma. Por lo tanto, entre el nivel cognitivo y el cultural hay un papel mediador de los individuos y de las organizaciones que acuden a la experiencia y a los recursos culturales para elaborar sus propias narraciones y diagnósticos, una idea también trabajada por Swilder (2003) a través del

concepto de cultura como “caja de herramientas” y útiles a los que los individuos recurren para interpretar la realidad.

A partir de esta justificación algo apresurada de lo que ya se discutió en el capítulo teórico, esta sección expondrá los hallazgos del examen de las voces y las conciencias de los actores y lo hará de la siguiente manera: se presentarán, por un lado, las evaluaciones que corresponden a la familia nacionalista y dentro de ella, se expondrán atendiendo al eje nacionalismo-independentismo-soberanismo, tratando de buscar los factores comunes y los consensos básicos para, a partir de ahí, establecer las particularidades de cada enfoque. Por otro lado, se expondrán las percepciones que se han incluido dentro de la perspectiva “constitucionalista” atendiendo de nuevo a los temas fundamentales que aparecen y al modo en que lo hacen. Finalmente, se tratará de buscar elementos comunes en uno y otro bloque que nos permitan constatar la hipótesis con la que se trabaja en esta tesis. A saber: que los actores implicados en el conflicto incluyen o tienen en cuenta para sus evaluaciones sobre la violencia los factores del contexto internacional.

Aunque ya se expuso en el capítulo primero el marco epistemológico a partir del que se ha trabajado, conviene en todo caso hacer algunas matizaciones de carácter metodológico sobre el modo en que se ha organizado la información relativa a la realización y el análisis de las entrevistas, que ayuden a comprender el alcance y la validez de lo que aquí se recoge.

El trabajo que se presenta aquí es el resultado de un conjunto de materiales que incluyen datos primarios y secundarios. Por un lado, se recoge el examen de las veinticuatro entrevistas realizadas en el País Vasco en 2010. Son entrevistas que fueron desarrolladas siguiendo el formato *key informant* de entrevista semiestructurada (Lofland y Lofland, 1995; Blee, 1993) y que trata a los entrevistados a la vez como informantes clave (porque, dada su implicación, son expertos en el tema que se trabaja) y como la voz de los actores, ya que son, en buena medida, dirigentes de primera línea en las organizaciones políticas y sociales fundamentales. Por otro lado, se recogen narrativas sobre terrorismo y antiterrorismo – que se ajustan a los objetivos de mi análisis y que están recopiladas en un libro editado por Baltasar Garzón (2006).

Los resultados se presentan en forma de relatos sobre la violencia y la dimensión internacional en el diagnóstico de la misma, y están organizadas en dos bloques. Los actores se han dividido en “nacionalistas –independentistas” y “constitucionalistas”. Esta separación, que podría resultar simplificadora, se justifica en

dos ideas que me parecen fundamentales: En primer lugar, de algún modo ambos bloques se perciben a sí mismos “enfrentados” en el periodo analizado (1998-2010). En segundo lugar, al posicionarse en relación al conflicto y la violencia (objetivos de este trabajo) se pueden encontrar consensos y argumentos comunes en cada grupo. Tanto en un bloque como en otro hay claras diferencias de las que se trata de dar cuenta. Así, si estableciéramos un eje de “nacionalismo-independentismo” encontraríamos disparidades que van del nacionalismo más moderado al independentismo extra-parlamentario con las diferencias que sus narraciones entrañan. De la misma manera, si trazamos un eje en el bloque “constitucionalista” podríamos comprobar que se extienden desde la beligerancia hacia los medios (la violencia) hasta la “*democracia militante*” (más orientada a perseguir los fines). En todo caso, las divergencias entre uno y otro bloque son palmarias en relación a los conceptos de terrorismo y antiterrorismo y, sobre todo, al proceso que abordo de transformaciones en la legitimidad de la violencia y el impacto del contexto internacional en dichas transformaciones³⁵⁷.

El estudio de la información ha sido de naturaleza temática y responde a un concepto de entrevista dirigida y semi-estructurada en la que los temas se plantean de una manera difusa que tiende a concretarse, con el fin de dejar libertad para una narración lo menos limitada posible.

El análisis recoge los discursos que aparecen vinculados a cada una de las secciones propuestas: la definición del conflicto, el contexto internacional, el diagnóstico de la violencia, y el pronóstico y perspectivas de la misma)³⁵⁸. A partir de ahí, se han trabajado los temas y se han ordenado tal y como aparecen, atendiendo a presencias y ausencias, y buscando elementos comunes y disonancias, o desviaciones. Finalmente, se ha tratado de comprender las percepciones de los actores entorno a la violencia, en el contexto de cambios globales, pero también atendiendo al modo en que dichas evaluaciones se generan en el discurso.

Con todo, hay que reconocer que no se ha realizado un estudio de naturaleza semiótica y discursiva pura -lo que se conoce como análisis de discurso (Antaki, et al, 2003; Van Dijk, 2005)-, sino que se ha tratado de señalar los aspectos más destacados de las narrativas que no se examinan en el nivel de las significaciones básicas. Valga

³⁵⁷ Con todo, quiero destacar que conscientemente que estoy agrupando cosas que pueden ser vistas como muy heterogéneas. Este procedimiento sólo es válido para los propósitos analíticos de mi objeto de indagación.

³⁵⁸ Dada la extensión del análisis y puesto que este estudio de caso no se fundamenta exclusivamente en la información aportada por las entrevistas, he limitado el *verbatim* a las dimensiones centrales del análisis: las evaluaciones sobre la legitimidad y la efectividad de la violencia.

para justificar esto el hecho de que el trabajo en su conjunto, siendo de naturaleza interpretativa, ha recurrido a la estrategia del estudio de caso en profundidad y, en este sentido, la investigación que se recoge en estas páginas tiene el objetivo fundamental de triangular una información en buena medida ya producida y, por otro, plantear el punto de vista de las organizaciones protagonistas en el proceso que se intenta comprender.

6. 1 Percepciones sobre la violencia en la perspectiva independentista³⁵⁹

Considerar las evaluaciones y pronósticos que se hacen de la violencia dentro del enfoque independentista resulta fundamental en la medida en que ha sido dentro de esta comunidad ideológica donde se ha generado la violencia de ETA en el pasado. Todos los actores incluidos en este bloque tienen en su ideario político algún tipo de reivindicación de autogobierno o soberanía frente al Estado. La diferencia viene dada por los medios y repertorios estratégicos a través de los cuales se han reivindicado dichas demandas. En este sentido, la violencia es la dimensión que divide a este conjunto de actores y por ello, las representaciones que de ésta tienen los actores, y las evaluaciones en relación con el contexto son parte fundamental del análisis.

6.1.1 Definición del conflicto: Conflicto político, reivindicación histórica.

En el discurso nacionalista-independentista hay una narración hegemónica acerca de la naturaleza del problema. Se trata de un conflicto de carácter político con raíces históricas vinculadas a las reivindicaciones culturales e identitarias, y a la defensa de reconocimiento de la nación vasca. Hay consenso en señalar que se trata de un problema de acomodación administrativa de la reivindicación nacional dentro de la configuración del Estado español, que hundiría sus raíces en la modernidad. Las demandas históricas están vinculadas a la idea de pueblo, cultura, tradición y lengua, que se perciben con unas particularidades –unas diferencias– que deben ser reconocidas.

³⁵⁹ Este bloque incluye a actores nacionalistas extra-parlamentarios, desde moderados hasta independentistas, vinculados al MLNV. Cuando se utiliza “izquierda abertzale oficial”, se está aludiendo a aquellas organizaciones que han sido sucesivamente ilegalizadas (HB, Batasuna, etc.). Cuando se habla de la izquierda abertzale (sin más) se está mencionando a una familia sociológica e ideológica en la que se incluyen partidos legales e ilegales: partidos que han apostado históricamente por la violencia y otros, como Aralar, que hace tiempo que rechazaron la misma. Todos ellos tienen en común que se consideran “independentistas” y de “izquierdas”. Se representan a sí mismos como “distintas sensibilidades de una misma familia ideológica”.

En la versión más soberanista o independentista, se entiende que dichas demandas pueden ser satisfechas atendiendo a la aplicación del derecho universal a la libre determinación de los pueblos en el marco de la carta de Naciones Unidas. La perspectiva más moderada considera que en el contexto de un mundo en creciente interconexión y, sobre todo, de integración europea, se puede aspirar no tanto a la independencia “absoluta” (pues esta habría perdido algo de su esencia) como a una independencia “relativa” en el marco de la UE.

En todo caso, la idea del derecho a la “consulta” a la sociedad vasca, a la que se percibe sensible a las demandas nacionalistas y en algunos casos “mayoritariamente” independentista, está presente en todas las narrativas. Ahora bien, ante este horizonte político que es claramente compartido por toda la “familia nacionalista”, aparecen claras diferencias en cuanto a las estrategias a partir de las que se logran los fines políticos. Surge entonces el problema de la violencia.

La violencia se entiende como violencia política o violencia “de motivación política” y aparece de una manera mayoritaria como un elemento secundario al conflicto político y como la consecuencia (necesaria o no) del mismo. Sin embargo, en todos los casos, aunque con claras diferencias de matiz, surge la idea de la presencia de dos violencias históricas.

Por un lado, estaría la violencia “insurgente”. Ésta es comprendida en el enfoque del nacionalismo moderado en términos de “terrorismo” y es vista como una dimensión que ha pasado a ser protagonista del conflicto, oscureciendo los legítimos fines nacionalistas. En el caso del nacionalismo radical esta violencia se denomina “violencia de motivación política” o, abiertamente, “lucha armada” pero en ningún caso terrorismo, y se entiende como una violencia de “respuesta”.

Por otro lado, estaría la violencia que ha sido y es ejercida por el Estado y que no siempre aparece referida estrictamente como “violencia” sino más bien en términos de represión. En este caso, dependiendo del posicionamiento ideológico dentro del eje nacionalista, se incluyen desde las medidas de represión legal-judicial-penitenciaria (lo que aquí hemos venido denominando la vía penal de las políticas antiterroristas) hasta medidas de represión policial que a menudo se vinculan con “malos tratos” y “torturas”³⁶⁰. De cualquier forma, la violencia y el terrorismo son cuestiones que

³⁶⁰ La idea de “tortura” aparece a menudo en las narraciones de los actores del polo más independentista (HB y Aralar). Se trata de una definición difusa de tortura que se relaciona como malos tratos en dependencias policiales, pero también con instituciones penales como el régimen de incomunicación, los

aparecen de manera homogénea como un factor secundario, como el resultado o consecuencia de la situación de conflicto político previo, o directamente no se aborda espontáneamente sino que se omiten al describir el proceso.

Esta violencia secundaria al conflicto, habría surgido por la constatación de la inacción y la pasividad del PNV durante el franquismo, “por la necesidad de hacer algo”, de actuar, (lo que Zulaika (1988) llama la “mentalidad ekintza”), o por la desvirtuación de medios y fines en el contexto de la lucha antifranquista. En todo caso, pero de una manera más velada en las narraciones del PNV, aparece como una violencia de respuesta a la represión franquista.

En 2010, sin embargo, la violencia es percibida como el principal problema para casi todos los actores. Lo es para las organizaciones pacifistas, es una limitación clara para los objetivos nacionalistas (PNV) y una auténtica rémora para las organizaciones independentistas parlamentarias que provienen de la familia abertzale (Aralar, por ejemplo). La evolución de las estrategias de unos y otros en relación con este diagnóstico también lo evidencia así.

La excepción a esta percepción la constituye Batasuna. En esta formación, en caso de ser un problema o una limitación para el logro de sus fines, no se explicita. Hay que recordar que es precisamente a lo largo de 2010 cuando la izquierda abertzale comenzó de manera oficial su debate interno en torno a la efectividad de la violencia, con visibles consecuencias hasta 2012.

6.1.2 La dimensión internacional: entre la libre determinación de los pueblos y la resolución de conflictos

La dimensión internacional aparece bien de forma espontánea en la representación del conflicto bien de forma inducida, pero en ningún caso su evaluación presenta problemas. Dentro del conjunto nacionalista, y en concreto en su vertiente más independentista, existe una familiaridad importante con los factores internacionales que pone de relieve que hay un hábito de hacer evaluaciones estratégicas en función de las oportunidades internacionales.

Si atendemos a qué se entiende por contexto internacional/global, aparecen algunas representaciones interesantes, todas ellas vinculadas a sus propias definiciones

FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), o la propia política de dispersión, que se considera un tipo de “tortura” en tanto violación de los derechos individuales, y que es extensible a los familiares de los presos

del problema o del conflicto. La globalización se entiende como proceso de creciente interdependencia de mercados y Estados y eso hace que, en el caso del nacionalismo moderado, se rebajen en alguna medida las expectativas de independencia hacia una independencia “relativa” en el marco de la UE. El contexto de globalización se comprende también como un proceso de relaciones complejas entre tendencias homogeneizadoras y tendencias a la revalorización de lo local. En este sentido, se entiende que la recuperación y la politización de la cultura vasca y de las identidades locales no sólo tienen cabida en un contexto global, sino que además están en proceso de creciente revalorización.

La representación sobre lo global es espontáneamente positiva y sólo de manera inducida aparece como un cierre de oportunidades para el independentismo menos moderado. Se trata de un discurso optimista y muy autocomplaciente, en virtud del cual las condiciones internacionales son favorables para la defensa de proyectos independentistas.

El factor internacional aparece pues como una dimensión más del conflicto pero implica aspectos diferentes dependiendo de las narraciones:

- El contexto internacional es causa y solución por diversas razones. La reivindicación política del “derecho a decidir” se ha construido porque existe el marco de la ONU y el principio de libre determinación de los pueblos desde los años sesenta. En la medida en que dicho derecho se está aplicando en muchos procesos (por ejemplo el de Kosovo), se podría exigir, a la postre la aplicación del mismo al caso vasco. Esto es evidente en las permanentes referencias a otros procesos en los que se ha aplicado en el pasado o recientemente y aparece de manera recurrente en el diagnóstico de Batasuna.

- La Unión Europea se entiende como el marco en el que puede producirse algún tipo de reconocimiento político del pueblo vasco, ya sea de independencia, ya sea de soberanía limitada. Pero a la hora de calibrar las posibilidades reales, se constata siempre que la violencia es una clara limitación.

- El contexto internacional es, asimismo, un referente para la resolución pacífica de conflictos. (Ulster, Sudáfrica, Kosovo, Eslovaquia, Escocia...). Hay una percepción de que aquéllos son procesos que se pueden difundir y trasponer a otros contextos, procesos de los que se aprenden estrategias y que se pueden imitar o copiar. Esta impresión es común a todos los actores, a excepción del PNV, que se desmarca visiblemente de la lógica de la “resolución de conflictos”.

- La dimensión internacional aparece finalmente vinculada a la implicación de actores internacionales, ya sean individuos *-mediadores-*, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, o instituciones internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea.

Dicho esto, cuando los actores reconstruyen las transformaciones del conflicto en el País Vasco en la última década, el contexto internacional aparece espontáneamente en todas las narraciones.

Emerge espontáneamente en positivo. De una manera optimista, la dimensión internacional surge en relación con otros procesos de conflicto, con una eventual implicación de actores internacionales o con la posibilidad de reconocimiento por parte de las instituciones internacionales. Ahora bien, al profundizar en lo que representa el escenario internacional, aparece un escenario propicio, el señalado y, por otro lado, un escenario negativo que, sin embargo, se logra transformar en positivo. En la medida en que el contexto internacional, en el que el derecho de autodeterminación está en expansión y aplicación, es favorable a un proyecto independentista. En negativo, de forma que las condiciones internacionales disuaden de la independencia siempre que se den o mantengan situaciones de violencia. Es decir, se constata que se puede llevar a cabo un proyecto independentista en el marco europeo y contando con las Naciones Unidas, pero la permanencia de la violencia es una limitación. Y esto es así, no sólo para la izquierda abertzale oficial sino para los partidos “de izquierdas” y “abertzales” (Aralar); para todos los que defienden un proyecto soberanista.

La izquierda abertzale oficial percibe el contexto internacional en términos halagüeños. Hace suya la *Declaración de Bruselas*³⁶¹ y acata que, sin violencia, es posible avanzar en el proyecto independentista. En este caso, cuando aparece la violencia es siempre enmarcada en términos de las “dos violencias” de las que hemos venido hablando a lo largo del trabajo. Es decir, se recurre a la retórica de la “ausencia de violencias” en virtud de la cual no sólo debe desaparecer la violencia de ETA sino aquella que ejerce el Estado. En este planteamiento, el marco de Naciones Unidas es el lugar hacia el que se orientan las demandas, pero también es la solución (porque sirve para dar salida a las mismas), en la medida en que el derecho a la libre determinación de los pueblos es un derecho en aplicación en otros procesos. Se cuenta con la implicación

³⁶¹ Declaración del año 2010 en la que más de veinte destacadas personalidades internacionales, incluidos premios Nobel, solicitaban a ETA un alto el fuego verificable internacionalmente. Es el documento que toma como referencia la Izquierda abertzale para justificar un eventual respaldo internacional a su proyecto.

de actores internacionales (*Declaración de Bruselas*) pero se constata que debe ser en ausencia de violencia. Por esta razón, se reconvierte el diagnóstico y se hace un pronóstico (en positivo) que opta por las vías pacíficas.

Si se inducen algunos factores relacionados con las transformaciones en los usos y marcos para la violencia hoy, se genera un discurso en negativo acerca del contexto internacional en el que se vislumbra un escenario que en términos ideológicos es de “derechización” de Europa y de degradación de los proyectos izquierdistas, y de *securitización* de procesos políticos: la idea recurrente de que con la excusa de la seguridad, aparece la violencia del Estado. Pero, en todo caso, prevalece la visión positiva y la evaluación de oportunidades abiertas para avanzar un proyecto independentista con el apoyo de la comunidad internacional.

La izquierda independentista parlamentaria, que representa Aralar, percibe un escenario positivo en dos direcciones: por un lado el cambio en el contexto internacional aparece como un marco favorable para el final de la violencia, en la medida en que se constata que a ETA y a Batasuna se le cierran puertas y oportunidades en Europa. Por otro lado, esta formación señala, como Batasuna, que el marco europeo es propicio para el desarrollo de un proyecto independentista. También se recurre a constantes referencias a otros procesos (Escocia, Kosovo, etc.). Ahora bien, se ha asumido que la persistencia de la violencia hace que se cierren oportunidades también para ellos. La violencia es una limitación importante para avanzar objetivos políticos, por lo que es una tarea fundamental para ellos contribuir al final de la misma.

En negativo, la narración revela cómo se ha producido un respaldo importante de la UE hacia la legislación antiterrorista española, y que lo que se entiende como una represión “blanda” del Estado, materializada en la ampliación de los “círculos de represión” hacia el ámbito político, es más homologable hoy en Europa.

Para quienes trabajan por la paz desde un posicionamiento nacionalista e independentista, hay un discurso, consistente con los anteriores, aunque parte de unos objetivos claramente diferentes. En su caso, no se trata del logro de la independencia sino que el objetivo es conseguir la “pacificación” y la resolución del conflicto. De nuevo, el contexto aparece de una manera contradictoria. Por un lado, es percibido como un contexto favorable porque se pueden lograr apoyos internacionales para un final dialogado de la violencia (mediadores y jefes de Estado que apoyen un eventual proceso, por ejemplo). En este punto, *la Declaración de Bruselas* (2010) se considera un logro. Por otro lado, también en el contexto internacional es visible un recorte de

libertades importante en relación con el terrorismo y con lo que hoy se entiende que son sus vínculos. En este sentido, se constata que ETA lo tiene muy difícil en Europa y que en caso de que el escenario internacional sea favorable, lo es en todo caso para una estrategia de no violencia.

En el extremo del nacionalismo moderado, el contexto internacional aparece, por un lado, como limitador de los objetivos de un proyecto independentista. Pero se trata de una limitación que se entiende de modo difuso respecto de sus objetivos. Sin embargo, se alude a un escenario muy negativo para ETA y ello es visto con satisfacción y optimismo. Dicho escenario negativo está vinculado a dos constataciones que veremos también en la narrativa constitucionalista: la idea de que las condiciones para la represión del terrorismo han cambiado a nivel internacional y la evidencia de que el clima de deslegitimación de la violencia posterior al 11-S es un contexto que favorece la desaparición de ETA.

6.1.3 Diagnóstico de la violencia: el camino hacia la ausencia de violencias.

En relación con las evaluaciones y percepciones sobre la violencia es necesario hacer una distinción clara en virtud de los vínculos históricos de los actores con la misma. Por ello es conveniente separar las organizaciones independentistas adscritas al MLNV, que han defendido históricamente la “lucha armada” y nunca se han desligado de la violencia, de aquellas organizaciones que nunca han explicitado apoyos a la violencia, aunque de una manera difusa pudieran haberse adherido afectivamente a la misma. También atenderemos de una manera distinta a diferentes narrativas sobre el diagnóstico de la violencia, dependiendo del posicionamiento ideológico de los diferentes actores.

Comenzando a partir de un eje de independentismo de más radical a más moderado en función de la adscripción a medios, veamos cómo se entiende el problema de la violencia.

6.1.3.1 El Diagnóstico de la violencia desde la perspectiva de la Izquierda *Abertzale* oficial (Batasuna):

Lo primero que habría que destacar en relación con las evaluaciones sobre la violencia es el hecho de que ésta se aborda siempre de manera difusa, inducida y sin menciones explícitas a ETA ni a su actividad (aludiendo a las consecuencias jurídicas

de hacer valoraciones³⁶²). Cuando se indaga en la cuestión de los “medios” para el logro de los objetivos políticos, los entrevistados señalan y suscriben el documento *Zutik*³⁶³ que recoge la apuesta por las vías pacíficas. Pero una y otra vez se argumenta a partir de la idea, planteada en el capítulo tercero, de la existencia de “dos violencias” o de una constelación de violencias (Pérez Agote, 2008) visible a lo largo de la historia vasca del siglo XX.

No hay una condena clara de la violencia de ETA, y más bien se rechaza hacer valoraciones de largo recorrido, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, porque se percibe que la violencia es omnipresente en la sociedad y que depende de las condiciones históricas.

“Yo desgraciadamente no he conocido todavía un estadio en la historia de la humanidad donde se pueda decir que estamos ya en la salida de las violencias (...) Bueno, la violencia es una realidad desgraciadamente excesivamente presente hoy en muchas zonas del globo, por lo tanto yo no puedo decir (...) que estemos en la salida de la violencia (...). Yo creo que por parte de la población vasca ahora mismo hay una disposición enormemente mayoritaria a que el tema se sitúe en el ámbito del debate político y de la resolución democrática.”

[Dirigente histórico (1) de la izquierda abertzale]

En todo caso, se comprueba que hay circunstancias que han cambiado. Algunas condiciones son internas, pero también se alude a factores externos. Todas ellas son elaboradas a través de un discurso autocomplaciente y optimista que muestra claramente la capacidad de acomodación de este movimiento. No se asume en ningún momento, sino que más bien se rechaza, la visión derrotista. De hecho, esta visión se elude porque se piensa que podría conducir a una relegitimación de la violencia. Ello evidencia de alguna manera que, en caso de realmente haber optado por un pronóstico alternativo a la violencia, se está aún en busca de un relato, de un marco que logre aglutinar a la mayor cantidad de gente posible sin fracturar la familia *abertzale*.

“Las lecturas de vencedores y vencidos son erróneas y son perjudiciales y

³⁶² Las consecuencias jurídicas de incurrir en delitos de enaltecimiento del terrorismo o aportar información que pueda evidenciar vínculos con la organización ETA lleva a una cautela que se constata en los últimos años. Ello sirve de justificación para eludir entrar en valoraciones que, en todo caso, incomodan al entrevistado, en la medida en que el interés principal del informante es hablar del problema político como una cuestión que se pretende invisibilizar.

³⁶³ *Zutik Euskal Herria!* Es el documento presentado por la Izquierda Abertzale oficial en Febrero de 2010 y que recoge las propuestas consensuadas del debate interno con sus bases en torno a la adopción de vías pacíficas para la resolución del conflicto.

no creo que se den en este contexto porque a mí se me antoja en que podría pensarse que hay un núcleo de gente que diga "bueno pues otra vez, me echo la manta y venga y empiezo a aporrear aquí y me tiro otros 40 años así y que vengan estos a negociar", por lo tanto ese tipo de lecturas además son provocadoras, porque de algún modo, ¿entiendes?, pueden provocar ese tipo de resultados, a mí me parece que no deben de hacerse.”

[Dirigente histórico (1) de la izquierda abertzale]

La constatación de que las condiciones han cambiado se produce en tres planos: en primer lugar, se construye una narración del fracaso de la Transición recuperando el argumento histórico abertzale de que en realidad “nada ha cambiado” ³⁶⁴; en segundo lugar se percibe que los consensos sobre los que descansó la Transición han quedado invalidados (entre otras razones porque el PSOE se habría vuelto conservador, contrario al proyecto nacionalista y beligerante con el independentista; y que dicha ruptura del consenso es muy obvia en el País Vasco); en tercer lugar la comprobación de que hay una demanda social, que se considera mayoritaria en el País Vasco, por la independencia.

En otro plano, asumen que la sociedad está ampliamente por la no violencia y que en todo caso, sacar el proyecto independentista adelante requiere una “acumulación de fuerzas” y una “nueva” capacidad de ilusionar y movilizar. Pero a la vez, se percibe que parte de las condiciones que han cambiado tienen que ver con el entorno internacional. Porque de algún modo, la proliferación de procesos de secesión e independencia en el mundo post-bipolar hace que se pueda dar una difusión y aprendizaje de dichos procesos al caso vasco:

“Yo creo que en Europa, con la UE, en los últimos años, lejos, lejos de, de ir hacia el fortalecimiento de los Estados, eh, se va aumentando eh, el, la, los reivindicaciones nacionales, eh, y eso. Y tenemos, sin ir a Yugoslavia, o eso, pues, pues, tenemos en estos momentos lo que está pasando en Bélgica, pues, pues es una realidad, eh, que, que en los últimos siglo y medio, pues va en una evolución, eh, de aumentar, eh, las ansias de crear unas instituciones propias. el propio, el propio Escocia, eh, pues, pues un sentimiento nacional o una conciencia nacional que, que ha estado bastante apagado, pues, pues va en estos momentos tomando forma, y cada vez va teniendo como más fuerza, eh, y eso.”

[Dirigente Histórico (2) de la Izquierda Abertzale]

³⁶⁴ Este argumento del independentismo vasco, que ya fue expuesto en el capítulo tercero consiste en la negación histórica de los cambios vinculados a la Transición. Pérez-Agote se refiere a ello como el “juramento histórico” de la izquierda abertzale y que, por el efecto de la profecía autocumplida habría determinado sus estrategias y discursos políticos en los últimos treinta años. Véase Pérez Agote, (2008).

En el marco de la globalización hay una revalorización de las identidades locales y, en ese sentido, sus reivindicaciones logran un empuje importante y una considerable resonancia social.

“Siempre nos habían dicho, y algunos defienden que, que, que lo, la globalización, eh, que va a hacer desaparecer lo local, eh. Pero no parece eso en absoluto claro, y en el caso de, de las identidades nacionales, yo diría que en los últimos años hay un repunte y puede haber todavía, una, una fortalización mayor, eh...”

[Dirigente Histórico (2) de la Izquierda Abertzale]

Y porque entienden que pueden contar con apoyos internacionales para sacar su proyecto adelante, siempre que se opte por una vía democrática y un abandono claro de la violencia.

“Nosotros sabemos que los representantes de Europa que estuvieron en esas conversaciones,[conversaciones de Loiola, 2006] eh, dijeron muy claro que veían a la Izquierda Abertzale con, con un planteamiento democrático totalmente creíble y totalmente eh, defendible en cualquier órgano europeo o mundi... estamos seguros que en una fase posterior, de un planteamiento común, de un debate y de una lucha democrática, el estado lo va a pagar y va a ser, para nosotros, un motivo de avance, eh, en la rectitud, o en el derecho a nuestras reivindicaciones”.

[Dirigente Histórico (2) de la Izquierda Abertzale]

El discurso de la efectividad:

A partir de las representaciones anteriores, se puede decir que hay una constatación clara de que la violencia ha dejado de ser efectiva; ya no sirve para lograr los objetivos que se persiguen, y la gente quiere otra cosa. Se percibe que con otra estrategia sus fines tienen una mayor cabida en el contexto actual. De nuevo con el optimismo y las dificultades para la revisión de sus planteamientos que caracteriza este enfoque, más que plantear la no efectividad de la violencia, se argumenta con la “mayor efectividad” de otra estrategia.

No se constata abiertamente que haya una pérdida de aceptación social de la violencia pero sí que la gente -su gente- está mayoritariamente por adoptar otras vías. Se presenta un discurso en positivo que evita hacer retrospección crítica al uso de la violencia pasada.

“Creemos que la lucha política a través de partidos y organizaciones. Hacemos la lectura en positivo. No que la violencia no es eficaz sino que la “política” es más eficaz.”

[Dirigente Histórico (2) de la Izquierda Abertzale]

Hay una argumentación fuerte a favor de buscar alianzas, mayorías y proyectos movilizadores comunes, y que se justifica en que esta vía es demandada por sus bases. Pero las bases están también convencidas de que para “ganar la partida al Estado” hay que llevar el conflicto al terreno democrático, acumular fuerzas y pasar a otra estrategia, en la que contarían, además con apoyos internacionales importantes.

Hay también una verificación importante en relación con la política del Estado, con las políticas antiterroristas. Éstas han logrado aislar políticamente a Batasuna y desmovilizar de una forma importante a su comunidad de referencia. Eso lo constatan ellos y lo perciben actores muy cercanos a su entorno. Pero la capacidad de adaptación de la izquierda abertzale se revela de nuevo de manera sorprendente en la medida en que son capaces de transformar el marco de diagnóstico, y convertir una realidad de derrota, en una opción favorable. El siguiente pasaje recoge en buena medida esta idea:

“El estado español está muy cómodo en la confrontación armada, en el “choque antiterrorista” que ellos denominan. Y situando el tema de Euskal Herria en términos antiterroristas, nos ganan siempre. En Europa y en todos los sitios. Y sin embargo, en términos políticos (...) nos dicen todos los observadores internacionales que es un proyecto perfectamente vendible, que es homologable a cualquier tipo de proyecto democrático y que por tanto tenemos que ser tener más confianza y apoyarnos en eso.

P: ENTONCES ES UNA CUESTIÓN DE LOS MEDIOS

R: Efectivamente (...) llegamos a la conclusión de que lo más eficaz es precisamente utilizar los medios políticos y democráticos ¿eh? Lo cual nos, nos lleva o nos tiene que llevar a fortalecer nuevas alianzas para conseguir una mayoría social que exija al Estado una reforma democrática.

P: ¿LA LUCHA ARMADA HA DEJADO DE SER EFICAZ?

R: Bueno, nosotros creemos que la lucha política, la lucha de masas y la lucha institucional es la vía más efectiva. Nos lo planteamos en positivo. En nuestros planteamientos no decimos “esto dejó de ser eficaz”. Nosotros decimos “creemos que habiendo hecho esa constatación de que el Estado está más cómodo en las confrontaciones armadas y que es más débil en la confrontación política (...) necesitamos construir un proyecto de futuro”

[Dirigente Histórico (2) de la Izquierda Abertzale]

Se percibe claramente que la “lucha antiterrorista” ha tenido unos efectos importantes sobre ETA pero también sobre el MLNV. Entienden que, con dicho planteamiento, el Estado ha tenido éxito dentro y fuera de España y por lo tanto, habría

logrado deslegitimar la demanda de independencia. Pero se ignoran las visiones derrotistas y se muestra una alta capacidad de acomodación al contexto y a los objetivos. La violencia ha dejado de cumplir los objetivos que perseguía, y a día de hoy es una limitación para sacar el proyecto independentista adelante. Y sin embargo, la adopción de otra estrategia se plantea como un proceso de voluntad política dentro de la Izquierda Abertzale. Tal y como lo expresa un reconocido simpatizante de Batasuna:

“Batasuna ha llegado a la, a la, a la conclusión de que la lucha armada hoy en día no tiene ningún sentido, no-no es operativa, no consigue nada y molesta en el 2010 en Europa y que a 50 años de lucha armada hay que darle un final.”

[Simpatizante (1) de la Izquierda Abertzale.]

Constatar que la violencia no está logrando los fines que dice defender es reconocer que no hay acción que debilite al Estado y que, por otro lado, los costes personales y sociales de recurrir a ella son cada vez más altos (por el propio endurecimiento penal que hemos señalado ya). Se admite que se pierde más de lo que se gana y, por lo tanto, hay un claro factor disuasorio que conduce a lo que éste simpatizante denomina “cansancio sociológico”.

“Si tú no demuestras con el tiempo desde un punto de vista operativo que puedes ganar al estado desde, ganar al estado, doblegar al estado obligar al estado a una negociación a la baja por su parte, por la tuya a la alta, a la alta, por su parte a la baja, si ves que eso no es así, la gente se cansa, la gente se cansa porque la gente dice "bueno, por ese camino no hacemos nada" entonces la gente, hay un cansancio sociológico sobre la lucha armada en la izquierda abertzale y esa sensación cada vez mayoritaria de que no aporta nada, de que no aporta y si no aporta pues no tiene sentido que tus hijos y tus hijas entren en ETA para luego pasarse 50 años en la cárcel.”

[Simpatizante (1) de la Izquierda Abertzale.]

Y en esta apreciación, que es quizá más fácil hacer desde “fuera” del núcleo de la organización, la dimensión internacional aparece también como un factor relevante. No es sólo que la violencia no logre sus objetivos sino que se ha llegado a la conclusión de que obstaculiza, y sobre todo, en Europa. Entonces, se plantea una narración de nuevo autocomplaciente en la que la decisión de cambiar de estrategia no vendría como resultado del acoso policial, judicial y político sino que es más bien fruto de una

voluntad de escuchar a sus propias bases y atender al “cansancio sociológico” de la violencia planteado con anterioridad.

“La lucha armada se puede terminar por acción policial judicial o por decisión propia de los que están, la están practicando y hay un cambio de estrategia clara en la izquierda abertzale en los últimos tres o cuatro años, bueno y más años también; se está intentando llevar a las bases a la idea de que hay que pasar una fase solo de acción política y no de acción militar, esas cosas cuestan porque son 50 años de práctica de la lucha armada”

[Simpatizante (1) de la Izquierda Abertzale.]

Aunque se niegue el hecho de que este proceso tiene su origen en una fuerte presión del Estado llevada a cabo con la aplicación de políticas antiterroristas, se asume en cada argumento que los cambios experimentados en el modo en que el Estado “lucha” contra el terrorismo tienen efectos importantes. Y más aún, que logra “homologarlos” en Europa. Una Europa que es un ámbito que la izquierda abertzale ha considerado históricamente conquistado en términos ideológicos y discursivos. Ese espacio donde encontraba cierto reconocimiento, ha dejado de ser un espacio de seguridad ideológica para convertirse en el marco en el que el Estado homologa su legislación “represiva”. Esto implica una clara constatación del cierre de oportunidades que supone para ellos.

“El Estado está forzando todos los cambios de legislación que considera convenientes y los homologa en Europa, en Europa le dicen que eso está bien y entonces para endurecer penas, de tal manera que la, la expectativa de la persona que va a poder entrar en una organización armada dice "bueno, si no estamos, no vamos a conseguir nada, no tenemos la sensación de que vayamos a poder doblegar al estado para que venga a una mesa de negociación a la baja luego encima la expectativa que tienes es de 800 años en la cárcel pues igual es conveniente plantear, plantear estrategia", y yo creo que eso es lo que ha llevado a la reflexión a la izquierda abertzale”

[Simpatizante de la Izquierda Abertzale (2). Imputado en el Sumario 18/98]

Discurso de la legitimidad:

Las evaluaciones o percepciones sobre la pérdida de legitimidad de la violencia, sobre las dificultades para justificar la “lucha armada” hoy, son más difíciles de encontrar en la narrativa de los informantes de la izquierda abertzale oficial. No aparece claramente una argumentación sobre la pérdida de legitimidad, posiblemente porque se

entiende que los fines que dieron justificación a los medios, siguen vigentes. Porque se defiende de alguna manera lo que ETA ha significado para su pueblo, porque hay un contexto de significación en el que ETA emerge (recuperación de la lengua, de la cultura y de la tradición) y una autojustificación del recorrido de la organización (Herri Batasuna) como faro social a partir de la Transición. Claramente hay dificultades o voluntad de evitar una crítica al pasado y, si bien no se hacen argumentaciones a favor de la violencia, tampoco se plantean revisiones de la historia pasada.

Es posible que se esté aún en busca de una narración que permita hacer tales aseveraciones pero lo que en todo caso queda claro es que hay una cierta adhesión afectiva (Pérez Agote, 2008) que impide hacer tales consideraciones. Como tendremos ocasión de comprobar, esto es bastante evidente en las observaciones sobre el 11-M, pero también cuando se plantean reflexiones en torno a los presos.

Si salimos del núcleo de la organización, empezamos a encontrar algunas constataciones de naturaleza distinta. Y ellas están relacionadas de una manera interesante con el contexto internacional. Aquí sí aparece una confirmación de que también las condiciones ideológicas en Europa han cambiado y ello tiene implicaciones en la dificultad de justificar la “lucha armada”. La violencia ha cobrado otros significados y tiene otras implicaciones y por lo tanto, es de “difícil venta” en un contexto posterior al 11-S.

“El recurso a la lucha armada en Europa es de difícil venta (...) en el año sesenta setenta y pico en algunos sectores intelectuales de Europa que hubiera nacionalistas, sobre todo en la época de franquismo aquí y en el post-franquismo, luchando pues tenía como una venta ¿no? (..) en Europa entendían que los vascos recurrieran a la violencia para pedir la independencia y sobre todo en la época franquista recurrían a la violencia para atacar al franquismo ¿no? para defenderse de la opresión franquista; bueno, eso tuvo mucho predicamento en Europa, Olof Palme, líderes de ese tipo, pues justificaron ese recurso a la violencia ¿no? (...) En el año 2010, después del, del 11S y luego ya pues la configuración de los estados y luego por la configuración misma de Europa, hoy en día lo primero que exige España en sus relaciones diplomáticas con los gobiernos europeos es que nadie absolutamente nadie ni justifique, ni ampare ni dé cobijo a gente que esté practicando la lucha armada, o sea son acuerdos que hay ahora entre los estados en los que ningún estado va a empezar a decir "bueno, los vascos tienen derecho" no digo ya el recurso a la lucha armada sino incluso el recurso a argumentaciones de derecho a independencia, hoy en día ningún jefe de estado europeo va a decir va a dejar mal a España diciendo "bueno, yo creo que los vascos tienen derecho a la independencia”

[Simpatizante de la Izquierda Abertzale (2). Imputado Sumario 18/98]

Una argumentación similar podría encontrarse también en ex militantes de Batasuna integrados hoy en Aralar: la idea de que en el mundo actual no hay una teorización de la lucha armada. Pero en todo caso, será constatada en el enfoque constitucionalista, en la medida en que se argumenta (con agrado) el modo en que las teorías de la revolución y de la liberación nacional han quedado obsoletas para justificar la violencia y hoy todo es entendido como “terrorismo”.

Sí aparece, sin embargo, una fuerte crítica y esfuerzos deslegitimadores acerca del Estado y de sus instituciones (por el empleo de la violencia, de la fuerza y por el visible déficit de democracia). En este sentido, se elabora en extenso sobre el modo en que el Estado habría superado umbrales en la última década, difíciles de hacerlo en el pasado. Se percibe que la represión se ha incrementado de un modo llamativo, sobre todo hacia el ámbito de lo político y lo cultural (más allá de lo “militar”). Se considera que el Estado se ha “quitado la careta” y con el argumento de la “confrontación antiterrorista” ha ampliado la represión política logrando, además, respaldo internacional a dichas políticas.

6.1.3.2 El diagnóstico de la violencia desde la perspectiva de Independentismo parlamentario (Aralar):

La violencia aparece espontáneamente como problema y su evaluación no plantea rechazo. Se entiende como consecuencia del conflicto político y ya en su definición se asume que ha contribuido a invisibilizar los factores políticos del conflicto, sobre todo en la última década.

Esto se debería no sólo a su persistencia (porque se evidencia una clara bajada en la actividad de ETA) sino a su impacto social, y porque la estrategia estatal de “todo es ETA” habría contribuido al cuestionamiento de la dimensión política del conflicto. Aparece una crítica y una condena clara a la violencia pero, sobre todo, bastante reflexión sobre su efectividad y legitimidad.

Por otro lado, hay una cercanía perceptible con la Izquierda abertzale *oficial*, aunque se verifique su distanciamiento en términos de medios³⁶⁵. Como organización vienen de la misma comunidad sociológica del MLNV, y lo asumen. Por ello, se plantea

³⁶⁵ En todo caso, los esfuerzos por establecer diferencias con Batasuna en cuestiones de configuración orgánica y de planteamientos organizativos (más allá de los estratégicos) son claros. Se perciben como un “producto” ideológico y orgánico claramente diferente por más que su horizonte político (la independencia) pudiera ser el mismo.

un discurso muy cercano al proceso interno de Batasuna que viven con familiaridad; como un proceso que ellos ya han hecho: el del debate sobre la efectividad y la deslegitimación de la violencia.

El diagnóstico de la violencia lleva de nuevo a reflexiones en torno a la pérdida de efectividad pero se extiende además en relación con la pérdida de legitimación interna y externa.

El discurso de la efectividad:

En primer lugar, se constata que hay una merma clara de efectividad (de logro de objetivos) por parte de ETA, pero dicha pérdida se vincula, además, a un proceso de desmovilización claro y visible de la izquierda abertzale oficial y de sus bases.

“Ha sido un movimiento muy dinámico. Ha tenido una capacidad de convocar a la gente, de reunir, en eso yo creo que han sido ejemplares (...) Cualquier movilización incluso muy política como puede ser la de los presos, o ahora en defensa de Udalbiltza en los pueblos estamos viendo que la capacidad de reunir a más de una docena de personas... es muy limitada, es decir es el núcleo duro, lo que antes podría haber sido cualquier manifestación o concentración de 60 o 70 personas ¿no? entonces ahí se ve, y es en general la vida diaria ¿no?”

[Dirigente de Aralar]

Es un proceso de largo recorrido: siempre ha existido de una forma paulatina, siempre ha habido sectores que han cuestionado la capacidad de los medios para el logro de los fines y por ello siempre ha habido debate interno entorno a “a dónde conduce la violencia”.

“Lleva mucho tiempo en que no consigue, desde un planteamiento (...) insurgente de guerrillas si quieres "guevaristas" ¿no? de acción guerrillera, reacción del Estado que refuerza la acción guerrillera que sigue después ¿no? Es evidente que esa cadena se ha roto y se ha roto hace mucho tiempo. No hay una acción de ETA que debilite al Estado (...) y no hay una reacción del Estado que fortalezca a ETA. La cuestión es que las acciones de ETA fortalecen al Estado (...) y fortalecen también a las fuerzas políticas que propugnan eh... la no resolución del conflicto y al mismo tiempo, las acciones de ETA debilitan al nacionalismo vasco en su conjunto pero especialmente a la izquierda abertzale que todavía eh...no, bueno, pues no es crítica pues públicamente respecto a ETA.”

[Parlamentario de Aralar]

Se confirma que la violencia no aporta nada a la causa que dice defender y que,

además, tiene cada vez menor apoyo. Entorpece el proyecto de independencia y desmoviliza a las bases.

“No aporta nada y es una de las cuestiones que siempre discutimos con las bases sobre todo de Batasuna, pero ¿en que nos ha ayudado la acción de ETA, qué nos ha aportado los últimos años aparte de generarnos sufrimiento? (...) ni ha ayudado a socializar la, el deseo de la sociedad vasca ni... si no que al contrario, desvirtualiza esta imagen, la distorsiona y crea más que obstáculos en ese campo”.

[Dirigente de Aralar]

No es efectiva por muchos aspectos. El primero de los cuales es la acción policial y judicial: porque no hay acción de ETA que debilite al Estado y no hay acción del Estado que fortalezca a ETA; porque hace tiempo que se comprobó que la espiral acción-reacción no aporta nada a la causa. Además, el logro de objetivos se vincula a una negociación política por la independencia y, sin embargo, se ha revelado ineficaz, en múltiples negociaciones (Argel, Zurich, Loiola)³⁶⁶.

“Lo que parece ser que se iba a conseguir en Loiola, y no se consiguió, era más un final de ETA que una resolución del conflicto. Y eso, al final entre la gente cala. Porque la siguiente pregunta es bueno, entonces (..) si la lucha armada no nos va a llevar a una negociación en la que se resuelva el conflicto ¿para qué seguimos? Porque esta es una pregunta que a mí me parece clave ¿no? O sea, si tu empiezas con la lucha armada para resolver un conflicto, con la lucha armada no consigues resolver el conflicto, y eso fue lo que se vio sobre todo en Argel y en Lizarra, y en Loiola lo que se ve es que (..) por supuesto si tú no has conseguido resolver el conflicto con la lucha armada, tampoco lo vas a conseguir por dejar la lucha armada que es, que era como la última carta que se jugaba ¿no? bueno, no lo he conseguido militarmente pero sí lo voy a conseguir dejándolo. Pues es evidente pues que no... termina por calar que eso no va a ser así. Entonces, yo por eso yo creo que es más un proceso que no un momento dado. Pero es evidente que hay movimientos, que hay hitos históricos que van ayudando a que la percepción sea que efectivamente, no se va a solucionar el conflicto vasa por el ejercicio de la lucha armada ni por dejar de ejercer la lucha armada”

[Parlamentario de Aralar]

³⁶⁶ Es interesante constatar que todos los actores, tanto del ámbito nacionalista como del no nacionalista – constitucionalista, sacan sus propias conclusiones de los procesos de negociación. Son experiencias que plantean una reconsideración de las estrategias de unos y otros. Así como Argel, Lizarra y Loiola llevan (en la percepción de fracaso) a reconsiderar la efectividad de la violencia en la estrategia del MLNV, estos mismos procesos, como veremos, contribuyen a la redefinición de las estrategias del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil.

Ellos (Aralar) ya llevaron a cabo este proceso y hace tiempo que se dieron cuenta, durante el proceso *Lizarra-Batasuna* de que no era el camino, porque no se alcanzaban objetivos. Pero en la medida en que conocen el proceso, conocen también sus dificultades y sus tiempos.

“Hay una diferencia básica [entre Aralar y la otra sensibilidad de la izquierda abertzale] que es por supuesto que nosotros consideramos que el ciclo de la lucha armada ya está terminado -y fue así como lo presentamos ¿eh? no como una, no como una... evaluación moral sobre la lucha armada, eso también es verdad ¿no? Ahora sí ¿no? después de diez años de, de camino, también nosotros hemos evolucionado y si que, bueno, vemos que la lucha armada no sirve para resolver conflictos en general, no sirve para resolver conflictos, sirve para enquistarlos y cercena derechos humanos básicos que no se pueden cercenar. Pero eso ha sido, te lo digo sinceramente, o sea, eso ha sido consecuencia del camino hecho. Nosotros cuando planteamos.... nuestras bases, lo que decimos es: Ya.

P: NO ES EFECTIVO

R: Eso, eso, no es efectivo.

P: NO “NO ES ACEPTABLE”

R: Eso. No es efectivo. Eso es así ¿eh? no nos vamos a poner medallas ahora que no tenemos. Nosotros lo que planteamos es, no es efectivo. No es el momento, es un ciclo agotado y no nos va a llevar a ningún lado.”

[Parlamentario de Aralar]

Esta idea evidencia, de alguna manera, las dificultades que entraña un proceso de estas características. Cincuenta años de legitimación de la “lucha armada” no conducen de la noche a la mañana al reconocimiento de que se ha estado cometiendo un crimen. Parece ser un proceso mucho más lento y gradual en virtud del cual, primero se constataría su ineficacia para posteriormente encontrar algún tipo de relato alternativo que permita hacer una deslegitimación más moral³⁶⁷. En todo caso, lo que lleva a Aralar en el año 2000 a la separación de Herri Batasuna es la constatación de la no efectividad, de que no se logra nada, de que en Lizarra como en otros procesos, no se va a conseguir nada y que, por lo tanto, ello entorpece el “reconocimiento”, que es el objetivo. Ese proceso se estaría dando hoy en la izquierda abertzale oficial como resultado de algunas transformaciones experimentadas en la última década:

[Sobre el proceso de 2006 y la T4] *“Todo eso, eh...yo creo que lleva a un replanteamiento de la...de eh... la viabilidad de la estrategia armada. ¿Por qué? Porque por un lado, se va socializando que lo que se va a conseguir*

³⁶⁷ O quizá esto nunca llegue a ocurrir y sin más se queda en un rechazo estratégico, pero eso forma parte del ámbito de la especulación que trato de evitar en este texto.

no es el derecho a decidir. Que lo que se va a conseguir cuando se negocie ente ETA y el Estado no va a ser el derecho a decidir sino que lo que se va a conseguir es otra cosa (...) lo que está claro es que se busca más una salida digna, por un lado por parte de la izquierda abertzale se busca una salida digna a la lucha armada y de parte del Estado se busca un final ordenado de la lucha armada (...)”

[Parlamentario de Aralar]

Pero si atendemos a los factores que se perciben influyentes en la pérdida de efectividad de la violencia, podemos apreciar elementos que tienen que ver con transformaciones más allá del contexto local. La presencia de nuevas/otras formas de violencia parecen plantear problemas de cálculo en términos de medios y fines. En primer lugar, estaría el “aprendizaje” de otros procesos de conflicto y negociación. La evaluación de su fracaso o del escaso logro de objetivos lleva también a la constatación de esta idea: la “lucha armada” no conduce a los resultados políticos que se pretenden.

(Sobre la guerra civil en El Salvador y el papel del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) *“Entonces, o sea, no es el agotamiento de la lucha armada porque, es verdad que el Frente no consigue ganar la guerra pero es verdad que consigue sentarse y negociar que era lo que se buscaba aquí; sentarse y negociar. Y el resultado de esa negociación es prácticamente nulo.”*

[Parlamentario de Aralar]

Los procesos en otros países son fuente de inspiración y de aprendizaje. En algunos casos, sirven para comprobar la efectividad o no del uso de la violencia. En otros, para tratar de “copiar” estrategias, como es el caso del proceso de pacificación en el Ulster que condujo a los acuerdos de Viernes Santo en 1998. Este último, de hecho, se considera ejemplar y generador de una posible “hoja de ruta” adaptable al caso vasco en muchos aspectos. Las reflexiones salpican las narraciones de muchos de los actores. En un segundo lugar, aunque de una forma algo más difusa, permea el impacto que la aparición de “nuevas violencias” puede tener sobre el cálculo y las estrategias de ETA que, si se pretenden imitar, le cerrarían mucho más las oportunidades a nivel internacional.

“Las organizaciones terroristas también han cogido otra dimensión a la que ETA ni tiene acceso, vamos a decir, bueno, no creo que tenga acceso pero tampoco es su objetivo. Quiero decir, no creo que ETA ni pueda ni quiera convertirse en una organización que va a atentarse.... en, no sé, Dubai o en... Venezuela ¿no? sino que tiene su trayectoria, tiene su historia y

desde luego mantener una organización armada activa de esas dimensiones en ese contexto... en una Europa... yo cada vez lo veo más difícil...”

[Dirigente de Aralar]

Por otro lado, hay consenso en señalar que la violencia es también una limitación para quienes comparten el horizonte político de la independencia. La violencia cierra puertas, pero lo hace, sobre todo, en Europa. A ellos también les “molesta” la violencia, se percibe como una rémora, como una limitación para la consecución de sus propios objetivos. Y ello porque hay una percepción importante de que impera la confusión de medios-fines; de que mientras exista ETA, hay limitaciones importantes para el proyecto independentista.

“Nosotros insistíamos que tenemos que ir a Europa con este lema también pero para eso necesitamos una carta de presentación intachable. Y precisamente, con la excusa de la violencia de ETA se nos cierran muchísimas puertas en ese sentido. ¿Qué Estado puede negarse una y otra vez continuamente eh.... a una decisión soberana de un parlamento con mayoría absoluta de llevar a la práctica un ejercicio como una consulta que además en ese caso ni era vinculante siquiera, bueno, en nombre de la excusa de la violencia, de....bueno, puedes llevarla a instituciones europeas que claro, pero es que está ETA, está la violencia que defiende esto? Uhm... luchar contra eso es mucho más difícil. Ahora, si no tuviéramos... en ausencia de violencias, si no tuviéramos violencia, una vez te lo podrán tumbar, dos veces te lo podrán tumbar, pero estamos viendo, en Escocia se está dando este debate, con vamos a decir normalidad, en Quebec, en Groenlandia, Países de la Ex Yugoslavia se han dado con más o menos violencia, con más o menos dificultad y salvando las distancias y cada caso es totalmente diferente pero, el debate de.... del deseo de independizarse, de preguntar a la ciudadanía es algo que cada vez lo asumen con mas normalidad las sociedades democráticas y que tarde o temprano, en España también tendrá que darse ese ejercicio.”

[Dirigente de Aralar]

En definitiva, Aralar constata que la violencia no es efectiva, pero no sólo para ETA y para la izquierda abertzale oficial (o la “otra” sensibilidad de la izquierda abertzale, como dicen) sino que su persistencia genera ruido en el conflicto político, invisibiliza la razón de fondo del mismo y finalmente, limita las posibilidades del proyecto (independentista) que dice defender. Sobre todo, cuando dicho proyecto político se orienta hacia el exterior.

El discurso de la legitimidad:

En el diagnóstico que se hace dentro de esta perspectiva sobre la violencia hay, por otro lado, numerosas reflexiones en torno a la legitimidad de la misma. Se plantea, por un lado, cómo la pérdida de aceptación dentro de las bases de Batasuna, pero también la desmovilización generada por la efectividad de las políticas antiterroristas, ha llevado a la incapacidad de congregarse y convencer. La violencia ha superado, según su percepción, umbrales que la gente no acepta, su comunidad tampoco y, en el marco Europeo del siglo XXI, son difícilmente admisibles.

Por lo que respecta a la aceptabilidad social de la violencia, confirmado que la efectividad es una dimensión fundamental de su tolerancia, aparecen también argumentos de naturaleza moral e ideológica. Por un lado, la percepción de un claro cambio de valores con respecto al pasado (no en esta década, sino que se trata de un proceso de largo recorrido) en virtud del cual la vida y el derecho a la vida habrían cobrado una nueva dimensión frente a otros contextos históricos. Hoy, la ideología de los derechos humanos que impregna la sociedad contemporánea revaloriza la vida y la muerte en su dimensión social, y la importancia de la víctima de tal manera que es más difícil asumir su coste³⁶⁸.

Por otro lado, la violencia, como medio para lograr fines políticos ha perdido la aceptación social (casi natural) que tenía en el pasado:

“En los años cincuenta, en plena dictadura franquista, hacía veinte años que había terminado la guerra civil....hacía quince años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, la violencia como método para resolver conflictos era algo socialmente aceptado. Y...la vida del ser humano tenía menos valor del que tiene ahora (...) en cambio ahora, la vida de cada uno de los seres humanos tiene un valor casi absoluto ¿no? no sé si so... no entro a valorar si es bueno o malo.”

[Parlamentario de Aralar]

Ha desaparecido, además, la teorización de la “lucha armada” que dominaba en el pasado. Como también se ha eclipsado la idea de recurrir a medios revolucionarios para el logro de fines revolucionarios. Pero es que, además, se percibe que en el mundo occidental, en la Europa del siglo XXI, la violencia no es aceptable.

“...al fin y al cabo estamos en Europa, esto es una sociedad europea y ya

³⁶⁸ Sobre la importancia de la emergencia de la figura de la víctima en la sociología de la violencia véase Wieviorka (2005) y Wieviorka (2006).

no se acepta matar a alguien porque piensa diferente o por unos réditos políticos. Eso no quiere decir que dentro de 30 años no se vuelva a aceptar ¿eh? Quiere decir que ahora no se acepta, y eso es algo a lo que probablemente ETA no ha sabido acomodarse.”

[Parlamentario de Aralar]

En definitiva, tanto el cálculo de efectividad como el cálculo ético o ideológico de lo que representa emplear la violencia y atentar contra la vida de las personas están muy presentes en el diagnóstico de Aralar. En cada una de las dimensiones, aparece la variable internacional, ya sea por la vía del comportamiento de los actores (internacionales), ya sea como constatación de transformaciones ideológicas y discursivas. Pero en todo caso, dos son las consideraciones que merece la pena recoger: por un lado, el modo en que la persistencia de la violencia afecta y limita de alguna manera las posibilidades de quienes comparten un horizonte político similar; y por otro lado, el hecho de que se verifica el carácter profundo del debate interno en las sensibilidad abertzale “oficial” en torno a la violencia.

“Entonces yo sí que creo que eso existe.... mayoritariamente no tengo ninguna duda de que... para mí la diferencia que hay ahora entre este proceso... proceso o lo que sea que estamos viviendo ahora y los anteriores, la diferencia clave para mí es que la discusión dentro de Batasuna ya no es si la lucha armada es buena, mala, conveniente o inconveniente... la discusión es "cuándo lo dejamos" y "cómo lo dejamos" (...) cuando tu ya pasas a... planificar el cese... (...) o... cuando tú ya pasas a hablar de... de cómo hacemos para seguir unidos cuando lo dejamos... ya estás, ya has dado un paso adelante, es decir que "esto no vale". Y cuando tú dices "esto no vale" es cuestión de tiempo que tomes la decisión. Mayoritariamente... no creo que sea por unanimidad... pero es cuestión de tiempo. Y esa es la diferencia., esa es la gran diferencia que yo veo yo entre ahora y antes ¿no?”

[Parlamentario de Aralar]

El discurso sobre el papel represor del Estado:

La tercera y fundamental dimensión que parece ser central en el diagnóstico de la violencia tiene que ver con las evaluaciones sobre el papel del Estado. También en este enfoque se ha abordado el tema de la violencia en términos de “constelación” o de “dos violencias” y en este sentido, parte importante de las consideraciones sobre esta cuestión tienen que ver con la violencia del Estado que se denomina “violencia” o simplemente “represión”.

A este respecto, hay un claro consenso al señalar, siempre espontáneamente, cómo se ha transformado el papel del Estado manejando el “conflicto”. El endurecimiento claro de la represión del Estado ha estado orientado a una ampliación del círculo de personas que se consideran sospechosas o conniventes con el terrorismo, del espectro de actividades que son susceptibles de ser tratadas como terrorismo.

“Yo creo que han cambiado las formas eso sí que... yo creo que por las imágenes que hemos recibido en los '80, en la represión era más física en lo que respondía a manifestaciones, detenciones y demás. El Estado yo creo que ha ido un poco maquillando, disimulando un poco eso, pues porque no tienen buena prensa, ni a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional y que ha optado por unas vías más burocráticas vamos a decir, pues como puede ser la ilegalización de un partido con todo lo que conlleva, eh...bueno, dando una cobertura un poco mas legal a, pues tanto a detenciones, a la ilegalización de ciertas entidades”

[Dirigente de Aralar]

En este sentido, se considera que el Estado ha superado umbrales importantes en la medida en que se criminalizan comportamientos que no son estrictamente terrorismo: en el ámbito de la cultura, en el de la desobediencia civil. Y se señalan como hitos importantes el cierre del periódico Egunkaria (2003), los macro-juicios más relevantes como el sumario 18/98 (en el que se considera que ha habido represión de naturaleza política: no a activistas de ETA sino a simples activistas políticos), la criminalización del proyecto de desobediencia civil de la Fundación Zumalabe (2007) o la iniciativa de concejales electos Udalbiltza (2010). Se percibe que en la última década ha habido una ampliación de dicha represión que se considera “política” y que tiene que ver con la identificación de medios y fines.

Por otro lado, hay una apreciación de que el incremento de las detenciones masivas, los macro-sumarios o la LOPP, aunque no se hayan producido con el consenso de la sociedad (ni de la española ni de la vasca), tampoco ha generado mucha resistencia y que, de alguna manera, hay pasividad frente a dichas políticas. Una pasividad que se deriva también del hartazgo y de la sensación que se han superado tantos umbrales que ya no merece la pena defender a quienes de algún modo “se lo están buscando”:

“Claro. Pero es que, yo te voy a decir incluso personas (...), que se han movilizado, te dicen, luego, en privado te dicen: "es, joe, es que se lo están ganando, eh". Claro, entonces imagínate si eso lo dicen personas (...) en plan coloquial y, ¿no?, quiero decir, en ámbitos de mucha sinceridad y tal,

imagínate lo que se piensa en el resto de la sociedad (...) O sea, aquí hay un rechazo mayoritario al que...no sé, por ejemplo, el "Caso Egunkaria" es muy evidente. En "el 18/98" un poco menos y con lo de la ley de partidos otro poquito menos. Aquí también hay gente que, que estando en contra, es lo que te decía antes, estando en contra, eh, lo que dicen es que se lo, que se lo han buscado y se lo merecen. Entonces, están en contra de la ley de partidos y están en contra de que se ilegalice, pero dicen: " pero es que Batasuna y la izquierda abertzale tampoco está haciendo nada para, para ser legales, así que, un poco entre comillas, que se jodan."

[Activista por la paz]

En todo momento se plantea que la vía policial y judicial es importante para lograr acabar con ETA y que, en esto, tanto los avances en la cooperación internacional como la propia sofisticación de las FCSE son positivos; pero hay un discurso enormemente crítico con la ampliación de dicha acción al ámbito de lo político. Y junto a dicho discurso aparece una deslegitimación difusa de las instituciones del Estado, y del Poder Judicial en particular. Pero, a la vez, se constata que el respaldo internacional a dichas políticas ha contribuido a legitimar los cambios en la política antiterrorista.

Por un lado, aparece la idea de que, al integrarse España en la Unión Europea, pasó a entrar en un ámbito en el que no se permiten ciertas cosas y que, por lo tanto, hay que proyectar una imagen de “normalidad democrática”. Dicha explicación ayuda a comprender la transición de unas estrategias estatales de represión “brutal” (los GAL) hacia una estrategia de represión más dura pero por la vía de lo legal (la ampliación de la noción de terrorismo, la legislación de la última década y su impacto sobre el ámbito político).

Por otro lado, se constata abiertamente el papel del cambio en el contexto internacional en la última década, la mayor sensibilización con el fenómeno del terrorismo y la priorización de la agenda de la seguridad, en el respaldo de medidas adoptadas por el Estado y que se consideran de dudosa legitimidad democrática.

“Y a partir de entonces, otra vez tenemos una apuesta por la vía represiva ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia está en el papel de Europa (...) la gran diferencia es que el Tribunal de Estrasburgo dice: "no mira no, es que mientras exista ETA podéis ilegalizar hasta la asociación de vecinos de la escalera, todo. Todo es ilegalizable si el Estado entiende que tiene relación orgánica con o de continuación con ETA. Entonces claro, perder el apoyo internacional, perderlo tan claramente, lleva a la izquierda abertzale oficial a un callejón sin salida. No hay capacidad militar por parte de ETA...”

Entonces, ni hay capacidad militar, ni hay capacidad política porque se está ilegalizado. Ni hay previsión de que la comunidad internacional a través del Tribunal de Estrasburgo, deslegitime la política antiterrorista del Estado. Entonces claro, ante eso, lo único que queda es intentar sacar la cabeza, que es lo que están haciendo.”

[Parlamentario de Aralar]

Este pasaje evidencia, por un lado, el cambio en el papel del Estado en la última década pero, por otro lado, la dimensión internacional que adquieren las medidas antiterroristas y cómo el Estado queda legitimado internacionalmente, mientras que el efecto sobre ETA y Batasuna es demoledor. El cierre de oportunidades que esto representa es claro para la izquierda abertzale oficial. Quienes han abonado históricamente el campo internacional y se han sentido cómodos durante décadas en dicho entorno encuentran un rechazo frontal de las instituciones jurídicas internacionales.

“Entonces siempre ha habido eh...siempre ha habido la esperanza por parte de la gente de Batasuna.... de que Europa fuera a poner la eh... legislación de partidos sobre todo en su sitio; de "no, esto no puede ser" ¿no? y yo por ejemplo, yo estaba convencido, convencido de que el Tribunal de Estrasburgo iba a decir: la ilegalización de ANV, la ilegalización de Batasuna de EHAK, bueno, de todos los partidos políticos esa está bien hecha... son partidos vinculados orgánicamente a una organización terrorista... que se ilegalicen, no pasa nada, Pero... la ilegalización de las listas ciudadanas, que se presentaron en cada pueblo... eso, no puede ser; (...) Y sin embargo, el TE mete todo en el mismo saco. Dice: "no solo partidos sino también listas; todo se puede ilegalizar mientras ETA exista". Claro, cuando eso pasa, de repente eh...se cierran muchas puertas para Batasuna. Ya no hay dónde... ya no hay a dónde ir... Jurídicamente.”

[Parlamentario de Aralar]

El contexto internacional aparece de tres maneras en el diagnóstico de la violencia: 1) Como marco del que aprender y adoptar proyectos y estrategias de resolución y, al tiempo, como marco para presentar y avanzar en propuestas de independencia (con la constatación de que la violencia de ETA es un factor limitador. 2) Como marco de respaldo internacional de las políticas antiterroristas que afecta mucho a ETA y a la Izquierda abertzale en general. 3) Al reconocer la importancia de los episodios como el 11-M. Y 4) como contexto de progresiva pérdida de legitimidad de la violencia resultado de cambio de valores y nuevas ideologías (los derechos humanos o la seguridad).

En definitiva, el diagnóstico hecho tanto por los dirigentes de la izquierda abertzale oficial como por la izquierda abertzale parlamentaria permite constatar que las condiciones en las que se produce la violencia han cambiado sustancialmente. Permite también advertir que la efectividad y la legitimidad son dimensiones fundamentales de la misma, y que, en todo caso, la transformación de dicha dimensiones tiene un componente si no definitivo, sí interviniente en los cambios experimentados en el contexto internacional entre 1998 y 2010.

6.1.3.3 El diagnóstico de la violencia en el nacionalismo moderado (PNV):

Dentro de la familia ideológica y sociológica nacionalista e independentista habría que diferenciar también la corriente del nacionalismo moderado, representada fundamentalmente por el PNV, en virtud de sus diferencias claras con la familia independentista abertzale. Sin embargo, en la medida en que está en su horizonte político el logro de un proyecto, si no independentista, sí de altas dosis de soberanía y, en la medida en que comparten la visión fundamental de que el problema en el País Vasco es la existencia de un conflicto político e histórico irresuelto con el Estado, considero que debe analizarse dentro de este grupo. Aún así, lo primero que hay que destacar es que en términos de diagnóstico de la violencia y, sobre todo, en las consideraciones del contexto internacional sobre el mismo, el discurso del nacionalismo moderado se parece bastante en algunos aspectos al discurso del bloque constitucionalista.

La violencia, que se entiende en todo momento como “terrorismo”, apareció como consecuencia del conflicto y, sin embargo, también como el principal problema vinculado al mismo. A partir de una reconstrucción del pasado y del nacionalismo en el contexto de la lucha antifranquista, se enmarca el fenómeno de la violencia aunque no hay consenso en señalar los factores históricos como fundamentales en la aparición de la violencia. Se percibe a día de hoy como un problema social de naturaleza moral, de violación de los derechos humanos.

Se constatan, empero, cambios muy importantes en los últimos quince años que están vinculados, por un lado, al creciente rechazo social de la violencia, que vendría de lejos y que sin embargo se corrobora que hoy está redimensionado (tanto por la significación pública de las víctimas como por los cambios en el contexto global), y por otro lado, la pérdida de efectividad de la violencia de ETA frente a la altísima capacidad del Estado (en colaboración con actores internacionales) para hacerle frente.

Finalmente, aparece un discurso bastante crítico con la evolución de algunos aspectos de la política antiterrorista y de lo que se considera un “frente” antinacionalista de criminalización e identificación de medios y fines.

El discurso de la efectividad:

De nuevo surgen los problemas de efectividad, pero no se plantean tanto en términos de incapacidad para lograr objetivos como en relación a la situación visible de ETA. Aparece la visión irónica de una ETA en estado de descomposición (desideologizada y no profesional) aunque con más crítica que mofa. En la narración de las dificultades operativas de ETA y de los efectos de las políticas de seguridad sobre la misma, surge esta caracterización que merece la pena rescatar:

“Hay que tener en cuenta que la ETA de hoy, absolutamente en nada se parece a la ETA de hace 15 o 20 años. Éstos, algunos de éstos (...) haciendo las cosas que hacen, de la forma que lo hacen, hubiesen sido expulsados por sus propios jefes, Txomin Iturbe etc, etc, a patadas. Expulsados. Aquella era otra ETA. Yo tuve que entrevistarme el año 80, con Txomin Iturbe y otro personaje, cuyo nombre no recuerdo pero que fue asesinado por el GAL después, porque a mí el año 80 me mandaron una carta pidiendo el impuesto revolucionario, de cinco millones. Y entonces acudí, con un cuñado mío, acudí a San Juan de Luz. Me entrevisté con aquéllos, montamos una bronca de primera división (...) Y entonces, aquella era otra clase, otra forma de actuar, otro barniz. Si se me permite la expresión, eran profesionales de eso. Hoy son una cuadrilla de "pingos", pero como asesinar es sencillo, lo hacen. Pero este es otro mundo.”

[Militante del PNV y ex miembro del Gobierno Vasco]

Parte importante del diagnóstico de la violencia, así como de su pronóstico, está relacionado con esta imagen de “falta de profesionalidad” de la organización, y, por otro lado, con las altas capacidades que se confieren a la policía en un contexto de colaboración que se entiende como nunca antes conocido. En este sentido, se atribuye al cambio de contexto internacional un papel importante, sobre todo en lo que se refiere a la colaboración policial y judicial para la represión de la violencia. Un contexto que era en el pasado mucho menos favorable a la “lucha antiterrorista”. Los niveles de cooperación eran significativamente más bajos y “había que pelear” mucho más para lograr la cooperación francesa, por ejemplo.

El discurso de la legitimidad:

También vemos que, tal y como se comprobará en el enmarque del bloque constitucionalista, hay mayor espacio para las reflexiones en torno a la pérdida de legitimidad y aceptabilidad social de la violencia. En este sentido se constata cómo la deslegitimación de la violencia ha sido un proceso gradual y lleno de “hitos” internos y externos también.

En el relato, encontramos los inicios de dicho proceso vinculados a las manifestaciones de *Gesto por la paz* en los años ochenta como hecho importante. Asimismo, los episodios de Ermua aparecen como acontecimientos en alguna medida transformadores y superadores de umbrales de tolerancia. Sin embargo, se atribuye un papel muy importante en este proceso de deslegitimación al impacto visible de las víctimas en el escenario político. Las víctimas aparecen a finales de los años noventa con una crítica clara sobre todo hacia el gobierno vasco, de reconocimiento y de reparación. En todo caso, se percibe que lo tolerable, en un momento dado, supera determinados umbrales no sólo porque el impacto de la violencia sea mayor sino por las propias transformaciones sociales que estamos señalando.

Ese proceso de deslegitimación de la violencia, que se considera voluntarioso y no resultado del azar (sino de la acción de la sociedad civil), encuentra, además, una revalorización fundamental a lo largo de ésta década porque, en alguna medida, se percibe que el terrorismo tiene mucha mayor resonancia hoy que en el pasado y por lo tanto, la necesidad de hablar de él, de informar, de condenarlo y de resolverlo, parece haber cobrado mayor fuerza. En el pasado había más violencia (en términos de acciones y de víctimas) y, sin embargo, se vivía en el silencio social. Hoy se habla más de él, se escribe más y es más relevante socialmente.

“Se habla de distinta manera. En aquel entonces era, digamos, aparecía el reflejo de la brutalidad, pero no se entraba tanto al comentario, directo, yo diría que atrevido, por no decir valiente, de muchísimo comentarista. Hoy, en la calle, tranquilamente, la gente reprocha y condena del ejercicio de la violencia. En los años 80, aparecía la magnitud y el dramatismo de Irene Villa, de muchísima gente ensangrentada por las calles. Del cuartel de Zaragoza, de Hipercor y de muchísimas cosas. Aparecía lo que era un poco el reflejo de, de, del dramatismo. Y a partir, yo diría que eso, de la década de los 90(...) yo diría que sí aparece eso, afortunadamente, con menos frecuencia. Porque fíjese usted, pues, eh, cada, antes era cada dos por tres un asesinato, y un atentado, una bomba. En este momento, pues ya prácticamente se olvidan (...) pero de todos modos se habla muchísimo más y se escribe muchísimo más, sobre todo sobre el rechazo a la violencia.”

[Militante del PNV y ex miembro del Gobierno Vasco]

Así, al constatar la mayor resonancia e impacto del terrorismo en la última década, se entra espontáneamente a evaluar el papel de los factores internacionales en dicho proceso. Y si, en la medida en que aparecen nuevas formas de violencia “más brutales e indiscriminadas”, la comunidad internacional se envuelve de un espíritu más solidario con el terrorismo y más proclive a adoptar las medidas necesarias para combatirlo. Hay consenso en señalar un clima de deslegitimación de la violencia que tiene algún efecto sobre este proceso.

“Ha cambiado, en, digamos, la forma de reaccionar de la propia gente, que ya no los considera unos héroes, ni muchísimos menos. En aquel entonces eran considerados casi héroes porque provenían de, de la lucha antifranquista, de la lucha antidictadura. En este momento ya no lo entiende nadie. Y en la medida en que se producen barbaridades como, eh, la del 11-S y la del 11-M, es evidente que eso les afecta negativamente. Es decir, o sea, éstos, por ejemplo, ahora una masacre como la de Hipercor, que en su momento también revolvió los estómagos de muchísima gente, creo que fueron 21 los que allá cayeron en Hipercor. Una cosa de éstas yo creo que no se les pasará por la cabeza, siquiera. Porque después de lo del 11-M y lo del 11-S (...) es que bueno, yo creo que se les echa el mundo encima.”

[Militante del PNV y ex miembro del Gobierno Vasco]

Se percibe que a nivel mundial, al menos en los países avanzados, ya no se admite el uso de la violencia –el “ejercicio del terror” para conseguir fines políticos. Y esta constatación es asumida también dentro del mundo de ETA porque su estrategia habría quedado desautorizada.

Los efectos de este proceso de pérdida de legitimidad son visibles en el “mundo de ETA” en la medida en que ellos notan que han perdido apoyo internacional, y muy en concreto en Francia; donde tocan una puerta y ya no les acogen como refugiados. El contexto internacional ha conducido al fin de los santuarios y ello repercute, por un lado, en la efectividad/operatividad de la organización, pero, consecuentemente, en la pérdida de respaldo y dificultades para lograr que alguien quiera “embarcarse” en su actividad.

Aún así, aunque se constaten las dificultades de legitimación externa e interna de ETA, se conocen bien los inconvenientes que llevan de esta comprobación al abandono de la violencia. Hay una comunidad de legitimación muy potente en la izquierda

abertzale y por más que este proceso de deslegitimación progresiva se esté dando, la “adhesión afectiva”, el “voto por consanguinidad” como se denomina, es una limitación para el fin del terrorismo.

Esta es la situación (...) y en este momento es evidentísimo, que E.T.A. (...) yo creo que (...) una parte importante de quienes le han apoyado, en este momento le retirarían gustosos el apoyo. (...) E.T.A. persiste porque tiene, porque cuenta con un apoyo importante de la sociedad. Que no estará de acuerdo con el asesinato, pero tampoco está de acuerdo con otras políticas que se siguen desde el propio Estado y entonces dice: " bueno, eh, te sigo apoyando, pero ya parará."

[Militante del PNV y ex miembro del Gobierno Vasco]

De nuevo, la percepción de las dos violencias y por otro lado las dificultades para superar cincuenta años de una narración de “lucha” legítima, ayudarían a explicar la persistencia de la legitimación de la violencia, aunque sea cada vez más minoritaria.

El discurso sobre el papel del Estado:

En las representaciones sobre el papel del Estado en los últimos quince años hay de nuevo consenso en señalar una tendencia negativa en algunos aspectos. Por un lado, se percibe de un modo muy optimista y se evalúa muy positivamente todo aquello que tiene que ver con la sofisticación policial y los resultados policiales y judiciales de la “lucha antiterrorista”. Ahora bien, se recibe muy negativamente lo que se entiende como una ampliación del espectro de represión hacia el ámbito político. Se asume que ha habido una identificación de medios y fines en virtud de la cual se habría venido criminalizando los proyectos nacionalistas con las excusa de la pervivencia del terrorismo.

Hay un discurso entonces muy crítico, por un lado, con esta transformación en las políticas antiterroristas y de seguridad y por otro lado, un tono bastante victimista en lo que respecta a sus efectos sobre el conjunto del nacionalismo, y en particular con el PNV:

“El Partido Popular y el Partido Socialista lo que hacen es, más allá de lo que pudiera ser la neta persecución de un fin de desentrañamiento de, de lo que pudiera ser ese entramado, ir contra una ideología que es el nacionalismo”

[Militante del PNV y ex miembro del Gobierno Vasco]

El pacto antiterrorista se percibe como un ataque al nacionalismo y una exclusión de quienes han sido un partido fundamental en los consensos de la política española. Se entiende que ETA es algo más que ETA y, por lo tanto, hay alguna validación de las teorías jurídicas que hay detrás de las nuevas formas de lucha antiterrorista, pero se confirma que dicha teoría se ha aplicado con una laxitud que se acerca a la identificación “nacionalismo = terrorismo”.

Por otro lado, hay críticas importantes a la ampliación de los ámbitos de represión penal. La interpretación que se hace es que el excesivo punitivismo, y la criminalización de actividades políticas y culturales por estar vinculadas al abertzalismo sociológico, son un error estratégico, un exceso de fuerza del Estado y una limitación de las garantías democráticas.

“Hay un primer plano policial en el que el éxito es rotundo y eso es de agradecer. Hay un nivel de penetración en el mundo abertzale.... eso es un éxito incalculable... hay un segundo nivel, los círculos concéntricos, que es una fagocitación (...) la gente aquí no entendemos que violar y asesinar a una joven en San Fermín le cueste diez años y quemar un contenedor suponga doce años. Porque quemar un contenedor aquí son doce años y quemarlo en Sevilla o en Madrid es una multa. El exceso de la penalización, de la estigmatización, del victimismo que tú generas y que das aliento, es un error estratégico. La mano dura, desde ese punto de vista de legislación antiterrorista yo creo que debe de existir en el terreno policial en el sentido de respetar el equilibrio en el empleo de la fuerza y eso es muy fácil escribirlo y muy fácil llevarlo a la práctica, eh... me refiero también al tema de torturas y que, cuando por ejemplo en el caso de Egunkaria el grado de credibilidad social de las personas que la denunciaron como [nombre del imputado] (...) Es decir, a mí, que [X] me cuente las torturas que le hicieron y cómo entraron a las 3 de la mañana, cómo despertaron a sus hijas, como les desnudaron dices...pero esa violencia gratuita, a qué, con perdón, cojones viene? a qué? porque eso genera una sentimiento de odio en esa familia, en personas que no significa que desde luego vayan a coger una pistola y a pasar al mundo de ETA ni a legitimar el mundo de ETA pero ¿qué sentido tiene?”

[Militante del PNV, Consejo vasco del movimiento Europeo]

Aparece también la idea de la “obsesión condenatoria” y el modo en que se ha establecido un horizonte discursivo en virtud del cual la *no condena* es criticable en el ámbito moral pero no exigible desde el punto de vista político. Ello se percibe como una limitación de la libertad de expresión que ha superado umbrales en la última década y que afecta al desarrollo político en el País Vasco.

Finalmente, aparecen dos discursos muy críticos hacia las instituciones del

Estado implicadas en la “lucha antiterrorista”, en concreto, hacia el poder judicial y, además, hacia lo que se considera una implementación del “derecho penal del enemigo”, que aunque no es entendido en estos términos, apunta a un exceso de penas, a doctrinas de difícil justificación democrática (como la *doctrina Parot*) o a la ampliación excesiva del delito de terrorismo.

6.1.4 Pronóstico sobre la violencia: “No aporta y molesta en Europa”

La última dimensión que aparece en el enfoque independentista tiene que ver con el pronóstico que se hace de la violencia a medio y largo plazo. El escenario que aparece es optimista en todos los casos. Hay consenso al señalar -aunque en el caso de la izquierda abertzale no se plantee en estos términos- que se está en el camino que conduce, a la larga, al fin de la violencia.

Los dos procesos más sobresalientes que se vinculan a este diagnóstico tienen que ver, por un lado, con la escasa efectividad que encuentra la violencia a lo largo de la última década. Por otro lado estaría la constatación de un creciente proceso de pérdida de aceptabilidad social que, si bien en cierto sentido está vinculado a la limitación “operativa” de la violencia, también lo está a un marco ideológico y moral en el que ésta tiene cada vez más dificultades para legitimarse. En ambos procesos, se constata que la dimensión internacional, comprendida de maneras distintas, tiene efectos importantes; ya por la sofisticación e intensificación de la cooperación policial y judicial, ya por el clima de deslegitimación de la violencia en la última década.

6.2 Percepciones sobre la violencia en la perspectiva Constitucionalista

Si atendemos a las percepciones y evaluaciones de los actores que podemos adscribir al bloque constitucionalista, encontramos elementos comunes de gran envergadura que nos permiten hablar de un relato hegemónico, aunque contenga importantes matices. En virtud de las narraciones desarrolladas por los informantes que son a la vez actores, podemos establecer tres líneas de argumentación. En primer lugar la representación que tienen del problema, del conflicto, en 2010. Hay en la mayoría de las narraciones un recorrido histórico breve por las raíces del problema desde el final del franquismo pero, en todo caso, se ha querido recoger la definición que se hace en el momento presente, en tanto muchos coinciden en señalar que la propia explicación del conflicto ha cambiado en la medida en que se ha tendido a priorizar el problema de la violencia en los últimos quince años. En segundo lugar, las valoraciones de la

dimensión internacional sobre las que se indagó para comprender qué significados se vinculaban a las ideas de “contexto internacional” y “transformaciones globales”. Es interesante constatar cómo aparecen dichas percepciones y el modo en que se infiere que afectan al problema que han definido. En tercer lugar aparece un diagnóstico y evaluación sobre la violencia y el terrorismo; las representaciones que tienen los actores y el modo en que caracterizan la violencia y su evolución en los últimos quince años. Finalmente, se plantean unas perspectivas futuras, un análisis y pronóstico de la trayectoria imaginada de los actores y de las posibilidades o limitaciones para la violencia o para la salida de la misma.

6.2.1 La definición del problema: Conflicto vs. Terrorismo

El conflicto se define de una manera hegemónica en términos problemáticos. Hay una clara constatación de que “conflicto”, como etiqueta, dificulta la comprensión del problema. No se comprende en términos políticos amplios -de intereses antagónicos, contrapuestos- sino como contienda o enfrentamiento armado. En este sentido, se subraya de una manera clara la confusión que genera el hecho de hablar de “conflicto” político. Es una categoría que genera rechazo y recelo hacia a quien la propone, y que aparece de una forma reactiva si no se sugiere³⁶⁹.

Se señala la imposición de una narración dominante –nacionalista- que se entiende como étnica e identitaria, sobre la idea de que hay un único conflicto, cuando una sociedad compleja permitiría hablar de múltiples conflictos. Ello es visto como una perversión del lenguaje y de los términos fruto de una manipulación ideológica.

“Hay que empezar diciendo que, que, que el País Vasco eh... ha hecho, ha pervertido diversos términos de uso común: conflicto,(...) diálogo, etc. y cuando se habla de conflicto vasco de lo que se está hablando es de que hay unas pretensiones políticas por parte de del nacionalismo en su conjunto el (...) y en nombre de esas pretensiones políticas hay quien asesina, quien utiliza el terrorismo (...) en pro de alcanzarlas y porque cree que (...) cree que, que eh... por esa vía y por ese medio va a conseguir su final.”

[Dirigente del PP País Vasco]

³⁶⁹ Ya al inicio del tercer capítulo tuve la ocasión de apuntar esta idea de “metaconflicto” en virtud de la cual es la propia naturaleza de lo que ocurre lo que se debate entre los diferentes actores implicados. Si esto se puede constatar en la mayoría de los conflictos sociales, más aún en escenarios de violencia que entrañan legitimaciones y deslegitimaciones con implicaciones políticas claras.

La comprensión del problema en estos términos conduce a un posicionamiento ideológico de los propios actores frente al nacionalismo. La mayoría de ellos se sitúan bien en el ámbito ideológicamente elaborado de la “ciudadanía posnacional”, con alusiones a debates académicos intelectuales sobre el republicanismo y las identidades posnacionales, bien en el ámbito del antinacionalismo, y de la militancia contra las identidades particularistas y los planteamientos de carácter étnico.

“A mí me parece que los nacionalistas han conquistado el lenguaje. Y hay tres palabras que debieran desaparecer de la circulación: conflicto, proceso y diálogo (...) plantear el conflicto originario y, a partir del conflicto originario, explicar ETA como resultado del conflicto es la justificación de la existencia de ETA. Y es la justificación de la existencia de ETA porque en el fondo el nacionalismo - institucional, dudosamente democrático pero institucional (...) el nacionalismo lo que pretende siempre es que el abandono del t., de la lucha armada entre comillas, "lucha armada" siempre tenga contrapartidas políticas, de tal manera que: resolvamos el conflicto y, si resolvemos el conflicto, ETA desaparecerá.”

[Ex dirigente sindical del País Vasco]

Esta cita revela algunos de los argumentos compartidos en una versión extrema del constitucionalismo en virtud de los cuales, hablar de conflicto político implica aceptar que la violencia tiene fines políticos. Aceptar que hay unas demandas nacionalistas es dar contenido a la violencia de ETA y dar sentido a una violencia implica necesariamente respaldarla, legitimarla.

El problema fundamental es el terrorismo. A partir de la constatación de que no hay un conflicto político, o al menos no hay un único conflicto (“el conflicto”) y más allá de las diferencias que puede haber en todo tipo de sociedades, el problema en el País Vasco en 2010 es una cuestión de terrorismo. Terrorismo aparece sin apellidos, sin contexto, sin epítetos y se elude contextualizarlo en un marco político. Más bien hay una intención de presentarlo como un fenómeno desnudo, quizá porque se percibe que explicar es legitimar.

“No hay razón en el terrorismo, no hay sentido en el terrorismo, no hay política en el terrorismo. Sólo hay terror, muerte, chantaje. Sólo hay voluntad de someter, de sojuzgar, de destruir la moral de los hombres y mujeres, de eliminar sus convicciones (...) es una afirmación con la que sólo pueden estar en desacuerdo quienes participan del terror o quienes pretenden obtener cualquier rentabilidad -política, institucional,

económica, mediática, social- del ejercicio del terror por parte de otros.”
[Rosa Díez, diputada UpyD en Garzón, 2006 pp 19 yss]

En una versión matizada se comprende que el terrorismo es un problema de “medios” (y que habría otra manera de defender intereses legítimos, aunque se perciben como obsoletos y sin futuro en un mundo de identidades globales) pero la percepción varía cuando se cuestionan también los fines. Por ello, aparece también una versión más radical de este diagnóstico en la que el nacionalismo y las identidades étnicas son en sí un problema y una amenaza.

“Aralar (...) es un partido que ha hecho la transición hacia la no violencia, contra el terrorismo pero bueno... tiene un nacionalismo étnico de alta intensidad. Es decir, éstos no tienen ni puta idea de lo que es ciudadanía y estado de derecho. Ciudadanía es, el concepto de ciudadano es algo así como... deslegitimar la conciencia nacional vasca.”

[Ex dirigente sindical del País Vasco]

En esta última cita, se va más allá del debate sobre la violencia para cuestionar las propias demandas de una organización que se denomina independentista (de izquierdas y abertzale).

En la definición del problema, no hay alusiones espontáneas a una dimensión internacional del problema, posiblemente porque subyace la idea de que explicar es comprender y comprender, legitimar. La mayoría hace una narración que retrotrae el fenómeno del terrorismo a la salida del franquismo para acabar planteando un problema de impunidad, de legitimación difusa de quien comparte los fines, es decir, de las demandas nacionalistas.

6.2.2 El contexto internacional y “el bien colateral”

El primer aspecto llamativo de las representaciones sobre el contexto internacional y los cambios geopolíticos que han conllevado en la última década es la naturalidad con que todos los entrevistados acogieron la propuesta. A diferencia de indagaciones parecidas en 2004, los factores internacionales aparecen como aspectos de relevancia en el desarrollo del conflicto, fundamentalmente en la última década. En ningún momento se sobredimensiona atribuyéndole capacidad transformadora mono-causal y, sin embargo, ninguno de los informantes planteó un rechazo a incluir esta

dimensión como un aspecto importante dentro del conjunto de transformaciones experimentadas en los quince últimos años y en concreto, a partir del año 2000.

Ahora bien, es necesario evidenciar también que en el conjunto de actores entrevistados para la construcción de la perspectiva “constitucionalista” sí se percibe una menor familiaridad en la evaluación de dicho contexto que la que aparece dentro del bloque independentista, y en concreto de las organizaciones cercanas o del MLNV. Claramente, esto evidencia que mientras los últimos han evaluado históricamente el potencial del mismo para los propósitos de su acción, los segundos sólo recientemente, en los últimos quince años, han constatado que se trata de un ámbito crucial en el que operar o hacia el que orientar su estrategia.

El contexto internacional/global aparece representado en el imaginario de los informantes de manera difusa en un primer momento. Se refieren cambios de naturaleza económica, cambios en la configuración de las relaciones de los Estados, se diferencia un ámbito global de un ámbito “europeo”, pero siempre de una manera poco concreta. De modo más minoritario, el proceso de globalización se comprende vinculado a cambios culturales que, de algún modo, afectan al fin de las identidades locales/particulares, lo cual contribuiría en el futuro, a evidenciar que las demandas nacionalistas no tienen mucha cabida en un mundo en proceso de globalización (que claramente se entiende como homogeneización cultural y como pérdida de claridad de las fronteras y las identidades nacionales³⁷⁰).

Con todo, al tratar de vincular los cambios en el escenario internacional en los últimos quince años algunos temas aparecen espontáneamente y están vinculados de una forma clara al modo en que se comprende el problema del País Vasco.

En tanto que se ha partido de un diagnóstico de terrorismo, no resulta llamativo que la primera constatación que aparece tenga que ver con las políticas antiterroristas desarrolladas a nivel mundial después del 11S. Este tema aparece sin necesidad de ser inducido en la mayoría de los casos. Se percibe que el impulso recibido internacionalmente en las políticas de seguridad y antiterrorismo está vinculado a acontecimientos globales y que hay claramente un umbral: un antes y un después del 11-S que tiene un reflejo en las políticas antiterroristas españolas.

“El... mismo 11S, yo creo que lo que ha supuesto es un cambio a la hora de afrontar con la máxima cooperación internacional el terrorismo, parece

³⁷⁰ Este mismo proceso se constata a la “inversa” en la narración que hace el independentismo del contexto global.

que hay un antes y un después en la cooperación de Francia, parece que hay un antes y un después en la obtención de medios tecnológicos para perseguir a los terroristas, parece que hay un antes y un después en cuanto a la lista de organizaciones terroristas globales...”

[Dirigente PP vasco]

Una segunda idea que aparece en el modo en que se entiende el contexto internacional confirma que, si ha habido históricamente una dimensión internacional del terrorismo en el País Vasco, dicha dimensión se debe a que éste ha sido un ámbito muy trabajado por el MLNV, la Izquierda Abertzale, y ETA³⁷¹, contribuyendo a presentar internacionalmente una visión distorsionada de la realidad del País Vasco. Se entiende que son y han sido muy activos en proyectar su acción internacionalmente y que, en esas campaña de proselitismo, han logrado históricamente la complacencia de una parte importante de la comunidad internacional (ya en el marco de la ONU, ya en muchos países de la UE y de América Latina).

A la vez, se razona que esa labor de “proyección” ha sido minusvalorada por parte del Estado y de los diferentes gobiernos. No se han hecho suficientes esfuerzos en el pasado para contrarrestar la visión abertzale por lo que aparece una reivindicación de mejora en dicho sentido. En todo caso, se constata que ésta ha sido una importante transformación de los últimos diez años³⁷². Y en esa labor también habrían participado las propias organizaciones de la sociedad civil, que se consideran tan protagonistas en la “derrota de ETA” como las FCSE. Movilizar a las opiniones públicas internacionales es fundamental: *“por eso hay que cuidar para que sepan realmente lo que sucede”* (Activista Foro Ermua).

En todo caso, la constatación de que el mundo de la izquierda abertzale ha proyectado su estrategia hacia el exterior permite elaborar juicios sobre el modo en que en circunstancias de debilidad han intentado de nuevo “sacar la cabeza” hacia el exterior y buscar lazos con otras organizaciones y movimientos, diplomacias paralelas, complacencias europeas, etc.

³⁷¹ Se suele hablar de una forma indiferenciada sobre ETA y la izquierda abertzale e incluso de los “terroristas” para incluir a miembros de ETA o de Batasuna indistintamente. Y en ningún caso aparece el MLNV como movimiento. Ni sus siglas ni la referencia a dicha realidad. Es evidente que se ha asumido, en el lenguaje cotidiano, la teoría de “todo es ETA”.

³⁷² Este es un aspecto que ya ha sido abordado en capítulos anteriores. Tanto la proyección histórica de la izquierda abertzale hacia el exterior como la propia actividad diplomática de los distintos gobiernos en la última década, para hacer resonar otra visión del problema en las instituciones internacionales es visible en el periodo analizado.

“Ellos entonces lo que hacen es....eh, también intentar...la colaboración terrorista internacional, yo creo que en esos momentos empieza el asunto de Venezuela, en esos momentos se refuerza... eh su interés por llevar el tema a Bruselas, buscan los mediadores internacionales; desde la misma manera que empieza a ser más global el acoso al terrorismo, desde la misma manera que los ciudadanos empiezan a ver que igual me toca este u otro terrorismo yo creo que ellos también... intentan buscar su camino y sus...y sus complicidades... yo creo que entienden que se han movido más sus anchas en algunos términos, en algunos lugares que no se ha conocido bien su cuestión de la misma manera que empiezan a entrar en las listas de organizaciones terroristas estadounidenses, en la medida que todo eso...ellos también intentan romper ese cerco por ahí y por eso el 11M sobretodo...eh...el 11S un poco y el 11M especialmente, yo creo que cambia un poco el escenario de este tipo de cuestión.”

[Dirigente del PP vasco]

Pero como veremos más adelante, también se confirma que en el nuevo contexto internacional, por más esfuerzos que este movimiento ha hecho, se les cierran las puertas de muchos foros y en concreto, las oportunidades para la proyección exterior de su acción.

Un tercer aspecto que aparece vinculado al contexto internacional, y en particular a los episodios de 11S en Nueva York, es el clima de deslegitimación internacional hacia el terrorismo. Aquí hay un amplio consenso en señalar los cambios y el modo en que han afectado positivamente a la evolución hacia el final de la violencia. La deslegitimación en el ámbito internacional se vincula a nuevos significados de la violencia, a nuevos modos de entenderla.

- Los nuevos modos de entenderla se vinculan a una percepción de riesgo y amenaza generalizados que favorecerían una solidaridad entre las democracias occidentales que les permite posicionarse en relación con aquellos países que sufren el terrorismo. Lo que en términos de J. Galtung (1969) es la “proximidad cultural” permite desarrollar un sentimiento de cercanía con el que se viven los problemas de aquellas sociedades más parecidas a las propias. Por ello los efectos del 11-M son más visibles y representan en la pérdida de legitimidad de la violencia, un cambio más significativo que el 11-S: porque se trata de los países del entorno europeo y la reacción tiene unos efectos mayores sobre las políticas de seguridad y sobre la propia ETA.

- Estos nuevos marcos con los que se constata que se mira la violencia, permiten comprender las violencias “locales” como problemas globales, como problemas de todos y como amenazas y riesgos compartidos.

- Se constata, finalmente, una pérdida de su legitimidad como instrumento de transformación social y política.

“Bueno yo creo que, en principio, ese clima (...) lo que produce es (...) una visión del terrorismo sin la visión romántica que existía quizá en otras épocas.... (...) es un problema de deslegitimación del...del terrorismo antes el terrorismo, en una época, cuando éramos jóvenes, se veía como algo liberador hoy en día se ve...se identifica con el terrorismo islamista.”

[Alto dirigente del PSE]

“....en última instancia pues es un problema local el terrorismo, digamos que es un problema de los vascos y.... un problema español si quieres, pero el tema internacional hoy en día yo creo que si les afecta...de forma...decisiva ¿no? por ejemplo el atentado del 11M en Madrid, para entendernos, pues claro fue un atentado que...eh... creó una nueva conciencia ante el...terrorismo en el conjunto de España pero antes había habido lo de las Torres Gemelas y en todo el mundo de alguna forma ehhhh de ver al terrorismo como...movimientos locales que luchaban por causas justas por medios equivocados se ha pasado a considerar al terrorismo no solo que tiene unos medios equivocados sino también unos objetivos equivocados por tanto se ha convertido en un problema internacional. Y todo lo que ocurra a nivel internacional yo creo que les afecta a... ETA y a su entorno.

[Dirigente del PSE]

“Pero también el contexto internacional, digamos, que hoy en día les perjudica lo mismo que en el momento en que nacieron, en...en el 60...en los años 60 les favoreció, porque de alguna forma tampoco podemos olvidar que ETA surge un poco pues... digamos, dentro de la ola de la revolución (...) en fin, digamos que nace en una época en que la formación de grupos...que utilizaban la violencia...estaba en auge en todo el mundo pero hoy ya está en decadencia todo eso ¿no?”

[Dirigente del PSE]

Esta narración revela la constatación de que se ha transformado el significado de la violencia, que se han perdido las legitimaciones en torno a la “causas justas”, en torno a los movimientos de liberación nacional o las revoluciones. La violencia hoy significa otra cosa en la comunidad internacional. Porque todo lo anterior está en decadencia y el único espejo al que mirarse en términos de violencia es la galaxia Al Qaeda y el terrorismo islamista, que se considera carente de causas y completamente irracional y despolitizado. De alguna manera, se está planteando cómo la violencia, que un día se pudo entender como liberadora, ha perdido su sentido en un contexto internacional en el que tiene otra escala, otra dimensión y otras justificaciones que no pueden ser

comparables. Este contexto, además, se constata que afecta a la acción de ETA de una forma importante –y así lo evidencia el 11-M.

“Lo que hace ese tipo de asuntos es que se interprete que no es un problema local como se venía interpretando en los últimos años desde la transición o como venía siendo y aún queda algo en el ámbito internacional de cree que esto era una organización con unas ideas utópicas independentistas, creo que...cuando se le pone una sociedad de otro lugar frente a las consecuencias del terrorismo aunque sea de un nivel distinto, yo creo que se ...se mejoran los mecanismos de coordinación y los mecanismos de eficacia frente al terrorismo.”

[Dirigente del PP vasco]

“Como te decía han mejorado mecanismos de coordinación internacionales, mayor rechazo al terrorismo de manera global y luego, yo creo, que ETA en algunos momentos de la historia se ha visto frente a su propio espejo y ha visto que las consecuencias de atentados en Europa le ponían a ella más en el disparadero y más en situación muy difícil. Es muy... es muy significativa la reacción de Otegi el día del 11M cuando decía "yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido.”

[Dirigente del PP vasco]

También el impacto de nuevas formas de violencia que se percibe mucho más indiscriminada y brutal permite argumentar en contra de cualquier tipo de negociación política. Detrás hay una concepción del terrorismo completamente carente de contenido político, irracional, sin causa y que, por tanto, no puede buscar contrapartidas y, en todo caso, se está comparando la irracionalidad de una violencia con la irracionalidad de la otra.

“Dentro del concepto de ETA sería, por ejemplo, yo pongo... pongo... meto dos aviones contra las torres gemelas porque pretendo... que Afganistán colonice EEUU, imagínate. Pues esa idea de que hay que dar algo al terrorismo para que deje de asesinar yo creo que cae entera en atentados como ese, y no solo desde la posición vasca o española sino que incluso se dan cuenta el resto del mundo que no se puede ir por ese camino.”

[Dirigente del PP vasco]

Y esta nueva comprensión de la violencia y el terrorismo tiene consecuencias políticas (institucionales y legales) sobre el modo en que se persigue el terrorismo, afectando principalmente a la cooperación policial y judicial, pero también respaldando legal y políticamente las estrategias de lucha contra el terrorismo en el caso vasco. La

vía para combatir el terrorismo debe ser una vía de “mano dura” y de firmeza policial y judicial, dentro de los límites del Estado de Derecho³⁷³, pero carente de una dimensión política abierta: sin negociaciones con las organizaciones o “procesos de paz”.

Se comprueba que el proceso descrito como “deslegitimación de la violencia” ha sido comprendido, respaldado y eventualmente “aprendido” por parte de los actores internacionales (Estados e instituciones internacionales). En relación a este proceso, que se considera la clave de la evolución de la violencia en la última década, aparece, por un lado, un cierto discurso de resentimiento o de crítica a la indiferencia histórica de otros países de nuestro entorno respecto al terrorismo de ETA y, por otro lado, el discurso de superioridad moral y política de quienes consideran que éramos pioneros y que el “estilo español” de la lucha contra el terrorismo ha funcionado. Ambas visiones han salpicado el debate público español en numerosas ocasiones tanto en el pasado como en la última década. El modo en que se percibía la indiferencia francesa a lo largo de los ochenta y el “mirar para otro lado” de los países europeos ha podido determinar, en gran medida, ese rechazo pasado a incluir una dimensión internacional en la comprensión del problema. Sin embargo, en la última década habría quedado claro que España no sólo no magnificaba el impacto del terrorismo sino que, además, venía desarrollando un conjunto de políticas que hoy se consideran “modélicas” y pujando por iniciativas europeas que se han tornado fundamentales.

“Decir que el 11-S ha sido favorable para algo suena mal, pero sí, pero ha sido, para, para, para la lucha antiterrorista en el País Vasco el 11-S ha sido un elemento que ha ayudado, sin duda. Porque la deslegitimación aumenta. El terrorismo, lo primero que tienes que hacer para vencerlo, es deslegitimarlo, eh (...) es decir, si el terrorismo en el ámbito internacional deja de ser un, un instrumento de la revolución por la justicia, pues obviamente si deja de serlo, pues deja de concebirse como tal, en el País Vasco nos ayuda. ¿No ayuda por qué?, pues porque cuando vayan a otro país van a decir oye, no pero si es que tú no eres un revolucionario, tu lo que eres es un mamón, un asesino. Así que te vamos a coger y te vamos a devolver y no te vamos a apoyar, y cuando digas que quieres (...) que se apruebe tal resolución exigiendo al gobierno español que no sé cuantos, los diputados, parlamentarios, los representantes en la ONU y tal te van a

³⁷³ Es llamativo que no aparezcan alusiones a otras formas de combatir el terrorismo y en concreto a la perspectiva militar adoptada por los EEUU. Sí encontramos metáforas alusivas a la dimensión “bélica” que ha adoptado el terrorismo internacional y sin embargo, no es posible reconocer en ninguno de los informantes, ni en aquellos con una perspectiva más dura hacia el terrorismo, una argumentación alternativa a la que se resume en “con el Estado de derecho, pero con todo el peso del Estado de Derecho”. Es decir, la vía tiene que ser la española y europea, la estrategia de la modificación legal y la cooperación policial y judicial.

decir, oye no, nosotros no apoyamos cosa de ese tipo. Por eso es, y todo eso presiona mucho a los gobiernos, claro, cuando de pronto viene el (...) no sé quien de la ONU a decir que hay que respetar los derechos de tal, pues eso influye porque moviliza las opiniones públicas (...) Por eso hay que cuidar para que sepan realmente qué es lo que sucede, eh...”

[Activista del Foro Ermua]

“Las democracias de todo el mundo, especialmente las europeas, tienen su responsabilidad. El desconocimiento de la situación real del País Vasco y España, la lejanía con la que se observaba lo que allí ocurría, el escepticismo e indiferencia (...) favoreció durante años, que en muchos foros mediáticos, intelectuales y académicos y/o políticos del mundo se viera la actividad de ETA, si no con simpatía - que a veces, también- con una cierta comprensión. Todo ello, junto al activismo internacional de los proetarras y la deslegitimación permanente del nacionalismo vasco hacia las instituciones democráticas (...) produjo a escala internacional una actitud de equidistancia entre la democracia española y el terror que pretendía acabar con ella (...) Esa indiferencia con la que los demócratas europeos miraron hacia otro lado (...) esa indiferencia con la que los demócratas europeos han observado el terrorismo vasco, se evaporó el 11 de Septiembre de 2001 (...) Esa sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, empujó - y de qué manera - a algunos reticentes europeos que planteaban problemas, a la implementación en sus países de dos iniciativas del Parlamento Europeo (...) Después llegó la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas(...) a lo mejor a alguien le extrañarán mis palabras, pero la verdad es que suelo pensar que el 11 de Septiembre de 2001, supuso para la lucha contra el terrorismo en Europa, particularmente contra ETA, que era el más letal y persistente que sufríamos -hasta que Al Qaeda atentó en Madrid-, un "bien colateral”.

[Rosa Díez, Diputada de UPyD. En Garzón, 2006: 103 y ss]

En resumen, la dimensión internacional aparece claramente como un contexto que ha cambiado. Hablar de “contexto” permite a los informantes abordarlo de una manera multidimensional, entendido bien en términos de implicación o acción de actores internacionales (Estados e instituciones), bien como clima ideológico en el cual se comprende la violencia, o en relación a otros fenómenos terroristas (Al Qaeda), o a episodios concretos. En todo caso, lo internacional/global significa diferentes cosas para diversos informantes pero es significativo el hecho de que todos coinciden en señalar dos aspectos. El primero, que siendo el terrorismo de ETA un fenómeno local, los procesos, los episodios, los actores globales, tienen un impacto considerable en el desarrollo de una transformación que, eso sí, ya estaba en marcha, en relación con la violencia del País Vasco: lo que entienden como deslegitimación de la violencia. En segundo lugar, que la proyección de dicho proceso hacia el exterior ha tenido éxito tanto

en términos policiales y judiciales como en términos políticos. Informar a las audiencias internacionales y movilizar a las opiniones públicas es fundamental.

En ningún momento se plantea que los cambios en la evolución de la violencia en el caso vasco hayan empezado como consecuencia de cambios internacionales. Más bien se entiende que había un proceso constatable de pérdida de efectividad y pérdida de legitimidad que se atribuyen a un factor más general, y que son el resultado de una voluntad muy concreta de gobiernos y sociedad para “deslegitimar la violencia”. Ese proceso se concibe como el rechazo progresivo del terrorismo, como el incremento de la dureza de las políticas antiterroristas y como la exclusión política de la comunidad de legitimación de ETA de las instituciones. Esa trayectoria ya estaba en marcha y es anterior e independiente de los cambios globales y, sin embargo, se constata de una manera clara y consensuada que los cambios en el escenario internacional han favorecido en buena medida dicho proceso de deslegitimación y acoso policial a ETA y a su “entorno”.

6.2.3 Diagnóstico sobre la violencia: “Todo es ETA”

De las narraciones que los informantes y actores van haciendo del desarrollo de la violencia en los últimos quince años es posible extraer un diagnóstico de la situación actual de la misma. Hay coincidencia en reconocer cambios importantes desde mediados de los noventa, pero especialmente a partir de 1998. Las reconstrucciones están basadas en “hitos” fundamentales y desde el primer momento de las narraciones se van perfilando dos dimensiones esenciales que se convertirán en discursos complementarios.

Por un lado, se habla de la efectividad: del logro de objetivos del terrorismo y de los factores que cierran las posibilidades del mismo. En este sentido, la altísima y sofisticada efectividad de las políticas antiterroristas a partir de un determinado momento sería inversamente proporcional a la que experimenta ETA. Dentro de esta argumentación, las evaluaciones sobre las políticas de seguridad son fundamentales (las estrategias desarrolladas, su alcance y sus justificaciones).

Por otro lado, se plantea un proceso de deslegitimación creciente a partir de acontecimientos concretos: desde las campañas de *Gesto por la paz* y la no violencia a la “reacción” (que se entiende más efectiva) de Ermua. Desde 1998 hasta la “política de deslegitimación de la violencia” hay un recorrido lleno de hitos y de superación de umbrales importantes que, se entiende, están en la base de los cambios legislativos e

institucionales que han permitido al Estado, modificar las políticas antiterroristas. Todos los actores se sienten partícipes del consenso (y por ello, considerar cómo elaboran evaluaciones sobre el rechazo al terrorismo y sobre las transformaciones en la política antiterrorista es fundamental).

Finalmente, ambas narrativas que articulan el diagnóstico de la violencia en los últimos diez años están salpicadas de referencias al contexto internacional en virtud del imaginario expuesto antes. Ya sea de forma espontánea o inducida, la dimensión internacional aparece como un factor interviniente en ambos procesos: la pérdida de efectividad de la violencia (cooperación internacional) y la pérdida de aceptación social de la violencia (sensibilidad y deslegitimación internacional).

Discurso de la efectividad:

La capacidad del terrorismo para lograr el efecto que se espera aparece como el principal indicador de cambio en la última década, según perciben los informantes. Hay un claro consenso en señalar que esto es así, y que ni ETA ni el MLNV consiguen debilitar al Estado en sus acciones, por más que mantengan una amenaza para muchas personas.

Además aparecen dos procesos a los que se atribuye dicha pérdida de operatividad. Por un lado, una progresiva pérdida de apoyos sociales dentro y fuera de “su mundo” y, por otro lado, la creciente y sofisticada capacidad del Estado para debilitar a ETA en los últimos quince años, a través de los diferentes frentes de la política antiterrorista.

“Bueno, está pasando que cada vez tiene más crítica interna, cada vez menos apoyo social, que cada vez está más gente de acuerdo en que eso es lo que es y no lo que creímos un día que era (..) y que cada vez tiene más dificultades operativas por la poli y por los jueces. Eso es así. Quiero decir que cae un terrorista cada semana y una cúpula cada mes y medio.”

[Dirigente del PSOE y víctima de ETA]

Cuando se refieren a la escasa operatividad de ETA, aparece a menudo un discurso irónico y risible en el que ETA es caracterizada como organización no profesional, desideologizada, sin formación, sin seguridad, sin apoyos. Se desenvuelve en tono burlón hacia el modo en que las FCSE desarticulan todas sus estructuras a la luz también de la imagen que presenta los medios de comunicación. Se percibe que es una organización en descomposición y cada vez más mafiosa, que puede sólo resistir. Este

discurso, aparece también, aunque con otros matices, en las evaluaciones del enfoque independentista.

“Y es la situación en la que está ETA. Es un poco ya... pues si no fuese tan grave, un capítulo casi de la "Escopeta Nacional" ¿no? Una banda de desgraciados que no tienen ni puta idea de a qué se están dedicando y que están haciendo lo que están haciendo (...) Y están bastante chapuceros digamos. Si esto de ser de ETA es una profesión, son malos profesionales. Pues es un buen título eso. Eh, creo que está pasando eso. Que tienen muchas dificultades de ser lo que fueron y que ya no saben dónde van. Por tanto, ¿a dónde van? al mantenimiento (...)”

[Dirigente del PSOE y víctima de ETA]

“Entonces, a medio plazo, yo creo que E.T.A. se va a convertir en una especie de GRAPO, en, va a quedar, va a ser irrelevante socialmente, va a quedar ahí una, una (...) grupúsculo que actuará de pascuas a ramos con alguna robo de algún blindado para comer (risas), alguna cosa mucho más mafiosa, eh, y de delincuencia común....”

[Activista del Foro Ermua]

Surge también un aspecto interesante que relaciona la efectividad con el ámbito de la legitimidad o aprobación (moral y política). Al constatar la situación de la organización ETA y en general de la izquierda abertzale, se argumenta que dicha situación parece haber conducido a un debate interno en torno al uso de la violencia. Esto no se rechaza, sino que aun cuando se trate de quitarle importancia (“más de lo mismo”, “hay que dejarles en paz”), hay una crítica desde un punto de vista moral en torno a la posibilidad de que el abandono y el rechazo de la violencia se produzca por la constatación de la pérdida de efectividad y no por el convencimiento moral o ideológico. Por la constatación de que la violencia atenta contra la vida de las personas y contra los derechos humanos. El abandono de la violencia por la verificación de que no logra los objetivos que persigue es visto como una degradación moral de aquéllos que siempre la han defendido, surgiendo aunque sea de forma muy superficial una visión de los activistas de la izquierda abertzale como “malos” y “amorales”.

“Le están empezando a ver las orejas al lobo por eso es muy muy importante que sepamos de qué estamos hablando; no estamos hablando de una organización terrorista... eh... que pretende dedicarse al narcotráfico, estamos hablando de una organización terrorista que si pretende negociar ahora es porque cree que va a ser más eficaz ese camino que el seguir asesinando y ese es el debate que van a... que tienen entre ellos.”

[Dirigente del PP Vasco]

“... ¿hay gente que dentro de ETA o Batasuna que realmente abraza la libertad y la no violencia? No, lo que pasa es que yo creo que la diferencia está en que hay algunos que creen que o pasan el cheque ahora o no lo van a poder pasar nunca... yo creo que la discrepancia que puede haber en ETA no es entre buenos y malos, es más entre gente que entiende que tiene que seguir asesinando para conseguir condicionar sus objetivos y gente que interpreta que o ahora o no saca nada, y ese es un poco el debate que se está produciendo.”

[Dirigente del PP Vasco]

La efectividad y la legitimidad son dos aspectos muy interrelacionados y que se podrían construir en un mismo eje. Son las dos dimensiones fundamentales que una organización que emplea la violencia tiene en cuenta y, sin embargo, quienes se oponen a ella no evalúan la efectividad (el fin que se pretende) de la misma manera en la medida en que no están interesados en los fines que dicha violencia persiga lograr. Lo fundamental para quien se enfrenta a la violencia es que no es aceptable, no es legítima y no se puede justificar. Por esta razón el discurso de la efectividad aparece de una manera menos contundente en el enfoque constitucionalista que en el de independentismo. Cuando lo hace, es de forma irónica para elaborar una imagen de ETA debilitada por la acción del Estado y por el proceso de deslegitimación social y política del que todos se sienten parte, para desarrollar una narración de vencedores y vencidos en la que prima la superioridad moral de la democracia y de los valores de la misma. Quienes han estado con el “Estado de Derecho”, pueden posicionarse, burlonamente, frente a una organización que los medios de comunicación y las propias fuentes de la lucha antiterrorista también contribuyen a presentar en estado lamentable.

Con todo, dentro de esta caracterización de la pérdida de efectividad como indicador de las transformaciones experimentadas en la violencia en el periodo que analizamos, los cambios en el contexto internacional en la última década aparecen de una forma ciertamente influyente. Si la principal razón para el debilitamiento y la escasa operatividad de ETA y la izquierda abertzale es debida a la acción policial y judicial, hay un claro consenso en señalar que la cooperación internacional en el nivel europeo (más allá de la constatación de que las relaciones con Francia son inmejorables) ha sido fundamental para la lucha antiterrorista. Dicha cooperación se entiende que es resultado de una mayor sensibilización con el fenómeno del terrorismo, del clima de deslegitimación señalado, pero también con una percepción generalizada de vulnerabilidad y riesgo para todos los países del entorno. Ello llevaría a enmarcar de

una manera global, problemas que son locales, como el terrorismo de ETA. ETA no parece ser una amenaza para otros países de Europa y, sin embargo, se ha logrado que la lucha contra ETA sea tan importante en términos de cooperación, como la que respecta a otras organizaciones. La sofisticación de las políticas antiterroristas internacionales es entonces, un elemento que claramente ha jugado en contra de ETA y ha contribuido a debilitarla más.

En términos de efectividad, de logro de objetivos, la dimensión internacional también aparece vinculada a la percepción que se tiene de la izquierda abertzale. Se ha constatado que el ámbito internacional es la esfera en el que más intensamente ha trabajado durante décadas, y el terreno que parecía conquistado por ellos en términos de búsqueda de apoyos, resonancia de sus demandas y presencia en foros internacionales. Hoy, sin embargo, se considera que el clima de deslegitimación generado a partir del 11-S y 11-M les ha cerrado muchas puertas y, por lo tanto, tampoco pueden proyectar sus demandas a escala internacional, precisamente porque se les vincula con la violencia, simplemente porque figuran en la lista europea de organizaciones terroristas y porque, en todo caso, sus oportunidades en el exterior se cierran cada vez más.

Discurso de la legitimidad:

Un segundo indicador que los informantes perciben del cambio en el periodo analizado tiene que ver con la aceptabilidad social de la violencia. Las evaluaciones sobre lo aceptable y lo no aceptable del uso de la violencia son más hegemónicas en las narrativas del enfoque constitucionalistas que las evaluaciones sobre la propia efectividad.

El proceso “deslegitimación de la violencia” es central en la reconstrucción de los últimos quince años y se considera fundamental el camino hacia la derrota de ETA y su “mundo”. Este proceso se comprende, por un lado, como el rechazo social progresivo del terrorismo, primero dentro del País Vasco y después en España en general pero, a la vez, como el fortalecimiento del Estado de Derecho y la implementación de unas políticas antiterroristas más duras y contundentes. Finalmente, y en una versión más radical, el rechazo a la violencia se comprende también como un proceso de deslegitimación de la conciencia nacional vasca.

En el modo de entender la deslegitimación de la violencia podríamos establecer un eje entre medios y fines en virtud del cual se comienza cuestionado los medios y en

una versión más dura, se termina cuestionando los fines, porque la coincidencia de fines implica legitimación de medios.

“El movimiento [el proceso de deslegitimación] ha sido, primero ha sido...absolutamente de paz entendida como ausencia de cualquier tipo de violencia, un poco con sus términos y luego ha ido evolucionando en algunos lugares hacia el cuestionamiento de los fines...y de los medios de la banda.”

[Dirigente del PP Vasco]

Hay consenso en señalar que este proceso tiene sus orígenes a finales de los ochenta en el País Vasco, pero que sólo de una manera tímida las movilizaciones de *Gesto por la paz* fueron impregnando la conciencia social con la pedagogía de la no violencia. Este planteamiento es rechazado en el enfoque constitucionalista, en primer lugar por ser un planteamiento *pasivo* y en una versión más dura porque hablar de “cultura de paz” es reconocer la existencia de un conflicto y además implica una equidistancia con la violencia (con las violencias) que se considera perversa.

“El problema de esta sociedad no es un problema de pacifismo. Yo no soy paci... yo estoy en Gesto por la Paz, cotizo a Gesto por la Paz, pago mis euros al año pero yo no soy pacifista (...) yo creo en la legitimación de la fuerza. Sí, en la fuerza legítima. El monopolio de la fuerza legítima del Estado de Derecho: Policía, jueces, y no sé qué... y ley. Punto. La fuerza legítima, eso que... Me parece que, es decir, por eso a mí me parece que la pedagogía del Estado de Derecho aquí es clave.”

[Ex dirigente sindical del País Vasco]

Se aboga por una estrategia activa contra la violencia, por el fortalecimiento de las políticas antiterroristas y el recurso a la fuerza legítima del Estado de Derecho; por cambiar el umbral de lo legalmente y políticamente tolerable en relación con el terrorismo; por transformar el marco en el que ocurre la “lucha antiterrorista” con el fin de acabar con la impunidad que se entiende que ha prevalecido en los treinta años de democracia. El proceso de rechazo a la violencia es un camino lleno de hitos y de factores internos y externos a lo largo de su desarrollo pero en todo caso, hay consenso en señalar los episodios de Ermua (1997) como un hecho fundamental.

En el enfoque constitucionalista, la muerte de Miguel Ángel Blanco y la movilización ciudadana que generó, suponen un umbral de tolerancia social a partir del cual se modificaron las estrategias del Estado y de la sociedad civil. Obviamente, todos

o casi todos ellos se consideran protagonistas de dicho proceso, lo que les otorga una superioridad moral y política que de alguna manera los posiciona frente a los movimientos pacifistas vascos. El umbral de Ermua, es visto como la constitución de un frente ciudadano contra el terrorismo, a través del que se desarrolla el proyecto de deslegitimación de la violencia.

“Hemos vivido un rearme de nuestra democracia para combatir a ETA desde la movilización ciudadana (...) Nos hemos sacudido la indiferencia y sólo cuando no se es indiferente ante el terror se puede ganar la batalla a los terroristas.”

[J. M Michavila, ex Ministro de Justicia, Garzón, 2006: pp 71]

Vinculado a la pérdida de aceptabilidad del terrorismo y a esta superioridad moral que otorga el protagonismo de la política de la deslegitimación, aparecen las constataciones ya referidas acerca de la tolerancia o no de que la izquierda abertzale abandone la violencia por un planteamiento de estricta efectividad.

Finalmente, aparece en los más firmes defensores de la vía dura de lucha contra el terrorismo, un claro cuestionamiento de las vías políticas para la resolución del mismo. Las negociaciones políticas con ETA son percibidas como un error estratégico (en momentos de extrema debilidad de la misma), como una suerte de traición a la democracia (que se entiende como “democracia militante”, que se debe defender del terrorismo con todo el peso del Estado de Derecho) y, desde luego, como una ruptura del “consenso” logrado en el Pacto Antiterrorista.

Pero es que además, tal y como se planteó anteriormente, las negociaciones no tienen sentido para quien hace un diagnóstico despolitizado e irracional de la violencia; sin causas, sin fines. Negociar es reconocer una capacidad política al oponente y, por ello, este tipo de procesos son vistos como amenazas para las estrategias de “deslegitimación de la violencia”.

“Si a una banda terrorista, del color que sea o con el objetivo que tenga, tu le reconoces algo eso es un aprendizaje para una sección de ellos o para otros que salgan también para conseguir un objetivo político (...) si nos mantenemos en una unidad de mensaje claro en que no hay ningún tipo de negociación política y mientras se acompaña con esa mayor reacción social incrementada en los últimos años con la eficacia policial y con la colaboración internacional yo creo que podemos ser optimistas pues seguiremos la película de los últimos años y ya la estamos viendo.”

[Dirigente del PP vasco]

Los procesos de negociación dividen al bloque constitucionalista en la medida en que algunos la consideran una ruptura del consenso “ley y orden”. De hecho, en el periodo 1998-2008 el único momento en el que ha habido un enfrentamiento claro y colectivo entre las fuerzas constitucionalistas (partidos y sociedad civil) ha sido en la legislatura 2004-2008 y, en buena medida, estuvo relacionado con el proceso de negociación y con un contexto posterior al 11-M muy crispado en relación con el terrorismo y el antiterrorismo.

[Sobre el proceso de negociación del 2006] *“Ahí Zapatero incumple el Pacto Antiterrorista y decide entrar a una negociación política con E.T.A., se sientan a negociar y mientras tanto lo que sucede es que hay una tregua por parte del Estado. Y una tregua por parte de E.T.A., un alto al fuego por parte de E.T.A., como es llamado. Pero el Estado de Derecho también entra en una tregua. Entonces la Fiscalía deja de actuar, deja de actuar, o sea, hasta el punto de que los jueces, en un asunto de apología del terrorismo, de enaltecimiento del terrorismo, mejor dicho, de Otegi, que es palmario, los jueces, digan, oiga es que si la Fiscalía no acusa, no podemos condenar, pero las pruebas son obvias. Y la Fiscalía se niega a acusar.”*

[Activista del Foro de Ermua]

También en esta narración de la pérdida de aceptabilidad social y política de la violencia se puede constatar la presencia de una dimensión internacional. Ésta aparece de dos maneras: en primer lugar, en relación con los cambios en los significados de la violencia que ya hemos referido. La emergencia de nuevas formas de violencia vinculadas al terrorismo islamista habría permitido comprobar en la comunidad internacional que no hay “causas justas” ni proyectos revolucionarios y que los significados de la violencia no son los mismos que hace cincuenta años y esto sería percibido así en la comunidad internacional. Pero por otro lado, dichas violencias de nuevo corte son un espejo en el que compara violencias; ni la más brutal acción como las Torres Gemelas conduce a ningún tipo de negociación política y la irracionalidad y carencia de causas que se percibe en las nuevas formas de violencia, son trasponibles a la violencia etarra.

En un segundo lugar, el contexto internacional aparece como factor influyente de una manera más compleja porque, en la medida en que se vincula con las políticas antiterroristas de “tolerancia cero”, es a la vez un indicador de la pérdida de legitimidad

de la violencia terrorista y un indicador de relegitimación del papel de los Estados en la represión de la violencia

Discurso de la fuerza del Estado:

El discurso en torno a la fuerza legítima del Estado y a su papel en la lucha contra el terrorismo es fundamental en la narración del enfoque constitucionalista y está vinculado de una manera clara con la percepción del problema que se tiene en 2010. Se ha llegado al convencimiento de que se trata de una cuestión de terrorismo sin más, pero también de que las vías de la negociación política no han funcionado históricamente. Acabar con la violencia requiere deslegitimarla y, para ello, se apela, por un lado, a la fuerza del Estado, al desarrollo de políticas de seguridad de línea más dura (policiales), pero también a un camino penal que cierre las posibilidades para la acción violenta y para la acción política que se beneficia impunemente de la violencia. Diez años después del giro de Ermua, se hace constar que ésta ha sido la vía más efectiva para luchar contra el terrorismo y que ha logrado los objetivos que pretendía.

La adopción de la “vía penal” en la lucha contra el terrorismo es concebida como el giro más importante y de mayor repercusión en la historia de la lucha contra ETA. Se entiende que las nuevas concepciones y los nuevos marcos para comprender el terrorismo han tenido efectos e implicaciones jurídicas que han logrado debilitar a ETA, aislar políticamente a la Izquierda Abertzale y, en todo caso, evidenciar que del terrorismo ya no se toleran determinados comportamientos que antes estaban permitidos.

En la constatación de este giro, hay además algunas referencias a estrategias del pasado que se consideran “atajos” peligrosos. Aparece una crítica, siempre velada y no presente en todos los casos, hacia las políticas socialistas vinculadas al GAL y a la guerra sucia.

Pero en todo caso, se confirma que es por la vía legal, por la vía de la modificación de las leyes y del cierre de oportunidades legales como hay que estrechar el cerco. “Con todo el peso del Estado de Derecho” quiere decir, transformando el marco en el que se ha comprendido el terrorismo hasta ese momento.

“Todas nuestras acciones en la lucha contra el terrorismo debe realizarse bajo el amparo de toda la ley, sólo lo que permite la misma, pero todo, absolutamente todo lo que permite la ley (...) Esta fortaleza ética supone también unidad; no puede haber colores políticos cuando se trata de hablar

de la lucha contra el terrorismo.”

[J. M Michavila, ex Ministro de Justicia, en Garzón, 2006: 75]

En este sentido debe haber consenso. El consenso del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, logrado por los partidos mayoritarios, y apoyado por las organizaciones cívicas surgidas a partir de 1998.

Los movimientos cívicos (Foro Ermua, Plataforma Basta Ya, Dignidad y Justicia, asociaciones de víctimas, etc.) entienden que han hecho una labor de vigilancia del consenso y la implementación del “Pacto Antiterrorista”. La denuncia en los tribunales y la personación en juicios y macro juicios como acusación particular (en nombre de las víctimas generalmente) ha sido muy activa desde el año 2000; en la base de esta actividad está el convencimiento de que, habiendo legislación disponible, ésta no se aplicaba en el pasado; que había un marco de impunidad importante, y que es por la vía de la aplicación de las leyes disponibles y de la elaboración de otras más duras, como hay que “vencer” al terrorismo. Por esta razón, el Pacto antiterrorista constituye la “hoja de ruta” del giro de Ermua. Y cuando se percibe que éste se ha roto, la movilización ha sido amplia y visible (como en el contexto de las negociaciones de 2006).

[Sobre las actividades del Foro de Ermua] “... *actividad judicial, es decir, ejercicio (...) de acciones en los tribunales para que se cumpla la ley, como por ejemplo, el que se quitaran todos los carteles de plazas en honor de los etarras y demás, eso fue gracias a las, a la acción, de, de las organizaciones cívicas, entre las que estaba el Foro de Ermua. Eh, eso por un lado, por otro lado, generación de, eh, pensamiento, o, o opinión política independiente (...) vale, independiente de los Partidos. Nosotros hacemos nuestros análisis, los hacemos públicos, se los mandamos a nuestras listas de gente y demás. Y en tercer (...) lugar, movilización social. Es decir, que frente a determinados (...) situaciones conseguir canalizar a la gente para que muestre su descontento, y eso influya en la, en la vida política a la hora de tomar decisiones. Es decir, que no se puedan tomar decisiones contrarias a los de la lucha antiterrorista.*”

[Activista del Foro Ermua]

En la perspectiva de la vía penal, aparecen dos elementos que se entienden como la clave del cambio en torno a 1998 y que, además, son percibidos como la transformación más importante en la lucha contra el terrorismo: la ampliación de la noción de terrorismo y la articulación jurídica de la teoría de los círculos concéntricos.

“Mira, desde el 98 para mí me parece fundamental que ha cambiado la concepción del terrorismo. Punto primero, se ha pasado de considerar que el terrorismo es E.T.A., como unos señores que asesinan, ponen coches bomba y demás, a considerar que es algo mucho más complejo, y por supuesto algo mucho más cercano a la realidad, que es toda una estructura, un conglomerado que lidera, lo que ellos llaman la "vanguardia armada", es decir, E.T.A., junto con KAS, ¿no?, o con EKIN, en su día, pero que tiene, está organizada en diferentes frentes. Entonces, eso, eh, ha cambiado esa concepción, ha conllevado una actuación de los Tribunales, y ha conllevado... una debilitación extrema de, eh, E.T.A., ¿vale?, y de todo el terrorismo. Eso es un cambio fundamental.”

[Activista del Foro de Ermua]

“La lucha antiterrorista ha evolucionado mucho en los últimos años... hay un antes y un después cuando frente a ETA se pone o se demuestra que no es solo el comando, no es solo el pistolero, no es sólo el que pone la bomba, sino que es una organización económica, una organización que les sustenta políticamente, la cobertura...”

[Dirigente del PP vasco]

"Para ser eficaces en la lucha contra el terrorismo tenemos que ser conscientes de que eso que algunos han llamado entorno de ETA, efectivamente, también es ETA (...) Todos ellos han sido declarados ilegales por decisiones de quien tiene que tomarlas, que son los Tribunales de Justicia. Todo ese entorno ha sido incluido en la lista europea de organizaciones terroristas, y quiero decirles a todos ustedes una cosa: el entender así la lucha antiterrorista, el entender que el entorno de ETA forma parte de la propia organización terrorista, ha sido enormemente decisivo para que el Estado pudiera ser más eficaz en la lucha contra la banda criminal”

[Mariano Rajoy, ex ministro del Interior, Garzón, 2006: pp: 28-29]

Comprender así el terrorismo ha sido muy efectivo en la medida en que ha aislado cada vez más a ETA de su entorno (al cortarles las vías de financiación y comunicación con su comunidad de referencia), pero también ha aislado políticamente al MLNV al impedir su presencia en las instituciones.

“La lucha antiterrorista ha sido mil veces más eficaz, desde el momento en que se ha empezado a, eh, (...) cortar las fuentes de financiación de E.T.A., se ha empezado a quitarles el poder (...) político que supone controlar ayuntamientos, están en el Parlamento y demás, todo eso, les ha supuesto un varapalo (...) enorme, ¿no? enorme. Entonces, ése es un cambio fundamental”

[Activista del Foro de Ermua]

El culmen de la vía penal es la LOPP de 2002. Se entiende como la medida

fundamental en la que ha cristalizado el consenso sobre la tolerancia cero. Se constata que se trata de un consenso entre las élites políticas, pero que cuenta con el apoyo de la opinión pública. Si no es resultado de una demanda explícita de la opinión pública, sí que ha logrado apoyos mayoritarios en tanto se ha visto que era eficaz. Pero también se asume que en el País Vasco, la contestación ha sido más amplia.

“No, en el País Vasco no se demandaba en absoluto, es más había una opinión contraria, eh, mayoritariamente contraria, había mucha gente que sí lo demandaba. Y en España sí creo que había una (...) en el resto de España sí creo que había una opinión pública que mayoritariamente creía que había que endurecer la lucha contra el terrorismo y hacer una cosa más seria. No que un tío que ha matado a 25 personas salga a los 18 años a la cárcel, de la cárcel, ¿no? O que (...) haya un partido que está descaradamente apoyando a E.T.A. y cobrando de nuestros impuestos.”

[Activista del Foro Ermua]

Entre las justificaciones, aparecen dos tipos de argumentos. Por un lado, la idea de que la democracia tiene que defenderse, que se apoya en teorías de la democracia militante.

Se trata de una legitimación directa en la medida en que se apela a la fuerza del Estado para “defenderse”. Esta argumentación está jalonada de comentarios acerca de las legislaciones de otros países que, como Alemania o Francia, se protegen de las amenazas totalitarias.

“La clave, la clave, la clave aquí está en la ilegalización de HB, es decir, por primera vez ETA y la llamada izquierda abertzale tienen un problema entre ellos, con lo cual, el Estado de Derecho ha funcionado. Porque yo creo que, yo eso lo decía en la radio, el Estado de Derecho tiene que ser generoso pero no tonto. La democracia es generosa pero no puede ser tonta, que, es decir, los límites del Estado de Derecho es que... que no vayan a destruirte. Ya sabes que hay teorías de lo que llamamos democracia militante...”

“Una de las cosas que significan complacencia, legitimidad e impunidad es que... imagínate que tú eres una concejala, de Herri Batasuna en Portugalete (...) Bueno, entonces, a ti te ponen la bomba, te... imagínate que te la hubieran programado... entonces, el concejal que está con ella no condena. Y es democrático, y está amparado por la ley. ¿Esto en Alemania cuánto duraría? ¿En cualquier sociedad democrática? Es decir, eso es la impunidad. (..) Eso doble juego que ha habido aquí, eso se ha acabado. Y eso es determinante porque, vamos a ver, un terrorismo con expresión política democrática, es como que seas puta y virgen a la vez, ¿Me entiendes lo que te...?”

[Ex líder sindical País Vasco]

En un segundo lugar, se evalúa más bien por sus resultados y por el modo en que ha sido políticamente respaldada tanto dentro como fuera de España (por más que tuviera originalmente críticas importantes), sobre todo, se justifica en términos de su efectividad.

“Todos los partidos nacionalistas se opusieron pero digamos que tampoco hubo, más allá de las palabras, la sociedad no...Digamos que vio con cierta pasividad el hecho de la Ley de Partidos y que se ilegalizara a Batasuna ¿no? pues como la sociedad lo vio con esa tranquilidad y esa serenidad digamos que luego se han ido calmando los ánimos, ya no dicen nada los obispos, bueno el gobierno vasco ahora es distinto.....pues ha habido una sentencia por parte del Tribunal de Estrasburgo.... y yo creo que han visto que es eficaz en contra del terrorismo...”

[Dirigente PSE]

“Bueno, tuvo mucha respuesta interna dentro del PSOE y de otros sectores. Yo fui muy crítico con ella y hoy creo que he cambiado bastante mi opinión sobre la misma. O sea, yo creo que no se puede hacer una ley que ilegalice ideas (...) Pero las ideas por las que el entorno de ETA, es decir, Batasuna dice que está en la vida, las representan otros partidos en igualdad de condiciones. Aralar tiene una doctrina ideológica igual a Batasuna con una única salvedad; que rompe con ETA, que no forma parte de conexiones de ningún tipo con ETA. Batasuna no ha hecho ese paso. Por tanto, no hay una ilegalización de ideas ni de percepciones políticas sino de vinculaciones con una organización terrorista

[Dirigente PSOE y víctima de ETA]

Lo que queda claro, en todo caso, es que el giro en la política antiterrorista se considera fundamental y es percibido como resultado de un consenso importante entre los dos partidos mayoritarios con el apoyo, o por la demanda, de sectores importantes de la sociedad.

“En España hemos llegado a un consenso ampliamente extendido sobre cuáles son los instrumentos para combatir el terrorismo y expulsarlo de forma definitiva de nuestro panorama político y social. Hemos llegado al acuerdo de que esa lucha exige una potente y continuada actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una leal cooperación internacional, una sólida unidad de los demócratas, un respeto escrupuloso a la legalidad.”

[José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno. Garzón, 2006: 19]

Y por ello podemos hablar de una clara continuidad en las políticas antiterroristas desde 1998, con la excepción del proceso de negociación del 2006.

"De todos modos, en materia de terrorismo son mucho más significativos y numerosos los factores en común que las diferencias. La unidad de los demócratas frente al terrorismo ha sido el reto esencial al que nos hemos enfrentado las fuerzas políticas españolas. Ha sido también un elemento que ha dado mejores frutos porque ha permitido establecer una línea divisoria que diferenciaba no a la izquierda y derecha, no a estatalitas y nacionalistas, sino a demócratas y violentos."

[José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno. Garzón, 2006: 24]

El proceso de transformación del papel del Estado es percibido en el enfoque constitucionalista como la mejor herramienta en la lucha contra el terrorismo. Se considera parte del proceso de deslegitimación de la violencia del que todos se sienten parte.

La narración del mismo está llena de hitos y episodios. Ermua se presenta como la primera "revolución" social a partir de la cual comienzan a cristalizar importantes cambios de naturaleza legal. Entre la legitimidad y la efectividad se mueven las justificaciones de esta transformación pero, en todo caso, hay consenso en señalar el modo en que episodios han conducido a superación de umbrales de tolerancia; límites a partir de los cuales el marco institucional cambia. Este es un proceso estrictamente endógeno que ya está en marcha y al que no podemos atribuirle relación directa con los cambios en el entorno internacional. Con todo, en las percepciones de los actores sí aparece también la dimensión internacional cuando se habla de los cambios en las políticas del Estado como reflejo de intolerancia a la violencia. Y lo hace de tres maneras:

-Habiendo constatado las dificultades que podía plantear la LOPP (pues muchos señalan el rechazo en la sociedad vasca, en los partidos nacionalistas e incluso en los partidos minoritarios de carácter estatal), el respaldo internacional que ha recibido dicha norma, como algunos de los cambios en la legislación penal, se considera fundamental. Desde la inclusión de Batasuna y las organizaciones juveniles (Jarrai, Haika, Segi) en la lista Europea de organizaciones terroristas en 2003, hasta la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2009, se percibe que ha habido una legitimación internacional directa de las iniciativas españolas que se considera fundamental.

-Estas constataciones se desenvuelven en un doble discurso que, por un lado, presume del modo en que España es un país pionero y referencia en la lucha antiterrorista y de que en un contexto de transformación y expansión del antiterrorismo, España se ha convertido en un referente de “escrupulosa legalidad”. Pero, por otro lado, se complace en ver cómo el nuevo contexto internacional de deslegitimación de la violencia terrorista beneficia las políticas del Estado y las respalda de una forma contundente, contribuyendo así, también, a su legitimación interna.

-Finalmente, también aparece la verificación de que el “estilo español” contra el terrorismo es admirable. Hay una crítica, sobre la que tampoco se profundiza, hacia las políticas del pasado, pero, a la vez, una verificación de que, en el “espíritu” de las normas, hay teorías sobre la seguridad y la libertad que trascienden en buena medida el ámbito estatal y que permean los debates nacionales. Ello permite una justificación de las políticas desarrolladas en tanto la naturaleza brutal de la violencia esté presente en la sociedad.

“Bueno, en términos jurídicos yo creo que todo lo que ha ido sucediendo a partir del 11 de Septiembre y el 7J en Londres y tal, algo ha impregnado el debate. Este viejo debate entre la seguridad y la libertad, en mi opinión lo hemos perdido. Los que decíamos sí a la libertad como prioridad frente a la doctrina de la seguridad eh...yo creo que eso lo hemos perdido (...) algo de eso se ha colado sin darnos cuenta por ejemplo en nuestro derecho penal seguro. El endurecimiento de las penas, la dificultad penal para quienes forman parte de todos esos mundos han ido poco a poco colándose desde un debate que nos trasciende a nosotros, es decir, que no ha nacido en nosotros sino, en el nosotros inmediato me refiero, sino en la globalidad del nuevo mundo y de las nuevas formas y tal (...) Una doctrina de colaboración inter-estados, (...) que los estados colaboran en información, en lucha conjunta, etc. contra violencias como ésta. Violencias ilegales, que asesinan gente y tal. Bueno, yo lo veo positivo. Creo que ha ido viniendo bien. Pero con el cuidado que te decía antes. De que el debate de fondo lo podemos perder. En Euskadi y en España yo creo que esa guardia la hemos tenido alta. Porque tuvimos cosas como el GAL, que nos llamaron la atención mucho, y con razón, y nos pusieron una alerta de pureza en la aplicación de las normas que está de puta madre. Porque con más de 800 muertos más el atentado del IIM más tal. Aquí podía haber aparecido el marciano de turno que empieza a pedir cosas raras. Y es verdad que el PP, en algunas cosas se medio atreve, pero luego se cagan en los pantalones con cosas como la cadena perpetua y estas cosas..Por tanto, pasos que cuestionen los fundamentos de nuestro derecho penal yo creo que si no los hemos dado ya, no los vamos a dar...”

[Dirigente del PSOE y víctima de ETA]

La última dimensión sobre la que podemos argumentar a partir de las percepciones de los actores está el pronóstico que en 2010 se hace de la evolución de la violencia.

Hay un claro y amplio consenso en señalar que estamos en la “salida de la violencia”. Que los dos procesos señalados, la progresiva deslegitimación social de la violencia – que va desde el enfoque constitucional hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad vasca nacionalista- junto con la transformación de las políticas antiterroristas y la actitud de Estados y gobiernos, que se considera a su vez fruto del consenso contra el terrorismo, han supuesto un cierre de oportunidades para la violencia etarra y para la acción política (legitimadora) de su entorno. La percepción sobre la pérdida de efectividad de la violencia y la pérdida de apoyo social dentro y fuera del mundo de la izquierda independentista son dos dimensiones en torno a las cuales se construyen el diagnóstico-pronóstico de la violencia. En cada una de ellas, podemos decir que hay consenso en apuntar a la influencia positiva del contexto internacional (un contexto que se entiende como solidario y deslegitimador del terrorismo) dando respaldo a las políticas implementadas en España y, a la vez, se fortalecen por la vía de la cooperación policial y judicial que habrían sufrido una transformación formidable en la última década.

6.3 Recapitulando: umbrales de violencia tolerada en un contexto *glocal*

Cabe aquí, a modo de conclusión parcial, ir recogiendo los principales hallazgos tras indagar en lo que los actores perciben respecto a la violencia atendiendo al contexto internacional. Para ello, trataré de exponer los elementos fundamentales que son comunes en los dos enfoques que he establecido con pronósticos analíticos, así como las principales líneas de fractura que aparecen. Claramente el modo en que se define el conflicto, como era de esperar, determina las narraciones respecto al resto de las dimensiones que se abordan, y en concreto a la dimensión internacional.

La primera consideración que cabe hacer es que ambas perspectivas comparten el adjudicar a los factores internacionales un papel, si no determinante, sí claramente interviniente. En ambos enfoques aparece una visión muy optimista de las implicaciones de los cambios en el contexto internacional en relación con sus propios objetivos. Todos incluyen elementos del contexto internacional bien para calcular sus opciones estratégicas, bien para revalidar sus propias acciones y decisiones. No hay visiones derrotistas para nadie y, en general, se entiende que los cambios vinculados al

proceso de globalización son beneficiosos para sus fines. Los actores tratan de acomodarse al nuevo contexto y de elaborar marcos en los que sus diagnósticos se vean beneficiados por los procesos vinculados al mismo.

La dimensión internacional no es rechazada en ninguno de los dos bloques si bien se detecta que hay mayor familiaridad con su evaluación dentro de la familia nacionalista-independentista -en buena medida, porque el enmarque histórico de sus demandas se ha producido atendiendo a principios del derecho internacional como es el derecho de reconocimiento de la Carta de Naciones Unidas.

Sin embargo, dentro del bloque constitucionalista, aunque no se percibe tal familiaridad, no hay, a diferencia de los resultados arrojados por el Proyecto PEACE COM (2004-2007),³⁷⁴ rechazo a incluir factores internacionales en el diagnóstico y pronóstico que se hace de la violencia. Ahora bien, respecto al modo en que dicho contexto “afecta” o “influye” en la dinámica del conflicto, hay que señalar que se percibe con notables diferencias en relación a la propia definición del conflicto así como al diagnóstico que se hace de la violencia.

En primer lugar, habría que plantear que los marcos de justificación con los que se evalúan las vías de resolución de la violencia están muy vinculados a dos perspectivas que aparecen de forma clara. Por un lado, al marco de la “resolución pacífica de conflictos”, muy en boga en la comunidad internacional actual, y, por otro lado, a los diagnósticos del enfoque de la *guerra contra el terror*³⁷⁵. Así, la participación internacional es reclamada, aunque aparecen diferencias en el sentido de la misma. Mientras en la familia nacionalista la implicación debe ser directa (por la vía de actores, mediadores, etc.) y se enmarca en un proceso de “resolución internacional de conflictos”, en el enfoque constitucionalista esta demanda es mucho más difusa y está vinculada a la necesidad de fortalecer la cooperación policial, judicial y política en relación con la lucha antiterrorista.

En relación con diagnóstico de la violencia y dada la forma recurrente en que han aparecido a lo largo de este trabajo, queda claro que tanto la efectividad, como la legitimidad conferida a la violencia ha experimentado cambios significativos en el periodo analizado. Todos los actores, con matices y en diferentes grados, han coincidido en hacer evaluaciones en torno a procesos vinculados a dichas dimensiones.

³⁷⁴ Véase capítulo 1.

³⁷⁵ Uno y otro son de enorme interés y requerirían un análisis en profundidad de los discursos que entrañan pero claramente exceden los propósitos de este trabajo.

Ahora bien, hemos podido ver cómo se establecen diferencias en el modo de abordar la efectividad y la legitimidad, dependiendo de las relaciones complejas que se han establecido históricamente en torno a la violencia. En este sentido, hay una elaboración mucho más rica sobre la efectividad, e inversamente, menos elaborada en torno a la legitimidad a medida que uno se acerca a la comunidad de legitimación histórica de ETA. Y, de la misma manera, hay mayor propensión a elaborar sobre la legitimidad, y en concreto sobre el denominado “proceso de deslegitimación”, entre las fuerzas políticas que han hecho de dicha estrategia su bandera en los últimos diez años.

Ambas dimensiones (legitimidad y efectividad) se relacionan directamente, en los dos bloques analizados, con las estrategias del Estado en relación a la violencia. Y aquí de nuevo, se puede establecer un eje en virtud del cual, dependiendo de la definición del conflicto y del propio diagnóstico de la violencia, aparece una relegitimación de la fuerza del Estado y de sus políticas antiterroristas o un discurso claramente crítico (deslegitimador en el extremo independentista) acerca del mismo. Pero, en todo caso, se constata, con satisfacción o crítica, el modo en que dichas políticas han logrado el respaldo y la legitimación internacional en el contexto post 11-S, ya sea por un nuevo clima de comprensión -que se recibe con agrado aunque también con cierto resentimiento-, ya por una obsesión securitaria, que se considera un producto ideológico de nuevas formas de dominación.

Hay consenso en señalar la pérdida de efectividad y la deslegitimación como un proceso gradual y lleno de “hitos” entre los cuales aparecen de forma visible los episodios del 11-S y 11-M, pero también la emergencia de nuevas formas de violencia y deslegitimación creciente del terrorismo en el entorno internacional. Si bien ambos procesos ya estaban en marcha desde finales de los noventa, hay acuerdo en señalar que la emergencia de un nuevo marco ha contribuido a consolidar tal tendencia y, en este sentido, se percibe como un factor interviniente, y en algunos casos, muy influyente.

En términos de oportunidades, que están vinculadas con el pronóstico que se hace de la violencia, hay que destacar, por tanto, una percepción optimista para ambos enfoques con una matización importante respecto al enfoque independentista: la violencia es una limitación fundamental.

En el enfoque constitucionalista, se entiende que los procesos fundamentales- la pérdida de efectividad y el proceso de deslegitimación- encuentran un contexto internacional muy favorable en la medida en que se constata que hay una solidaridad internacional muy fuerte contra el terrorismo y que dicha solidaridad se traduce en

colaboración y reconocimiento de sus proyectos. En el enfoque independentista, se asume que los objetivos que implica su horizonte político -la independencia- se pueden acomodar perfectamente en un mundo de revalorización de identidades locales y en el que el derecho de autodeterminación está en aplicación. Ahora bien, la violencia es un problema fundamental. Se confirma un claro cierre de oportunidades (estables y discursivas) para el empleo de una estrategia violenta, dentro y fuera de España. La configuración de las oportunidades se constata como una disposición multinivel (local-global/estructural-ideológica) que se ha cerrado en el periodo analizado. Esta comprobación sin embargo, se transforma en un enmarque favorable que trata de acomodar, con una narrativa aún por determinar, los fines históricos a una nueva estrategia que suponga el abandono de la violencia.

En resumen, podemos hacer cuatro comprobaciones a la luz de la narrativa de los actores:

- Que hay, en la última década, un proceso de transformación en la legitimidad y la efectividad conferida a la violencia.

- Que dicha transformación revela una menor tolerancia hacia la violencia “terrorista” y una creciente tolerancia social a políticas de seguridad y antiterroristas de corte “duro” o más duro que en el pasado.

- Que dicho proceso ha sido gradual, pero jalonado de “hitos” internos y externos, entre los cuáles se pueden contar “episodios globales” que de algún modo se revelan como transformadores. El hecho de que la mayoría de los actores haya hecho una narración específica sobre el impacto del 11M justifica plenamente que dediquemos el siguiente capítulo a este extremo.

- Que, en definitiva, el contexto internacional es una variable importante en la configuración de las oportunidades políticas “percibidas” por los actores, tanto en sus evaluaciones sobre la violencia de ETA como sobre sus propios proyectos políticos.

PARTE III: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO GLOBAL

CAPÍTULO 7

El 11-M: UN ACONTECIMIENTO TRANSFORMADOR

"Dentro del campo semántico y político creado por el concepto de Revolución, la frontera entre la legitimidad y la ilegitimidad de la violencia popular, entre revolución y rebelión no pudo ser nunca marcada" (William H. Sewell, 2006: 244).

Cerca de las ocho de la mañana del 11 de Marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una serie de explosiones simultáneas en cuatro estaciones de tren de la red de Cercanías de Madrid dejaron un total de 191 personas fallecidas y 1800 heridas. Dicha acción se convirtió en el mayor ataque terrorista cometido en España y en Europa hasta la fecha.

Los atentados fueron atribuidos por los medios de comunicación y por los propios partidos políticos inmediatamente a ETA. Sin embargo, Batasuna, partido conocido como “brazo político de ETA” negó dicha autoría en un ejercicio de rechazo y condena inédita en dicha formación.

Si bien a lo largo de la jornada y especialmente en los días siguientes, la investigación y el debate sobre la autoría se fueron orientando progresivamente hacia una organización de carácter islamista, parte importante de la discusión sobre la misma continuó centrada en ETA.

Durante esa semana los ciudadanos se pronunciaron en varias ocasiones, bien de manera convencional a través de las urnas, bien recurriendo a estrategias de la política no convencional (la manifestación ilegal del 13M); pero en todo caso, expresando de forma clara un rotundo rechazo a la violencia, una total solidaridad con la víctimas y un cuestionamiento tanto del Estado encarnado en las fuerzas de seguridad, como del gobierno y de la oposición por falta de transparencia, instrumentalización y oportunismo político.

Alrededor de once millones de españoles salieron a la calle el día 12 de Marzo de 2004 en la expresión más masiva de unidad social contra el terrorismo. La manifestación, convocada por el gobierno bajo el lema “Con las víctimas, con la

Constitución, por la derrota del terrorismo", que evidenciaba una clara fractura entre los partidos políticos y el cenit de la tensión social generada en la legislatura 2000-2004, fue una de las más multitudinarias vividas en la historia reciente, junto con las del 23-F (1981) o la de Miguel Ángel Blanco (1997).

Los ciudadanos, movidos por imperativo moral, asistieron masivamente retando las adversas condiciones climatológicas ("no llueve, Madrid está llorando"). A pesar del sorprendente conflicto de diagnósticos y enmarques visible en la propia combinación de pancartas contra ETA, contra el nacionalismo, contra la guerra de Irak o contra el gobierno, la efervescencia social vivida revelaba, ante todo, la solidaridad con las víctimas y el rechazo de la violencia en un marco antagónico que se constituía contra un enemigo común: un enemigo percibido en términos de irracionalidad y amenaza a la democracia.

Se trataba de un tipo de movilización que, en su fondo y en su forma, no era nuevo en España. Se había venido ensayando, al menos, desde los episodios de Ermua de 1997 y consistía en la toma del espacio público para rechazar el terrorismo, hacer visibles a las víctimas y exigir una respuesta policial y judicial más fuerte en relación con el llamado "problema vasco". Dichas demandas habían sido uno de los titulares más frecuentes de las legislaturas 1996-2004.

Finalmente, la solidaridad mostrada por la comunidad internacional reveló la consolidación de un clima de deslegitimación del terrorismo que ya se había iniciado tras el 11-S pero que sin duda, adoptaba características particulares en el ámbito europeo. Además de declarar el 11M "Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo", en los meses siguientes se modificarían buena parte de las políticas de seguridad y se pondrían en marcha mecanismos de cooperación a nivel europeo, que no se habían desarrollado antes por clara falta de consenso y de voluntad política. Capítulos cuarto y quinto.

Independientemente de la autoría, de la crisis política que los episodios narrados supusieron, del "vuelco" electoral o de las implicaciones de estos episodios para el MLNV, que han sido discutidas en otro lugar (Gil Calvo, 2005; Sampedro, 2005; Zallo, 2009), al narrar estos episodios he querido señalar algunos aspectos que resultan fundamentales para este trabajo. En concreto, desde el punto de vista de las demandas ciudadanas, estos episodios dejaron en evidencia a la seguridad del Estado y cuestionaron la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la insuficiencia de las políticas de seguridad, como así lo revelaría posteriormente el

informe de la Comisión del 11M. Pusieron en duda también al gobierno por imprevisión y falta de transparencia en un ámbito de la política que, si bien no suele ser visible, en el caso español –dada relevancia del fenómeno terrorista- ha sido prioritario en la agenda política de todos los gobiernos desde la Transición y, públicamente relevante desde finales de los noventa. Pusieron en cuestión, finalmente, a la oposición en la medida en que desde algunos sectores se les acusó de oportunismo político y de ruptura del *sacrosanto* Pacto Antiterrorista.

Por otro lado, desde el punto de vista de la puesta en escena de las demandas, estos episodios revelaron un repertorio conocido y ensayado en numerosas ocasiones desde finales de los años noventa -la toma de la calle, los minutos de silencio, las manos blancas y el *basta ya*- medios a través de los cuales se había venido reivindicando el endurecimiento del Estado, el rechazo de la violencia y la presencia de las víctimas. Para ello, la “obligación moral” de la condena y el rechazo junto con el enmarque del “antagonismo” que señala Gil Calvo (2011), se convirtieron en verdadero *cemento* de la sociedad a la hora de hacer demandas de seguridad al Estado, especialmente, pero no sólo, vinculadas al terrorismo.

¿Se puede establecer alguna relación entre los hechos narrados y la evolución del llamado conflicto vasco en los meses y años siguientes a este episodio? ¿En qué medida lo acontecido aquel día pudo tener un impacto en las evaluaciones morales o estratégicas de la violencia para ETA y las organizaciones políticas vinculadas a ella?

Recordemos brevemente que este trabajo se ha construido en torno a, y ha insistido en la importancia de acontecimientos concretos y su potencial transformador. Si consideramos lo recogido en los capítulos anteriores, uno de los elementos que, con destacado interés, abordaron muchos de los actores, fue un acontecimiento en concreto: el 11-M³⁷⁶. Así, al indagar en elementos del contexto global (la aparición de nuevas formas de violencia, la articulación de nuevas legislaciones o episodios como el 11-S)

³⁷⁶ El hecho de elaborar aquí una sección dedicada exclusivamente a las narraciones y percepciones sobre el 11-M se justifica por dos argumentos metodológicamente relevantes. En primer lugar y desde un punto de vista teórico, este trabajo consideró desde el principio una noción de temporalidad basada en hitos y episodios, para la cual el cambio sociopolítico podía tener alguna relación con episodios-umbrales que transforman la legitimidad y la efectividad de la violencia. A partir de la constatación de que en la historia reciente de la violencia en el País Vasco había, sin duda, episodios de esta naturaleza, se planteó la posibilidad de ver el impacto de otros episodios generadores de otros contextos (en concreto en el nivel internacional). A pesar de que se asumió este concepto de temporalidad y así se trató de incluir en las guías preparatorias para las entrevistas, no se planteó originalmente ninguna pregunta sobre el 11-M. Sin embargo, a partir de las primeras entrevistas piloto se pudo comprobar que este episodio aparecía vinculado al universo de cambios “globales”, como un hecho bastante significativo y en torno al cual, muchos desarrollaban una narración interesante. En la medida en que se ha revelado entonces como un acontecimiento significativo, he decidido dedicar un análisis específico a dicho acontecimiento.

apareció un consenso bastante claro en señalar el papel interviniente de un episodio en particular que, siendo global y local a la vez, habría generado algunos efectos transformadores sobre el propio universo simbólico y material de la violencia vasca. Por ello, podríamos tomarlo en sí mismo como indicador de las transformaciones en lo socialmente tolerable de la violencia, pero también de la influencia del contexto en la propia dinámica “local” de dicha violencia.

A diferencia de los enfoques que plantean una temporalidad “teleológica”, que explicaría los episodios como resultado de procesos transhistóricos (urbanización, industrialización, la formación del Estado o la propia globalización, etc.), la temporalidad basada en acontecimientos reconoce el poder de determinados episodios sobre la historia (Sewell, 2005: 262). En el sentido más profundo de la teoría de W. Sewell, los acontecimientos deben ser concebidos como “secuencias de hechos que resultan en la transformación de estructuras” (2005: 227). En consecuencia, analizar sus efectos es tan importante como prestar atención al modo en que éstos son interpretados y reconstruidos en la opinión pública o en qué medida generan nuevos marcos para comprender realidades similares.

Aplicado al análisis de la acción colectiva y de la violencia en particular, se podría entender con Sewell, (2006), McAdam y Sewell (2001), Della Porta (2008) o Hess y Martin (2006) que los acontecimientos transformadores pueden ser momentos de cambio significativo en la historia de un movimiento social. Un episodio que en alguna medida incrementa o reduce de manera significativa los niveles de movilización o algún aspecto del mismo. Della Porta (2008) discute los efectos de la propia protesta sobre el movimiento social atendiendo a la teoría de Sewell en términos de “protesta transformadora” ('eventful protest'). Es decir, considerando el modo en que los episodios de acción colectiva son transformadores para un movimiento social dado.

Los movimientos sociales son conflictivos no sólo por sus demandas sino también por sus repertorios, por los medios que emplean, tal y como hemos venido argumentando aquí mediante el estudio del caso vasco analizado. Si comprendemos el conflicto en estos términos y la temporalidad vinculada al cambio social a través de acontecimientos, habría muchos puntos de inflexión en la historia de ETA y del MLNV. Pero hasta aquí hemos venido demostrando que esto es así no sólo para el MLNV y su aparato militar, sino para la propia historia del “conflicto” en la medida en que hay episodios que afectan a las experiencias y estrategias de un abanico más amplio de actores que el propio movimiento social “nacionalista”. Así, los juicios de Burgos

(1973), el atentado de Hipercor (1987), la caída de Bidart (1992) o el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco (1996) son acontecimientos que han transformado estrategias y narrativas de un amplio conjunto de actores.

Quienes han abordado el análisis de los acontecimientos particulares en relación con los movimientos sociales argumentan la falta de atención a los mismos: *“ninguna explicación del movimiento social o de las revoluciones puede dejar de lado los acontecimientos (...) pero el estudio de los movimientos sociales o las revoluciones –al menos tal y como se han llevado a cabo por sociólogos y politólogos- rara vez ha prestado atención a los aspectos contingentes y a la significación causal de episodios particulares”* (Mc Adam, 2001:101).

Y sin embargo, cuando se ha aplicado esta perspectiva, se observa especialmente el modo en que durante los ciclos de protesta, algunos episodios contingentes tienden a afectar a las estructuras del movimiento alimentando mecanismos de cambio social; ya sea en las redes organizativas, en la redefinición de los marcos, o en la creación de nuevas solidaridades.

Pero más allá de la propia experiencia para el movimiento social, se podría defender la relevancia de las representaciones de los acontecimientos para un conjunto más amplio de actores. En mi propia argumentación, los episodios de violencia tienen efectos cognitivos, afectivos y relacionales y generan experiencias colectivas, en la interacción de diferentes actores que están implicados, o no, en dicho episodio.

Por esta razón es conveniente abordar el análisis de acontecimientos ajenos al conflicto vasco a partir del significado de una cadena de hechos de naturaleza global para comprender su repercusión local.

Definir un acontecimiento es un acto de “juicio” analítico. No se puede explicar todo de un acontecimiento sino que es necesario definir los límites de dicho fenómeno. Por ello, Sewell sugiere elaborar una narración con límites espacio-temporales en virtud de aquello que se pretende explicar. El 11-M significó y evidenció muchas cosas. Abrió procesos diversos, todos ellos de enorme interés sociopolítico para la realidad española. Sin embargo, es mi propósito convertir este acontecimiento en “transformador” en el marco del universo de la violencia vasca y sólo en relación con ella. Así pues, no entraré en consideraciones sobre el cambio electoral, sobre los procesos de movilización online vinculados al 13-M (Sampedro, 2005), o sobre el terrorismo islamista (Reinares, 2010);

así como tampoco respecto de la nueva consideración de las víctimas, la memoria³⁷⁷, la respuesta ciudadana o la gestión gubernamental de la crisis.

Muchas veces se ha mencionado a ETA en relación con el 11M y sin embargo, hasta el momento sólo se ha abordado esta relación atendiendo a teorías de la conspiración y de la colaboración que, siendo de interés, no parecen aportar gran enjundia al análisis de la violencia etarra. Este trabajo, en lugar de preguntarse por la autoría del atentado, especula con ella y trata de extraer reflexiones de los actores a partir de este supuesto, rastreando los significados de este episodio en el universo de lo posible y lo aceptable de la violencia de ETA. Por ello haré un análisis de las narraciones atendiendo al modo en que, a la vista de los sucesos, los actores construyen una interpretación pública. Consideraré la elaboración de nuevas nociones y metáforas sobre la violencia así como el significado simbólico que dicho acontecimiento ha tenido en relación con la violencia de ETA.

El análisis de este episodio en los términos planteados permite observar algunos cambios y continuidades en la manera en que se entiende la violencia y arroja luz sobre cómo un acontecimiento global es enmarcado en términos locales. Pero también ilustra el modo en que el 11M produjo una dislocación del discurso (Maskaliunaite, 2008) en la medida en que supuso aceptar la aparición de un nuevo actor en el teatro de la violencia: si no era ETA ¿cómo podía comprenderse lo sucedido?

7. 1. Los trenes de atocha en el universo de las violencias vascas

Durante treinta años de democracia, la sociedad española ha convivido y se ha socializado con la experiencia de la violencia y el terrorismo. Primero con las diferentes violencias vinculadas a la transición española pero, fundamentalmente, con aquellas surgidas a la sombra del conflicto en el País Vasco y, en concreto, a la actividad de ETA.

La larga experiencia de dicha violencia ha generado un universo simbólico muy particular, en torno al concepto de “terrorismo” y al modo de manejarlo. Dicho universo quedó dislocado cuando los españoles se enfrentaron a las explosiones del 11-M, ya que tuvo que comprender con viejas categorías un fenómeno radicalmente nuevo. Si bien por la obvia inercia de aplicar los esquemas de lo conocido a la realidad, se atribuyó la

³⁷⁷ Véase “archivo del Duelo” elaborado en el CSIC: <http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimediae%2F6>

autoría a ETA, tanto por medios como por partidos políticos, la evidencia policial aportada en los días siguientes reveló que estas acciones señalaban a un tipo de organización de otra naturaleza: Al Qaeda.

Sólo una formación ilegal, Batasuna, puso en entredicho inicialmente la versión oficial en torno a la autoría.

“La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis, que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos ni por el modus operandi se puede afirmar hoy, que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido hoy en Madrid.”

[Arnaldo Otegi, portavoz de la formación ilegalizada *Batasuna*, 11 de marzo de 2004]

Esta afirmación, hecha con premura en la mañana del 11M, junto con el rechazo explícito de dicho atentado y la consiguiente condena del mismo, evidenció que, independientemente de la autoría, se trataba de un acontecimiento que no había dejado indiferente al mundo político de ETA, a la izquierda abertzale. No podemos saber si la organización *Batasuna* se planteó de hecho la “mera hipótesis” y, sin embargo, especular con ella ha permitido recoger algunas reflexiones interesantes en torno al diagnóstico y al pronóstico que se hace de la violencia³⁷⁸.

Inicialmente, el 11 de Marzo de 2004 se vivió por parte de aquellas organizaciones y personas implicadas en el conflicto, como un fenómeno local. Pero no como un episodio de violencia más (como otro atentado más en la historia de ETA) pues todos los actores entrevistados coinciden en señalar el modo en que las dimensiones y el impacto social de dicho episodio llevaron a la consideración del mismo como un auténtico punto de inflexión. Pero lo que empezó siendo un episodio local, pronto se convirtió en un acontecimiento global, tanto por el impacto mundial como por la autoría o por las causas a las que parecía responder. Las opiniones públicas y los líderes del mundo entero, pero en particular las de los países del entorno europeo, estuvieron pendientes de dicho acontecimiento y reaccionaron con contundencia ante el mismo. Fuera o no fuera ETA, aquel episodio tenía un impacto global.

³⁷⁸ En este capítulo, he organizado la información exclusivamente en términos temáticos. Si bien se atiende necesariamente a las diferencias entre “bloques ideológicos”, pues las reflexiones son claramente dispares entre sí, he optado por hacer esta clasificación dado el nivel de consenso que aparece a la hora de establecer los significados fundamentales y las implicaciones de dicho episodio para el desarrollo de la violencia.

Hay acuerdo entre todos los entrevistados en señalar con epítetos muy duros (incluso en el núcleo del a izquierda abertzale) el impacto de dicho episodio y ello permite señalar que se percibe que ese día se superaron umbrales en varios aspectos. El mero hecho de que ETA pudiera estar detrás de los mismos lo convirtió en un punto de inflexión. Por ello, podemos hablar de un episodio que siendo “global” se enmarcó inicialmente como local, generando unos efectos que merece la pena considerar.

Los trenes de Atocha: un umbral de emociones:

En el amplio conjunto de entrevistados para este trabajo, es notable que ninguno de ellos sea indiferente a lo ocurrido en Madrid el 11 de Marzo de 2004. Ya se aborde dicho episodio de manera espontánea -lo que sucede en la mayoría de los casos-, ya se haga de un modo inducido en la conversación, es notable el hecho de que la reflexión parta en primera instancia del ámbito de las emociones, de la narración de vivencias experimentadas en los primeros momentos de aquella mañana.

Uno de los aspectos más llamativos es el hecho de que no aparecen expresiones de condena. Éstas son una práctica discursiva habitual y de corrección política en el discurso público social cuando se abordan actos de terrorismo. En particular en el campo discursivo del terrorismo de ETA, lo que he denominado en este trabajo “la obsesión condenatoria” ha sido en la última década una auténtica *muletilla* con la que se inicia cualquier argumentación en relación con el terrorismo y con la violencia en general. Al recordar y reflexionar sobre este episodio, aparecen más bien expresiones de sentimiento: de rechazo o de cierto recelo. Estos sentimientos difieren claramente dependiendo del mundo ideológico y político en el que se sitúan los actores, pero también geográfico (en el País Vasco o en Madrid). En todo caso, el acontecimiento se percibe como un límite, como un momento nunca antes vivido, en términos sociales y políticos, con tal intensidad, como un fenómeno “nuevo” que desquicia de algún modo las categorías con las que se venía enmarcando hasta ahora el terrorismo.

En primer lugar, la solidaridad y la proximidad son dos sentimientos que aparecen asociados al atentado. Podemos destacar que el modo en que se reconstruyen los acontecimientos del 11M está vinculado a un renovado clima de solidaridad con las víctimas y con la propia ciudad de Madrid que es común a la mayoría de los actores. Hay coincidencia en señalar que incluso dentro del País Vasco, donde aún es difícil encontrar estos sentimientos de cercanía y adhesión entre algunos sectores, se trató de un episodio significativo.

En el nacionalismo vasco, incluido el independentismo parlamentario, se constata que se vivió con “carga de conciencia colectiva” y con la sensación de tener que decir: “no en mi nombre”, “no en nombre de la independencia vasca”. Esto se justifica no sólo por un fuerte sentimiento de cercanía y solidaridad con las víctimas y con la percepción de que se han superado límites intolerables ante lo que se considera un crimen brutal, sino por los efectos políticos que podía implicar para quienes comparten fines independentistas. En este sentido aparece un rechazo espontáneo a identificarse en términos de fines con quien ha realizado un acto semejante.

Sólo en el núcleo de la izquierda abertzale oficial se reconoce haber vivido como un “problema ajeno” y se plantea con cierta indiferencia respecto al impacto en Madrid aunque, en todo caso, se percibe un rechazo (no claramente explicitado) a actos indiscriminados de aquella naturaleza. Pero en cuanto se sale del núcleo “duro”, se relatan experiencias de cercanía y proximidad cultural que muestran el episodio global de una manera diferente por el hecho de haber ocurrido en Madrid.

“Además yo sí que creo también que nos sirvió para darnos cuenta que no es lo mismo Madrid que Londres, por mucho que nosotros...yo no me considero español, pero yo he vivido en Madrid y conozco gente que vive en Madrid. Y para mí algo que pasa en Madrid es mucho más cercano que algo que pasa en Burdeos; aunque Burdeos esté más cerca que Madrid.”

[Parlamentario de Aralar]

Esta percepción es evidente también atendiendo a la naturaleza de las víctimas. El hecho de que fueran de “clase obrera”, de barrios obreros, cuando quizá se esté acostumbrado a tolerar otro tipo de víctimas, lo convierte en un acto altamente indiscriminado que lleva a determinadas personas a una solidaridad que de otra forma quizá no habrían desarrollado.

“... esto no es ETA y nuestra solidaridad con los trabajadores, eso son barrios de trabajadores... y luego un sentimiento de solidaridad, con los muertos ¿no? y una sensación decir, “eh... ese no es el camino ¿eh?” no ha sido ETA pero tampoco puede ser el camino”

[Simpatizante izquierda abertzale, imputado en sumario Egunkaria]

Por otro lado, se constata una que las explosiones de Atocha evidencian una vulnerabilidad que afecta a todos. Una acción indiscriminada de esa naturaleza lleva a comprender que cualquiera es víctima potencial y ello conduce a la cercanía o la

identificación con las víctimas, pero en último caso, a una transformación de lo que se puede soportar.

El enmarque tradicional del terrorismo en el País Vasco ha llevado a cierta asunción de que hay sectores que “nunca” van a ser objetivo de ETA. Así, aunque desde 1996 había habido una clara ampliación del espectro de objetivos potenciales (periodistas, cargos electos, miembros de la Ertzaintza) predominaba de algún modo la idea de que no todo el mundo era una víctima potencial. Este planteamiento cambia radicalmente con la entrada de un nuevo tipo de terrorismo que victimiza a gente de manera indiscriminada y sin hacer distinciones de naturaleza social o política.

“... y ha supuesto que nacionalmente la opinión pública le tenga aún mas rechazo porque... porque el terrorismo tiene un apartado que yo he visto en el País Vasco mucho que la gente muchas veces no lo... no lo nota hasta que no siente que le va... que le afecta, mucha gente le importa que su vecino lleve escolta o que puedan poner una bomba no sé quien mientras crea que a su hijo o a él o a él no le va a pasar. Cuando se ve un atentado global como el del 11M, el 11S o los de Londres tal, la gente empieza a ver que a lo mejor me toca... y eso hace que la reacción sea un poquito mayor.”

[Dirigente del PP Vasco]

Se relata una indiferencia previa hacia el terrorismo que era detectable en algunos sectores de la población en el País Vasco y el modo en que, dicha indolencia, se habría visto modificada de alguna manera al vivir los episodios del 11M desde la cercanía. “Todos somos madrileños” dijo aquella mañana el presidente del PNV Josu Jon Imaz. Y de hecho, se ha podido verificar cómo aquel acontecimiento se vivió con una proximidad y un sentimiento de vulnerabilidad general que transformó la percepción del terrorismo ante el “nuevo” terrorismo.

“... yo creo que contribuyó también a hacerle las cosas más difíciles a ETA y a su gente, ¿no?, porque yo creo que fue un atentado...que produjo mucha...solidaridad en el País Vasco curiosamente un país o un sector de la población que hasta entonces pues era relativamente indiferente ante determinados atentados yo creo que el 11M como el conjunto de España lo vivió...como algo muy propio ¿no?”

[Dirigente del PSE]

En segundo lugar, debemos hacer referencia a sentimientos vividos de miedo y desazón en el proceso de especulación con la autoría. Dentro de la familia nacionalista pero siguiendo una progresión ideológica, hay consenso en señalar que las primeras

horas se vivieron emocionalmente en unos términos muy negativos. Gran parte de la narraciones comienzan con expresiones como “espanto”, “angustia” “miedo”, horror” “inquietud”, incomodidad” (adjetivos que fueron utilizados por entrevistados de la izquierda abertzale, Aralar, y pacifistas), y “carga de conciencia” (PNV). Estos epítetos se atribuyen a una clara experiencia de dislocación en el enfrentamiento con la posibilidad de que los atentados hubieran sido una acción de ETA.

En el núcleo más duro de la izquierda abertzale se percibe que la violencia -brutal e indiscriminada- genera unos efectos terribles. Pero la sensación de “angustia” y “miedo” se asocia más bien a la reacción ciudadana, y a la apreciación de que, en el caso de que sí hubiera sido ETA, se habría desencadenado una represión importante contra la izquierda abertzale en términos políticos y posiblemente policiales (cuando no sociales³⁷⁹).

“Se vivió con espanto (...) porque produjo un escalofrío ver cómo altos dirigentes de ese estado... se subían a lomos de ese caballo para intentar arremeter contra toda la izquierda abertzale, haciéndonos culpables de aquello, y cómo fue y ha sido y está siendo utilizado para una criminalización de las ideas políticas y las formas políticas atroces.”

[Dirigente histórico de HB (1)]

El miedo a la reacción de las autoridades pero también a la reacción ciudadana es interesante en la medida en que recuerda experiencias pasadas. El MLNV conocía el potencial de la respuesta ciudadana. Había vivido el rigor del enfrentamiento en las calles del País Vasco desde las intensas movilizaciones de *Gesto por la paz* hasta el rechazo masivo en el conjunto de España de 1997, y había constatado que la trayectoria posterior a dichas movilizaciones les había conducido a una situación progresiva de aislamiento social y político. Conocía también la respuesta estatal y reconocía de algún modo que las características de este episodio superaban con creces cualquier acción de violencia previa, en la medida de lo cual, era de esperar una respuesta acorde con las dimensiones del mismo.

³⁷⁹ El documental del colectivo Eguzki (2007), “*13M Atocha, El Pozo, Santa Eugenia.... Donibane*” recoge el episodio de la muerte el 13M del panadero Ángel Berrueta, militante de la izquierda abertzale a manos de un policía nacional por una discusión en torno al 11M y a la autoría de ETA. En esta obra se recogen numerosos testimonios de cómo se vivieron los episodios de 11M en el mundo independentista abertzale. El documental intenta mostrar la repercusión de lo acontecido durante el 11M y los siguientes días en Euskal Herria en una narración coral compuesta por distintas voces y experiencia. Sobre un aspecto importante del 11M que fue en buena medida silenciada por los medios, véase Sampedro, 2005.

"...decían desde el principio que podía ser ETA. A los medios de comunicación les importaba poco cuántos muertos hubiese como quién había sido el que los había matado (...) te sentías impotente porque, porque la gente hablaba, y... se sentía dolida, como agredida ¿no? Había gente que ya empezaba a sentir miedo de lo que podía pasar, ¿no?"

[Ex preso de ETA, 2004: *Documental: 13M Atocha, El Pozo, Santa Eugenia.... Donibane*]

Al salir del núcleo de la izquierda abertzale y adentrarnos en el mundo del independentismo parlamentario, encontramos también la sensación de miedo en relación a la reacción ciudadana, y sobre todo política; a la posible represión no sólo sobre quien justifica o ha justificado la violencia, sino sobre todo aquél que defienda postulados independentistas. Este planteamiento es compartido por simpatizantes de la izquierda abertzale y por activistas por la paz que ven en las posibles reacciones políticas un eventual cierre de oportunidades políticas para lograr sus objetivos (ya sean de independentismo, ya de salida dialogada de la violencia).

Se sabe y se ha hecho constar (como ya vimos en el capítulo sexto) que en la última década, y de una manera muy vinculada con nuevo contexto *securitario* que se vive en el nivel internacional, se han ampliado los círculos de “represión” o los ámbitos susceptibles de ser relacionados con el fenómeno terrorista. A partir de este episodio, se percibe que la identificación nacionalismo=terrorismo, que se había venido advirtiendo en determinados sectores del nacionalismo, se ha consolidado. A partir del impacto de los acontecimientos analizados, no habría espacio para un planteamiento político posible del problema, sino que se verifica y confirma que el carácter policial y judicial de la estrategia del Estado es la única vía posible en el contexto post-Atocha. Esta evidencia conduce a la percepción de un cierre de las oportunidades para cualquier tipo de negociación o proceso de diálogo, no ya respecto al proyecto independentista, sino a lo que se denomina “salida ordenada” de la violencia, es decir, sobre las condiciones del abandono de las armas.

“... Mi reacción fue: bueno, lo primero, aparte de la mala leche, fue: esto se ha, esto se ha terminado. O sea, mi reacción fue, esto se ha terminado, no solamente es que ETA está liquidada después de esto, sino que el modelo que hemos venido, nosotros, defendiendo durante tantos años de que hay que buscar una salida dialogada y ordenada se ha terminado. O sea, a partir de aquí, va a ser un combate brutal contra ETA, que ETA no va a aguantar.”

[Activista por la paz]

El miedo y la desazón se relacionan también con una valoración de las implicaciones del 11-M para la respuesta del Estado en relación con el terrorismo. Se aprecia que la respuesta del Estado ha sido dura justificando una política de seguridad y de recorte de libertades que ya se venía constatando en los últimos años y que, en todo caso, se ha endurecido después de 2004.

“... se vivió, primero pensando que había sido ETA...con gran desazón porque...”

P: ¿QUÉ HABRÍA REPRESENTADO QUE HUBIERA SIDO ETA?

R: Puff... un desastre. Un desastre total. Para el nacionalismo vasco sí, sí, sí, sí. Porque sí que habría dado carta blanca a cualquier eh... Pérdida de derecho civil... (...) pero sobre todo se vivió con mucha desazón porque claro, incluso la propia gente de Batasuna estaba convencida de que había sido ETA.

[Parlamentario de Aralar]

Los trenes de Atocha: espejo de la violencia

El segundo de los argumentos que tiene una mayor presencia en las narraciones de los actores está vinculado a las comparaciones que se establecen entre ETA y la “nueva violencia” que hizo su aparición aquel 11 de Marzo. Independientemente de la autoría, se percibe que este episodio tiene o debe tener un “efecto espejo” para ETA, estableciéndose comparaciones que afectan a la efectividad de su estrategia, así como a los criterios con los que se juzgaba hasta entonces su legitimidad. Esta metáfora especular es recurrente tanto dentro como fuera del mundo independentista.

El 11- M es un espejo del impacto social de la violencia: el atentado de Atocha permite evaluar el efecto que tiene sobre la sociedad una acción altamente indiscriminada. Conduce a una valoración de las consecuencias sociales y políticas que genera un atentado de otra dimensión. Se entiende que ha habido otros momentos en los que el MLNV habría comprobado la reacción que provocan sus acciones, y sin embargo, este episodio parece tener un efecto importante sobre ellos. Si el proceso de pérdida de legitimidad/efectividad de ETA se venía comprobando de una forma clara en la última década, las formas y el fondo con el que actúa la izquierda abertzale en la mañana del 11M revela claramente un cálculo sobre la reacción social y política que parece desestabilizar su estrategia:

“Han mejorado los mecanismos de coordinación internacionales, mayor

rechazo al terrorismo de manera global y luego, yo creo, que ETA en algunos momentos de la historia se ha visto frente a su propio espejo y ha visto que las consecuencias de atentados en Europa le ponían a ella más en el disparadero y más en situación muy difícil. Es muy...es muy significativa la reacción de Otegi el día del 11M cuando decía "yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido."

[Dirigente del PP vasco]

Hay una clara constatación de que la reacción social es más amplia de lo habitual y de que, incluso dentro de la comunidad de legitimación histórica de ETA, habría habido una percepción distinta de las dimensiones y del impacto del “nuevo” fenómeno.

“A partir de ese día, claro...digamos que se vio de cerca también... esa... ese... esa otra dimensión del... del terrorismo porque si mides pues ETA estaba acostumbrada a practicar un terrorismo... que evitase que determinados sectores en el País Vasco nacionalistas lo rechazasen ¿no? Entonces es un terrorismo pues, en fin, que siempre afecta a sectores no nacionalistas fundamentalmente, que no es un terrorismo... eh de este tipo, como el que hacen los islamistas sino que parece un terrorismo más... más calculado y todo eso. Entonces al aparecer en escena un terrorismo mucho más brutal mucho... de unas dimensiones... mucho mayores todavía... en fin... digamos que se dan cuenta de que eso arrastra a todo el mundo... que se solidarice con una organización terrorista.”

[Dirigente del PSE]

El 11-M es también un retrato que refleja los límites de la efectividad: la metáfora del efecto especular sirve para desarrollar evaluaciones importantes entorno a la efectividad y a los supuestos logros que se pueden alcanzar con el uso de la violencia en el nuevo marco impuesto por Al Qaeda. El 11M evidencia el fin del “monopolio” de la violencia terrorista en suelo español. Pone de relieve que, si bien hasta ahora ETA había constituido la única amenaza al poder del Estado, ahora entra en competición con otras organizaciones que claramente pueden impactar de una manera más potente sobre la sociedad y el proceso político.

“Yo creo que ellos mismos decían "Ahí va, si nosotros mismos por un segundo hemos dudado un segundo de que podía haber sido..." ¿eso qué quiere decir? (...) Es que... Estaban solos, es una cuestión de... que estaban solos hasta ese momento... todo era ETA y en ese momento, de repente... el gran acto terrorista no eran ellos...”

[Simpatizante izquierda abertzale (1)]

Dentro del propio mundo del MLNV aparece así la prueba de que hay organizaciones con las que, a partir de ahora, tendrían que competir en la estrategia de desestabilización del Estado, y esto, eventualmente, conduce a una reflexión en torno a las condiciones en las que se pone en práctica la violencia.

“Yo creo que sí supone por parte de ese militante político que considera que la lucha armada es un instrumento válido para la obtención de objetivos políticos, en fin... vaya compañeros de viaje que tengo. Vaya compañeros de viaje que tengo lo que se podría llamar la lucha, la práctica de la lucha armada.”

[Simpatizante de la izquierda abertzale (2), imputado en el sumario de Egunkaria]

El episodio es entonces un espejo en la medida en que una organización ve el impacto de otra organización con la que va a tener dificultades para competir (operativas y en todo caso de aceptación social) si pretende lograr sus fines políticos a través del mantenimiento de la violencia.

“Si, si un atentado de esas características... que supone todos los muertos que ha puesto ETA en los últimos 10 años, no es capaz de doblegar al Estado Español... ¿Qué perspectiva política tiene una lucha armada? ¿Qué es lo que tienes que poner encima de la mesa para doblegar a un Estado que ha respondido a un 11M con una unidad ciudadana, no política, pero unidad ciudadana de esa magnitud?”

[Parlamentario de Aralar]

El 11-M parece ser entonces un episodio-umbral, un acontecimiento que revela los límites de la violencia como medio para lograr objetivos políticos.

“El antes y después en todo caso tiene que ver, si es que ha habido un antes y un después del 11 de Marzo... tiene que ver con la efectividad (...) O sea, ¿cómo hacemos? Después de esto ¿qué tengo que hacer yo para que se provoque un revuelo en España que obligue a su gobierno a negociar?”

[Parlamentario de Aralar]

Esta percepción de pérdida súbita de efectividad de la violencia de ETA ante la concurrencia de otras organizaciones que se revelan el 11-M como mucho más potentes en términos de impacto es percibida dentro y fuera de la comunidad independentista. Con una metáfora tan potente como “el terrorismo internacional es la *Champions League*” y la violencia de ETA es el “*Rayo Vallecano*” describía uno de los

entrevistados constitucionalistas la realidad que se ponía de manifiesto el 11-M. Ante un acontecimiento así, se percibe que éste debe ser claramente un motivo de reevaluación por parte de ETA y del MLNV de su estrategia; que nada de lo que se ha conocido hasta ahora lograría ningún efecto sobre el Estado.

*“Yo cuando hablaba, cuando le decía a mi hija: Mira, este es el terrorismo del Real Madrid y el Barcelona, lo **nuestro** es del Iturri (que es un equipo de regional de al lado del barrio)”.*

[Ex dirigente sindical vasco]

ETA es lo conocido, lo “nuestro”, lo que se ven capaces de interpretar, de comprender. Sin embargo, aparece un nuevo fenómeno del que se desconocen siquiera los “fines” que pretende y del que sólo se percibe la brutalidad de los “hechos”.

Finalmente, el 11-M es percibido como el reflejo de los límites de la legitimidad de la violencia: la narración y el intento de “explicarse” el 11-M por parte de los entrevistados llevan también a algunas reflexiones en torno a la aceptación o adhesión social a la misma.

Dentro del núcleo de la izquierda abertzale, la posible autoría de ETA genera esta reflexión en torno a la legitimidad de la violencia de la organización, que se aborda en pasado: sus causas, sus formas de actuar y sus pretensiones.

“... ¡hombre! [La autoría habría representado] pues que, que para la gente aunque sean contrarios de ETA en este pueblo, pues, el poder cometer una acción de esa envergadura y de esa, y de ir contra la sociedad civil, eh, pues, pues es que eso es una, es muy duro, es muy duro, eh es muy duro aceptar que lo ha hecho una organización que ha luchado en favor eh, de este pueblo. Que se puede estar de acuerdo o no con, con, con eso, pero lo que nadie puede decir es que ETA eh, no ha dado, y los militantes de ETA no han dado todo por, eh, por sus causa, por su causa. Se puede no estar de acuerdo, se puede decir que es totalmente erróneo, muy bien. pero, pero, eh, eso queda ahí, en nuestro pueblo, la gente más contraria y la gente, eh, en general, eh, la sociedad, que es, puede criticar, pero nunca dirán que ETA son unos mafiosos, que han hecho dinero, que se han, que se han enriquecido, que se han aprovechado del pueblo”.

[Dirigente histórico de la izquierda abertzale (2)]

Hay una clara constatación de que habría significado un umbral de lo socialmente tolerable dentro de su comunidad. Habría sido “muy duro” de aceptar porque, en definitiva, se entiende que la violencia de ETA es (y ha sido) claramente distinta a ésta que emerge el 11-M. Porque ETA es una organización que se considera

que responde al “grito” de un pueblo, a una demanda social histórica y, que ha “luchado” por unas causas. De este planteamiento obtiene su legitimidad. No es una organización “mafiosa” que actúa en su propio beneficio. Esta idea refleja bien la percepción que el MLNV tiene de sus “gudaris”.

La izquierda abertzale se representa a sí misma como una casa grande en la que habita mucha gente. Y dentro de esa casa están los *gudaris* de ETA, son parte de ella y se entiende que son los que han renunciado a la juventud, los sueños, etc., por defender las causas del MLNV. En ese sentido, parece muy difícil de aceptar, ante un hecho de altísima indiscriminación, que se hayan superado barreras, que se hayan trascendido límites o que la propia organización se haya convertido en una organización completamente “irracional” (como la que se refleja en el espejo del 11-M). De ahí el modo en que se expresa una legitimación del pasado y las dificultades cognitivas con las que parecen percibirse las bombas de Atocha.

Aquella acción excedía los límites de lo aceptable incluso por ellos mismos:

“... No excedía los límites de lo aceptable, sino que excedía todo lo imaginable porque ETA nunca ha cometido contra una sociedad, contra la sociedad civil, eh, una masacre indiscriminada, eh... Porque ETA con la fuerza que ha tenido, con la capacidad que ha tenido de ir contra objetivos muy concretos ha podido cometer errores, como fue lo de Hipercor. Un craso error, un error en la lucha armada, pues, pues es, es horrible en eso, eh, pero, pero no es que se pone una, una un coche bomba en un mercado para que mueran inocentes allí, sino que es como una forma de hacer presión, que llama a la policía para desactivar...”

[Dirigente histórico de la izquierda abertzale (2)]

La violencia de ETA se comprende de una forma claramente diferente, sigue objetivos políticos (es un medio acción) y opera según criterios políticos; no busca la muerte de “inocentes” sino que emplea una forma de presión política. Por el contrario, las acciones de Atocha se consideran indiscriminadas, irracionales, no se encuentra sentido alguno en la acción. La comparación de la violencia etarra con la violencia experimentada el 11M revela que, aún formando parte del universo de lo posible que ETA la llevara a cabo, una acción de estas características no estaba en el universo de lo aceptable dentro de su propia comunidad de legitimación.

Un conocedor del mundo interno de Batasuna lo plantea de la siguiente manera:

“Mira, yo antes te he hablado de [XXX] que es de Batasuna. Y yo recuerdo de estar en el pueblo y llegó la hora de la concentración y él fue a la concentración de repulsa por el atentado del 11M de Madrid... convencido de que había sido ETA... horas después de haber escuchado a Arnaldo Otegi... convencido. Entonces la pregunta es... si no ha sido ETA ¿para qué haces una concentración por un atentado que ha sido en Madrid? Si la haces, es porque tú crees que tiene algo que ver contigo... porque teóricamente, un atentado en Madrid provocado por los islamistas, me produce a mí tanto rechazo como un atentado en Londres o como los atentados de Nueva York, porque yo no soy español, teóricamente... entonces claro... la gente de Batasuna fue a esas concentraciones convencido, la mayoría, de que había sido ETA... (...) Sí, diciendo...hasta aquí hemos llegado. Porque una barbaridad tan, tan...”

[Parlamentario de Aralar]

Después del 11-M ¿todos los terrorismos son iguales?

En tercer lugar, aparecen en la representación de los actores reflexiones en torno a la naturaleza del terrorismo. En un sentido, para señalar las diferencias que separan la violencia de ETA y la de Al Qaeda. En otros casos, para subrayar el carácter igualitario de todos los terrorismos.

Surge en primer lugar el discurso de la *guerra contra el terror*³⁸⁰ de una manera clara. Algunas narraciones plantean cómo con el 11-M emerge un “nuevo” terrorismo que revela su carácter irracional y suicida. Un terrorismo carente de causas y de justificaciones y que constituye el principal problema de los países avanzados y de Occidente. Al ser su objetivo la destrucción del Estado y de la democracia, es igual que el de ETA. Esta comprensión del “nuevo” terrorismo frente al viejo, por decirlo así, hace que eventualmente puedan colaborar ya que en definitiva su objetivo último, la destrucción del Estado, es común³⁸¹.

“Fíjate que lo que sucede en muchas ocasiones es que se, eh, establecen diferencias entre terrorismos. No, claro, es que el terrorismo de ETA no es como ese terrorismo, es otro tipo de terrorismo y tal. Con lo cual, (...) Desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Cómo afecta? Afecta haciéndonos, haciendo que seamos conscientes de que el terrorismo es un

³⁸⁰ Sobre los elementos que caracterizarían este discurso se trató extensamente en el capítulo 4, pero baste recordar que el terrorismo en dicha narrativa se entiende como: 1) un fenómeno irracional y carente de causas, 2) que busca la matanza indiscriminada de civiles, 3) que es el principal enemigo de la democracia y el primer problema del mundo contemporáneo, y 4) que sólo se puede explicar desde la perspectiva psicológica de la desviación “individual”, etc.

³⁸¹ La idea de la colaboración “natural” entre organizaciones terroristas aparece en algunos de los entrevistados. Detrás hay una especulación en torno a la autoría del 11-M, sobre la que no profundizaré, pero que revela un aspecto controvertido de dicho episodio.

problema fundamental. Y el cambio en el ámbito internacional, básico (...) O sea, ya no hay guerras como tales, hay guerras, por supuesto, pero el problema para Occidente no son las guerras como tales. No es que de pronto, eh, Irán coja e invada Italia, no, eso ya no se puede. El problema, y la amenaza están en el terrorismo. Y dentro del terrorismo, de manera, ya actual y real, o por lo menos potencial, entre terroristas existe la posibilidad de colaboración. Eh, existe la posibilidad de que colaboren. Es decir, no es, eh, eh, disparatado pensar que ETA pueda recurrir a Al Qaeda, o Al Qaeda a ETA si consiguen encontrar los cauces por los cuales sus objetivos, eh, o sea, por los cuales puedan colaborar y alcanzar sus respectivos objetivos. Que son, en parte, los mismo, que es destruir los Estados democráticos, eh. Uno es el Estado democrático español y otro los Estados democráticos, en general, de Occidente, es decir, minar Occidente. Entonces, el ser conscientes de que el terrorismo es uno de los principales problemas del mundo actual y que el terrorismo ha sustituido a la guerra, y por tanto, nuestro enemigo ya no es un ejército x, sino redes de terroristas que pueden interrelacionar entre ellos, eso creo que es lo importante.”

[Activista Foro de Ermua]

Esta explicación fue, por otro lado, la dominante en los enmarques gubernamentales sobre la violencia de ETA después de los acontecimientos del 11-S en Nueva York. El discurso oficial del gobierno Aznar estuvo basado, sobre todo en su proyección internacional, en subrayar el carácter irracional, carente de causas y despolitizado del terrorismo etarra, en la identificación del mismo con los “nuevos” terrorismos, y en la afirmación permanente de que todos deben ser combatidos de la misma manera en la medida en que constituyen la principal afrenta contra las democracias occidentales. En este sentido, el 11-M habría verificado la realidad que subyace a dicho discurso.

Pero frente a esta visión aparece otro diagnóstico en virtud del cual hay diferencias sustantivas en uno y otro terrorismo y, en todo caso, el de ETA es visto como una violencia de naturaleza diferente, más social, más política, por más que fuera indiscriminada y brutal.

“Es decir, a mí me parece que, es decir, el 11M ha hecho daño a ETA. Porque descubre el carácter suicida y el carácter cruel de todos los terrorismos. Irracional... es decir, yo cuando vi todas las muertes que había decía "Esto es imposible que lo haga ETA". Porque ETA todavía divide, porque claro, es un terrorismo que quiere tener acción de masas, política.”

[Ex dirigente sindical vasco]

En esta perspectiva, el 11-M vuelve, de nuevo, a ser un espejo que evidenciando diferencias entre un terrorismo y otro; se convierte en una representación de lo que

puede llegar a ser todo terrorismo. Y en ese sentido, habría afectado a la legitimación y efectividad de la acción de ETA.

En el extremo de la interpretación de que no todas las violencias son iguales está la permanente referencia a la motivación política que subyace a la acción de ETA dentro de las narrativas de la izquierda abertzale. Ya en el núcleo, ya en la periferia de este movimiento, se percibe una defensa de la violencia como “lucha armada” frente a una violencia “brutal”, “irracional” e “indiscriminada” que no se puede entender como un error estratégico sino como un hecho deliberado de una organización que en nada se puede comparar con ETA. Ello sirve en algunos casos para reflexionar sobre la necesidad de que la izquierda abertzale oficial redirija su estrategia, y en otros casos (como en el núcleo de Batasuna) para tomar distancia del episodio, al menos en la narración pública, y reafirmar el carácter político de la estrategia armada de ETA.

Pero a partir del 11-M también hay evaluaciones en relación con la respuesta que debe darse a uno y otro tipo de violencia/terrorismo. En este sentido, el acontecimiento es percibido también como un umbral de lo que se puede llegar a aceptar en términos de políticas de seguridad. Aparece claramente en las narraciones del mundo independentista como la excusa para unas políticas estatales (antiterroristas) que han supuesto un recorte claro de libertades. Dichas políticas ya habrían sido puestas en marcha en la última década pero hay un consenso importante en señalar el espaldarazo social recibido a partir del 11-M. Éste es percibido como un cierre claro de oportunidades en la izquierda abertzale; de posibilidades para lo que denominan una “salida dialogada del conflicto” y como una ampliación de los círculos a los que afecta la represión del Estado.

“¿Qué ha supuesto el 11M? Ha supuesto que el Estado español entre en una espiral de caza de brujas, en un macartismo atroz con nosotros, y no solo con nosotros, porque, con todo aquello que de algún modo puede considerar, "entorno", tú conoces el famoso concepto de "entorno", ¿qué es "el entorno"? No tiene ni principio ni fin, tú ahora puedes ser el entorno por estar hablando conmigo [...] no, no, sí, sí, pero no te lo tomes a broma, tú no serás el entorno pues porque eres profesora en una facultad de Madrid pero si fueras profesora aquí esto puede ser una reunión del entorno.”

[Dirigente histórico de HB (1)]

Fuera del núcleo, también aparece una visión de este recorte de libertades y de criminalización de “todo lo vasco”, aunque atendiendo también al hecho de que se trata de una dinámica perceptible en la mayoría de los países del entorno europeo. Pero en

todo caso, muy visible en relación con el conflicto vasco.

La idea de que el 11-M es un umbral que modifica las condiciones de las políticas de seguridad es, por otro lado, bienvenida en un enfoque constitucionalista y fuera del nacionalismo. En este caso, es obvio que se percibe una mejora considerable de las políticas de seguridad que, si bien parecen redefinirse en función de “nuevas” amenazas, afecta de una manera clara a la “lucha contra ETA”, sobre todo, en el nivel de la colaboración y el reconocimiento internacional.

7.2 Efectos sobre el MLNV: un hito en la transformación de la legitimidad y efectividad de la violencia.

Finalmente, se puede plantear un último punto a partir de las narraciones de los informantes sobre el modo en que el episodio de 11-M habría generado algunas consecuencias para el MLNV. En primer lugar, existe un amplio consenso en señalar que, posiblemente por ser ETA el objeto de las especulaciones sobre la autoría, desde primeras horas de la mañana la principal organización de la izquierda abertzale, la ilegalizada Batasuna, así como muchos de sus militantes, vivió una situación de incertidumbre y reflexión importante.

El impacto y la reacción ciudadana, pero también la gestión del gobierno central, generaron un contexto en el cual dicha organización se vio forzada a un ejercicio sin precedentes de rechazo de un atentado. Y si bien se negó rotundamente que ETA tuviera algo que ver en las explosiones de Madrid, las narrativas analizadas revelan que buena parte de los militantes de Batasuna y de gente cercana a la izquierda abertzale tuvo dificultades para aceptar la no autoría de ETA³⁸².

Ello condujo a una dislocación de su marco habitual de comprensión de la violencia en el cual se produjo la paradójica situación de condenar un atentado cuando no se condenan otros muchos. Para muchas personas supuso incluso la decisión de acudir a una concentración de rechazo por una acción en Madrid³⁸³. Por ello podríamos decir que en el terreno de la pérdida de aceptabilidad de la violencia, el 11M representa de algún modo un punto de inflexión para el MLNV.

³⁸² Esto se confirmaría en comunicado de ETA al diario Gara y a la ETB el día 12 de Marzo. *Diario El Mundo*. Dossier documentos “11-M masacre en Madrid”.
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/grafico_crono.html

³⁸³ El 12 de Marzo, el País Vasco registró las concentraciones más masivas de su historia. Todos los partidos excepto Batasuna (de forma oficial) acudieron a las convocatorias. *Diario El País*, 12 de Marzo de 2004.

En términos de efectividad, también hay acuerdo en señalar que este acontecimiento hace reevaluar de algún modo las posibilidades de la violencia dentro del MLNV. La acción de Madrid plantea una nueva dimensión de la violencia que se considera, no sólo inalcanzable operativamente, sino con efectividad cero. Se entiende que en el caso de lograr materialmente ejecutar la acción, no tendría efectos políticos, si por ellos se entiende que el Estado negocie proyecto alguno.

“Sí, sí, sí... inalcanzable porque no vas a tener jamás la capacidad militar de hacer unos atentados no indiscriminados que tengan ese impacto en la sociedad española porque claro, después de eso... (...) porque eso era una de las teorizaciones, me he referido antes a la ponencia Oldartzen. Pues que había que generalizar unos dicen la lucha, otros dicen el sufrimiento. Entonces claro, la socialización de sufrimiento se basaba en que dices: "vamos a tensar tanto la cuerda, que al final los propios ciudadanos van a decir hay que parar esto". Pero claro, si alguien tensa la cuerda de un mazazo a ese nivel ¿dónde que te quedas tú? ¿Cómo llevas a cabo eso? Yo creo que todo eso es lo que lleva a que bueno, poco a poco la gente que sigue en Batasuna pues, se esté replanteando la efectividad de la lucha armada.”

[Parlamentario de Aralar]

Hay una percepción importante de que, para el MLNV, ponerse en el espejo de la violencia de Al Qaeda y constatar los límites “políticos” fue un elemento importante en el camino hacia la Declaración de Anoeta (noviembre de 2004) en la cual se proponía pasar a una estrategia de vías estrictamente políticas. De alguna manera, se habría reconocido la necesidad de buscar una salida dialogada cuanto antes. Ello ocurrió de hecho con el proceso de negociación de 2006, que fue percibido casi como una “última oportunidad”. Y sin embargo, los efectos de aquel fallido proceso han sido catastróficos para el MLNV y ampliamente visibles en los últimos años puesto que tal y como se ha evidenciado a lo largo de este trabajo, el contexto post-Atocha no era igual que el contexto post-Lizarra (1998).

El 11-M es un acontecimiento que, junto con las transformaciones que implicó, pone de relieve que las posibilidades “políticas” de la violencia han tocado techo y que no hay espacio ya para la defensa de un proyecto político que comparta algo con los medios o los fines de ETA.

"Hizo falta que los atentados de Madrid, en marzo de 2004, revelaran que no había ya tiempo ni espacio para ETA porque provocaría una repulsa social que ahogaría cualquier espacio político para la izquierda abertzale.

Y ha hecho falta que ésta comprobara que el Estado podría ya arrinconarle, reprimirle y acallarle sin que hubiese acción social que lo impidiese.”
(Idoyaga, 2006: 82)

Por último, en el plano internacional también hay cierto consenso en señalar cómo el 11-M hace al MLNV afrontar directamente la emergencia de una “nueva conciencia colectiva” respecto al terrorismo. Esa constatación que los entrevistados podían ya percibir a partir de los atentados del 11S en Nueva York, se hace visible a nivel europeo el 11 de Marzo. Las Naciones Unidas y la UE emitieron sus correspondientes comunicados de rechazo asumiendo la autoría de ETA, y en ese sentido, el MLNV verificó aquel día el nivel de intolerancia social y política que en el marco internacional se consolidó tras el 11M. Tal y como lo plantea un dirigente del PSE, ese día comienza a pensarse que el terrorismo ha dejado de ser un problema local de una gente que lucha “por medios equivocados” y se comienza a percibir que se trata también de objetivos y fines equivocados. La perspectiva internacional con la que puede comenzar a verse la acción de ETA y la legitimación del MLNV parece ser claramente diferente. En buena medida a ello se atribuye, por parte de los informantes, el modo en que comienzan a partir de entonces a proyectar su imagen en el exterior, a buscar el papel de los mediadores y a presentar un nuevo tipo de estrategia orientada a la “resolución de conflictos”, como si se quisiera romper el cerco, cada vez más estrecho, que se teje sobre ellos en el periodo que transcurre entre el 11-S y el 11M.

A la luz de esta crónica hecha a partir de las conversaciones con actores e informantes, se ha podido desentrañar el modo en que se comprende el 11-M en el universo de la “violencia vasca”. A partir de lo recogido aquí y en otros pasajes de este trabajo, podemos hablar de alguna manera en términos de un “acontecimiento transformador” en el desarrollo del conflicto y de la violencia en el País Vasco. Lo es por sus consecuencias y lo es porque así lo reconstruyen los principales actores implicados. Pero se puede interpretar así en la medida en que se superaron determinados umbrales de violencia que modificaron la acción y la estrategia a medio plazo del MLNV. Si retomamos la teoría de los acontecimientos de Sewell, podríamos poner de manifiesto algunos aspectos que convierten este hecho, limitado con propósitos analíticos al ámbito de su significación en el conflicto vasco, en transformador.

Los acontecimientos modifican estructuras en la medida en que, tal y como vimos en el capítulo quinto, el 11-M supuso una reorientación institucional importante en lo que respecta a las políticas antiterroristas y de seguridad. A partir de lo narrado

aquí podemos constatar también que se reconfiguran las prácticas discursivas en torno a la violencia, a su efectividad y a su legitimidad.

Los acontecimientos son transformaciones culturales que se convierten en “actos de significación” porque introducen nuevos significados en lo que realmente existe. En las narraciones recogidas en estas páginas se ha dado cuenta de cómo las explosiones del 11M generan un nuevo significado de la violencia y se convierten en el espejo en el que se comprende y se compara la violencia de ETA.

Los acontecimientos están perfilados por condiciones particulares. En este sentido, las condiciones culturales locales en las que se produjo el 11-M, como la persistencia de ETA tras treinta años de democracia, el proceso de deslegitimación de la violencia de ETA visible en la última década, o el propio protagonismo del terrorismo en la campaña electoral de 2004, que estaba en sus últimos días, condicionaron en buena medida el marco con el que se comprendía la “nueva violencia”. Dichas condiciones dieron forma al modo en que se elaboró narrativamente el episodio.

Los acontecimientos son momentos de incremento desmesurado de las emociones y es precisamente en el ámbito de lo emocional, donde se sitúa el punto de partida de la reconstrucción que se hace del mismo, tal y como hemos visto en las entrevistas. Finalmente los acontecimientos son momentos de creatividad colectiva: aquel día se elaboraron nuevos discursos, se generaron improvisaciones y circularon nuevas ideas. En definitiva, ocurrieron cosas que no se habían producido antes, como la declaración de rechazo y condena hecha con premura por el dirigente de Batasuna en la mañana del 11.

Así concebido, se puede subrayar el carácter transformador del 11-M en el marco del conflicto vasco. Dicho episodio es no sólo revelador de la saturación de un umbral de tolerancia social y política a la violencia, sino que, al ser un acontecimiento global, revela el carácter “*glocal*” de las dinámicas de transformación respecto a lo tolerable y lo intolerable de un tipo concreto de violencia: la violencia terrorista.

PARTE III: ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO GLOBAL

CAPÍTULO 8

RECONFIGURACIÓN DE ACTORES Y ESTRATEGIAS

(1998-2010)

Tal y como se ha defendido en el plano teórico en este trabajo, los medios de acción que cada organización puede o está dispuesta a poner en marcha para lograr objetivos políticos se encuentran atravesados por un marco de oportunidades que, siendo de carácter estructural o institucional -las llamadas “oportunidades estables” (Della Porta, 1995, Kriesi, 1999), tiene también una dimensión cultural o ideológica. Una dimensión que afecta al nivel cognitivo y discursivo de la acción. Así, lo que se puede o no se puede hacer, estaría determinado tanto por la estructura legislativa como por el universo simbólico y los marcos con los que se entiende dicha acción. En este sentido, y dada la relevancia adquirida por el universo simbólico de la violencia-no violencia en los últimos años, es fundamental atender tanto al contexto institucional de la “deslegitimación de la violencia” como al nivel discursivo y al modo en que ambos han afectado a la acción de los distintos actores.

Por otro lado, hemos defendido también que el marco de oportunidades estaría hoy atravesado por elementos del contexto global que, ya sean de carácter institucional, o de carácter cultural, afectan al modo en que se configura, estableciendo un escenario “distinto” en el que los actores se mueven y tratan de acomodarse.

En páginas anteriores he puesto de manifiesto algunos aspectos que revelan un proceso de transformación en la legitimidad de la violencia, así como la medida en que dicho proceso se puede vincular a cambios en el escenario internacional. Se ha aportado evidencia de una modificación en los umbrales de violencia tolerada en relación con factores internos y externos al conflicto pero, sobre todo, se ha puesto de relieve una relación inversa entre los niveles de tolerancia a la violencia de ETA y los niveles de respaldo a las políticas antiterroristas de “ley y orden”, cada vez más duras. Ello ha permitido hablar de un cierre de oportunidades estables para la violencia directamente relacionado con las transformaciones sufridas en el marco de la política antiterrorista y, a la vez, ha permitido argumentar sobre la existencia de un universo discursivo que,

centrado en binomio violencia-no violencia, ha alcanzado también el ámbito de los fines políticos del nacionalismo.

A la luz de dichos hallazgos, debemos recoger aquí un análisis de las dinámicas seguidas por los actores fundamentales en los últimos diez años en la medida en que, si bien hemos podido escuchar “lo que piensan” y el modo en que enmarcan los cambios en el periodo 1998-2010, deberíamos tratar de comprobar en qué medida esto ha sido o es consistente con la estrategias seguidas. Esto permitiría plantear algún tipo de influencia sobre su acción y establecer, a partir de la hipótesis que guía esta sección, que el universo de oportunidades afecta a todos por igual y cada uno acomoda sus estrategias en función de dicho contexto.

Por lo tanto, esta sección está dedicada a recoger las distintas trayectorias estratégicas seguidas por el conjunto de actores con el que hemos venido trabajando y que, aunque no son todos los implicados, sí son los fundamentales en el proceso analizado. Por ello recogerá umbrales y procesos y hará una descripción analítica de la evolución estratégica de los actores desde los episodios de Ermua (1997) hasta el año 2010, asumiendo que el binomio violencia-no violencia ha estado en la base de dichos cambios.

Para empezar, y en lo que respecta a la estrategia de ETA, la evolución seguida en la última década parece responder a las condiciones tanto internas como externas a la organización, pero, en todo caso, éstas están influidas por el cierre de oportunidades que se deriva de la alta capacidad de represión del Estado, de su colaboración con otros agentes del ámbito internacional y por el propio proceso de pérdida de aceptación social y consiguiente falta de apoyos sociales. Junto con dicha evolución, se abordará también el desarrollo del MLNV. Su trayectoria se considera central en los últimos años en la medida en que ha transformado su estrategia de una forma clara, atendiendo al panorama político de oportunidades estables y volátiles; es decir, reaccionando ante un claro cierre de posibilidades a nivel nacional e internacional que le han conducido a una reevaluación de la estrategia a seguir.

En segundo lugar, se recogerá la trayectoria de los movimientos por la paz en el País Vasco quienes, habiendo tenido un papel fundamental a lo largo de los años noventa, parecen haber sufrido un proceso de desmovilización importante que, si bien no ha implicado su desaparición, sí ha supuesto una cierta invisibilidad de sus acciones o la reconversión de las mismas hacia nuevos planteamientos.

Por último, se analizará el papel del llamado movimiento cívico-constitucionalista que, como vimos, se ha articulado en torno a organizaciones de víctimas de ETA y organizaciones de defensa del marco constitucional. Éstas se han movido a lo largo de esta década entre niveles de altísima movilización (como el periodo 2004-2008) y la práctica invisibilidad, lo cual evidencia, como veremos, el modo en que acomodan su estrategia en función de los cambios en las políticas antiterroristas.

En todo caso, y antes de entrar a considerar las diferentes trayectorias, hay que señalar algunos procesos fundamentales que tienen lugar en el periodo 1998- 2010 y que, si bien han sido recogidos en páginas anteriores, son relevantes como antecedentes. Por plantearlo de un modo muy resumido, el periodo analizado comienza con los sucesos de Ermua (1997), y continúa con el acuerdo Lizarra-Estella, la tregua de ETA (1999) y la negociación del gobierno del PP. Todos ellos son experiencias fundamentales de aprendizaje político para la mayoría de las organizaciones, que van a determinar en buena medida sus estrategias futuras. En todo caso, tanto el proceso de la “deslegitimación social” del terrorismo como los inicios de la política antiterrorista de “tolerancia cero”, o el propio proceso de pérdida de efectividad y de apoyo social de la violencia dentro del MLNV, representan hitos importantes.

8.1. ETA y el MLNV sin horizonte político: entre la actividad, la tregua y el aislamiento

La teorización de la “socialización del sufrimiento” (violencia de alta intensidad y ampliación del círculo de victimización) tensó la cuerda, como postulaba la ponencia *Oldartzen* (1994) hasta umbrales intolerables en 1997. Tal y como evidenciaron los sucesos de Ermua (1997), ello se convirtió en un cataclismo para ETA, pero también para su comunidad sociológica de referencia.

Lo que ETA obtuvo después de Ermua fue la encarcelación por sentencia del Tribunal Supremo de todos los miembros de la Mesa Nacional de HB, el cierre del diario *Egin*, y la visibilización del “espíritu de Ermua” en el espacio público de un modo cada vez más llamativo. Además, la emergencia de un escenario de “bloques” (constitucionalista /nacionalista), enfrentados de una manera clara por el tratamiento de la violencia y el terrorismo, dio lugar a una situación de ruptura de los consensos PSE-PNV, que habían hecho posible la gobernabilidad del la CAV. En el otoño de 1998 se generó una dinámica de “acumulación” de fuerzas nacionalistas para impulsar el

proyecto de soberanía que cristalizó, por un lado en el Acuerdo de Lizarra y, por otro, en la declaración de tregua “indefinida y sin condiciones” por parte de ETA, todo ello previo a las elecciones al Parlamento Vasco que se celebraron en octubre de 1998.

En este contexto, tuvo lugar la creación de un espacio electoral, *Euskal Herritarrok*, que surgió como coalición de reagrupación de la izquierda abertzale para la acción política. Esta corriente de cooperación política agrupó a miembros de *HB*, *Batzarre* y *Zutik* en una clara apuesta de acumulación, que pretendía copiar el proceso de pacificación en el Ulster. Lizarra generó mucho optimismo en el mundo nacionalista. En la izquierda abertzale se promovió, especialmente, la sensación de que el logro de una “salida dialogada del conflicto” era posible.

Lizarra (1998) representa muchas cosas en el universo del conflicto vasco y, en concreto con respecto al tema de la violencia: supone un momento de incremento de expectativas para la izquierda abertzale de pasar a “otra fase” en el proyecto soberanista, constatado ya cierto hartazgo social y de pérdida de efectividad de la violencia. Por esta razón, la ruptura de la tregua declarada por ETA en noviembre de 1999³⁸⁴, por un lado, y el final del proceso Lizarra, por otro, supusieron una importante pérdida de base social para la izquierda abertzale, la evidencia del difícil encaje que el proyecto soberanista tenía con la violencia de ETA (por la identificación progresiva de medios y fines), la consolidación de determinadas organizaciones sociales como “actores” influyentes (Aralar o las organizaciones de víctimas), o la desmovilización de las organizaciones pacifistas, bien por la campaña de rechazo por parte del bloque constitucionalista, bien por el propio fin de un proceso de diálogo.

Dentro de la familia *abertzale* se produjeron escisiones importantes. *Zutik* y *Batzarre*, grupos integrados en EH pero independientes de HB y contrarios a la vía armada, así como un gran número de gente que se había sumado a la misma, abandonaron la coalición. La escisión de Aralar en 2001 sería su consecuencia más visible. En las elecciones autonómicas de 2001 el voto de EH descendió al 10, 12% (casi 80.000 votos menos) y el número de escaños pasó de 14 a 7. *“La ruptura de la tregua de ETA, al año y poco de haberla dictado en el entorno del Pacto de Lizarra en otoño de 1998, fue un salto al vacío de tal magnitud que sólo dejó posible una forma de continuidad para ETA: devorar a la izquierda abertzale como movimiento sociopolítico por hacerla caminar bajo su sombra. El fenómeno no era totalmente nuevo, venía de*

³⁸⁴ *Diario Gara*, 28 de Noviembre de 1999.

antes y la respuesta social contra el asesinato de M. A Blanco lo había mostrado con bastante claridad. Pero fue esa ruptura de la tregua lo que lo catapultó." (Idoyaga, 2006:82).

Conviene recordar que ETA rompió la tregua en noviembre de 1999 y retornaría a su actividad en Enero del año 2000, finalizando ese año con un total de 23 víctimas, entre ellos el de uno de los fundadores del Foro de Ermua. La tregua había estado caracterizada, por un lado, por la constitución de un frente nacionalista que impulsó la vía del diálogo y por la actitud positiva del gobierno Aznar a entablar contactos en el “entorno político” de ETA. Ello se vio, además, facilitado por el apoyo del partido en la oposición (PSOE) y la mayoría de la Cámara que accedió a la flexibilización de la política penitenciaria y al acercamiento de presos. Con todo, se contabilizaron un total de 387 acciones de *kale borroka* durante los meses de septiembre de 1998 a noviembre de 1999³⁸⁵.

En todo caso, y respecto a la actividad de ETA, a pesar de la ruptura de la tregua, que indicaba una clara voluntad de mantener la violencia, nunca más volvería a los niveles de los años noventa y menos aún de los años ochenta. Desde el año 2000 su actividad ha ido descendiendo significativamente con importantes periodos de inactividad³⁸⁶. Si bien tras la tregua se retomó un año de intensa actividad (23 víctimas), ésta descendió a 5 víctimas en 2002. En todo caso, ETA realizó atentados mortales hasta mayo del 2003.

El periodo 2004- 2006, un tiempo de llamativa resonancia pública del terrorismo debido a las consecuencias del 11-S, la campaña “contra el terror” en Irak y su impacto mundial, o al impacto del propio 11-M, estuvo exento de actividad y, por tanto, de víctimas, a excepción de las dos sufridas en el atentado de la T4 que puso fin al proceso de 2006. Pero resulta fundamental atender al hecho de que durante el periodo 1998-2010 ETA acabó con la vida de 56 personas, aproximadamente un tercio menos que en años anteriores. En todo caso, y a lo largo de toda la década hasta la declaración de tregua en 2011, ha mantenido su actividad en el plano logístico (provisión de infraestructuras) por la vía el robo o la extorsión, así como la práctica del cobro del

³⁸⁵ Ello suponía, sin duda, un descenso de la actividad respecto a años anteriores pero, en todo caso, subrayaba el recurso a una estrategia de “baja intensidad” que implicaba factor de desestabilización importante para el proceso. Datos del centro de análisis y prospección de la Guardia Civil: <http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/organosdeapoyo/gabinete/cap/nota02.jsp>

³⁸⁶ Se pueden encontrar datos y tablas con mayor detalle en el anexo.

llamado “impuesto revolucionario”. Pero también ha proseguido hasta muy recientemente con lo que se denomina “violencia de persecución” (amenazas, pintadas y la práctica de la *kale borroka*).

El estado de precariedad de la organización en los últimos años ha sido especialmente llamativo. Por un lado, los resultados de la “lucha antiterrorista” ponen de manifiesto una altísima capacidad del Estado que es inversamente proporcional a la operatividad de ETA. Entre 2000 y 2003 se practicaron en España un total de 459 detenciones de supuestos miembros o colaboradores de ETA³⁸⁷. En las dos legislaturas del gobierno socialista 2004-2011, dicha cifra ascendió a un total de 804. Eso genera un total de 1263 detenciones entre la ruptura de la tregua (2006) y 2011. Por otro lado, la imagen proyectada por los medios sobre la situación de la organización, ya responda a una estrategia mediática³⁸⁸, ya a la propia realidad de la organización, transmitían una clara desorganización, la falta de infraestructura y liderazgo, la limitación en las condiciones de seguridad, y la desideologización, cuando no auténtica precariedad.

Hoy se puede especular con la idea de que ETA, como organización, vive fundamentalmente en las cárceles españolas y francesas³⁸⁹. Es difícil conocer datos sobre su capacidad de reclutamiento en los últimos años, y es muy posible que los cada vez más altos costes individuales que supone pasar a la clandestinidad y unirse a la organización hayan dificultado dicho proceso. Pero tampoco se puede despreciar la capacidad de adhesión afectiva que ETA ha generado históricamente en sus entornos políticos ni la continuación generacional que muy a menudo tiene el reclutamiento.

En esta situación de debilidad importante llega ETA al proceso de 2006 con el peso de la pérdida de su base social y de un contexto poco favorable a este tipo de procesos de negociación. Este periodo estuvo marcado por un importante debate interno abierto en el seno de la organización entre sectores continuistas y otros que estaban por el abandono de la violencia y en el que, finalmente, se impuso el continuismo (Azpeiolea, 2011).

³⁸⁷ Es importante señalar que la categoría de “colaboración” se ha dilatado tanto que muchas de estas detenciones, que a menudo conducen a la prisión preventiva, no se traducen, sin embargo, en sentencias condenatorias.

³⁸⁸ “*Las torpezas del 'comando Facebook'*”. Diario El Mundo, 06/02/2010; “*Detenido en Irún un presunto etarra cuando iba a renovar el DNI*”. Diario El País, 12/12/2007.

³⁸⁹ En el año 2002 el número de presos de ETA en las cárceles españolas ascendió a 650 y, al finalizar 2004, llegó a 719 (Mata López, 2004). No ha sido posible encontrar datos disponibles para actualizar estas cifras.

Pero el contexto de Lizarra no era el de Loyola (post Atocha 11-M). Muchos veían en este la última esperanza de encontrar una “salida dialogada”. Y si la ruptura de Lizarra significó un cataclismo para ETA, la ruptura de la T4 parece haber supuesto un conflicto sin precedentes con su comunidad de referencia. A partir del proceso de Lizarra y de la tregua de 1999, la izquierda abertzale seguía siendo el núcleo sociológico más numeroso de la izquierda vasca y, en un escenario sin ETA, recuperaba su capacidad de iniciativa política. Ya hemos señalado en qué medida dicho proceso supuso un incremento de las expectativas y de la movilización social a favor de la “salida dialogada”³⁹⁰.

De un análisis evolutivo de la trama interna del MLNV se desprende un tejido cohesionado, cerrado y dirigido férreamente desde la vanguardia hasta finales de los 90, pasando a la eclosión de una multitud de organizaciones, asambleas, grupos, partidos y formaciones de todo tipo coincidiendo con la tregua del 99 y la formación de *Euskal Herritarok*. Sin embargo, la ruptura de Lizarra lleva a las escisiones de *Aralar* y *Abertzaleen Batasuna*, el alejamiento de *Batzarre* y *Zutik* y de otros grupos que otorgaban cierto aire de pluralidad al movimiento. A partir de aquí se puede hablar del desmoronamiento de la influencia de los grupos periféricos al núcleo del MLNV (Mata, 2006).

ETA ha pasado por muchas fases, crisis y rupturas internas, pero todas ellas han acabado en el cierre de filas; en el reagrupamiento del MLNV en torno a la organización armada. Por otro lado, el carácter sociopolítico de la izquierda abertzale y su histórica capacidad para absorber múltiples ámbitos de la vida social, ha permitido que, incluso en los tiempos de las ilegalizaciones, haya mantenido una notable presencia pública (Mata López, 2004)³⁹¹.

Como tuvimos la ocasión de exponer en el capítulo anterior, El 11 de marzo de 2004, diez explosiones de bombas puestas por comandos *jihadistas* en trenes de pasajeros de Madrid provocaron una matanza. El gobierno Aznar mantuvo, contra todos los datos, que la autoría remitía a ETA, y las reacciones a dicho episodio se han revelado como un indicador de la necesidad de un cambio de estrategia. La izquierda

³⁹⁰ *El manifiesto de Zaramaga*, firmado en 2000 por 600 personalidades del mundo de los movimientos sociales en el País Vasco, intelectuales, etc. trató de impulsar de nuevo un proceso en el que, aun rota la tregua, se tenían grandes esperanzas.

³⁹¹ Mata plantea que la continua y sistemática ilegalización de grupos como resultado de la nueva política antiterrorista ha conducido al propio movimiento a reconocer su debilidad.

abertzale -y mucho más ETA- continuaban sin apoyo social y fuera del juego político (Idoyaga, 2006: 54).

No se puede establecer causalmente un vínculo, pero es evidente que el camino hacia el acto en el velódromo de Anoeta en noviembre de 2004 estuvo radicalmente atravesado por al menos tres constataciones: 1) la pérdida de apoyo social de la estrategia armada dentro y fuera del propio MLNV, 2) el aislamiento político en relación con la política de ilegalizaciones, y 3) el efecto “transformador” del 11-M en el marco del cálculo efectividad-legitimidad de la violencia. *"La Propuesta de Anoeta representa a quienes en la izquierda abertzale y en la propia ETA consideraban ya que la lucha armada era incapaz de enfrentarse a la eficacia del Estado, era un obstáculo para consolidar un movimiento soberanista plural era, también, un freno para desarrollar una perspectiva de la izquierda social y era, en fin, un lastre para que la izquierda abertzale ampliara su iniciativa política."* (Idoyaga, 2006: 54).

Así llegó el MLNV al proceso negociador del año 2006. Si atendemos a los resultados del Euskobarómetro (2010), la suma de quienes manifiestan puro y total rechazo a ETA, de quienes comparten fines pero no medios y de los que “antes apoyaban pero ahora no” asciende al 90% de los entrevistados. Es obvio, por tanto, que el fin de la violencia de ETA es algo mayoritariamente deseado incluso dentro de la izquierda abertzale. Y, sin embargo, otra cosa es que este sentimiento logre penetrar en el núcleo más duro del MLNV (Idoyaga, 2009). Ello no ha ocurrido nunca y es difícil que vaya a ocurrir, por la propia inercia de una legitimación histórica y afectiva en el seno del mundo abertzale.

Pero ETA sabe que su acción genera una situación de aislamiento de Batasuna y, por otro lado, no asume que su capacidad para reclutar y regenerarse disminuye proporcionalmente al nivel en que aumenta el coste político que su actividad representa para el gobierno. En definitiva, no acepta que la creciente falta de respuesta social en el País Vasco hacia la política de los últimos años contra Batasuna, y la indiferencia o empatía en el resto de la sociedad española, son dos factores que pesan enormemente en los últimos años sobre su propia estrategia (Idoyaga, 2009).

Las principales dificultades con las que se encuentra el MLNV están asociadas a sus vínculos organizativos con ETA, a la constatación de una división importante en la familia abertzale, la cada vez más eficaz y selectiva represión y colaboración de otros

países tras el 11S³⁹², y los problemas para justificar la violencia. Pero su retroceso electoral también está relacionado al aislamiento impuesto por el acoso ideológico y comunicativo y a la progresiva “normalización” y falta de resistencia a su ilegalización.

Todo ello se ha traducido en la desmovilización, la limitación de su poder al ámbito más local y la ruptura política y discursiva con el resto de la familia nacionalista (Mata López, 2004). En dichas condiciones, la búsqueda de una nueva estrategia del MLNV parece haber estado orientada hacia un desmarque calculado de la estrategia de ETA, progresivo y difuso, tratando de acoger a la mayor base social de la izquierda abertzale posible. En ese proceso, se abre a partir de 2008 un intenso debate interno de la izquierda abertzale que, contando con el papel “facilitador” de agentes internacionales, cristaliza en 2010 en el documento “*Zutik! Euskal Herria*”. Con él se respalda mayoritariamente una nueva estrategia basada en el uso “exclusivo” de las vías pacíficas y democráticas, y se exige la ausencia de violencia(s) que permita impulsar el proyecto soberanista en el País Vasco.

En la configuración de esta nueva estrategia ha sido relevante tanto la proyección de la misma hacia el entorno exterior, como la propia implicación de agentes internacionales (facilitadores como el abogado sudafricano B. Currin, asesores como el líder irlandés del Sinn Féinn, Gerry Adams o el apoyo de los firmantes de la *Declaración de Bruselas*). Por otro lado, esta estrategia pretende de nuevo emular el proceso irlandés de Stormont, basando parte de su acción en los *Principios Mitchell*³⁹³.

Lo aquí expuesto ha evidenciado que el MLNV parece haber acomodado o redefinido su estrategia en la última década a partir de la constatación de la no efectividad de la vía armada, la pérdida de apoyo social que concita, el aislamiento político al que es sometido en virtud de las políticas gubernamentales y, finalmente, pero no por ello menos relevante, al rechazo internacional que concita la violencia de cara a una proyección de proyectos políticos soberanistas o independentistas.

³⁹²El clima internacional y el éxito del proceso del Ulster dejan al MLNV como los “últimos indios de Europa”. Esta expresión, que emplea A. Otegi en su intervención en *La Pelota Vasca* (2003) para referir el carácter excepcional de la cultura vasca y de su defensa por parte del MLNV, es más que representativa del estado en el que se encuentra el MLNV al finalizar la década del 2000.

³⁹³ Hoja de Ruta del senador de los EEUU R. Mitchell en su papel de mediación en el proceso del Ulster.

8. 2 Movilización del Constitucionalismo y las víctimas: No negociación en mi nombre

Los sucesos de Ermua, junto con el proceso de Lizarra, configuran también el marco en el que surgen nuevos actores que, gradualmente, fueron adoptando un papel protagonista en la evolución del conflicto. No sólo por su rechazo a la violencia de ETA sino por la presentación de un marco ciertamente novedoso de atribución de responsabilidades políticas al nacionalismo en su conjunto por la persistencia de la violencia. Así, la progresiva identificación entre nacionalismo y terrorismo va a tener en este movimiento su máximo exponente. El “bloque constitucionalista”, compuesto de múltiples organizaciones sociales pero también de los principales partidos de ámbito nacional (PP-PSOE), emerge y establece en buena medida su agenda a partir de aquellos episodios. La corriente se forma en torno al liderazgo de una organización, el *Foro de Ermua*, que inicialmente reúne a un conjunto destacado de intelectuales para, después, ir aglutinando a otras plataformas e iniciativas ciudadanas (*Basta Ya*, *Foro Salvador*, *Fundación para la Libertad*, y organizaciones de víctimas-COVITE, AVT, *Fundación Miguel Ángel Blanco* o *Fundación Gregorio Ordoñez*).

Para el recién nacido movimiento cívico, los sucesos de Ermua y el proceso de Lizarra revelan un grado intolerable de complacencia del nacionalismo con el terrorismo y, por tanto, la necesidad de unas políticas antiterroristas más duras. Unas políticas que amplíen lo que se entiende como terrorismo para hacer frente a lo que se consideran sus distintas formas de manifestación (violencia callejera o terrorismo de baja intensidad, apología, colaboración, etc.). Por otro lado, en su diagnóstico, Lizarra evidenciaba, por un lado, que los procesos de negociación no tienen sentido porque se concede la interlocución a los terroristas o a quienes se benefician de ellos y, por otro, que el objetivo último del nacionalismo es la independencia y que en este sentido, se estaba avanzando de manera importante en el logro de consensos. Ello suponía una amenaza a la democracia española y al marco constitucional.

El consenso constitucionalista hizo un diagnóstico del terrorismo de ETA en virtud del cual se entiende que la violencia tenía lo que Martín Baró (2003) llama “fondo ideológico”; un conjunto de valores, de creencias e intereses nacionalistas que la respalda y la que la hace “justificable” para una comunidad; y que dicha comunidad era el nacionalismo en su totalidad. Por ello, se establecía una identificación entre medios y fines a partir de la cual era prioritario “combatir” la ideología que hay detrás de la violencia. Por otro lado, entiende que garantizar las condiciones de seguridad para la

ciudadanía es una exigencia que las instituciones han dejado de lado: se ha abandonado a las víctimas del terrorismo, a los amenazados por ETA y a los exiliados por la violencia de ETA, a los que se considera la -nueva- diáspora vasca.

En el diagnóstico aparece claramente la necesidad de “deslegitimar la violencia” que, como vimos, tiene en su versión matizada el imperativo de perseguir todo lo que represente su apoyo, legitimación difusa y adhesión afectiva. La versión más radical, por su parte, plantea la necesidad de rechazar todo proyecto político que pueda ser compartido por ETA: la independencia y el soberanismo, en definitiva. Es a través de esta reacción “activa” como, por un lado, se cuestiona la actividad previa de los movimientos por la paz y, por otro, se reafirma la propia estrategia. Se pretende superar el “pacifismo” como mal ideológico y moral para plantear la defensa del Estado de Derecho -de su fuerza y su capacidad represora-, de las libertades ciudadanas y del modelo de convivencia implantado a partir de la Constitución de 1978, marco que se considera incuestionable.

El nacionalismo (entendido como “fascismo”, “nazismo” o “tiranía identitaria”) es, entonces, el principal problema para resolver el terrorismo en el País Vasco y, en la medida en que se colabora políticamente con él, se perpetúan las instancias de reproducción de la violencia, pues, en todo caso, el nacionalismo constituye el fondo ideológico que la sustenta. Este diagnóstico de identificación entre medios y fines tuvo su máxima difusión e impacto mediático en las elecciones autonómicas del 13 de Mayo de 2001. Éstas se celebraron en un ambiente de altísima crispación política y de confrontación discursiva³⁹⁴ que se evidenciaría en el aumento de la polarización política de los propios resultados electorales (el incremento del voto en los extremos sociológicos en el País Vasco. En concreto del PP y de la entonces coalición abertzale EH).

En la última década, el diagnóstico del movimiento constitucionalista se ha traducido en dos líneas estratégicas de acción en las que, con mayor o menor

³⁹⁴ [Ante las elecciones 13Mayo 2001] “*En la situación de persecución terrorista actual, solo cabe votar desde la ética democrática moderna a las opciones políticas que promuevan la derrota de ETA. Cada voto que sea coherente con la promoción de una Seguridad Pública, dentro del Estado de Derecho y social vigente, tiene que ser para los partidos que se opongan resueltamente al terrorismo en todas sus formas.*” (Teo Santos, en *Papeles de Ermua*, 1).

“*O cada elector demuestra su responsabilidad ante estas elecciones, o permitirá con su pasividad el reforzamiento del nazismo ya instalado en el País Vasco. Nos afecta el futuro a todos. Rebelión: o se evita el ascenso del nacionalismo votando democracia y libertad amparadas por la Constitución o habrá que prepararse a soportar o exiliarse ante el proyecto de balcanización que los nacionalistas prepararon en el pacto de Estella*” (Nicolás Redondo Terreros, en *Papeles de Ermua*, 1).

intensidad, se ha venido trabajando: por un lado, en la oposición a cualquier tipo de proceso negociador que implique conceder interlocución a ETA o a su mundo de legitimación (la izquierda abertzale); por otro, en la defensa a ultranza de un fortalecimiento del Estado de Derecho como instrumento para combatir el terrorismo.

Dos aspectos fundamentales de su argumento han sido, en primer lugar, la idea de la “democracia militante”, de que el Estado tiene que defenderse de proyectos totalitarios y que, tomando como referencia a otros países, justifica plenamente el derecho del Estado constitucional español a establecer los mecanismos para anular los proyectos cuyos fines puedan amenazar la democracia. En segundo lugar, la “vigilancia del Pacto Antiterrorista”, reaccionando contundentemente cuando se ha considerado que éste no se cumplía y trabajando para el desarrollo del mismo: la tolerancia cero o la aplicación estricta de la ley, la no negociación, la colaboración y la proyección internacional de la estrategia antiterrorista. Estas líneas de trabajo llevaron inicialmente a la defensa intelectual y mediática, pero también por la vía de las movilizaciones, de unas políticas antiterroristas más duras para acabar con los “espacios de impunidad” y la tolerancia que se percibían en relación a los ámbitos de legitimación y apología de la violencia.

Así, las organizaciones del “espíritu de Ermua” se alinearon con el consenso del Pacto Antiterrorista e hicieron de él, en buena medida, su banderín político, trabajando por el endurecimiento y la justificación de los cambios legislativos al principio de la década: la reforma de la ley del menor, y la LOPP, de la que se elaboró una argumentación muy fuerte como instrumento de defensa de la democracia y de los derechos.

Tres fueron los medios fundamentales a través de los cuales han venido trabajando por sus demandas las organizaciones del movimiento constitucionalista:

- Un trabajo de escasa visibilidad pero de impacto importante en el ámbito judicial. Así, la labor de personación y acusación popular en juicios y macro-juicios vinculados al terrorismo, pero fundamentalmente, a las cuestiones más novedosas de colaboración o enaltecimiento, ha sido una de sus más prolíficos ámbitos de acción. La asociación *Dignidad y Justicia* o las *Gestoras cívicas del foro de Ermua*, junto con las asociaciones de víctimas, han sido las organizaciones que más presentes han estado en la mayoría de los procesos judiciales al “entorno” de ETA en los últimos años³⁹⁵.

³⁹⁵ Entre otros el Sumario 18/98, el caso Egunkaria, y el Macro Sumario Jarrai-Haika-Segi.

- Un importante y prolífico trabajo de reflexión, difusión y pedagogía social con la idea de la deslegitimación social y política de la violencia³⁹⁶. En esta dimensión, el movimiento hizo una interesante labor de proyección internacional tratando de presentar una “visión” alternativa del problema del País Vasco (en términos de persecución y fascismo identitario, y de amenaza al orden constitucional de una democracia consolidada) por la vía de la presión a las instituciones internacionales para la obtención de declaraciones de apoyo y colaboración³⁹⁷.

- Finalmente, el movimiento recurrió de forma coyuntural, pero notable, a la movilización en la calle (manifestaciones, marchas, concentraciones...), mostrando una alta capacidad de movilización cuando consideraba que se estaban excediendo los límites del consenso antiterrorista, del que, en todo caso, se sintió valedor. Así, en la legislatura 2004-2008 desarrolló un altísimo nivel de acción de protesta frente al gobierno del PSOE en relación con el proceso negociador (público y visible) del gobierno con ETA en Loyola.

En definitiva, el movimiento constitucionalista mostró en la última década una alta movilización en la exigencia de políticas de seguridad y antiterroristas más duras (con un marco de ley y orden), una activa movilización en defensa de la LOPP y un trabajo importante de producción intelectual y pedagógica en relación con la “deslegitimación política de la violencia”. Dirigió su estrategia, además, hacia el ámbito de la acción judicial en la medida en que su diagnóstico de “democracia combativa” pautaba una acción muy centrada en la aplicación y el endurecimiento de la ley.

Finalmente, planteó una proyección internacional de su actividad revelando una evaluación estratégica importante del contexto en el que históricamente se ha difundido la visión “antagónica” del nacionalismo sobre el problema en el País Vasco. En esta acción, el movimiento constitucionalista supo aprovechar las oportunidades del contexto internacional y las transformaciones de éste en el marco de la *guerra contra el terror*, desarrollando un discurso de “igualación de los terrorismos” en el contexto internacional y de aquéllos como principales amenazas de la democracia.

³⁹⁶ Una mirada rápida a la página web del *Foro de Ermua* o de la asociación *Dignidad y Justicia* revela una ingente labor de redacción y difusión de todo tipo de material “intelectual” en torno a los argumentos centrales del movimiento: la deslegitimación política del terrorismo.

³⁹⁷ “El Foro de Ermua denuncia en Estrasburgo el deterioro de la democracia en Euskadi”. Diario “El País”, 18/02/2000; ¡Basta Ya! recibe el Premio Sajarov del Parlamento Europeo. Diario “El País”, 07/05/2003.

8. 3 Los movimientos por la paz: entre la invisibilización y la mediación.

Como ya señalamos en el capítulo tercero, mencionar a *Gesto por la paz* y a *Elkarri* no es hablar del “movimiento por la paz” y, sin embargo, dichas organizaciones fueron protagonistas fundamentales de la reivindicación y movilización contra la violencia y, por tanto, precursoras en la deslegitimación de la misma. Tratar su declive puede ser arriesgado en la medida en que las organizaciones por la paz en el País Vasco no han desaparecido en absoluto. Pero su actividad sí se ha visto, en cierto modo, invisibilizada por la entrada en escena, en la última década, del movimiento constitucionalista (construido en una lógica de oposición o rechazo de las iniciativas de carácter pacifista), y porque el propio desarrollo del conflicto en ese periodo hizo que se transformaran y acomodaran sus estrategias.

Lizarra (1998) es también un punto de inflexión para estas organizaciones, en la medida en que, hasta la eclosión del boque constitucionalista surgido en Ermua, ellas eran las organizaciones protagonistas del rechazo a la violencia. Pero los cambios discursivos señalados en relación con la construcción y movilización del consenso constitucionalista (Klandermans, 1997) tuvieron también efectos sobre organizaciones que eran pioneras en el rechazo social a la violencia. Por otro lado, la gestión gubernamental de la cuestión ETA y el consenso ideológico en torno al Pacto Antiterrorista, con el consecuente rechazo a dinámicas negociadoras, si bien no se han cumplido al pie de la letra, sí han contribuido a restar protagonismo a organizaciones que, como Elkarri en los noventa, trabajaban por fomentar el diálogo y abrir cauces de negociación.

Gesto, como vimos en el capítulo tercero, había tenido un papel protagonista en el rechazo progresivo a la violencia dentro de la sociedad civil; en lo que se llamó la “salida del silencio” (Funes, 1998). Partiendo de la consideración de que existía una constelación visible de violencias, se había venido oponiendo, por la vía de la movilización silenciosa y la ocupación del espacio público, a los actos de violencia que ocurrían en el marco del “conflicto vasco”. En el caso de Elkarri, su dinámica de búsqueda del diálogo y la pacificación lo había conducido a una estrategia más de mediación y de pedagogía social.

En cualquiera de los dos casos, su actividad tuvo una importancia sustantiva en la generación del clima que condujo a la emergencia del espíritu de Ermua en 1997. Y

sin embargo, ambas organizaciones, pero particularmente *Gesto*³⁹⁸, fueron enormemente criticadas por el bloque constitucionalista en relación a su supuesta “pasividad” con la violencia etarra. *Gesto* era vista por los sectores más duros de aquél como organización nacionalista y legitimadora de la idea de “las dos violencias” y, por lo tanto, de la “motivación política” del terrorismo.

Gesto por la paz: de la movilización en la calle a la pedagogía impresa.

La principal consecuencia del “espíritu de Ermua” y del proceso de Lizarra (1998) para *Gesto por la Paz* fue el rechazo frontal que, en términos ideológicos, le impuso el bloque constitucionalista desde el primer momento. Si, como organización, *Gesto* se había sentido muy cómoda y, en general, bien tratada por los medios de comunicación bajo el consenso de Ajuria Enea, roto éste y fracturada la política vasca en términos de nacionalismo-no nacionalismo, su actividad comenzó a ser vista bajo sospecha por el entonces emergente consenso constitucionalista y el importante peso que la prensa nacional le concedió (Cotarelo, 2004).

Su cosmovisión del conflicto y los presupuestos doctrinales de su acción (basada en el pacifismo gahndiano), fueron fuertemente criticados en la medida en que implicaban una forma de resistencia pasiva y de invisibilización de los factores subyacentes al terrorismo (lo que después se llamaría “deslegitimación de la violencia”). El consenso constitucionalista establecía que había que combatir el “fondo ideológico” de la violencia, la ideología que hay detrás de la misma. Y ello llevaba a una identificación de las organizaciones afines al nacionalismo con las ideas de ambigüedad y pasividad. A partir de aquí se cuestionó la actividad de *Gesto* en términos doctrinales (a partir del rechazo a los conceptos de “paz”, “reconciliación”, “perdón”, “igualación de víctimas y verdugos”, “violencia venga de donde venga”) pero con efectos políticos al establecer que, tras dicho lenguaje, había una estrategia de concesión política al nacionalismo.

A pesar de la fuerte oposición del bloque constitucionalista³⁹⁹ y de haber perdido el favor de los medios de comunicación a nivel nacional, *Gesto* continuó con su actividad en la última década, aunque ya, con un impacto mediático claramente menor. En todo caso, hay que tener en cuenta que parte de la visibilidad de *Gesto* estaba

³⁹⁸ Elkarri, directamente, ha sido considerada siempre por las organizaciones constitucionalistas como una iniciativa promovida por el MLNV para contrarrestar las movilizaciones ciudadanas contra ETA.

³⁹⁹ Véase: Ezkerra (2007); Zubero, (2008)

relacionada con la micro-movilización silenciosa y la práctica de “gestos” llevados a cabo después de cada acción de ETA. En la medida en que la intensidad y la frecuencia de la actividad de la banda terrorista decrecieron significativamente a lo largo de la década del 2000, la movilización de *Gesto* está menos presente. Si las concentraciones silenciosas y los “gestos” dejaron de protagonizar las movilizaciones en el País Vasco, debemos señalar el hecho de que la coordinadora mantuvo su actividad centrada en dos ámbitos: continuó el trabajo de reflexión intelectual y difusión pedagógica a través, fundamentalmente, de su publicación *Bake Hitzak*, pero también por medio de la organización de coloquios y seminarios. En el marco de dicha reflexión, trabajó extensamente desde el 2001 en torno a la idea de la “deslegitimación” de la violencia y en la denuncia de la *violencia de persecución*⁴⁰⁰. Además, orientó su labor pedagógica hacia la solidaridad con las víctimas y la reivindicación de su reconocimiento⁴⁰¹. Finalmente, se llevó a cabo una labor de reflexión y difusión de la argumentación - central al ideario de *Gesto*- de la necesidad de separar la idea de “conflicto político” en el País Vasco (inherente a toda sociedad) del conflicto que se genera por la acción terrorista. Por otro lado, *Gesto por la Paz* mantuvo activa su base social por la vía de la convocatoria ocasional de manifestaciones o la adhesión a otras convocatorias, siempre en relación con la búsqueda de la paz y la muestra del rechazo a la violencia.

En todo caso, es relevante destacar que esta organización fue siempre (y aún hoy es) muy vigilante con la acción del Estado y, en este sentido, ha sido una de las que, siendo respetuosa y favorable a los cambios en la política antiterrorista de la última década, fue a la vez crítica con lo que se han considerado excesos del Estado de Derecho.

Gesto es una organización que se ha mantenido, a pesar de las críticas, en la filosofía de la no violencia (de postular la “ausencia de violencia(s)”). Y en esta lógica denunció sistemáticamente la forma en que se produjeron las ilegalizaciones de partidos y organizaciones, y la forma (no el fondo) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Fue

⁴⁰⁰ *Gesto* define la *violencia de persecución* como el uso sistemático de la violencia callejera, el acoso, la amenaza o la agresión para señalar, perseguir, hostigar o aislar personas por el hecho de defender sus planteamientos ideológicos. Dicha violencia se considera que ha sido una de las estrategias más recurrentes de ETA en los últimos quince años. Véase: <http://www.gesto.org/pdf/violenciapersecucion.pdf>

⁴⁰¹ Recientemente se han desarrollado trabajos en relación con el reconocimiento de víctimas del Estado; víctimas de la lucha antiterrorista que son denominadas como “las otras víctimas” y en los que se indaga sobre los excesos policiales y judiciales de la lucha antiterrorista. Véase: “las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha antiterrorista”: http://www.gesto.org/prensapdf/11-07-08_Las_otras_victimas.pdf

enormemente crítica con acciones como el cierre del diario *Egunkaria*, o con el mantenimiento de la política de dispersión, por considerarse una vulneración de los derechos humanos.

A modo de balance, se puede decir que si bien la labor de *Gesto* parece menos visible en la última década, y que como ellos mismos reconocen su capacidad de movilización no es la que era en el pasado, esta organización supo acomodarse a las transformaciones recientes haciendo valer su papel histórico en la deslegitimación de la violencia y manteniéndose como difusores de lo que consideran una “cultura de paz”. Pero, a la vez, evidenciaron con su actitud los cambios en la política del Estado, contribuyendo a la labor de “vigilancia” de los posibles excesos de la misma.

Es posible que el efecto más visible de las transformaciones señaladas en páginas anteriores respecto a la legitimidad y la efectividad de la violencia sobre esta organización sea, precisamente, su menor actividad. El trabajo de rechazo a la violencia ya abonó en el pasado el terreno para las transformaciones producidas en la última década y, en este sentido, su menor presencia revela que, bien la demanda social y los esfuerzos movilizadores se han orientado a exigir “más” al Estado, bien el propio cansancio social ha contribuido a la desmovilización de las organizaciones integradas en *Gesto*, bien es la cada vez menor presencia de ETA en la vida sociopolítica vasca la que lleva a una menor percepción social del trabajo de aquéllas.

De todos los actores que tuvieron algún protagonismo en la reciente historia del conflicto vasco, *Gesto* es quizá la organización que mostró un marco de diagnóstico y acción menos proclive a evaluar factores internacionales y, a la vez, se comprueba que no se preocupó por la proyección internacional de su acción -siempre de ámbito local y muy centrada en la “micro-movilización”.

De Elkarri a Lokarri: el “acuerdo y la consulta”

A pesar de lo narrado anteriormente, *Elkarri* se mantuvo a flote a pesar de las transformaciones que se generaron en Lizarra. En los diez años anteriores, *Elkarri* había venido trabajando por la no violencia, el diálogo y los derechos humanos, a partir de una cosmovisión conflictiva de la violencia. Dicha organización había contribuido enormemente tanto a la generación de las condiciones que dieron lugar al proceso de negociación a través del debate político, como a la implicación de agentes internacionales. De hecho, fue uno de los firmantes del pacto de Lizarra, por lo que su ruptura generó un proceso de desmoralización importante entre sus militantes. Con

todo, esta organización se ha consolidado en los últimos diez años como un motor importante en la apertura y mantenimiento de la vía del diálogo en el País Vasco.

Se trata de una organización que, como vimos, parte de una definición conflictiva del “problema vasco” bastante cercana a los postulados de la izquierda abertzale. Ello le ha merecido la descalificación permanente del bloque constitucionalista y, en general, la invisibilidad en los medios de comunicación de implantación estatal.

Pero Elkarri mantuvo muy activa su labor a partir del año 2000 trabajando fundamentalmente en dos sentidos: por un lado, en la generación de condiciones internas para un proceso de diálogo y pacificación. En este sentido, entiende que la resolución del conflicto pasa por el cese de la violencia y por una salida dialogada, “ordenada” en sus propios términos, de la violencia de ETA. Pero dicha salida implicaría también el cese de lo que entiende que es actitud represora del Estado y que, a partir del año 2000, se tradujo en los cambios visibles en la política antiterrorista. La resolución del conflicto conllevaría, además, un diálogo de carácter estrictamente político (materializado en una mesa de partidos), confluyente al logro de un acuerdo para la consulta en relación con la reivindicación histórica del “derecho a decidir”. Ambas dimensiones están inextricablemente unidas, según el diagnóstico de *Elkarri*, aunque, en todo caso, se concede prioridad absoluta al cese de la violencia, que se entiende “recíproca”. Por otro lado, *Elkarri* trabajó también en la generación de condiciones externas para el fin de la violencia y del conflicto. Así, ha desarrollado con tesón una labor de configuración de una importante red internacional de apoyo y “facilitación” para la resolución del conflicto, basada en primer lugar en el aprendizaje e imitación de otros procesos (el del Ulster fundamentalmente), pero también en la implicación y respaldo tanto de agencias internacionales de resolución de conflictos (Fundación Carter, Centro Henry Dunant)⁴⁰² como de personalidades internacionales vinculadas a labores de mediación y facilitación en otros procesos.

Sus medios de acción estuvieron vinculados siempre al trabajo pedagógico y de reflexión (seminarios, coloquios, debates, “conferencias de paz”, etc.) y, excepcionalmente, a la movilización convencional, por más que a menudo hayan convocado, asistido o colaborado en campañas de otras organizaciones. El desarrollo de

⁴⁰² La Fundación Carter es una organización estadounidense para la promoción y la defensa de los derechos humanos, la prevención y resolución de conflictos y la promoción de la democracia. El Centro Henry Dunant para el diálogo humanitario es una organización independiente establecida en Suiza dedicada a promover el diálogo y la resolución en conflictos armados.

de una *Conferencia de Paz* en 2001, como encuentro internacional para la reflexión y divulgación de las metodologías de la resolución de conflictos, tuvo un impacto importante en el País Vasco y contribuyó a refinar el diagnóstico que *Elkarri* habría de hacer para su estrategia posterior.

En la redefinición de su estrategia, *Elkarri* logró generar un diagnóstico y un pronóstico claros de la situación de cara al logro de sus objetivos. Dicho análisis pasaba por la constatación de unas condiciones difíciles y un contexto sociopolítico en el que sería complicado lograr soluciones “dialogadas”. Como factores internos, se constataba el aumento de la actividad de ETA y el clima de crispación política de “bloques”, generado desde la ruptura de Lizarra y que tuvo su clímax en las elecciones autonómicas del 13 de Marzo de 2001. Como factor externo, aparece la constatación de que el contexto internacional no favorece este tipo de soluciones cuando hay presencia de violencia terrorista y que, por tanto, dificulta las posibilidades del diálogo y la no violencia⁴⁰³

De las dos *Conferencias de Paz* (2001 y 2004) que *Elkarri* puso en marcha, obtuvo tanto implicación y difusión internacional como aprendizajes significativos para la socialización del diálogo y la salida “ordenada” de la violencia. De la primera, concluyó la importancia de generar una red social local de información, participación y generación de una “cultura de paz”. Pero también logró una importante red internacional de facilitación y apoyo al proceso de paz, y una metodología viable para el diálogo entre fuerzas políticas. De la segunda, que terminó en otoño de 2004, se extrajo la conclusión de la existencia de una oportunidad significativa para la búsqueda de una solución dialogada. Por el camino había mediado un año de no actividad de ETA, un proceso de ilegalización en cascada de numerosas organizaciones de la izquierda abertzale y el efecto “transformador” del 11-M.

⁴⁰³ “Los atentados del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán, el agravamiento del conflicto palestino-israelí o la crisis con Irak son acontecimientos que han potenciado los modelos más autoritarios y militaristas y menos proclives a la diplomacia, la negociación o la mediación en la resolución de conflictos. Todo ello ha tenido una influencia negativa en Europa, en la política del Gobierno español y en nuestra propia realidad. En el otro lado de la balanza y a pesar de todas las dificultades, Irlanda sigue constituyendo un referente positivo de proceso de paz. De este modo y con esta excepción, en el plano internacional los dos últimos años han constituido un tiempo adverso y hostil para la propuesta del diálogo y la no-violencia.” [véase: Conclusiones conferencia de paz de Elkarri 2001. Diagnóstico y pronóstico para un proceso de resolución del conflicto.

La trayectoria que se había marcado *Elkarri* para los años siguientes -concretar la experiencia acumulada para impulsar un proceso de “búsqueda de soluciones”- podía encontrar algunas condiciones favorables. En Marzo de 2006, la organización entraba en un proceso de debate interno y refundación que, como ellos mismos reconocen, respondía a la constatación de que gran parte de los objetivos de *Elkarri* se han logrado o bien han sido ya absorbidos por los partidos políticos y, en ese sentido, había que entrar en otra fase estratégica. Por esta razón, cambió no sólo su nombre, sino, fundamentalmente, sus objetivos y su estrategia.

Lokarri surgió con la intención de adaptarse al nuevo contexto y los nuevos retos. Si *Elkarri* había nacido para generar las condiciones de un proceso de paz, *Lokarri* lo hacía para lograr la paz, en “el acuerdo y la consulta”.

En los últimos años esta organización parece haber tenido un papel fundamental en la facilitación de condiciones para el debate interno en la izquierda abertzale oficial (aunque ellos mismos reconocen ser unos proscritos dentro de ese mundo). Han desarrollado numerosas y frecuentes actividades de debate, formación y difusión por todo el territorio del País Vasco y fuera de él, con el fin de ofrecer la posibilidad de que la gente hable de la paz, de la no violencia y de la salida ordenada de la violencia.

Con relación a lo analizado en páginas anteriores hay que poner de manifiesto que, si bien *Lokarri* evaluó las condiciones del contexto internacional como ningún otro actor, también supo acomodar su estrategia a las condiciones, priorizando la no violencia por encima de los aspectos relacionados con la consulta. Es hoy una organización “clave” para comprender la evolución estratégica de la izquierda abertzale en la medida en que ha abierto canales para el debate interno en la misma y para la facilitación internacional de dicho proceso.

Volviendo a la idea de la desmovilización de los movimientos por la paz, podemos decir que, si bien hay una perceptible ausencia de movilización política convencional a través de manifestaciones y otras formas de protesta de amplia visibilidad en el espacio público, ambas organizaciones han mantenido su actividad en el ámbito de la reflexión y difusión intelectual y pedagógica. Por un lado, en torno a la idea de la deslegitimación de la violencia y la cultura de paz; por otro, en el ámbito de la “pacificación” y el diálogo a nivel local e internacional. Pero en ambos casos tratando de acomodar sus estrategias a un contexto diferente en el que cada vez la violencia es menor y se ha abierto el campo de la opción política.

8.4 Recapitulando: El camino hacia el final de la violencia

Si en los capítulos 6 y 7 se pusieron de manifiesto las evaluaciones que los actores hacían de la violencia en contexto de la *guerra contra el terror*, lo recogido hasta aquí permite evidenciar en qué medida dichas percepciones han servido, de hecho, como marcos para la acción de las distintas organizaciones. O dicho de otra manera, en qué medida “lo que dicen y piensan” los actores se traduce a estrategias seguidas por las organizaciones que representan.

La coherencia no es algo que “se espere” cuando se abordan las percepciones e interpretaciones de la realidad. De alguna manera se asume que lo que los individuos dicen que harían no tiene por qué estar directamente vinculado con lo que hacen. Y, sin embargo, he considerado que la voz de los actores podía ser el elemento que permitiese conectar una dimensión macro -cambios de naturaleza *glocal* en las políticas internacionales y estatales en relación con la violencia-, con cambios de nivel organizativo y estratégico -cambios en los repertorios de acción de los actores.

Lo presentado en este capítulo permite constatar que las estrategias de unos y otros han estado, en buena medida, afectadas por los “nuevos” marcos de la deslegitimación y el rechazo a la violencia que, por otro lado, hemos visto en los capítulos sexto y séptimo.

La transformación en los umbrales de violencia tolerada ha afectado, como vimos en el capítulo quinto, la acción gubernamental no sólo a partir del endurecimiento de la legislación antiterrorista sino, también del “fracaso” de los procesos de negociación del 1998 y, fundamentalmente, del de 2006. Hay más consenso en aplicar el Pacto Antiterrorista que en desarrollar estrategias de negociación que revelen el carácter político de la violencia.

Ha afectado también, por poner otro ejemplo, a la acción de los movimientos por la paz de manera que a menor intensidad de la violencia, menor ha sido el nivel de la movilización. Y esto puede parecer una obviedad pero, a la luz de lo recogido, la organización *Gesto por la Paz*, por ejemplo, habría reorientado su acción desde un “rechazo” de la violencia hacia una estrategia “activa” de deslegitimación a través de otro tipo de acciones. A su vez, los movimientos por el diálogo habrían logrado un papel de cierta relevancia no sólo en los “procesos” sino, sobre todo, en la proyección internacional de la necesidad de estrategias negociadoras.

En definitiva, todos los actores han desarrollado respuestas en relación con los dos procesos subrayados en este trabajo: la transformación del umbral de lo socialmente tolerado y el “nuevo” contexto de la *guerra contra el terror* que se traduce, como he venido defendiendo, en la pérdida de aceptabilidad internacional de la violencia y en los efectos institucionales de dicha pérdida. Esto es constatable de tres maneras:

-Como hemos visto, el binomio violencia-no violencia ha atravesado la reconfiguración de los actores y las estrategias: ya se movilizan contra ETA, ya para suplir su ineficacia en la consecución de fines, el cálculo sobre los límites de dicha violencia ha estado en la base de la elección de los repertorios de acción de las organizaciones.

-El nivel de lo tolerado ha atravesado la reconfiguración de actores y estrategias en la medida en que se perciben, por un lado, altos niveles de movilización para exigir al Estado políticas de tolerancia cero o rechazo a procesos negociadores. Este es sin duda el caso del movimiento cívico-constitucionalista. Pero también se advierten importantes cambios estratégicos en relación a la oposición al endurecimiento de dichas políticas, cuando se perciben en términos represivos. Ello se percibe en la actividad de denuncia y vigilancia de los movimientos por la paz en el País Vasco.

-La presencia de la variable internacional ha sido evaluada por la mayoría de los actores bien de forma explícita, bien de manera más difusa. Y esto es visible tanto en las estrategias de proyección internacional de sus demandas y cosmovisiones como en el propio cálculo de oportunidad para avanzar en sus objetivos políticos.

Por resumir, podemos decir que quienes empleaban la violencia redujeron significativamente su nivel de acción y han debatido sobre la efectividad y oportunidad del empleo de dicha estrategia, atendiendo además a los cambios en la escena internacional. Como consecuencia de ello, las organizaciones de su entorno político se distanciaron progresivamente de la violencia, tal y como se refleja en la desmovilización (convencional y no convencional) de su base social.

En el caso de quienes se han opuesto históricamente a ella, cabe señalar que han estado altamente movilizados, en primer lugar, contra la violencia de ETA y, en segundo lugar, exigiendo al Estado demandas de ley y orden, de “mano dura” a través de una estrategia más policial y judicial que política. Sin embargo, se percibe un proceso de desmovilización cuando parece cumplirse la política de “tolerancia cero” y de aplicación estricta de aquellas medidas. Aunque se ha mantenido una campaña de “baja intensidad” (vigilancia sobre la violencia y sobre la aplicación del Estado de

Derecho), tanto la movilización en la calle como su presencia mediática ha sido significativamente menor.

CONCLUSIONES

PERSPECTIVAS *GLOCALES* Y UMBRALES DE TOLERANCIA EN EL ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA

El objeto de esta investigación ha sido comprender las transformaciones en la legitimidad de la violencia política a la luz de dinámicas concretas de cambio global. En particular, se definió una hipótesis en virtud de la cual cabía esperar, en las condiciones descritas como contexto de *guerra contra el terror*, una pérdida de aceptación de la violencia como medio para el logro de objetivos políticos por parte de organizaciones no estatales. Ello pretendía arrojar luz al menos sobre tres cuestiones de interés teórico para el análisis de la violencia y del conflicto sociopolítico: en primer lugar, sobre la noción de *oportunidad política* en tanto ambiente en el que ocurre la acción; en segundo lugar, perseguía profundizar en la relación que se establece entre la acción y su contexto y, en particular, sobre el concepto de *repertorio* entendido como el conjunto de medios y estrategias de acción que un determinado grupo puede poner en práctica en el marco de un conflicto. Finalmente, trataba de observar la compleja dinámica que se establece entre procesos globales y locales, que afecta tanto al contexto como a la acción.

Para ello, se ha trabajado con un estudio de caso a través del cual se ha indagado en algunas dimensiones centrales de la violencia como son su legitimidad y su efectividad, atendiendo siempre a un contexto cambiante y atravesado por procesos de carácter “*glocal*”. Con esta tarea espero haber demostrado con éxito que la narración realizada en estas páginas no pretendía ser un estudio del “caso vasco”, sino a un estudio de otro caso: la “transformación en la legitimidad de la violencia política” a la luz de dinámicas globales. Y para ello se ha utilizado la plataforma empírica que proporciona la violencia en el País Vasco.

Con el fin de defender esta labor sin olvidar algunas de sus principales limitaciones, llevaré a cabo a lo largo de las páginas finales un último ejercicio de análisis, tratando de extraer las principales contribuciones de mi trabajo para el estudio de la violencia y del conflicto. Para ello abordaré tres puntos fundamentales. Procederé inicialmente a una recapitulación de las conclusiones más generales que se desprenden del análisis de cada una de las dimensiones trabajadas de esta investigación. En tanto

“instancias de deslegitimación” o “relegitimación”, las transformaciones en las políticas de seguridad y antiterroristas, las narraciones de los actores respecto a la legitimidad de la violencia, y el cambio en las estrategias de dichos actores están atravesadas por acontecimientos y procesos globales y revelan, a su vez, una modificación en el grado de aceptación social conferida la violencia.

A continuación, expondré las principales dificultades surgidas en el curso de la investigación, que se ponen de manifiesto tanto en cuestiones teóricas como metodológicas. En particular, haré referencia a los condicionantes que se desprenden de una limitada teorización de lo global y lo local, de ciertas carencias de elementos de análisis cultural, y de los problemas derivados de una conceptualización laxa de violencia política. Por otro lado, haré algunas consideraciones sobre el diseño de la investigación empírica, señalando el olvido de la “subjektividad” terrorista, la insuficiente profundización en un acontecimiento central del análisis (el 11M) y, finalmente, los condicionantes propios de la estrategia de indagación elegida, el estudio de caso único, que, si bien fueron asumidas al comienzo de la investigación, no está de más recordar.

Por último, habiendo señalado las fortalezas y debilidades de esta investigación, discutiré, más allá del caso analizado, la lógica que a mi juicio ha operado en este proceso. Ello permitirá desarrollar algunas reflexiones de carácter general sobre la violencia en la política y plantear el modo en que todo lo aquí tratado, los hallazgos, las reflexiones teóricas y el propio proceso de aprendizaje de la investigación empírica, configuran una agenda de indagación para los próximos años.

9. 1. La violencia política bajo el signo de la *guerra contra el terror*

Desentrañar los significados y las lógicas de la violencia política en el marco de las democracias contemporáneas requiere considerarlos a la luz de lo que aquí se ha definido como *guerra contra el terror*. Ello no es solo una estrategia de control global del terrorismo, también es un proceso de transformación en los umbrales de lo legítimo y aceptable del uso de la violencia. En este trabajo, la violencia ha sido interpretada bajo el signo de la *guerra contra el terror*, y ello ha puesto de manifiesto el papel fundamental de las dinámicas globales sobre el carácter local del conflicto vasco en relación con tres aspectos que conviene recuperar aquí como dimensiones fundamentales de la investigación: la configuración del contexto de oportunidades globales en el que ha operado la evolución de ETA en los últimos quince años, la voz y

las estrategias de aquellos actores que interaccionan en relación con la violencia de ETA, y los episodios concretos que han operado como cristalizadores del proceso señalado.

Conviene, pues, que retomemos brevemente estas tres cuestiones y hagamos un último examen en clave del proceso analizado en este trabajo.

Oportunidades globales y violencia política

La primera cuestión hace referencia a la configuración del contexto de oportunidades en el cual ETA y su comunidad de legitimación histórica han transitado hacia el fin de la violencia en 2011. Así, la evolución de las políticas de seguridad y antiterrorismo fue examinada como un ámbito de transformación en la legitimidad conferida a la violencia, pero también como un contexto de oportunidades para la misma.

El análisis de los elementos estructurales (ideológicos e institucionales) que generan el marco de la violencia reveló una clara pérdida de aceptación de la violencia de ETA y un proceso de relegitimación del poder punitivo del Estado. Ello se presentó, por un lado, atendiendo a la elaboración y a la transformación de algunas líneas fundamentales de consenso así como al alineamiento de las élites en torno al terrorismo. De esta manera, al enfocar la dimensión cultural e ideológica que atraviesa la política de seguridad, se analizó la lucha simbólica generada alrededor de los argumentos de “ley y orden”. Se presentaron las nuevas justificaciones que darían forma a dicha política y que comprendían desde los argumentos vinculados a la doctrina del “derecho penal del enemigo” en el extremo más radical, hasta la teoría de los círculos concéntricos (“todo es ETA”), o los planteamientos de la “democracia militante” o combativa. Con ello se abría un espacio discursivo en el que la violencia terrorista se convertía en la principal amenaza a la democracia en relación con la cual se justificaba la necesidad acometer reformas institucionales.

Todo ello fue interpretado en mi análisis como una argumentación en torno al poder punitivo del Estado y como una evidencia de relegitimación de su violencia legítima. Pero además, se analizó como un indicador de alteración del grado de aceptabilidad del terrorismo.

Esta renovada argumentación sobre el papel del Estado en la lucha contra el terrorismo se desarrolló en un consenso entre las elites en torno a cuestiones fundamentales como el fortalecimiento de la vía de la legalidad, la expansión del

concepto y el delito de terrorismo, la obligatoriedad de trabajar en la proyección internacional de la agenda antiterrorista, o el respaldo a la actuación de las FCSE. Estas cuestiones se vieron también favorecidas por la resonancia de algunos argumentos añadidos, a raíz de la emergencia de la *guerra contra el terror*, como eran la percepción de una comunidad internacional solidaria y comprensiva con la amenaza del terrorismo o la necesidad de revalorizar el papel de España en la agenda antiterrorista internacional. El consenso recogido en el Pacto Antiterrorista, a pesar de ser discutido por los grupos minoritarios, estableció un campo político hegemónico de deslegitimación de ETA y de relegitimación de la función represora del Estado; el espacio discursivo de lo que en esta tesis se ha denominado la “obsesión condenatoria”, el ámbito de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en relación con la violencia y con el terrorismo.

Los cambios culturales e ideológicos señalados cristalizaron en profundas transformaciones institucionales que se han traducido en la última década en tres conjuntos de cambios. En primer lugar, han generado una clara adopción de la vía penal como estrategia de la lucha antiterrorista a través de reformas e innovaciones legislativas que han extendido el delito de terrorismo hasta ámbitos en los que no había aplicado antes. Se trata de unos cambios que, por otra parte, han recibido el respaldo de las instituciones internacionales y el aliento, en particular, de las europeas. En segundo lugar, han dado lugar a la adopción de importantes reformas en la seguridad interior que se pueden relacionar directamente con el contexto de la *guerra contra el terror* y que están atravesadas, esencialmente, por los episodios del 11-S y, en mayor medida, por el 11-M. Dichos cambios se han producido en el marco de la organización policial y de la consolidación de una comunidad de inteligencia que, si bien se han desarrollado principalmente para adecuarse a las nuevas realidades del terrorismo, han tenido un impacto considerable en el ámbito de la violencia etarra. Finalmente, estos cambios alteraron las estrategias en relación con la cooperación internacional, un terreno que, sin duda, se ha fortalecido, sofisticado y en buena medida ha sido liderado en el ámbito europeo.

Las reformas institucionales acometidas desde los poderes públicos a partir de diagnósticos consensuados, dentro y fuera de España, en relación con el terrorismo, han sido interpretadas en este trabajo como una reconfiguración de las oportunidades para el uso de la violencia por parte de actores no estatales. En particular, se evaluaron sus efectos sobre ETA y su comunidad de legitimación histórica, evidenciando un claro

cierre de las mismas, tanto para la estrategia violenta de ETA como para la movilización política de la mayoría de las organizaciones del MLNV.

En definitiva, el contexto de la *guerra contra el terror* ha operado en la transformación de las oportunidades políticas para ETA por la vía de los cambios institucionales e ideológicos que, produciéndose en el ámbito global en estrecha relación con los episodios de 11-S y 11-M, han rebosado este espacio, afectando al diseño y la legitimación de las políticas de seguridad en España. Por otro lado, la propia persistencia de la violencia de ETA ha tenido un efecto en la configuración del contexto de global en relación con el terrorismo. Baste señalar el papel de España en el impulso de políticas concretas del Espacio Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea, o la participación española en la Alianza Atlántica contra el terrorismo que tuvo su expresión militar en la Invasión de Irak en 2003. Por esta razón, he insistido en la lógica bidireccional que opera en las relaciones entre lo global y lo local en este caso.

La voz de los actores: procesos y acontecimientos a la luz de dinámicas globales

La segunda dimensión que puede ser interpretada bajo el signo de la *guerra contra el terror* está vinculada con la voz de un conjunto de actores colectivos cuyo carácter completamente local evidencia también, a través de sus diagnósticos y pronósticos, la influencia del contexto global.

El examen de las percepciones de los actores fue utilizado para comprobar dos cuestiones esenciales de este trabajo. En primer lugar, para subrayar la relevancia del proceso de deslegitimación de la violencia de ETA, así como la prevalencia de un discurso de respaldo del poder punitivo de Estado. En segundo lugar, se recurrió al nivel de los actores en tanto mecanismo de verificación de que, efectivamente, en las transformaciones señaladas en relación con la violencia estaba operando una incorporación de episodios y procesos que se correspondían con el nivel global. Se trataba de comprobar que, más allá de la relevancia de los factores locales del conflicto vasco y de las dinámicas internas de ETA para interpretar su pérdida de aceptabilidad, se podía constatar la resonancia de elementos ideológicos e institucionales del contexto de la *guerra contra el terror*.

Independientemente de su narrativa respecto del conflicto, los actores comparten una percepción del papel de los factores internacionales, no determinante pero claramente interviniente. El marco internacional aparecía como un contexto que generaba optimismo desde cualquier narrativa, bien para calcular sus estrategias, bien

para revalidar sus acciones y decisiones. Un entorno al que los actores trataban de acomodarse y en referencia al cual elaboraban sus diagnósticos de la violencia, buscando, en todo caso, verse beneficiados por los procesos vinculados al mismo.

El modo en que los actores entendían la dimensión global en relación con el conflicto se reveló mucho más fragmentado, dependiendo del tipo de actor y de sus demandas. Ello mostró, en cualquier caso, que todos ellos consideran sus proyectos favorecidos por el contexto. Era así tanto para quienes, a partir de una clara constatación del obstáculo que supone la violencia, pretendían impulsar una estrategia de “resolución de conflictos” con implicación internacional, como para los que se acomodaban al contexto de la *guerra contra el terror* como la vía legítima y efectiva para el fin de la violencia.

Con respecto al diagnóstico de la violencia, lo más destacable es la evidencia de que la aceptación que se le otorga está atravesada por percepciones sobre su efectividad, pero también sobre su moralidad. Todos los actores, independientemente de su narrativa sobre el conflicto, hicieron evaluaciones sobre la legitimidad de la violencia y sobre su efectividad. Y las diferencias estuvieron asociadas al modo en que se abordaba una y otra dimensión, dependiendo de las relaciones históricas que se han establecido en torno a la violencia. En este sentido, se halló una elaboración más rica sobre la efectividad de la violencia como medio para avanzar objetivos políticos, y menos desarrollada en torno a su aceptación moral o política, a medida que uno se aproximaba a la comunidad de legitimación histórica de ETA. Y de modo inverso, se constató una mayor proclividad a argumentar sobre la deslegitimación moral entre las fuerzas políticas que han hecho de ésta su bandera en la última década.

Efectividad y legitimidad se relacionan, además, en los dos conjuntos de actores analizados, con la estrategia del Estado. Y de nuevo, dependiendo de su posicionamiento político y del propio diagnóstico que se hacía de la violencia, apareció un discurso de certificación del papel punitivo del Estado y de sus políticas antiterroristas, o un discurso claramente crítico (de deslegitimación del mismo), en el extremo más radical.

Pero, en todo caso, se evidenció cómo la transformación de las políticas antiterroristas había logrado un respaldo internacional fundamental en el contexto post 11-S, ya generando un clima de comprensión que era recibido con agrado o resentimiento por parte del bloque constitucionalista, ya estableciendo un marco

securitario percibido por parte del sector independentista como un producto ideológico y una nueva forma de dominación.

Finalmente, en relación con la pérdida de efectividad de la violencia, hubo un consenso importante en señalar un proceso que, estando jalonado por “hitos” de la propia historia de ETA, ha sido atravesado de una manera relevante por los episodios del 11-S, muy en particular por los acontecimientos del 11-M en Madrid, así como por la deslegitimación creciente en el ámbito internacional.

A partir de todo ello, las cuatro comprobaciones fundamentales que se pudieron extraer del análisis de las narrativas de los actores en relación con la violencia fueron las siguientes:

- En el periodo analizado se ha producido un proceso de transformación en la legitimidad y la efectividad atribuida a la violencia como medio para el logro de fines políticos.

- Dicha transformación revela una menor tolerancia hacia la violencia terrorista y una creciente aceptación social de políticas antiterroristas de corte “duro”.

- Este proceso ha sido gradual y de carácter local, pero, sin embargo, ha estado afectado por acontecimientos transformadores entre los que debemos considerar algunos episodios “globales”.

- En definitiva, el contexto internacional ha sido una dimensión fundamental en la configuración de las oportunidades políticas “percibidas” por los actores, tanto en sus evaluaciones sobre la violencia de ETA, como sobre sus propios proyectos políticos (ya sean éstos de carácter independentista, ya estén orientados a logro del fin del terrorismo de ETA).

La relevancia concedida por la mayoría de los actores a los episodios del 11-M obligó a desarrollar un análisis específico de las evaluaciones acerca de los mismos. Ello se revelaba como un hallazgo en sí mismo en la medida en que no estuvo planificado en el diseño original de la investigación, sino que surgió, en tanto acontecimiento transformador para los actores, de una manera “azarosa”. Sin embargo, evaluar en qué medida lo acontecido en la mañana del 11 de Marzo de 2004 en Madrid tenía un impacto sobre las evaluaciones morales y estratégicas de los actores resultó fundamental para este trabajo, porque ha evidenciado de una manera clara cómo un acontecimiento global, desconectado aparentemente de las lógicas internas de ETA y del conflicto vasco, ha tenido un papel claramente interviniente en la consolidación del proceso que se ha analizado.

El 11-M tuvo efectos sobre la violencia vasca al desquiciar el marco en el que se había venido comprendiendo la acción de ETA y generando, en la izquierda abertzale, la paradójica situación de condenar un atentado cuando no se condenan otros. En el terreno de la pérdida de aceptabilidad de la violencia, el 11-M representó un punto de inflexión importante para el MLNV. En el ámbito de la pérdida de efectividad, se puso de manifiesto la necesidad de recalcular la estrategia, en la medida en que los atentados de Atocha mostraron una nueva dimensión de la violencia que se consideraba no sólo inalcanzable operativamente, sino, fundamentalmente, una acción que no podría tener los efectos políticos deseados (si por ello se entiende forzar una negociación en torno a la independencia). Al Qaeda se convirtió, la mañana del 11-M, en el espejo en el que se miraba el MLNV. Un espejo que devolvía imágenes de efectividad y de legitimidad que llevaban a repensar la legitimación política de la estrategia terrorista, la trayectoria histórica de ETA y la necesidad de acomodación de las estrategias a los fines.

El análisis de las evaluaciones de los actores sobre el 11-M y sus efectos sobre la violencia vasca evidenció que dicho episodio se podía entender como transformador por sus consecuencias y porque así lo reconstruían la mayoría de los actores implicados. Esto ha sido interpretado en mi análisis como una superación de determinados umbrales de violencia, que ha modificado a medio plazo la acción y la estrategia de ETA y del MLNV.

El 11-M condujo, finalmente, a una rearticulación de las estructuras institucionales en las que se enmarca la seguridad y la política antiterrorista, y se convirtió en un “acto de significación”, introduciendo nuevos significados sobre la violencia que ya existía. A pesar de que su interpretación por parte de los actores estuviera condicionada por factores particulares de la historia de la violencia de ETA, por su persistencia tras treinta años de democracia, por su visible pérdida de legitimidad, o por el protagonismo que había adquirido en la campaña electoral de 2004, dichas condiciones también contribuyeron a dar forma al modo en que se construyó narrativamente el acontecimiento. El 11-M como acontecimiento transformador en el universo de la violencia vasca se convirtió en un momento de incremento de emociones y de creatividad política: aquel día se elaboraron nuevos discursos, circularon ideas desconocidas y se improvisaron, por ejemplo, declaraciones de condena. Así concebido, este acontecimiento transformó el umbral de lo aceptable y reveló el carácter *glocal* de dinámicas de cambio en relación con un tipo concreto de violencia, el terrorismo.

Las estrategias de los actores: entre lo local y lo global

En último lugar, conviene recordar que, una vez señalada la relevancia de los universos simbólicos de los actores en relación con la violencia, resultó fundamental atender también a las estrategias de un amplio abanico de actores implicados en el conflicto, considerando los elementos estructurales y narrativos expuestos. Así, asumiendo que las estrategias de acción colectiva responden, entre otros elementos, a procesos relacionales e interactivos entre el contexto y los demás actores, el análisis de la evolución de dichas estrategias se reveló como un factor fundamental y, por ello, se consideró que la voz de los actores podía permitir conectar la dimensión macro, los cambios globales, con cambios estratégicos en sus repertorios.

Un análisis de las dinámicas seguidas por los distintos actores ha mostrado que las estrategias de unos y otros han estado en buena medida afectadas por los nuevos marcos de la deslegitimación y el rechazo a la violencia. La transformación de los umbrales de violencia tolerada y su reflejo en la estructura de oportunidad para la acción ha afectado, como vimos, al Estado como actor central del proceso. No sólo a través del endurecimiento de la política antiterrorista sino en las dificultades que ha mostrado para desarrollar estrategias de negociación política encaminadas al final de la violencia.

De la misma manera, ha afectado a ETA, y ello es perceptible a través de una clara reducción de la violencia a lo largo de toda la década, fundamentalmente a partir de 2004, y que ha cristalizado en un cese definitivo de la misma en 2011. También en relación directa con ETA, ha transformado la estrategia del MLNV en su conjunto. Este movimiento ha pasado, en los últimos diez años, por un proceso de debate interno sobre la efectividad y la legitimidad de la violencia, intensificado a partir de la ruptura de las negociaciones de 2006 y materializado en la Declaración de Alsasua en 2010, y en la adopción de una estrategia alternativa.

El contexto ha afectado también a los movimientos por la paz de manera que, a menor intensidad de la violencia, su movilización contra ETA ha sido menos intensa, pero mayores los esfuerzos por abrir diálogos y desarrollar procesos inspirados en la resolución de conflictos. Finalmente, el marco de deslegitimación ha condicionado las estrategias del movimiento cívico-constitucionalista, que ha orientado sus acciones, no sólo contra ETA, sino también contra el gobierno cuando éste se ha inclinado hacia posiciones negociadoras con la organización terrorista. Ante un proceso de negociación, se ha intensificado su movilización y sus campañas de rechazo al mismo (“no en mi nombre”) en favor de la recuperación de políticas de ley y orden.

En definitiva, el binomio violencia-no violencia ha atravesado la reconfiguración de los actores en el periodo analizado. Ha hecho emerger unos nuevos, dejando menor espacio para otros y, en cualquier caso, transformando las estrategias de todos ellos.

La presencia de la variable internacional en la dinámica de los actores, si bien es más difusa, se puede también constatar. Es visible, fundamentalmente, a través de las estrategias de proyección de sus demandas hacia el exterior en busca de nuevas audiencias, pero también en el propio cálculo de oportunidad que muchos de ellos han hecho para avanzar objetivos políticos.

Por resumir muy brevemente la trayectoria de los actores en relación con sus estrategias, podríamos decir que quienes empleaban la violencia (ETA) han visto, en la última década, cercenadas sus opciones de acción, lo que les ha conducido a debatir sobre su efectividad y oportunidad, atendiendo, además, a los cambios en el escenario internacional. Como consecuencia, las organizaciones políticas de su entorno se han distanciado progresivamente de la violencia, como se desprende de la desmovilización de la base social de la izquierda abertzale, constatable hasta 2010. Un proceso que, sin embargo, parece invertir la tendencia a partir del cese de la violencia de ETA en 2011 (como revelan los resultados electorales municipales de la coalición *Bildu* en 2011).

Por su parte, quienes se oponían históricamente a la violencia han mostrado, de la misma manera, dinámicas de movilización intensa para la exigencia de políticas duras a lo largo de toda la década, especialmente en momentos en los que se han desarrollado procesos de negociación por parte del gobierno. De modo inverso, las organizaciones de ámbito constitucionalista han mantenido una movilización mucho menor cuando actitud del Estado ha sido de “tolerancia cero”, evidenciando con ello una estrategia vigilante sobre la política antiterrorista.

9.2 Cuestiones teóricas y metodológicas vinculadas al análisis de la legitimidad de la violencia política

Evaluada los principales hallazgos de esta investigación, conviene evidenciar aquí que este trabajo también ha encontrado obstáculos importantes que explican algunas de sus principales limitaciones. El objetivo de señalar los vacíos o la incapacidad para explicar determinados aspectos es el de servir de estímulo para la reformulación de problemas de investigación sobre los que seguir reflexionando.

En primer lugar, y a pesar que se haya podido comprobar una influencia relativa de las dinámicas del contexto global sobre la percepción y la acción de los actores, hay

que poner de manifiesto cuestiones que no se han podido verificar plenamente. Probablemente ello se deba a que, en las primeras etapas de la elaboración de la tesis, el contexto se definió como un marco excesivamente rígido (tanto en lo estructural como en lo ideológico), que debía tener influencia en el modo en que los actores lo interpretaban o se adaptaban a él. En este sentido, uno de los principales hallazgos de esta tesis ha sido la constatación de que los actores no “asumen” un universo simbólico y una narración hegemónica sin más. Los actores operan con este contexto, se acomodan, lo cuestionan, lo modifican a través del modo en que lo comprenden y hablan de él. No están, por tanto, expuestos a una realidad estructural de definiciones y justificaciones que asumen de forma pasiva. Más bien transforman dicho contexto adecuando sus diagnósticos y estrategias a lo que les beneficia del contexto, e ignorando lo que les perjudica.

En el proceso de deslegitimación de la violencia, no ha sido suficiente, para la transformación de las estrategias de los actores que propugnan la independencia su exposición a un conjunto de definiciones impuestas en relación con la ineficacia de la violencia, su inmoralidad o la intolerancia a la misma como medio de acción política; no ha bastado con que la categoría de “terrorismo” se extienda a los portavoces de organizaciones políticas. Dichos portavoces y las organizaciones que representan han mostrado resistencias críticas a este discurso hegemónico, han traducido la dimensión internacional en una posibilidad para avanzar proyectos independentistas, asumiendo la necesidad de superar la estrategia violenta por su ineficacia, y han pospuesto la búsqueda de un relato sobre el abandono de la violencia para eludir la confirmación pública de su deslegitimación.

Por otro lado, entre quienes se han acogido de una manera más clara al discurso de la *guerra contra el terror*, tal y como se ha planteado en este trabajo, también se puede constatar el modo en que han introducido de manera creativa sus propios elementos. Han reivindicado, fundamentalmente, la versión española de la *guerra contra el terror*, el papel pionero de España en la lucha contra el terrorismo, o la superioridad moral y política que ello ha conferido a quienes defendían los argumentos de la “democracia militante” o de la estrategia española basada en el rechazo ciudadano y la vía penal (“con todo el peso del Estado de derecho”).

Todo ello subraya, principalmente, una visión de la cultura mucho más fragmentada de lo que planteaba el paradigma funcionalista. Si retomáramos la explicación de Gurr (1971), el recurso a la violencia se fundamentaba sobre el

argumento de la privación relativa, pero, sobre todo, los mecanismos de activación de la violencia estaban vinculados a la exposición, con distintos grados de intensidad, a justificaciones y narraciones sobre la conveniencia de la misma. Si este planteamiento nos sirviera también para interpretar procesos de desradicalización, habría que considerar la cultura como algo mucho más fragmentado y dinámico. Si la *guerra contra el terror* es un universo simbólico que se puede describir e interpretar (Geertz, 2006), éste ha de analizarse atendiendo también a la capacidad activa y creativa de los actores para operar con dicho universo y acomodarlo, en último extremo, a sus propias condiciones, racionalidades, necesidades y demandas (Swidler, 2003; Gamson, 1992). En definitiva, el contexto analizado no es una estructura cultural rígida e impuesta sobre los actores, sino más bien un conjunto de narrativas y prácticas operadas activamente por los actores y sujetos colectivos.

En segundo lugar, otro de los posibles puntos débiles de este trabajo consiste en no haber podido establecer con claridad la diferencia entre lo global y lo internacional. Ello se percibe a lo largo de toda la narración, pero de una manera muy especial en la propia redacción del texto. Los conceptos “internacional” y “global” aparecen a menudo unidos o expuestos de manera intercambiable. Se trata de una cuestión sobre la que se reflexionó en el capítulo teórico pero que conviene reconsiderar, a la luz de esta investigación, con el fin de desarrollar herramientas más adecuadas para dar cuenta de una realidad que es cada vez más central en cualquier análisis de la realidad social. Aunque sí hay un énfasis en esta tesis por comprender la dinámica global más allá de la acción de los actores centrales de la política internacional (Estados y Organizaciones Internacionales) para dar cuenta también de procesos culturales, ideológicos de transformación de la percepción del espacio y del tiempo, las dificultades de hacer operativos estos últimos han tenido su principal reflejo en que el peso de la evidencia ha estado mucho más vinculado a los cambios institucionales que a los procesos culturales e ideológicos, cayendo en una configuración excesivamente estructural en su sentido material.

Las limitaciones teóricas para comprender dinámica global condujeron, sin embargo, al hallazgo “azaroso” de que la lógica que operaba entre el contexto supraestatal y el estatal propiamente dicho era bidireccional y, por lo tanto, podía ser comprendida a partir de la idea de “*glocalidad*” (Robertson, 1992). A pesar de ello, debo asumir, con el fin de poder hacer una explotación mucho más adecuada de los hallazgos de esta tesis, la necesidad de profundizar en la cuestión de los espacios

políticos posnacionales (Iglesias, 2009; Negri y Hardt, 2005). Ello, posiblemente, permita interpretar con mayor riqueza las evidencias recogidas en mi trabajo.

En tercer lugar, esta investigación ha partido de una concepción muy amplia de la violencia política entendiéndola como un continuo en cuyo extremo de legitimidad está la violencia del Estado y, en el otro, el terrorismo, como una forma más de violencia política no estatal. Ello comporta también algunas dificultades metodológicas. Soy consciente de que violencia y terrorismo se han usado como términos intercambiables. Sabemos que el terrorismo, si bien puede comprenderse como una forma más de violencia política, no es una forma cualquiera (Tilly, 2004; Goodwin, 2011). A pesar de ello, aquí se utilizó como sinónimo de una manera intuitiva en la medida en que se sospechaba que el proceso de deslegitimación del terrorismo estaría relacionado con el proceso de respaldo de la dimensión represora del Estado hacia esa forma concreta de violencia. Pero ello ha tenido como consecuencia la imposibilidad de determinar su especificidad en tanto repertorio de acción de organizaciones. Y por esta razón, aparentemente, permite extraer conclusiones generales para el análisis de la violencia política que deben ser matizadas y sobre las que, sin duda, conviene seguir profundizando.

En cuarto lugar, este trabajo no ha profundizado en una dimensión fundamental para comprender los procesos de legitimación y deslegitimación de la violencia. Poniendo el foco en los discursos públicos sobre la misma, ha “olvidado” la propia subjetividad terrorista (Zulaika, 2009; 2012), cayendo a su vez en una deficiencia metodológica que es señalada de manera recurrente por los “estudios críticos” sobre terrorismo (Hüssle y Spencer, 2008). Una de las razones por las que no se consideró incluir elementos analíticos de la literatura reciente sobre el terrorismo fue la consideración de que dicha producción académica formaba parte del proceso de deslegitimación de la violencia política asociado al contexto de la *guerra contra el terror* (Bigo y Tsoukala, 2008), en la medida en que, al elaborar sus análisis ignorando la voz de los actores, contribuía a restar racionalidad al recurso a la violencia. A pesar de esta constatación, esta investigación ha asumido que la voz de ETA no era esencial para comprender el proceso que se ha analizado y, en su lugar, ha atendido a las voces de su comunidad de legitimación histórica, prescindiendo con ello de la atribución de significado a la violencia en primera persona, y centrándose en lo que representa para una comunidad política.

En quinto lugar, querría señalar que, habiéndose enfatizado la necesidad de hacer un estudio de carácter cultural y simbólico el resultado del trabajo tiene un marcado carácter histórico y sociológico. Ello debe ser comprendido atendiendo a las constricciones teóricas que se han señalado así como a la definición de la propia investigación empírica. A pesar de que sí hubo una teorización importante en relación con los acontecimientos, un análisis en mayor profundidad sobre el 11-M en su dimensión simbólica habría reforzado el elemento cultural sobre los aspectos institucionales en los que se ha basado este trabajo.

Finalmente, la estrategia de indagación a través del estudio de caso permite conocer fenómenos complejos en sus contextos. Posibilita también abordar múltiples dimensiones de un proceso y construir “el caso” atendiendo a las necesidades del objeto de investigación. Sin embargo, tal y como se ha desarrollado en esta tesis, se ha podido dar cuenta del proceso de transformación en la legitimidad de la violencia, pero ésta no ha posibilitado una profundización sobre los aspectos más ideológicos y culturales que han operado en este proceso.

9.3. ¿Para qué sirven los casos? Notas para una agenda de investigación sociopolítica

Comenzar esta última sección de mi exposición recuperando una pregunta de carácter metodológico es oportuno en la medida en que, una vez planteadas las fortalezas y debilidades de la investigación, conviene rescatar el argumento esgrimido al inicio de este trabajo de que el estudio de caso es la plataforma a través de la cual se ha profundizado en un proceso: la alteración de lo legítimo y lo aceptable del uso de la violencia en las sociedades avanzadas. Si todo lo narrado es relevante para conocer el caso particular de la violencia de ETA lo es más por lo que representa para el análisis de la violencia y del conflicto sociopolítico.

No pretendo generalizar las conclusiones extraídas en estas páginas ni plantear que, en la medida en que se constatan cambios en relación con la violencia de ETA, deba ser así en todos los casos de violencia política. Y, sin embargo, la estrategia de indagación desarrollada permite señalar aspectos teóricamente relevantes que van más allá del caso investigado. Para ello, contrastaré el argumento fundamental de este trabajo con ciertas dinámicas de conflicto reciente que pueden ser interpretadas, en algunas de sus dimensiones, a partir de la transposición del proceso analizado.

Independientemente de las particularidades del conflicto vasco y de sus dinámicas internas políticas y culturales, que son evidentemente locales, en el proceso analizado ha operado, entre otros muchos factores, una transformación estructural e ideológica que se produce de manera dinámica entre el marco del Estado y el ámbito global, y que ha generado un cierre de oportunidades para el uso de la violencia por parte de actores no estatales. Bajo este proceso se encuentra un mecanismo de transformación de lo legítimo, efectivo y aceptable del uso de la violencia en la política.

Este argumento, contrastado a lo largo de este estudio, permite señalar dos cuestiones fundamentales y de gran relevancia para el análisis sociopolítico.

En primer lugar, que, la *guerra contra el terror* como contexto, implica una pérdida de aceptabilidad de la violencia como medio para lograr fines políticos por parte de organizaciones no estatales. No es legítimo para organizaciones implicadas en un conflicto el recurso a la violencia y ello es válido para quienes la emplean, pero también para quienes, no recurriendo a ella, tampoco la rechazan explícitamente. La violencia se ha convertido, por tanto, en una categoría que no cabe en el campo discursivo consensuado y hegemónico de la política.

Sin embargo, todo proceso de deslegitimación, conlleva otro de legitimación (Kelman, 2001) y, por ello, la *guerra contra el terror* se ha revelado, en segundo lugar, como el contexto en el que tiene lugar una relegitimación del papel del Estado en el uso de su violencia legítima. El control de la violencia por parte del Estado y el esfuerzo *securitario* por mantener su función en el control del orden público, son dos de las dimensiones más visibles del Estado en la última década. Cuando el Estado está siendo cuestionado en relación con las dinámicas globales de transnacionalización de la economía, con su incapacidad para gestionar la diversidad cultural, con la quiebra de los modelos de Estado de bienestar, o con la cesión de soberanía a entes supra-estatales, parece que su esencia misma, el monopolio de la violencia, se revaloriza, evidenciando que sigue siendo el actor central de las dinámicas sociopolíticas.

Pero el contexto de la *guerra contra el terror* es, como justificamos al inicio de este trabajo, un artificio teórico que ha permitido construir un caso para dar cuenta de transformaciones estructurales e ideológicas en relación con la violencia. Como tal, nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre dinámicas contemporáneas de conflicto sociopolítico (desde el uso bélico de Drones a la Primavera Árabe, o al movimiento 15M) a partir de conceptos fundamentales del análisis de la acción colectiva que se han trabajado en esta investigación: las oportunidades, el repertorio y los acontecimientos.

En relación con el la estructura de oportunidades (McAdam et al, 2003; Rucht, 1996; Koopmans, 2005), o como aquí se ha denominado el “contexto de oportunidades”, debemos destacar que sigue siendo un concepto fundamental para comprender los cálculos que los actores hacen en relación con las posibilidades del contexto. Por consiguiente, en la medida en que se defina en su dimensión cultural e ideológica (tanto como en sus elementos estructurales), y atendiendo a la lógica *glocal* que opera en las dinámicas contemporáneas de conflicto, tal y como se ha constatado en este trabajo, será mucho más útil como herramienta de indagación. Recientemente, las investigaciones sobre la acción colectiva vienen trabajando a partir de la consideración del espacio posnacional como arena política en la que operan los movimientos sociales, tanto los de vocación transnacional de carácter altermundista (Iglesias, 2009) como los de carácter local que buscan la resonancia global. Della Porta (2008) lo plantea de la siguiente manera: *“Un nuevo reto para la investigación sobre oportunidades contextuales para la violencia emerge de las dimensión global de las formas contemporáneas de violencia política (...) Los efectos de la radicalización unidos a la represión a nivel nacional son, cada vez más, globales”* (2008: 31⁴⁰⁴).

En este trabajo se ha optado por asumir esta idea y comprobar la relación inversa: en qué medida el contexto global resuena en el local afectando las estrategias de los actores implicados en un conflicto “doméstico”. Ello ha permitido constatar la bidireccionalidad del proceso y, por ello, las oportunidades contextuales han sido interpretadas en términos *locales*.

Por lo que respecta al concepto *repertorio*, entendido como el conjunto de medios que un grupo conoce y puede poner en práctica en un momento dado porque es efectivo y aceptado, éste se ha revelado como una herramienta fundamental para dar cuenta de los medios de acción a los que recurren los actores colectivos. Se ha podido constatar que la aceptabilidad y la efectividad de determinadas formas de acción están atravesadas no sólo por los cálculos de quienes recurren a ellas, sino por las consideraciones que de determinados medios de acción tienen un amplio conjunto de actores. El repertorio es entonces dinámico y relacional como planteara Tilly: *“... (las personas) aprenden a desarrollar un número limitado de rutinas colectivas posibles, adaptándose cada cual a las circunstancias inmediatas, y a las reacciones de sus*

antagonistas, autoridades, aliados, observadores, objetos de sus acciones u otras personas implicadas en su lucha.” (Tilly, 1993:265).

Ello no obsta para que podamos subrayar la necesidad de comprender esta cita a la luz de dinámicas de cambio social global. Un medio de acción se pone en marcha y no otro en un proceso de adaptación a las circunstancias y a las reacciones del resto de los actores, pero este proceso está atravesado por acontecimientos que transforman y redefinen las atribuciones de significado a determinadas acciones y, por otro lado, las estrategias de unos y otros actores. La estructura de oportunidades señalada se caracteriza por una limitación de las posibilidades para la violencia y es, en este sentido, en el que puede explicarse, en parte, el cese de la violencia de ETA en 2011.

Finalmente, es de rigor hacer una última mención a un elemento teórico sobre el que se ha puesto de manifiesto que merece la pena reflexionar. El olvido de los “acontecimientos” como procesos relevantes para los movimientos sociales ha sido una cuestión que se ha reconsiderado recientemente (Aminzade, 2001; Della Porta, 2008). Este trabajo ha mostrado que, para comprender la evolución de los repertorios de acción colectiva y la violencia o el terrorismo en particular, tan importante es considerar los procesos de largo recorrido como el papel de determinados acontecimientos como actos de significación. Acontecimientos particulares como el 11-S y 11-M se han revelado en esta investigación como procesos singulares de transformación y, por lo tanto, como elementos fundamentales del análisis. En tanto acontecimientos globales han permitido interpretar cambios en el contexto de oportunidades para la violencia y reconsideraciones sobre la legitimidad y la efectividad misma de la violencia. El papel de los acontecimientos debe ser reivindicado en el análisis sociopolítico debido a que el análisis ha puesto de manifiesto que tienen importantes efectos sobre las oportunidades y sobre los propios repertorios.

Pero además de subrayar la importancia de tres conceptos fundamentales del análisis de la acción colectiva a la luz de este trabajo de investigación, podemos constatar cómo el proceso fundamental que se analiza -la transformación de umbrales de tolerancia a la violencia-, que es perceptible y socialmente aceptado en el ámbito del terrorismo de ETA, se extiende sin embargo a otros ámbitos no relacionados con el terrorismo.

Por ello, más allá de esta explicación, debe considerarse la pertinencia del argumento para interpretar otras realidades de conflicto sociopolítico: *novísimos* movimientos sociales (Gil Calvo, 2011), protestas espontáneas, huelgas,

manifestaciones, ocupaciones del espacio público, etc. Todos ellos son procesos que nunca están exentos de riesgo de violencia y sobre los cuales, en muchas democracias consolidadas, pesa cada vez más la sospecha. La violencia en distintos grados, como parte del repertorio, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un elemento que forme parte del universo de lo posible y lo aceptable para el logro de fines políticos en el marco de democracias occidentales. Ello no significa que pueda decirse que esté desterrada para siempre. Más bien ha de servir para subrayar la importancia de los procesos de atribución de legitimidad o de pérdida de aceptabilidad de la misma.

Si pensamos en los procesos más recientes de movilización con forma e impacto global, como la Primavera Árabe, el #15M o el movimiento #OccupyWallStreet, una de las cuestiones que de una manera más visible se ha puesto de manifiesto en relación con estos movimientos ha sido, precisamente, la deslegitimación de la violencia y el control que las propias organizaciones hacen de la misma. El objetivo de mantener sus apoyos dentro y fuera de sus países, así como la evaluación de las audiencias más allá de sus propias “comunidades” de referencia, ha implicado un esfuerzo importante por tomar distancia de cualquier actividad que entrañase violencia en cualquier grado. Ello subraya la importancia de las audiencias, la valoración del contexto y la percepción de una estructura de oportunidades cerrada para un conjunto de medios que impliquen, en alguna medida, alteración del orden público o riesgo de violencia. Pero además, desde la ocupación de Plaza Tahir de El Cairo en Enero de 2011 hasta la conmemoración del 15-M en Madrid en mayo de 2012, un largo y complejo proceso de movilización está evidenciando la presencia de nuevas y viejas formas de protesta en un contexto ampliamente entendido como global. En ellos, como he señalado, puede percibirse el esfuerzo de las organizaciones por controlar la violencia y posicionarse al margen de la misma, pero, sobre todo, hay que señalar el modo en que todas estas dinámicas de conflicto, con sus características particulares y sus lógicas internas, han estado fundamentalmente activadas por acontecimientos transformadores; episodios que han redefinido umbrales de tolerancia, significados de la política, formas de implicación, y un buen conjunto de elementos que merece la pena estudiar. Por esta razón, el trabajo que ahora concluye debe subrayar la importancia de considerar metodológicamente el papel de los acontecimientos en el análisis del conflicto sociopolítico.

Mi intención al aludir a estos procesos no es comparar realidades que son del todo incomparables, sino más bien hacer un esfuerzo por transponer lógicas explicativas

o interpretar otros fenómenos a la luz de los hallazgos particulares de esta tesis con el fin de reformular problemas de investigación.

A partir de las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo, de las limitaciones teóricas y empíricas de las que adolece y, en todo caso, de la evolución de mis propios intereses en relación con el objeto de estudio en los últimos años, no está de más señalar aquí, aunque sea de forma resumida, algunas líneas de análisis que se abren a partir de todo ello, y que por una cuestión de organización clasificaré en forma de ámbitos o terrenos de análisis y temas de investigación.

El análisis del Estado como provisor de seguridad

Este trabajo ha puesto de manifiesto una clara centralidad del Estado en la represión de la violencia. Por más que oriente su acción hacia el exterior, ceda soberanía en diferentes terrenos o asuma a través de cambios institucionales las transformaciones en el ámbito internacional, el Estado sigue siendo, con muchos matices, la arena fundamental en la que se producen los conflictos y el actor central de los mismos. Es la unidad territorial y política por excelencia pero está hoy sujeto a importantes debates. Éstos se pueden asociar a la llamada “crisis del Estado”: a las limitaciones para la regulación económica, a la quiebra de del Estado de bienestar, a las dificultades para garantizar la ciudadanía social, o la propia función del control de flujos de personas entre otros muchos aspectos. En este marco, y en la medida en que las lógicas del cambio global parecen conducir a la configuración de espacios macro-securitarios en el ámbito global y, a la vez, de espacios micro-securitarios caracterizados por la gestión local de las demandas ciudadanas de seguridad (Recasens, 2005), cabe preguntarse si el mantenimiento del orden público o la provisión de seguridad ciudadana es la única dimensión cuya gestión continúa ostentando el Estado en términos de monopolio, en qué medida, y con qué límites. ¿Queda el Estado como mero provisor de orden público?

Aún siendo un tema añejo en el análisis sociopolítico, constituye un terreno de renovado interés que invita a preguntarse, al menos, por las características y las lógicas bajo las cuales es hoy provisor de seguridad, así como por las relaciones que se establecen entre el Estado y los ciudadanos que administra, en relación con la seguridad y en el marco de la *securitización* de la política. En ambos casos, cabría desarrollar un análisis en profundidad sobre algunas de las siguientes cuestiones:

-Las relaciones entre el control del orden público y la garantía de derechos y libertades.

-El uso de nuevas tecnologías de control y seguridad y sus límites en el marco del Estado democrático.

-El control policial de la protesta y sus efectos sobre el modo en que se articula el conflicto social y político.

- La emergencia de nuevas demandas de seguridad pública y privadas.

-La politización y la movilización de dichas demandas.

-El *populismo punitivo* y la alarma social como base social de las políticas policiales y criminales de “tolerancia cero”.

-Las demandas de seguridad en tanto bien de consumo privado.

-La configuración espacial de “fortalezas” securitarias público-privadas y las relaciones de segregación política que se pueden asociar a la misma.

El análisis de la legitimidad de la violencia en la política

Este trabajo ha puesto de manifiesto también que, en el terreno de análisis de la violencia política, los procesos de deslegitimación y legitimación son fundamentales en la medida en que no se recurre a ella sin discurso como tampoco se abandona sin una narración. También se ha señalado la importancia que adquieren las relaciones dinámicas entre la acción y el contexto para comprender distintas estrategias. Dado que el conflicto sociopolítico adopta distintas formas en función del ambiente, la línea de trabajo iniciada en esta tesis sobre el proceso de pérdida de legitimidad de la violencia en el marco de la política sigue siendo una tema de trabajo fundamental, tanto si se aborda desde el contexto como si se indaga a partir de estrategias concretas de actores colectivos. Pero ello implica atender también al carácter *glocal* del contexto.

Por el lado del ambiente en el que la acción colectiva se lleva a cabo, el recurso a la *guerra contra el terror* sigue presentando algunas potencialidades para analizar elementos de la dinámica sociopolítica del conflicto con “minúsculas”: el movimiento social y la movilización. En este sentido, tres temas de trabajo son no sólo atractivos sino que merecen ser trabajados con cierta urgencia:

-El desbordamiento de la *guerra contra el terror* hacia ámbitos sociopolíticos que van más allá del terrorismo y que algunos autores refieren como “la guerra contra el disenso” (Jackson, 2005).

-Las nuevas formas de movilización innovadoras y espacialmente creativas en busca de nuevas audiencias globales.

-El proceso de resonancia de los cambios globales señalados en este trabajo sobre las estructuras, marcos y demandas de los llamados “novísimos” movimientos sociales (15-M, OccupyWallStreet) y otras formas de conflicto sociopolítico.

Por el lado de la acción y en el ámbito estricto de la violencia política, no debe olvidarse que los procesos de radicalización y de desradicalización son contingentes en relación con el contexto sociopolítico. En este sentido, no se puede asumir que la lógica de la deslegitimación ha de mantenerse en el tiempo. Más bien debe atenderse a los elementos contextuales que, más allá de los marcos internos de las organizaciones y los movimientos, generan condiciones estructurales e ideológicas de legitimación /deslegitimación. En esta dirección dos son las líneas interés sobre la que conviene seguir trabajando:

-La consideración de la subjetividad de los actores colectivos (sin olvidar las subjetividades terroristas) atendiendo a los procesos de atribución de sentido a sus acciones a la luz de variables del contexto.

-El análisis de los discursos en relación con la violencia en busca del conjunto de justificaciones y narrativas vinculadas con la aceptación de la misma, la oportunidad de su empleo y su efectividad para el logro de fines políticos.

Llegados a este punto solo resta poner de manifiesto que lo aquí narrado constituye, fundamentalmente y más allá de cualquier otra consideración, un proceso de aprendizaje. Que como planteara Howard Becker, cuánto menos sabemos sobre los casos de estudio, tanto mejor para nuestra investigación, y que es en el curso de la investigación como se aprenden los *trucos del oficio*. Por lo tanto, siendo ya un punto y final, sólo puede ser un punto y seguido.

REFERENCIAS

- ABOTT, A (1992). "What do cases do? Some notes on activity in sociological analysis en *What is a Case?: exploring the foundations of social inquire*", ed. C. H. Ragin, S. Becker. Cambridge University Press.
- AGAMBEN, G. (2005). *State of Exception*. Chicago: The University of Chicago Press.
- AGUIAR, F. (1990). Lógica de la Cooperación. *Zona Abierta* 54/55: 7-41.
- AGUILAR, S. (2001). "Movimientos sociales y cambio social: ¿una lógica o varias lógicas de acción colectiva?" *Revista Internacional de Sociología* 3:29-62.
- AIERBE, P.M. (2008). Spanish antiterrorist policy with the wind blowing in its favour. *Mugak* 26:611-639.
- AIXALÁ, A. (2007). La estrategia de la UE ante el terrorismo internacional y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas en *Política Exterior y Parlamento Europeo: hacia el equilibrio entre la eficacia y la democracia*. Ed.: E. Barbé, Ana Herranz Surrallés. Bruselas: Oficina de Información del parlamento Europeo.
- AIZPEOLEA, L (2010). Nos avergonzaba matar. *El País*, 5 de diciembre de 2010.
- ALDECOA, F (2004). La Europa Europea frente al terrorismo *ARI* 55/2004. Real instituto Elcano.
- ALDIS, A. & HERD, GP. (2007). *The ideological war on terror: worldwide strategies for counter-terrorism*. London; New York: Routledge.
- ALEXANDER, J. (2003). *The Meanings of social life: a Cultural Sociology*. New York: Oxford University Press.
- ALFORD, R. & FRIEDLAND, R. (1991): *Los poderes de la Teoría: Capitalismo, Estado y Democracia*. Buenos Aires. Manantial.
- ALFORD, R & FRIEDLAND R. (1993). La sociedad regresa al primer plano; símbolos, prácticas y contradicciones institucionales. *Zona Abierta* 63/64: 156-207.
- ALMOND, G.A. & VERBA, S. (1970). *La cultura cívica*. Madrid: Euramérica. (edición original, en Princeton University Press, 1963).
- ALONSO, R., DOMÍNGUEZ, F. & GARCÍA REY, M. (2010). *Vidas Rotas: Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA*. Madrid: Espasa.
- AL-SUMAIT, F, COLIN, L & DOMKE, D. (2009). Terrorism's cause and cure: the rhetorical regime of democracy in the US and Uk. *Critical Studies on Terrorism*: 2 (1):7-25.
- ALTHUSSER, L (1971). Ideology and Ideological State Apparatus In *Lenin and Philosophy and other essays*, ed. L. Althusser: NY Monthly Review Press.
- ALVAREZ CONDE, E. (2004). La aplicación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Crónica inacabada de la ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok. *Foro Nueva Época* 00:7-35.

- ALVAREZ CONDE, E. & GONZÁLEZ, H. (2006). Legislación antiterrorista comparada después de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales en *Área de Terrorismo Internacional*. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y estratégicos.
- AMINZADE, R. & MCADAM, D. (2001). *Silence and Voice in the Study of Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- ANDERSON, P. (1979). *El Estado Absolutista*. Madrid. SXXI
- ANDERSON, B. (1993). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- ANDRAIN, C. F. & APTER, D. (1995). *Political protest and social change. Analyzing Politics*. Londres: MacMillan.
- ANING, K. (2010). Security, the War on Terror and oficial development assistance. *Critical Studies on Terrorism* 3:7-26.
- ANTAKI, CH., BILLING, M., EDWARDS, D. & POTTER, J. (2003). El análisis del discurso implica analizar: crítica de seis atajos analíticos. *Athenea Digital* 3:14-35.
- AOIZ, F. (2009). ETA, historia de un precipitante. *Viento Sur* 106:56-64.
- APTER, D. (1997). *The Legitimation of violence*. NY: New York University Press.
- ARETXAGA, B. (2002). Terror as Thrill: First thoughts on "the war on terror. *Anthropological Quarterly* 75:139-150.
- ARGOMANIZ, J Y BERMEJO, R. (2002-2010). El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE. Un balance entre presidencias españolas (2002-2010) *Revista CIDOB d'afers internacionals* 91.
- ARIAS, S. & MARTÍNEZ, M. (2009). La Seguridad después del 11-S: Conceptos, Agenda e Instituciones de Seguridad en la región de Asia Central. RRII, *Derecho Internacional y Relaciones Internacionales*, UCM, Madrid.
- ASÚA BATARRITA, A. (2002). Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad: fines políticos últimos y fines de terror instrumental en *Estudios Jurídicos en Memoria de José María Lidón*, Ed.: Echano Basaldua, J. Bilbao: Universidad de Deusto.
- ASÚA BATARRITA, A. (2003). Derecho Penal y antiterrorismo en *Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM*. México DF: UNAM.
- AULESTIA, K. (1998). *HB: Crónica de un Delirio*. Madrid: Temas de Hoy.
- AVILÉS, J (2002). Nuevas amenazas de Al Qaeda. *ARI* ° 111 Real Instituto Elcano.
- AVILÉS, J (2003). Cooperación antiterrorista, política exterior común y espacio de libertad, seguridad y justicia: ¿hacia una homeland security europea? *ARI* 98 Real Instituto Elcano.
- AYA, R. (1985). Reconsideración de las teorías de la revolución. *Zona Abierta* 36/37: 1 80.
- AYA, R. (1995). La protesta como política; generalización y explicación en la sociología

- histórica. *Política y Sociedad* 18:107-113.
- AYA, R. (1997). Explicar la violencia después de Tucídides; una polémica metodológica *Zona Abierta* 80/81: 7-31.
- AZPEIOLEA, L. (2010). Nos avergonzaba matar. *Diario El País*, 5, Diciembre de 2010.
- BADIOU, A. (1994). La ética. Ensayo sobre la conciencia del mal. *Acontecimiento* 8: 21.
- BANDRÉS, J.M. (1985). La ley antiterrorista, un estado de excepción encubierto. *Diario El País* 22 Diciembre 1985.
- BANDURA, A. (1978). *Modificación de conducta: análisis de la agresión y la delincuencia*. México. Trillas.
- BARNES S. H., KAASE, M., ALLERBECK, K. R., FARRAH, B. G., HUENKS, F., INGLEHART, R., JENNINGS, M. K., KLINGEMAN, H. D., MARSH, A. & ROSENMAYER, L. (1979). *Political Action: Mass participation in five Western Democracies*. Beverly Hills: Sage Publications.
- BARRETO, M.I., BORJA, H., SERRANO Y. & LÓPEZ, W. (2009). La legitimación como proceso en la violencia política, medios de comunicación y construcción de culturas de paz. *Universitas Psicológicas*, 8:737-748.
- BASSEDAS MORILLA, P. (2006). Seguridad Humana: conceptos, experiencias y propuestas en *Revista CIDOB D'Afers Internacionals* 76: 9-46.
- BASTIDA FREIJEDO (2002)
- BECKER, H. S. (1998). *Tricks of the trade: how to think about your research while you're doing it*. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
- BELL, D. (1989). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Madrid. Alianza Editorial
- BELLAMY, A. J. (2008). *Security and the war on terror*. New York: Routledge.
- BENDFORD, R.D & SNOW, D.A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology* 26: 611-639.
- BENEDICTO, J (1995). Ciudadanos y acción política, en Morán, ML y Benedicto, (eds.). *Sociedad y Política: temas de sociología política*. pp. 227-267 Madrid. Alianza Universidades.
- BERGER, P & LUCKMANN T. (1972). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- BIERNACKI, R. (1997). *The Fabrication of Labour: Germany and Britain 1640-1914* University of California Press.
- BIGO, D & A, TSOUKALA (2008). Terror, Insecurity and Liberty: illegal practices of liberalregimes after 9/11 En Bigo, D., Guild, E. & Walker, R. (eds), *Europe's 21Century Challenge: Delivering Liberty* Ashgate.
- BLEE, K.M. (1993). Evidence, Empathy and Ethics: Lessons form Oral History of the Klan. *Journal of American History* 80:596-606.

- BLOCK, F. (1977). The Ruling Class Does Not Rule. *Socialist Review* 33.
- BOTTOMORE, T.B & RUBEL, M. (eds.). (1963). *Karl Marx: Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*. Middlesex, Australia: Pelican Books.
- BRAUD, P. (2006). *Violencias Políticas*. Madrid, Alianza Editorial.
- BROWN, J. (2006). Una apología del terrorismo o, sencillamente, de la democracia. Reflexiones con ocasión del alto el fuego de ETA. *Viento Sur* 87:103-108.
- BRUBAKER, R. (1996). *Nationalism Reframed: nationhood and the national question in the new Europe*. Cambridge University Press.
- BUENO DE MESQUITA, E. (2005). Conciliation, commitment and counterterrorism: A formal model. *International Organization* 59: 145-176.
- BUESA, M (2010). ¿Reinsertar presos de ETA? una crítica a la política penitenciaria española. *Documento de trabajo nº9, septiembre de 2010, Cátedra de Economía del Terrorismo, UCM*.
- BURAWOY, M. (1998). The extended case method. *Sociological Theory* 16:4-33.
- CALLE, DE LA, L. & SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2011). What We Talk About When We Talk About Terrorism. *Politics & Society* 39: 451–472.
- CALDUCH CERVERA, R. (2004). *La incidencia de los atentados del 11 de Septiembre en el terrorismo internacional*. Madrid: Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior INCIPE.
- CANCIO MELIA, M. X. (2002). Derecho Penal del enemigo y delitos de terrorismo: Algunas consideraciones sobre la regulación de la infracciones en materia de terrorismo en el Código Penal español después de la LO 7/2002 en *Jueces para la Democracia* 44.
- CANÓ, A (2001). EEUU ha dado una lección de "patriotismo constitucional. Entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero, Secretario General del PSOE. *Diario El País*, 3 de Octubre de 2001. Madrid.
- CASQUETE, J. (1998). *Política, Cultura y Movimientos Sociales*. Bilbao: Bakeaz.
- CASQUETE, J (2006). El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- CASTELLS, M. (2009). *Comunicación y Poder*. Madrid, Alianza Editorial.
- CASTELLS, M. (2003). *La Era de la información; vol 3, El poder de la identidad*. Madrid: Alianza.
- CATALINA BENAVENTE, M.A. (2006). *La restricción de derechos fundamentales en el marco de la lucha contra el terrorismo*. Madrid: Fundación Alternativas.
- CERULO, K. (1998). *Deciphering Violence: the Cognitive structure of right and wrong*. Florence, KY: Taylor Frances/Routledge.

- CHOMSKY, N., RAMONET, I. & SEPÚLVEDA, L. (2004). *¿Quiénes son los terroristas: terrorismo ciego, terrorismo de estado, terrorismo global, kamikazes, Al-Qaeda?* Santiago (Chile): Aún Creemos En Los Sueños.
- CLARK, R.P. (1990). *Negotiating with ETA: obstacles to peace in the Basque Country 1975-1988*. University of Nevada Press.
- CLEMENS, E Y MARTIN D. HUGHES (2002). Recovering the Past Protest: historical research on social movements in Klandermans, B y S. Staggenborg (2002) *Methods of social movements research*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- CLUB DE MADRID (2005). Towards a Democratic Response, en *Cumbre Mundial Democracia, Terrorismo y Seguridad*. Madrid: Club de Madrid.
- CLUB DE MADRID. 8 -11 de Marzo (2005). Addressing the Causes of Terrorism, en *Cumbre Mundial Democracia, Terrorismo y Seguridad*. Madrid.
- CLUB DE MADRID. (2005). Confronting Terrorism, en *Cumbre Mundial Democracia, Terrorismo y Seguridad*. Madrid: Club de Madrid.
- COHEN, J.L. (1985). Strategy or Identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements *Social Research* 52: 663-716.
- COHEN, J.L. & ARATO, A. (2000). *Sociedad Civil y Teoría Política*. México. FCE
- COLEMAN, J. S. (1957). *Community conflicts*. Nueva York: The Free Press.
- COLLER, X. (2000). Estudio de Casos. *Cuadernos Metodológicos del CIS*. 30. Madrid, CIS.
- COSER, L. (1961). *Functions of social conflict*. Nueva York: Free Press. (Notes: ed. Castellana, en México, Fondo de Cultura Económica, 1961).
- COTARELO, R. (2004). ¿Hay una brunete mediática en España? *Política y Sociedad* 41:11-31.
- CRENSHAW, M. (1986). *Terrorism, Legitimacy and power: The consequences of political terrorism*. Middleton (CT): Wesleyan University Press.
- CRUZ, R. (2000). El Derecho a reclamar derechos: acción colectiva y ciudadanía democrática En *Ciudadanía y Democracia*. Ed. Pérez Ledesama, Manuel comp. Madrid.
- DAHARENDORF, R. (1962). *Clase social y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid. Rialp
- DAHARENDORF, R. (1990). *El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad*. Madrid: Mondadori.
- DAHL, R. (1989). *La poliarquía: participación y oposición*. Madrid. Tecnos
- DAVENPORT C. (2007). State repression and political order. *Annual Review of Political Science* 10:1-23
- DE LA CALLE ROBLES, L. (2007). Fighting for Local Control: Street Violence in the Basque Country. *International Studies Quarterly* 51:431-455.

- DE LA CUADRA, B. (1897). La inclusión de delitos especiales en el Código Penal inconstitucional para expertos juristas, *Diario El País*, 22 Noviembre 1987.
- DELLA PORTA, D. (1995). *Social Movements, Political Violence and the State: A comparative analysis of Italy and Germany*. New York: Cambridge University Press.
- DELLA PORTA, D. (1996). Lógica de las organizaciones clandestinas; un análisis comparado del terrorismo en Italia y Alemania. *Sistema* 132.
- DELLA PORTA, D. (1999). Movimientos sociales y Estado: algunas ideas en torno a la represión policial de la protesta en *Movimientos sociales; perspectivas comparadas*. Ed. McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. Madrid: Istmo.
- DELLA PORTA, D. (2008). Eventful protest, global conflicts, en *Paper presented at Plenary Session, Nordic Sociological Association* Aarhus.
- DELLA PORTA, D. & TARROW, S. (2001). After Genoa and New York: the antiglobal movement, the police, and terrorism. *Items & Issues: Social Science Research Council* 2 (3-4):9-11.
- DEN BOER, M. (2003). 9/11 And the Europeization of Anti-terrorism Policy: a critical assessment In *Policy Papers: Groupement d 'Etudes et Rechercher Notre Europe*.
- DE PRADA SOLAESA, J. R. (1996). Los delitos relacionados con el terrorismo en el Código Penal de 1995. *Jueces para la Democracia*, 25:73-77.
- DE VRIES, G.(2006). The Fight against Terrorism: Five Years after 9/11, in *Annual European Foreign Policy Conference*. Ed: London School of Economics & King's College. Consejo de la Unión Europea: Consilium.
- DIANI, M. & EYERMAN, R. (1992). *Studying collective action*. Londres-Newbury park (CA): Sage Publications.
- DÍAZ FERNÁNDEZ, AM. (2006). *El papel de la comunidad de inteligencia en la toma de decisiones de la política exterior y de seguridad de España*. Madrid: Working paper OPEX: Observatorio de Política Exterior Española.
- DIEZ MEDRANO, J. (1999). *Naciones Divididas: Clase, Política y nacionalismo en el País Vasco y Cataluña* 167. Madrid: CIS. Díez, R. (2004). Resoluciones del Parlamento Europeo sobre Terrorismo: la necesidad de promover una política común, *ARI: Área de Terrorismo Internacional Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos* 89.
- DOLLARD, J, DOOB, L., MILLER, N., MOWRER, O., & SEARS, R. et al., (1939). *Frustration and Aggression*. New Haven: Yale University Press.
- DOMÍNGUEZ, F. (2000). ETA: estrategia organizativa y actuaciones (1978–1998) en *Historia de ETA*, ed. A Elorza, pp. 77–168. Madrid: Temas de Hoy
- DOMÍNGUEZ, F. (2006). *Josu Ternera: Una vida en ETA*. Madrid: La esfera de los libros.

- DUFFY, H. (2005). *The "war on terror" and the framework of international law* Cambridge: Cambridge University Press.
- DURKHEIM, E. (2001): *Las regla del método sociológico*. Akal, Madrid.
- DURKHEIM, E. (2003). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza.
- ECHEVARRÍA, J. (2002). La Unión Europea frente al Terrorismo tras el 11 de Septiembre, *Tiempo de Paz* 65:198-224.
- ECKSTEIN, H. (1964). *Internal war: problems and approaches*. NeyYork Free Press.
- EDELMAN, M. J. (1964). *Symbolic uses of politics*. Urbana (Ill.): University of Illinois Press.
- EDER, K. (1993). The New Social Movements: moral crusaders, political pressure groups or social movements? *Social Research* 52, 869-901
- EDER, K. (1996). La paradoja de la "cultura". Más allá de una teoría de la cultura como factor consensual. *Zona Abierta*, 77-78: 95-126.
- EINSENSTADT, N & ROKKAN, S. (1973). *Building States and Nations*. London. Sage
- ELORZA, A. (coord.), Garmendia, J.M., Jáuregui, G. y Domínguez Iribarren, F. (2000). *La Historia de ETA*. Madrid: Temas de Hoy.
- ELSTER, J. (1990): *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press
- ESPARZA OROZ, M. (2004). La ilegalización de Batasuna: El nuevo régimen jurídico de los partidos políticos. Madrid: Thomson –Aranzadi.
- ETXEBESTE, E, "Antxón" (1994). *Veinte años después*. Hondarribia. Argitaletxe Hiru.
- ETZIONI, A. (2008). Towards a Progressive Approach to Homeland Protection. *Democracy and Security*, 4:170-189.
- EZKERRA, I. (2007). El Movimiento Cívico del País Vasco. *Cuadernos de Pensamiento Político* 15.
- FARER, T. (2008). *Confronting global terrorism and American neo-conservatism: the framework of a liberal grand strategy*. Oxford: Oxford University Press.
- FEARON, J. & LAITIN, D. (2000). Violence and the social construction of ethnic identity, *International Organisation*, 54: 845-877.
- FEARON, J. & LAITIN, D. (2005). Etnia, insurgencia y guerra civil. *Zona Abierta* 112-113:101 144.
- FELDMANN, A. (2005). A shift in the paradigm of violence: Non-Governmental Terrorism in Latin America since the end of the Cold War, *Revista de Ciencia Política*, 25:3-36.
- FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN, L (2007). Del Multiculturalismo a la Playa de Cronulla: Inmigración y conflicto en Australia en Cachón, L. (dir.) *Conflictos e Inmigración: experiencias en Europa*. Madrid. Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.

- FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN, L (2009). Regimes and Repertoires [Reseña del libro Regimes and Repertoires. Chicago, University of Chicago Press, 2006]. *Cuadernos de Historia Contemporánea* 31:361-363.
- FERNÁNDEZ DE MOSTEYRÍN, L.M.(2011). Sobre la capacidad transformadora de los acontecimientos: cambios en la legitimidad de la violencia en el contexto de la guerra contra el terror en Funes, M. J. *A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva*, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. (2008). *Ley de Partidos Políticos y Derecho Penal: Una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- FERNÁNDEZ, L., MEDINA, M.C. & LATORRE, M (2007). Conflicto e inmigración en España: los retos de la integración”, en L. Cachón (dir.) *Conflictos e Inmigración: experiencias en Europa*. Madrid, Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
- FERÓN, E. & HASTING, M. (2003). The new Hundred Years Wars, *International Social Science Journal*, 55: 489-500.
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2010). *Encuentro Bilateral EEUU-España de las delegaciones de fiscales sobre terrorismo y crimen organizado: estrategias de las fuerzas del orden público para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada internacional. 12 7 13 de Enero de 2010*. Ed. F. G. d. Estado. Madrid: Fiscalía del Estado.
- FLYVBJERG, B. (2004). Cinco Malentendidos a cerca de la investigación mediante estudios de caso. *REIS* 106:33-62.
- FRANZOSI, R. (2004). *From words to numbers: narrative, data, and social science*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- FUNES RIVAS, M.J. (1998). *La salida del silencio: movilizaciones por la paz en Euskadi, 1986-1998*. Madrid: Akal.
- FUNES, M.J. (2011). *A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- FUSI, J.P. (2003). Huts (vacío) piedra sobre piedra [fragmento] en Medem, J., *La Pelota Vasca: la piel contra la piedra* pp. 107-143. Madrid. Aguilar.
- GALTUNG, J. (1969). Violence, Peace and Peace research, *Journal of Peace Research* 6:168-191.
- GALTUNG, J. (2003c). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*, Bilbao, Gernika Gogoratuz.
- GAMSON, W. A. (1969). *Power and Discontent*. Homewood (Ill.): Dorsey Press.
- GAMSON, W.A. (1985). Goffman's legacy to Political Sociology, *Theory and Society* 14:605-622.

- GAMSON, W. (1992). *Talking Politics*. Boston: Cambridge University Press.
- GARMENDIA JM. (2000). ETA: nacimiento, desarrollo y crisis (1959–1978) en Elorza, A (coord.) *Historia de ETA*. Madrid: Temas de Hoy.
- GARMENDIA, J.M. (2003). Huts (vacío) piedra sobre piedra [fragmento] en Medem, J., *La Pelota Vasca: la piel contra la piedra*. Madrid. Aguilar.
- GARZÓN, B. (1997). Prólogo *ETA entre España y Francia*. Madrid. Ed. Estudios Complutense.
- GARZÓN, B. (2006). *La Lucha contra el Terrorismo y sus límites*. Madrid: Adhara.
- GEERTZ, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- GIBERNAU, M. (2000). *Nations without states: political communities in the global age*. Oxford: Polity Press.
- GIDDENS, (1985). *El Capitalismo y la Moderna Teoría Social*. Barcelona, Labor.
- GIL CALVO, E. (1995). Modernización y cambio sociopolítico en Morán, M.L. & Benedicto, (eds.) *Sociedad y Política: temas de sociología política*, pp.327-368. Madrid. Alianza Universidades.
- GIL CALVO, E. (2005). *11/14-M: El cambio trágico. De la masacre al vuelco electoral*. Madrid: Adhara.
- GIL CALVO, E. (2007). La deslocalización de la protesta juvenil. *Revista de Estudios de Juventud* 76:147-162.
- GIL CALVO, E. (2008). *La lucha política a la española*. Madrid. Taurus.
- GOFFMAN, E. (2006). *Frame Analysis: los marcos de la experiencia*. Madrid: CIS.
- GOLDSTEIN, R. 1983. *Political repression in the 19th century in Europe*. London: Croom Helm.
- GOLDSTONE, J. A. (1996). ¿Son las revoluciones racionales desde el punto de vista individual?, *Zona Abierta* 80/81.
- GOLDHAGEN, D. J.(1997). *Los verdugos Voluntarios de Hitler: los alemanes corrientes y el Holocausto*. Madrid: Santillana SA (Taurus).
- GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2002a): *La violencia en la política: perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder*. Madrid, CSIC.
- GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2002b): *Políticas del miedo: un balance del terrorismo en Europa*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (2005). Lección Inaugural del Curso Académico: El Derecho Penal frente al Terrorismo: Cuestiones y perspectivas en *Universitat Jaume I*, ed. U. J. I. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- GOODWIN, J. (2011). El enfoque relacional del terrorismo en Charles Tilly en *A propósito de Tilly: conflicto, poder y acción colectiva*, ed. M. J. Funes. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- GOODWIN, J., JASPER, J.M. & POLLETA, F. (2001). *Passionate politics: emotions and social movements*. Chicago. London: The University of Chicago Press.
- GORSKI, P. (2003). *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Growth of State Power in Early Modern Europe*. Chicago: University of Chicago Press.
- GRAMSCI, A. (1971). *La política y el Estado moderno*. Barcelona: Península.
- GRAMSCI, A. (1974). *Antología*. Madrid: Siglo XXI.
- GUILD, E & GEYER, F (2008). *Security vs Justice? police and judicial cooperation in the European Union*. Burlington: Asghate.
- GUITTET, E.-P. (2004). European Political identity and Democratic Solidarity after 9/11: The Spanish Case. *Alternatives*, 29:441-464.
- GUITTET, E.-P. (2008). Is Consensus a Genuine Democratic Value? The case of Spanish Political Pact against Terrorism, *Alternatives* 33: 267-291.
- GUNNING, J. (2007). A case for critical terrorism studies, *Government and opposition*, 42:363-393.
- GURR, T. (1971). *Why men rebel?* Pricenton: Princeton University Press.
- HALLGRIMSDOTTIR, H.K. (2006). The Knights of Labour and the failure of the arbitration platform 1886-1887: Ideology, Hegemony and the Contextually Generated Opportunities for Frame Success. *Sociological Quarterly* 47:521-542.
- HANAGAN, M. O., MOCH, L.P. & BRAKE, W.T. (1998). *Challenging Authority; the historical study of contentious politics*. Minneapolis: Univerity of Minnesota Press.
- HANKOCK, D Y ALGOZZINE, B. (2006). *Doing case study research: A practical Guide for beginning rersearchers*. New York: Teacher College Press.
- HELD, D. (1995). *Democracy and the Global Order*. Cambride: Polity Press.
- HERRING, E. (2008). Critical Studies in Terrorism: an activist scholar perspective, *Critical Studies on Terrorism* 1: 1-30.
- HESS, D. & MARTIN, B. (2006). Repression, backfire, and the theory of transformative events, *Mobilization: an International Journal* 11:249-267.
- HIBBS, D.A. (1973). *Mass Political violence: a cross national causal analysis*. Nueva York-Londres-Sidney-Toronto: John Wiley & Sons Insterscience.
- HIRSHMAN, A.O. (1970). *Exit, voice, and loyalty*. Cambridge. Harvard University Press.
- HOBSEBAWN, E. (2001). *Rebeldes primitivos estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*. Barcelona. Editorial Crítica.
- HOFFMAN, B. (2004). Rethinking terrorism and counterterrorism since 9/11, in Martin, G., *The new era of terrorism*, California: Sage.
- HOLGADO GONZÁLEZ, M. (2010). La ilegalización de partidos políticos en España como instrumento de lucha contra el terrorismo en *Terrorismo, democracia y seguridad*, en

- perspectiva constitucional*, ed. Pérez Royo, J. & Carrasco Durán, M. Madrid: Marcial Pons.
- HULSSE, R. & SPENCER, A. (2008). The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn , *Security Dialogue*, 39:571-592.
- HUMAN RIGHTS WATCH. (2005). ¿Sentado ejemplo? Medidas antiterroristas en España. Ed. H. R. Watch.
- HUNTINGTON, S & NELSON, J. (1976). *Political participation; Developing countries*. Harvard University Press.
- HUNTINGTON, S. P. (1994). *La tercera ola democratización a finales del siglo XX*. Barcelona. Paidós Ibérica.
- HUNTINGTON, S (2006) *¿Choque de civilizaciones?* Madrid. Tecnos.
- IBARRA, P. & TEJERINA, B. (eds.). (1998). *Los Movimientos sociales, Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid: Trotta.
- IDOYAGA, P. (2006). La Izquierda Abertzale sin ETA. *Viento Sur* 86: 81-85.
- IDOYAGA, P. (2008). El Conflicto vasco sin horizonte político. *Viento Sur* 97:84-91.
- IDOYAGA, P. (2009). ETA (1959-2009): Anotaciones históricas, *Viento Sur* 106:44- 55.
- IGLESIAS TURRIÓN, P. (2009). *Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes: de Italia a Madrid (2000-2005)*. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. En <http://eprints.ucm.es/8458>
- IMRE, R. MOONEY, T.B. & CLARKE, B. (2008). *Responding to Terrorism: political, philosophical and legal perspectives* Hampshire: Ashgate.
- INGLEHART, R. (1991). *El Cambio cultural en las sociedades industriales*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- JACKSON, R. (2005). Explaining Torture in the War on Terror. Working paper http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/politics/research/research_groups/p/documents/Jacksonworkingpaper.pdf
- JACKSON, R. (2007). An Analysis of EU Counterterrorism discourse post-September 2001. *Cambridge Review of International Affairs* 20:233-47.
- JAKOBS, G., CANCIO MELIÁ, M. (2006). *Derecho Penal del Enemigo*. Cizur menor: Aranzadi, SA.
- JAIME JIMÉNEZ, Ó. (1997). Combatiendo a ETA. *La Factoría* 41.
- JAIME JIMÉNEZ, Ó & REINARES, F. (1998). The policing of mass demonstrations in Spain: From dictatorship to democracy en Della Porta, D & Reiter, H. (eds), *Policing protest. The control of mass demonstrations in Western democracies*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

- JAIME JIMÉNEZ, Ó. (2002). *Policía, terrorismo y cambio político en España, 1976-1996*. Valencia- Burgos: Tirant Lo Blanch y Universidad de Burgos.
- JASPERS, J. M. (1997). *The Art of Moral protest; culture, biography and creativity in social movements*. Chicago: University of Chicago Press.
- JÁUREGUI BERECIARTU, G. (2000) Del nacionalismo sabiniano a la guerra revolucionaria (1963-1965) en Garmendia, J. M. (Coord.), *Historia de ETA*, pp. 187-209. Madrid.
- JÁUREGUI BERECIARTU, G. (1981). *Ideología y estrategia política de ETA: análisis de su evolución entre 1959 y 1968*. Madrid [etc.]: Siglo XXI.
- JACKSON, R. (2005). *Writing the war on terrorism: Language, politics and counter-terrorism*. Manchester: Manchester University Press.
- JENKINS, J. (1983). Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements. *Annual Review of Sociology* 9:527-553.
- JENKINS, J. C. (1994). La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales. *Zona Abierta* 69: 5-49.
- JENKINS, C.J. (2003). Political process, international dependence and mass political conflict; analysis of protest and rebellion 1973-1978. *International Journal of Sociology* 33:41-63.
- JOHNSON, CH. (1964). *Revolution and social system*. Stanford: Hoover Institution on war, Revolution and peace, Stanford University.
- JOHNSTON, H (2002). Verification and Proof in Frame and Discourse Analysis en Klandermans, B & Staggenborg, S. *Methods of social movements research*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- KALDOR, M. (2001). *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets
- KALYVAS, A. (2000). *Logic of violence and civil war*. Nueva York, New York University Press.
- KALYVAS, S. (2003). *The Ontology of "Political Violence:" Action and Identity in Civil Wars* in *Perspectives on Politics* 1:475-494.
- KALYVAS, S.N., SHAPIRO, I. & MASOUD. T.E.(2008): *Order, conflict, and violence*. New York: Cambridge University Press.
- KEANE, J. (2000). *Reflexiones sobre la violencia*. Madrid: Alianza.
- KEATING, M. (1998). *The new regionalism in Western Europe: Territorial restructuring and political change*. Cheltenham: Edward Elgar.
- KELMAN, H.C. (2001). Reflections on social psychological process of legitimation and delegitimation, *The psychology of Legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justices and intergroup relations* ed. J. T. J. a. B. Major: Cambridge University Press.
- KELMAN, H. C. (2005). The policy context of torture: A social-psychological analysis, *International Review of the Red Cross*, 857.

- KEOHANE, D. (2005). The EU and counter-terrorism en *CER Working Papers*. London: Center for European Reform.
- KITSCHLET, H. (1986). Political opportunity structure and Protest: anti-nuclear movements in four democracies. *British Journal of Political Science* 16:57-85.
- KLANDERMANS, B. (1997). The social psychology of protest. Oxford, UK: Blackwell.
- KLANDERMANS, B., KRIESI, H & TARROW. S (1988). *From structure to action: comparing social movement research across cultures*. London: Jai Press Inc.
- KLANDERMANS, B AND STAGGENBORG, S. (2002). *Methods of Social Movements Research*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- KOOPMANS, R. & RUCHT, D. (2002). Protest Event Analysis, *Methods of Social Movement Research*, ed. B. K. a. S. Staggenborg: University of Minnesota Press.
- KOOPMANS, R (2005). *Contested citizenship: immigration and cultural diversity in Europe*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- KORNHAUSER, W. (1969). *Aspectos políticos de la sociedad de masas*. Buenos Aires: Amorrortu.
- KREBS, R. & JACKSON, P.T. (2007). Twisting Tongues and Twisting Arms: The Power of Political Rhetoric, *European Journal of International Relations*, 13:35-66.
- KRIESI, H. (1989). The Political opportunity structure of the Ducht Peace Movement. *West European Politics* 12:295-312.
- KRIESI, H. (1999). La organizacional de los Nuevos Movimientos sociales en su contexto político. Ed. MacAdam, MacCarthy y Zald.
- LABICA, G. (2008). Teoría de la violencia., www.lahaine.org.
- LAMARCA, C. (1985). *Tratamiento jurídico del terrorismo*. Madrid: Ministerio de Justicia. Centro de Publicaciones.
- LAMARCA, C. (1993). Sobre el concepto de terrorismo (A propósito del caso Amedo), *Anuario de Derecho Penal y ciencia penales* 46:535- 560.
- LANDABURU, A. (2009). Entrevista: Cincuenta años después: Julen Madariaga Fundador de ETA. *Diario El País* 26/07/2009.
- LAQUEUR, W. (2003). *Una Historia del Terrorismo*. Barcelona: Paidós.
- LENIN, V. (1971). *El Estado y La Revolución*. Madrid: Ayuso.
- LETAMENDIA, F. (1978). *Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA*. [2* ed. Barcelona: Ibérica de Ediciones y Publicaciones.
- LETAMENDIA, F. (1994). *Historia del nacionalismo vasco y de E.T.A*. San Sebastián: R. & B.
- LETAMENDIA, F. (1996). Sobre el Conflicto Vasco, *Revista Internacional de Filosofía Política* 8:151-160.
- LETAMENDIA, F. (1997). Nacionalismos y violencia política: violencias de Estado y de Respuesta. *Inguruak* 18:35-51.

- LINZ, J., ANDRÉS ORIZO, F. Y VILA MADRID, D. (1986). *Conflicto en Euskadi*. Espasa-Calpe.
- LIPSET, S.M. (1987). *El hombre político*. Madrid. Tecnos.
- LLERA, F. (1989). Continuidad y cambio en la política vasca: notas sobre identidades sociales y cultura política. *REIS* 47:107-35.
- LOFLAND, J & LOFLAND L. H. (1995). *Analyzing social settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. CA: Wadsworth.
- LÓPEZ GARRIDO, D. (1987). *Terrorismo, Política y Derecho: la legislación antiterrorista en España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia*. Madrid: Alianza Editorial.
- LÓPEZ VIDALES, N. (1999). El discurso político del MLNV a través del diario EGIN ZER: *Revista de estudios de comunicación* 6.
- LUKÁCS, G. (1969): *Historia y conciencia de clase*, México: Grijalbo.
- MARSHALL, C. & ROSSMAN, G.B. (1999). *Designing Qualitative Research*. Tousand Oaks, CA: Sage.
- MARTÍN PALLÍN, J. A. (1992) Terrorismo y represión penal. *Claves de Razón Práctica*, 23:26-34.
- MARTÍNEZ-HERRERA, E. (2003). Public Order, Responsive policies, terrorism and National extremism in the Basque Country, In *ECPR Joint Session*. Edimburgh: ECPR.
- MARTÍNEZ ZAGOZA, A. (2004). La profunda crisis de la Izquierda Abertzale en *Documentos de Análisis del Instituto Universitario de Investigación sobre la seguridad Interior*. Madrid: IUISI- UNED.
- MARX, G.T. (1998). Some reflections on the democratic policing of demonstrations, In *Policing Protest: the control of mass demonstrations in western democracies*, ed. Della Porta, D. H. R.. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- MARX, K Y ENGELS, F.(1971). *Manifiesto Comunista*. Madrid: Ayuso.
- MASKALIUNAITE, A. (2007). *A Long-term terrorist campaign and political discourse: the role of ETA in the Spanish politics*. Tesis Doctoral Inédita. Department of Political Science, Central European University, Budapest. Acceso: <http://www.etd.ceu.hu/2007/pphmaa01.pdf>
- MASKALIUNAITE, A. (2008). Old violence, new challenges: The adaptation of Basque ETA to its changing environment, In *The Globalization of political violence*, ed. R. a. C. W. H. Devetak. London: Routledge.
- MATA LÓPEZ, J.M. (1993). *El Nacionalismo Vasco Radical: Discurso, Organización y Expresiones*. Bilbao. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- MATA LÓPEZ, J.M. (2004). Dinámica nacionalista y estrategia terrorista en el País Vasco 1997- 2004, en *Seminario de investigación de Ciencia Política, Working Papers*. Madrid: UAM.

- MATE, R. (2003). *La ética ante las víctimas*. Barcelona: Anthropos.
- MCADAM, D. (1982). *Process and the development of Black insurgency 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- MCADAM, D., MCCARTHY, J.D. & ZALD, M.N. (eds) (1999). *Movimientos Sociales, Perspectivas Comparadas: Oportunidades Políticas y creación de marcos*. Madrid: Istmo.
- MCADAM, D. & SEWELL, W.H Jr. (2001). It's about Time: Temporality in the study of Social Movements and Revolutions, In *Silence and Voice in the Study of Contentious Politics*, ed. R. A. e. al. New York: Cambridge University Press.
- MCADAM, D, TARROW, S & TILLY, Ch (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona: Hacer.
- MACINTYRE, A. (1984). *After virtue: a study in moral theory*. Indiana, University of Notre Dame Press.
- MARTÍN-BARÓ, I. (2003). *Poder, Ideología y Violencia*. Madrid: Trotta.
- MCCARTHY, J & ZALD, M. (1977). Resources mobilization and social movements: a partial theory. *American journal of sociology*, 82:1212-1241
- MELUCCI, A. (1985). Symbolic challenge of social movements *Social Research* 52: 789 816
- MELUCCI, A. (1996). *Challenging codes: collective action in the information age*. New York: Cambridge University Press.
- MELUCCI, A. (1991). La acción colectiva como construcción social. *Estudios Sociológicos* 9: 357-64.
- MELUCCI, A. (1999). Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales. *Zona Abierta*, 69: 153-180
- MESTRES, L. (2001). La reacción española ante la crisis del 11 de Septiembre, en *Especial 11 de Septiembre: Monografías del Observatorio de Política Exterior Europea*, ed. E. Barbé. Bellaterra (Barcelona): Institut universitari d'Estudis Europeus.
- MICHAVILA, JM (2003). Solo con la ley pero con toda la ley. *Cuadernos de Ermua* 10:7 16.
- MILBRATH, L. (1982). *Political participation. How and why people get involved in politics*. Lanhan: Uivesity Press of America.
- MILIBAND, R. (1985). *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI.
- MILLER, D. Y. T. M. (2009). The terror experts and the mainstream media: the expert nexus and the dominance in the news media, In *Critical Studies on Terrorism*, 2:414-437.
- MILLIBAND, R. (1985). *El Estado y la Sociedad Capitalista*. México. Siglo XXI.
- MONTGOMERY, M. (2005). The discourse of war after 9/11. *Language and Literature* 14:149-80.
- MOORE, B. (1973). *Los Orígenes sociales de la dictadura y la democracia*. Barcelona:

Península.

- MORÁN, M.L (1995). La distribución del poder en las sociedades avanzadas en Morán, M.L. & Benedicto, J.(eds.) *Sociedad y Política: temas de sociología política pp.69 108*. Madrid. Alianza Universidades.
- MORÁN, M.L. (2007). Algunas reflexiones en torno a los marcos para el estudio de los conflictos asociados con la inmigración, en Cachón, L. (coord.) *Conflictos e Inmigración: experiencias en Europa*. Madrid. Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
- MORÁN, M.L. & BENEDICTO, J. (1995). *Sociedad y Política: temas de sociología política*. Madrid. Alianza Universidades.
- MORÁN, S. (1997). *ETA entre España y Francia*. Madrid, Editorial Complutense.
- MORENO, V. Y MARIÁNGELES, C. (2010). Limiting Fundamental Rights in the Fight Against Terrorism in Spain, In *A War on Terror? The European Stance on the New Threat, Changing laws and Human Rights Implications*, ed. M. a. A. M. Wade. New York: Springer.
- MOUFFE, Ch. (1999). *El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- MÜNKLER, H. (2005) *Viejas y nuevas guerras: asimetría y privatización de la violencia*. Madrid: Siglo XXI.
- MUÑAGORRI, L. Y CASARES, B. (2009). Políticas de Seguridad, control preventivo y peligrosidad: la construcción del orden social securitario. *Eguzkilore* 23:159-173.
- MUÑOZ SORO, J Y BABY, S. (2005). El discurso de la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1982) en *Culturas y Políticas de la en España siglo XX*, Muñoz Soro, J. & Rodrigo, J. (eds). Madrid: Siete Mares.
- MURUA URÍA, M. (2010). El triángulo de Loiola. Donostia: Ttartalo.
- RUIGROK, N. VAN ATTENVELDT, W. & VLIEGENTHART, R. (2008). *Shifting the Terror frame: How 9/11 changed the framing of Terrorist events*. Amsterdam: Free University Amsterdam.
- NAVARRETE PANIAGUA, M [Jefatura de Información de la Guardia Civil]. (2010). Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en *XXI Seminario "Duque de Ahumada": Terrorismo en el siglo XXI*. Aranjuez.
- NEGRI, A & HARTDT, M. (2005). *Imperio*. Madrid: Paidós.
- NISBET, R. (1990). *La formación del pensamiento sociológico*. Buenos Aires: Amorrortu.
- NORRIS, P., KERN, M., & JUST, M. (2003). *Framing Terrorism: News, the Government and the Public*. New York and London: Routledge.

- OBERSHALL, A. (1999). Oportunidades y creación de marcos en las revueltas de 1989 en el Este de Europa en *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, McAdam, D, Mcarthy, J & Zald, M. Madrid: Istmo.
- OFFE, K. (1988): *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid, Sistema.
- OLIVER, P.E. & MYERS, D.J. 1999. How Events Enter the Public Sphere: Conflict, Location and Sponsorship in Local Newspaper's coverage of Public Events, *American Journal of Sociology* 1:38-97.
- OLSON, M.(1992). *La Lógica de la acción colectiva; bienes públicos y la teoría de grupos*. México: Limusa.
- OLZAK, S. (1989). Analysis of Events in the Study of Collective Action, *Annual Review of Sociology* 15:119-141.
- ONAINDÍA, M. (2003). *Guía para orientarse en el laberinto vasco*. Madrid: Temas de Hoy.
- O'SULLIVAN, N. (ed.). (1987). *Terrorismo, Ideología y Revolución*. Madrid: Alianza.
- ORMAZABAL, S. (2003). *Un Mapa (Inacabado) del Sufrimiento*. Bilbao: Fundación Manu Robles.
- PALACIOS, D. (2011). Sin efusión de sangre: protesta, policía y coste de la represión en Funes, M.J. (2011) *A propósito de Tilly: Conflicto, poder y acción colectiva*. Madrid, CIS.
- PARK, R. E & BURGESS, E. W. (1969). *Introduction to science and sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- PARSONS, T (1982). *El Sistema Social*. Madrid: Alianza.
- PÉREZ-AGOTE, A. (2008). *Las raíces sociales del nacionalismo vasco*. CIS. Vol. 250. Madrid: CIS.
- PÉREZ LEDESMA, M. (1994). Cuando Lleguen los días de la cólera (movimientos sociales, teoría e historia). *Zona Abierta* 69:51-120.
- PÉREZ NIETO, L. (2009). Populismo Punitivo en España: del estado social al estado penal, In *Surveillance in Latin America: "Vigilancia, Securanc a e control social" PUCPR* ., Brazil: Pérez Nieto, L.
- PÉREZ NIETO, L. (2010). *Prensa, Política Criminal y Opinión Pública: El populismo punitivo en España*. Tesis Doctoral inédita. Departamento de Comunicación y Periodismo, Ciencia Política y derecho Público, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona. Acceso: <http://tdx.cesca.es/bitstream/handle/10803/5101/lpn1de1.pdf?sequence=1>
- PÉREZ ROYO, J. (2002). El derecho de Batasuna a no condenar. *Diario El País* 20 de Agosto de 2002.
- PÉREZ ROYO, J. (2002). "La vía penal de ilegalización de Batasuna." *Diario El País* 29 de Agosto de 2002.
- PÉREZ ROYO, J., CARRASCO DURÁN, M. (2010). *Terrorismo, democracia y seguridad en perspectiva constitucional*. Madrid: Marcial Pons.

- PETRAS, J. (2004). The Anatomy of "Terror Experts": Meet the mandarins of Abu Ghraib en *Counterpunch*. Petrolia, CA: Counterpunch.
- PIZZORNO, A. (1989). Algún otro tipo de alteridad; una crítica a las teorías de la elección racional *Sistema* 88:27-42.
- POLLETA, F. (1997). Culture and Its Discontents: Recent Theorizing on the Cultural Dimensions of Protest. *Sociological Inquiry* 67:431.
- PONTE, M. (2010). La reforma del Código Penal en relación a los delitos de terrorismo, en *Grupo de Estudios sobre Política y Seguridad Internacional: GESYP*. Madrid: GESYP.
- PORTILLA CONTRERAS, G. (2005). El retorno del Derecho Penal al estado de naturaleza. *Viento Sur* 83:31-44.
- POTTER, J & WETHERELL, M. (1987). From representations to repertoires in Discourse and Social Psychology: Beyond attitudes and behaviour, ed. J. P. M. Wetherell. California: Sage Publications.
- POULANTZAS, N. (1978). *Estado, Poder y Socialismo*. México, Siglo XXI.
- POZAS, A. (1992). *Las conversaciones secretas Gobierno-ETA*. Barcelona: Ediciones B.
- PSOE, PP. (2000). Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo. Madrid: PSOE- PP.
- RAGIN, Ch., AND BECKER, H. S. (1992). *What is a Case?: Exploring the foundations of social inquiry*. Cambridge University Press.
- RAMOS, R (1995). La Formación histórica del Estado nacional, en Morán, M.L. y Benedicto, J. (eds.) *Sociedad y Política: temas de sociología política*, pp.35-67. Madrid. Alianza Universidades.
- RAPOPORT, A. (1995). *The origins of violence. Approaches to the study of social conflict*. New Brunswick-Londres: Transactions Publishers.
- RAPOPORT, D. (2002). The Four Waves of Modern Terrorism *Anthropoetics* 8:46:73.
- RASMUSSEN, M. V. (2004). It sounds like a riddle: security studies, the war on terror and risk en *Journal of international studies* 33:381-395.
- RECASENS I BRUNET, A. (2007). *La seguridad y sus políticas*. Barcelona: Atelier
- REINARES, F. (1998). *Terrorismo y Antiterrorismo*. Barcelona: Paidós.
- REINARES, F (2003): *Terrorismo Global*. Madrid: Santillana Ediciones Populares.
- REINARES, F. (2007). ¿Cuál es la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España? *ARI* N° 33/2007. Real Instituto Elcano.
- REINARES, F. (2008). Tras el 11 de Marzo: estructuras de seguridad interior prevención del terrorismo global en España en, *Las democracias occidentales frente al terrorismo global*, ed. Charles, T. & Powell, F. Madrid: Ariel-Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos.
- REINARES, F. (2010). EL FINAL DE UNA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA. *EL PAÍS*, 08/072010.

- REVILLA, M. (1994). El concepto de movimiento social; acción, identidad y sentido. *Zona Abierta* 69:181-213.
- REVILLA, M. (1995). Participación política: lo individual y lo colectivo en el juego democrático en MORÁN, M.L. & BENEDICTO, J. (eds.) *Sociedad y Política: temas de sociología política*. Madrid. Alianza Universidades. pp. 299-322.
- REX, J. (1985). *El conflicto social; análisis conceptual y teórico*. Madrid: Siglo XXI.
- RIVAS NIETO, P. (2007). Principios fundamentales de política antiterrorista en regímenes democráticos *Revista de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas* 37:531- 58.
- RIVERA, J.M. (1995). Intereses, organización y acción colectiva., en *Sociedad y Política: temas de Sociología Política*. Morán, M.L & Benedicto, J.(eds.). Madrid: Alianza Universidad Textos.
- ROBERTSON, R (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Londres: Sage.
- ROBINSON, L. (2008). The Moral Accounting on terrorism: competing interpretations of September 11, 2001. *Qualitative Sociology* 31:271-85.
- RODRIGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. (2010). Las líneas de acción contra el terrorismo de la Unión Europea y sus condiciones de constitucionalidad, en *Terrorismo, Democracia y Seguridad en perspectiva constitucional*, Pérez Royo, J.(ed.) & Carrasco Durán, M. Madrid: Marcial Pons.
- ROKKAN, S (1970). *Citizens, Elections, Parties*. Nueva York, McKay.
- ROKKAN, S. (1992). Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales en Battle, A (ed.) *Diez Textos básicos de Ciencia Política*. Madrid. Ariel.
- ROSE, C., FERRACUTI, E., HORCHEM, H., JANKE, P. LEAUTE, J. (1986). *Informe de la comisión internacional sobre la violencia en el País Vasco*. Vitoria.
- ROSENFELD, M (2005). ¿Es apropiada la ponderación judicial en la lucha antiterrorista? contrastando tiempos normales, emergencias y tiempos de tensión. *ARI* 19. Real Instituto Elcano.
- RUDÉ, G. (1981). *Revuelta popular y conciencia de clase*. Barcelona, Editorial Crítica.
- RUCHT, D. (1999). El impacto de los contextos nacionales sobre la estructura de los movimientos sociales en *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, ed., McAdam, D., Mc Carthy. D & Zald, M. Madrid: Ediciones Istmo.
- RUIGROK, N., VAN ATTENVELDT, W. & VLIEGENTHART, R. (2008). *Shifting the Terror frame: How 9/11 changed the framing of Terrorist events*. Amsterdam: Free University Amsterdam.
- RUPÉREZ, J. (2006). La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S. *ARI* nº 83. Real Instituto Elcano.
- RULE, J.B. (1988). *Theories of civil Violence*. California University Press.

- SÁEZ DE LA FUENTE ALDAMA, I. (2011). *La opinión pública vasca ante la violencia de ETA: una mirada retrospectiva*. Vol. 23. Bilbao: Bakeaz.
- SAMPEDRO, V. (2005). *13.M: Multitudes online*. Madrid: La Catarata.
- SANAHUJA, J. A (2005). Seguridad, Desarrollo y lucha contra la pobreza tras el 11-S: los objetivos del milenio y la "securitización de la ayuda." *Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología aplicada* 136:25-40.
- SÁNCHEZ CALZÓN, A. (2009). *Violencia Simbólica en el discurso del nacionalismo vasco*. Tesis doctoral inédita. Departamento de Psicología Social, UCM, Madrid. Acceso: <http://eprints.ucm.es/10296/>
- SÁNCHEZ CUENCA, I. (2001). *ETA contra el estado. Las estrategias del terrorismo*. Barcelona: Tusquets.
- SÁNCHEZ-CUENCA, I. (2006). El terrorismo revolucionario: mutación y selección política. *Revista de Estudios Políticos* 132: 69-100.
- SÁNCHEZ MELGAR, J. (2006). Sección Primera de la Audiencia Nacional. Sentencia Estimatoria 197/2006 del Recurso de Casación 598/2005 P 197/ 2006 ed. T. S. S. d. I. Penal. Madrid: TS.
- SASSEN, S. (2003). Reubicar la ciudadanía. Posibilidades emergentes en la nueva geografía política en *Contrageografías de la Globalización; género y ciudadanía en los circuitos transfornterizos*. Ed. Sassen, Sakia. Madrid: Traficantes de sueños.
- SCHUDSON, M (1989). How Culture Works: Perspectives from Media Studies on the Efficacy of Symbols. *Theory and Society* 18: 153-80.
- SCHUMPETER, J. (1968): *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Madrid. Aguilar
- SCOTT, J. C. (1990). *Domination and the art of Resistance: Hidden transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- SCRATON, P. (2002) *Beyond September 11: An anthology of dissent*. London: Pluto Press.
- SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO (2002). *La Política Exterior y de Seguridad Común*. QC- 38-01-649. Bruselas: Consejo Europeo.
- SEIDMAN, I. (2006). *Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and social science*. NY: teachers College Press.
- SEWELL, W. H. Jr. (1985). Ideologies and Social Revolutions: Reflections on the French Case. *The Journal of modern History* 57:57-85.
- SEWELL, W.H. Jr. (1990). Collective violence and Collective loyalties in France: Why the French Revolution Made a Difference? *Politics & Society* 18:527-552.
- SEWELL, W.H. Jr. (2005). *Logics of History. Social theory and social transformation*. Chicago: University of Chicago Press.
- SEWELL, W.H. Jr. (2006). Por una Reformulación de lo Social. *Ayer* 62:51-72.
- SKOCPOL, Th. (1985): *El Estado y las Revoluciones Sociales*. México. FCE.

- SKOCPOL, Th. (1984). Cultural idioms and political ideologies in the Revolutionary reconstruction of State power: a rejoinder to Sewell *Journal of Modern History* 57:86-96.
- SKOCPOL, Th. (1989). El Estado regresa al primer plano; estrategias de análisis de la investigación social. *Zona Abierta* 50.
- SMELSER, N. (1989). *Teoría del Comportamiento Colectivo*. México: Fondo de Cultura Económico.
- SNOW Y TRON (2002). The case study and the Study of social movements en Klandermans, B & Staggenborg, S. *Methods of social movements research*. Minneapolis, UNiversity of Minnesota Press.
- SOLANA, J. (2004). Una Guerra Inteligente contra el terrorismo. *El País*, 11/11/2004.
- SOTELO, I. (1992). Las raíces sociales de la violencia. *Revista Internacional de Sociología* 2:55-66.
- SOTELO, I. (1990). Violencia y Modernidad *Claves de la razón práctica* 1:47-53.
- SOSA SANTOS, B. (1994). Modernidad, identidad y cultura de frontera en *De la mano de Alicia: lo social y lo político en la postmodernidad*. Ediciones uniandes.
- SPENCE, K. (2005). World Risk Society and War against Terror. *Political Studies*, 53:284-302.
- SWIDLER, A. (1996-1997). La cultura en acción: símbolos y estrategias. *Zona Abierta* 77/78:127-162.
- SWIDLER, A. (2003). *Talk of Love: How culture Works*. Chicago: University of Chicago Press.
- TARROW, S. (1989). *Democracy and disorder: protest and politics in Italy, 1965-1976*. Oxford: Oxford University Press.
- TARROW, S. (1991). Ciclos de protesta *Zona Abierta* 56.
- TARROW, S. (1998). *El poder en movimiento; los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza ensayo.
- TAYLOR, M. (1990). Racionalidad y acción colectiva revolucionaria. *Zona Abierta* 54-55:69-144.
- TEJERINA, B. (1992). *Nacionalismo y lengua. Los procesos de cambio lingüístico en el País Vasco*. Madrid CIS / S XXI.
- TEJERINA, B. (1997). Ciclo de protesta, violencia política y movimientos sociales en el País Vasco *Revista internacional de Sociología* 16:7-38.
- TENORIO SÁNCHEZ, P. (2007). Constitución y legislación Española. *Revista de Derecho Político* 71-72:553-605.
- TERETSCHENCKO, M. (2009). *Sobre el buen uso de la Tortura: o cómo las democracias justifican lo injustificable*. Madrid: Editorial Popular.
- THERBORN, G. (1977). The rule of capital and the rise of democracy ('Capital and suffrage', cover title). *New Left Review*. I 103

- THERBORN, G. (1982). *What does the ruling class do when it rules? Classes Power and Conflict*. London: Macmillan, 1982
- THIEUX, L. (2004). La Unión Europea frente al Terrorismo Global *Papeles* 86:95-107.
- THOMPSON, E. P. (1989). *Formación de la clase obrera en Inglaterra*. 2 vols. Barcelona: Crítica.
- THORNBERRY, P. (2003). Invisible Cities en Gökay, B & Walker, R. (ed.) *11 September 2001: War, Terror and Judgement*, . London: Frank Cash.
- TILLY, Ch. (1978). *From Mobilization to revolution*. Nueva York: MA: Addison-Wesley Publishing Co.
- TILLY, Ch. (1990a). *Coercion, capital and European states, A.D.990-1990*. Oxford: Basil Blackwell.
- TILLY, Ch. (1990b). Modelos y realidades de la acción colectiva popular. *Zona Abierta* 54/55: 167-95.
- TILLY, Ch. (1993). Contentious Repertoires in Great Britain 1758.1834. *Social Science History* 17:253-80.
- TILLY, Ch. (1995). *Popular contention in Great Britain, 1758-1834*. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press.
- TILLY, Ch. (1998). Conflicto político y cambio social. In *Los movimientos sociales; transformaciones políticas y cambio cultural*. Ed. Ibarra, P y B Tejerina eds. Madrid: Trotta.
- TILLY, Ch. (2002). Event Catalogs as Theories. *Sociological Theory* 20:248-54.
- TILLY, Ch. (2004a). Lullaby, Chorale or Hurdy-Gurdy Tune?: Afterword to Roger Gould, en R. Gould, *The Rational Choice Controversy in Historical Sociology*. University of Chicago Press.
- TILLY, Ch. (2004 b). Terror, Terrorism, Terrorists. *Sociological Theory* 22:5-13.
- TILLY, Ch. (2005). Terror as Strategy and Relational Process. *Comparative Sociology* 46:11-32.
- TOIVANEN, R. (2010). Counterterrorism and expert regimes: some human rights concerns. *Critical Studies on Terrorism* 3:277-94.
- TORRES DEL MORAL, A. (2003). Democracia Militante. *VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional: 3-5 Diciembre de 2003*. Sevilla.
- TORRES DEL MORAL, A. (2004). La inconstitucionalidad de los Partidos: A propósito de la Ley 6/2002 de Partidos Políticos. *Revista de Derecho Político* 60 (2004):41-71.
- TOURAINÉ, A. (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: EUDEBA.
- TOURAINÉ, A. (1971). *La sociedad posindustrial*. Barcelona: Ariel.
- TRAUGOTT, M. (comp.). (2002). *Protesta Social*. Hacer SL.
- UNZUETA, P. (1988). *Nietos de la Ira*. Madrid: Taurus.
- URIARTE, E. (1983). Consideraciones sobre el Plan ZEN *Diario El País* 8/8/1984.

- URUENA, R. (2007). *International Law as Administration: The UN's 1267 Sanctions Committee and the Making of the War on Terror* SSRN.
- VAN DIJK, T. (2005). *Ideología: una aproximación multidisciplinar*. Madrid. Gedisa.
- VAN DE LINDE, E., O'BRIEN, K., LINDSTROM, G., SPIEGELEIRE, S., VAYRYNEN, M, & DE VRIES, H.(2002). *Quick scan of post 9/11 national counter-terrorism policymaking and implementation in selected EU countries*, ed. R. Europe. Leiden: RAND EUROPE.
- VEER, P. V. D. & MUNSHI, S. (2004). *Media, war, and terrorism: responses from the Middle East and Asia*. London; New York: Routledge.
- VERA, R. (1983). ¿A quién molesta el ZEN? *Diario El País* 20/07/1983.
- VERCHER NOGUERA, A. (1991). *Antiterrorismo en el Ulster y en el País Vasco: legislación y medidas*. Barcelona: PPU.
- VIGANÓ, F. (2007). La lucha contra el terrorismo de matriz islámica a través del Derecho penal: la experiencia italiana *Política Criminal* 3:1-27.
- WALDMANN, P. (1992). Diferentes formas de violencia política *Revista Internacional de Sociología* 2:121-48.
- WEBER, M. (1995). *La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo*. Translated by Lacambra, L. L. 14ª ed. Barcelona: Península.
- WEBER, M. (1998). *El Político y el Científico* Madrid: Alianza.
- WIEVIORKA, M. (1992). Terrorismo y violencia política *Revista Internacional de Sociología* 2:169-78.
- WIEVIORKA, M. (1992). Case Studies: History or Sociology, In *What is a case? Exploring the foundations of social inquiry*, ed. C. C. R. y. H. S. Becker. New York: Cambridge University Press.
- WIEVIORKA, M. (2005): *La violence*. Paris: Hachette.
- WIEVIORKA, A. (2006). *The Era of the Witness*. Ithaca: Cornell University press.
- WILKINSON, P. (1971). *Social Movements*. Londres: MacMillan.
- WILKINSON, P. (1986). Terrorism vs. Liberal democracies: the problem of response in *The new Terrorism*, Gutteridge, W.(ed.). Londres: Mansell Publishing.
- WILKINSON, P. (2000). *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*. Boston MA: Butterworth Publishers.
- WILLIAM, H.S. (2005). Historical Events as Transformations of Structures: Inventing Revolution at the Bastille, In *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*, ed. J. William H. Sewell Chicago: University of Chicago Press.
- WILLIAMS, R.H. (2004). The cultural context of collective action: constraints, opportunities and the symbolic life of social movements In *The Blackwell companion to Social Movements*, Snow, D.W. (ed), Soule, S. & Kriesi, H. New York: Blackwell Publishing.

- WOODWORTH, P. (2001). *Dirty war, clean hands: the dark side of the Spanish democracy*. Sterling, VA: Cork University Press.
- YIN, R.K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. California: Sage Publications.
- ZALLO, R. (2009). ETA tras el alto al fuego permanente. *Viento Sur* 106:73- 84.
- ZIMMERMAN, D. (2006). The European Union and Post-9/11 Counterterrorism: A Reappraisal. *Studies in Conflict and Terrorism* 29:123-45.
- ZIMMERMANN, E. (1983). *Political Violence, Crisis and revolutions; Theories and Research*. Boston: GK Hall and Co.
- ZIZEK, S. (2005). *Bienvenidos al desierto de lo Real*. Madrid: Akal.
- ZUBERO, I. (1998). Movilización social y realidad política en el País Vasco *Cuadernos de Alzate* 18:107-122.
- ZUBERO, I. (2000). *Columnas vertebrales: escritos sobre violencia, política y sociedad en el País Vasco*. Alegia: Hiria.
- ZUBERO, I. 2008. El Gesto de Arteta no es mi gesto. *Gesto por la Paz* <http://www.gesto.org/prensapdf/02-08-13ArtetayGestoIZ.PDF>. Bilbao.
- ZUBIAGA, M. 2009. El *ethos* de ETA. *Viento Sur* 106:65-73.
- ZUBIAGA, M. y Ormazábal, S. (2008). Violencia, no violencia y desobediencia civil: nuevas vueltas a viejos debates *Viento Sur* 101:73-75.
- ZULAIKA, J. (1988). *Violencia vasca: metáfora y sacramento*. Madrid: Ed. Nerea.
- ZULAIKA, J. (2009). *Contraterrorismo USA: profecía y trampa*. Irún: Alberdania.
- ZULAIKA, J. (2012). Drones, witches and other flying objects: the force of fantasy in US counterterrorism in *Critical Studies on terrorism*, 5:51-68.
- ZULAIKA, J. & DOUGLASS, W. A. (1996). *Terror and taboo : the follies, fables, and faces of terrorism*. New York ; London: Routledge.
- ZULAIKA, J. & DOUGLASS, W. A. (2008). The terrorist subject: terrorism studies and the absent subjectivity In *Critical Studies on Terrorism*, 1:27-36.

FUENTES

- ACUERDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y LA PACIFICACIÓN DE EUSKADI, *Pacto de Ajuria Enea. 12 Enero de 1988*, ed. G. Vasco: Firmado por AP, CDS, EE, EA, EAJ-PNV, PSE-PSOE.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (1996). España: comentarios de Amnistía Internacional al cuarto informe periódico del Gobierno español al comité de derechos humanos. Acceso: www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/007/1996/es/55a19047-eb08-11dd-aad1-ed57e7e5470b/eur410071996es.html

- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2002): "Comentarios de la Sección Española de Amnistía Internacional al Proyecto de ley orgánica de Partidos Políticos ", ed. A. internacional. Madrid: AI.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2002): "Comentarios de la Sección Española de Amnistía Internacional al Proyecto de ley orgánica de Partidos Políticos ", ed. A. internacional. Madrid: AI.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2007): "Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos." ed. A. I. Publications. Madrid.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2008): "Destinos Inconfesbles, obligaciones incumplidas: España en la "guerra contra el terror"." ed. A. i. Publications. Madrid.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2009): "España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación." ed. A. I. Publications. Madrid.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2010): "Recomendaciones de Amnistía Internacional al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal." ed. A. Internacional. Madrid: AI
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2007). Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. Madrid: A. I. Publications.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2008). Destinos Inconfesables, obligaciones incumplidas: España en la guerra contra el terror. Madrid: AI. Publications.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2009). España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación. Madrid: A. I. Publications.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL (2010). *Recomendaciones de Amnistía Internacional al Proyecto de ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal*, ed. A. I. S. Española. Madrid: Amnistía Internacional Sección Española.
- ANNAN, K. (2005): Discurso pronunciado en Marzo de 2005 en Madrid con motivo de la Cumbre de Madrid en el primer aniversario del 11M. Fuente, Diario El Mundo, Jueves, 10 de Marzo de 2005:
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/10/espana/1110427075.html>
- ANNAN, K. (2005): "Un concepto más amplio de libertad: seguridad, desarrollo y derechos humanos para todos".Informe presentado a la Asamblea General por el Secretario General, Koffi Annan el 21 de Marzo de 2005.
- ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT), Boletín Informativo La Razón, nº del 36 al nº39: <http://www.avt.org/hemeroteca/>
- ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (AVT), El Mirador, boletín trimestral de la AVT nº 1-3: <http://www.avt.org/hemeroteca/>
- AZNAR, J.M. (2001): Intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, para informar sobre el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas. Pleno del

Congreso de los Diputados

26/09/2001: <http://www.jmaznar.es/discursos/pdfs/01854A1854.pdf>

CADENA SER: Registro de acceso público “*del 11M al 14M de 2004: 88 horas de información en la cadena ser*”.

http://www.cadenaser.com/static/especiales/2005/sonidos11_14/

CADENA SER. Entrevista a Rufi Etxeverria, dirigente histórico de la izquierda abertzale. *Hoy por Hoy*, Cadena Ser. 8 de Febrero de 2011:

http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/entrevista-rufi-etxeberria-hoy-hoy/csrsrpor/20110208csrsr_13/Aes/

CIS. (1987). Cuestiones de actualidad: terrorismo y seguridad ciudadana. (Estudio 1714, noviembre 1987). Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1988). Cuestiones de actualidad: propuesta de negociación con ETA. (Estudio 1729, febrero, 1988). Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1995). Demandas de seguridad y victimización. (Estudio 2200, diciembre, 1995). Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1995). Cuestiones de actualidad. (Estudio 2133, febrero, 1995). Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1996). Barómetro de Julio de 1996. (Estudio 2220), Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1996). Barómetro diciembre de 1996. (Estudio 2231) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1998). Estudio 2284 monográfico sobre seguridad ciudadana

CIS. (1998). Barómetro septiembre de 1998 (Estudio 2303. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (1999). Seguridad ciudadana y victimización (II). (Estudio 2315) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2000). Barómetro octubre de 2000. (Estudio 2400) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2001). Barómetro octubre de 2001. (Estudio 2433) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2001). Atentado terrorista en EEUU. (Estudio 2436) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2002). Barómetro septiembre de 2002. (Estudio 2466) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2003). Barómetro enero de 2003. (Estudio 2477) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.

- CIS. (2003). Barómetro junio de 2003. (Estudio 2528) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CIS. (2004). Barómetro mayo de 2004. (Estudio 2565) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CIS. (2004): Barómetro julio de 2004. (Estudio 2570) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CIS. (2005): Barómetro julio de 2007. (Estudio 2730) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CIS. (2008): Barómetro febrero de 2008. (Estudio 2754) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- CIS. (2009): Barómetro septiembre de 2009. (Estudio 2812) Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Prensa y Comunicación (2004). Libertad, Seguridad y Justicia para todos: Justicia y asuntos de interior en la UE., En *Europa en Movimiento*. Bruselas: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Prensa y Comunicación (2004). "*Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia*". Bruselas: COM 2005 184 final. Dirección General de Prensa y Comunicación.
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2000). "Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo en LO 7/2000, ed. BOE. Madrid.
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2002). Pleno y Diputaciones Permanentes del Congreso de los Diputados. *Diario de Sesiones: Proyecto de Ley orgánica de Partidos Políticos (nº de expediente 121/000093)*. Sesión Plenaria 158 VIII Legislatura. 22 Mayo de 2002.
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2003). "LO 7/2003 de 30 de Junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas." In 7/2003, ed. BOE. Madrid: CD.
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2005). Pleno. *Diario de Sesiones: Las previsiones del Gobierno sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de investigación del 11-M. A solicitud del Grupo Parlamentario de izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (nº de expediente 213/999408)*. 407. 27 de Octubre de 2005.

- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2005). Comisiones de Investigación. *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*. Sesión 50. 22 de Junio de 2005.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2001). "Resolución 1368 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001 " In *S/RES/1368 (2001)*, ed. N. U. Consejo de Seguridad. Nueva York: Naciones Unidas.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2001). "Resolución 1373 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001." In *S/RES/1373 (2001)*, ed. C. d. S. d. N. Unidas. Nueva York: Naciones Unidas.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2002). "*Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio, sobre la Lucha contra el Terrorismo.*" In *2002/474/JAI*. Bruselas: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2003). "*Una Europa Segura en un Mundo Mejor.*" ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2005). "*The European Counter-Terrorism Strategy.*" ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2006). "Resolución 1673 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5429ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2006." In *S/RES/1673 (2006)*, ed. N. U. Consejo de Seguridad. Nueva York: Naciones Unidas.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2007). "Tratado de Lisboa." In *C 306/07*, ed. C. Europeo. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2008). "Decisión Marco del Consejo, de 28 de Noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el Terrorismo." In *2008/919/JAI*, ed. Consejo. Luxemburgo: Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2008). "Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo en evolución." ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2008). "Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo en evolución." ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS (2009). "Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva para proteger al ciudadano." Bruselas: Unión Europea.
- CONSEJO EUROPEO (2001). "Declaración del Consejo Europeo reunido en Laeken el 15 de Diciembre de 2001, Sobre el Futuro de la Unión Europea.

CONSEJO EUROPEO (2003). "Una Europa segura en un mundo mejor - Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas, 12 de diciembre de 2003 ", Del del Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), J. Solana, presentado al Consejo Europeo. Bruselas

CONSEJO EUROPEO (2004). "Declaración de Lucha contra el Terrorismo, 25 de Marzo de 2004." Bruselas.

CONSEJO EUROPEO 2010. "Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: hacia un modelo de Seguridad Europeo Interior". Bruselas: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

CONSEJO EUROPEO, Secretaría General (2002). "La Política Exterior y de Seguridad Común." In *QC- 38-01-649*. Bruselas: Consejo Europeo.

CONSEJO EUROPEO, Secretaría General (2004). Declaración de Lucha contra el Terrorismo, 25 de Marzo de 2004. Bruselas: Unión Europea.

CONSEJO EUROPEO, Secretaría General (2010). Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: hacia un modelo de Seguridad Europeo." Ed. C. d. J. y. A. d. Interior. Bruselas: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

CORTES GENERALES (2002). Ley 11/2002 de 6 de Mayo, en *1/2002*, ed. BOE. Madrid.

CSIC. "Archivo del Duelo" <http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimediae%2F6>

DIARIO ABC. Un verdadero Plan Antiterrorista: El Plan ZEN, *Diario ABC*, 2/09/1983.

DIARIO ABC. Alternativa Democrática" (1995): Video difundido por ETA. Disponible en <http://video.google.com/videoplay?docid=4493646568815966134&pl=true#>

DIARIO ABC DIGITAL: Garzón ilegaliza Gestoras Pro Aministía por ser "parte integrante" de la banda terrorista ETA." *Diario ABC* 20/12/2002.

DIARIO ABC DIGITAL: Garzón Ilegaliza Haika, como ejecutora de la "kaleborroka" en integrada en ETA" *Diario ABC*, 10/05/2001.

DIARIO EL CORREO DIGITAL: "Interior cree que la disidencia en ETA alcanza casi a un centenar de presos", *Diario El Correo* 20/07/2010;

DIARIO EL CORREO DIGITAL: "Interior acerca al País Vasco a la terrorista más sanguinaria de toda la historia de ETA tras dejar la banda", *Diario El Correo* 29/07/2010.

DIARIO THE GUARDIAN DIGITAL: "US offers to spy on ETA for Spain", *Diario The Guardian* 15/06/2001.

DIARIO EL MUNDO DIGITAL: «Interior acerca a dos etarras condenadas por 23 asesinatos», *Diario El Mundo* 30/07/2010.

DIARIO EL MUNDO. «Nanclares acoge a 19 etarras que firmaron cartas pidiendo perdón», *Diario El Mundo* 01/08/2010.

DIARIO EL MUNDO. «Txelis, ideólogo de la ETA más dura, pronto en semilibertad», *Diario El Mundo* 08/08/2010.

DIARIO EL MUNDO. "Aznar pide la supresión del delito político para denegar la extradición entre países comunitarios". *Diario El Mundo* 15/10/1999.

DIARIO EL MUNDO. "Detenido en Irún un presunto etarra cuando iba a renovar el DNI". *Diario El Mundo* 06/02/2010.

DIARIO EL MUNDO. Ciberespionaje ¿Echelon contra ETA? *Diario El Mundo*, 15/06/2001.

DIARIO EL MUNDO. "España y EEUU firman un convenio sobre cooperación antiterrorista". *Diario El Mundo*, 17/12/2004.

DIARIO EL MUNDO. Especial: ETA la dictadura del Terror.
<http://www.elmundo.es/eta/negociaciones/aznar.html> .

DIARIO EL MUNDO. Dossier documentos "11-M masacre en Madrid".
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/grafico_crono.html

DIARIO EL MUNDO. "Garzón ilegaliza Ekin mientras la Audiencia excarcela a sus líderes". *Diario El Mundo* 5/04/2001.

DIARIO EL MUNDO. "Miles de personas se manifiestan en Bilbao en contra del juicio al entorno de ETA". *Diario El Mundo*, 10/03/2007.

DIARIO EL PAÍS. (1979). "Medidas excepcionales más allá de la lucha antiterrorista." *Diario El País* 02/02/1979.

DIARIO EL PAÍS. (1979). "El gobierno aprueba un decreto-ley sobre seguridad ciudadana, que amplía la legislación antiterrorista". *Diario El País* 02/02/1979.

DIARIO EL PAÍS. (1982). "Amnistía Internacional denuncia la ley antiterrorista." *Diario El País* 15/12/1982.

DIARIO EL PAÍS. (1986). "El colegio de abogados de Barcelona pide la derogación de la ley antiterrorista " *Diario El País* 11/01/1986.

DIARIO EL PAÍS. (1986). "Los expertos internacionales piden juicios ordinarios para los etarras" *Diario El País*, 05/04/ 1986.

DIARIO EL PAÍS. (1986). "El Dictamen de los Expertos sobre la violencia en Euskadi sólo se hará público parcialmente." 1986. *Diario El País* 20/03/1986.

DIARIO EL PAÍS. (1986). "El Sindicato Unificado de Policía pide que se derogue la ley antiterrorista." 27/11/1986.

DIARIO EL PAÍS. (1987). "Un sindicato policial considera que se ha abusado con la ley antiterrorista." *Diario El País* 04/03/1987.

DIARIO EL PAÍS. "La pugna por el control de Herri Batasuna culmina con una depuración en su principal partido". *Diario El País*, 20/04/1998.

DIARIO EL PAÍS DIGITAL: "Siete internos de ETA acceden a permisos regulares y aspiran a la prisión atenuada", 19 de julio de 2010

DIARIO EL PAÍS. "Las cárceles albergan el mayor número de etarras de la historia". *Diario El País*, 14/11/2008.

DIARIO EL PAÍS. "ETA se rompe en las cárceles" 10/10/2010.

DIARIO EL PAÍS. Aizpeiolea, L. (2011): "Así fue el diálogo con ETA en 2006." 29/03/2011.

DIARIO EL PAÍS. "Las torpezas del 'comando Facebook'".

DIARIO EL PAÍS. "Aznar y Bush relanzarán la cooperación antiterrorista el fin de semana en Camp David": Diario El País, 02/05/2002;

DIARIO EL PAÍS. Landaburu, A. (2009): "Entrevista a Julen Madariaga, Fundador de ETA, Cincuenta años después" Diario El País, 26 de julio de 2009.

DIARIO EL PAÍS. "Garzón ilegaliza también a Askatasuna y Segi por su vinculación con ETA": Diario El País, 06/02/2002.

DIARIO EL PAÍS. "Garzón ordena el cierre de las sedes y locales de Batasuna para los próximos tres años." Diario El País 26/08/2002.

DIARIO EL PAÍS. "La Audiencia considera que Udalbiltza no delinquiró al compartir ideas de ETA". Diario El País, 20/01/2011.

DIARIO EL PAÍS. Garzón cierra "Egin" por ser un "instrumento del entramado delictivo de ETA-KAS" Diario El País, 16/07/1998.; El juez Del Olmo cierra el periódico 'Egunkaria' por ser "instrumento" de ETA. Diario El País, 21/02/2003.

DIARIO EL PAÍS. "La Audiencia reconoce que 'Egunkaria' no debió cerrarse Diario El País, 2010 13/4/2010".

DIARIO EL PAÍS. "El Foro de Ermua denuncia en Estrasburgo el deterioro de la democracia en Euskadi". Diario "El País", 18/02/2000; ¡Basta Ya! recibe el Premio Sajarov del Parlamento Europeo. Diario "El País", 07/05/2003. Diario The New York Times. 7, December, 1970: "*Basque activist Heroes or Villains?*"

DIARIO PÚBLICO DIGITAL. "La Audiencia Nacional considera que Ekin es ETA y condena a 47 de los procesados" Diario Público 19/12/2007

DIARIO PÚBLICO DIGITAL. Jaume Asens y Gerardo Pisarello La "ilógica de la guerra" y el macro-proceso 18/98. 05/01/2008.

DIARIO LA VANGUARDIA. Dossier "Terror Global: del 11S al 11M": <http://www.vanguardiadossier.com/20070430/51187155488.html>

DIARIO VASCO DIGITAL. "Gesto por la Paz, preocupada por la desmovilización social frente al terrorismo.", Diario Vasco, 20/11/2007.

DIARIO VASCO DIGITAL. "Entrevista a Fabián Laespada, Gesto por la Paz.", Diario Vasco, 03/08/2003.

DIARIO VASCO DIGITAL. "Entrevista a Inés Rodríguez, miembro de la comisión permanente de Gesto por la paz.", Diario Vasco, 31 de Agosto de 2009.

DIARIO VASCO DIGITAL. "Del lazo azul a la camisa azul, del pacifismo al alzamiento nacional.", Diario Gara, 08/03/2007.

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. Patterns of Global Terrorism, (2001-2009):<http://www.state.gov/documents.pdf>

EGUZKI, VECIN@S DE DONIBANE-KO AUZOKIDEAK Y BIDEOAK. (2007). "Documental: 13M Atocha, El Pozo, Santa Eugenia.... Donibane." Underground Media center <http://www.faunanocturna.net/tv/13m-atocha-el-pozo-santa-eugenia-donibane-documental/> (último acceso 15/03/2011)

<http://vimeo.com/10083587> (último acceso 15/03/2011)

ELKARRI. <http://www.elkarri.org/index.php>

ELKARRI (2005): "Conclusiones del Documento 1 «Balance de la actuación de Elkarri" en VIII Asamblea General de Elkarri Documento 1 de la Ponencia base: <http://www.elkarri.org/actualidad/object.php?o=2068>

ELKARRI (2005): "Boletín informativo especial: por la paz y el diálogo en el País Vasco", Diciembre 2005:<http://elkarri.org/publicaciones/>

EUSKOMBARÓMETRO: Series temporales desde 1995-2010:
http://www.ehu.es/euskobarometro/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=15&Itemid=97

FORO DE ERMUA (2002). "Manifiesto del Formo de Ermua ante la Ilegalización de Batasuna." Cuadernos de Ermua 1 (Octubre de 2002).

FORO DE ERMUA (2003). "EGUNKARIA BAI? Egunkaria si, si sólo fuera un periódico en nuestra entrañable lengua euskérica, el vascuence. EGUNKARIA EZ ! Egunkaria no, porque existen sólidos indicios de que es parte integrante del entramado económico, contable y financiero de la banda terrorista ETA." Cuadernos de Ermua 4 (Abril de 2003).

FORO DE ERMUA (2003): "Revista semimonográfica de la Ley de Partidos." Papeles de Ermua 4 (Diciembre de 2002-Enero de 2003).

FORO DE ERMUA (2004): " ETA y Al Qaeda: ¿existen diferencias cualitativas? (11-M)." Hojas de Ermua 3.

FORO DE ERMUA (2004): "Julio Médem y la Pelota vasca. El ejercicio de la libertad, 10 razones para el desacuerdo." Cuadernos de Ermua 13 (Febrero 2004).

FORO DE ERMUA (2004): "¿Por qué nació el Foro de Eumua? Conquistar la paz sin sacrificar la libertad." Hojas de Ermua 6 (noviembre 2004).

FORO DE ERMUA (2006): "Declaraciones del Foro de Ermua en el Parlamento Europeo (Estrasburgo)." Cuadernos de Ermua 19.

FORO DE ERMUA (2006): "ETA en el "alto el fuego": nueve meses de actividad terrorista." Cuadernos de Ermua 20 (diciembre de 2006).

FORO DE ERMUA (2004): "11-M, 14-M." Cuadernos de Ermua 14 (marzo 2004).

- GARZÓN, B. (2006). Entrevista a Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado: *la lucha contra el terrorismo y sus límites.*. Madrid: Adhara.
- GARZÓN, B. Entrevista a Enrique Molina Benito, Fiscal de la Audiencia Nacional: *La lucha contra el terrorismo y sus límites.*" Madrid: Adhara.
- GARZÓN, B. (2006). Entrevista a Jesús de la Morena Bustillo, ex Comisario General de Información: *la lucha contra el terrorismo y sus límites.* Madrid: Adhara.
- GARZÓN, B. (2006). Entrevista a JL Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno: *La Lucha contra el terrorismo y sus límites.* Las Rozas: Adhara publicaciones.
- GARZÓN, B. (2006). Entrevista a José María Michavila, ex ministro de Justicia: *la lucha contra el terrorismo y sus límites.* Adhara publicaciones.
- GARZÓN, B. (2006). Entrevista a Mariano Rajoy Brey, líder del Partido Popular y ex ministro del Interior: *La lucha contra el terrorismo y sus límites.* Las Rozas: Adhara publicaciones.
- GARZÓN, B. (2006). *La Lucha contra el Terrorismo y sus límites.* Madrid: Adhara.
- GESTO POR LA PAZ. "Las víctimas de actuaciones indebidas del Estado en la lucha antiterrorista" en, http://www.gesto.org/prensapdf/11-0708_Las_otras_victimias.pdf
- GESTO POR LA PAZ. "Sobre la violencia de persecución":
<http://www.gesto.org/pdf/violenciapersecucion.pdf>
- GESTO POR LA PAZ. "Definición de la Coordinadora": <http://www.gesto.org/definicion.htm>
- HUMAN SECURITY STUDIES GROUP, HSSG (2004): "Barcelona Report of the Security Group on Europe's security capabilities: "A human security Doctrine for Europe." ed. HSSG. Barcelona: LSE HSSG.
- HUMAN SECURITY STUDIES GROUP, HSSG. (2007): "The Madrid Report of the Human Security Study Group comprising a Proposal and Background Report". En Global security, ed. LSE. Madrid: Centre for the Study of Global Governance LSE.
- JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 (2002): Sumario 35/02: Auto de imputación a la cúpula de Batasuna. 21/11/2002.; Providencia por la que el juez Baltasar Garzón prohíbe cualquier manifestación de apoyo a Batasuna Juzgado Central de Instrucción Nº5 de Madrid. Sumario (proc. Ordinario) 35 / 2002Y.
- LOKARRI, Red Ciudadana por el acuerdo y la consulta (2005):
<http://www.lokarri.org/index.php/es/acerca-de-lokarri#mision>
- MÉDEM, J. (2003). Entrevista a Juan Pablo Fusi: HUTS (vacío) piedra sobre piedra en Médem, J: *La Pelota Vasca: la piel contra la piedra.* (pp. 107-143) ed. Madrid. Alicia Produce, SL.
- MÉDEM, J. (2003). Entrevista a José María Garmendia: HUTS (vacío) piedra sobre piedra en Médem, J: *La Pelota Vasca: la piel contra la piedra.* (pp.84-95) ed. Madrid. Alicia Produce, SL.

- MÉDEM, J. (2003). Entrevista a Txomin Ziluaga: PELOTARI (jugador de pelota) en Médem, J: *La Pelota Vasca: la piel contra la piedra*. (pp.496-506) ed. Madrid. Alicia Produce, SL.
- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (2001). Declaración del presidente del Gobierno, Jose María Aznar, sobre los atentados de Estados Unidos. Palacio de la Moncloa: *Revista de Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española*.
- MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (2001). Declaración del presidente del Gobierno, Jose María Aznar, sobre los atentados en Estados Unidos. Tallín (Estonia) *Revista de Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española*.
- NACIONES UNIDAS, Asamblea General. (2006). "Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo", en A/60/825, ed. N. Unidas. Nueva York
- NACIONES UNIDAS, Asamblea General.(2006). Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de Septiembre de 2006. Nueva York: Naciones Unidas.
- NACIONES UNIDAS, Comité Contra el Terrorismo: <http://www.un.org/es/sc/ctc/>
- NACIONES UNIDAS. Resolución 1553 de Naciones Unidas condena del 11M atribuyendo la autoría a ETA:
<http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=1995&criteria1=annan&criteria2=>
- NACIONES UNIDAS (2001): Resolución 1368, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2001 " S/RES/1368 (2001).
- NACIONES UNIDAS (2001): Resolución 1373, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001." S/RES/1373 (2001).
- NACIONES UNIDAS (2001). Resolución 1377/2001 “sobre el esfuerzo global para combatir el terrorismo”, Aprobada por Consejo de Seguridad de 12 de Noviembre.
- NACIONES UNIDAS (2003): Resolución 1456 “sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo” Aprobada por Consejo de Seguridad 20 de Enero.
- NACIONES UNIDAS (2004): Resolución 1535 Aprobada por el Consejo de Seguridad, de 26 de Marzo.
- NACIONES UNIDAS, Asamblea General (2005): Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo. A/60/825.
- NACIONES UNIDAS, Asamblea General (2005): "Documento Final de la Cumbre Mundial Contra el Terrorismo, 2005", ed. N. Unidas. Nueva York.
- NACIONES UNIDAS, Asamblea General (2006): "Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, en A/RES/60/288, ed. N. Unidas. Nueva York.

NACIONES UNIDAS (2006): Resolución 1673, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5429ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2006." S/RES/1673 (2006)

NACIONES UNIDAS, Asamblea General (2006): "Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, Resolución aprobada por la Asamblea General el 8 de Septiembre de 2006. A/RES/60/288, Nueva York.

NACIONES UNIDAS, Oficina del Relator Especial para la Tortura, Theo van Boven (2004): "Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención: Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura". Visita a España. 60º periodo de Sesiones. 6 Febrero de 2004.

NACIONES UNIDAS, Oficina del Relator especial Martin Scheinin (2008): "Promoción y protección de todos los derechos Humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo: Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo."

PARLAMENTO EUROPEO (1999) Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de Octubre de 1999: Conclusiones de la Presidencia. Bruselas: P. Europeo.

NATO Defense Against Terrorism Programme:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50313.htm?selectedLocale=en

NATO: Statement by the North Atlantic Council. 11 Sep. 2001 y OTAN: Statement on combating terrorism: Adapting the Alliance's Defence Capabilities 18 Dec. 2001.

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA (2001): "Intervención del presidente del gobierno, José María Aznar, en su conferencia de prensa conjunta con el Primer Ministro de Estonia, Maart Laart, 11 de Septiembre de 2001, Tallín, (Estonia)". Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores.
<http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/PublicacionesDGCE/Paginas/pag2.aspx>

OSCE, Declaración de lucha contra el Terrorismo. Consejo Ministerial Bucarest, Decisión 1, Diario CM (9) nº 2, punto 9 de 4 Diciembre de 2001."

OSCE Secretariat-Against Terrorism Unit: <http://www.osce.org/atu/>

PARLAMENTO EUROPEO (2001). Texto Aprobado por el Parlamento el 5 de Septiembre de 2001. Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. Bruselas: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C72/ E de 21-3-2002: 135 - 141.

PARLAMENTO EUROPEO (2002). Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. Texto Aprobado por el Parlamento el 5 de Septiembre de. 2001. Bruselas: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C72/ E de 21-3-2002; 135 - 141.

PARLAMENTO EUROPEO (2007). Sobre la Supuesta utilización de países Europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (2006/2200 (INI)). A6-0020/2007. Bruselas: P. Europeo.

PARLAMENTO VASCO (1983). Parlamento Vasco. *Proposición no de ley sobre el plan ZEN*. 7 de Octubre de 1983.

PLATAFORMA SOLIDARIA CON LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SUMARIO 18/98 http://www.nodo50.org/18/98/manifiesto_madrid.html

“Peace processes in community conflicts: From understanding the roots of conflicts to conflicts resolutions”. Sixth Framework Program EU: Priority 7 - "Citizens and Governance in a Knowledge based Society". (2004-2007). Contract nº CIT2-CT-2004-50637. www. <http://peacecom.spri.ucl.ac.be/>.

CHALLENGE Project "The Changing Landscape of European Liberty and Security".Sixth Framework Program EU. <http://www.libertysecurity.org/index.html>

RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents: <http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html>

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL STC 48/2003, FJ 7º sobre la ilegalidad de los partidos políticos.

UNIÓN EUROPEA (1999): "Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de Octubre de 1999: Conclusiones de la Presidencia." Bruselas. Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo." 2001, Texto Aprobado por el Parlamento el 5 de Septiembre de. 2001 Bruselas: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C72/ E de 21-3-2002; pp: 135 - 141.

UNIÓN EUROPEA (2001): Posición común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, relativa a la aplicación de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. Diario Oficial nº L 344 de 28/12/2001 p. 0093 – 0096.

UNIÓN EUROPEA (2002): Decisión Marco 474/JAI del Consejo, de 13 de Junio de 2002 relativa a la lucha contra el terrorismo.

UNIÓN EUROPEA (2002): Decisión Marco del Consejo 2002/187/JAI por la que se crea EUROJUST.

UNIÓN EUROPEA (2002): Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de Junio relativa a la Orden de Detención Europa

UNIÓN EUROPEA (2003): Posición común 2003/482/PESC del Consejo de Europa, de 27 de junio de 2003. Lista de personas y organizaciones terroristas.

UNIÓN EUROPEA (2004): Informe de la Comisión, de 8 de junio de 2004, relativo a la lucha contra el terrorismo, [COM (2004) 409 final – Diario Oficial C 321 de 28.12.2004

UNIÓN EUROPEA (2005): Decisión del Consejo 2005/681/JAI de 20 de septiembre por la que se crea la Escuela Europea de Policía

- UNIÓN EUROPEA (2005): Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2005, «Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia» [COM (2005) 184 final – Diario Oficial C 236 de 24.9.2005]
- UNIÓN EUROPEA (2007): Informe de la Comisión, de 6 de noviembre de 2007, relativo a la lucha contra el terrorismo, [COM (2007) 681 final – Diario Oficial C 9 de 15.1.2008]
- UNIÓN EUROPEA (2003): "Una Europa Segura en un Mundo Mejor." ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- UNIÓN EUROPEA (2005): "The European Counter-Terrorism Strategy." ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- UNIÓN EUROPEA (2008): "Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo en evolución." ed. Consejo. Bruselas: Unión Europea.
- UNIÓN EUROPEA (2009): "Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva para proteger al ciudadano." Bruselas: Unión Europea.
- UNIÓN EUROPEA. Síntesis de legislación de la UE, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/index_es.htm
- UNIÓN EUROPEA, Consejo. (2008). Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo en evolución. Bruselas: Unión Europea.
- VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO,
- COVITE: <http://www.covite.org>/Centro de Análisis y Prospección de la Guardia Civil: <http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/organosdeapoyo/gabinete/cap/nota02.jsp>
- Vídeo comparecencia Ángel Acebes (ministro del Interior): <http://www.youtube.com/watch?v=6gWiy1Gm-yA>
- Vídeo comparecencia Arnaldo Otegi (portavoz de la ilegalizada Batasuna): <http://www.youtube.com/watch?v=zqGqKj95VZY>
- Vídeo comparecencia de Gaspar Llamazares: http://www.youtube.com/watch?v=ZUY-80KEt_8

ANEXO I. DATOS SOCIOPOLÍTICOS

LISTADO DE ACRÓNIMOS DE LOS CAPÍTULOS TERCERO Y CUARTO.

AI: Amnistía Internacional

AN: Audiencia Nacional

AVT: Asociación de Víctimas del Terrorismo

BVE (Triple A): Batallón Vasco Español (Alianza Apostólica Anticomunista)

CAV: Comunidad Autónoma Vasca

CGI: Comisaría General de Información

CNP: Cuerpo Nacional de Policía

CP: Código Penal

CSID: Centro Superior de Información para la Defensa

CTITF: Agencia de la Naciones Unidas para la Implementación del Contraterrorismo

ESLJ: Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea

ETA: Euskadi Ta Askatasuna

FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

GAL: Grupos Antiterroristas de Liberación

GAR: Grupo Antiterrorista Rural

GEO: Grupo Especial de Operaciones

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

JAI: Asuntos de Justicia e Interior de la Unión Europea

KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista

LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal

MLNV: Movimiento de Liberación Nacional Vasco

MULC: Mando Único de la Lucha Antiterrorista

PNV/EAJ: Partido Nacionalista Vasco/Euzko Alderdi Jeltzalea

SCED: Servicio Central de Documentación

SITCEN: Centro Conjunto de Situaciones para el Análisis de Inteligencia

TC: Tribunal Constitucional

TOP: Tribunal de Orden Público

UCD: Unión de Centro Democrático

ZEN (Plan): Zona Especial Norte

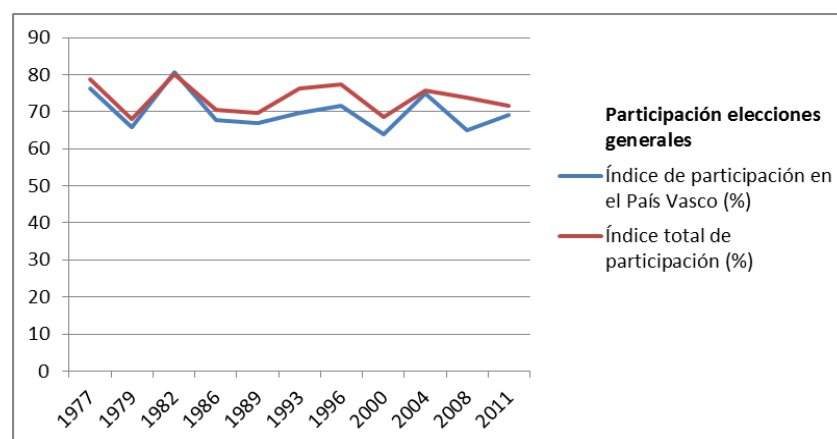
1. RESULTADOS ELECTORALES

Tabla 1. Participación en Elecciones Generales

	Índice de participación en el País Vasco (%)	Índice total de participación (%)
1977	76,4	78,8
1979	65,9	68
1982	80,6	80
1986	67,8	70,5
1989	66,9	69,7
1993	69,7	76,4
1996	71,5	77,4
2000	63,8	68,7
2004	75	75,7
2008	64,9	73,85
2011	69,2	71,69

Fuente: Ministerio del Interior

Gráfico 1. Evolución Participación Elecciones Generales (1977-2011)



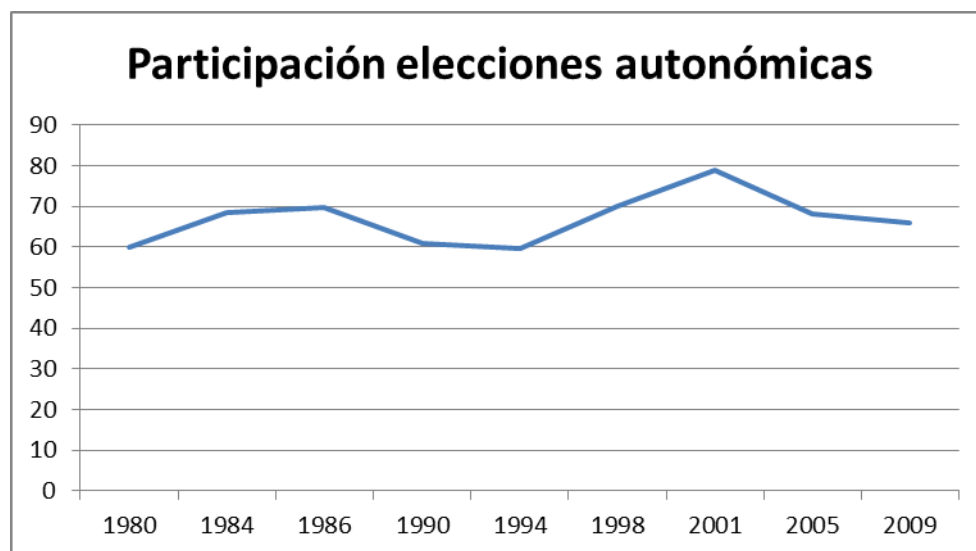
Fuente: Ministerio del Interior

Tabla 2. Participación en Elecciones Autonómicas

	Participación (%)
1980	59,8
1984	68,5
1986	69,6
1990	61
1994	59,7
1998	70
2001	79
2005	68
2009	65,9

Fuente: Ministerio del Interior

Gráfico 2. Evolución Participación Elecciones Autonómicas (1980-2009)



Fuente: Ministerio del Interior

Tabla 3. Apoyo a Partidos Políticos en Elecciones Generales

Partido	1977	1979	1982	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008
(% voto)										
PNV	28,8	26,6	32	28	22,7	24,1	25	30,4	33,7	27,1
HB	4,3	15	14,8	17,8	16,8	14,6	12,3	-	-	-
EE	6,3	8	7,7	9,1	8,8	-	-	-	-	-
EA	-	-	-	-	11,1	9,8	8,2	7,6	6,5	4,5
Aralar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
<i>Total apoyos partidos nacionalistas.</i>	39,3	50,6	54,5	54,9	59,4	48,5	46,1	38	40,2	34,3
PSE-EE	28,1	19,1	29,4	26,4	21	24,5	23,7	23,3	27,2	38,1
PP	6,4	3,4	11,7	10,5	9,3	14,7	18,3	28,3	18,9	18,5
UCD	17,3	16,9	1,9	5	3,4	0,8	-	-	-	-
PCE/IU	4,9	4,6	1,8	1,2	3	6,3	9,2	5,4	8,2	4,5
<i>Total apoyo partidos de ámbito estatal</i>	60,3	49,5	45,5	45,1	39,5	50	51,5	59	54,3	61,1
Escaños										
PNV	8	7	8	6	5	5	5	7	7	6
HB	0	3	2	4	4	2	2	-	-	-
EE	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-
EA	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-
Aralar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Total escaños partidos nacionalistas</i>	9	11	11	12	13	8	8	8	8	6
PSE-EE	7	5	8	7	6	7	5	4	7	9
PP	1	0	2	2	2	4	5	7	4	3
UCD	4	5	0	0	0	0	-	-	-	-
PCE/IU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>Total escaños partidos de ámbito estatal</i>	12	10	10	9	8	11	11	11	11	12

Fuente: Ministerio del Interior

Tabla 4. Apoyo a Partidos Políticos en Elecciones Autonómicas

Partido Político	1980	1984	1986	1990	1994	1998	2001	2005	2009
(% voto)									
PNV	38,1	42	23,6	28,5	29,3	27,5	-	-	27,1
HB/EH	16,5	14,7	17,4	18,33	16	17,7	10	12,4	
Aralar	-	-	-	-	-	-	-	2,3	6,1
EE	9,8	8	10,8	7,8	-	-	-	-	-
EA	-	-	15,8	11,4	10,1	8,6	-	-	4,5
PNV+EA	-	-	-	-	-	-	42,4	38,4	-
<i>Total apoyo partido nacionalista.</i>	65,2	65,5	67,6	66	55,5	53,8	52,4	53,1	37,7
PSE-EE	14,2	23	22	19,9	16,8	17,3	17,8	22,5	30,7
PP	4,8	9,4	4,8	8,2	14,2	19,8	22,9	17,3	14,1
UPyD	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
UCD	8,5	-	3,5	0,7	-	-	-	-	-
PCE/IU	4	1,4	1	1,4	9	5,6	5,5	5,3	3,5
<i>Total apoyo partidos de ámbito estatal</i>	34,8	34,3	32	34,8	42,8	44,6	46,8	45,1	50,4
Escaños									
PNV	25	34	17	22	22	21	-	-	30
HB/EH	11	11	13	13	11	14	7	9	-
Aralar	-	-	-	-	-	-	-	1	4
EE	6	6	9	6	-	-	-	-	
EA	-	-	13	9	8	6	-	-	1
PNV+EA	-	-	-	-	-	-	33	29	-
<i>Total escaños partidos nacionalistas</i>	42	51	52	50	41	41	40	39	35
PSE-EE	9	19	19	16	12	14	13	18	25
PP	2	7	2	6	11	16	19	15	13
UPyD	-	-	-	-	-	-	-	-	1
UCD	6	-	0	0	-	-	-	-	-
PCE/IU	1	0	0	0	6	2	3	0	1
<i>Total escaños partidos de ámbito estatal</i>	18	26	21	22	29	32	35	33	40

Fuente: Ministerio del Interior

2. LUCHA ANTITERRORISTA

Tabla 8. Lucha Antiterrorista en Francia (2000-2003)

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003
Miembros o colaboradores de ETA detenidos	24	29	63	46
Miembros o colaboradores de ETA extraditados	9	10	4	6
Miembros o colaboradores de ETA expulsados	1	1	1	4
Miembros o colaboradores de ETA entregados temporalmente	0	1	3	4
Miembros o colaboradores de ETA entregados en aplicación de la Euroorden				

Fuente: Ministerio del Interior

Tabla 9. Lucha Antiterrorista en España frente a ETA (2000-2003)

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003
Comandos liberados de ETA desarticulados	5	7	5	1
Comandos legales de ETA desarticulados	1	8	8	1
Miembros o colaboradores de ETA detenidos	75	135	123	126
Tramas civiles de ETA desmanteladas	3	2	2	4
Redes de captación e infraestructura de ETA (*1)				5
Secuestrados por ETA liberados por las FSE	0	0	-	

Fuente: Ministerio del Interior

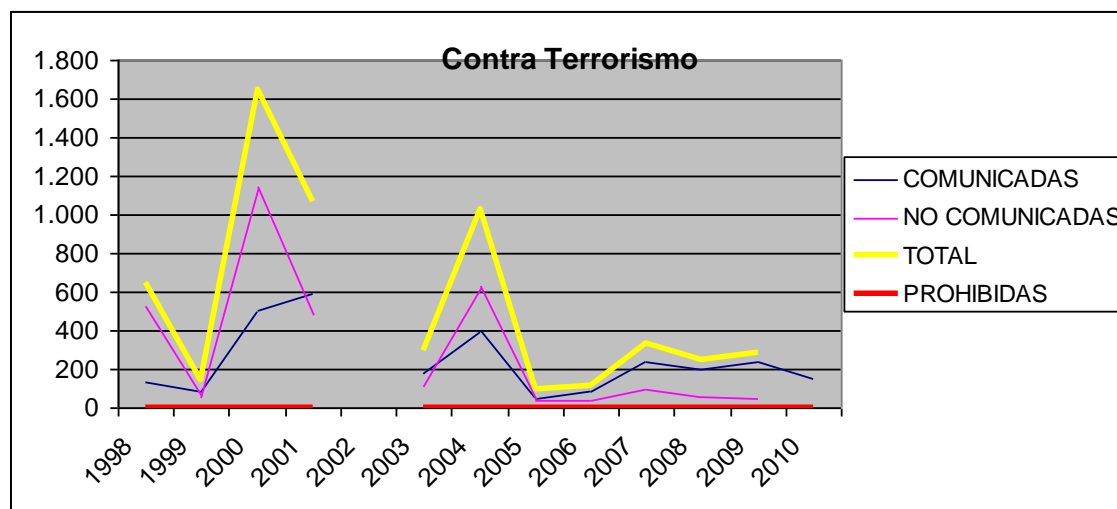
Tabla 10. Lucha Antiterrorista contra ETA (Presuntos miembros de ETA detenidos).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
FRANCIA	63	32	26	30	33	31	22	29
OTROS PAÍSES	4	1	-	6	1	3	9	3
ESPAÑA	79	55	17	79	52	90	82	20
ETA	146	88	43	125	86	124	113	52
VIOLENCIA CALLEJERA	19	27	14	76	21	124	113	46

Fuente: Ministerio del Interior

3. MOVILIZACIÓN EN TORNO AL TERRORISMO

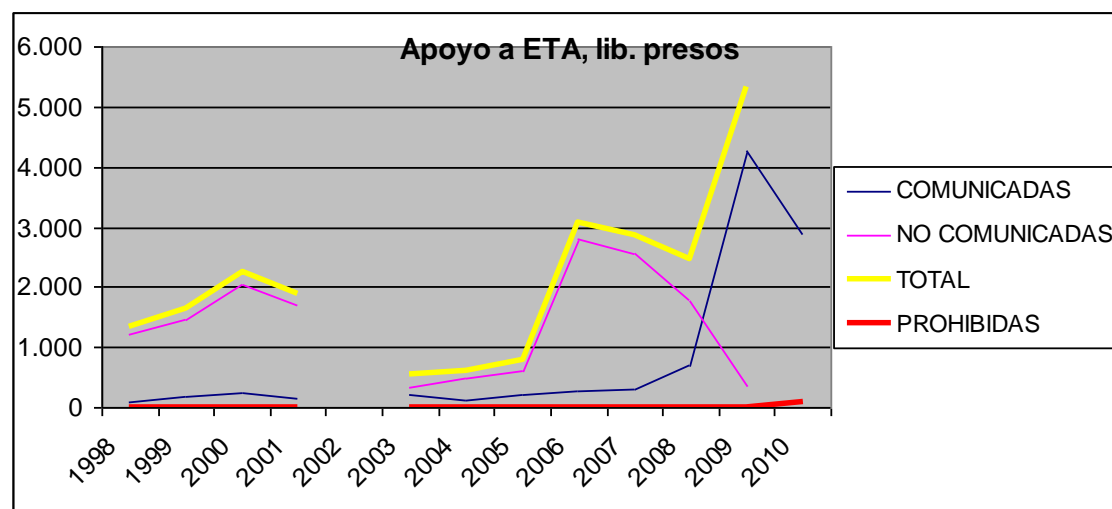
Gráfico 3. Manifestaciones contra el terrorismo 1998-2010



Elaboración propia a partir de datos de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior.

<http://www.mir.es/>

Gráfico 4. Manifestaciones de apoyo a presos de ETA

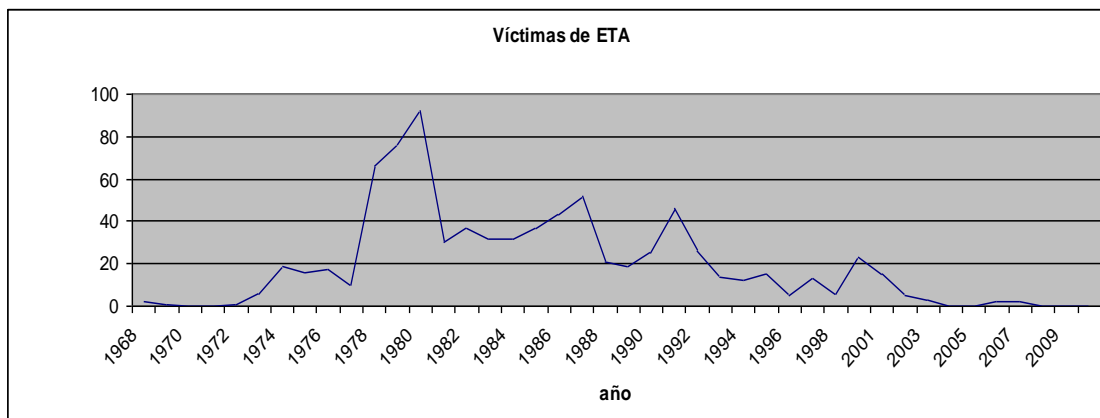


Elaboración propia a partir de datos de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior.

<http://www.mir.es/>

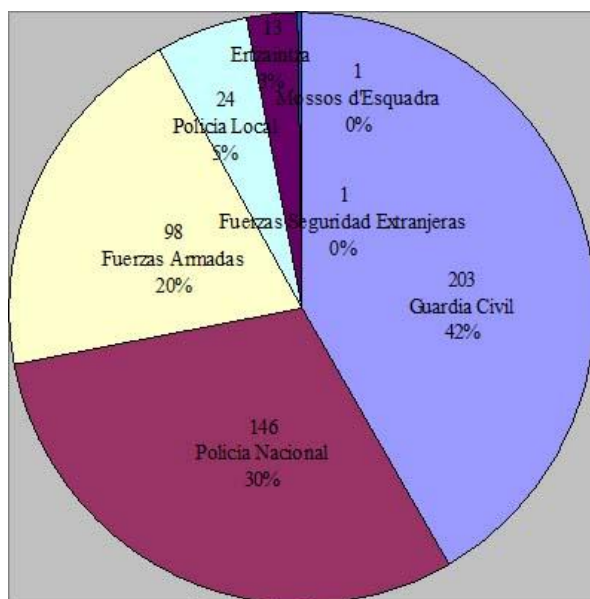
4. VIOLENCIA Y VÍCTIMAS DE ETA

Víctimas ETA: 1969- 2009:



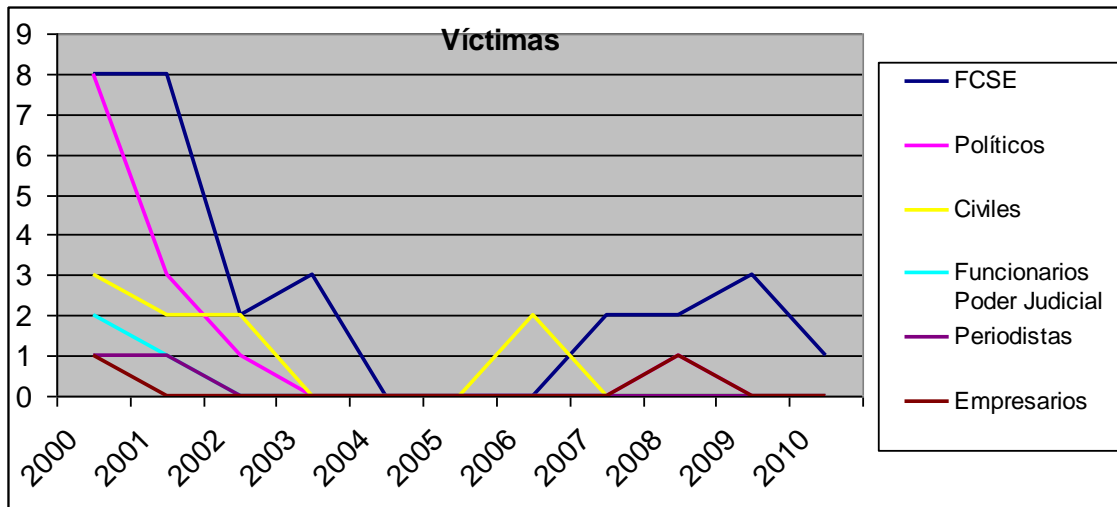
Fuente: elaboración propia. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior

Víctimas ETA Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:



Fuente: elaboración propia. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (2010)

Total víctimas ETA 2000-2010:



Fuente: elaboración propia. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior

Tabla 7. Violencia Otras Organizaciones

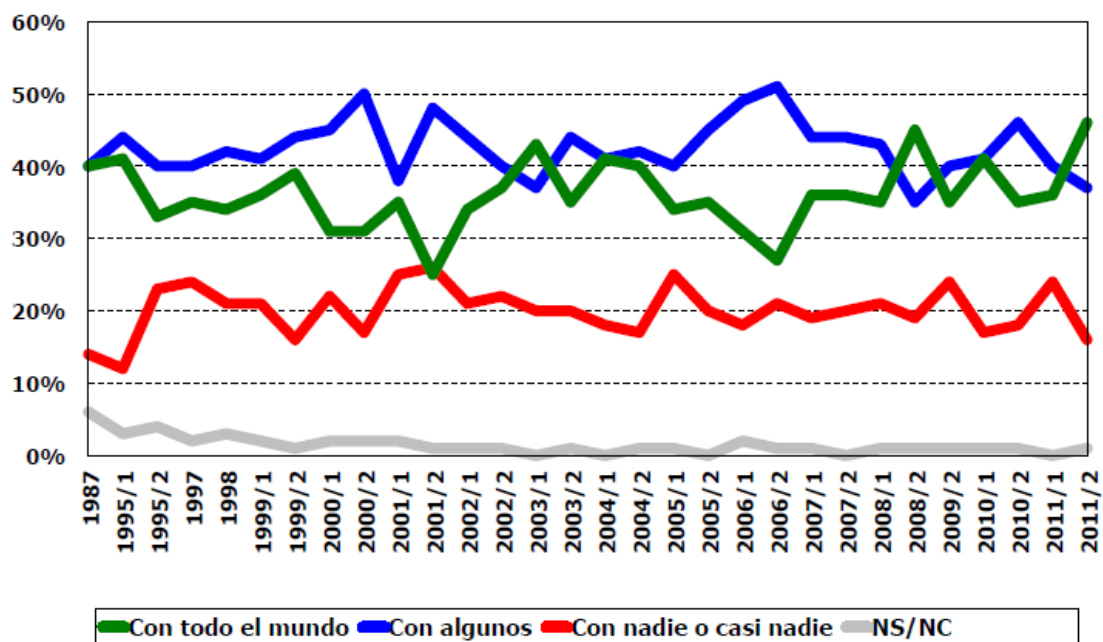
Año	Total de víctimas	Organización Responsable
1975	1	Batallón Vasco Español (BVE) / Triple A / Extrema Derecha
1976	2	
1977	1	
1978	3	
1979	8	BVE
1980	19	
1981	1	
1983	4	GAL
1984	9	
1985	11	
1986	2	
1987	1	
1989	1	
Total	58	

Fuente: COVITE

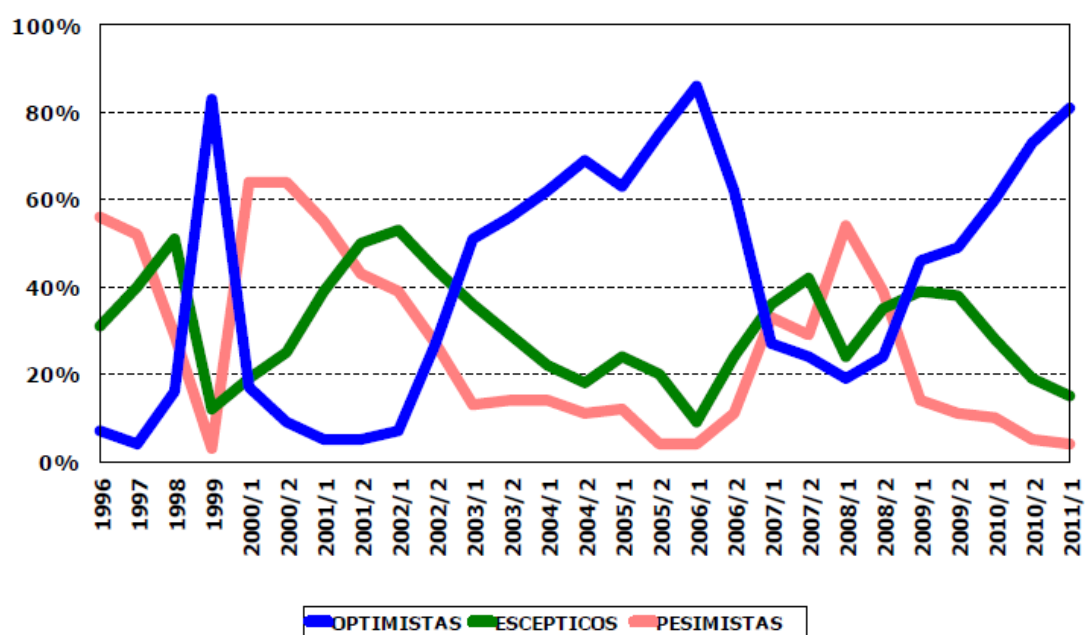
http://www.covite.org/covite_balancedolor.php?idAno=12&ano_actual=1979&idTitulo=2

5. Datos de opinión en relación a la violencia en el ámbito vasco (SERIES HISTÓRICAS DEL EUSKOBAROMETRO)

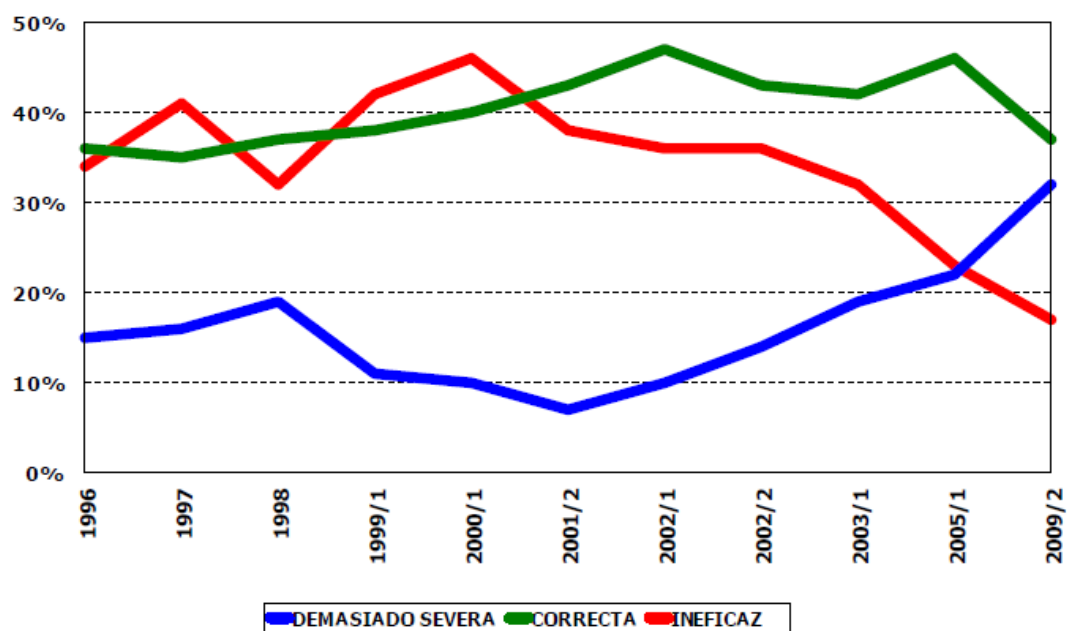
15.- EVOLUCIÓN DEL SENTIMIENTO DE LIBERTAD DE LOS VASCOS PARA HABLAR DE POLÍTICA, 1987-2011



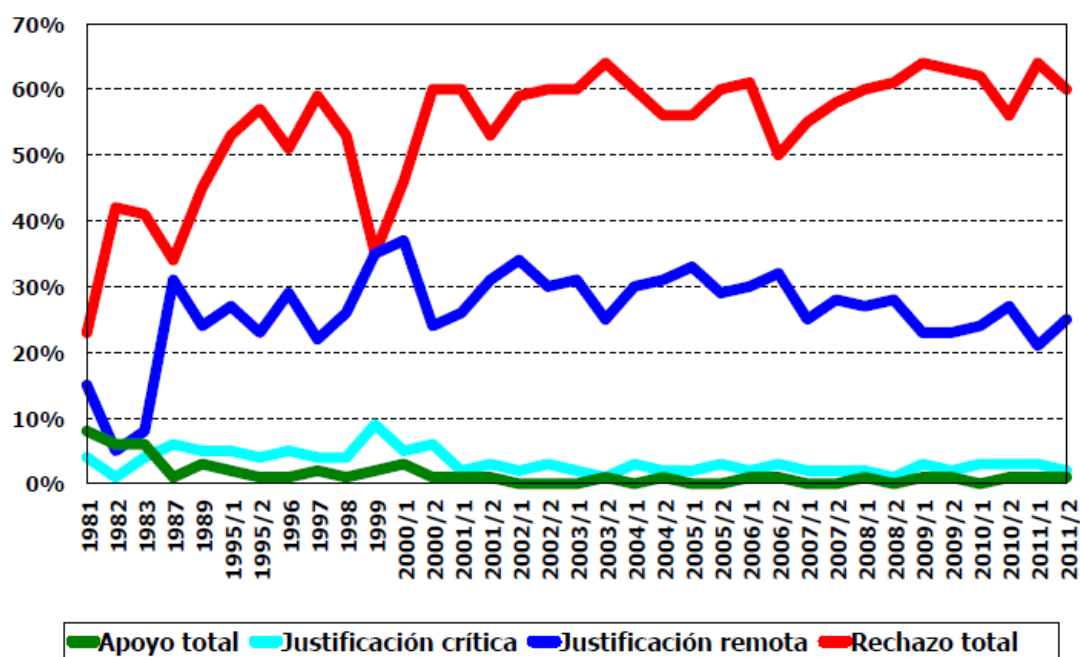
17.- EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN EUSKADI, 1996-2011



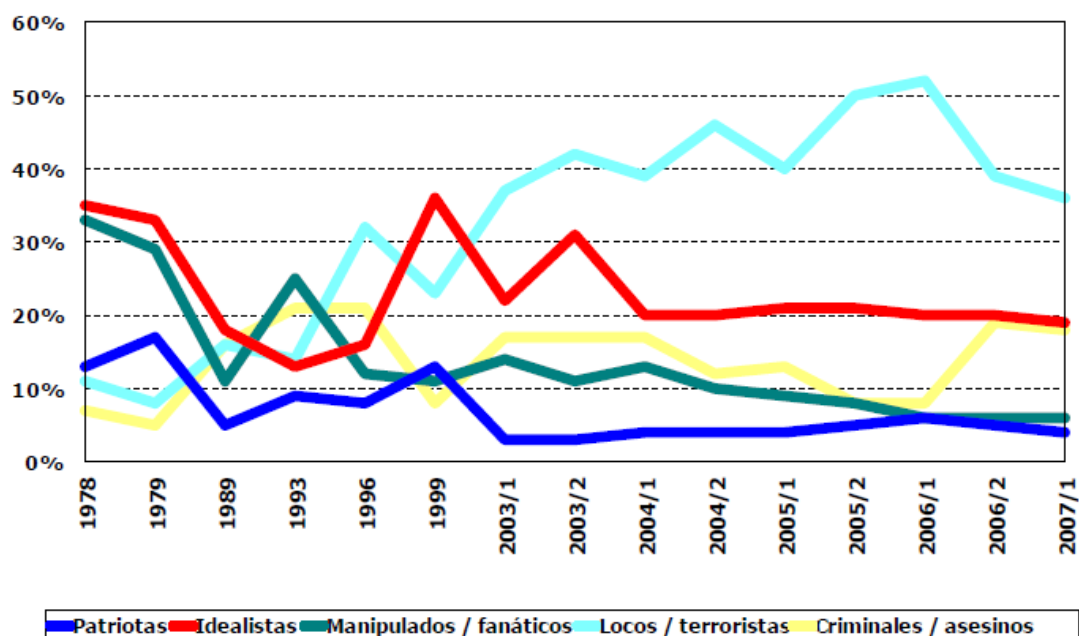
19.- EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS VASCOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA ERTZANTZA ANTE LA VIOLENCIA CALLEJERA, 1996-2009



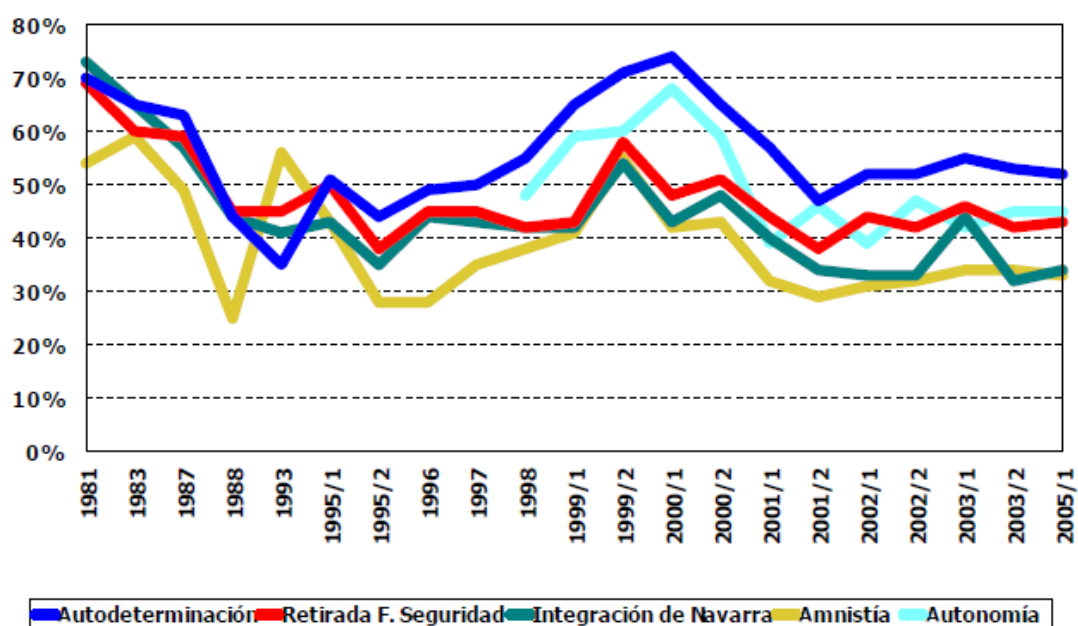
20.- EVOLUCIÓN DE LA ACTITUD ANTE ETA EN EL PAIS VASCO, 1981-2011



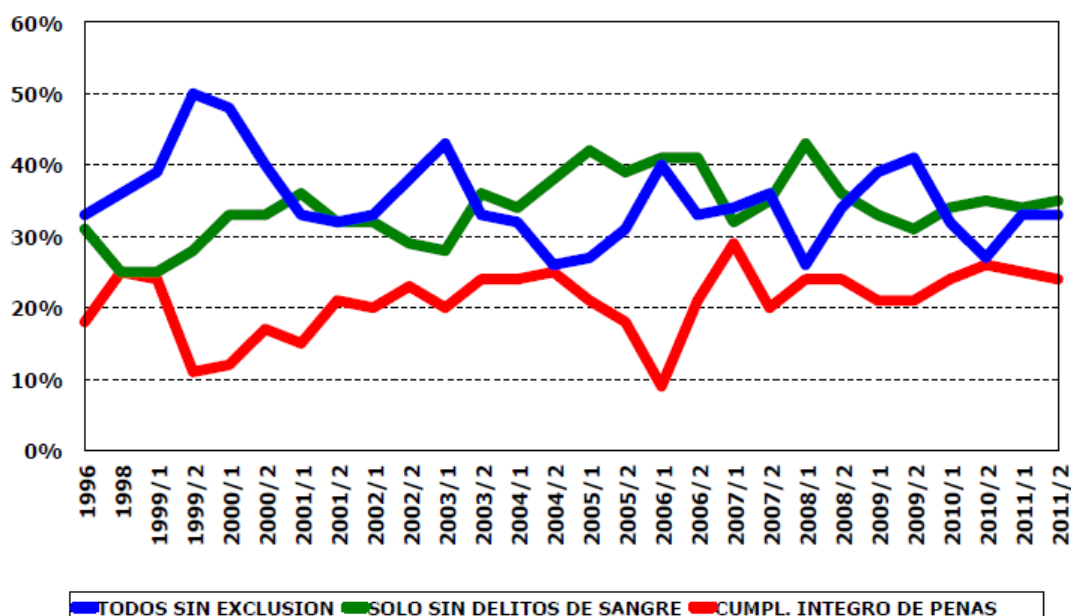
21.- EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ACTIVISTAS DE ETA EN EUSKADI, 1978-2007



22.- EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA VASCA SOBRE ALGUNAS SOLUCIONES NEGOCIADAS AL FINAL DE LA VIOLENCIA, 1981-2005



23.- EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES SOBRE LA REINSECCIÓN DE LOS PRESOS VASCOS POR DELITOS DE TERRORISMO SI ETA DEJA LAS ARMAS, 1996-2011



ANEXO II (TRABAJO DE CAMPO)

1. Archivo de entrevistas realizadas en la segunda fase de trabajo de campo (Enero –Julio de 2010: Madrid- País Vasco)

	TIPO DE ACTOR	ESPECTRO POLÍTICO DEL POSICIÓN RESPECTO AL “CONFLICTO”	ORGANIZACIÓN	LUGAR
1	SOC CIVIL	ORG CONSTITUCIONALISTA	FORO ERMUA	MAD
2	SOC CIVIL	ORG VÍCTIMAS DE ETA	AVT	MAD
3	SOC CIVIL	SOCIALISTA/SINDICAL	UGT EUSKADI	BIL
		NO NACIONALISTA		
4	SOC CIVIL	ORG. EMPRESARIAL	CÁMARA COMERCIO DE GUIPÚZCOA	SS
5	SOC CIVIL	ORG NACIONALISTA	EUROBASK MOVIENTO VASCO EUROPEO	SS
6	SOC CIVIL	PACIFISTA NACIONALISTA	GESTO POR LA PAZ	BIL
7	SOC CIVIL	PACIFISTA NACIONALISTA	LOCARRI	BIL
8	SOC CIVIL	ORGANIZACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS	FUND. JOXEMI ZUMALABE	
9	PARTIDO	CONSTITUCIONALISTA	PP	MAD
10	PARTIDO	SOCIALISTA	PSOE	MAD
11	PARTIDO	SOCIALISTA VASCO	PSE	SS
12	PARTIDO	NACIONALISTA	PNV	BIL
13	PARTIDO	NACIONALISTA	PNV	SS
14	COALICIÓN	NACIONALISTA INDEPENDENTISTA	NA BAI (PNV, EA, ARALAR, BATZARRE)	MAD
15	PARTIDO	NACIONALISTA INDEPENDENTISTA	ARALAR	VIT
16	PARTIDO	NACIONALISTA INDEPENDENTISTA	ARALAR	VIT
17	PARTIDO ILEGAL	IZQUIERDA ABERTZALE	HB/BATASUNA	BIL
18	PARTIDO ILEGAL	IZQUIERDA ABERTZALE	HB/BATASUNA	SS
19	ACADÉMICO	SIMPATIZANTE DE IZQUIERDA ABERTZALE		BIL
20	PERIODISTA	SIMPATIZANTE DE IZQUIERDA ABERTZALE		SS

2. Entrevistas a expertos que no han sido analizadas para el capítulo sexto dedicado a recoger las percepciones de los actores.

	PERFIL	ÁMBITO	LUGAR
21	EXPERTO	PROF SOCIOLOGÍA	MAD
22	EXPERTO	PROF HISTORIA	MAD
23	EXPERTO	PROF. HISTORIA	MAD
24	EXPERTO	PROF SOCIOLOGÍA	MAD

3. Entrevistas secundarias analizadas: Compiladas en publicación de B. Garzón. 2006.

	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	LUGAR
1	FISCAL GENERAL	Mad
2	FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL	Mad
3	EX MINISTRO INTERIOR PP	Mad
4	EX MINISTRO DE JUSTICIA PP	Mad
5	JEFE DE LA OPOSICIÓN PP	Mad
6	UPYD	Mad
7	PRESIDENTE DEL GOBIERNO PSOE	Mad
8	COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN	Mad

